Los señores de la tierra media y sus representaciones

Jefes políticos en Jalisco durante el siglo XIX

SERGIO VALERIO ULLOA



Universidad de Guadalajara

Los señores de la tierra media y sus representaciones

Jefes políticos en Jalisco durante el siglo XIX

Esta publicación fue dictaminada favorablemente mediante el método doble ciego por pares académicos.

972.35081
VAL
Valerio Ulloa, Sergio.
Los señores de la tierra media y sus representaciones. Jefes políticos en Jalisco durante el siglo xix / Sergio Valerio Ulloa.

Primera edición, 2025.

Zapopan, Jalisco: Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad de Apoyo Editorial.

ISBN 978-607-581-551-0

1. Jalisco (México: Estado) – Política y gobierno – Siglo xix.
2. Jalisco (México: Estado) – Historia – Siglo xix.
3. Jalisco (México: Estado) – Historia Porfiriato, 1876-911.
4. Municipios – Jalisco.
5. Políticos – Jalisco – Historia.
6. Gobierno municipal – Administración – Jalisco.
7. Poder (Ciencias sociales) – Jalisco (Estado) – Historia – Siglo xix.
8. México – Política y Gobierno –Siglo xix.
9. Corrupción política – Historia – México.

I.- Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad de Apoyo Editorial.

Imagen de portada: José Guadalupe Posada. "La casa de enganches. Contratas voluntarias". (Grabado, 1885-1910).

Primera edición, 2025
D.R. © 2025, Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad de Apoyo Editorial
José Parres Arias 150
San José del Bajío
45132, Zapopan, Jalisco, México
Consulte nuestro catálogo en: www.cucsh.udg.mx

ISBN: 978-607-581-551-0

Editado y hecho en México
Edited and made in Mexico

Los señores de la tierra media y sus representaciones

Jefes políticos en Jalisco durante el siglo XIX

SERGIO VALERIO ULLOA

Universidad de Guadalajara
2025

Los Hobbits denominaron a estas tierras la Comarca, región bajo la autoridad del Tahin [jefe propio] y distritos bien organizados; y allí, en ese placentero rincón del mundo, llevaron una vida bien ordenada y dieron cada vez menos importancia al mundo exterior, donde se movían unas cosas oscuras, hasta llegar a pensar que la paz y la abundancia eran la norma en la Tierra Media, y el derecho de todo pueblo sensato.[1]

[1] J.R.R. Tolkien. *El Señor de los anillos.* (1991). Barcelona: Ediciones Minotauro, vol. I, p. 15.

Índice

Introducción 15

CAPÍTULO I.
El jefe político y sus representaciones conceptuales e históricas 25
Trazos conceptuales 25
Las metáforas del Estado y los jefes políticos 28
El prefecto, sus antecedentes conceptuales y funciones administrativas 38
Jefe político o jefe de policía, de la *polis* a la civitas 41
La policía en la ciudad de México 44
Guadalajara y su policía 48
Cuerpos de policía en el campo mexicano 51

CAPÍTULO II.
La casa de los espejos, representaciones literarias e historiográficas de los jefes políticos 61
Representaciones del prefecto en tres novelas del siglo XIX 62
La representación historiadora. Los jefes políticos a través de la historiografía 76
Los "verdaderos" jefes políticos 87
Jefes políticos en los planes revolucionarios y la Constitución de 1917 89

Nuevas representaciones historiográficas de los jefes políticos 92
El revisionismo de la revolución mexicana 96
Los jefes políticos desde la historia regional 102
Prefectos y jefes políticos en el estado de México 102
Jefes políticos en Coahuila 107
Jefes políticos en Veracruz 111
Jefaturas políticas en Aguascalientes 112
Jefes políticos en Chihuahua 114
La dictadura enana 116
La leva como un sistema forzoso de reclutamiento 120
Jefes políticos en Sinaloa 121

CAPÍTULO III.
Los jefes políticos en México y el mundo iberoamericano durante el siglo XIX 123
El régimen centralista francés como antecedente y modelo a imitar 124
La adopción del modelo francés en España 126
El jefe político en la Constitución de Cádiz 129
Del regreso del absolutismo al periodo liberal 131
Los subdelegados de fomento 132
Los jefes políticos en México 134
La Constitución de Cádiz y el establecimiento de provincias en la Nueva España 135
Entre el federalismo y el centralismo 138
Los jefes políticos en la segunda mitad del siglo XIX 144
Las prefecturas en Argentina 149
Los prefectos en el Perú durante el siglo XIX 153
Los jefes políticos en Venezuela 158
Los jefes políticos en Colombia 161
El jefe político en Centroamérica durante el siglo XIX 162
Algunas conclusiones sobre este capítulo 167

CAPÍTULO IV.
Los jefes políticos en Jalisco en las constituciones y reglamentos 169
Jalisco su población y sus cantones 169
Jefes políticos en las constituciones y reglamentos de policía en Jalisco, siglo XIX 179
Reglamento para la organización de la fuerza de policía y rural de Jalisco, 1856 198
Algunas conclusiones sobre estas leyes y reglamentos 207

CAPÍTULO V.
Autoridades políticas y gobernabilidad en las memorias de los gobernadores de Jalisco durante el siglo XIX 211
Informes y memorias de gobierno 211
Inseguridad y bandolerismo en Jalisco durante la primera mitad del siglo XIX 212
Las autoridades políticas frente al bandolerismo en las memorias e informes de sus gobernadores durante la primera mitad del siglo XIX 217
La Gendarmería del estado de Jalisco 234
Jefes políticos durante el porfiriato 237
Conclusiones breves de este apartado 246

CAPÍTULO VI.
Bajo la mirada de la opinión pública.
Autoridades políticas en la prensa jalisciense 249
Prensa y opinión pública 249
El honor en boca de la opinión pública 253
Notas periodísticas relativas a los jefes políticos en Jalisco 1850-1912 256
Los jefes políticos en teoría según la prensa jalisciense 260
Discusión sobre libertades municipales y la relación con los jefes políticos 263

Jefes políticos del primer cantón de Jalisco en boca de la prensa 265
Pleito entre periódicos 269
Consideraciones finales del capítulo 327

CAPÍTULO VII.
Los jefes políticos en su laberinto, acciones y prácticas administrativas y de gobierno 329
Seguridad pública y policía 333
Pueblos indios, reparto de tierras y rebeliones indígenas 354
Elecciones 371
Beneficencia e instrucción pública 374
Seguridad social, festividades cívicas, conmemoraciones y diversiones 377
Conflictos entre las autoridades políticas y los ministros de culto religioso 378
Movilidad de extranjeros, pasaportes y salvo conductos 381
Hospitales, salud pública y epidemias 383
Algunas conclusiones sobre este capítulo 391

CAPÍTULO VIII.
Voces y susurros. Quejas de ciudadanos contra las autoridades políticas 393
Palabras, lamentos y rencores que se llevó el tiempo 393
1° Cantón, Guadalajara 398
2° Cantón Lagos 413
3° Cantón, La Barca 416
4° Cantón de Sayula 419
6° Cantón, Autlán 420
8° Cantón, Colotlán 423
9° Cantón de Ciudad Guzmán 442
10° Cantón, Mascota 446
Conclusiones 449

CAPÍTULO IX.
El león no es como lo pintan: biografías, imágenes y estadísticas 451
Imágenes de una galería recuperada 451
Historias fragmentadas, breves biografías de jefes políticos 453
Una estadística grupal de los jefes políticos jaliscienses 481
Galería recuperada de jefes políticos de Jalisco 485

Conclusiones generales 503

Bibliografía 511
Archivos y Páginas Electrónicas 528
Periódicos consultados en la HNDM 528

Introducción

Este libro hubiera salido a la luz hace treinta años, pero fuertes vientos desviaron mi atención para llevarme a otras playas e islas temáticas, las cuales me atraparon por muchos años como si fueran hechizos enviados por la bruja Circe. El tema de los jefes políticos en Jalisco lo traté por primera vez en un ensayo que realicé para aprobar un curso que impartió la doctora Romana Falcón entre 1994 y 1995 en el doctorado en Historia de El Colegio de México, los comentarios de la doctora Falcón sobre mi ensayo fueron muy favorables en ese entonces, los que me motivaron a continuar con el tema posteriormente. El ensayo partía de un análisis de la legislación y de las quejas que los ciudadanos habían presentado en contra de los jefes políticos en Jalisco durante el porfiriato, las conclusiones a las que llegué en ese momento fueron que dichas autoridades estaban sujetas a un marco legal, que los ciudadanos no eran sujetos pasivos, y que su resistencia e inconformidad encontraba medios legales para ser escuchados y atendidos por el gobernador del estado. Dicho ensayo formó parte de la tesis de doctorado[1] y después se publicó como artículo.[2]

[1] Sergio Valerio Ulloa. (1999). *Capitalismo y oligarquía en Jalisco, 1876-1910*. México: El Colegio de México, t. II, pp. 707-758.

[2] Sergio Valerio Ulloa. (2000). Jefes y directores políticos en Jalisco durante el porfiriato. *Estudios Sociales. Revista del Departamento de Estudios de la Cultura Regional*, núm. 20, pp. 124-146.

Esto fue posteriormente sostenido por varios autores que publicaron ensayos y libros sobre el tema criticando o corroborando la "leyenda negra" que se había creado en torno a dichas autoridades, pero investigando en archivos locales, estatales o nacionales, lo cual vino a enriquecer la visión que se tenía de estas autoridades intermedias.

Los jefes políticos y sus subordinados fueron los personajes principales de una "leyenda negra" en la historiografía política mexicana a lo largo de los siglos XIX y XX, en ellos recayeron las peores acusaciones: fueron violadores, corruptos, crueles asesinos, estafadores, ladrones, borrachos, represores despiadados y usurpadores de terrenos de pueblos y comunidades. Los jefes políticos, en esta versión, eran los encargados de falsear las elecciones, también los acusaron de utilizar su puesto para enriquecerse personalmente y de enviar a los habitantes de los pueblos al ejército mediante la leva forzosa, o a trabajar en las plantaciones del sur del país a través del enganche, por lo que recibían una cantidad de dinero como pago. Para muchos autores, los jefes políticos eran la base de los gobiernos tiránicos y de las peores dictaduras que habían aparecido en la historia del México decimonónico, particularmente durante el porfiriano, además de ser el instrumento del centralismo para controlar a los pueblos, municipios, distritos y departamentos del interior del país. Quienes proporcionaron esta imagen de los jefes políticos fueron principalmente los detractores y opositores al régimen de Díaz, imagen que recogieron posteriormente los revolucionarios y que plasmaron en sus panfletos, discursos, planes políticos y en su legislación.

Es interesante cómo esa leyenda negra sobre los jefes políticos fue manejada por los revolucionarios en el gobierno. En el decreto que suprimió las jefaturas políticas el 2 de julio de 1914 en Jalisco se consideraba que los jefes políticos habían sido la encarnación del cacique y el sostén de los gobiernos dictatoriales, quienes amparados en la impunidad se enriquecieron a costa del pueblo cometiendo toda clase de usurpaciones y amenazas para adquirir los bienes ajenos. Los acusaban de ser los detractores del individuo, ladrones de honras y violadores de la libertad. Consideraban las autoridades constitucionalistas que, debido ello, las instituciones

de las jefaturas y directorías políticas se habían vuelto odiosas y repulsivas, y se habían convertido en fuente de inagotables violaciones y la causa perenne de la intranquilidad de las personas.[3] John Kenneth Turner, un escritor socialista norteamericano que visitó México a finales del porfiriato describió al jefe político como un funcionario público que regía un distrito político, era designado por el presidente o por el gobernador y también fungía como presidente municipal de la ciudad principal de su distrito, quien no tenía a quien rendir cuentas, excepto su gobernador, y lo consideraba "un pequeño zar de sus dominios".[4]

La imagen es la misma y aparece en las crónicas de la época, y sobre todo en las revolucionarias, como el elemento más represivo del régimen. Para François-Xavier Guerra el jefe político era un tirano local, al servicio del gobierno, quien estaba colocado en la base del sistema político y era el instrumento directo del control que Díaz ejercía sobre todos los pueblos, municipios y pequeñas comunidades del país.[5] Sin embargo, según Mario Ramírez Rancaño, esta "leyenda negra" no fue del todo cierta, entre 1872 y 1898 casi no hubo quejas contra los jefes políticos por enrolamiento forzoso. Dicha leyenda cobró fuerza a partir de la primera década del siglo xx, cuando los jefes políticos fueron señalados como los principales reclutadores de personas para el ejército mediante la leva forzosa.[6]

Aunque a los jefes y directores políticos se les relacionaba íntimamente con el régimen de Díaz, éstos no fueron una invención del porfiriato. Dichos funcionarios con toda su autoridad y sus atribuciones fueron herederos de los delegados y subdelegados puestos a fines del siglo xviii a

[3] Archivo Histórico de Jalisco. (AHJ). Ramo Gobernación. Diéguez, Manuel M. Decreto Núm. 3. emitido el 2 de julio de 1914.

[4] John Kennet Turner. (1978). *México bárbaro*. México: Editorial Época, p. 63.

[5] François-Xavier Guerra. (1988). *México: del antiguo régimen a la revolución*. México: Fondo de Cultura Económica, t. I, p. 123.

[6] Mario Ramírez Rancaño. (2014). Ejército federal, jefes políticos, amparos, deserciones: 1872-1914. *Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México*, núm. 47, pp. 41-78.

la cabeza de las intendencias y subdivisiones administrativas del período colonial.[7] Posteriormente en la Constitución de Cádiz de 1812, los jefes políticos adquirieron nueva importancia, dentro de un marco jurídico y político liberal, cuya base fue la división de poderes, los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y un sistema democrático y representativo.[8] En esta Constitución el gobierno político de las provincias recaía en un jefe superior, también conocido como jefe político, nombrado directamente por el rey. Este jefe superior era el presidente de la Diputación Provincial, además presidía los consejos municipales y las comisiones electorales. Hay que mencionar que este jefe superior se parecía al antiguo intendente y al posterior gobernador de los estados del México independiente, no era propiamente el jefe político del siglo XIX. La Constitución de Cádiz no menciona este nivel intermedio de gobierno sino sólo al gobierno provincial y al gobierno municipal. No fue sino hasta el imperio de Iturbide que apareció el jefe político subalterno o el jefe político de partido como nivel intermedio de gobierno en las provincias. El Reglamento Provisional Político del Imperio del 18 de diciembre de 1822, en su artículo 54 establecía que: "En los puertos de mar que no sean capitales de provincia, o en las cabeceras de partidos muy dilatados o poblados, podrá haber un jefe político subalterno al de la provincia. En las demás cabeceras o pueblos subalternos, el alcalde primer nombrado será el jefe político".[9]

Posteriormente, con el establecimiento de la primera república federal de 1824, cada estado se subdividió para su gobierno interior en partidos y departamentos, y aparecieron con ellos las autoridades políticas intermedias respectivas subordinadas al gobernador de cada estado, a quienes

[7] *Real ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de ejército y provincia en el reino de la Nueva España,* 1786. Artículo 12. (1984). México: Universidad Nacional Autónoma de México.

[8] Felipe Tena Ramírez. (1999). *Leyes fundamentales de México, 1808-1999*. México: Editorial Porrúa, pp. 97-99.

[9] Tena. (1999), pp. 136-137.

también se les llamó jefes o directores políticos, prefectos y subprefectos, puestos que correspondían al gobierno de distintas divisiones político-administrativas dentro de un orden jerárquico muy bien definido y establecido. Estas autoridades intermedias no desparecieron ni con la república centralista ni con el Segundo Imperio, pues el territorio de la nación mexicana se dividió, en el caso de la república centralista, en departamentos, divididos a su vez en distritos, y éstos en partidos, en donde el gobierno de los departamentos estaría a cargo de un gobernador, el de los distritos por un prefecto, y el de los partidos por un subprefecto.[10] En el caso del Segundo Imperio, los departamentos serían gobernados por prefectos, y las otras subdivisiones administrativas por subdelegados o subprefectos.[11] Con la Constitución federal de 1857 y su restauración en 1867, se restablecieron los estados con sus propios gobernadores y sus autoridades intermedias para sus departamentos, cantones, distritos o partidos, con el nombre de jefes políticos, prefectos, subprefectos o directores políticos, según el caso particular de cada estado de la república.

Ampliando la escala a nivel iberoamericano y comparando el caso mexicano con el del resto de los países que formaron parte de la monarquía española antes de 1810, se observa que los procesos de desarticulación y crisis del imperio llevó a los distintos pueblos a reorganizar sus territorios y sus gobiernos en la búsqueda de la integración y la conformación de los nuevos estados nacionales, procesos que fueron muy complejos y en donde las autoridades intermedias como jefes políticos o prefectos jugaron una papel muy importante en la organización y configuración de los nuevos estados durante el siglo XIX.

Para el desarrollo del tema de los jefes políticos se parte en primer lugar con la explicación de los conceptos fundamentales, luego con un capítulo sobre los jefes políticos en el mundo iberoamericano, con el fin de comparar el caso mexicano con el de otros países que formaron parte de la monarquía española antes de sus independencias. Luego un capí-

[10] Tena. (1999), pp. 239-244.

[11] Tena. (1999), pp. 674-675.

tulo está dedicado al estudio de la legislación nacional y estatal sobre los jefes políticos, para pasar posteriormente a analizar el caso particular del estado de Jalisco durante el siglo XIX.

Otro capítulo está dedicado al estado del arte o a la historiografía que precede este estudio, siempre teniendo presente que la historiografía no es en esencia tal cual la realidad del pasado histórico, sino un conjunto de representaciones de esa realidad que hacen los historiadores. Las fuentes consultadas son documentos de archivos históricos y notas hemerográficas principalmente, las cuales tampoco son la realidad tal cual, sino el punto de vista o la opinión de quien produjo o escribió el documento o la nota periodística, de aquí que tengamos varias opiniones de los jefes políticos según el autor o la fuente consultada. Cabe aclarar que lo que se está analizando son representaciones producidas por alguien que tiene un punto de vista muy subjetivo y que en todo momento tiene connotaciones ideológicas, políticas, morales, religiosas e intereses personales, por lo que ninguna opinión o información es totalmente objetiva o neutral, incluido el mismo autor de esta obra, todas son representaciones que tienen sesgos, puntos de vista y percepciones subjetivas. Pero, el fin de este trabajo o su pretensión es dar cuenta de los jefes políticos lo más cercanamente posible a cómo fueron y cómo se desempeñaron partiendo de un conjunto de fuentes documentales sin negar su posición política e ideológica en el contexto de su época. Finalmente se ofrece una estadística mínima y biografías de un grupo de jefes políticos para mostrar información personal de cada uno de ellos.

En el México independiente del siglo XIX este personaje estaba muy bien delimitado en sus funciones y atribuciones por las constituciones de cada uno de los estados que conformaban la república, debido principalmente a que se encontraba dentro del ámbito del gobierno interno de los estados, nivel en el cual éstos ejercían su soberanía e independencia frente al gobierno federal y frente a otros estados. Aunque cada estado de la federación tenía una legislación particular, en el caso de las jefaturas o prefecturas políticas se parecían en gran medida las leyes que hacían referencia a ellos en las distintas constituciones estatales. Los jefes polí-

ticos eran los intermediarios entre el gobernador y los municipios, tenían como atribuciones legales el gobierno de sus departamentos, partidos o cantones. En algunos estados el jefe político era nombrado directamente por el gobernador, en otros era electo por el gobernador del estado con base a una terna que le presentaba el consejo o la junta de gobierno, pero en otros era electo por la ciudadanía de su distrito o demarcación.

La importancia de estas autoridades para el gobierno a nivel local y regional era tal, que hasta las mismas constituciones centralistas y monárquicas les daban un papel preponderante entre los niveles de gobierno, dejando casi intacta su estructura y sus atribuciones. De tal manera que, liberales y conservadores, federalistas o centralistas, incluso monarquistas, podrían haberse estado peleando por cuestiones de la ciudadanía, la libertad política y religiosa, la forma de las elecciones y representación política, sobre el estatuto federal o centralista de la república, pero todas coincidían en que la gobernabilidad del territorio mexicano comenzaba por los gobiernos locales y regionales, por lo que los diversos bandos estuvieron de acuerdo en el establecimiento de los gobiernos municipales y las jefaturas o prefecturas políticas, las cuales permanecieron casi intactas a lo largo del siglo XIX.

A través de los jefes políticos comenzaron a operar las fuerzas centralizadoras de los gobiernos nacionales quienes establecían relaciones con los grupos de poder local para controlar a los estados, regiones y municipios. Pero esto no fue una constante, por otro lado, operaban fuerzas descentralizadoras, autonomistas y federalistas que resistían a los impulsos centralizadores de los gobiernos nacionales, y había casos en los que el jefe político tomaba el bando de los intereses locales, ya que de ello dependía su puesto, cuando el gobierno central era débil. Los jefes políticos construían redes muy densas y amplias social y políticamente en sus regiones y localidades a partir de vínculos clientelistas, familiares y de compadrazgo, lo que les permitía ejercer el poder, aplicar las leyes y los castigos de forma rigurosa y con un gran margen de maniobra y aceptación, pues lejos de imponerse por la fuerza, el jefe político negociaba su cumplimiento según las circunstancias del caso, sumado a las grandes y variadas prerrogativas

legales de que gozaba, el jefe político gobernaba su región o demarcación con cierta discrecionalidad, esto lo convertía al mismo tiempo en un blanco de la oposición y del descontento.

Los jefes políticos contribuyeron durante todo el siglo XIX a la modernización y construcción del Estado nacional, con el objetivo de crear un Estado centralizado, y al mismo tiempo ayudaron a socavar la resistencia y autonomía de los poderes locales y regionales. Por ello tuvieron gran influencia e importancia durante el porfiriato, periodo en que se logró en mayor medida la centralización del poder político en México. Sin embargo, el papel y la actuación de los jefes políticos no fue igual en todo el país, en la mayoría de los estados el control y dominio de los gobiernos locales y regionales se dio a partir de la república restaurada, cuando los diferentes gobiernos adoptaron varias leyes en las que limitaban la autonomía de los ayuntamientos, dándoles a los jefes políticos un mayor control sobre las actividades de los cabildos y facultades a los gobernadores para nombrar directamente a las autoridades políticas de sus respectivos estados. Pero no fue sino hasta las décadas de 1880 y 1890 que estas leyes se hicieron efectivas, lo cual llevó al control de los jefes políticos sobre los ayuntamientos. El presidente Porfirio Díaz designaba a los gobernadores y éstos a los jefes y directores políticos, quienes se encargaban de las elecciones locales y federales e influían en el nombramiento de alcaldes y regidores. Conforme se consolidaba el régimen porfirista, los ayuntamientos fueron perdiendo su beligerancia y resistencia autonomista, mostrando una preocupante ineficacia administrativa que se combinaba con la falta de dinero en las arcas municipales.

Los jefes políticos estuvieron sujetos a la voluntad del gobernador de su estado, convirtiéndose en un engrane más del mecanismo centralizador porfirista, de esta manera el jefe político dejó de defender los intereses de grupos locales para convertirse en un simple funcionario del poder ejecutivo. Las leyes de varios estados de la república ampliaron las facultades de los jefes políticos para controlar e intervenir en los asuntos internos de los ayuntamientos. En los estados que elegían a los jefes políticos mediante ternas propuestas al gobernador, se reformó la ley para

permitir que el gobernador del estado nombrara libremente a los jefes políticos y los cambiara cuando el gobernador creyera conveniente. Esto facilitó el proceso de centralización política a nivel nacional fortaleciendo al jefe político en detrimento de las autonomías locales lo que tuvo consecuencias graves en los estados norteños como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas, lo que algunos autores como Alan Knight consideran una de las causas de la revolución de 1910.[12]

El jefe político se convirtió en una pieza central del régimen de Díaz ya que se encargaba de tareas tan impopulares como la manipulación electoral, el reclutamiento de soldados para el ejército federal, la persecución de peones fugados de las haciendas, bandidos y criminales y el cobro de multas a los infractores de la ley y de los reglamentos de policía. Ya fuera como aliado de las élites locales o como partidario del gobernador y del gobierno federal, el descontento en contra de los jefes políticos a finales del porfiriato por parte de la sociedad fue mayoritario, pues se constituyó en la cara opresiva, corruptora y fraudulenta del régimen. No obstante, este proceso tuvo distinta intensidad en los diferentes estados de la república, en algunos estados del centro, occidente y sur el proceso centralizador se venía llevando a cabo desde la década de 1860, mientras en los estados norteños, esa centralización se hizo sentir en las décadas de 1890 y 1900, allí el predominio de los jefes políticos causó mayor descontento y se convirtió en uno de los agravios que fueron fundamentales para el descontento que originó la revolución.

[12] Alan Knight. (1996). *La Revolución mexicana. Del Porfiriato al nuevo régimen constitucional*. México: Grijalbo, t. I. pp. 43-47.

CAPÍTULO I.
El jefe político y sus representaciones conceptuales e históricas

Trazos conceptuales

Dice un refrán popular que "el león no es como lo pintan", lo mismo se podría decir de los jefes políticos decimonónicos, a estas autoridades políticas intermedias las han pintado por una parte como gobernantes crueles, autoritarios, corruptos, asesinos y violadores; y por otra, como funcionarios administrativos que desempeñaron un papel clave en la construcción del estado nacional, gobernando y pacificando las zonas o regiones más alejadas, imponiendo el orden y la estabilidad en un país muy convulso, como lo era México en el siglo XIX. Desde luego que ambas visiones de los jefes políticos no son más que representaciones estereotipadas, construidas por sus detractores o por sus partidarios, a través de distintos medios como la prensa, los discursos e informes oficiales de los gobernadores de los estados, o de los mismos jefes políticos en su correspondencia y oficios que dirigían a sus jefes inmediatos o sus subordinados. La verdad, es que todas las referencias a los jefes políticos no son más que discursos elaborados por alguien desde cierta posición política e ideológica, en un momento y lugar determinados, con fines y objetivos precisos para atacarlos o criticarlos, o para alabarlos y defenderlos de las críticas opositoras. Por lo que se puede sostener que todos los discursos al respecto de los jefes políticos son representaciones hechas por alguien, y no precisamente la realidad tal cual. Lo mismo ocurre con la historiografía sobre estas autoridades políticas producida en los siglos XX y XXI, pues

los historiadores, como bien señala Michel de Certeau, también tienen una posición social, política e ideológica, es decir, un lugar social desde donde se habla o se escribe la historia.[1] Habría que volver a mirar el cuadro de René Magritte "Ceci n'est pas une pipe" (esto no es una pipa), donde el pintor aclara que la pintura no es el objeto real o tal cual una pipa, sino su representación. Magritte pone de manifiesto el gran abismo que hay entre la realidad visible, "objetiva", y su representación, en este caso pictórica, pero esto se puede ampliar a la fotografía y al lenguaje, ya que también los discursos son representaciones de la realidad.[2]

Durante el siglo XIX a las autoridades intermedias de provincias, departamentos, distritos o cantones se les denominó de tres maneras principalmente: jefes políticos, jefes de policía o prefectos. En este capítulo analizaré dichos conceptos y la forma histórica en que fueron utilizados a nivel nacional y local. Siguiendo a Koselleck habría que decir que hay palabras comunes y conceptos, las primeras son palabras que designan nominalmente un objeto, son unívocas y particularizan el objeto referido como casa o silla, mientras que los conceptos son polisémicos e implican un amplio conjunto de significados.[3] Los seres humanos solo podemos conocer y comprender el mundo a partir del lenguaje, toda nuestra actividad para pensar, comprender, explicar y descubrir la realidad está llena de palabras, unas más simples que otras, sin el lenguaje sería imposible formar ideas y trasmitirlas a otros. Para ello necesitamos el lenguaje, a partir de él los seres humanos representamos el mundo tanto físico como espiritual y en dichas representaciones solo utilizamos palabras, conceptos, símbolos, códigos o imágenes que nos sirven para comprender el mundo. Por tanto, la realidad o el mundo solo pueden ser comprendidos por no-

[1] Michel de Certeau. (1993). *La escritura de la historia*. México: Universidad Iberoamericana, p. 69.

[2] Michel Foucault. (1997). *Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte*. Barcelona: Editorial Anagrama.

[3] Reinhart Koselleck. (1991). *Futuro pasado*. Para una semántica de los tiempos históricos. Barcelona: Paidós, pp. 105-126.

sotros en la medida en que los representamos. Así podemos decir, junto con Schopenhauer, que "el mundo es mi representación".[4]

Los conceptos son representaciones abstractas de la realidad, mientras que las palabras simples son representaciones empíricas o intuitivas, es decir, se refieren al mundo. Al ser abstractos, los conceptos no son cosas concretas que existan en la realidad, no existen más que en el espíritu humano, son producto de la razón, son abstractos y discursivos, por tanto sería absurdo exigir una demostración empírica de ellos.[5] Los conceptos tienden a cambiar su significado a lo largo de la historia, por lo que ha surgido una subespecialidad en la historiografía conocida como la historia conceptual o historia de los conceptos.

La palabra representar, a su vez, tiene varias acepciones, una de ellas es hacer presente algo con palabras o figuras que la imaginación retiene. Representar también es hacer presente algo que está ausente, o traer al presente algo que sucedió en el pasado. Otra acepción es la de recitar, ejecutar o interpretar una obra dramática; otra más es sustituir a alguien o hacer sus veces, para desempeñar su función o a la de una entidad, empresa o asociación. Una representación pude ser también un símbolo o imagen de algo. En general, toda obra o discurso que diga cómo es el mundo finalmente es una representación producto de una forma subjetiva o particular de comprender, explicar o mostrar el mundo, tanto físico como imaginario. Las acciones humanas solo son comprensibles cuando son representadas, explicadas y estructuradas a través de la trama, que es el modo narrativo para contar historias reales o ficticias.[6]

[4] Arturo Schopenhauer. (1983). *El mundo como voluntad y representación*. México: Porrúa, p. 19.

[5] Schopenhauer. (1983), p. 45.

[6] *Diccionario de la Real Academia Española* (RAE). Roger Chartier. (1999). *El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación*. Barcelona: Gedisa Editorial, pp. 56-60. Paul Ricoeur. (1995). *Tiempo y narración*. México: Siglo Veintiuno Editores, t. I, pp. 80-112. Hayden White. (1992). *Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX*. México: Fondo de Cultura Económica, p. 13-50.

Las metáforas del Estado y los jefes políticos

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE) una metáfora es la traslación del sentido recto o literal de una voz a otro figurado, en virtud de una comparación tácita.[7] En la metáfora, dice Hayden White, "los fenómenos pueden ser caracterizados en términos de su semejanza con, y a diferencia de, otros, al modo de la analogía o el símil".[8] La metáfora es un instrumento central en la conformación de la conciencia individual, en la estructuración conceptual y en la construcción social del mundo, sirve para comprender un mundo complejo a partir de la representación de la realidad de manera sencilla, simplificada y reduccionista, poniendo en juego las semejanzas y diferencias entre distintas cosas u objetos, de tal manera que cada metáfora se encarga de proporcionar una perspectiva sobre el concepto y de estructurar uno o varios de sus aspectos. La metáfora encarna la capacidad de síntesis de la imaginación y el poder de representar el mundo de una manera distinta al pensamiento racionalista.[9]

En la metáfora, dice Ricoeur, la innovación consiste en la producción de una nueva pertinencia semántica a través de una atribución impertinente, la metáfora se mantiene viva mientras se percibe y acepta la nueva pertinencia semántica, a pesar de la resistencia del sentido literal de la frase. Sin embargo, el desplazamiento de sentido que experimentan las palabras en el enunciado metafórico no es lo importante en ella, sino solo un medio para sostener la nueva pertinencia de la frase, que está amenazada por la incongruencia literal de su significado o atribución.[10]

Lázaro Pavia en 1891, utilizó la metáfora de la "máquina" para referirse al aparato administrativo del Estado, y consideró a los jefes políticos como parte fundamental de dicho mecanismo. También utilizó el con-

[7] *Diccionario de la Real Academia Española* (RAE).

[8] White. (1992), p. 43.

[9] Mónica María Valle Flórez. (2011). Metáforas con las que se han nombrado, explicado y descrito las organizaciones. *Poliantea*, vol. 7, núm. 13, pp. 173-186.

[10] Ricoeur. (1995), t. I, p. 31.

cepto de "sistema", un sistema es un conjunto de cosas, reglas o principios que están relacionadas entre sí, ordenadas en función de lograr ciertos objetivos, esta imagen se asemeja a algo igual o parecido a una máquina y su funcionamiento.[11] El autor consideraba que los jefes políticos eran "como ruedas motrices en el complicado sistema de la máquina administrativa", en donde todas ellas correspondían "unísonas obedeciendo al mismo impulso para no trastornar con movimientos extraños el orden general de la administración pública".[12] Para Pavia el Estado era como una "máquina social" en la que cada individuo desempeñaba un papel más o menos importante, pero siempre de notoria utilidad.[13] El autor concluyó diciendo que la administración pública era "como una máquina", y cuando alguna pieza no funcionaba bien, la máquina entorpecía todo su movimiento.[14]

Pavía no fue el primero en recurrir a la metáfora de la máquina para referirse al Estado o a la administración pública, antes de él, Karla Marx[15] y Federico Engels[16] a mediados del siglo XIX, ya lo habían hecho en varias de sus obras influidos por el éxito de la revolución industrial, de la mecanización de los procesos productivos y por la expansión del capitalismo en el mundo.[17] Durante las primeras décadas del siglo XX otros autores

[11] Lázaro Pavia. (1891). *Ligeros apuntes biográficos de los Jefes políticos de los estados de la República mexicana*. México: Tip., y Lit. de Joaquín Guerra y Valle, tomos I y II.

[12] Pavia. (1891), t. 1, p. 6.

[13] Pavia. (1891), t. 2, p. 61.

[14] Pavia. (1891), t. 2, p. 141.

[15] Karl Marx. (1973). El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, y La Guerra Civil en Francia. En C. Marx y F. Engels. *Obras escogidas*. Moscú: Editorial Progreso, t. I, pp. 408-498 y t. II, pp. 214-259.

[16] Federico Engels. (2006). *El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado*. Madrid: Fundación Federico Engels.

[17] Marx. (1973). t. I, pp. 408-498 y t. II, pp. 214-259.

marxistas como Lenin[18] recuperaron la metáfora de la máquina del Estado. En la teoría marxista el Estado era el resultado de una sociedad dividida en clases, en donde la clase dominante utilizaba la máquina del Estado para dominar, reprimir y oprimir a las clases trabajadoras; en el capitalismo, la burguesía era la que utilizaba el aparato del Estado para mantener su posición privilegiada, sus propiedades y sus intereses particulares, ejerciendo el control y dominio sobre las otras clases sociales.

Sin embargo, el concepto "máquina" para referirse a un objeto con movimientos casi autónomos o propios no fue una invención del siglo XIX, ni de la revolución industrial ni del capitalismo, durante los siglos XIX y XX la máquina automática o semi-automática llegó a desempeñar un importante papel en la vida cotidiana de las personas, de las empresas y de la industria en general. De tal manera que se ha llegado a atribuir al objeto físico en sí mismo el conjunto de costumbres y métodos que lo crearon y lo acompañaron. No obstante, las máquinas han sido parte esencial de la vida de muchos grupos humanos desde hace más de tres mil años. Las máquinas se han desarrollado partiendo de un conjunto de partes no orgánicas para convertir la energía y realizar un trabajo, también para incrementar las capacidades técnicas o sensoriales del cuerpo humano o para reducir a un orden y una regularidad mensurables los procesos de vida. El autómata es el último eslabón en un proceso que empezó con el uso de una parte del cuerpo humano como instrumento. El objetivo final en el uso de máquinas e instrumentos es modificar la naturaleza para que refuerce y sostenga al organismo humano.[19] Según Karl Marx, a mediados del siglo XIX toda máquina desarrollada se componía de tres partes esenciales: el mecanismo motor, el mecanismo de trasmisión y la máquina-herramienta o máquina de trabajo.[20]

[18] Lenin. (1977). El Estado y la revolución. En Lenin, *Obras escogidas*. Moscú, Editorial Progreso, t. VII, pp. 1-116.

[19] Luis Mumford. (1998). *Técnica y civilización*. Barcelona: Ediciones Atalaya, t. I, pp. 26-27.

[20] Karl Marx. (1981). *El Capital*. México: Siglo Veintiuno Editores, t. I, vol. 2, p. 453.

Sin embargo, la metáfora de la máquina para referirse al Estado y a su burocracia no fue la única utilizada durante los siglos XIX y XX, también se usó mucho la metáfora organicista, es decir, concebir a la sociedad como si fuera un ser vivo, compuesto de diversos órganos, los cuales estaban íntimamente conectados y relacionados para mantener vivo y sano al organismo completo. Tanto el organicismo como el mecanicismo concebían a la sociedad como un todo, con sus partes integradas total y completamente, funcionando a la perfección, pues de otra manera no funcionaría o se enfermaría el organismo o se estropearía el mecanismo. Ambas teorías consideraban que el todo era más que la suma de sus partes, y que las partes aisladas no funcionarían o vivirían, pues dependían de la relación y vinculación que tenían con las demás. Así las partes en el mecanicismo eran tuercas, ruedas, poleas, engranes, palancas, correas de transmisión, motores y fuentes de energía; mientras que en el organicismo eran cuerpos, órganos, células, extremidades, fluidos, venas, corazón, cabeza, cerebro, pulmones, estómago, hígado, etcétera. Para Hayden White tanto el organicismo como el mecanicismo son integristas y reduccionistas. El organicista intenta describir las particularidades de un proceso histórico como componentes de un proceso sintético, intenta explicar la relación entre lo micro y lo macro, las partes como componentes de un todo, en donde el todo se considera cualitativamente mejor o mayor que la suma de sus partes.[21]

Del lado mecanicista, el mundo se ve también como un todo integrado, al igual que el organicismo es reduccionista, el mecanicista se inclina a ver los actos de los agentes históricos como manifestaciones de agencias extrahistóricas que tienen su origen en el escenario donde se desarrolla la acción descrita por la narración, trata de establecer leyes causales en los procesos históricos, y explicar la relaciones entre los sujetos que participan en un proceso histórico determinado como relaciones de parte a parte. El mecanicista tiende a la abstracción, considera a las entidades individuales menos importantes que las clases de fenómenos a los que pue-

[21] White. (1992), pp. 26-27.

de demostrar que pertenecen, al mismo tiempo que esas clases son menos importantes que las leyes que dominan los fenómenos o procesos sociales e históricos. Para el mecanicista una explicación se considera completa cuando ha descubierto las leyes que supuestamente dominan la historia, del mismo modo que las leyes de la física dominan la naturaleza.[22]

Max Weber también recurrió a esta metáfora de la "máquina" del Estado para explicar el funcionamiento y el papel de la burocracia en la sociedad capitalista. Weber fue, tal vez, el primer sociólogo en analizar la organización política o Estado como un sistema, desterrando el mito de la racionalidad de dicha organización, estudiando los conflictos y las tensiones desintegradoras sobre los cuales se construyó la organización del Estado.[23] En las tres últimas décadas del siglo XIX y las dos primeras del XX se dio un proceso de burocratización acelerada que se presentó en todos los aspectos de la sociedad y de los individuos. Dicho proceso fue más claro y evidente en el centro de Europa, donde se desarrolló y consolidó una fuerte burocracia. Mientras en Inglaterra, Estados Unidos y los países latinoamericanos, no tenían un aparato burocrático muy desarrollado, consolidado y profesionalizado, en Alemania y en Austria-Hungría las nuevas tendencias burocratizadoras desplazaron a una vieja tradición burocrática, lo que significó una alta centralización administrativa y el establecimiento de una vertical jerarquía de funcionarios. Los efectos de esta acelerada burocratización se convirtieron en el tema central del análisis de científicos sociales, historiadores y literatos, quienes utilizaron la metáfora de la máquina para referirse a la burocracia, ya que ésta era vista como uno de los aparatos fundamentales en el proceso de destrucción del individuo y de la mecanización de la sociedad. Entre los cuales Max Weber destaca como uno de los principales analistas del Estado y de su aparato administrativo.[24]

[22] White. (1992), pp. 26-27.

[23] Valle Flórez. (2011), pp. 173-186.

[24] José M. González García. (2007). Jaulas, máquinas y laberintos (Imágenes de la burocracia en Kafka, Musil y Weber). *Revista Observaciones Filosóficas*, pp. 1-18.

Los textos de Max Weber donde se refiere al Estado y a la burocracia como su aparato administrativo son dos principalmente, uno sobre el parlamento y el gobierno en Alemania de 1918,[25] y, otro, su obra más conocida, *Economía y Sociedad*, de 1922.[26] En su texto de 1918, Weber sostiene que en el Estado moderno, el poder real, no está en los discursos parlamentarios ni en los del monarca, sino en la actuación administrativa cotidiana, la cual está en manos de funcionarios civiles y militares, al que denomina como "funcionariado". Las características para medir el grado de modernización que este cuerpo de funcionarios requiere, a la par del desarrollo de una economía capitalista, y para que sea considerado como "moderno", es que los individuos sean contratados, con sueldos, pensiones, ascensos, y que tengan una formación especializada, además que participen de acuerdo a una división del trabajo, con competencias delimitadas, tramitación de expedientes y una estructura jerárquica, en síntesis se requiere una profesionalización de los funcionarios.[27]

Dice Weber que esto puede suceder tanto en un Estado democrático como en uno monárquico, ambos deben ser Estados de masas, con lo que se desplazaría o eliminaría a la antigua administración llevada a cabo por notables feudales, patrimonialistas, patricios u otros notables honoríficos que detenten el cargo por herencia. Weber sostiene que este proceso de burocratización también ocurre en el ejército de masas, en la Iglesia y en las empresas privadas capitalistas modernas, las cuales mientras más grandes y complejas requieren de una burocratización mayor. Lo esencial aquí, dice Weber, es que haya una separación de los trabajadores de los medios materiales de explotación, es decir de los medios de producción en la industria, de los recursos bélicos en el ejército, de los medios de gestión en la administración pública, y de los recursos económicos en todos

[25] Max Weber. (1991). Parlamento y gobierno en una Alemania reorganizada. Una crítica política de la burocracia y de los partidos (1918). En Max Weber. *Escritos políticos*. Madrid: Alianza Editorial, pp. 103-300.

[26] Max Weber. (1964). *Economía y Sociedad*. México: Fondo de Cultura Económica.

[27] Weber. (1991), pp. 126-129.

los casos.[28] Algo que ya había dicho Karl Marx en su famosa tesis de la acumulación originaria de capital, la separación entre el trabajador y los medios de producción.[29] Pero Weber puntualiza que desde el punto de vista histórico el Estado burocrático aparece muy estrechamente unido al desarrollo del capitalismo moderno. Tanto la empresa capitalista moderna como el Estado burocrático, sostiene Weber, se basan en el cálculo de los costos de una forma racional, sobre la base de normas generales fijas, de la misma manera que se "calcula el rendimiento previsible de una máquina".[30]

Para Weber fueron los alemanes los que desarrollaron "con absoluto virtuosismo la organización burocrática racional, basada en la división del trabajo y en la especialización profesional de todas las asociaciones de poder, desde la fábrica hasta el ejército y el Estado".[31] De esta manera, la burocracia moderna se distingue de todas las anteriores en la especialización y la instrucción racional y técnica, el funcionario moderno posee una capacitación y una especialización continua e inevitablemente intensa cada vez. Sin embargo Weber idealiza a este funcionario al negar que pueda ser corrupto, dado que proviene de una formación universitaria,[32] cosa que como se ha visto últimamente, no necesariamente es cierto. La idealización de Weber al considerar al aparato burocrático como una maquinaria casi perfecta lo lleva a decir que es "una máquina sin vida" con "un espíritu congelado", que tiene el poder de someter a los hombres a su servicio, dominando su vida cotidiana de trabajo, tal como ocurre en una fábrica.[33]

A pesar del complejo estudio que Weber hace del Estado burocrático, el autor no olvida la esencia del Estado, en su extenso libro *Economía y*

[28] Weber. (1991), pp. 126-129.

[29] Marx. (1981), t. 1, vol. 3, pp. 891-895.

[30] Weber. (1991), pp. 126-129.

[31] Weber. (1991), p. 140.

[32] Weber. (1991), pp. 142-143.

[33] Weber. (1991), p. 144 y 1964, p. 179.

Sociedad, llega a la conclusión de que al Estado moderno, lo mismo que a toda asociación política, lo que lo define en esencia es el uso de la coacción física, incluso cita a Trotsky, quien sostiene que "todo Estado se basa en la fuerza", cosa que los marxistas decían desde mediados del siglo XIX, pero que Weber rescata en las primeras décadas del XX, así afirma que "el Estado es aquella comunidad que en el interior de un determinado territorio […] reclama para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física legítima".[34] Entonces, dice Weber, quien hace política aspira al poder, ya sea como medio al servicio de otros fines, ideales o egoístas, o al poder por el poder mismo, o sea para gozar del sentimiento que confiere.[35]

Para Weber el poder no es una cosa u objeto que se pueda poseer, sino que es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad.[36] Por su parte Elías Canetti se refiere a algo previo al poder que define como "fuerza" que se parece al término de "coacción". Dice Canetti, con la fuerza se asocia la idea de algo que está próximo y presente, es más coercitiva que el poder, se refiere más claramente a la fuerza física, a niveles más inferiores y animales es mejor hablar de fuerza que de poder, y pone el ejemplo de una presa que es agarrada por la fuerza y es devorada. El poder es más general y más amplio que la fuerza, cuando la fuerza dura más tiempo se convierte en poder.[37]

Para Weber el Estado es una relación de dominio de hombres sobre hombres, basada en el medio de la coacción legítima. De tal manera que, para que subsista el Estado es necesario que los hombres dominados se sometan a la autoridad de los que dominan en cada caso.[38] Por "dominación", dice Weber, debe entenderse la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas.

[34] Weber. (1964), p. 1056.

[35] Weber. (1964), pp. 1056-1057.

[36] Weber. (1964), p. 43.

[37] Elías Canetti. (1983). *Masa y poder*. Madrid: Alianza Editorial, p. 277

[38] Weber. (1964), pp. 1056-1057.

La situación de dominación está relacionada con el hecho de que alguien manda eficazmente a otro.[39] Pero toda dominación sobre una gran cantidad de personas requiere de un modo normal de un cuadro administrativo. Este cuadro administrativo puede estar ligado a la obediencia de su señor (o señores) por la costumbre, de un modo puramente afectivo, por intereses materiales o por motivos ideales (por valores). La naturaleza de estos motivos determina en gran medida el tipo de dominación.[40]

Los motivos por los cuales los hombres se sujetan a la dominación del Estado son tres: 1) por la costumbre, a esta le llama dominación tradicional, y la ejercen el patriarca y el príncipe patrimonial de todos los tipos. 2) Por otra parte, se encuentra la dominación carismática, la cual se haya en los profetas, el príncipe guerrero escogido o el conductor plebiscitado, el gran demagogo y el jefe político de un partido. 3) Finalmente, para Weber, se encuentra la dominación en virtud de la legalidad, o sea, basada en la creencia de que quien gobierna lo hace porque así lo establecen las leyes y los estatutos legales vigentes, de esta manera ejerce el poder el Estado moderno. No obstante, Weber advierte que habla de tipos puros o ideales, que raramente se encuentran en la realidad histórica.[41]

Para Weber el Estado moderno se caracteriza por ser un orden jurídico y administrativo por el que se orienta la actividad del cuadro administrativo y el cual pretende la validez no solo frente a los miembros de su asociación sino también de toda acción ejecutada en el territorio a que se extiende la dominación. Solo el Estado pude hacer uso de la coacción de forma "legítima", por tanto, el Estado detenta el monopolio legítimo del poder.[42]

Como conclusiones de este apartado primero se debe situar el caso mexicano en el siglo XIX el cual se caracteriza por haber logrado su independencia de la monarquía española, la que le hereda una serie de institu-

[39] Weber. (1964), p. 43.

[40] Weber. (1964), p. 170.

[41] Weber. (1964), pp.172-173 y 1056-1057.

[42] Weber. (1964), p. 45.

ciones políticas, jurídicas y burocráticas que fueron cambiando a lo largo del siglo según las luchas y acuerdos que tuvieron los grupos de la población mexicana tanto interna como externamente. México no era una isla y el siglo XIX fue un periodo en el que un gran número de países experimentaron su transformación como naciones estado independientes, con constituciones influidas por las ideas ilustradas y liberales, las cuales se fueron aplicando en cada país según las tensiones y luchas políticas entre distintos grupos sociales y políticos. En este siglo decimonónico los conceptos de "moderno" y "modernidad" no estaban exentos de un uso ideológico y político, vinculado a la idea de progreso y de civilización, en donde los países europeos y Estados Unidos, se asumieron como los países más avanzados o adelantados en ese camino de la prosperidad y la modernidad, poniéndose como ejemplo frente a las otras naciones a quienes no se les admitía como integrantes al grupo de las pocas o escasas naciones modernas y civilizadas.

Si el concepto de moderno y modernidad significan lo que es actual o del tiempo presente, entonces todas las naciones y pueblos del mundo en el siglo XIX eran tan actuales y modernas como las europeas o la norteamericana, incluido particularmente el Estado mexicano, que durante dicho siglo logró poner las bases de su independencia y su viabilidad como Estado-nación.

En este contexto, los jefes políticos en México fueron producto del proceso complejo de la conformación del Estado mexicano decimonónico, incluso sus antecedentes deben buscarse en el Estado monárquico español siendo parte de su burocracia, como intendentes, delegados, corregidores, alcaldes mayores, y como jefes superiores de provincia. Cuando se estableció la república, tanto federal como centralista, los jefes políticos o prefectos estuvieron contemplados en sus constituciones, fueron nombrados o electos porque así lo establecieron las constituciones nacionales, de cada estado en particular, y todos los reglamentos de policía, por lo que se puede concluir que, siguiendo a Weber, fueron autoridades legítimas, formaban parte del cuerpo administrativo gobernante, no estaban ahí por carisma ni por tradición, sino porque fueron nombrados

por las autoridades constituidas o electas por el voto popular, por tanto eran tan modernos como el Estado mexicano mismo, no eran parte de un sistema de prefecturas o jefaturas independiente, sino que formaban parte del orden republicano, federal o centralista, pero finalmente legal, no asumieron dichos cargos por su propia voluntad sino por designación o elección según las leyes vigentes en ese momento, desde luego que según el caso hubo funcionarios buenos o malos, honestos o corruptos, etcétera, pero eso no hace que la institución sea mala o buena, sino que estaban diseñadas para que los sujetos encargados de esos puestos gobernaran y administraran una parte del territorio nacional.

El prefecto, sus antecedentes conceptuales y funciones administrativas

Tanto en México como en Iberoamérica el término de "prefecto" fue muy utilizado para designar a las autoridades administrativas intermedias, es decir entre lo que correspondía al gobierno nacional y lo que correspondía al nivel local o a los ayuntamientos, el gobierno de los departamentos, cantones o distritos. Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE) proviene del latín *praefectus*, que en el imperio romano se otorgaba a diversas autoridades del ámbito civil o militar. En tiempos de Constantino, el *prefecto* gobernaba una de las provincias o departamentos en que se había dividido el imperio, con autoridad para administrar justicia y juzgar en última instancia. También este nombre lo recibía el comandante de la guardia pretoriana, la cual se encargaba de proteger y custodiar a los emperadores romanos. Este *prefecto* recibía las órdenes directas del emperador y era independiente del resto de los responsables militares del imperio.[43]

El *prefecto* de la ciudad de Roma era el gobernador o pretor que solo se encontraba debajo del príncipe y de los cónsules. Era el encargado de organizar el cuerpo de policía local, de la marina, de la intendencia de los abastos públicos y del cuidado y mantenimiento de los edificios. Su ju-

[43] Diccionario de la Real Academia Española (RAE).

risdicción iba más allá de los límites de Roma y eran de su conocimiento las causas de los libertos, esclavos y patronos. Entre sus funciones estaban la protección de los derechos y regalías de los senadores (a quienes debía juzgar) y la presidencia del Senado. En términos generales, todo el pueblo estaba bajo sus órdenes. El cargo de *prefecto* de la ciudad duraba un año y lo más común era que, luego de terminar su periodo de gobierno, fuera nombrado como gobernador de una de las provincias del imperio, donde se desempeñaba como supremo intendente.[44]

En la actualidad, varios países llaman *prefecto* a una autoridad que tiene como responsabilidad proteger la seguridad y el orden de un territorio, y lo habitual es que responda directamente al gobierno nacional. Los *prefectos* se encuentran normalmente en países unitarios o no federados, y son los que llevan la voz del gobierno nacional a las poblaciones de regiones y provincias. Tienen bajo su mando a los subprefectos, gobernadores o tenientes gobernadores. En algunos casos el nombre de *prefecto* cambia al de intendente. Cuando las provincias adquieren cierta autonomía, la figura del *prefecto* es reemplazada por la de un delegado del gobierno nacional. Los países unitarios aplican entonces un sistema prefectural y un sistema municipal. Por el contrario, en los países federados la figura del *prefecto* es reemplazada por la de un gobernador electo por voto popular, que no tiene vínculo de dependencia con el gobierno nacional. En un sistema prefectural, los *prefectos* son designados directamente por el presidente de la república o por el jefe de la monarquía.[45]

En el modelo centralista de la Francia revolucionaria, la Asamblea Nacional, el 29 de septiembre de 1789, acordó dividir el territorio francés en 85 departamentos, y estos a su vez fueron divididos en distritos, siguiendo una división territorial uniforme. A la autoridad o represen-

[44] Pérez Porto, J., Gardey, A. (2013). *Prefecto - Qué es, definición y concepto*. Definicion. de. Última actualización el 22 de mayo de 2015. Recuperado el 16 de julio de 2023 de https://definicion.de/prefecto/

[45] Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Prefecto_(autoridad)

tante del poder central en cada uno de estos departamentos se le llamó *prefecto*.[46]

A diferencia de los *prefectos* mexicanos, el *prefecto* francés formaba parte de un grupo de gobernantes especializados, cuya única ambición era servir y ser útil al interés público. Este gobierno de *prefectos* se basó en un sistema de carrera y promoción profesional, creando grandes grupos de profesionales, quienes hasta cierto punto eran independientes de la política, incluso, estos no podían ser juzgados por los tribunales sin autorización del Consejo de Estado hasta antes de 1870. La ley local napoleónica dio pleno poder al *prefecto* en su departamento, y, aunque al principio contaba con un consejo general que lo asesoraba, luego se transformó en un tribunal administrativo. Para cumplir con sus funciones, el *prefecto* contaba con un secretario general, que se encargaba de llevar los asuntos del personal y administrativos, y podía sustituir al *prefecto* en caso de ausencia, pero no en caso de fallecimiento. El *prefecto* estaba sujeto totalmente al emperador, pero respondía ante el Ministerio del Interior y ante el Ministerio de Policía. En cada departamento había un subprefecto, quien dependía totalmente del *prefecto* y atendía demarcaciones más pequeñas. Para finalizar este apartado, se puede afirmar que los salarios o los ingresos de los prefectos franceses eran muy elevados, lo que les permitía vivir al mismo nivel que los miembros más acaudalados de elite local en donde residían.[47] Este modelo fue trasladado a España en el periodo de 1833 a 1834, bajo el reinado de Isabel II, cuando el partido moderado tuvo hegemonía política. Sin embargo, la adaptación del modelo francés en España no fue una simple copia sino que fue realmente una apropiación de dicho modelo, aunque de manera selectiva, lo cual consistió en la incorporación de algunos elementos originales a las circunstancias españolas de esa época, a través de las lecturas e interpretaciones que hacían

[46] José Ignacio Sarmiento Larrauri. (1993). *Antecedentes inmediatos de la figura del gobernador civil*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. (Tesis de doctorado). pp. 11-12.

[47] Sarmiento. (1993), pp. 13-14.

los gobernantes y dirigentes moderados españoles, por lo que no fue una mera imitación del modelo francés.[48]

Jefe político o jefe de policía, de la *polis* a la civitas

Para empezar a explicar el concepto de *jefe político* o *jefe de policía* se debe aceptar que tanto el término *político* y el de *policía* se derivan del mismo vocablo griego πόλις, *polis*, ciudad. El concepto de "policía" como todos los conceptos es polisémico, abstracto y variable a través del tiempo y del espacio.[49] *Politeia* o *politia* y *res pública* son términos equivalentes. La policía no es sino la cosa pública que borra las diferencias estamentales y políticas, y quien la invoca está aludiendo a intereses públicos, ajenos por completo a toda idea de particularidad y egoísmo.[50]

Tanto para Nieto como para Bobbio el concepto de Estado moderno se comenzó a utilizar a partir de los siglos xv y xvi. Con la obra *El Príncipe*, de Maquiavelo,[51] la palabra "Estado" tuvo una gran difusión, pero no fue Maquiavelo quien la utilizó por primera vez, dicha palabra fue sustituyendo paulatinamente, y a través de un largo camino, los términos tradicionales con los que se había designado a la máxima organización de un grupo de individuos sobre un territorio en virtud de un poder de mando: *civitas*, que se traducía del griego πόλις, y del latín *res pública*,

[48] Juan Pro. (2017). El modelo francés en la construcción del Estado español: El momento moderado. *Revista de Estudios Políticos*, núm. 175, pp. 299-329, pp. 301-302.

[49] Alejandro Nieto. (1976). Algunas precisiones sobre el concepto de policía. *Revista de administración pública*, núm. 81, pp. 35-75.

[50] Fernando Garrido Falla. (1953). Las transformaciones del concepto jurídico de policía administrativa. *Revista de administración pública*, núm. 11, pp. 11-32. Regina Hernández Franyuti. (2005). Historia y significados de la palabra policía en el quehacer político de la ciudad de México. Siglos xvi-xix, *Ulúa. Revista de historia, sociedad y cultura*, núm. 5, pp. 9-34.

[51] Nicolás Maquiavelo. (1979). *El Príncipe*. México: Editorial Época.

con lo que los escritores romanos designaban al conjunto de instituciones políticas de Roma, precisamente de la *civitas*.[52]

La policía, según Nieto, no es un simple rasgo, más o menos importante, del Estado moderno, sino que constituye el valor medular que vertebra todo su ser. Frente al orden feudal caracterizado por una multitud de derechos, libertades y privilegios de los individuos, las ciudades y los estamentos, durante el renacimiento se formó un nuevo orden más dinámico que recurrió a una envoltura clásica, la *politeia* griega, con la que se pretendió superar las viejas oposiciones medievales en una unidad superior a todas ellas. La policía era en sus comienzos un verbo cultural, al que se dotó rápidamente de una carga política formidable, en cuanto que dio cuerpo a la idea del interés objetivo de la comunidad, lo cual el monarca utilizó en su favor contra los derechos y privilegios individuales de procedencia feudal. De esta manera, el rey combatió el orden feudal, pero aparentemente no en su beneficio, sino en interés de la salud pública, articulado a partir de establecer el "buen orden y la policía".[53]

El concepto de policía parece ser inicialmente cultista, ideológico y metajurídico, pasó de los griegos a los romanos y llegó a la sociedad actual conservando la misma significación, pero resulta equívoco porque cubre todas las diferentes formas de gobierno. En su sentido más limitado se entendería como el orden público de cada ciudad, tanto Platón, Aristóteles como Sócrates se referían al buen orden y gobierno de la ciudad, con el fin de lograr el bien público en todos los sentidos. Esta idea, en primera instancia cultural e ideológica, con el tiempo adquirió un especial sentido administrativo concreto, a partir de un edicto de la comandancia general de policía parisiense de 1667, y aplicado en toda Francia a partir de 1693, en el cual se expresó claramente que el objetivo de la policía era combatir la criminalidad en el país. Tal edicto textualmente dice lo siguiente: "La policía consiste en velar por el descanso del público y de

[52] Norberto Bobbio. (1989). *Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política*. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 86-87.

[53] Nieto. (1976), p. 37.

los particulares, en depurar la ciudad de lo que pueda causar desorden, en procurar la abundancia y en hacer vivir a cada uno según su condición y sus deberes".[54] Con ello se identificaron los fines de la policía con los de la administración interior del Estado moderno.

Esta concepción de la policía como un elemento ya no general sino particular del Estado, llegó a España a partir del Real Decreto de 2 de abril de 1717, en el que se dividió el Despacho Universal en tres Secretarías: 1) la de Estado y Negocios Extranjeros, 2) la de Guerra y Marina, y 3) la de Justicia, Gobierno Político y Hacienda. En el entendido que el Gobierno Político correspondía a los asuntos de la Administración civil interior, separado de los asuntos relacionados con la Justicia y Hacienda.[55] Posteriormente, a mediados del siglo XVIII, con las Ordenanzas de Intendentes y Corregidores de 13 de octubre de 1749, se estableció que cada una de las provincias del reino tendría una intendencia en donde el gobierno organizaría las cuatro causas: Justicia, Policía, Hacienda y Guerra. La separación de la Policía de las otras causas fue muy importante pues especificó cuáles eran las funciones de la Policía con respecto a las otras tres causas, sobre todo de Justicia, pero también de las cuestiones económicas relativas a la Hacienda y a la Militar.

En la Edad Moderna todo reglamento tenía un origen policial, desde la forma de hacer sombreros hasta el alumbrado público, pasando por la producción de pan y la importación de libros. Una vez que la policía cumplió con sus objetivos iniciales de combatir los derechos y privilegios feudales, perdió su justificación histórica, pero después el Príncipe sometió a la policía a una nueva manipulación ideológica en su beneficio. Al Príncipe no le convenía gobernar solo con la fuerza de su ejército, para él era más rentable apelar al principio ideológico que hiciera más soportable a los súbditos la existencia del Poder. En adelante la policía iba a ser el instrumento administrativo para asegurar y defender la felicidad de los individuos, en apariencia la policía no estaría en beneficio del Príncipe,

[54] Nieto. (1976), pp. 38-39.

[55] Nieto. (1976), p. 40.

sino de los súbditos, con lo cual éstos iban a aceptar el poder represivo del Príncipe de mejor manera, es decir, la policía tenía como objetivo la felicidad de todos los súbditos, por ello el monarca tenía que reglamentar hasta los más mínimos detalles de la vida individual y colectiva. La policía como instrumento represivo del monarca nunca aparecía como tal, sino que era disfrazada al servicio de la salud pública y el interés popular, pero en realidad estaba al servicio del Príncipe.[56]

Al principio los súbditos aceptaron con agradecimiento la tutela policial del monarca absoluto, ya que los defendió de las plagas del sistema feudal: la criminalidad de la chusma hambrienta y la arbitrariedad de los señores, pero al pasar del tiempo esa tutela se fue haciendo cada vez más insoportable, por eso en el siglo XVIII se generalizó la efervescencia ciudadana la cual adoptó una reticencia hacia el poder político y en lugar de colaborar con él y aceptar su leyes y reglamentos policiacos optó por la defensa de sus derechos individuales. Esto provocó un efecto contrario y regresivo, convirtiendo a la policía en un aparato represor. El monarca ya no era el responsable de la felicidad de sus súbditos, ahora cada uno tenía derecho de ser feliz a su manera. Así, la policía ya no debía atender a la felicidad de todos los individuos, más bien sus fines y actividades quedaron reducidos a la prevención de la criminalidad, y a la garantía de la seguridad pública y del orden. De esta manera, la policía omnicomprensiva del Estado absoluto desapareció y en su lugar surgió una policía nueva de carácter ilustrado y liberal.

La policía en la ciudad de México

En la historia de la ciudad de México se puede identificar que desde el siglo XVI hasta mediados del XVIII la palabra *policía* se identificó y se vinculó con cuestiones administrativas realizadas por el ayuntamiento que tenía a su cargo el gobierno de la ciudad, pero existía una ambigüedad en el uso del término, ya que no era un campo claramente delimitado para el ejercicio de la autoridad y la administración del ayuntamiento.

[56] Nieto. (1976), p. 46.

De acuerdo con la legislación española, en particular de las ordenanzas municipales, el ayuntamiento tenía como finalidad alcanzar el bienestar, la comodidad y la felicidad de sus habitantes. Por lo que tenía que ejercer correctamente la *policía*, entendida como buen gobierno, lo cual se refería a todos los actos o medidas de la administración de la ciudad, con su gobierno y sus habitantes. Durante este periodo la palabra *policía* estuvo ligada a las acciones y formas de administración urbana que el ayuntamiento debía cumplir y hacer cumplir para ejercer un buen gobierno.[57]

El ayuntamiento era el máximo órgano de gobierno en el espacio urbano, lo vigilaba todo. El término de *policía* se identificaba con la administración, el gobierno y la vida de la ciudad con su sanidad, arreglo, ornato, seguridad, urbanismo, limpieza, circulación, alumbrado, alimentación, construcciones, matanzas, diversiones, etcétera. *Policía* era el hacer cotidiano, instancia, función y objeto del ayuntamiento. A partir de las reformas borbónicas de la segunda mitad del siglo XVIII, la palabra policía tuvo una connotación distinta, pues dichas reformas pretendían aplicar la forma o el arte racional para gobernar. El pensamiento ilustrado demandaba ciudades que fueran la expresión del dominio y el orden, en la que prevalecieran conceptos como comodidad, funcionalidad, utilidad, orden, seguridad y limpieza, que fueran el marco que facilitara el desarrollo de la sociedad. En lo político se proponía que el Estado fuera administrativamente intervencionista y que dirigiera gran parte de las actividades de los súbditos, la policía ya no sería el gobierno de la ciudad que regulaba la vida diaria y el quehacer cotidiano de sus habitantes, sino el instrumento fundamental para la consolidación del Estado.[58]

En la ciudad de México durante esta época, la *policía* se presentaba como una herramienta para la organización del espacio urbano, de la vida cotidiana, del orden y control público. A partir de estos cambios la policía sería orientada a la prevención y la seguridad pública, las cuales serían funciones especiales del gobierno de la ciudad para beneficio de sus

[57] Hernández Franyuti. (2005), p. 10.

[58] Hernández Franyuti. (2005), pp. 14-17.

habitantes. Las reformas borbónicas no solo establecieron estos cambios en el gobierno de la ciudad, sino que llevaron a cabo una reorganización administrativa que restringió gran parte de las funciones autónomas que tenían los ayuntamientos y pasaron a depender de los intendentes, ya que la Ordenanza de Intendentes de 1786 estableció que estos funcionarios serían los encargados de la policía de los pueblos, refiriéndose de manera especial al cuidado del orden y salubridad en las calles, plazas y edificios, así como a la seguridad y vigilancia de sus habitantes. A finales del siglo XVIII las ideas ilustradas consideraban que en el término de policía estaban comprendidas todas las actividades administrativas realizadas por el ayuntamiento y por el Estado, por ello consideraron que el concepto de *policía* debía tener la categoría de ciencia.[59]

Desde esta perspectiva la ciudad debía ordenarse de acuerdo al modelo urbanista neoclásico que consistía en una ciudad ordenada, cómoda y sana, con el fin de alcanzar un espacio ordenado y controlado, evitando al máximo los delitos y garantizando la estabilidad del régimen, para ello en la ciudad de México se creó la Superintendencia General de Policía, la procuración de la seguridad pública se convirtió entonces en una constante en las decisiones del poder administrativo de los gobiernos, lo cual estuvo vinculado al control y represión de todas las manifestaciones que querían un cambio en las relaciones sociales. Con ello la palabra *policía* se vinculó con dos funciones: la civil y la militar. Esto significó una distinción entre las acciones del gobierno como asuntos de la *policía*, una enfocada en la ornamentación y belleza de la ciudad, y otra, dedicada a la seguridad y el orden público.[60]

Con la Constitución de Cádiz de 1812 se reforzó la autoridad de los jefes políticos, encargados del gobierno de las provincias, quienes tendrían a su cargo el cuidado de la tranquilidad pública, del buen orden, de la seguridad de personas y bienes de sus habitantes, de la ejecución de las leyes y órdenes del gobierno, y en general de todo lo que pertenecía al

[59] Hernández Franyuti. (2005), pp. 18-21.

[60] Hernández Franyuti. (2005), p. 24.

orden público y prosperidad de la provincia. De esta manera se definieron los campos de acción de forma vertical y centralizada, el ayuntamiento estaría encargado de la policía urbana, y el gobernador de la provincia, como jefe político, estaría al cuidado del orden y la tranquilidad, de la seguridad en toda su provincia.[61]

Las primeras décadas del siglo XIX fueron de una gran inestabilidad política, social y militar, lo cual motivó a tener un cuidado más directo sobre el orden público. Esta situación generó que la policía desempeñara actividades destinadas al cuidado del quehacer de los individuos y a la seguridad de las personas y sus bienes, así como a la prevención de los delitos. Para ello se crearon cuerpos especiales de policía los que dependían directamente del gobernador o del prefecto, quienes podrían nombrarlos y removerlos libremente, a partir de entonces la palabra policía sirvió para referirse a esos cuerpos especiales, integrados por personas ajenas al vecindario, que recibían una paga por hacer sus rondas y vigilar el cumplimiento de los ordenamientos en cuanto a la limpia, tránsito, comestibles, pero sobre todo a evitar toda clase de excesos, perseguir y aprehender a los delincuentes y conservar la tranquilidad pública. En adelante el término de policía se utilizaría para referirse a la persona que cuida, previene, corrige, persigue y hace cumplir los reglamentos, y cuya zona de acción solía ser la manzana, un espacio pequeño que facilitaba el cumplimiento del servicio y lo identificaba y lo acercaba a los habitantes. De esta manera, durante la segunda mitad del siglo XIX hay dos acepciones del concepto de policía: el tradicional, que tiene que ver con el gobierno interno de la ciudad, y el moderno, que se refiere al cuerpo especial encargado de la prevención de los delitos, y a la tranquilidad y seguridad pública. Ambas se refieren a individuos que portaban uniforme, armas y se desplazaban a pie o a caballo.[62]

[61] Hernández Franyuti. (2005), pp. 24-26.

[62] Hernández Franyuti. (2005), pp. 28-31.

Guadalajara y su policía

De forma paralela o siguiendo de cerca los cambios operados en la ciudad de México, la ciudad de Guadalajara implementó los cambios establecidos a partir de las reformas borbónicas en la última década del siglo XVIII y la primera del XIX. Este periodo ha sido muy bien estudiado por diversos autores desde la perspectiva social y económica, pero aquí destacaremos los estudios relacionados con los reglamentos de policía, sus objetivos y las consecuencias que tuvieron para los habitantes de Guadalajara en este periodo.[63] Las medidas tomadas por los intendentes entre 1791 y 1809 significaron la transformación del espacio urbano al convertir a las calles en espacios públicos con empedrados adecuados para la circulación de peatones y vehículos, reservando a las casas las actividades exclusivamente de tipo privado. Dichos cambios se basaron en la división del espacio urbano en cuarteles vigilados por alcaldes de barrio. Con los cambios urbanísticos implementados por los intendentes, la ciudad de Guadalajara contó con el primer paseo y los primeros baños públicos. Los intendentes de este periodo pudieron mantener, a través de la Junta de Policía, muy buena relación con el cabildo de la ciudad, integrado por los alcaldes ordinarios que se encargaban de las funciones judiciales y los regidores que atendían las administrativas. Los tres intendentes involucrados en este proceso fueron Jacobo Ugarte, José Fernando Abascal y Roque Abarca que se involucraron en los mayores problemas que tenía la ciudad: el abastecimiento de agua y el empedrado de calles.[64]

[63] Carmen Castañeda. (2002). Los intendentes de Guadalajara, 1790-1809, *Anuario de Estudios Americanos*, t. LIX, núm. 1, pp. 67-80. Marco Antonio Delgadillo Guerrero. (2010). La división de Guadalajara en cuarteles y la reglamentación de policía. El proyecto borbónico por construir una sociedad moderna, 1790-1809, *Letras Históricas*, pp. 91-109. María Ángeles Gálvez Ruíz. (1995). *La conciencia regional en Guadalajara y el gobierno de los intendentes (1786-1800)*. Guadalajara, Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, pp. 107-165.

[64] Castañeda. (2002), pp. 67-80.

Los habitantes de la ciudad de Guadalajara antes de las reformas borbónicas enfrentaban muchos problemas urbanos, tanto de seguridad como de higiene, que las autoridades del ayuntamiento como de la Intendencia buscaron resolver con un programa urbanístico consistente en la división de la ciudad en cuarteles y la creación de reglamentos de policía. Los intendentes al implementar las políticas reformistas buscaron modernizar a la ciudad tapatía a partir del saneamiento tanto físico como moral del espacio urbano, por tal motivo se empedraron calles, construyeron un acueducto, erigieron puentes, remozaron plazas y edificios, y crearon reglamentos de policía para controlar los espacios públicos y renovar las prácticas de la sociedad. Con el establecimiento de los cuarteles se buscaba solucionar los problemas de la administración y seguridad de la ciudad, cuya causa principal era el acelerado crecimiento demográfico de la misma. Con la promulgación de los reglamentos de policía se buscaba que las autoridades pudieran vigilar las prácticas de los citadinos, principalmente de los grupos populares y controlar la forma en que éstos utilizaban el espacio urbano. Para ello fue necesaria la creación de la Junta de Policía, la cual estaba encargada de promover el buen proceder y vigilar el comportamiento de los tapatíos. De igual manera, se promulgaron otros reglamentos encaminados a mejorar la higiene y el orden en la capital de la Intendencia, además de la publicación de bandos que dictaban las pautas de convivencia y de uso de los lugares públicos.[65]

Igual que en la ciudad de México, en Guadalajara a fines del siglo XVIII, el concepto de *policía* significaba buen orden y buen gobierno, por lo que los ayuntamientos se encargaban de mejorar el equipamiento, los servicios, la limpieza, la salud pública, la comodidad y el bien general. Todo ello implicó medidas no solo de policía sino también higienistas, por lo que se reglamentaron muchas actividades en este sentido como el tráfico de carretas, bestias, basura y desechos, el empedrado de calles y la introducción de agua potable para la ciudad. Entre 1790 y 1809 las autoridades neogallegas intentaron modernizar la sociedad mediante pro-

[65] Delgadillo. (2010), pp. 91-109.

gramas para transformar la higiene, la urbanización, la seguridad y los servicios públicos para beneficio de la población en general.

En realidad fueron pocos los cambios experimentados en el rubro de la *policía* en las ciudades después de la independencia. Durante la primera mitad del siglo XIX la inestabilidad social, política y militar en el país, particularmente en el estado de Jalisco, las autoridades seguían la costumbre y el sentido común de los reglamentos coloniales, la aplicación de la justicia en el medio rural jalisciense sería imposible sin la existencia de cuerpos más o menos especializados en el combate a la criminalidad, para ello se crearon las milicias cívicas, y posteriormente las guardias nacionales. El bandolerismo y los asaltos de caminos fueron la preocupación principal de las autoridades en todos los estados del país.

En el discurso del gobierno apareció la figura del "gendarme" como pieza clave de la seguridad. Esta figura proviene de la evolución de los militares europeos que hacían tareas de patrullaje y seguridad en las ciudades, en Francia los Estados Generales tenían que echar mano de soldados improvisados entre la población para cumplir con la vigilancia de las ciudades ganadas para la causa. La palabra proviene del francés *gens d'arms* (gente de armas), que al castellanizarse se tradujo en gendarme, pero en Europa, el gendarme era más bien un militar, y en América un guardián de la ley. Aunque la seguridad pública era una necesidad básica, su concepto y organización continuaba siendo el modelo colonial. En 1848 el ayuntamiento de Guadalajara expidió una Instrucción que dio la Comisión de Policía a los comisarios de cuarteles y sus subalternos, que en esencia era lo mismo que decían los reglamentos de policía de la época colonial, con inspectores por manzana y subalternos para hacer las rondas, regidos por comisarios, que sustituían a la junta de policía en el ayuntamiento de la ciudad. Las funciones y deberes eran iguales: limpieza y salubridad de la ciudad, persecución de vagos, ladrones y criminales, y por otra parte el cuidado de los ciudadanos y de sus casas e intereses. En general, la mayor parte de los artículos de esta Instrucción estaban enfocados al bienestar y la limpieza de la ciudad. La evolución hacia una policía como fuerza del orden organizado comenzó paulatinamente con

el triunfo y consolidación del proyecto político liberal.[66] El modelo ideal de policía en el régimen liberal se definía por las siguientes características:

1. La policía era parte de la fuerza pública que garantizaba la libertad y derechos de los ciudadanos.
2. Garantizaba el derecho a la seguridad para todos por igual.
3. Uno de sus objetivos era la protección de la integridad física y bienes de sus habitantes.
4. Era una institución administrativa y no política.
5. Sus agentes carecían de fuero.
6. Debido a la igualdad jurídica, nadie escapaba a su acción y reglamentos.
7. Estaba al servicio de autoridades y reglamentos emanados de una constitución política general.
8. Actuaba siempre bajo el principio de legalidad, se regía por códigos, reglamentos particulares y leyes específicas.
9. Sus leyes específicas eran congruentes con las leyes generales.[67]

Lo más seguro es que el modelo ideal de policía nunca se haya implementado histórica y concretamente en México, pero al menos estaba como referente obligado para el Estado mexicano decimonónico y para los gobiernos estatales, departamentales y municipales. Sin embargo, estos puntos sirven como parámetro para comparar la organización y el actuar de los cuerpos de policía decimonónicos, características que comenzaron a aparecer en la década de los setenta del siglo XIX.

Cuerpos de policía en el campo mexicano

El escenario rural generalmente estaba fuera del ámbito de los gobiernos municipales, pero caía en manos de las autoridades intermedias como los

[66] José Julio Arizaga Rodarte. (2009). *Función, estructura y organización de la policía municipal de Guadalajara en el Porfiriato, 1874-1897*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara. (Tesis de licenciatura), pp. 33-41.

[67] Arizaga. (2009), pp. 42-43.

jefes políticos, quienes a falta de fuerzas o corporaciones armadas bajo su mando directo, tenían que pedir auxilio y ayuda a otras organizaciones de tipo militar o policial para cumplir con sus obligaciones de establecer el orden y la paz en sus territorios. Para eso estaban corporaciones como la acordada, la guardia mexicana, los rurales o la gendarmería.

Durante la época colonial y durante gran parte del siglo XIX el problema del bandidaje proliferó ayudado por los malos caminos y la difícil orografía que había en la Nueva España y en el México independiente, lo cual no permitía perseguir con celeridad y eficacia a los bandoleros por extensas zonas casi despobladas que les permitían ocultarse con gran efectividad y por la corrupción de los oficiales policiacos, durante el siglo XVIII esta situación había alcanzado un nivel crítico. Para combatir este bandolerismo, en Querétaro hacia 1703, se organizó la primera policía rural denominada "La Acordada", se llamó así porque debía funcionar de "acuerdo" con la Audiencia, que era el supremo tribunal de Justicia. Para 1720, por órdenes del virrey Bucareli, "La Acordada" ya tenía actividades en todo el virreinato de la Nueva España.[68] A Nueva Galicia llegó en 1776, contando el tribunal con las mismas facultades y prerrogativas que el de la ciudad de México, con el que mantendría estrecha comunicación y auxilio.[69]

La Acordada era un tribunal itinerante que entre sus facultades estaba la de procesar delincuentes, al margen del sistema judicial. Tenía alrededor de 2,500 representantes que realizaban funciones policíacas deteniendo a los acusados, sus miembros no recibían sueldo alguno, sino que lo hacían por el honor y la autoridad que les daba el pertenecer a dicha corporación. En sus inicios las actividades de este tribunal se caracterizaron por la celeridad de sus juicios y la severidad de sus sentencias, lo que los hizo famosos y temidos, las autoridades locales se quejaban de que

[68] Paul J. Vanderwood. (1982). *Los rurales mexicanos*, México: Fondo de Cultura Económica, pp. 21-22.

[69] Miguel Ángel Isais Contreras. (2021). Entre acordadas y gendarmes. La organización de la policía rural en Jalisco durante el siglo XIX, *Secuencia*, núm. 111, 2021, pp. 1-27.

la Acordada usurpaba sus funciones. Durante el siglo XVIII la Acordada juzgó alrededor de 60 mil casos, con 62 mil acusados, de los cuales más de la mitad obtuvieron su libertad. Los presos fueron sentenciados a ser azotados, a trabajos forzados en obras públicas, al exilio, o entregados a la Inquisición o a otros tribunales. Las condiciones en que mantenía a los presos eran deplorables, lo que provocó la muerte de más de 1,200 de ellos por enfermedad. Finalmente, la Acordada dictó 900 penas de muerte a través de la horca o mediante flechas, y los cadáveres eran exhibidos colgados de un árbol cerca de la escena del delito como escarmiento. Sin embargo, el bandolerismo no se acabó, sino que, con la guerra de independencia, se intensificó, pero la Acordada ya no pudo atacar este fenómeno social porque la Constitución Española de 1812 la abolió definitivamente.[70] A principios del siglo XIX la falta de coordinación entre la Acordada y las justicias locales novogalaicas llegaron a un punto crítico en donde los reos eran quienes pagaban las consecuencias, ya que las varias comunicaciones entre el Juez de la Acordada y los alcaldes ordinarios prolongaba los procesos judiciales y los reos permanecían en la cárcel de la Audiencia de Guadalajara sin recibir sentencia.[71]

Durante la primera mitad del siglo XIX el campo mexicano fue escenario de continuas rebeliones, revoluciones, guerras y de la actividad de muchos grupos de bandidos, de tal manera que el peligro y la inseguridad predominaban en todos los rincones del país, sobre todo a lo largo de los caminos por donde transitaban las principales rutas comerciales, y no había una corporación armada destinada al cuidado de los caminos ni de las zonas rurales. No fue sino hasta el 16 de enero de 1857 que el presidente Ignacio Comonfort decretó el establecimiento de la Guardia mexicana, una organización policiaca que entre sus funciones estarían desde la vigilancia de la legalidad en los juegos de azar en las ferias, hasta prestar servicios en el ejército en calidad de unidades de línea. Las autoridades

[70] Vanderwood. (1982), pp. 21-22.

[71] Isais. (2021), pp. 1-27.

municipales, altos jueces, jefes políticos y comandantes militares podían recurrir a la guardia para sofocar cualquier desorden. [72]

La Guardia mexicana se integraba por pelotones de ocho hombres, a pie y a caballo, su deber era dar seguridad tanto en el campo como en las poblaciones, los de a pie apagaban incendios, enviaban a los mendigos a las instituciones de beneficencia y ponían en paz a los que participan en pleitos callejeros, mientras que los policías que montaban caballos recorrían los caminos, revisaban los papeles de identificación de los viajeros, escoltaban las recuas que trasportaban valores, a los dignatarios que viajaban, y en general combatían el bandolerismo. Los miembros de la Guardia eran voluntarios, principalmente veteranos del ejército, dados de baja honrosamente y sus sueldos eran equiparables a los del ejército, igual que el entrenamiento, equipo, cuidado de caballos, ascensos y castigos que recibían. La Guardia dependía del Ministerio de Gobernación y tenía un inspector general, que controlaba la organización. Pero los estados de la república quedaron a cargo de toda la vigilancia directa, administración y financiamiento de las unidades a pie y prestaban servicios en los centros de población. A diferencia de las unidades montadas que dependían totalmente del gobierno federal.[73]

El 5 de mayo de 1861 el presidente Benito Juárez ordenó la creación de cuatro cuerpos de rurales cuidados por las autoridades federales. En un principio el gobierno vaciló en decidir si los rurales dependerían de Gobernación o del Ministerio de Guerra, ya que generalmente estos asuntos eran de la incumbencia del Ministerio de Gobernación, pero éste no tenía los medios apropiados para organizar, preparar y dirigir una fuerza paramilitar como los rurales. El problema fue resuelto mediante una división de responsabilidades ya que el Congreso asignó a Gobernación un total de 433,260 pesos para financiar la policía rural, pero la responsabilidad de las operaciones de ésta fue asignada al Ministerio de Guerra, lo que produjo posteriormente una duplicación de funciones administrativas y contables,

[72] Vanderwood. (1982), p. 27.

[73] Vanderwood. (1982), p. 28.

problema que fue resuelto cuando en 1869 el Congreso puso a los rurales bajo la autoridad del Ministerio de Gobernación.[74]

En la ley sobre los rurales se establecía que los cuatro cuerpos de esta policía tendrían actividades en la parte central del país, cada cuerpo tendría un comandante, un pagador, tres cabos de primera clase, quince de segunda y 255 policías regulares; y estaría dividido en tres compañías de 75 hombres cada una, y a su vez, estas compañías en escuadrones de quince hombres. Los sueldos serían los siguientes: 210 pesos para el comandante, 120 para el pagador, 150 para los cabos de primera, 52.50 para los de segunda y, finalmente, 33.75 pesos para los de la tropa.[75] Los sueldos que recibían los rurales eran más altos que los que se daban en el ejército regular, aun cuando los policías rurales tenían que comprar con su propio dinero caballos, uniformes y equipo, mientras que a los soldados del ejército el gobierno federal los abastecía de todo. Esta estrategia del gobierno federal tenía como objetivo atraer a la policía rural a los hombres de mayor capacidad, ya que los rurales tenían que ser un cuerpo especializado. Sin embargo, las personas que eran reclutadas para la policía rural tenían el mismo nivel que los soldados regulares del ejército en cuanto a disciplina y habilidad, por lo tanto los rurales estaban muy lejos de ser un "cuerpo de élite".[76]

En la práctica el decreto juarista de creación de los rurales fue solo una guía general y buenos deseos para que el gobierno federal contara con un instrumento de seguridad pública, por lo cual trató de alistar en los rurales a ciertas unidades de caballería ya existentes, tanto en el ejército como entre los particulares. También comenzó a contratar a muchos hombres de antecedentes penales, y hasta a bandoleros declarados, en una situación de gran inestabilidad política y militar, la posibilidad de seleccionar a los mejores reclutas era mínima, de tal manera que la mayor parte de los guardias reclutados ya habían prestado servicios militares en las gue-

[74] Vanderwood. (1982), p. 38.

[75] En 1861 un peso equivalía a un dólar.

[76] Vanderwood. (1982), p. 39.

rrillas constitucionales o en el ejército federal. Pero en muchos casos la diferencia entre un guerrillero patriota y un verdadero bandolero no era muy clara y dependía de las inclinaciones políticas de quien hiciera el juicio, pues en general todas las fuerzas mexicanas de aquella época recibían de buen agrado en sus filas a delincuentes y bandoleros declarados, y los rurales no fueron la excepción.[77]

Con el triunfo de los liberales republicanos en 1867 la seguridad pública se convirtió nuevamente en una de las principales preocupaciones del gobierno federal, la experiencia de la policía rural era una ventaja y podía dar empleo a los veteranos del ejército, los objetivos generales eran combatir al bandolerismo en todo el país y ayudar a la centralización política del país, por estos motivos el gobierno federal retomó a la policía rural y la reorganizó, ampliando sus fuerzas, con ello se consiguió que cinco años más tarde los rurales fueran una corporación cuyos efectos sobre la sociedad mexicana eran considerables.[78] El mayor apogeo de los rurales fue durante el régimen porfirista, aunque tuvieron muchos defectos, los rurales eran la mejor fuerza de policía del país, y sus servicios eran solicitados constantemente por las dependencias federales, gobernadores, funcionarios municipales y empresarios privados. Los rurales eran responsables de su propia organización e independientes de otras autoridades que no fueran los de Gobernación, pues cuando los gobernadores de los estados u otras autoridades locales les daban una orden muy discutible, solicitaban por telégrafo el consejo y autorización de su inspector general. Lo que quiere decir que nunca fueron lacayos de nadie. De aquí que no todos los funcionarios electos vieran con buenos ojos la llegada de un destacamento de rurales a su estado, cantón, departamento o municipio, pues consideraban que era un desafío a su propia autoridad. Pero en otros casos, la policía rural fue el principal apoyo de la autoridad municipal. Sin embargo, como en todo, es difícil hacer generalizaciones sobre los rurales, ya que siendo escasa la vigilancia de sus actividades, la

[77] Vanderwood. (1982), p. 43.

[78] Vanderwood. (1982), p. 46.

conducta de algunos contingentes no se apegaba al marco legal. En la mayoría de los casos quienes solicitaban los servicios de la policía rural eran los jefes políticos y los funcionarios municipales cuando tenían problemas de bandolerismo, criminalidad o para cumplir con las cuotas de soldados de leva o de trabajadores forzados.[79] Los rurales no pacificaron al país, como muchos creen, ya que la paz porfiriana casi no existió, más bien se convirtió en un mito y fue una invención del régimen porfirista. Cierto que durante el periodo porfirista disminuyeron en gran medida las rebeliones regionales características de la primera mitad del siglo XIX, pero la inquietud política interna persistió en parte debido a los mismos factores tradicionales, pero también provocada por los acelerados cambios capitalistas que estaban ocurriendo en todo el país. Los rurales mexicanos contribuyeron a mantener el *statu quo* al reprimir los desórdenes al lado del ejército porfiriano, pero de forma particular, los rurales fueron una corporación policial encargada de prevenir los desórdenes, la criminalidad y la delincuencia en el campo mexicano.[80]

Con respecto a los cuerpos de policía tenemos poca información. Miguel Isais dice que las justicias rurales de comienzos del siglo XIX operaban con cierta inercia siguiendo la costumbre y el sentido común propio de cada localidad. Eran distintos niveles de justicia que no solo impartían las autoridades reconocidas por la corona o por las autoridades estatales, sino también por ciertos grupos de poder que incluso fueron forzados a aplicarla.[81] Agrega Isais, que durante los primeros años del periodo independiente la justicia rural era inimaginable sin las milicias cívicas, y posteriormente llamadas *guardias nacionales*. Acabar con el bandolerismo, los asaltos y la inseguridad en los caminos era una preocupación de todos los gobiernos estatales en el país, pero no había comunicación ni coordinación entre las altas autoridades.[82]

[79] Vanderwood. (1982), pp. 67-68.

[80] Vanderwood. (1982), pp. 227-228.

[81] Isais. (2021), pp. 1-27.

[82] Isais. (2021), pp. 1-27.

No fue sino hasta 1857 que en Jalisco se formaron las llamadas "acordadas", que se convirtieron en el instrumento con que contó el gobierno del estado para combatir la criminalidad rural, en este combate no solo participó el gobierno, sino que se involucró a la sociedad, en especial a las élites locales, quienes estaban obligados a perseguir y vigilar en sus haciendas y ranchos a los sospechosos de pertenecer a algún grupo de bandidos. Se parecían un poco a la Acordada del periodo colonial. Estas nuevas acordadas fueron uno de los instrumentos con los que contó el gobierno jalisciense, los jefes políticos tuvieron una participación decisiva en este combate contra los bandidos, de tal manera que es imposible entender el funcionamiento de las acordadas sin la autoridad del jefe político. Pero no fue sino hasta 1861 que comenzó a tener actividad la gendarmería del estado. Las fuerzas que integraban esta gendarmería se organizaron a partir de las autoridades de cantones y municipios, siguiendo la misma lógica de la administración pública, de esta manera quedaron bajo las órdenes de los jefes políticos a nivel de los cantones, de los directores políticos en los departamentos, y en los municipios por los comisarios de policía. Sin embargo, durante todo el siglo XIX el control social en las localidades dependió, en su mayor parte, de los particulares, sin la intervención del Estado o las instituciones a través de las acordadas. Pero durante la segunda mitad de dicho siglo aparecieron los intentos de monopolizar la seguridad pública a través de un cuerpo que solo obedeciera a un mando supremo: el gobernador.[83]

La Gendarmería del estado de Jalisco fue creada en 1868, a partir de 1876 el gobierno estatal intentó nuevamente controlar las acordadas, las cuales solo estaban al servicio de intereses particulares, en ese entonces se quiso remplazar el proyecto de concretar la guardia nacional, pero bajo el total control del gobierno del estado de Jalisco, a través de la Gendarmería del Estado, se esperaba que tuviera éxito con la ayuda y colaboración de los ayuntamientos, pero no fue sino hasta 1882 que se reestructuró bajo un nuevo reglamento, contaba con cuatro escuadrones de caballería y 250

[83] Isais. (2021), pp. 1-27.

soldados, además de una sección de infantería con 120 soldados. Estas fuerzas estarían organizadas y estructuradas desde los cantones hasta los municipios, bajo la misma lógica de la división político-administrativa. De esta manera, la gendarmería quedaba bajo las órdenes del jefe político de cada cantón, y en los departamentos quienes quedaron al cargo fueron los directores políticos, y en los municipios los comisarios de policía, su sostenimiento quedó a cargo de las autoridades políticas locales.[84]

La deficiente organización de la gendarmería se hizo más visible al no contar con una reglamentación completa y clara. Sus actividades no tenían un financiamiento constante, los ayuntamientos carecían de los fondos suficientes para mantener a sus guardias, hasta que en 1869 el gobierno estatal decidió financiar a la gendarmería sin tomar recursos de los fondos municipales. A partir de ese año la gendarmería contó con dos escuadrones de caballería, con 168 gendarmes, e infantería con 166 elementos, los jefes y oficiales serían designados por el gobernador, todos sus integrantes serían voluntarios y durarían por lo menos dos años en el servicio. Las críticas al gobierno fueron entonces que la gendarmería era onerosa. No fue sino hasta 1882 que un nuevo reglamento separó a las autoridades políticas locales de los mandos, es decir jefes y directores políticos quienes organizaran las fuerzas de la gendarmería, no podían disponer de ellas, al contrario, ahora los jefes y oficiales de la gendarmería acudiría en auxilio de las autoridades locales para la aprehensión de gavillas y malhechores.[85] Las acordadas y la gendarmería estuvieron funcionando en Jalisco durante el último tercio del siglo XIX, solo que las acordadas tenían actividades limitadas a los municipios y operaban exclusivamente en casos de emergencia de seguridad a nivel local, especialmente en la persecución de gavillas, una vez obtenido ese fin, eran disueltas, a diferencia de la gendarmería, las acordadas estaban bajo las órdenes de las autoridades locales. Las acordadas no desaparecieron con la revolución de 1910, volvieron a tener actividades en territorio jaliscien-

[84] Isais. (2021), pp. 1-27.

[85] Isais. (2021), pp. 1-27.

se porque el problema de bandidaje e inseguridad se había incrementado sustancialmente.[86] Al finalizar el siglo XIX la gendarmería había alcanzado su consolidación total como una institución de seguridad pública, lo cual replanteó la idea de formar una guardia nacional, como ya se había establecido en las constituciones generales de 1824 y 1857, donde cada estado de la república debía organizar su propia guardia nacional. Hacia 1887 la gendarmería contaba con 700 hombres, la mitad de las que tenían las fuerzas rurales de la federación. Posteriormente la gendarmería incrementó a mil el número de sus elementos.[87]

[86] Isais. (2021), pp. 1-27.

[87] Isais. (2021), pp. 1-27.

CAPÍTULO II.
La casa de los espejos, representaciones literarias e historiográficas de los jefes políticos

Al pie del cerro y a la entrada del bosque de Chapultepec se encuentra la Casa de los Espejos, que en realidad es un laberinto de espejos, donde al entrar una persona, su imagen es distorsionada o reproducida muchas veces, provocando un cierto engaño a la vista del visitante con sus reflejos, con la consecuente pérdida de la ubicación y de la salida. Algo parecido sucede con las imágenes producidas por la historiografía sobre los jefes políticos. Lo mismo que el juego de imágenes y representaciones que se relacionan con el león "que no es como lo pintan", según el refrán popular, se aplica a la figura del jefe político del cual se tienen distintas versiones o representaciones historiográficas. La historiografía al igual que la narrativa literaria representa las acciones humanas en el tiempo, la diferencia es que la historiografía pretende ser un relato verídico "realista", comprometido con lo realmente acontecido a los seres humanos de determinada época y lugar, mientras que la narrativa literaria opta por la forma ficticia de la representación de las acciones humanas, aunque trata de construir un pasado "histórico" realista, su punto de partida es la ficción.[1] En este apartado se abordarán tres novelas decimonónicas y la historiografía producida sobre los jefes políticos a lo largo de los siglos XIX al XXI.

[1] Paul Ricoeur. (2004). *La memoria, la historia, el olvido*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, pp. 183-370.

Representaciones del prefecto en tres novelas del siglo xix

Este apartado tiene el objetivo de analizar la forma en que tres autores de novelas costumbristas del siglo xix representaron a los prefectos o jefes políticos en el campo mexicano de la primera mitad de dicho siglo, los autores son Luis G. Inclán, Ignacio Manuel Altamirano y Manuel Payno, con sus respectivas novelas *Astucia, El jefe de los Hermanos de la Hoja o los charros contrabandistas de la Rama*,[2] *El Zarco*,[3] y *Los bandidos de Río Frío*.[4] Los tres autores coinciden en definir al escenario rural mexicano de la primera mitad del siglo xix como afectado por una gran inestabilidad política y militar, y plagado de gavillas de bandidos que azolaban a los pueblos, los campos y los caminos, atemorizando a los pobladores de las distintas clases sociales en las regiones del centro del país desde Jalisco hasta Veracruz.

Astucia

Luis G. Inclán (1816-1875) en su novela *Astucia, El jefe de los Hermanos de la Hoja o los charros contrabandistas de la Rama*,[5] narra la vida de Lorenzo Cabello, un joven que se dedicaba al comercio de aguardiente, pero que perdió sus bienes por una traición, a partir de esto decide unirse a un grupo de contrabandistas de tabaco. Una vez que consigue ser uno de los Hermanos de la Hoja, Lorenzo, apodado "Astucia", se convierte en su líder y vive junto a ellos una serie de aventuras en la ruta que va desde el Valle de Orizaba hasta la región de Tierra Caliente en Michoacán. Conforme avanza la trama, cada uno de los charros relata sus orígenes, por lo que en el desarrollo de la narración se intercalan las historias de todos los miembros del grupo.

[2] Luis G. Inclán. (1987). *Astucia, El jefe de los Hermanos de la Hoja o los charros contrabandistas de la Rama*. México: Porrúa.

[3] Ignacio Manuel Altamirano. (2007). *El Zarco*. México: Ediciones Leyenda.

[4] Manuel Payno. (1983). *Los bandidos de Río Frío*. México: Editorial Porrúa.

[5] Inclán. (1987).

Astucia es una de las primeras novelas ambientadas en el México independiente y narra, sobre todo, la vida de la gente en el campo durante un periodo políticamente convulso de la historia del país, la tercera y cuarta décadas del siglo XIX. Publicado en plena Intervención francesa, el libro se vendió por entregas durante dos años. Los cuadernillos del primer tomo aparecieron en la imprenta del autor a lo largo de 1865, y los del segundo en el transcurso de 1866. Desde entonces, cuenta con, por lo menos, una decena de ediciones y múltiples reimpresiones.[6]

La novela tuvo una gran popularidad durante el siglo XIX, al grado que fue considerada una obra que vino a destronar al *Periquillo Sarniento* de José Joaquín Fernández de Lizardi.[7] Realmente algunos críticos como Emanuel Carballo la consideran como la primera novela del siglo XIX. *Astucia* es una novela costumbrista ambientada en el México rural del siglo XIX, cuyos personajes, según su mismo autor, están fuera de la política, porque ellos mismos se colocan fuera de la ley que ha sido maquinada por los políticos y por los gobernantes, pero no se les puede considerar bandidos ni criminales por transgredir la ley, sino que siguen las costumbres y los valores de una sociedad rural muy añeja, en contra de un gobierno, una policía y una curia cuyos representantes no lo son obviamente del pueblo.[8]

La representación que hace Luis G. Inclán del prefecto en su novela es la de un personaje anónimo, el cual no tiene un nombre propio, es simplemente "el prefecto". En un pasaje, Astucia, el jefe de los contrabandistas, se presentó al prefecto de Zitácuaro, Michoacán, con un documento falso donde se autonombraba como "Jefe de la Seguridad Pública del Valle de Quencio", nombramiento y documento que el prefecto no puso en dudas, pues dicho funcionario era conocido de Astucia. El prefecto se refiere a

[6] Manuel Sol. (2004). Luis Inclán ante la crítica. En *Actas del XIV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas.* España: Juan de la Cuesta, vol. IV, pp. 629-634.

[7] Manuel Fernández de Lizardi. (2022). *El Periquillo Sarniento*. España: Edu Robsy.

[8] Salvador Novo. (1987). "Prólogo". En Luis G. Inclán. *Astucia, El jefe de los Hermanos de la Hoja o los charros contrabandistas de la Rama*. México: Porrúa, 1987, pp. 6-16.

Astucia como "don Lorenzo", lo que denota una sumisión o cordialidad hacia el jefe contrabandista. Astucia no quería o pretendía ser el jefe de los rurales, y se decía estar facultado para restablecer el orden y la paz en la región, pero que no necesitaba a "los rurales, veintenas, cívicos, ni cosa por el estilo".[9]

Lorenzo (Astucia) se puso a las órdenes del prefecto, para lograr establecer el orden, la paz y acabar con los bandidos en la región, "siendo yo el primero en respetar y sostener su autoridad como la principal del distrito"-dijo el jefe de los contrabandistas de tabaco. Lorenzo pidió al prefecto reunir a todos los notables del Valle de Quencio para hacerles la propuesta de formar un cuerpo de rurales con el fin de acabar con los bandidos en la comarca. En la junta los notables de la región, hacendados y rancheros, quienes renegaban de los bandidos que azotaban el valle, no estuvieron de acuerdo en formar una fuerza de rurales porque les costaba mantenerla y armarla, lo que pagarían mensualmente. Por lo que Lorenzo les propuso un plan para acabar con los bandidos, sin que les costara un centavo a los hacendados y rancheros del valle, pero con la ayuda de ellos.[10]

El plan de Astucia fue pronunciarse en contra de los bandidos, sin tener una bandera política o partido de ninguna clase, solo con la ayuda y complicidad de los mismos propietarios, el objetivo preciso se reducía a dos artículos: "desterrar revolucionarios, y colgar bandidos". La fuente de financiamiento para este plan serían los fondos públicos a través del prefecto y basado en el nombramiento falso como "Jefe de la Seguridad Pública del Valle de Quencio". El prefecto le pagaría 220 pesos de sueldo a Astucia como Jefe de la Seguridad Pública, pero Astucia tuvo que pedirle apoyo a los notables para que le prestaran unos cuantos hombres para comenzar su trabajo. Cunado Astucia acabó con los bandidos del Valle todos le estuvieron agradecidos, comenzando con el prefecto, y con-

[9] Inclán. (1987), pp. 532-538.

[10] Inclán. (1987), pp. 532-538.

tinuando con los propietarios, el gobernador del estado y los diputados del congreso local.[11]

Según la imagen que nos proporciona en su novela Luis Inclán, el prefecto político de la primera mitad del siglo XIX en la región centro-occidente (Michoacán), era una autoridad legítima, bien aceptada al menos por los hacendados, rancheros y comerciantes, no era un tirano, dictador, autoritario o represor, sino que consultaba a los notables del lugar para realizar ciertas actividades relacionadas con el establecimiento del orden y la paz, y el exterminio del bandidaje. No contaba con personal armado a su cargo, de tal manera que tenía que recurrir a los rurales para combatir a los bandidos.

El Zarco

Ignacio Manuel Altamirano descendiente de indígenas, fue un político, escritor, periodista e intelectual liberal del siglo XIX, nació en Tixtla el 14 de noviembre de 1834, cuando esta localidad todavía pertenecía al estado de México, después fue el estado de Guerrero. Altamirano murió en San Remo, Italia, el 13 de febrero de 1893. Escribió poesía, cuentos y novelas además de realizar una intensa labor como editor y periodista. Entre 1886 y 1888, Altamirano escribió su novela *El Zarco*. *Episodios de la vida mexicana 1861-1863*,[12] pero se publicó por primera vez hasta 1901 en Barcelona bajo el sello del editor español Santiago Ballescá, un prólogo de Francisco Sosa y las ilustraciones de Antonio Utrillo. La trama de la novela se centra en las relaciones de un temible bandido El Zarco en la comarca de Yautepec, estado de México (hoy Morelos) y una hermosa mujer llamada Manuela. En la novela se narran las fechorías del Zarco y las gavillas de bandidos que azotaban la región de tierra caliente afectando principalmente a los vecinos de Yautepec y las haciendas, ranchos y pueblos aledaños, aprovechando la falta de protección en que los había dejado la guerra civil. La novela es un relato histórico de corte costum-

[11] Inclán. (1987), pp. 532-538.

[12] Altamirano. (2007).

brista, romántico y realista. Los personajes y los hechos que se narran algunos fueron reales y otros ficticios, pero es cierto que existió la banda de "los plateados", y que el personaje del Zarco en la novela es una mezcla del líder real de la gavilla, Salomé Plascencia, y de sus seguidores Felipe y Severo.

Al narrar la historia, Altamirano tiene un tono moralista, más que explicar los acontecimientos, los actores sus causas y sus razones, los clasifica como buenos y malos. Altamirano condena moral y literariamente a los bandidos de su novela y muestra personajes muy acartonados y sin matices. Pero lo que importa resaltar en este espacio es la representación que hace de las autoridades políticas del lugar, sobre todo del prefecto de Yautepec.

Primero al mostrar el escenario rural de la época en la que ocurren los acontecimientos narrados Altamirano dice que eran tiempos muy difíciles y "calamitosos" en donde los habitantes de los pueblos no tenían una fuerte guarnición que los protegiera del peligro de los asaltos de los bandidos con sus consecuentes horrores como matanzas, raptos, incendios y exterminio, y afirma que los plateados, bandidos de tierra caliente "eran sobre todo crueles". La región de Yautepec para el autor estaba infestada de bandidos a los cuales se les llamaba "los plateados" porque llevaban una indumentaria de charro bordada de plata con exageración. Para el autor las autoridades políticas de estos pueblos y haciendas eran pobres y cobardes que no tenían elementos de defensa y en vez de enfrentar a los bandidos se ocultaban o huían para salvar sus vidas. Ante esta situación los habitantes de Yautepec se sentían atemorizados e indefensos, pues como decía doña Antonia, mamá de Manuela, la joven pretendida por el Zarco: "Si yo supiera que había aquí tropas del gobierno o que el vecindario tuviera armas para defenderse, estaría más tranquila, pero ya tú bien sabes que hasta el prefecto y el alcalde se van al monte cuando aparecen los plateados".[13]

[13] Altamirano. (2007), p. 20.

Los plateados no solo asaltaban en los caminos, sino que raptaban a los hacendados ricos y les exigían rescate o les pedían dinero para no incendiarles sus cañaverales o sus edificios, sin que las autoridades locales o federales actuaran de alguna manera. Advertía doña Antonia a su hija Manuela:

> ¿No ves que hasta los hacendados les mandan dinero para poder trabajar en sus haciendas? ¿No sabes que les pagan peaje para poder llevar sus cargamentos a México? ¿No sabes que en las poblaciones grandes como Cuautla y Cuernavaca sólo los vecinos armados son los que se defienden? ¿Tú piensas, quizás, que estos bandidos andan en partidas de diez o doce? Pues no: andan en partidas de trescientos y quinientos hombres; hasta traen sus músicas y cañones, y pueden sitiar a las haciendas y a los pueblos. El gobierno les tiene miedo, y estamos aquí como moros sin señor.[14]

Altamirano explica en la novela las razones por las que proliferaron en esta época y en esta región los bandidos en grandes partidas. Dice que en el año 1861 se organizaron grandes grupos de bandoleros, quienes algunas veces eran perseguidos por las tropas del ejército, pero que, atraídos por la riqueza de los distritos azucareros del sur de México y de Puebla, las gavillas de bandidos proliferaron sembrando el terror. Afirma el autor de la novela, que fue un "lamentable y vergonzoso error" por parte del gobierno liberal juarista, haber aceptado la cooperación de estos bandidos en la lucha contra los conservadores. De esta manera los bandidos tuvieron acceso a las armas y crecieron en gran número, por lo que fue muy difícil controlarlos y ponerlos en orden. Por tal motivo, dice Altamirano, el poder de los bandidos era "ilimitado en aquella comarca infortunada" y el gobierno central impotente, ya que estaba ocupado en combatir la guerra civil y al ejército invasor.[15]

[14] Altamirano. (2007), p. 20.

[15] Altamirano. (2007), p. 50.

Altamirano presenta al prefecto de Yautepec como una autoridad civil, sin mando militar y sin tropa, era un ciudadano común y corriente. Pero asegura, en voz de doña Antonia, que dicha autoridad "no se atreve a salir de la población, porque no tiene tropas ni manera de hacerse respetar". Las imágenes que pinta Altamirano en el capítulo titulado "El comandante" sobre el ejército federal y el prefecto son realmente lastimosas. Mientras el prefecto, vestido de "traje dominguero", recibió a la tropa con los honores debidos, la tropa del ejército estaba "mal vestida y peor montada", y tenía un comandante malo y corrupto, que llevaba un uniforme militar desgarrado y cubierto con un sombrero charro viejo y sucio. Inmediatamente el comandante exigió al prefecto raciones para sus soldados y forraje para sus caballos, ya que tenía que continuar su marcha a la ciudad de México. Por su parte el prefecto ordenó que les dieran lo necesario. Dice Altamirano al respecto: "Tales eran los deberes que se imponía entonces la autoridad política de los pueblos para con esos militares, que ni defendían a la gente pacífica ni se atrevían a encararse con los bandidos de que estaba llena la comarca".[16]

En la conversación que tuvieron el comandante y el prefecto el primero presumió que había combatido y perseguido a los bandidos, matando a unos y tomando presos a otros, que después fusilaba y colgaba en el camino, para dar un escarmiento a los bandidos, cosa que el prefecto no creyó, pues resultó que el comandante no tenía interés en perseguir a los bandidos y lo que hacía era apresar a unos cuantos vecinos del lugar y acusarlos de ser espías o parte de los bandidos y por ello los mataba. El prefecto evidenció las mentiras que había dicho el comandante al grado que le preguntó por la suerte del jefe de los bandidos, el Zarco, a lo que contestó el comandante que había huido muy lejos, posiblemente hasta Puebla. El prefecto lo contradijo asegurándole que el Zarco y su gavilla de bandidos se escondían en una hacienda cercana a Yautepec, causando la molestia y el enojo del comandante, diciendo que eran mentiras y exageraciones de la gente.

[16] Altamirano. (2007), p. 70.

–Ya sé, ya sé –replicó el comandante con cierto enfado–, pero usted conoce lo que son las exageraciones del vulgo. Todo son unos cuentos; habrán buscado allí refugio alguna vez, habrán permanecido allí dos o tres días […] y el miedo de los pueblos ha inventado lo demás, porque no me negará usted, señor prefecto, que ustedes viven muertos de miedo y que ni parecen hombres los que viven en estas comarcas.[17]

El prefecto le contestó al comandante que lo que para él eran cuentos, para los habitantes de los pueblos de la región eran "realidades", pues ellos veían pasar por los caminos a cientos de bandidos bien armados y montados y llevarse todos los días a vecinos de dichos pueblos y a los trabajadores de las haciendas, ya que los bandidos se metían donde querían como en su casa. El comandante le increpó el por qué ellos no se armaban y defendían. A lo que contestó el prefecto que los habitantes y las autoridades de los pueblos estaban desarmados, explicando lo siguiente:

–Le diré a usted: teníamos armas para la defensa de las poblaciones, es decir, armas que pertenecían a las autoridades y armas que habían comprado los vecinos para su defensa personal. Hasta los más pobres tenían escopetas, sus pistolas y machetes. Pero pasó primero Márquez con los "reaccionarios" y quitó todas las armas y los caballos que pudo encontrar en la población. Algunas armas se escaparon, sin embargo, y algunos caballos también, pero pasó después el general González Ortega con las tropas liberales y mandó recoger todas las armas y todos esos caballos que habían quedado, de manera que nos dejó con los brazos cruzados. Luego los bandidos apenas saben que alguno tiene un caballo regular, cuando al acto se meten a recogerlo. ¿Quién quiere usted que compre ya ni armas ni caballos sabiendo que los ha de perder de todos modos?[18]

[17] Altamirano. (2007), p. 72.

[18] Altamirano. (2007), p. 73.

El prefecto terminó diciendo al comandante que, aunque tuvieran algunos machetes y cuchillos no se iban a pelear con quienes traían buenos mosquetes y rifles. Por eso, para el prefecto no había otra solución que huir o esconderse cuando llegaban los bandidos. El comandante le respondió al prefecto que él no sería autoridad en ese pueblo en esas condiciones, a lo que el prefecto contestó que ya había renunciado cincuenta veces, pero que no le admitían la renuncia, porque era lo mismo que hubiera o no prefecto.

> Aquí me tiene usted –dijo el prefecto– limitándome a dar forraje y raciones a las tropas que pasan, sin poder hacer más, sin disponer de un solo guarda, de un solo soldado, de nadie […] escondiéndome por la noche, porque de noche quedamos expuestos a todo, sin poder ejercer la vigilancia que tenemos de día, y en el día trabajando en nuestros quehaceres, siempre con sobresalto. De manera que no son cuentos los que le referimos a usted; no son invenciones del miedo. Son verdades, y se las dirá todo el mundo.[19]

En la discusión con otros vecinos del pueblo que demandaban protección al militar, el prefecto fue regañado por el comandante, amenazándolo con llevarlo preso. El comandante tomó represalias contra un ciudadano del lugar que lo enfrentó exigiéndole que cumpliera con su deber de combatir y apresar a los bandidos, y al contrario, a quien apresó fue al ciudadano que lo enfrentó. Por lo que concluye Altamirano este capítulo diciendo que en ese tiempo y en aquellas comarcas reinaban los bandidos mientras que las tropas del gobierno mataban a los hombres de bien, al mismo tiempo, las autoridades locales eran la burla de cualquier militarcillo, por inferior que fuese, quien se atrevía a ultrajarlas y a humillarlas. En estas condiciones el prefecto de Yautepec no pudo hacer otra cosa que reunirse con los regidores del ayuntamiento de su pueblo, el administrador y los empleados de la hacienda más cercana, y otros parti-

[19] Altamirano. (2007), p. 73.

culares bien armados y montados para defenderse de las arbitrariedades cometidas por el comandante.

Con el respaldo de los regidores del ayuntamiento y vecinos del pueblo el prefecto pudo enfrentar con más firmeza al comandante, pero no solo eso sino que mandó cartas y avisos a las altas autoridades de la ciudad de México y se puso de acuerdo con el prefecto de Cuautla para resistir a los atropellos del militar. Después de recibir órdenes directas del Ministro de Guerra, al comandante liberó al prisionero que había sido el motivo del conflicto con las autoridades de Yautepec, saliendo victorioso el prefecto del lugar ante las arbitrariedades del comandante. Finalmente, un ciudadano decidió organizar y armar a un grupo de vecinos para perseguir, combatir y exterminar a los bandidos, logrando el permiso y el apoyo del presidente Benito Juárez, lo cual efectivamente logró, acabando con el Zarco y sus plateados.

Ignacio Manuel Altamirano proporciona una representación social del mundo rural de su época, los personajes sociales como los bandidos, los militares, los ciudadanos y vecinos de los pueblos que era muy cercana a lo que realmente pasó, pues su novela tiene intención de hacer una narración histórica y realista, algunos personajes realmente existieron y los acontecimientos también. Pero no deja de ser una ficción literaria, aunque los retratos de los paisajes, los personajes y las acciones se apeguen en gran medida a los hechos realmente acontecidos. Lo que se puede deducir de esta novela sobre las autoridades políticas desde el punto de vista del autor, es que en los pueblos del sur del estado de México entre 1861 y 1863 (en el actual estado de Morelos) el prefecto político era un ciudadano común, o un notable del pueblo, originario del lugar, tenía un carácter civil, y tenía el apoyo de la población de su comarca o región. No tenía bajo su mando fuerzas armadas, ni policía con armas, se apoyaba para combatir a los bandidos y al ejército en los habitantes del lugar: ciudadanos, hacendados, empleados y trabajadores, sobre todo en los regidores del ayuntamiento del pueblo, además tenía contacto con otros prefectos y con el gobernador del estado y las autoridades federales, quienes escucharon sus demandas y sus quejas. En ningún momento Altamirano

calificó al prefecto como un tirano o pequeño dictador, que en su comarca hiciera lo que quería, ejerciendo su poder con prepotencia y opresión a los habitantes del lugar. Tampoco se ve como un agente del gobierno central, cuyo único fin era gobernar y controlar su distrito obedeciendo al gobierno de la federación o del estado. Su situación más bien era pobre, difícil e incapaz de resolver los problemas que aquejaban a su demarcación.

Los bandidos de Río Frío

Manuel Payno nació en la ciudad de México, el 21 de junio de 1810, estuvo emparentado con el general Anastasio Bustamante. Terminados sus estudios Payno trabajó como meritorio en el ramo de Aduanas, y fundó, junto con Guillermo Prieto, la aduana de Matamoros. A los treinta años de edad fue secretario del general Mariano Arista. Con el grado de teniente coronel, Payno pasó como jefe de sección al Ministerio de Guerra, luego se desempeñó como administrador de rentas del estanco del tabaco. En 1842 se le nombró secretario de la Delegación Mexicana en Sudamérica y viajó por primera vez a Europa, visitando Francia e Inglaterra. A su regreso a México, en 1844, fue enviado a los Estados Unidos para estudiar el sistema penitenciario. Luego, en 1847, combatió contra los norteamericanos, se le encargó establecer un servicio secreto de correos entre México y Veracruz. Fue ministro de Hacienda entre 1850 y 1851, con José Joaquín Herrera, luego fue perseguido político por Santa Anna, lo que lo llevó a refugiarse en los Estados Unidos. En 1855 volvió a ocupar la Secretaría de Hacienda en el gobierno de Comonfort, pero fue uno de los responsables del golpe de estado de 1857, por lo que se le siguió un proceso y se apartó de la política, sufriendo persecuciones durante la intervención francesa, ya que reconoció al imperio de Maximiliano. Al restaurarse la república fue electo diputado varias veces. Dio clases de Historia patria en la Escuela Preparatoria y en 1886 fue nombrado cónsul en Santander y después cónsul general en España, con residencia en Barcelona. En 1891 regresó a México y al año siguiente fue electo

senador, cargo que desempeñó hasta su muerte ocurrida en San Ángel, Distrito Federal, el 4 de noviembre de 1894.[20]

Aunque cultivó la poesía en su juventud y escribió algunas obras de teatro, la mayor aportación literaria de Manuel Payno fue en el campo de la novela, cultivó la narrativa costumbrista, su obra más importante fue *Los bandidos de Río Frío*. Dicha novela fue escrita durante su segunda estancia en España, de 1888 a 1891, y publicada por primera vez en 1891 en Barcelona, por "entregas", es decir, en folletos. El tema central de la novela es la historia real del coronel Juan Yáñez y sus cómplices, y el sonado y largo proceso que se siguió contra ellos, en la novela el coronel Yáñez es representado por el personaje llamado "el Relumbrón", quien fue en un tiempo comandante militar de Acatlán, mayor de la plaza de Puebla y después ayudante del presidente de la república Antonio López de Santa Anna. El coronel Yáñez en la vida real fue condenado a muerte por sus crímenes, y su ejecución fue en julio de 1839, posiblemente dicha ejecución fue presenciada por Payno, quien entonces contaba veintinueve años de edad.[21]

Los bandidos de Río Frío fue calificada por su autor como una novela naturalista, sin embargo no siguió fielmente el modelo de Zolá; más bien tiene un tono realista y muy de acuerdo con los cánones morales de la época, sin que esto impida describir las lacras de una sociedad donde los pordioseros y menesterosos eran muy abundantes, y una minoría concentraba la mayor parte de la riqueza del país. Payno inicia su novela con una larga descripción del ambiente, del escenario y de los antecedentes de los personajes, combinando y agrupando alrededor de la trama principal a un conjunto de personajes que había conocido y una serie de acontecimientos de los cuales había tenido noticia o en los que había intervenido personalmente. A través de su narrativa, Payno recrea un rico y variado cuadro social e histórico de la sociedad mexicana y sus costumbres de

[20] Antonio Castro Leal. (1983). Prólogo. En Manuel Payno, *Los bandidos de Río Frío*, México, Editorial Porrúa, pp. IX-XII.

[21] Castro. (1983).

mediados del siglo XIX, en gran medida *Los bandidos de Río Frío* fue producto de la memoria y los recuerdos del autor, reforzados por lo que pudo leer en los periódicos de la época, de tal manera que su novela puede tener un valor documental a la vez que literario.[22]

Uno de los personajes poco estudiados de la novela de Payno es el prefecto del pueblo de Chalco, la representación que hizo el autor es la de un funcionario corrupto de poco nivel y autoridad, aunque a nivel local podía tener bastantes atribuciones como el mismo prefecto lo dijo en una de sus cartas a su pretendida amada Cecilia: "Guarda el mayor secreto, porque si dices algo y me desprecias te irá mal, pues ya conoces el poder que tienen en los pueblos los prefectos, que pueden hacer diablura y media, y con estar bien con el gobernador nada les hacen. Cuento contigo y con tu reserva."[23] Cecilia, quien realmente rechazaba al prefecto, le confesó a su amante, el licenciado Lamparilla, que no había aceptado las proposiciones amorosas del prefecto, a quien describió de la siguiente manera:

> –¿Qué otra cosa había de hacer? Luego, si hubiera usted conocido al prefecto, habría soltado una carcajada. La nariz torcida, arrugada, con una cicatriz muy fea en un cachete; calvo y pintado de negro el poco cabello que le quedaba; medio cojo y con voz ronca, que ríase usted de los becerros ¡Y luego amenazarme: no faltaba más! No me volvió a escribir, ni a ver, y a poco se fue a México de general, como ya dije a usted.[24]

En este pasaje Payno revela la poca autoridad y respeto que el prefecto tenía entre la población de Chalco, pues Cecilia se burla de él y no accede a sus pretensiones amorosas, incluso se burla del prefecto describiéndolo como un hombre feo, viejo y cojo. Pero también señala que los prefectos podían escalar en sus puestos y llegar a ser generales del ejército. Los prefectos y alcaldes de los pueblos recibían órdenes de los jefes militares para

[22] Castro. (1983).

[23] Payno. (1983), p. 237.

[24] Payno. (1983), p. 237.

que les dieran caballos, alimentos y dinero con el fin de continuar con sus actividades militares y la persecución de tropas enemigas o bandidos. Tanto unos como otros amenazaban a las autoridades y habitantes de los pueblos llevándose todo lo que había en él sin resistencia alguna de dichas autoridades y pobladores. Dice Payno al respecto:

> Llegaba Valentín Cruz con su chusma. Lo primero que hacía era llamar al alcalde o al prefecto, exigirle en el término de una hora raciones, bagajes, y dinero, bajo la pena de ser fusilado. El alcalde hacía lo que podía, ejerciendo a su vez la autoridad sobre los vecinos más pudientes […] Al día siguiente aparecía el cabo Franco y su tropa y a pocas horas Baninelli, con el grueso de la infantería y la caballería. Nueva requisición. El cabo Franco […] mandaba reunir al Ayuntamiento entero, al alcalde primero o al prefecto, y les decía en su lenguaje conciso:
>
> –Me voy a llevar a todos los presos por traidores al gobierno. Ayer o antier han estado aquí los pronunciados y el pueblo todo los ha acogido con entusiasmo, dándoles dinero, víveres y buenos caballos. Me la van a pagar. Si no me dan raciones para mi tropa y caballos de remuda […] los amarro codo con codo, los hago filiar en el regimiento y todos marchamos a batir al enemigo.
>
> El Ayuntamiento, el alcalde o prefecto protestaban que eran inocentes; que forzados bajo la pena de muerte por Valentín Cruz, le habían dado en dinero una friolera que no pasaba de cincuenta pesos […] unos cuantos caballos viejos […] y tres o cuatro mulas inservibles.[25]

Los alcaldes o prefectos a veces colaboraban con las fuerzas del gobierno, a veces con los bandidos, otras con el ejército invasor o contrario al gobierno constituido, dependiendo de las circunstancias, casi al final de la novela el presidente de la república le dijo al general Moctezuma III:

[25] Payno. (1983), p. 427.

–Acabamos con los bandidos de Tierra Caliente y tenemos que seguir con los de Tierra Fría […] Ahora te toca a ti, veremos si lo haces tan bien como el coronel Franco […]

Ameca está un poco revuelto, la gente honrada y pacífica de ese rumbo, muy alarmada y la falda del volcán está llena de salteadores y de gente perdida. El prefecto estuvo ayer aquí y me ha dado por escrito una relación exacta de lo que pasa, que leerás […] para que te sirva de gobierno en tus procedimientos.[26]

Como se observa en la novela, los prefectos tuvieron un papel muy secundario en las luchas militares y siempre estuvieron subordinados al gobierno de la república y a los generales de la plaza. Con estas tres representaciones literarias se tienen tres versiones de lo que podían ser los jefes políticos decimonónicos, en el caso de *Astucia* de Luis G. Inclán, el prefecto era una persona honesta y comprometida en acabar a los bandidos y colabora con Astucia quien es el héroe de la trama. Por su parte, Altamirano proporciona una imagen lamentable y pobre del prefecto, aunque honesto, pero no tiene recursos, armas, ni hombres para enfrentar a los bandidos. Por el contrario, Payno nos brinda la imagen del prefecto corrupto, autoritario y prepotente, es decir la imagen negativa de las autoridades políticas intermedias.

La representación historiadora. Los jefes políticos a través de la historiografía

México a través de los siglos

La obra monumental de *México a través de los siglos* fue hecha por encargo del presidente de la república Manuel González a Vicente Riva Palacio en 1881, que constituyó la versión oficial del liberalismo triunfante de la historia de México desde la época prehispánica hasta la república restaurada en 1867. Dicha obra fue dirigida por Riva Palacio y consta de cinco

[26] Payno. (1983), 702.

volúmenes, el primer volumen fue publicado en 1884 y el último en 1889, todos los autores o colaboradores encargados de cada volumen eran liberales puros o radicales, y eran bien conocidos en la sociedad mexicana de la época. Vicente Riva Palacio además de escritor de novelas, historiador y militar, fue hijo de un importante político de nombre Mariano Riva Palacio y de Dolores Guerrero, hija única del presidente Vicente Guerreo, de tal manera que Vicente Riva Palacio era nieto del héroe insurgente. Por su parte, Vicente Riva Palacio había sido diputado, y gobernador de los estados de México y Michoacán, como militar participó en muchas batallas del lado del ejército liberal y republicano, llegando combatir contra la invasión norteamericana, en la Guerra de Reforma y contra la intervención francesa y el segundo imperio, por lo cual obtuvo el grado de general. Finalmente apoyó al general Porfirio Díaz en la rebelión de Tuxtepec, y por ello fue nombrado en el gobierno de Díaz como ministro de Fomento.[27]

Los tomos IV y V de esta obra abarcan gran parte el siglo XIX, desde la consumación de la independencia a la república restaurada. El tomo IV fue encargado a Juan de Dios Arias quien nació en Puebla en 1828, fue escritor y periodista satírico liberal, diputado constituyente en 1857 y oficial mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores en 1860, también redactor del *Diario Oficial* y posteriormente secretario de la legación de México en Washington, participó en el ejército y obtuvo el grado de coronel durante la intervención francesa, en el sitio de Querétaro fue secretario del general Escobedo. Arias fue autor de los primeros 15 capítulos del tomo IV, pero murió en 1886, por lo que entró en su sustitución Enrique de Olavarría y Ferrari, un español nacido en Madrid (1844-1919) quien completó y terminó dicho tomo. Juan de Dios Arias y Enrique de Olavarría y Ferrari abarcaron el periodo de 1821 a 1857, principalmente

[27] Vicente Riva Palacio (dir). (1884-1889). *México a través de los siglos: historia general y completa*. México: Ballescá y Cía. editores, Barcelona: Espasa y Cía. Editores, 5 vols. José Ortiz Monasterio. (2004). *México Eternamente. Vicente Riva Palacio ante la escritura de la historia*. México: Fondo de Cultura Económica.

es una obra que narra los acontecimientos políticos y militares, una historia de episodios, acontecimientos, aventuras y peripecias. La trama está siempre en movimiento como si fuera una novela de folletín, es una historia esencialmente cronológica.[28]

La historia está centrada sobre los grandes personajes políticos y militares, y a los prefectos políticos los trata de manera marginal y muy secundaria, casi siempre eran auxiliares de estos grandes personajes. Los prefectos aparecieron brevemente en este tomo presidiendo actos solemnes y festejos civiles. La mayoría de las veces los jefes políticos eran personajes anónimos, pero en algunas ocasiones se mencionaban sus nombres, como Santiago Abreu de Nuevo México, quien murió en un levantamiento armado. Otro prefecto aludido por su nombre de pila fue José María Icaza, prefecto del Centro.[29]

En ocasiones el gobernador de un departamento, en la república centralista, Luis Gonzaga Vieyra, le quitó al ayuntamiento la presidencia de teatros y se la asignó al prefecto, con la protesta de la corporación municipal. En respuesta a dicha protesta del ayuntamiento el Ministro de Relaciones y Gobernación, Bocanegra, resolvió que los regidores continuaran administrando los espectáculos, pero solo en caso en que se hallara en el salón el gobernador o el prefecto, entonces se debía dejar que estos funcionarios ejercieran el control de los eventos. Otro prefecto que tenía nombre y apellido fue Jesús Cárdenas, de Ciudad Victoria, quien fungió como prefecto durante la invasión norteamericana.[30] En ocasiones el jefe político de un lugar, ayudado por los vecinos, formaba un pequeño grupo de hombres armados, para resistir los ataques del ejército invasor guatemalteco en la frontera sur. Los prefectos eran militares como Rafael Solís, quien estaba bajo las órdenes del general Juan Álvarez, lo mismo que el coronel Rafael Espinosa, nombrado prefecto y comandante militar

[28] Ortiz. (2004), pp. 251-266.

[29] Arias, Juan de Dios y Olavarría, Enrique de. (1884-1889). *México a través de los siglos*. Barcelona: Espasa y Compañía Editores, t. IV, pp. 270 y 403.

[30] Arias y Olavarría. (1884-1889), t. IV. pp. 498 y 560.

de Acapulco por Antonio López de Santa Anna, a la vez que las guerrillas de Huerta, Pueblita y otros caudillos ponían en aprietos a los jefes del gobierno, que alguno de ellos, el prefecto de Zamora, en una comunicación oficial dijo que "la revolución avanzaba como nunca; que contaba con fuerzas considerables.[31]

El tomo v de *México a través de los siglos* está dedicado a La Reforma y a la Intervención francesa, y fue escrito por José María Vigil. El autor de este tomo nació en Guadalajara el 11 de octubre de 1829 y murió el 18 de febrero de 1909 en la ciudad de México. Fue abogado y periodista, partidario del liberalismo, profesor de latín y filosofía en el Liceo del estado de Jalisco y en 1861 fue oficial mayor de la secretaría del Congreso. Vigil fue diputado federal en cinco ocasiones, en 1875 se desempeñó como magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, posteriormente fue director del Archivo General de la Nación, y luego director de la Biblioteca Nacional de México, entre otros cargos.[32]

Vigil tuvo problemas para narrar los acontecimientos que habían ocurrido apenas quince años antes de la redacción del tomo, por lo que, al ser juez y parte, le fue muy difícil ser totalmente imparcial. Sin lugar a dudas es la versión del liberalismo triunfante a cerca de las gestas heroicas de su tiempo. Lo mismo que otros autores de la obra, Vigil sigue una narración lineal y cronológica, incluye muchos documentos, cortando el relato con frecuencia para incluir documentos completos. En cierta media es una historia hecha con "engrudo y tijeras". Vigil se centró principalmente en explicar el conflicto entre Iglesia y Estado durante la época colonial y la primera mitad del siglo xix.[33]

El tratamiento que dio Vigil a los prefectos fue igual de marginal que el del tomo anterior, eran actores secundarios que estaban casi al margen de la historia principal, la historia política y militar de los grandes hombres, héroes, villanos, y los acontecimientos principalmente de batallas.

[31] Arias y Olavarría. (1884-1889), t. iv. pp. 804, 829, 831, 856.

[32] Ortiz. (2004), pp. 271-273.

[33] Ortiz. (2004), pp. 271-281.

Así Vigil menciona que el general santanista Miguel Blanco tomó como prisionero al jefe político de Culiacán, Eustaquio Buelna. En otra parte asegura que el prefecto de Tepic publicó una orden de Degollado en que se prohibía a Eustaquio Barron, cónsul de Inglaterra, y a Guillermo Forbes, cónsul de los Estados Unidos, regresar al territorio de Jalisco, mientras que el presidente de la república resolvía lo conveniente acerca del destierro, a quienes se consideraban como "perniciosos" al país y a la tranquilidad pública, de lo contrario serían juzgados como conspiradores, y castigados conforme a las leyes.[34] En otra parte afirma que un subprefecto frustró un motín en Acatlán, Puebla, o que doscientos pronunciados se llevaron al prefecto de Texcoco.[35] También dijo que en el estado de Oaxaca un grupo de poco más de veinte hombres al mando de Manuel Dolores Rodríguez asaltó el pueblo de Nochistlán, sorprendiendo al subprefecto a quien hirieron, abriendo la puerta de la cárcel para aumentar sus filas de criminales, y cometiendo enseguida varios robos escandalosos. También que el jefe político de Chilapa manifestó al coronel Vicente Jiménez, que era inútil su presencia, pues el ayuntamiento se había disuelto.[36] Además que las fuerzas de Morelia, al mando de Iturbe y Ahumada, ocuparon el 17 de abril la población de Maravatío, de donde tuvo que retirarse el prefecto y comandante militar don Manuel Urquiza. Los jefes políticos estaban en la periferia de la historia política y militar, y estaban más relacionados con el submundo de la violencia y la criminalidad, por ejemplo Vigil narra que en Irapuato entraban y salían pequeñas gavillas que asesinaban y saqueaban, y que en Salamanca ocho bandidos sacaron de su casa al subprefecto y lo asesinaron.[37]

[34] José María Vigil. (1884-1889). *México a través de los siglos. t. V. La Reforma*, pp. 84, 97.

[35] Vigil, (1884-1889), pp. 174, 193.

[36] Vigil. (1884-1889), pp. 231, 232, 239.

[37] Vigil. (1884-1889), pp. 303, 369 y 402.

Apuntes biográficos de jefes políticos

Lázaro Pavia en 1891 escribió una obra apologética titulada *Ligeros apuntes de los Jefes políticos de los estados de la República Mexicana*, donde recogió pequeñas biografías en dos tomos, en total reunió 114 biografías de jefes políticos y prefectos de varios de los estados y regiones del país.[38] Pavia fue originario de Sabán, Yucatán, nació en 1844. Sus primeros estudios los hizo en Mérida, en esta ciudad realizó distintos trabajos y oficios, se dedicó al periodismo, y entró a la política y al ejército, en donde obtuvo el grado de teniente coronel. Muy joven impartió clases de geografía, fue diputado y se tituló de abogado a los 45 años de edad. Luchó contra el imperio de Maximiliano, fue escritor y biógrafo de personajes y actores políticos del siglo XIX. Colaboró en varios periódicos y publicó 25 obras en 37 tomos, dejando alrededor de 15 obras inéditas.[39]

Dijo el autor que con su libro sobre los jefes políticos trataba de contribuir a que se conocieran, tanto en el país como en el extranjero, "a los funcionarios que de una manera más o menos directa, en mayor o menor escala, dirigen los destinos de este país", a partir de pequeñas biografías de todas las personas que encabezan los gobiernos municipales en varias regiones de México. Aseguró Pavia que los jefes políticos por la misma naturaleza de su cargo, representaban un papel muy importante en la escena política, y por tanto participaban de la gloria que les correspondía como fieles colaboradores de las grandes personalidades del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Para Pavia los jefes políticos habían salvado a "nuestras democráticas instituciones del proceloso mar de nuestras revueltas intestinas". El autor se refiere a los jefes políticos "como las ruedas motrices en el complicado sistema de la máquina administrativa" que debían trabajar al unísono obedeciendo las órdenes del gobierno federal y de los gobernadores de los estados. Sostiene Pavia que, debido a la naturaleza de las funciones que realizaban los jefes políticos, éstos se hallaban en contacto más estrecho con los pueblos que gobernaban, "co-

[38] Pavia. (1891).

[39] *Enciclopedia de la Literatura en México.* http://www.elem.mx/autor/datos/833

nocen mejor sus necesidades, y ese continuo y constante trato con ellos despierta sentimientos de cariño y afecto que los impulsa a procurar su prosperidad, a velar por sus intereses, tal como pudiera hacerlo un bondadoso padre de familia". Pavia reconocía que sus biografías se limitaban a dar a conocer los servicios prestados por los jefes políticos a los pueblos, la vida de estos individuos y todo aquello que redundaba en la honra y prosperidad de las municipalidades. Para el autor los jefes políticos habían sabido cumplir fielmente con los deberes encomendados por sus superiores, los gobernadores de cada estado de la república. Por tanto, el mismo autor reconoce que su obra era una apología de los jefes políticos del régimen porfirista.[40]

La sucesión presidencial

Diecisiete años después de la publicación de la obra de Pavia, Francisco I. Madero en su famoso libro *La sucesión presidencial en 1910*, publicado en 1908, dedicó poca atención a los jefes políticos, más bien se centró en la figura de Porfirio Díaz y su próxima reelección.[41] Madero, como es sabido, perteneció a una de las familias de hacendados más ricas de Cohahuila, fue opositor al régimen de Díaz, encabezó la revolución que derrocó dicho régimen y fue asesinado por el golpe de estado que encabezó Victoriano Huerta en febrero de 1913. Madero en su libro sobre la sucesión presidencial dijo muy poco sobre los jefes políticos, solo hay una mención en el caso de la rebelión del pueblo de Tomóchic, Madero comentó que la nación no había sabido realmente cuál fue la causa de esa guerra, pero según dice, dicho pueblo no quería pagar impuestos, y que el gobierno federal no hizo casi nada por arreglar el problema de forma pacífica, debido a "la ineptitud, orgullo o ambición de sus delegados", y el resultado fue el envío de fuerzas federales que destruyeron por completo el pueblo. El general Díaz pidió informes al gobernador, y éste a su vez al

[40] Pavia. (1891), t. I, pp. 5-8.

[41] Francisco I. Madero. (2012). *La sucesión presidencial en 1910*. Guadalajara: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

jefe político, Madero afirmó que el jefe político del lugar fue la verdadera causa del conflicto, quién informó a su conveniencia al gobernador del estado, y de esta manera el informe llegó hasta el presidente Díaz. Aseguró Madero que, a partir de los informes del jefe político, el presidente Díaz "juzgó necesario mandar destruir a aquellos humildes labradores y pacíficos ciudadanos, representados ante su vista como terribles perturbadores de la paz pública, y para hacer respetar el principio de autoridad, ordenó el envío de fuerzas á Tomóchic". Madero criticó que el general Porfirio Díaz se hubiera basado en el criterio de un jefe político, pues un presidente de la república no podía tener el mismo criterio que uno de sus más bajos subordinados. De aquí se puede concluir que la opinión que tenía Madero de los jefes políticos no era muy favorable, pues tenía la imagen de los jefes políticos como crueles represores del pueblo, censores de la prensa, aseveró que el general Díaz perseguía a los periodistas a través de los jefes políticos quienes debían autorizar los artículos que se publicaban.[42] Dijo que los gobernadores seguían la misma política que el general Díaz, que nombraban a los jefes políticos y presidentes municipales de sus respectivos estados, para perpetuarse en el poder, constituyendo verdaderos cacicazgos, y de esta manera centralizar y concentrar el poder en manos del general Porfirio Díaz.[43]

Los grandes problemas de México

Andrés Molina Enríquez nació en Jilotepec, estado de México, el 30 de noviembre de 1868, fue hijo de Anastasio Molina y Francisca Enríquez. Anastasio Molina era abogado y notario de su pueblo natal. Andrés Molina siguió la profesión de su padre, además ejerció el periodismo y fue juez en su pueblo. Debido a una enfermedad de su padre se tuvo que hacer cargo de la notaría que éste manejaba en Jilotepec, de tal manera que Andrés tuvo la oportunidad de conocer de cerca el proceso de concentración de tierras en las manos de unos cuantos hacendados. Molina

[42] Madero. (2012), pp. 186 y 201.

[43] Madero. (2012), p. 144.

Enríquez en su libro sobre los grandes problemas nacionales, publicado en 1909,[44] sostuvo que el régimen de Porfirio Díaz se basaba principalmente en la persona de Porfirio Díaz quien era el centro del sistema, en el cual convergían todas las relaciones y vínculos a partir de los lazos de amistad. El autor dijo lo siguiente:

> En efecto, todos los ministros y todos los gobernadores han estado siempre ligados directamente al señor general Díaz por amistad; los jefes o prefectos políticos a los gobernadores por amistad; los presidentes municipales a los jefes o prefectos políticos, por amistad; los vecinos a los presidentes municipales, por amistad; y en torno de estos funcionarios, las demás personalidades políticas han estado siempre unidos por la amistad. El título que desde el advenimiento del señor general Díaz al poder hasta ahora, se ha invocado como el primero y primordial, es el de amigo. El haber encontrado en la amistad un poderosísimo lazo de cohesión, ha sido, a nuestro entender, verdaderamente genial.[45]

Con esto Molina Enríquez trató de explicar que las redes de amistad cohesionaban el sistema político porfirista cuyo centro era el presidente Díaz, los vínculos se extendían por todo el país y llegaban a los rincones más pequeños y apartados de México, siendo Díaz, quien de manera personal tejía dichos vínculos, haciendo un centralismo muy fuerte, lo cual es difícil de sostener totalmente.

La Constitución y la Dictadura

Emilio Rabasa fue integrante del grupo de los científicos durante el Porfiriato, en su libro titulado *La Constitución y la Dictadura*,[46] publicado en 1912, también abordó de manera muy superficial el tema de los jefes po-

[44] Andrés Molina Enríquez. (1985). *Los grandes problemas nacionales (1909)*. México: Ediciones ERA.

[45] Molina. (1985), p. 137.

[46] Emilio Rabasa. (2002). *La Constitución y la Dictadura*. México: Editorial Porrúa.

líticos, cuando analizó la relación de los estados con el gobierno federal. Para Rabasa los estados formaban parte de la unión federal y tenían gran importancia en el sistema adoptado por la Constitución de 1857. Rabasa dijo que los estados en su esfera interna centralizaban todas las funciones y abarcaban toda la administración de los asuntos locales. Agregó que por debajo del gobierno estatal estaban los jefes políticos que, "como simples agentes suyos", no hacían sino cumplir las órdenes del gobernador del estado y servir para que la autoridad que representan tenga los medios inmediatos de acción y centralización.[47] Rabasa sostuvo que más abajo estaban los ayuntamientos que administraban los territorios municipales, pero que legalmente los ayuntamientos tenían facultades determinadas y libertad de acción restringida para ciertos actos, ya que estaban obligados a obtener la aprobación del gobierno estatal para su validez. Dijo Rabasa que aquí era donde los jefes políticos participaban en la vigilancia de los asuntos municipales. Para Rabasa las jefaturas políticas podrían suprimirse, pues aseguraba que estaban "cargadas de los vicios que adquirió cuando su acción eficaz era necesaria contra un estado de perpetua rebelión". Al mismo tiempo abogaba por darle al municipio completa libertad en lo que se relacionaba con su administración interna para asegurar su acción independiente y evitar que el gobierno del estado se excediera en sus ambiciones centralizadoras.[48]

México bárbaro

Una representación totalmente opuesta a la de Lázaro Pavia, pero veinte años después, fue la de John Kenneth Turner en su obra *México bárbaro*, publicada en 1911.[49] Turner nació en Oregón, Estados Unidos, en 1876, fue escritor y periodista. Estudió en la Universidad de California, conoció a Ricardo Flores Magón y a otros miembros del Partido Liberal Mexicano que estaban presos en Estados Unidos entre 1908 y 1909. Con una

[47] Rabasa. (2002), pp. 228-229.

[48] Rabasa. (2002), pp. 228-229.

[49] Turner. (1978).

ideología cercana al anarquismo de los Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano, Turner visitó México para corroborar los dichos de los Flores Magón sobre la situación en el país durante el porfiriato. Turner estuvo principalmente en el sureste mexicano, sobre todo en Oaxaca y en la península de Yucatán, ahí observó cómo funcionaban las haciendas en Valle Nacional y las haciendas henequeneras, por lo que describió el trabajo "esclavo" de los peones de las haciendas. El cuadro que presentó era el de un país hundido en el atraso, la esclavitud y la servidumbre o el peonaje por deudas, una visión que fue muy reproducida después de la revolución de 1910-1920, pero poco corroborada con investigaciones de primera mano. La definición que Turner dio sobre el jefe político fue la siguiente:

> El jefe político es un funcionario público que rige un distrito político, correspondiente a lo que se llama "condado" en los Estados Unidos. Es designado por el presidente o por el gobernador del Estado y también funge como presidente municipal de la ciudad principal de su distrito. A su vez, él suele nombrar a los alcaldes de los pueblos de menor categoría que están bajo su autoridad, así como a los funcionarios de importancia. No tiene a quien rendirle cuentas, excepto su gobernador, y a menos que el presidente de la república resuelva intervenir, resulta por todos los conceptos un pequeño zar de sus dominios.[50]

Según Turner el jefe político en vez de enviar a los pequeños delincuentes a cumplir sus sentencias en la cárcel, los vendía como esclavos en Valle Nacional, enriqueciéndose de esta manera, por lo que arrestaba a todas las personas que podía, y termina diciendo que así actuaban todos los jefes políticos en las principales ciudades del sur de México. Turner sostiene que el jefe político estaba en contubernio con los enganchadores, quienes le traían trabajadores de otras regiones del país, e incluso le pagaban a otros gobernadores para que enviaran prisioneros como fuerza

[50] Turner. (1978), p. 63.

de trabajo al sureste.[51] Al régimen porfirista, Turner lo describe de una forma muy sencilla:

> El régimen de Díaz es muy fácil de entender, una vez que se ha explicado. El Presidente, el gobernador y el jefe político son tres clases de funcionarios que representan todo el poder en el país; en México no hay más que un solo poder gubernamental: el Ejecutivo.[52]

La exageración de Turner lo lleva a decir que entre los asesinos oficiales de México, el jefe político era el más notable. Estaba al mando de la policía local y de los rurales; dirigía la acordada y con frecuencia libraba órdenes a las tropas regulares, quienes las obedecían con puntualidad. Además, señalaba que la prensa estaba controlada por el gobierno y no decía nada sobre estos crímenes, o decía muy poco.[53] Realmente la visión de Turner sobre los jefes políticos y sobre el México rural en general era catastrófica y exagerada.

Los "verdaderos" jefes políticos

Francisco Bulnes nació el 4 de octubre de 1847 en la Ciudad de México, y murió en la misma ciudad el 22 de septiembre de 1924. Fue ingeniero e impartió clases en la Escuela Nacional de Ingeniería, en el Colegio de Minas y en la Escuela Nacional Preparatoria, principalmente de meteorología y economía política. Formó parte del grupo de los científicos durante el porfiriato, dirigió el periódico *El Siglo Diez y Nueve* en 1891, y colaboró en *El Imparcial* y en *El Universal*, además participó en el gobierno usurpador de Victoriano Huerta. A la caída de éste se fue al exilio a Cuba y estuvo en Nueva Orleans un breve tiempo. Escribió varios libros, pero en el que se refiere a los jefes políticos es el titulado *El verdadero Díaz y la Revolución*, publicado en México en 1920 por la editorial His-

[51] Turner. (1978), p. 63.

[52] Turner. (1978), p. 123.

[53] Turner. (1978), p. 135.

pano-Mexicana.[54] En esta obra el autor tiene una concepción muy negativa de los jefes, que coincide con la representación de la "leyenda negra", en primer lugar su concepción del sistema político del porfiriato era muy exagerada, pues dice que la Constitución de 1857 "impuso la esclavitud a la gran mayoría del pueblo soberano", y que dichos esclavos "no querían por ningún motivo provocar el disgusto o la cólera del jefe político" cuando éste les comunicaba alguna consigna política. Dijo textualmente lo siguiente:

> Debe admitirse que ese jefe político tan poderoso, que se encuentra sobre todas las leyes, sobre todos los tribunales, sobre todos los tratados con las naciones extranjeras, sobre todas las potencias sociales y políticas, haga uso de su poder para otras cosas peores que obligar a los electores a que obedezcan las órdenes reeleccionistas a las que convienen al peculiar despotismo del jefe político.[55]

Esta idea de la superpotencia que tenía el jefe político para violar todas las leyes y derechos se parece a lo expresado por John Kennet Turner, y varios de los documentos de los revolucionarios. Es interesante como las visiones de anarquistas y socialistas se parecen a los exporfiristas de derecha como Bulnes. Muy contraria a la opinión que Lázaro Pavia había plasmado en su libro treinta años antes. Esta concepción contraria a las autoridades políticas fue retomada en los planes y programas de los líderes e intelectuales revolucionarios hasta quedar plasmada en la legislación posrevolucionaria. Lo que después se constituyó como la "leyenda negra" de los jefes políticos.

[54] Francisco Bulnes. (1992). *El verdadero Díaz y la Revolución*. México: Grijalbo.

[55] Bulnes. (1992), p. 55.

Jefes políticos en los planes revolucionarios y la Constitución de 1917

Las imágenes positivas o negativas de los jefes políticos no fueron realmente una creación de los discursos de los grupos y gobiernos revolucionarios o posrevolucionarios, estas imágenes o representaciones de las autoridades políticas intermedias ya existían desde la época porfiriana, principalmente a través de la prensa escrita, como se verá más adelante, también fueron reproducidas en las novelas costumbristas decimonónicas por los mejores escritores de la época como se analizó más arriba. En la historiografía del siglo XIX, dominada por la historia patria o la historia de héroes y villanos, los jefes políticos no alcanzaron la importancia ni de unos ni de otros, fueron, si acaso, pequeños villanos marginales de la historia política nacional del siglo XIX. Pero con el movimiento revolucionario de 1910-1920, la figura del jefe político tomó un carácter protagónico dándole el papel de villano principal de una región o comarca, de los personajes políticos que no deberían ser parte de la historia, fortaleciéndose la imagen negativa o la "leyenda negra". A partir de la revolución predominó la narrativa de que todo lo que tenía que ver con el régimen porfirista era malo, atrasado, opresivo, criminal, pre-moderno e inadecuado para los nuevos tiempos posrevolucionarios.

Así los planes y programas revolucionarios los pusieron en la mira como si fuera el enemigo público número uno. Para empezar, el plan y el programa del Partido Liberal Mexicano el 1° de julio de 1906 proponía "la supresión de los jefes políticos que tan funestos han sido para la República como útiles al sistema de opresión reinante, es una medida democrática, como lo es también la multiplicación de los municipios y su robustecimiento".[56] Luego del triunfo de la revolución que llevó a la presidencia a Madero, el plan orozquista conocido como el Pacto de la Empacadora, del 25 de marzo de 1912, en sus artículos 28 y 29 propuso la independencia de los ayuntamientos para legislar y administrar sus

[56] Jesús Silva Herzog, (1972). *Breve historia de la Revolución Mexicana*. México: Fondo de Cultura Económica, 1972, t. I, pp. 111 y 118.

fondos, suprimiendo en toda la república a los jefes políticos.[57] Posteriormente el programa de reformas de la Convención de Aguascalientes, del 18 de abril de 1916, estableció lo siguiente en dos de sus artículos:

> Art. 32. Realizar la independencia de los municipios, procurando a éstos una amplia libertad de acción que les permita atender eficazmente a los intereses comunales y los preserve de los ataques y sujeciones de los gobiernos federal y locales.
>
> Art. 34. Suprimir la Vicepresidencia de la República y las Jefaturas Políticas.[58]

Entre las reformas implementadas por el ejército constitucionalista durante la revolución, el gobierno de Venustiano Carranza, el 26 de diciembre de 1914, reformó el artículo 109 de la Constitución y proclamó el municipio libre y la supresión de las jefaturas políticas. Unos meses antes, el 14 de julio de ese año, el general Manuel M. Diéguez ya había emitido un decreto en el cual se derogaban todas las leyes y reglamentos relativos a las jefaturas y directorías políticas en el estado de Jalisco, con el objetivo de dar plena libertad y autonomía a los gobiernos municipales. Con estas reformas a la ley se suprimían definitivamente dos divisiones político-administrativas: los cantones y los departamentos; y desaparecían dos personajes que fueron muy importantes para el control político de los pueblos y de pequeñas regiones en todo el país: los jefes y directores políticos.[59] Finalmente, en la Constitución general de 1917, en su artículo 115 se estableció que los estados adoptarían para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, administrado por un ayuntamiento de elección

[57] Silva. (1972), t. I, p. 305.

[58] Silva. (1972), t. II, p. 295.

[59] Valerio. (2000), pp. 124-146.

popular directa, sin que exista ninguna autoridad intermedia entre éste y el gobierno del estado.[60]

La historiografía posterior a la revolución mexicana de 1910-1920 estuvo dominada por un enfoque pragmático en términos políticos y por un empirismo tradicional, su objetivo fue narrar los acontecimientos del pasado inmediato o todavía presentes de la revolución, de los cuales fueron testigos directos. El nivel de estos escritos no rebasaba la crónica o el relato anecdótico y se publicaron como memorias, compilación de documentos, artículos periodísticos, crónicas de hechos políticos y militares. Por otro lado, los que chocaban con ese presente caótico, anárquico, militarista y revoltoso, se refugiaron en la rememoración del pasado lejano, y su periodo de tiempo preferido fue la época colonial. Ambos se amparaban en acervos documentales que tenían en sus archivos personales o en los recuerdos de su memoria. Recurrían al Archivo General de la Nación o a las parroquias y bibliotecas, pero los dos basaban sus juicios y sus narraciones en la autoridad de sus fuentes documentales o en su experiencia personal. De esta manera, las preocupaciones historiográficas se fueron centrando en el periodo revolucionario de 1910-1920 o en la época colonial, y, por tanto, el siglo XIX, con el porfiriato incluido, fue perdiendo el interés de los historiadores. Durante el siglo XX, y por varias décadas, el periodo histórico correspondiente al régimen porfirista solo ocupaba unos cuántos párrafos o unas cuantas páginas en los libros de historia patria. Llegó a ser calificado dentro de la "leyenda negra" como un periodo de atraso, oscurantismo, tiranía, dictadura y de traición al glorioso proyecto liberal de mediados del siglo XIX. Cuando bien le iba era un capítulo de antecedentes de la revolución mexicana, un periodo histórico visitado y revisitado para buscar las causas y las razones del estallido revolucionario. [61]

[60] Tena. (1999), p. 867.

[61] Álvaro Matute Aguirre. (1999). *Pensamiento historiográfico mexicano del siglo XX. La desintegración del positivismo (1911-1935)*. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 13-49.

La revolución triunfante, junto con sus gobernantes, líderes e intelectuales construyó una narrativa que predominó la mayor parte del siglo xx, donde se mostraba a la revolución como una transformación profunda y justiciera, y al mismo tiempo creó la narrativa de que el régimen porfirista había sido un régimen dictatorial basado en una sociedad atrasada injusta socialmente, con haciendas improductivas y autárquicas, hacendados rentistas y medievales, peones esclavizados y endeudados, una industria incipiente y atrasada, gobernadores corruptos y sumisos al dictador Porfirio Díaz que había centralizado todo el poder, y del cual los jefes políticos eran un pequeño reflejo, igual de dictadores, autoritarios y crueles. Esta imagen se repitió hasta el cansancio, más por cuestiones ideológicas que académicas y los jefes políticos fueron un elemento consustancial a dicha narrativa.

Nuevas representaciones historiográficas de los jefes políticos

Entre los primeros trabajos que cuestionaron y criticaron la "leyenda negra" sobre los jefes políticos, que se basaron en una investigación académica y no solo en un discurso ideológico, se cuenta con un artículo de Lloyd J. Mecham titulado "El jefe político en México", publicado originalmente en 1933, pero que fue muy poco conocido entre los historiadores y lectores mexicanos en esa época. No fue sino hasta 1986 que dicho ensayo fue publicado en español y pudo ser leído por los historiadores interesados en el tema.[62] Mecham era un investigador norteamericano que por su misma nacionalidad, distancia temporal y espacial, tenía que ver las cosas de otra manera que los mexicanos que habían participado en la revolución o habían sido contemporáneos a ella. De tal manera que Mecham se alejó de la "leyenda negra" de los jefes políticos y los analizó como una institución política y de gobierno de México, no solo del porfiriato, sino de todo el

[62] J. Lloyd Mecham. (1933). The jefe político in México. *The Southwestern Social Science Quarterly*. University of Texas Press, vol. xiii, no. 4. J. Lloyd Mecham. (1986). El jefe político en México. *Secuencia*, no. 4, pp. 143-156.

siglo xix, con orígenes en la Constitución de Cádiz de 1812, y con antecedentes en los intendentes y subdelegados de las intendencias coloniales.

Para Macham el régimen porfirista era un régimen dictatorial, unipersonal, "altamente perfeccionado", coincidía con otros intelectuales de su momento y contemporáneos, que el Estado mexicano republicano, representativo, democrático y federal en teoría, era solo una ficción, pues en realidad había un solo poder gubernamental, que era el ejecutivo, y que los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, existían solo de nombre. Mecham sostenía que toda la autoridad se concentraba en tres funcionarios; "en los gobiernos federal, estatal y local", es decir, en el presidente de la república, los gobernadores de los estados, cuya elección estaba controlada por el presidente, y los jefes políticos, que eran agentes locales del ejecutivo federal y estatal. Los cuales, junto con otras instituciones como el ejército, los rurales, la acordada y la policía rural, constituían un sistema político centralizado y dictatorial. Mecham comparaba a los intendentes coloniales con los jefes políticos decimonónicos, en lo cual no le faltaba razón. Lo más importante que dijo Macham en su momento fue que las jefaturas políticas del siglo xix mexicano no habían sido objeto de un análisis especial, por lo que el objetivo de su ensayo era "dar cuenta de los orígenes y el desarrollo de este cargo, exponiendo brevemente su posición en el sistema porfiriano".[63]

Lo primero que hay que destacar del artículo de Mecham es que aclara que las jefaturas o prefecturas políticas no fueron una invención porfirista, sino que sus orígenes se remontan a las Cortes de Cádiz de 1812-1813, las cuales crearon la figura del jefe político superior para el gobierno de las provincias, el que debía ser nombrado por el rey. En este sentido, sostiene Mecham que el sistema era "centralista", porque el jefe político era nombrado directamente por el rey, considerando que el rey era el centro de la monarquía española, y por tanto de todos los territorios situados en Europa, América y Asia, y no había autoridades intermedias entre éste y los jefes superiores de provincia. La legislación establecía que

[63] Mecham. (1933 y 1986).

el jefe político gobernaría la provincia y sería el presidente de la diputación provincial, y que presidiría el ayuntamiento de la cabecera provincial, pero sin derecho a voto, entre muchas otras funciones que desempeñaba el jefe político en su provincia. Mecham también dijo que este jefe superior político fue copiado del modelo napoleónico de prefectos, pero que también tenía influencias del antiguo corregidor.[64]

Mecham también sostuvo que el jefe superior de provincia gaditano se parecía más a los gobernadores de los estados de la república federal decimonónica, que a los jefes políticos de los cantones o departamentos, los que para la historiografía son más conocidos como prefectos, jefes políticos o jefes de policía. Mecham tomó como caso de estudio al estado de Puebla para explicar las características legales y las funciones que desempeñaba el jefe político, pero principalmente se ocupó de analizar las leyes y códigos relacionados con la jefatura política y los cambios en ella. Hizo mención a la historiografía previa y en especial a la obra de Lázaro Pavia. Sin embargo, Mecham muestra más coincidencias con la versión negativa de los jefes políticos, aunque la opinión de John Kennet Turner le parece exagerada, no obstante afirma que los jefes políticos controlaban los ayuntamientos, los cuales "fueron reducidos a la categoría de simples cuerpos consultivos", también administraba las tierras baldías y los ejidos, y agrega que muchos de los jefes políticos "eran crueles y parciales" al confiscar los ejidos de los pueblos, ignoraban a los indios y a los pequeños propietarios y protegían a los hacendados, pues "gobierno y hacendados eran uno y los pobres aldeanos no tenían ninguna oportunidad, la rapacidad de los jefes políticos llegó a ser notoria", a veces eran peor para los pueblos que los bandidos. Mecham concluye que el mayor servicio que los jefes políticos podían hacer al dictador era el mantenimiento del orden y la supresión de los movimientos y manifestaciones subversivas, y era el encargado de llevar hombres al ejército mediante la leva.[65] El texto de Mecham sobre los jefes políticos como ya se dijo se publicó en inglés

[64] Mecham. (1933 y 1986).

[65] Mecham. (1933 y 1986).

en 1933, pero fue muy poco conocido en México. Los historiadores del movimiento revolucionario se interesaron muy poco por estos personajes, después de la lapidaria definición de la "leyenda negra" como autoridades crueles y despiadadas ya no había más que decir. En la obra dirigida por Daniel Cosío Villegas, *Historia moderna de México*,[66] al igual que en la obra dirigida por Vicente Riva Palacio, *México a través de los siglos*,[67] los jefes políticos porfirianos fueron personajes marginales, como el eslabón más pequeño del poder del Estado nación, que ni siquiera era considerado como parte del andamiaje o de la maquinaria de dicho Estado a nivel local.

Al inicio de los años 70 del siglo xx todavía prevalecía en su totalidad la "leyenda negra" sobre los jefes políticos quienes contribuyeron a asfixiar la vida de los pueblos y hasta se les llegó a denominar como una "dictadura enana", según Moisés Ochoa Campos, los jefes políticos eran fieles ejecutores de las órdenes de los gobernadores de los estados e instrumentos de la dictadura a nivel local. Constituían un pequeño engrane en la maquinaria del gobierno dictatorial, en donde se desempeñaban como agentes sumisos, pero dentro de sus cantones, departamentos o distritos se comportaban como amos absolutos. Para Ochoa los jefes políticos eran un instrumento para centralizar el país, se comportaban como vicegobernadores en sus distritos, a pesar de que había ciertas variantes, Ochoa consideraba que todos los jefes políticos constituían un sistema centralizado, aliado al caciquismo local, prepotente, abusivo y que ahogó la vida democrática en todo el país. Por tales razones, Ochoa consideraba que las jefaturas políticas constituían un sistema compuesto por 295 jefes políticos que controlaban la vida política nacional a la manera de un

[66] Daniel Cosío Villegas (dir.). (1970). *Historia moderna de México. El Porfiriato, vida política interior*. México: Hermes.

[67] Riva. (1884-1889).

caciquismo oficial, creado por Díaz para controlar la nación, por lo que Ochoa denominó a la jefatura política "la dictadura enana".[68]

Según Eduardo Mijangos, el valor de la obra de Ochoa Campos radica, por una parte en dar mayor certidumbre al sistema prefectoral como un sistema a nivel nacional, y por otra, en establecer claramente sus orígenes institucionales, lo cual constituye una concepción diferente a las que le precedieron. Sin embargo, Ochoa Campos sigue sosteniendo que dicho sistema era un instrumento represor del régimen porfirista, coincidiendo en lo fundamental con la tesis de Turner, y justificando al mismo tiempo la imagen redentora, justiciera y reformista de la Revolución mexicana.[69]

El revisionismo de la revolución mexicana

A partir de finales de la década de 1960 la concepción de la revolución mexicana como un movimiento uniforme a nivel nacional, popular, justiciero, democráticos, nacionalista, agrarista y obrero se puso a discusión, varios historiadores e intelectuales se preguntaron a cerca del carácter y sentido de la revolución, si ésta había sido nacionalista, burguesa, campesina, socialista, comunista, antiimperialista o simplemente había sido una gran rebelión, también se preguntaron sobre quiénes habían sido los dirigentes de dicha revolución a qué clases o grupos sociales pertenecieron, si el movimiento revolucionario fue homogéneo en todo el país o fue diferente en cada estado o región, además de cuál fue el papel de las clases populares y cómo fue la composición de los ejércitos revolucionarios. Por otra parte, también se preguntaban cuál había sido el papel de las élites a nivel nacional, estatal y local. Finalmente, se cuestionaron cuáles habían sido los cambios o efectos provocados por la revolución a nivel general,

[68] Moisés Ochoa Campos. (1970). *La revolución mexicana. Sus causas políticas*, vol. IV. México: INEHRM.

[69] Eduardo Nomelí Mijangos Díaz. (2006). *La dictadura enana. Las prefecturas del porfiriato en Michoacán*. México: Universidad Nacional Autónoma de México. (Tesis de doctorado), pp. 316-319.

estatal y local, y cómo se había conformado el nuevo estado posrevolucionario.[70]

Muchas preguntas y discusiones que evidenciaban el fin de un discurso oficial y legitimador del Estado posrevolucionario ante la represión de los movimientos estudiantiles y el surgimiento de las guerrillas rurales y urbanas que desafiaban al Estado mexicano, al mismo tiempo que se enfrentaban las peores crisis económicas que llevarían a las grandes devaluaciones del peso, inflación desproporcionada, caída de los salarios reales de los trabajadores, y al derrumbe total del modelo económico estatista-capitalista posrevolucionario. Las nuevas investigaciones sobre la revolución mexicana y sus antecedente se enfocaron en los procesos regionales, el resultado de éstas fue que la revolución había tenido distintas características, actores sociales y políticos en cada estado o región del país, pero además, se profundizó en la historia regional y se explicó puntualmente cómo había sido el desarrollo histórico regional, abandonando totalmente las historias nacionales que solamente veían los procesos desde la ciudad de México como el centro político, social y económico del país.

A partir de entonces, todo fue sometido a un estricto escrutinio desde los mismo individuos, las instituciones, los grupos sociales y los sectores económicos, el nivel de la escala de análisis fue desde lo local o lo microhistórico, a la escala regional y nacional. Temas como el de los pueblos indígenas y sus tierras comunales, las haciendas agrícolas, los ranchos y las empresas fueron objeto de investigaciones minuciosas a partir de archivos familiares, municipales, estatales, empresariales, eclesiásticos, nacionales e internacionales. Este revisionismo histórico también se enfocó en los jefes políticos y su función dentro del Estado a nivel nacional, regional y local, la imagen negativa o la "leyenda negra" de estas autoridades intermedias fue discutida y analizada, algunos historiadores recurrieron al marco normativo y constitucional que regía el actuar de los jefes políticos decimonónicos aclarando puntualmente cuáles eran sus funciones,

[70] Alán Knight. (1986). La Revolución mexicana: ¿burguesa, nacionalista o simplemente una gran rebelión? *Cuadernos Políticos*, núm. 48, pp. 5-44.

obligaciones y prerrogativas según las constituciones y reglamentos de cada estado y a nivel nacional, así como la manera en que se nombraban o elegían dichos funcionarios. A partir de estos estudios, como el citado de Macham, explicaron que los jefes políticos no fueron una invención del porfiriato, sino que tenían antecedentes en la Constitución de Cádiz, incluso, que sus antecedentes coloniales estaban en los intendentes, subdelegados, corregidores y hasta en los alcaldes mayores.

Sin embargo, pocos historiadores han recurrido a la documentación de archivos locales y estatales para demostrar cuál era puntualmente el actuar de estas autoridades intermedias desde el simple comisario de policía, el director político del distrito, hasta el jefe político del cantón o departamento. Más allá de la postura política e ideológica de las fuentes: informes oficiales, periódicos, oficios, memorias, y documentos de los habitantes y vecinos de los pueblos gobernados por dichas autoridades, el mismo historiador lee, analiza, interpreta y explica desde su punto de vista teórico, político e ideológico los documentos, lo que no se puede suprimir totalmente, pero que de alguna manera inclina los comentarios y críticas sobre dichas autoridades a favor o en contra.

La mayoría de las investigaciones sobre los jefes políticos a partir de la década de los ochenta del siglo xx continuaron con la propuesta de Loyd Mecham, pero sobre todo abordaron a las autoridades políticas intermedias durante el régimen porfirista. No obstante, en los grandes relatos de la revolución mexicana y del porfiriato seguía predominando la imagen negativa del jefe político en los principales historiadores de la revolución mexicana. Por ejemplo, en 1986, el mismo año en que se publicó en español el texto de Mecham, apareció un artículo en inglés de Friederich Katz titulado "La república restaurada y el porfiriato", después en 1994 se publicó en español, en este artículo Katz sigue sosteniendo una concepción de México como si fuera una sociedad medieval, dijo que "los caciques regionales gobernaban las provincias como estados feudales" y que el primer movimiento de Porfirio Díaz al llegar al poder fue reemplazar a esos hombres poderosos que quedaban del periodo anterior. Agrega Katz que para evitar posibles levantamientos de esos gobernadores nombró a

comandantes militares sin raíces en la región para que vigilaran a los funcionarios locales y, al mismo tiempo, ascendió al puesto de jefe político a los administradores distritales, de menor rango anteriormente, éstos ahora dirigían la policía y las fuerzas armadas auxiliares de sus distritos, elegían funcionarios distritales y municipales, su principal lealtad era con el presidente de la república y no con los gobernadores estatales. Asegura Katz que fue Manuel Romero Rubio quien transformó la institución del jefe político y quien controlaba y manipulaba a los gobernadores del país.[71]

Por otra parte, Alan Knight, en su libro titulado *La Revolución mexicana*, publicado en inglés en 1986, y diez años después en español, sostiene la imagen negativa del jefe político, diciendo que los hilos del poder se encontraban en manos del jefe político controlando las elecciones municipales, con excepción de las zonas serranas donde los ayuntamientos conservaban algo de su antigua libertad y autonomía. Sin embargo sostiene que el carácter del jefe político podía variar de un lugar a otro, y que éstos debían su posición a sus contactos familiares, pero que a nivel local, los jefes políticos buscaban la manera de conciliar sus intereses (los de la gente acomodada del lugar) con las crecientes demandas del centro, y que los jefes políticos gobernaban para satisfacción de las clases altas. Agrega Knight que la mayoría de los jefes políticos eran impuestos desde fuera, por el "centro", y por tanto, eran leales a Porfirio Díaz.[72]

Tal vez el mejor análisis de los jefes políticos desde una perspectiva nacional sea el de François Xavier Guerra, en su libro sobre el antiguo régimen y la revolución.[73] Guerra habla de los jefes políticos partiendo una extensa base de datos sobre una gran cantidad de individuos de la época porfiriana, ahí dice que los jefes políticos eran los herederos de los subdelegados de la época colonial, como ya se ha dicho, que adquirieron una nueva importancia con la Constitución de Cádiz, ya que cada pro-

[71] Friederich Katz. (1994). *Ensayos mexicanos*. México: Alianza Editorial, pp. 159-245.

[72] Knight. (1996), t. I, pp. 39-47.

[73] Guerra. (1988).

vincia estaba gobernada por un jefe superior político nombrado por el rey. Guerra aclara que este jefe superior político se convertirá después de la independencia de México en lo que serán los gobernadores de los estados, pero el funcionario intermedio entre el gobernador y los municipios será el jefe político de cantones y departamentos.[74] Sin embargo, Guerra se equivoca al señalar que el prefecto aparece por primera vez en la Constitución del Estado de México en 1825, porque antes, en el estado de Jalisco en abril de 1824, el gobernador Luis Quintanar, había publicado una instrucción para el gobierno del jefe de policía del departamento de Guadalajara.[75]

Guerra sostiene que el papel de los prefectos o jefes políticos era muy semejante en todos los estados del país, nombrados o destituidos según el capricho del gobernador de quien eran meros instrumentos. Los jefes políticos, a su vez, nombraban a la mayoría de los presidentes municipales de su circunscripción y aseguraban el orden y la policía locales. También se encargaban de aplicar las leyes federales y locales, informaban al gobernador sobre el estado de su circunscripción y organizaban las elecciones. Además, los jefes políticos designaban a los hombres que debían incorporarse al ejército por medio de la leva. Para Guerra el jefe político estaba situado en la base del sistema político y aparecía en las crónicas de la época, sobre todo revolucionarias, como el elemento más represivo del régimen, era un tirano local al servicio del gobierno "señor de horca y cuchillo", lo que se asemejaba a lo expuesto por la "leyenda negra", que se explicó más arriba.[76]

Para Guerra, de acuerdo a las biografías que recopiló provenientes de todos los estados de la federación, ofrecen imágenes muy diversas de los

[74] Guerra. (1988), t. I, pp. 122-125.

[75] Instrucción para el gobierno del jefe político del departamento de Guadalajara de 24 de abril de 1824. En *Colección de Decretos, Circulares y Órdenes de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco (1823-1857)*. (1981). Guadalajara: Congreso del Estado de Jalisco, t. I, pp. 200-203.

[76] Guerra. (1988), t. I, pp. 122-125.

jefes políticos según la época y el lugar. Para el autor, los jefes políticos de la república restaurada y de inicios del porfiriato se parecen a los gobernadores de la primera etapa porfirista, estos pertenecen a las familias dominantes del estado, o son hombres que recién han ascendido socialmente gracias a las guerras civiles y extranjeras. De tal manera que el puesto de jefe político era una recompensa por sus méritos militares, y una forma de dar a la facción victoriosa una base local a partir de la cual el jefe político podía reunir tropas, obtener recursos o controlar una región estratégica del estado. Su principal función era el restablecimiento del orden y la eliminación de los bandoleros que infestaban el campo.[77]

Según Guerra, la primera cualidad que debían tener estos primeros jefes políticos porfirianos era la aptitud de mando, la capacidad de arbitrar los conflictos en sus distritos o de luchar por mantener el orden. Pero, para el autor, no llegaban a ser en sentido estricto funcionarios intercambiables y con formación teórica. Más bien eran personas de su región, con experiencia de las fuerzas reales de su distrito y que sabían discernir si era necesaria una represión o un compromiso. Sostiene Guerra que el régimen de Díaz logró establecer la paz debido en gran parte a estos jefes políticos, pues lograron con relativo éxito arbitrar los conflictos en vez de resolverlos por la fuerza.[78]

La segunda generación de jefes políticos porfirianos procedía de diversos oficios, distintos al militar, eran hombres jóvenes, en su mayoría con título profesional, y tomaban este puesto como una etapa en su carrera profesional y administrativa. Dice Guerra que al inicio de la revolución una parte de los jefes políticos se enfrentaron a los revolucionarios, pero que otra parte de ellos se convirtieron en revolucionarios y ocuparon cargos importantes durante y después de la revolución. La imagen que Guerra muestra de los jefes políticos es más variada que la de la "leyenda negra", primero porque no todos eran iguales según el tiempo y lugar, ni tampoco tenían los mismos orígenes sociales, y finalmente, cambiaban

[77] Guerra. (1988), t. I, pp. 122-125.

[78] Guerra. (1988), t. I, pp. 122-125.

con el tiempo ya que ascendieron en la escala social, profesional y militar. Tenían apoyo en la sociedad que gobernaban, a veces eran notables respetados, y estaban integrados a redes de fidelidades y sufrían la represión de la lucha de las facciones porfiristas durante los últimos años del régimen, lo cual fue una de las principales causas de la revolución maderista.[79]

Los jefes políticos desde la historia regional

La historiografía desde el modelo narrativo nacional no fue más allá de la construcción de la imagen del jefe político estereotipada, encerrada dentro de la "leyenda negra" o imagen negativa del jefe político, solo Macham y Guerra trataron de salir de ella consultando las constituciones nacionales, pocas estatales, y algunos documentos procedentes de archivos históricos estatales, la figura del jefe político se seguía viendo desde la ciudad de México de manera muy superficial e ideológica, antes de realizar la investigación ya se tenía una etiqueta más o menos convincente de lo que fueron los jefes políticos durante el siglo XIX, pero especialmente, durante los años del porfiriato.

Los interesados en el tema realmente eran contados, así que no hubo un boom de estudios sobre estos personajes, como si lo hubo para otros como los bandidos, los revolucionarios, los hacendados, comerciantes, empresarios o rancheros. Los jefes políticos parecían estar apestados porque nadie se interesaba en ellos. Sin embargo, poco a poco, y a cuenta gotas, fueron apareciendo algunos trabajos dedicados de manera especial a analizar el papel que los jefes políticos habían desempeñado en la política de sus estados.

Prefectos y jefes políticos en el estado de México

Ricardo Ávila Palafox en 1983 publicó un texto sobre los jefes políticos en el estado de México, en el que sostiene que éstos era una aberración del

[79] Guerra. (1988), t. I, pp. 122-125.

sistema político liberal.[80] Años después, Ávila Palafox (1992) reconsideró su trabajo diciendo que era limitado y que tenía varios errores. Dijo Ávila Palafox; en ese año "me encontraba obnubilado por muchos estereotipos que empañan visiones más reales del Porfiriato […] me parece que el papel de los jefes políticos, instrumento capital en la sujeción y el control político durante el régimen porfiriano, fue menos represor y más político de lo que se ha querido ver".[81]

Sin embargo el autor abrió el tema hacia nuevas fuentes documentales, sobre todo hemerográficas y una amplia correspondencia oficial procedente del Archivo del Estado de México. Ávila Palafox sostuvo que los jefes políticos del estado de México poco tenían que ver con el mito siniestro de los prefectos porfiristas. El autor dijo que los documentos del archivo del estado de México sobre los jefes políticos, no mostraban funcionarios todopoderosos, y que eran más bien funcionarios políticos del estado con cierto poder, pero limitados a las órdenes del gobernador, desempeñaban las mismas funciones que se han mencionado anteriormente, por lo que "ejercían una especie de omnipoder que llegaba hasta los más profundos espacios sociales", en una sociedad tradicional y muy vertical en su gobierno, la acción de los jefes políticos se desarrollaba en un contexto de clientelismo político que se hacía evidente en diversas ocasiones. Sin embargo, afirma el autor, que la documentación de los periódicos y los archivos de la época no ilustran, necesariamente, que los jefes políticos fueran omnipotentes ni que las poblaciones fueran sumisas y obedientes.[82]

[80] Ricardo Ávila Palafox. (1983). Los jefes políticos: aberración del sistema político liberal. El caso del Estado de México. En *Boletín del Archivo General*, no. 1, pp. 3-45.

[81] Ricardo Ávila Palafox. (1992). Clientelismo y manipulación de los jefes políticos. En Ricardo Ávila Palafox, Carlos Martínez Assad y Jean Meyer (coords). *Las formas y las políticas del dominio agrario. Homenaje a François Chevalier*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, pp. 215-231.

[82] Ávila. (1992), pp. 215-231.

Ávila Palafox dice que la correspondencia oficial entre los jefes políticos y el gobernador puede tener sesgos y deformaciones que escondan intereses privados, particulares o secretos de los individuos involucrados. Sin embargo, la correspondencia oficial no deja de tener un alto grado de veracidad, aunado a la información hemerográfica y al contexto socio-histórico, sostiene el autor, revela unos jefes políticos apegados a la forma, sin dejar de haber cierta informalidad en el ejercicio del poder por parte de estos funcionarios, pero en gran medida las acciones de los jefes políticos del estado de México se apegaban a los preceptos administrativos, pues estaban sujetos a la presencia del gobernador, quien limitaba sus posibles excesos.[83] El autor no duda que los jefes políticos hayan tenido redes sociales y clientelares a su alrededor, pero la sujeción completa al gobernador limitaba en gran medida la completa autonomía del jefe político en su ejercicio del poder. Esto también estaba relacionado con la alta movilidad de dichos funcionarios que iban de un distrito a otro y por pocos periodos de tiempo. A pesar de la gran movilidad, algunos de los jefes políticos se llegaron a relacionar muy bien con la población de su distrito, o al menos con cierto sector de ella. Por lo que el autor sostiene que el jefe político era un elemento del poder central, y por tanto, una pieza clave e indispensable para consolidar al país como nación.[84]

Ávila Palafox no ve un cambio sustantivo entre la época colonial y la independiente en cuanto a la estructura socio-política centralizada. Para el autor los jefes políticos representan en principio el control efectivo de una comarca, región a ámbito administrativo. Fueron los hombres fuertes de los distritos o de las regiones, y fueron ellos quienes ayudaron a los gobernadores de los estados a mantener el control político y a realizar las obras de gobierno. En ocasiones, sostiene el autor, que las jefaturas políticas eran ocupadas por verdaderos caciques, sobre todo en regiones apartadas, donde la presencia del gobierno central era limitada, y donde no era difícil encontrar a personajes rudos, autoritarios, despóticos y

[83] Ávila. (1992), pp. 215-231.

[84] Ávila. (1992), pp. 215-231.

violentos. Pero en los casos como el estado de México, que no estaba tan lejos de la capital del país, el control sobre los jefes políticos era mayor. Ávila Palafox sostiene que en las regiones apartadas o de frontera, la gran autonomía de los jefes políticos coincidía con los excesos en el ejercicio del poder.[85] Finalmente el autor concluye que a los jefes políticos no se les debe "ver como los ogros oscuros del porfiriato", al menos a los del Estado de México, sino más bien como los brazos ejecutores, los hombres comisionados por el gobernador y/o por el presidente, más paternales que represores, más políticos que tiranos quienes cooptaban a la población, más que reprimirla.[86]

Diez años después de este trabajo de Ricardo Ávila Palafox se publicó un artículo de Estefany Vilchis Salazar que abordó también el tema de los jefes políticos en el estado de México.[87] Dicho estado ha sido el más favorecido con estudios sobre los jefes políticos, Romana Falcón publicó en 2015 su extraordinario libro sobre el tema que abarca la segunda mitad del siglo XIX y la primera década del XX, el cual constituye una de las obras más completas que se haya hecho sobre los jefes políticos en un estado en particular.[88] La autora hace un extenso y profundo análisis de las estructuras sociales, económicas y políticas del estado de México, una historia que explica desde los grupos más pobres, los de abajo, y sube hasta los grupos de las élites y los gobiernos municipales, distritales y el estado, brincado hasta el Estado nacional. Dice Falcón que su trabajo consistió en esclarecer en qué sentidos, y hasta qué puntos los eslabones del poder resultaron decisivos para establecer rutinas de mando y hacer

[85] Ávila. (1992), pp. 215-231.

[86] Ávila. (1992), pp. 215-231.

[87] Estefany Vilchis Salazar. (2012). El jefe político: transformaciones en la administración pública del Estado de México e injerencia en el "contingente de sangre", 1867-1876. *Contribuciones desde Coatepec*, núm. 22, pp. 69-95.

[88] Romana Falcón. (2015). *El jefe político. Un dominio negociado en el mundo rural del Estado de México, 1856.1911*. México: El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, CIESAS.

del dominio algo natural en un gobierno relativamente centralizado, capaz de organizar su entorno geográfico y poblacional. La forma en que se llevaron a cabo las concertaciones de los de abajo y las élites dominantes que conducían al país. Falcón aclara que aceptó el desafío de indagar los argumentos, acciones, indiferencias y aun silencios de los actores subalternos, pero que no escudriñó a los sectores populares ni a las jefaturas en sí mismos, sino en sus recurrencias y continuidades, y sus habilidades en los procesos de negociación.[89]

Asegura Romana que su estudio se centró en la tensión entre la historia de las instituciones y la de quienes habitaban los últimos o primeros escalones de la escala social, que no analizó el proceso de conformación del Estado nacional, sino las instituciones y las acciones de gobierno, las formas de sujeción política organizada en la que los jefes políticos construyeron espacios de dominio institucional e informal. Sostiene la autora que las jefaturas políticas, con sus variantes en cada estado, fueron intermediarios inevitables entre los diversos ramos de la administración y distintos peldaños jerárquicos y autoridades, de frente a los ciudadanos, pueblos, vecinos y gente del común. Los jefes políticos acumularon diversas funciones de tipo premoderno, las cuales fueron un obstáculo para la especialización administrativa, pero ayudaron a regular las tensiones provocadas por las disputas por impuestos, elecciones, poder y los derechos de propiedad, además estuvieron al cuidado de la tranquilidad pública y vigilaron a los que debían ingresar al ejército, por lo que obtuvieron un enorme poder discrecional sobre los que no tenían recursos e influencias. No necesariamente las funciones de los jefes políticos fueron coercitivas, sino que también fueron sociales y cívicas, como presidir y organizar los festejos patrios, elaborar estadísticas, contribuyendo con ello a la elaboración de las grandes políticas públicas.[90]

Los jefes políticos, asegura la autora, desempeñaron un valioso papel de intermediación, pero también tenían un alto grado de autonomía re-

[89] Falcón. (2015), pp. 589-603.

[90] Falcón. (2015), pp. 589-603.

lativa, porque a final de cuentas dependían de la voluntad del gobernador del estado, quien los nombraba o los despedía según su capricho. Lo cual no evitaba que los jefes políticos cometieran abusos e injusticias, con lo que contribuían a fortalecer las percepciones negativas hacia ellos. Sin embargo, para Falcón no hay duda de que esta visión negativa de los jefes políticos correspondía a un estereotipo, a una exageración con el objetivo de legitimar al régimen de la revolución mexicana, sino que también los jefes políticos apoyaron a pueblos y a trabajadores para mejorar sus condiciones de vida. Lo cual no es suficiente, según Falcón, para cambiar la "leyenda negra" de las jefaturas políticas, por una "leyenda rosa", como cierta historiografía revisionista lo hace. No obstante, la mayoría de los jefes políticos en los estados, y en especial en el estado de México, se limitaba simplemente a administrar su circunscripción, como intermediario entre los grupos sociales y los distintos niveles del poder político y económico, antes de usar el aparato represor del Estado negociaban, llegaban a acuerdos, arbitraban los conflictos, conciliaban, pero cuando era necesaria una represión con el uso de la violencia, no les temblaba la mano.[91]

Jefes políticos en Coahuila

Casi tres décadas antes de la publicación de su libro sobre el estado de México, en un artículo de 1988, Romana Falcón hizo un análisis de los jefes políticos en el estado de Coahuila, partiendo del supuesto de que México todavía no era una nación integrada, y que entre la república restaurada y la caída de Porfirio Díaz (1867-1910), se transitó de una sociedad que era un mosaico de regiones a una nación relativamente integrada en términos geográficos, económicos y políticos, compuesta hasta cierto punto, por habitantes conscientes de su identidad nacional, con una estructura política más compleja, articulada y eficaz.[92] La hipótesis de Falcón era que el porfiriato fue una época de paz en la que se consoli-

[91] Falcón. (2015), pp. 589-603.

[92] Romana Falcón. (1988). La desaparición de jefes políticos en Coahuila. Una paradoja porfirista. *Historia Méxicana*, XXXVII: 3, pp. 423-467.

dó el Estado-nación moderno mexicano centralizado, en la cual los jefes políticos jugaron un papel muy importante, ya que sirvieron "como llave de paso para la centralización, pues eran los encargados de imponer las decisiones del poder ejecutivo frente a las fuerzas locales y de balancear los diversos componentes de las sociedades locales". Al mismo tiempo los jefes políticos recogían las demandas locales y las presentaban al poder central.[93]

No aclara Romana a cuál poder central se refiere, si es al gobierno estatal o al federal. Pues hay que señalar que el país durante la segunda mitad del siglo XIX estaba organizado como una república federal, donde los gobiernos estatales constitucionalmente mantenían una autonomía relativa en relación a sus asuntos internos. De ahí que los jefes políticos fueran electos o nombrados por el pueblo o por el gobernador del mismo estado. Falcón eligió estudiar la disolución de las jefaturas políticas en Coahuila en septiembre de 1893 derivada de una rebelión local. La autora sostiene la concepción o metáfora mecanisista de que hay un engranaje político local, un mecanismo de dominación que el régimen porfirista logró imponer. Explica Falcón que la característica particular del estado de Coahuila era que se trata de una región de frontera en la cual había una disputa por el control del territorio entre el Estado nacional mexicano y las naciones "bárbaras". Romana utiliza este concepto porque así se usaba en la época, pero que ella no está de acuerdo con esta concepción discriminatoria hacia los pueblos indígenas u originarios del norte de México. Sin embargo, la autora señala que había una larga historia de lucha y confrontación entre los pueblos indios y los colonos por el territorio. Lo mismo que existía una larga tradición de familias de caudillos y caciques que dominaban en la región desde principios del siglo XIX, como los generales Gerónimo Treviño y Francisco Naranjo.[94]

Para Falcón las jefaturas políticas son consideradas como uno de los elementos fundamentales para que las autoridades de la federación pu-

[93] Falcón. (1988), pp. 423-467.

[94] Falcón. (1988), pp. 423-467.

dieran tejer "sus redes hasta los últimos rincones del país y abarcar todos los escalones de la sociedad", y de esta manera, durante el porfiriato se convirtieron en una de las bases más sólidas donde descansaba la estructura del poder en su conjunto.[95] Creo que Falcón exagera el papel de los jefes políticos como un instrumento de la centralización del gobierno federal, y pasa por alto el juego político de las élites regionales por el gobierno de sus estados y la relativa autonomía que podían ejercer en una república federal. Los gobernadores de los estados eran quienes nombraban a los jefes políticos directamente, no el presidente de la república. Aunque la autora está consciente de que las jefaturas políticas se originaron en la Constitución de Cádiz en 1812 y que estuvieron vigentes durante todo el siglo XIX, con importantes variables en cada estado de la federación. Sostiene que frecuentemente desaparecían y se reinstalaban algunas jefaturas, y que tenían frecuentes fricciones con los ayuntamientos, una de las principales diferencias entre las jefaturas de los estados era la forma de elección o designación del cargo, por ejemplo, en Puebla el jefe político era electo por medio de una terna que le era presentada, como sucedía en otros estados como Jalisco, en otras entidades los jefes políticos eran electos mediante el voto popular. Pero en otros estados, ya en el porfiriato, los jefes políticos eran designados y removidos al arbitrio del gobernador. Romana Falcón afirma que Porfirio Díaz influía directamente en la designación de los jefes políticos,[96] lo cual me parece exagerado para la totalidad de los jefes políticos en todos los estados, pues era más bien una atribución de los gobernadores, aunque puede ser posible que Díaz hiciera algunas recomendaciones personales. Incluso, la misma autora lo explica para Coahuila, cómo las jefaturas políticas eran entregadas a los seguidores: "parientes, compadres, amigos y clientes" del gobernador en turno, quienes por lo general utilizaban sus puestos para enriquecerse a partir de sus negocios privados.[97]

[95] Falcón. (1988), pp. 423-467.

[96] Falcón. (1988), pp. 423-467.

[97] Falcón. (1988), pp. 423-467.

Falcón destaca el papel principal de los jefes políticos en la leva de individuos para el ejército federal: "la contribución de sangre", también para la formación de cuerpos irregulares de defensa o para la persecución de bandidos que asolaban varios territorios coahuilenses. Gran parte de la fuerza regional y local de los gobernadores que aspiraban a sustituir a Díaz en el poder se apoyaba en los jefes políticos, por eso, cuando representaban un peligro para el gobierno federal, las jefaturas políticas fueron suprimidas como en el caso de Coahuila en 1893, que nos explica la autora.[98] Romana Falcón concluye en este artículo que los jefes políticos fueron un instrumento diseñado para fortalecer los lazos de dominación del poder presidencial, que en ciertos casos, como el de Coahuila que se explica en este texto, se convirtieron en un cuello de botella que obstaculizaba las decisiones del centro del país, pues respondían a directrices regionales, del gobernador y de su círculo íntimo.[99] Romana olvida que las jefaturas políticas no fueron diseñadas por el régimen porfirista, sino que tienen sus orígenes en la Constitución de Cádiz, y antes de ella en la Ordenanza de Intendentes de 1786. La primera república federal continuó con el cargo de los jefes políticos superiores pero ahora como gobernadores de los estados, y de los subdelegados se pasó a los jefes políticos o prefectos. De dónde saca la autora que era para fortalecer los lazos de dominación del presidente o del gobierno central, cuando la república federal se basaba, constitucionalmente, en la división por estados independientes y autónomos, al menos en su régimen interno. Las jefaturas políticas eran nombradas por los gobernadores o electas por el pueblo. Romana Falcón sostiene que las correas de dominación se controlaban desde palacio nacional, mediante una red de clientes, amistades, favores y compromisos, por medios discrecionales, soterrados o medio ocultos, con los que se manipulaba, se conciliaba o vetaba el acceso al poder.[100] Cosas

[98] Falcón. (1988), pp. 423-467.

[99] Falcón. (1988), pp. 423-467.

[100] Falcón. (1988), pp. 423-467.

que son difíciles de demostrar documentalmente y que la mayoría de las veces quedan en mera especulación.

Cuatro años después (1992), Romana Falcón publicó otro artículo sobre los jefes políticos en Coahuila, pero esta vez se enfocó a las primeras décadas posteriores a la independencia de México. En este trabajo sostiene que durante la primera mitad del siglo XIX el Estado mexicano era muy débil e incapaz de controlar militarmente todo el territorio. Por tanto, los jefes políticos tenían un mando muy limitado, frágil y temporal, nada comparado con lo que fueron estos funcionarios en la segunda mitad del siglo XIX. Los jefes políticos de Coahuila de esta primera mitad decimonónica fueron incapaces de someter a los indios rebeldes, debido a que el Estado nacional mexicano también era muy débil y falto de recursos económicos, políticos y militares, de tal manera que no tenían autoridad ni legitimidad para imponer su autoridad.[101]

Por otra parte, María Concepción Hernández Ramírez publicó un artículo sobre los orígenes del jefe político del porfiriato y sus ámbitos de poder,[102] es un texto con un enfoque nacional, basado principalmente en las leyes generales, constituciones y reglamentos del siglo XIX, no es un estudio de caso, sino principalmente legal, y basado en historiografía conocida hasta el momento por los pocos autores que atendieron el tema de los jefes políticos.

Jefes políticos en Veracruz

Soledad García Morales y José Velasco Toro publicaron dos textos con el tema de los jefes políticos en el estado de Veracruz, donde repiten lo

[101] Romana Falcón. (1992). El estado incapaz. Lucha entre naciones. Poder, territorio, "salvajes" y jefes de departamento. En Ricardo Ávila Palafox, Carlos Martínez Assad y Jean Meyer (coords). *Las formas y las políticas del dominio agrario. Homenaje a François Chevalier*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, pp. 189-214.

[102] María Concepción Hernández Ramírez. (1995). Orígenes del jefe político del Porfiriato y sus ámbitos de poder. En *Tzinzun. Revista de Estudios Históricos*, núm. 22, pp. 110-124.

que ya se ha dicho aquí sobre las características de dichos funcionarios, a quienes conciben como parte del engranaje de la maquinaria política del régimen de Díaz cuyo objetivo era la centralización del poder a nivel nacional. En el estado de Veracruz, desde 1825 la constitución estatal estableció la división en doce cantones, sujetos a cuatro departamentos, gobernados por un jefe político, los jefes políticos serían nombrados por el gobernador mediante una terna propuesta por el jefe de departamento, y durarían en el cargo cinco años que serían prorrogables por dos más. Los autores se basan principalmente en la legislación sobre los jefes políticos y los reglamentos de policía del estado de Veracruz durante el siglo XIX. Concluyen diciendo que Porfirio Díaz se preocupó porque el engranaje político funcionara de tal manera, que ninguna pieza se desarticulara y causara problemas al sistema. De esta manera, Díaz ejerció el poder en forma vertical y logró perpetuarse gracias al apoyo y control que ejercieron los gobernadores y los jefes políticos a sus órdenes.[103]

Jefaturas políticas en Aguascalientes

La década inicial del siglo XXI trajo nuevos estudios sobre los jefes políticos en estados donde poco o nada se habían estudiado, el primero en publicarse fue el trabajo de Francisco Javier Delgado Aguilar sobre las jefaturas políticas en Aguascalientes.[104] Delgado Aguilar había presentado su tesis de maestría en el Instituto Mora ese mismo año, de tal manera que el trabajo fue publicado inmediatamente después de un mes

[103] Soledad García Morales y José Velasco Toro. (1991). *Memorias e informes de jefes políticos y autoridades del Régimen Porfirista, 1877-1911*. México, Gobierno del Estado de Veracruz, Universidad Veracruzana-Instituto Veracruzano de la Cultura. Soledad García Morales. (1990). Sistema político y control de cantones en Veracruz, 1877-1911. *La Palabra y el Hombre*, no. 75, pp. 55-67.

[104] Francisco Javier Delgado Aguilar. (2000b). *Jefaturas políticas. Dinámica política y control social en Aguascalientes, 1867-1911*. Aguascalientes: Universidad Autónoma de Aguascalientes.

de haber obtenido el título de maestría.[105] El autor se lamenta de que para el tiempo en que hizo su libro había pocos estudios históricos sobre los jefes políticos, y que seguía predominado la "leyenda negra" sobre ellos. Sin embargo destacó la importancia de los trabajos de autores que se habían ocupado del tema y que se mencionaron arriba. Delgado advertía la importancia del estudio de las jefaturas políticas a nivel regional y el distinto desarrollo que éstas habían tenido en los planos local y regional. Afirma el autor que en Aguascalientes, como en el resto de los estados de la república, las jefaturas políticas habían desempeñado un papel muy importante en la vida política y social de la población, razón suficiente para hacer un estudio a profundidad sobre estas instituciones y los actores sociales e individuales que tuvieron participación en el desarrollo de estas instituciones políticas.[106]

Delgado dice que su estudio es una primera aproximación al tema de los jefes políticos en el estado de Aguascalientes, y un intento por comprender la influencia que tuvieron estos funcionarios en dicho estado durante la república restaurada y el porfiriato, tanto en el ámbito político como en el social. Sostiene el autor que el jefe político estaba en estrecho contacto con los grupos sociales, lo que le concedía una gran influencia sobre ellos, por lo que era una autoridad reconocida, con una importante participación política y grandes márgenes de discrecionalidad que le permitían ejercer una especie de "violencia legítima" sobre los diferentes grupos de la población. Para explicar este tema del uso de la violencia, Delgado toma como guía teórica las aportaciones de Michel Foucault sobre la microfísica del poder en su libro de *Vigilar y castigar*.[107] El objetivo del autor con este estudio es comprender de forma global el ejercicio y la

[105] Francisco Javier Delgado Aguilar. (2000a) La desaparición de los Jefes Políticos en Aguascalientes. 1867-1920. México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. (Tesis de maestría).

[106] Delgado. (2000b), pp. 7-9.

[107] Delgado. (2000b), pp. 7-9. Michel Foucault. (1976). *Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión*. México, Siglo xxi Editores, 1976.

estructura del poder en Aguascalientes, ya sea en su forma visible, como un su aspecto oculto y sutil de control de la población en el periodo de 1867 a 1911. El autor parte de la idea de que las jefaturas políticas funcionaron desde su creación, en 1812 con la Constitución de Cádiz, como un instrumento de vigilancia, control y centralización del Estado sobre los cuerpos municipales, los cuales eran la expresión más importante de la autonomía local, por lo que el autor sostiene que entre los ayuntamientos y las jefaturas políticas había una lucha constante a lo largo del siglo XIX entre los ayuntamientos, el poder regional y el gobierno central.[108] Finalmente Delgado concluye que el jefe político, al estar obligado a garantizar la tranquilidad pública y tener un conjunto de atribuciones formales y discrecionales, caía continuamente en prácticas corruptas y arbitrarias que lo enemistaron con diversos grupos de la población, de tal manera que lo convirtieron en una de las figuras más odiadas y temidas del régimen porfirista.[109] Con esta conclusión se vuelve a fortalecer la concepción de la "leyenda negra" o la representación negativa del jefe político.

Jefes políticos en Chihuahua

En 2008 se publicó un artículo de María Aparecida Lopes sobre los jefes políticos en Chihuahua, su planteamiento es innovador pues sostiene que el Estado central mexicano era un estado débil desde el final de las guerras de independencia hasta la expulsión de los franceses en 1867, y que Porfirio Díaz fue considerado por los observadores contemporáneos como el responsable directo de la "pacificación" del país y por la adhesión de los gobernadores a su política de "conciliación", donde algunos agentes centralizadores fueron los jefes políticos.[110] Sin embargo, Lopes dice erróneamente que dichos jefes político eran funcionarios federales que mantenían el control sobre casi todos los asuntos político-administrativos de

[108] Delgado, (2000b), p. 13.

[109] Delgado. (2000b), pp. 279-284.

[110] María-Aparecida Lopes. (2008). Orden, progreso y centralismo, Chihuahua (México) bajo el mando porfiriano (1876-1910). *Historia Unisons*, vol. 12, núm. 2, pp. 157-167.

los estados de la república.[111] Al contrario, formalmente, los jefes políticos eran funcionarios estatales, nombrados por el gobernador o electos por el pueblo, pero eran autoridades a nivel estatal y no federal. Continúa diciendo Lopes que la historiografía tradicional ha afirmado que a partir de estos personajes, Díaz controlaba y estaba al tanto de las zonas más remotas del país. Lo que la autora pone en duda correctamente. Lopes analiza los argumentos acerca de la centralización atribuida al porfiriato mediante el análisis del caso del estado de Chihuahua.[112]

Lopes explica que había tensiones y conflictos entre el gobierno de Díaz y el clan Terrazas que dominaba el estado de Chihuahua durante las últimas décadas del siglo XIX. También explica cómo en cada elección para el gobierno estatal había negociaciones y acuerdos entre los poderes regionales y el gobierno federal. Lopes discute la tesis de que había una constante en el proceso de centralización entre 1876 y 1910, pues el caso de Chihuahua refuta la visión que sostiene que desde el centro se dictaban las órdenes sin que hubiera oposición. Afirma que entre 1877 y 1880, el Estado federal bajo el gobierno de Díaz no tuvo la autoridad suficiente ni apoyos para inmiscuirse en los asuntos regionales, que las elecciones estatales se determinaron por factores locales, y que el gobierno de Díaz no pudo intervenir en este caso. La autora critica a quienes sostienen que el "centralismo" se dio a lo largo de todo el periodo porfirista, pues en lo que se refiere a Chihuahua en esta primera fase, el régimen de Díaz no estaba en posición de controlar o negar poder económico al cacique Luis Terrazas, concediéndole o negándole un puesto político. Más bien parecía al revés, que los líderes y caciques locales utilizaron al régimen de Díaz para consolidarse en el poder.[113]

Dice Lopes que los análisis que apelan al centralismo ininterrumpido suelen considerar a las jefaturas políticas como el hilo administrativo que unía al palacio nacional con las zonas más aisladas del país. Sin embar-

[111] Lopes. (2008), pp. 157-167.

[112] Lopes. (2008), pp. 157-167.

[113] Lopes. (2008), pp. 157-167.

go, los jefes políticos tuvieron un alcance y una eficacia dispareja en las distintas regiones que conformaban el territorio nacional, y en algunos casos, su competencia estuvo en duda, como fue el caso de Chihuahua, en donde dichos funcionarios estuvieron subordinados a las contiendas y componendas políticas locales.[114] Más bien, para la autora, Chihuahua se inscribía en un marco legal descentralizador y de inestabilidad política. El estado de Chihuahua en 1848 se dividía administrativamente en cantones, cada uno gobernado por un jefe político quien era electo por los vecinos del cantón. Aunque el gobernador los podía suspender, previa una justificación ante el congreso local. En 1887, los cantones fueron suprimidos y se instauraron los distritos gobernados por los jefes políticos, pero que podían ser nombrados y removidos libremente por el gobernador. Las cabeceras distritales quedaron bajo el mando del jefe político respectivo. Lopes considera que en Chihuahua durante el porfiriato había una pugna entre los grupos locales establecidos y los nuevos instrumentos de poder con afanes centralistas. Sin embargo, para la autora los jefes políticos no siempre fueron los instrumentos centralizadores que la historiografía tradicional menciona, más bien fueron un mecanismo por medio del cual se intentó socavar las bases locales de poder. La autora concluye que en Chihuahua la centralización política del régimen porfirista fue un largo proceso, en el cual se fueron dando los ajustes necesarios, no siempre pacíficos, para que Díaz lograra ejercer el control sobre las antiguas oligarquías regionales. Dicho proceso se caracterizó por la contienda o componenda política a partir del cual el ejecutivo federal asentó las bases de su gobierno.[115]

La dictadura enana

En 2006 Eduardo Mijangos presentó su tesis titulada *La dictadura enana. Las prefecturas del porfiriato en Michoacán*,[116] en la que destaca que los

[114] Lopes. (2008), pp. 157-167.

[115] Lopes. (2008), pp. 157-167.

[116] Mijangos. (2006).

estudios sobre la conformación del Estado mexicano en los siglos XIX y XX han proliferado en las últimas décadas tanto en México como en el extranjero, los temas han sido diversos desde la crisis de la monarquía española, el proceso de independencia, la etapa federalista y en general el siglo XIX han recibido mucha atención de los historiadores. Pero que el aparato burocrático administrativo no ha recibido la misma atención, en este sentido, Mijangos sostiene que uno de los engranes importantes de la formación del Estado nación mexicano no ha recibido la suficiente atención, lo que él denomina el sistema de prefecturas o jefaturas políticas. Mijangos al igual que los autores anteriormente citados dice que las jefaturas políticas tienen formalmente su origen a partir de 1824 en México, pero que sus antecedentes se pueden remontar hasta la implementación de las reformas borbónicas con la Ordenanza de Intendentes de 1786 y luego con la Constitución de Cádiz de 1812. Agrega que las constituciones estatales a partir de 1824 establecieron en su régimen interno la figura jurídica de las jefaturas políticas, como un organismo dependiente del poder ejecutivo y base de la administración pública y garante del nuevo orden republicano.[117] Sin embargo, hay que aclarar que se refieren al poder ejecutivo estatal, y no al federal.

Mijangos sostiene que el sistema de prefecturas o jefaturas políticas fue muy heterogéneo porque se partió de diversas interpretaciones de lo que era el sistema federal, una de ellas influida por el modelo federal norteamericano, y otra, influida por el modelo francés y español, los cuales no eran federados sino centralistas. No obstante, en términos generales, el autor sostiene que las leyes estatales dotaron a los jefes políticos de amplios poderes tutelares y compulsivos para que cumplieran con el objetivo de ser uno de los ejes de integración del nuevo Estado mexicano.[118] Los estudios recientes sobre las jefaturas políticas, según Mijangos, afirman que frente a la anarquía, inestabilidad, ingobernabilidad y desintegración que los caudillos y caciques provocaban en muchas regiones del país, los

[117] Mijangos. (2006), pp. 4-7.

[118] Mijangos. (2006), p. 7.

jefes políticos eran fuentes de control y dominio, y por tanto de gobernabilidad. Desde esta perspectiva las jefaturas políticas eran el "instrumento" para lograr la consolidación nacional.[119] No obstante, que las jefaturas tenían un fundamento institucional de control y debían construir las bases de un gobierno centralizado, las formas institucionales y las prácticas cotidianas mostraban casos de corrupción y de abusos de autoridad. Aunque no se puede negar que hubo casos que cayeron en ese modelo de corrupción y autoritarismo, tampoco se puede generalizar y sostener que todo el sistema de jefaturas o prefecturas era un aparato totalmente corrompido, ineficiente e inoperante. Lo cual no explica por qué el sistema prefectoral de control subsistió por casi un siglo.[120]

Por tal motivo el sistema de prefecturas sigue siendo del interés de las nuevas investigaciones que desean explicar de una mejor manera la dinámica de los procesos políticos decimonónicos, en los cuales los jefes políticos desempeñaron un papel muy importante en la conformación del nuevo Estado mexicano. Así, agrega Mijangos, frente a la concepción de la aparente anarquía política del siglo XIX, el sistema de prefecturas políticas parecen darle un sentido político a los intentos de construir y consolidar un Estado nacional.[121] Los jefes políticos durante el porfiriato han sido considerados por una parte de la historiografía como elementos centrales del equilibrio político, otra parte de los estudios históricos sobre estos personajes argumenta que dichas jefaturas fueron un instrumento de informalidad, represión, corrupción y autoritarismo, igual al régimen dominante a nivel nacional. Dice Mijangos que ambas visiones no resultan totalmente excluyentes sino más bien complementarias. De tal manera que los jefes políticos pueden ser considerados como elementos orgánicos de control político y social, pero que se fue desgastando y provocando desequilibrios que llevaron al régimen porfirista a una crisis profundo en vísperas del proceso revolucionario que derrocó dicho régimen.

[119] Mijangos. (2006), p. 8.

[120] Mijangos. (2006), pp. 8-9.

[121] Mijangos. (2006), p. 9.

Por esto los líderes revolucionarios consideraron a los jefes políticos como el agente más represor, injusto y autoritario del porfiriato, a tal punto que decidieron desaparecerlo legalmente.[122]

Mijangos en su tesis aborda el estudio de las prefecturas de Michoacán tratando de valorar no solo las peculiaridades del sistema, sino de identificar la dinámica de la política local. Las jefaturas políticas no eran actores pasivos institucionalmente, sino variables de estudio para analizar las prácticas políticas del México contemporáneo, una forma de entender los procesos de subordinación y conflicto durante el siglo XIX y principios del XX, como reflejo de las tensiones sociales que erosionaron el funcionamiento del sistema de jefaturas políticas, y por consecuencia, el derrocamiento del régimen porfirista.[123] Finalmente, en otro trabajo, Mijangos sostiene que la evolución el municipio decimonónico estuvo íntimamente ligada al desarrollo del sistema prefectoral en México. Dicho sistema pone en evidencia la relación jerárquica entre ayuntamientos y prefecturas. El autor sostiene como otros, que el sistema prefectoral era un eslabón orgánico, un mecanismo de articulación entre las formas de la dominación –el Estado– y de subordinación –la sociedad– a través de una jerárquica concepción del orden social. Los prefectos políticos jugaron un papel muy importante en el equilibrio y la estabilidad del sistema porfirista, y al mismo tiempo, era un instrumento de control político regional.[124] Aunque la prefectura era una simple oficina administrativa local en donde laboraban un secretario y dos escribientes, tal vez con un mueble, a manera de archivo, y ocasionalmente un mozo de servicio. En esta oficina el prefecto desarrollaba sus propias actividades administrativas y sociales cotidianas, pero por otra parte, sus actividades se ampliaban con las visitas

[122] Mijangos. (2006), p. 11.

[123] Mijangos. (2006), p. 22.

[124] Eduardo N. Mijangos Díaz. (2012). Prefectos y ayuntamientos en Michoacán. Dilemas de una relación política institucional. En Sergio Miranda Pacheco (coord.). *Nación y municipio en México, siglos XIX y XX*. México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas, pp. 174-196.

que hacía a los ayuntamientos, escuelas, festividades cívicas, reuniones y comisiones, campañas de sanidad y vacunación, inauguración de servicios públicos, y una larga lista de otras actividades sociales y políticas. Lo que, según Mijangos, explica la autoridad que el prefecto tenía en su circunscripción dentro de "un universo preñado de tradicionalismo", por lo que no era tan necesario que fuertes destacamentos del ejército estuvieran presentes, ya que el prefecto imponía orden tan solo con su presencia. Todas estas actividades, dice Mijangos, no fueron tomadas en cuenta por autores como John Kennet Turner o Francisco Bulnes al criticar a los jefes políticos destacando solo su carácter policiaco y utilitario del sistema prefectoral.[125] Para Mijangos las prefecturas en Michoacán fueron un organismo estable en el gobierno de sus distritos, estos distritos fueron la base de la organización política y administrativa del estado, y no los municipios. Lo cual no quita que hubiera muchos casos de abuso de autoridad y evidentes muestras de hartazgo social hacia fines del porfiriato contra prefectos o jefes políticos, pero no había una mejor alternativa para el gobierno de estas regiones.[126]

La leva como un sistema forzoso de reclutamiento

Los historiadores que sostienen la "leyenda negra" sobre los jefes políticos dicen que éstos eran los encargados de llevar a cabo el sistema de reclutamiento forzoso de soldados para el ejército, "el contingente de sangre" le llamaban, por esto, entre otras cosas, sostenían que los jefes políticos eran el elemento más cruel y represor del régimen porfirista. Mario Ramírez Rancaño explica cómo el ejército federal en la época de Díaz no fue lo que muchos autores aseguraban, es decir un ejército poderoso capaz de controlar y pacificar al país. Después del triunfo de la república, el gobierno federal tendió a reducir el número de elementos del ejército, de tal manera que en proporción al total de la población el ejército porfirista no llegó al uno por ciento de la misma, porcentaje recomendado

[125] Mijangos. (2012), pp. 174-196.

[126] Mijangos. (2012), pp. 174-196.

para un ejército moderno. Los sueldos de los soldados eran muy bajos y desertaban a la primera oportunidad. Ramírez sostiene que el sistema de reclutamiento a base de leva no funcionó, no llevaba el número de soldados que necesitaba el ejército por varias razones. La población no tenía interés de formar parte del ejército de forma voluntaria, así que los gobernadores, los jefes políticos y otras autoridades militares reiniciaron el reclutamiento clásico de leva, pero la gente se amparaba en contra de este método forzoso de reclutamiento. Los jefes políticos fueron señalados como culpables del reclutamiento forzoso (leva) para el ejército federal, dice Ramírez que el sistema de sorteo no funcionó y la leva era ilegal pues la Constitución de 1857 la prohibía. La gente se amparaba contra la leva, Ramírez afirma que el aumento del número de soldados en el ejército durante el porfiriato fue mera ficción, los individuos que eran llevados por medio de la leva, cuando eran mandados al frente de batalla, la mayoría desertaba.[127]

Jefes políticos en Sinaloa

Para el estudio de los jefes políticos o prefectos en el estado de Sinaloa se cuenta con la tesis de maestría de Helga Carolina Retamoza Salazar que aborda el periodo porfirista.[128] Según Helga los prefectos en Sinaloa formaron del grupo dominante durante la época en que el gobernador Francisco Cañedo ejerció el poder. Aunque los jefes políticos ya existían desde la Constitución de Cádiz, fue durante el porfiriato que los prefectos tuvieron su mayor importancia, ya que se constituyeron en un elemento esencial en la política centralizadora del porfiriato. A partir de la actividad de los prefectos el gobierno central conciliaba los intereses de caciques y caudillos. Los prefectos eran agentes absolutos de los gobernadores, quienes los nombraban y removían según sus intereses, necesidades

[127] Ramírez. (2014), pp. 41-78.

[128] Helga Carolina Retamoza Salazar. (2018). *Los prefectos en Sinaloa. Una dinámica social y política del ejercicio del poder en el Sinaloa cañedista, 1877-1909*. Culiacán: Universidad Autónoma de Sinaloa, 2018 (tesis de maestría).

y caprichos. Los prefectos eran autoridades intermedias, con una gran diversidad de funciones y atribuciones en sus respectivos distritos, lo cual ayudó a la consolidación del régimen porfirista. Para muchas personas eran líderes carismáticos por su participación en las guerras contra los conservadores y contra las invasiones extranjeras y en la revolución de Tuxtepec.[129]

Algunos individuos que ocuparon el puesto de prefectos eran miembros de la élite política regional, integrados por lazos de amistad, compadrazgo y parentesco. Antes de 1880, en el estado de Sinaloa los prefectos eran electos popularmente, pero después de este año se modificó la constitución estatal y entonces el gobernador del estado pudo nombrar y remover libremente a los prefectos. Los prefectos podrían, a su vez, nombrar alcaldes a través de ternas. Al igual que sucedió en otros estados, en Sinaloa el prefecto vigilaba a los ayuntamientos. El prefecto ocupaba una parte social e institucional muy importante en sus distritos pues tenía a su cargo la administración general y de orden público. Aunque había muchas denuncias en contra de los prefectos por parte de la población y los jueces, la mayoría de los casos, el poder judicial los absolvía de dichos delitos, en ocasiones por órdenes del mismo gobernador Cañedo, declarando que no había delito que perseguir.[130]

[129] Retamoza. (2018). pp. 162-165.

[130] Retamoza. (2018). pp. 162-165. Alonso Martínez Barreda. (2000). *Relaciones económicas y políticas en Sinaloa, 1910-1920. Vieja élite económica-Nueva élite política*. Culiacán: Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad de Sonora. (Tesis de doctorado).

CAPÍTULO III.
Los jefes políticos en México y el mundo iberoamericano durante el siglo XIX

En la historia de los regímenes políticos y la conformación de los estados antiguos y modernos siempre han existido diversas relaciones entre los gobiernos centrales y los gobiernos locales, provinciales o regionales, estas pueden ser centralistas, o sea, verticales, y jerárquicas, o igualitarias y más o menos autónomas, de tal manera que el centro del poder casi tiende a desaparecer, que en ciertas ocasiones se puede configurar como confederaciones o federaciones unidas por un débil pacto de unidad. Sin embargo en cualquiera de los casos pueden aparecer autoridades intermedias con cierta base de legitimidad y reconocimiento por parte de los habitantes del pueblo, provincia o región, o ser totalmente ajenas e impuestas por el gobierno central para gobernar desde el centro a dichas localidades y provincias. Estas autoridades intermedias solían llamarse jefes políticos o prefectos en el mundo iberoamericano durante el siglo XIX. El objetivo de este capítulo es explicar cómo, cuándo, dónde y por qué aparecieron los jefes políticos en el mundo iberoamericano durante dicho siglo.

Como autoridades intermedias regionales los jefes políticos del siglo XIX tuvieron sus antecedentes en los alcaldes mayores y regidores de la época colonial bajo la monarquía de los Austria, luego con las reformas borbónicas de la segunda mitad del siglo XVIII, los subdelegados de las intendencias tuvieron el papel de fungir como autoridades intermedias, en los gobiernos de regiones y comarcas que conformaban dichas intendencias. Pero a nivel de los distintos gobiernos virreinales o provinciales

estas autoridades intermedias, entre el poder central y los gobiernos de los cabildos, tuvieron sus propias especificidades, por lo que haré un recorrido superficial para explicar cómo se desempeñaban en Francia, España y en los territorios americanos durante el siglo XIX.

El régimen centralista francés como antecedente y modelo a imitar

En la construcción del Estado español durante la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del XIX, la influencia francesa fue notoria, la apropiación del modelo francés napoleónico fue determinante, la cual incluía fórmulas institucionales concretas como los conceptos de Estado, administración, y centralización del gobierno. Dicho modelo implicó un Estado tutor con influencia predominante en la sociedad y sus actividades, un Estado uniforme y centralista, que actuaba a través de la administración pública y que se identificaba con ella. A grandes rasgos, el Estado era en esencia la administración. En el modelo francés posrevolucionario los cuerpos intermedios eran considerados obstáculos que debían ser eliminados, para dejar actuar al Estado libremente, según fuera necesario y pertinente. El modelo francés posrevolucionario consideraba que el Estado era el único representante legítimo de los intereses colectivos, y el único indicado y autorizado para reconstruir la realidad del país en una dirección determinada.[1]

El modelo centralista francés surgió para luchar contra la falta de libertades que prevalecía en la monarquía absoluta. El objetivo era establecer un solo marco jurídico y un solo gobierno en todo el territorio nacional, por tanto, la necesidad centralizadora y uniformadora de los gobiernos posrevolucionarios chocó contra las autonomías locales propias del antiguo régimen. Napoleón presentó un sistema que eliminaba las autonomías locales, pero fue rechazado por los partidarios de las autonomías locales que veían en el centralismo la pérdida de las libertades públicas. A pesar de la fuerte oposición de diferentes sectores revolucio-

[1] Juan Pro. (2017), pp. 299-329.

narios, el centralismo se fue imponiendo por parte de Bonaparte y Chaptal al crear la administración francesa a inicios del siglo xix. Para llevar a cabo este modelo centralizador, lo más apropiado fue establecer una sola línea de mando o ejecución conformada por agentes o funcionarios jerárquicamente organizados, desplazando a las corporaciones colegiales y convirtiéndolas en un simple papel de deliberación o consejo.[2]

El modelo centralista del periodo revolucionario francés se exportó a otros países del continente europeo, y uno de ellos fue España, quien lo adoptó como administración del Estado, dicha administración se extendió a todos los municipios, convirtiendo al alcalde no solo en el presidente de la corporación, sino en un agente del poder central en el ayuntamiento. En este sentido, la administración de la revolución francesa, fue más centralista que la administración borbónica. Por acuerdo de la Asamblea Nacional, el 29 de septiembre de 1789, Francia quedó dividida en 85 departamentos, tomando en cuenta exclusivamente criterios geográficos y abandonando los nombres de los antiguos reinos. A su vez, cada departamento se dividió en distritos, siguiendo una división territorial uniforme. A la autoridad o representante del poder central en cada uno de los 85 departamentos, se le llamó "prefecto". El prefecto formaba parte de un grupo de gobernantes especializados, cuya única ambición era servir y ser útil al interés público. Este gobierno de prefectos se basó en un sistema de carrera y promoción profesional, creando grandes grupos de profesionales, quienes hasta cierto punto eran independientes de la política, incluso, éstos no podían ser juzgados por los tribunales sin autorización del Consejo de Estado hasta antes de 1870. La ley local napoleónica dio pleno poder al prefecto en su departamento, y, aunque al principio contaba con un consejo general que lo asesoraba, luego se transformó en un tribunal administrativo. Para cumplir con sus funciones, el prefecto contaba con un secretario general, que se encargaba de llevar los asuntos de personal y administrativos, y podía sustituir al prefecto en caso de ausencia, pero no en caso de fallecimiento. El prefecto estaba sujeto totalmente al empera-

[2] Sarmiento. (1993), pp. 10-11.

dor, pero respondía ante el Ministerio del Interior y ante el Ministerio de Policía. En cada departamento había un subprefecto, quien dependía totalmente del prefecto y atendía demarcaciones más pequeñas. Para finalizar este apartado, se puede afirmar que los salarios o los ingresos de los prefectos franceses eran muy elevados, lo que les permitía vivir al mismo nivel que los miembros más acaudalados de elite local en donde residían.[3]

La adopción del modelo francés en España

El Estado español del siglo XIX no fue una simple copia del modelo francés, pues la España decimonónica se caracterizó por una gran inestabilidad política y social, sin embargo, fue en el periodo de (1833-1834), durante el reinado de Isabel II, cuando el partido moderado tuvo hegemonía política, que el modelo francés se implementó en España con mayor éxito. La adaptación del modelo francés en España fue realmente una apropiación de dicho modelo, aunque de manera selectiva, lo que consistió en la incorporación de algunos elementos originales a las circunstancias españolas de esa época, a través de las lecturas e interpretaciones que hacían los gobernantes y dirigentes moderados españoles, por lo que no fue una mera imitación del modelo francés.[4]

Los conceptos franceses relacionados con la administración fueron introducidos a España durante el siglo XVIII, los cuales estaban vinculados a los conceptos de "derecho natural" y "ciencia de la policía". La tradición del derecho común prevaleció sobre el derecho natural y de gentes, en primer lugar, impulsado por las reformas de Carlos III. Lo mismo ocurrió con el concepto de "policía", el cual había sido utilizado en España durante los siglos XVI al XVIII trasladado del uso que se hacía en Europa continental, pero sobre todo en Francia y Alemania. El concepto de "policía" se usaba como sinónimo de "buen gobierno", lo que en la península ibérica se llamaba "gobierno político y económico de los pueblos", en otras ocasiones se utilizaba el concepto de "policía" para referirse de

[3] Sarmiento. (1993), pp. 11-14.

[4] Pro. (2017), pp. 301-302.

forma muy específica a las políticas de seguridad, sanidad y aseo de las ciudades, manteniendo el término de gobierno político y económico para el conjunto de la administración civil de nivel local. En el modelo francés el concepto de "policía" hacía alusión, de manera más clara y puntual, a las funciones represivas y de control público del Estado, este sentido fue el que predominó en la Constitución de Bayona de 1808, pero la Constitución de Cádiz de 1812 se distanció del concepto francés y se vinculó de forma más directa con la tradición hispana del gobierno político y económico de los pueblos, pues volvió a reunir en una misma institución o secretaría llamada Gobernación del Reino, las funciones de seguridad y de fomento económico.[5]

Con la invasión napoleónica de 1808 en territorio español, se inició un periodo de guerras que duró treinta años,[6] pero la modificación lenta y profunda de la cultura política e ideológica había comenzado unos años antes, desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La figura del prefecto en España nació con el Estatuto de Bayona de 1808, pero también se crearon los ministerios del Interior y de Policía de manera separada e independiente. El Ministerio del Interior tenía entre sus competencias y atribuciones la de gobierno del Reino, y la selección de candidatos a los puestos de la administración civil en las capitales de las provincias. También se ocupó de las diversas actividades económicas. Bajo el reinado de José I surgió la idea de una nueva división territorial, para lo cual se dictó un decreto en Sevilla el 17 de abril de 1810, estableciendo un gobierno civil para todos los pueblos del Reino, así el territorio español quedó dividido en 38 prefecturas y 111 subprefecturas, con el objetivo de que el poder del Rey se extendiera a todo el territorio de España e intentar atraer a gran parte de la población creando las comisarías regias. En dichas comisarías se designó a personajes notables para que se

[5] Pro. (2017), pp. 303-305.

[6] Miguel Artola. ((1983). *La burguesía revolucionaria (1808-1874)*. Madrid: Alianza Universidad, pp. 7-57.

hicieran cargo de ellas, y así fue el primer intento de división territorial en España.[7]

Había un magistrado encargado en cada prefectura, quien recibía el nombre de prefecto del gobierno civil, de la vigilancia sobre la administración de rentas y de la policía general. También se contó con un consejo de prefectura y una junta general de prefectura. El rey nombraba al consejo de prefectura, el cual estaba integrado por tres miembros, entre sus funciones estaba todo lo relacionado con las contribuciones y la ejecución de toda clase de obras públicas. El prefecto podía asistir a las reuniones del consejo de prefectura y en caso de asistencia lo presidía, cuando no asistía la presidencia recaía en el miembro de mayor edad. Las juntas generales de prefectura tenían atribuciones fiscales, estaban formadas por veinte miembros propietarios acomodados, los cuales eran nombrados por el rey a partir de una lista de candidatos propuestos por las municipalidades respectivas. Este organismo repartía las contribuciones directas entre los subprefectos de la demarcación, y además, examinaba las cuentas de los prefectos relativas a los gastos que se pusieran a su disposición. Las juntas generales de prefectura se reunían cada año, el rey nombraba al presidente, y éste a su vez, nombraba al secretario. Los miembros de la junta debían ser mayores de 25 años de edad y tener una propiedad raíz que le diera una renta de diez mil reales vellón. Solo a través del prefecto la Junta general podía dirigir sus informes a los ministros de Hacienda y del Interior.[8]

Las juntas generales de prefectura y el consejo de prefectura eran órganos de apoyo al prefecto. Las funciones del prefecto eran las siguientes: 1) vigilar la dirección e inversión de los bienes y rentas pertenecientes a las municipalidades y a los cuerpos o establecimientos públicos; 2) los hospitales y la policía urbana; 3) la beneficencia; 4) la salubridad pública; 5) las cárceles, en cuanto a la manutención de los presos y la salubridad de las mismas; 6) hospicios y casas de misericordia; 7) la instrucción pú-

[7] Sarmiento. (1993), pp. 18-22. Artola. (1983), pp. 20-21.

[8] Sarmiento. (1993), pp. 22-23.

blica y los establecimientos literarios y científicos; 8) el comercio; 9) la agricultura y la policía rural; 10) las manufacturas, artes y oficios; 11) las obras públicas, bajo cuyo nombre se comprenden los puertos de comercio, la navegación interior y los canales; y 12) las guardias cívicas.

El prefecto se relacionaba con los ministros del Interior, de Hacienda y de Policía, en asuntos que tenían que ver con la seguridad del Estado. Desde este punto de vista, el representante del gobierno central en el departamento o provincia era el prefecto. Los prefectos estaban obligados a visitar su prefectura durante el primer año de gobierno, y después cada dos años para ver el estado físico y moral de su provincia o departamento, derivado de ello podía proponer mejoras y resolver los problemas y necesidades que tuvieran las municipalidades. Con respecto al orden público, los prefectos podían pedir auxilio a la fuerza armada militar siempre que fuera necesario, y no se le podía negar. De la misma manera, podía contar con los policías y con la guardia cívica o milicias urbanas que estuvieran disponibles.[9]

El jefe político en la Constitución de Cádiz

Con la Constitución de Cádiz también aparecieron la división en provincias, la diputación provincial y el jefe político.[10] La provincia no era una figura nueva en España, el 12 de junio de 1812 comenzó el proceso de división territorial en provincias. De acuerdo con la Constitución de Cádiz, el jefe político o jefe superior era el representante del poder central en la periferia, lo cual significaba que era una constitución centralista con respecto al rey. El jefe político tenía entre sus funciones mantener el orden público y ejecutar las decisiones del gobierno.[11] Cada provincia que tuviera una diputación provincial debía contar con un jefe político, éste no tenía bajo su mando las milicias armadas en la provincia, excepto en casos graves de alteración del orden público, o cuando la seguridad

[9] Sarmiento. (1993), pp. 24-25.

[10] Artola. (1983), pp. 29-37.

[11] Sarmiento. (1993), pp. 48-51.

interior y exterior del reino estuviera en riesgo. Los jefes políticos recibían un sueldo fijo que como máximo llegaba a los 100,000 reales y como mínimo a 50,000 reales. Tenían como requisitos ser mayor de 25 años, haber nacido en territorio español, tener concepto moral, prestar adhesión a la Constitución y a la independencia política, tenían que residir en la capital de la provincia, y estar presentes durante las elecciones de diputados a Cortes, y cuando se reunía la diputación provincial. El jefe político presidía la diputación provincial y el ayuntamiento de la capital, pero solo votaba cuando había empate. El jefe político llevaba las comunicaciones de las diputaciones al gobierno. Conocía los recursos sobre las elecciones para los ayuntamientos, de tal manera que era el primer indicio de control electoral de los tribunales. También se encargaba del fomento de la agricultura, la industria y el comercio, y todo cuanto fuera útil y beneficioso para la provincia. El jefe político podía solicitar al comandante militar el auxilio de la fuerza armada cuando fuera necesario para conservar el orden público, también podía intervenir en los ayuntamientos y en las diputaciones provinciales. Los ayuntamientos tenían la obligación de rendir cuentas e informes al jefe político cada tres meses sobre los nacidos, casados, fallecimientos y epidemias. Pero sobre todo fueron las cuestiones financieras donde el control del jefe político era más estricto y minucioso, así que los ayuntamientos debían informar al jefe político sobre el tema del pósito, y pedir su autorización para aumentar los gastos para objetos de armamento. En síntesis, el jefe político era el intermediario entre la diputación y el ayuntamiento. Los ayuntamientos no podían dirigirse directamente a la diputación, sino solo a través del jefe político. Éste controlaba todas las relaciones entre las corporaciones locales entre sí, y las de éstas con el gobierno, de tal modo que todo pasaba por el jefe político quien ejercía un gran control sobre la vida de los entes locales.[12]

[12] Sarmiento. (1993), pp. 51-55.

Del regreso del absolutismo al periodo liberal

Fernando VII derogó la Constitución gaditana mediante un decreto emitido el 4 de mayo de 1814, de esta forma fue restaurado el sistema absolutista de forma temporal, pues posteriormente, en marzo de 1820, a consecuencia del levantamiento de Riego, Fernando VII se vio obligado a restablecer la Constitución de Cádiz.[13] Bajo la influencia del grupo de los afrancesados,[14] el rey estableció dos secretarías de gobierno, por un lado separó las funciones de policía como seguridad interior, lo que estuvo a cargo de la Superintendencia de Policía a partir de 1824, y, por otro lado, la Secretaría de Fomento se hizo cargo de la administración. El concepto de "administración pública" fue clave para sentar los principios que guiaron el desarrollo del Estado bonapartista sobre la base del despliegue de la burocracia. El concepto de administración sustituyó al de policía que se había utilizado en la monarquía francesa del antiguo régimen, adoptando sus prácticas al marco de un estado de derecho. De esta manera, la administración se dejó en manos de expertos y ya no dependía de las ideas contrapuestas de los partidos políticos.[15]

Con la ley de 1823 se constituyeron los ayuntamientos y las diputaciones provinciales en órganos representativos del vecindario y, por tanto, dotados de autonomía política y de amplias competencias administrativas, sobre esta concepción recaía el diseño estatal del liberalismo revolucionario, y de ahí la discrepancia con los del partido moderado, quienes proponían terminar con el ciclo revolucionario en España. Los moderados españoles miraban a Francia, pero en los tiempos de la monarquía de Orleans, como modelo de estabilización para traer una política de orden a la península española. Dicho modelo estaba enfocado en someter a los poderes locales a un Estado centralista, que utilizaba la administración directa para controlar la vida de los pueblos. Su referente era el modelo

[13] Tena. (1999), p. 59.

[14] Los afrancesados fueron un partido que colaboraron con José I y desde el poder trataron de impulsar su programa político e ideológico. Artola. (1983), p. 19.

[15] Pro. (2017), pp. 309-310.

basado en las leyes de organización municipal francesas del 21 de marzo de 1831, del 18 de julio de 1837 y la ley de consejos generales del 10 de mayo de 1838. Esta disposición puso las bases para establecer en la península ibérica una administración pública moderna, con una estructura del Estado bien racionalizada, a partir de dividir en prefecturas o en provincias al territorio español siguiendo el modelo de la división de Francia en departamentos posteriores a la revolución. No obstante, hubo grandes diferencias entre el modelo francés y el modelo español, pues el francés era más revolucionario y estrictamente racionalista, en tanto que la versión española fue más respetuosa de tradiciones históricas como las de los reinos preexistentes. En el caso español no se trató de un rompimiento revolucionario con el pasado, sino de mejorar la eficiencia en el control que el poder central ejercía sobre el territorio.[16]

Los moderados españoles querían un gobierno central con una administración pública jerarquizada, lo que implicaba establecer una cadena de mando que pasaba por los gobernadores provinciales y llegaba hasta los ayuntamientos, haciendo que estas dependencias administrativas fueron funcionales en el nivel local. Las doctrinas francesas estaban legitimadas por la existencia de una supuesta Ciencia de la Administración, por lo que se hablaba de la superioridad del modelo centralista, quitando toda autonomía política a las corporaciones locales, poniendo fin al ciclo revolucionario y evitando que los jueces se metieran en política, así querían lograr una nación uniforme, controlada desde arriba por un régimen político poco representativo y marcadamente autoritario. De este modo, la Ciencia de la Administración era elevada a la categoría de mito, casi sacralizada.[17]

Los subdelegados de fomento

El Ministerio de Fomento fue el centro de los cambios en la administración en todo el territorio español y sobre los propios ciudadanos. A través

[16] Pro. (2017), pp. 309-313.

[17] Pro. (2017), pp. 323-324.

de sus agentes las órdenes del centro se transmitían a la periferia. Pero, por otra parte, la estructura y poder político del reino permaneció sin cambios, de esta manera, el viejo régimen absolutista se mantuvo inalterable. No obstante, la división entre liberales y moderados tuvo diferencias significativas en el campo político-administrativo. A nivel político los moderados eran partidarios de una intervención activa en la vida política del rey, el cual participaría junto con la asamblea legislativa en la elaboración del marco jurídico, pudiendo vetar la aprobación de leyes por parte de la asamblea. El grupo de moderados lo integraban altos militares y funcionarios, sectores de la nobleza, grandes terratenientes, antiguos progresistas desengañados y afrancesados. En contraste, los liberales eran fuertes defensores de la Constitución de 1812, y partidarios del principio de soberanía nacional, rechazaban el veto por parte del monarca. Los liberales progresistas fueron todas las personas perseguidas durante el periodo de 1814-1833, a las que se sumaban sectores urbanos provenientes de clases medias, profesionistas liberales, mandos intermedios del ejército y antiguos miembros de la milicia nacional.[18]

En cuestiones administrativas las diferencias fueron más marcadas. Los moderados estaban en contra de la autonomía de los ayuntamientos y diputaciones provinciales, para ellos los ayuntamientos no tenían personalidad jurídica pública, solo tenían personalidad jurídica privada, por lo que estaban impedidos para intervenir en asuntos políticos que estaban reservados al gobierno central y solo podían administrar los intereses municipales. Los moderados sostenía que las entidades territoriales intermedias no debían existir, además opinaban que el agente del poder central en las provincias debía vigilar y controlar la a los ayuntamientos y diputaciones para que se ajustaran a las misiones encomendadas, también consideraban los moderados que los agentes del poder central debían tener la facultad para suspender los acuerdos de las corporaciones locales y quitar de sus cargos a los miembros de las mismas. Para los moderados los ayuntamientos, gobiernos provinciales y ciudadanos en general, eran

[18] Sarmiento. (1993), p. 482.

eternos menores de edad sobre los cuales había que ejercer la tutela del Ministro de la Gobernación y de sus agentes en las provincias. El gobernador civil o subdelegado de fomento fue propio de un estado jacobino, centralista y uniforme, en una sociedad donde prevalecieron los principios de un liberalismo moderado, que en el territorio español permaneció casi igual a lo largo de casi siglo y medio hasta que se aprobó la Constitución de 1978. En España estos cargos públicos fueron ejercidos con una gran lealtad política, cosa que no ocurrió en Francia, pues allá era un funcionario profesional quien desempeñaba esos puestos.[19]

Los jefes políticos en México

En México las autoridades intermedias no fueron una invención de los gobiernos republicanos del siglo XIX, ni una simple copia del modelo federalista norteamericano, como se ha sostenido equivocadamente por algunos autores,[20] éstas fueron producto de la evolución de los sistemas administrativos de la monarquía española desde el siglo XVI, los cuales establecieron las bases para el control político, administrativo y judicial que abarcaban los extensos territorios de la Nueva España. Desde varias décadas anteriores a la Independencia se habían dado importantes pasos para la conformación del Estado, al concebir el territorio como una unidad formada por partes, bajo una noción jerárquica y racional que facilitara su gobierno, y que funcionaría a distintos niveles desde lo local (municipal), al provincial (estatal) y al central (general). Dicho mecanismo había sido implementado en el siglo XVIII en términos administrativos y adquirió su dimensión política por la vía constitucional.[21] Sin embargo, la gran extensión del territorio de los reinos de ultramar y la distancia que separaba a la metrópoli de sus colonias obstaculizaron los intentos centralizadores de la Corona. Además la accidentada orografía del continente americano y la diversidad de la población indígena, su dispersión y concentración en

[19] Sarmiento. (1993), pp. 483-487.

[20] Vázquez. (2003), p. 19.

[21] Gortari. (2003), p. 76.

el amplio territorio, favorecieron el regionalismo.[22] El control y la administración de los extensos territorios y las diversas regiones necesitaron de un amplio aparato burocrático que se formó durante el periodo colonial, cada población, comarca, provincia o reino tenía su propia autoridad, pero también cada sociedad regional desarrolló sus propias características, identidad y particularidades sociales, culturales, económicas y políticas. De esta manera, la única forma de gobierno que podía adoptar el Estado surgido de la lucha de independencia fue la federalista.

El sistema de intendencias en la monarquía española fue esencial en la construcción de un Estado moderno, al imponer una racionalidad para la organización del territorio tanto en la península como en las posesiones de ultramar. De esta manera surgió una vocación unitaria patrocinada por las autoridades centrales que contribuyó a definir las fronteras de la Nueva España, al mismo tiempo también produjo una descentralización del gobierno general al establecer órganos administrativos intermedios en el nivel provincial y local. Así se creaba un sistema con tres niveles de gobierno que incluía lo local, lo provincial y lo general, lo que significaba una racionalización de la administración pública, esta estructura administrativa se mantendría aun después de la independencia de la Nueva España en la etapa constitucionalista.

La Constitución de Cádiz y el establecimiento de provincias en la Nueva España

En la Constitución de Cádiz de 1812 se introdujeron algunos cambios, pero también se mantuvieron ciertas continuidades en la concepción del territorio y las formas de organizarlo. En lo que respecta a la delimitación del territorio la Constitución gaditana consideró que la América septentrional comprendía a la Nueva España con la Nueva Galicia y la península de Yucatán, las provincias internas de Oriente y las provincias internas de Occidente, con lo cual se retomaba la antigua división en provincias y se ignoraba el sistema de intendencias, aunque quedó pendiente

[22] Vázquez. (2003), p. 19.

una división más adecuada al elaborar una ley constitucional relacionada con este asunto. En cuanto al gobierno interior, se tomaron en cuenta las provincias y los pueblos, con sus respectivos ayuntamientos y jefes políticos como responsables de su administración. Por tanto, el territorio se organizó en dos ejes fundamentales: las provincias y las municipalidades. La nueva división del territorio introdujo la representación y la demarcación político-administrativa, junto con la población, de esta manera las provincias se convirtieron en unidades del gobierno con la voz y el voto de los ciudadanos, acompañado de la creación de diputaciones electas por los ciudadanos con derecho a voto, al igual que nuevos ayuntamientos también electos. La diputación sería encabezada por un jefe superior de provincia, estaría formada por un presidente, el intendente y siete ciudadanos electos.[23] La diputación sería renovada cada dos años por mitad mediante elecciones por parte de los electores de partido, los requisitos para ser integrante de estas diputaciones provinciales eran: tener la ciudadanía, ser mayor de veinticinco años, y ser natural o vecino de la provincia con residencia al menos de siete años.[24]

La Constitución gaditana fue suspendida en 1814 y con ella la división provincial y sus gobiernos, pero se restableció en 1820, en la primera etapa de su vigencia se establecieron seis diputaciones: dos en la Nueva España, una en la capital y otra en San Luis Potosí; otra en Guadalajara, para la Nueva Galicia; una más en Mérida, para Yucatán; en Monterrey se estableció otra diputación, para las Provincias Internas de Oriente; y una más en Durango, y para las Provincias Internas de Occidente. Para el año de 1821, poco antes de la Independencia, ya se habían establecido 21 diputaciones provinciales.[25]

Hacia 1823 ya se contaban 22 diputaciones provinciales con sede en las ciudades cabecera de los siguientes territorios: Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guadalajara, Guanajuato, México, Michoacán, Nue-

[23] Gortari. (2003), pp. 51-55.

[24] Tena. (1999), p. 98.

[25] Gortari. (2003), pp. 54-55.

vo León, Nuevo México, Nuevo Santander, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tejas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. El surgimiento de estas diputaciones mostraba la importancia de los intereses de las élites provinciales, las cuales se expresaban por medio de ellas, y realizaron un papel determinante en la conformación de la federación mexicana, ya que la mayoría de estas provincias se convirtieron en estados y territorios de la primera República mexicana. El jefe político o gobernador provincial se había convertido en la máxima autoridad en el territorio de la provincia y en un instrumento básico de la centralización político-administrativa, ya que era nombrado por el gobierno central, y bajo su vigilancia y control quedaron los ayuntamientos de la diputación provincial.[26]

En el reglamento provisional del Imperio Mexicano del 18 de diciembre de 1822, quedó establecido que el jefe superior político de la provincia sería nombrado por el Emperador, y que en los puertos o cabeceras de partido muy dilatados o poblado se establecería un jefe político subalterno al de la provincia, y que, en las demás cabeceras o pueblos subalternos, el alcalde primer nombrado sería el jefe político.[27]

En términos muy generales los intendentes de las reformas borbónicas, pasaron a ser, con la Constitución de Cádiz de 1812 y el reglamento provisional del Imperio de 1822, los jefes superiores de provincia, y, en cuanto a los subdelegados de las intendencias, éstos se convirtieron en los jefes políticos subalternos de las provincias. Con la caída del emperador Iturbide y la promulgación del Plan de Casa de Mata se produjo un vacío de poder que aprovecharon las diputaciones provinciales, con el apoyo de los jefes políticos y militares, para asumir poderes extraordinarios y declarar su autonomía y su soberanía. La crisis política aumentó la politización de la población, y las diputaciones provinciales encabezadas por Guadalajara desafiaron a las autoridades centrales, a mediados de 1823 un número considerable de las diputaciones provinciales se declararon

[26] Gortari. (2003), p. 56.

[27] Tena. (1999), pp. 136-137.

como estados libres, independientes y soberanos, estableciendo gobiernos provisionales y convocando a elecciones. Finalmente el Congreso Constituyente se instaló el 7 de noviembre de ese año y redactó el Acta Constitutiva de la Federación, que fue aprobada el 32 de enero de 1824. A partir de ésta se reorganizó el espacio reconociendo los estados que se habían constituido y se crearon otros. Las 12 intendencias y tres gobiernos que existían al momento de la independencia se transformaron en diecisiete estados y dos territorios, que aumentaron a veinte estados, cuatro territorios y un Distrito Federal, al momento de aprobarse la Constitución de 1824.[28]

Entre el federalismo y el centralismo

A pesar de que este sistema federal surgió debido a la presión de las provincias, el Congreso constituyente asumió la existencia previa de la nación como un todo, compuesta por sus partes que eran los estados, pero pasó por alto el carácter de estados libres y soberanos, más bien dicho, el congreso optó por una soberanía compartida por el gobierno federal y por los estados libres, soberanos e independientes en lo relacionado a su gobierno interior, lo cual fue un pacto o compromiso entre los estados y la federación, pero no una copia simple del modelo norteamericano.[29] En la Constitución federal de 1824 se estableció que cada estado se organizaría libremente siguiendo la división de poderes, sin oponerse a la constitución federal y con gobiernos electos popularmente, para lo que cada estado elaboró su propia constitución particular. En dichas constituciones los estados siguieron el modelo federal republicano, pero adecuaron la redacción de las mismas a sus características y situaciones especiales, como la composición de sus territorios y los detalles de la elección o nombramiento de sus autoridades y representantes a los congresos locales. Así mismo, cada estado se asumió como libre y soberano en cuanto a su gobierno y administración interior, con respecto a otros estados de la fe-

[28] Vázquez. (2003), pp. 28-31.

[29] Vázquez. (2003), pp. 31-32.

deración y a cualquier nación extranjera, pero en todo lo relacionado con la federación mexicana delegaban sus facultades y derechos al Congreso general de la federación mexicana.

Entre 1824 y 1832 se redactaron las distintas constituciones políticas de la mayor parte de los estados de la federación mexicana. Fue en estas constituciones estatales donde se definieron los derechos y obligaciones de los ciudadanos de nacionalidad y ciudadanía, así como los requisitos que se establecieron para acceder ellos. Con respecto a su gobierno interno cada constitución estableció los criterios y las formas para elegir o nombrar a sus autoridades, las cuales correspondían a los tres poderes: legislativo, judicial y ejecutivo, y a los tres niveles de gobierno: estatal, departamental-cantonal y municipal. En relación a los gobernadores los requisitos y métodos para ocupar el cargo variaron muy poco según las constituciones particulares de cada estado, se exigía contar con la ciudadanía y los derechos correspondientes, ser mayor de treinta años de edad, haber nacido en el estado que gobernaría o dentro del territorio de la federación, la mayoría de las constituciones exigían cinco años, cuando menos, de residencia en el mismo estado que aspiraban a gobernar, con excepción de las constituciones de Oaxaca y Tabasco, que exigían siete y ocho años de residencia respectivamente. Pero solo en las constituciones de Chiapas y Veracruz se pedía que el aspirante a la gubernatura contara con capitales y propiedades. La forma para elegir al gobernador de cada estado no era mediante elecciones directas, sino indirectas, pues se conformaban juntas electorales de cada departamento, partido o distrito, las cuales elegían a uno o varios individuos, formando listas de las cuales el congreso estatal o una comisión del mismo, nombraba al individuo electo por mayoría de votos. En algunos estados las propuestas de candidatos salían de las juntas electorales municipales.

A nivel municipal, ninguna de las constituciones estatales dio a los ayuntamientos el estatuto de libres, autónomos y soberanos de forma explícita, aunque éstos elegían a sus autoridades alcaldes, regidores y síndicos, algunos de forma directa y otros indirecta, y administraban sus propios recursos, éstos debían ser empleados en lo que estrictamente se

estipulaba en las leyes y reglamentos respectivos, bajo la supervisión de los prefectos o jefes políticos de su departamento o cantón. Siguiendo lo establecido en la Constitución gaditana, algunos estados establecieron como mínimo las mil almas para erigir un ayuntamiento, fue el caso de las constituciones de Chiapas, Coahuila, Jalisco y Nuevo León. Mientras que otros estados incrementaron el número de habitantes a 2,000 (Querétaro), 3,000 (Guanajuato, Querétaro y Zacatecas); y otros hasta 4,000 almas como fueron los estados de México y Michoacán. En algunos casos, las constituciones de los estados establecieron que en los ayuntamientos que eran cabeceras departamentales quien presidía el ayuntamiento era el jefe político, en otros como Chihuahua, Guanajuato y Zacatecas, el primer alcalde pasaba a ser el jefe político, mientras que el segundo alcalde presidía el ayuntamiento. Las elecciones para presidentes o alcaldes municipales podían ser directas o populares en algunos estados o a partir de las juntas electorales municipales y se realizaban anualmente en la mayoría de los estados, o cada dos años en el caso de Coahuila y Texas. Era a este nivel municipal que las autoridades estaban más cercanas a los vecinos-ciudadanos de los pueblos y las elecciones eran más directas, pues los ciudadanos elegían a sus gobernantes sin intermediarios o con un solo grado de intermediación. Sin embargo esto no sucedía en otros niveles ya fuera a nivel departamental, estatal o nacional, porque gobernadores, jefes políticos, diputados, senadores y presidentes de la república eran electos mediante sistemas indirectos de dos o tres grados.

Entre el nivel municipal y el estatal existía la división política de departamentos, partidos o cantones, y las autoridades a este nivel recibían varios nombres según lo establecía cada estado en su constitución: jefe de policía, jefe de partido, prefecto, prefecto de distrito, gobernador de partido o jefe político. A estos gobernantes o funcionarios se les exigía ser ciudadanos en goce de sus derechos, un mínimo de edad entre los 25 y 30 años, y como tiempo de residencia o vecindad de 3 a 5 años en el estado o en algún lugar del territorio nacional. En la mayoría de los estados los prefectos o jefes de policía eran nombrados por el gobernador mediante una terna propuesta por el consejo de gobierno o directamente por el go-

bernador y duraría en el puesto cuatro años, con posibilidad de reelegirse, pero una sola vez. La Constitución de 1824 no dio solución a puntos importante como la relación entre el gobierno federal y los estados de la república, ni la relación entre éste y el ejército y la iglesia. El federalismo se entendía de distintas maneras, los estados del centro del país se inclinaban más por el centralismo, mientras que los estados más distantes de la ciudad de México eran partidarios de un fuerte confederalismo, sobre todo los estados situados al norte de la República mexicana, ni qué decir con estados como Texas y Yucatán que plantearon un serio separatismo.[30]

Durante la primera república federal tanto el gobierno federal como el de los estados se invadieron mutuamente, con el pretexto de los desórdenes de 1829 el gobierno federal envió tropas a los estados de Zacatecas y México, e intervino en las elecciones internas de algunos estados, por su parte, los estados no cumplían cabalmente con la entrega de los impuestos correspondientes a la federación, como fue el contingente, lo cual fue deteriorando profundamente el sistema federal.[31] El desencanto por el federalismo fortaleció las posiciones centralistas de varios grupos, sobre todo los situados en el centro del país, asegura Josefina Vázquez que el 75% de los pronunciamientos por el centralismo procedieron de los estados ubicados en el centro, principalmente de Puebla, Michoacán y el Estado de México, pero sobre todo de éste último, el cual sumó el 40% de los pronunciamientos centralistas. Este apoyo entre la población de estos estados se debió al conflicto entre muchas cabeceras de partido y las capitales de sus propios estados, quienes estaban inconformes por la obligación de proporcionar hombres tanto para el ejército federal como para las milicias estatales. Ante el temor de la separación de Texas, el gobierno de Santa Anna favoreció el centralismo con el fin de salvaguardar la unidad nacional.[32]

[30] Vázquez. (1993), p. 27.

[31] Vázquez. (1993), p. 26.

[32] Vázquez. (1993), p. 39.

Entre disturbios domésticos y la guerra de Texas, el 23 de octubre de 1835 el congreso estableció la nueva constitución centralista que se denominó Bases para la Nueva Constitución, conocida más popularmente como la Constitución de las Siete Leyes. Entre otras cosas, en esta constitución se estableció que el territorio nacional estaría dividido en departamentos según su población, y que el gobierno de los departamentos estaría a cargo de gobernadores nombrados directamente por el presidente de la república y sujetos al mismo, por otra parte, también se estableció que habría juntas departamentales electas "popularmente", que tendrían la función de ser el consejo del gobernador.[33] En las Leyes Constitucionales publicadas el 30 de diciembre de 1836 se amplió a detalle lo relacionado con el gobierno interior de los departamentos, donde se especificó que los gobernadores serían propuestos en terna por las juntas departamentales, y que cada gobernador duraría en el cargo ocho años, con la posibilidad de ser reelectos. Para ser gobernador se necesitaba ser mexicano por nacimiento, o haber nacido en cualquier parte de América antes de 1810, siempre que residiera en la república al tiempo de consumarse la independencia. Además, debía ser ciudadano en plenos derechos y ser natural o vecino del mismo departamento, con una edad mínima de 30 años. También se le impuso el requisito de tener un capital, físico o moral, que le produjera de renta anual al menos dos mil pesos, y, por último, pertenecer al estado secular.[34]

Los gobernadores de los departamentos nombraban a los prefectos y subprefectos, y confirmaban los nombramientos de los jueces de paz. También podían suspender a los ayuntamientos del departamento, con acuerdo de la junta departamental. Los prefectos gobernaban los distritos y radicaban en la cabecera distrital, el nombramiento de estos funcionarios por parte de los gobernadores debía ser confirmado por el gobierno general, y tenían una duración de cuatro años con la posibilidad de ser reelectos. Los prefectos debían cumplir con los mismos requisitos que

[33] Tena. (1999), p. 203.

[34] Tena. (1999), p. 239.

el gobernador, pero se pedía un capital que les produjera cuando menos mil pesos anuales. El prefecto cuidaba la tranquilidad y el orden de su distrito, con entera sujeción al gobernador, vigilaba el cumplimiento de las obligaciones de los ayuntamientos, sobre todo del ramo de policía. En la cabecera de cada distrito habría un subprefecto, al cual se le pedía la ciudadanía, ser vecino del partido y mayor de 25 años de edad, y poseer un capital que le diera una renta anual de quinientos pesos. Las funciones del subprefecto eran las mismas que las del prefecto en el distrito, con sujeción a este y, por su medio, al gobernador.[35] En el Proyecto de Reforma Constitucional del 30 de junio de 1840, los gobernadores de los departamentos, seguían siendo nombrados por el presidente de la república, pero aumentó su periodo de gobierno a ocho años, pudiendo ser reelectos. También nombraban a los prefectos y confirmaban el nombramiento de los subprefectos. Los requisitos para ser prefecto seguían siendo los mismos que en 1836, pero al igual que los gobernadores aumentó el tiempo para desempeñar su cargo a ocho años, con posibilidad de ser reelectos. En el caso de los subprefectos no hubo cambios importantes con respecto a la constitución anterior.[36]

De acuerdo a estas leyes centralistas, el control del gobierno central pasaba por los niveles del departamento al distrito y al municipio, ya que la línea de mando pasaba del centro a los ayuntamientos por medio de autoridades intermedias quienes rendían cuentas a su superior inmediato. Las Siete Leyes establecieron una nueva reorganización del espacio, el territorio quedó dividido en departamentos, distritos y partidos. Los territorios de California y Nuevo México, incluido Texas (al que no se le reconocía su independencia), pasaron a ser departamentos, Tlaxcala y el Distrito Federal formaron parte del estado de México. Por lo anterior, la centralización era clara, lo que trajo problemas en todo el territorio nacional, pero particularmente en la ciudad de México, ya que su ayuntamiento desafió varias veces a su gobernador y al propio Santa Anna. La puesta en

[35] Tena. (1999), pp. 242-243.

[36] Tena. (1999), pp. 282-283.

vigor de las Siete Leyes no acabó con los problemas del país y el apoyo al centralismo se esfumó debido al rechazo de los grupos gobernantes de los departamentos quienes perdían autonomía en los presupuestos, que estaban controlados por los funcionarios del centro, quienes debían pagar al ejército y a los servidores departamentales. Como los gobernadores eran al mismo tiempo los comandantes generales del ejército, éstos comenzaron a competir o a aliarse con las élites provinciales, las cuales acudieron a sus vínculos con el centro para influir en las decisiones que les afectaban. Así el ejército federal se descentralizó, pues dependía de los pagos que le hacían las comisarías departamentales. Los gobiernos bajo los dos sistemas federalista y centralista no lograron cabalmente imponer su autoridad sobre el territorio nacional. La desarticulación entre el gobierno general y el de los estados o departamentos prevaleció durante el periodo de 1823 a 1847 sin importar el sistema de gobierno, solo se atenuó un poco después de la guerra con Estados Unidos a fines de 1847. La debilidad del gobierno central se mantuvo durante dicho periodo. El territorio ocupado por la antigua provincia de Nueva España fue la base fundamental para sostener el unitarismo político, pero los departamentos alejados de dicho centro fueron favorecidos por la debilidad del gobierno central, y resistieron a los comandantes generales que manaba el gobierno central para someterlos, o los convencieron de aliarse con ellos para defender sus intereses locales, al final de la guerra con Estados Unidos, la idea del federalismo salió fortalecida.[37]

Los jefes políticos en la segunda mitad del siglo XIX

La Constitución de 1857 no fue una simple reedición o copia de la Constitución federal de 1824, según Carmagnani entre ambas constituciones hay más discontinuidades que continuidades. En la Constitución de 1824 la federación tenía muy poco espacio de maniobra o pocas competencias, ya que la soberanía de los estados lo tenían casi todo, y estos delegaban al Congreso general solo aquello que tenía que ver con la federación. Esto

[37] Vázquez. (1993), pp. 41-47.

desembocó en una tensión entre los grupos e intereses que defendían las autonomías de los estados, y los que privilegiaban la soberanía unitaria, una tensión entre federalistas y centralistas. El federalismo establecido en la Constitución de 1857 y consolidado con el triunfo republicano liberal de 1867 se caracterizó por establecer la existencia de dos esferas autónomas, la de la federación y la de los estados, unidos en un pacto que llevaba a la colaboración. Dicha colaboración se basaba en que las garantías constitucionales, que eran comunes a todos los habitantes de la nación, estaban depositadas en la federación, en donde además se depositaban los bienes nacionales y los bienes nacionalizados a las corporaciones, como la iglesia y los pueblos o ayuntamientos. La federación tenía el control de todo el territorio a través del ejército federal, y cobraba impuestos específicos por medio de su Secretaría de Hacienda, los cuales le daban a la federación bases sólidas e independientes para poder ejercer sus atribuciones y obligaciones constitucionales, sin depender de los estados como acontecía en la Constitución de 1824.[38]

Carmagnani sostiene que hubo una fuerte continuidad entre la república restaurada y el primer periodo porfirista, la cual se alargó hasta el final del porfiriato, de tal manera que divide en dos periodos la evolución del federalismo liberal de la siguiente manera: el federalismo de compromiso (1867-1890), y el federalismo conciliatorio (1890-1911). El punto de partida de la primera etapa fue la organización de los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Por su parte los estados de la federación elaboraron sus constituciones particulares de manera muy rápida en la década de 1860 aceptando las nuevas reglas del juego. Los estados favorecieron la preservación de las formas políticas preexistentes, caracterizadas por sistemas electorales de tipo directo, especialmente en el centro-norte del país, mientras que el sistema electoral federal estableció uno de tipo indirecto en primer grado. Además, algunos estados del centro-norte también dieron a los ayuntamientos un estatus no sólo administrativo, sino también político, denominado poder municipal, lo

[38] Carmagnani. (1993), pp. 135-179.

que garantizaba en algunos estados, la elección directa de autoridades municipales y de distrito, como los jefes políticos. Mientras que en otros se controló la autonomía municipal a través del nombramiento de los jefes políticos o prefectos por parte del gobernador. El gobierno de la federación trató de influir en las elecciones para presidente de la república, diputados, senadores del Congreso nacional y ministros de la Suprema Corte de Justicia, no por medio del fraude electoral al momento de emitir el voto, sino mucho antes, al elaborar las listas de candidatos y electores quienes elegirían al presidente, senadores, diputados y ministros de la Corte, de tal manera que las personas que llegaran a esos cargos fueran individuos influenciables por la presidencia de la república, mientras que, por otra lado, las autoridades estatales harían lo posible porque los candidatos a los cargos de elección federal fueran personas comprometidas con la defensa de los intereses de su estado.[39]

La reforma constitucional que estableció un Poder Legislativo bicameral permitió que la representación de los estados a través de los senadores fuera más directa y adecuada, mientras que los diputados se asumieron principalmente como representantes de la nación, y no propiamente de sus estados de origen. No obstante, el presidente de la república y sus agentes pudieron influir con mayor fuerza en la política interna de los estados negociando con los distintos grupos de poder político local, aliándose con unos, beneficiando a otros y oponiéndose a otros más. La reforma constitucional de 1887 que permitió la reelección contribuyó a que el ejecutivo federal hiciera acuerdos más sólidos y de más largo plazo con los grupos de poder en los estados, de tal manera que se abandonó la incertidumbre de las elecciones cada cuatro años, favoreciendo la verticalidad del poder en manos del presiente de la república y de los gobernadores de los estados, permitiendo una mayor estabilidad y gobernabilidad y una regulación de las luchas entre los grupos de notables dentro del ámbito estatal o regional. El resultado fue que el presidente de la república ya no necesitó recurrir a la desaparición de poderes para lograr la

[39] Carmagnani. (1993), pp. 153-155.

pacificación de los estados, sino que llegaba a acuerdos conciliatorios con los grupos de poder locales lo que fortaleció el carácter personalista del régimen porfirista.[40]

La política conciliatoria en el tema electoral se generalizó a partir de 1898 y consistió en lo siguiente: los gobernadores de los estados disponían de los cargos suplentes a cambio de la lealtad a las decisiones del Poder Ejecutivo en lo relativo a los nombres de los propietarios. Esto benefició en gran medida a los estados ya que muchos propietarios renunciaron a sus diputaciones y senadurías ascendiendo los suplentes al cargo legislativo, lo cual favoreció en gran medida la posición del gobernador en turno, teniendo con ello mayor poder y autonomía. Esto se reflejaba en que las listas de diputados, senadores y magistrados recomendadas por el gobernador, recibían total aprobación del Ejecutivo, lo que significaba que el gobernador gozaba de mayor poder y autonomía para designar los cargos electivos en sus propios estados. Con el tiempo las listas con los nombres de los candidatos a ocupar diputaciones y senadurías se volvieron un mero trámite. Entre 1890 y 1911 el Estado federal dejó de intervenir en los asuntos internos de los estados, con ello la tensión que había entre federación y estados se fue diluyendo fortaleciendo a los grupos de poder locales y concentrando el poder en el gobernador.[41]

Con respecto a las autoridades intermedias dentro de los estados: jefes políticos o prefectos, y sus subordinados, las decisiones sobre su nombramiento estuvieron la mayoría de las veces dentro del ámbito de los gobernadores de los estados, aún en la legislación centralista de 1836-1842, y en el periodo en que predominó el imperio de Maximiliano. Si bien en el caso de la Constitución de 1836 los nombramientos de prefectos lo hacían los gobernadores de los estados, dichos nombramientos debían ser confirmados por el Gobierno general.[42] En el caso del Segundo Imperio, el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, del 10 de abril de

[40] Carmagnani. (1993), p. 167.

[41] Carmagnani. (1993), pp. 168-169.

[42] Tena. (1999), pp. 239-244.

1865, establecía que el territorio del Imperio se dividiría en ocho grandes divisiones para su administración, divididas en cincuenta departamentos, cada departamento en distritos, y cada distrito en municipalidades. A las autoridades de los departamentos se les llamó prefectos, los cuales eran delegados nombrados por el emperador. En los distritos habría subprefectos que serían nombrados por el prefecto departamental, con la aprobación del emperador. Los municipios estarían gobernados por alcaldes, los que serían nombrados por los prefectos de cada departamento, con la ratificación imperial, con excepción de la ciudad de México cuyo alcalde sería nombrado y removido directamente por el emperador.[43]

La Constitución de 1857 volvió a dejar en manos de los gobernadores de los estados el nombramiento de las autoridades intermedias y aquí las constituciones respectivas de cada estado tuvieron sus variantes, en la mayoría de las constituciones se les denominó "Jefe político", solo en Guanajuato se le llamó "Jefe de policía". Las demarcaciones gobernadas por ellos eran llamadas "partido" (Aguascalientes, Guanajuato, Tabasco y Zacatecas), "distrito" (Puebla, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Estado de México), "departamento" (Chiapas), o "cantón" (Jalisco y Veracruz). En general las constituciones de los estados establecieron que los jefes políticos debían cumplir como requisitos, tener la ciudadanía con plenos derechos, ser mayor de 25 años de edad, ser vecino del partido, distrito o cantón que iban a gobernar o cumplir con algunos años de residencia en el mismo. En lo que respecta a las formas de nombramiento de estos jefes políticos hubo ciertas variaciones entre los distintos estados, desde los que eran electos directamente por los ciudadanos de los municipios, a los que eran nombrados a través de ternas, y los que eran designados directamente por el gobernador del estado. En el caso de Aguascalientes los jefes políticos eran nombrados por el gobernador a partir de ternas propuestas por los ayuntamientos o juntas municipales. En Jalisco fueron propuestos en ternas por el consejo de gobierno al gobernador del estado. En Chiapas eran nombrados por los ayuntamientos del de-

[43] Tena. (1999), pp. 674-675.

partamento y sujetos al gobernador del estado (Chiapas), y en los casos de Zacatecas, Puebla y Sinaloa, eran electos directamente por el pueblo o los ciudadanos. En casos como el de Nuevo León y Coahuila le distrito solo era una demarcación electoral, y entre los municipios y el gobernador no había autoridades intermedias. Mientras que, en el estado de Guanajuato, los jefes políticos eran nombrados directamente por el gobernador. Los jefes políticos duraban en el cargo de dos a cuatro años según cada estado, con la posibilidad de ser reelectos.

Las prefecturas en Argentina

A decir de Juan Carlos Chiaramonte, entre 1810 y 1853 los pueblos que conformarían la futura República Argentina no tuvo un texto constitucional ni una estructura estatal permanente, en este periodo el "federalismo argentino" no era sino un conjunto de tendencias políticas poco definidas según sus postulados teóricos o doctrinarios, dicho federalismo solo produjo un débil pacto para formar una confederación, que tuvo vigencia entre 1831 y 1854. Incluso, agrega el autor, no llegó ni a eso, pues parecía más bien una alianza, ya que a los pocos meses de establecida desapareció su órgano de gobierno central. Durante las primeras dos décadas de vida independiente (1810-1831) se llevaron a cabo cuatro asambleas que tenían como objetivo principal constituir una nación, dichas asambleas solo elaboraron dos textos constitucionales, los que fueron rechazados e invalidados por los gobiernos de las provincias debido al carácter unitario del Estado que diseñaron. Por este motivo, la organización política de los distintos pueblos rioplatenses se mantuvo en la indefinición, mientras que las autoridades de Buenos Aires en la década de 1810-1820 continuaron gobernando con las ordenanzas de intendentes de la época colonial, más algunas modificaciones que se impusieron dados los acontecimientos ocurridos.[44]

[44] José Carlos Chiaramonte. (1993). El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX. En Marcello Carmagnani (coordinador). *Federalismos latinoamericanos: Méxi-*

El fracaso de las distintas asambleas constituyentes fue causa de una gran dificultad para los actores sociales y políticos de esa época, también para los historiadores, ya que no se podía definir cuál era la naturaleza de la organización política rioplatense después de 1810. Para la historiografía argentina este periodo se puede dividir en dos partes, una dominada por el conflicto en torno a la forma de gobierno, especialmente entre unitarios y federales, y otra marcada por el triunfo del federalismo. Chiaramonte sostiene que a fines del periodo colonial y las primeras décadas posteriores a la independencia el término de "argentino" solo se usaba para referirse a los habitantes de Buenos Aires, pero la historiografía argentina generalmente lo usa como si se aplicara a todos los habitantes del territorio actual, lo que ha derivado en la creencia de que la nacionalidad argentina ya existía hacia 1810. Pero también aclara este autor que el concepto de "federalismo" se ha tomado de manera equivocada, ya que su uso aludía más bien al término de una confederación de estados independientes que se unen por un pacto de alianza, y no a un Estado nación unido con estados federados, lo cual no ocurrió sino hasta 1853. Lo que existía hacia 1831 era una confederación, y no un Estado federal. Esto dio origen a la Confederación Argentina que fue vigente hasta el Acuerdo de San Nicolás en 1852.[45]

En el pacto de 1831 se estableció una alianza que se considera a sí misma como provisional y que reconoce la libertad e independencia de cada una de las provincias firmantes. No había un concepto unitario de soberanía, sino que cada una de las provincias se reservaba para sí prácticamente todo el ejercicio de la soberanía, con muy escasa delegación de poderes. Esta débil organización confederal perduró hasta la Constitución de 1853. La Ordenanza de Intendentes de 1782 había dividido al territorio en las intendencias de Salta del Tucumán, Córdova del Tucumán, Paraguay, La Plata, Cochabamba, Potosí, La Paz y Buenos Aires.

co/Brasil/Argentina. México: El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, pp. 81-132.

[45] Chiaramonte. (1993), pp. 81-132.

Los territorios que formarían la futura República Argentina pertenecían a las intendencias de Tucumán, Córdoba y Buenos Aires. Las otras darían origen a las repúblicas de Paraguay y Bolivia. Cada una de estas intendencias tendría un gobernante designado directamente por el rey, este era el intendente y se establecería en la ciudad capital de cada intendencia. En 1813 el triunvirato separó del gobierno de la intendencia de Córdoba a los tres pueblos de Cuyo y formó con ellos una nueva intendencia con la denominación de provincia del Cuyo. Poco después en 1814 se formaron las provincias de Uruguay, Entre Ríos y Corrientes, separándolas de Buenos Aires, y las de Salta y Tucumán que habían pertenecido a la intendencia de Tucumán. En 1818 se formó la provincia de Santa Fe, segregándose de Buenos Aires; Santiago del Estero se separó de Tucumán en 1820, y Jujuy en 1834 se separó de Salta.[46]

Después de la independencia los gobiernos y habitantes de estas provincias se asumieron como pueblos y gobiernos soberanos, distintos, autónomos e independientes de los otros, pero consideraron necesario establecer un pacto de unidad entre ellos sin perder su soberanía e independencia. Estas tendencias llamadas en términos genéricos "federales" se fundaban en los antiguos derechos de los "pueblos" al autogobierno de ascendencias hispánica y colonial. Al inicio de la década de 1820 las ciudades cede del gobierno de las intendencias tuvieron un nuevo protagonismo político, se asumieron como provincias autónomas, lo cual no fue una prolongación de la antigua intendencia, sino una ampliación del papel político de las ciudades soberanas al punto de configurar un estado independiente.[47] Durante el periodo de 1831 a 1853, las "provincias" conservaron su funcionamiento como estados independientes, pero a partir de 1853 se dio paso a la formación de un estado federal en la nación Argentina. Este proyecto se llevó a cabo mediante la elaboración de una constitución nacional bajo el modelo representativo, republicano y federal, y cuya inspiración fue la constitución federal de Estados Unidos, con

[46] Chiaramonte. (1993), pp. 81-132.

[47] Chiaramonte. (1993), pp. 81-132.

todo lo que ello implicaba en relación a la declaración de derechos, el presidencialismo, la separación de poderes, el ejercicio directo e indirecto de la soberanía del pueblo y el control judicial, pero en el caso argentino hubo marcados rasgos hacia el predominio del poder ejecutivo, atemperado por la no reelección inmediata del presidente de la república, a lo que se sumó el desequilibrio regional entre Buenos Aires y el interior.[48]

Esta constitución fue vigente en un país dividido por la guerra civil hasta 1862, cuando comenzaron a limitarse las viejas soberanías que todavía prevalecían en muchas provincias, y que obstaculizaban la efectiva unificación de un Estado federal. Este proceso finalizó en 1880 con la federalización de la ciudad de Buenos Aires, lo que dio lugar al desarrollo de dos tipos de regímenes de gobierno del Estado federal, el primero de 1880 a 1916 caracterizado por un federalismo restrictivo, organizado en torno a gobiernos electores y al control de la sucesión; y el segundo de 1912 a 1930 en el que se desarrolló una temprana experiencia democrática.[49]

Al tratar de los temas de "centralismo", prefectos y jefes políticos habría que tener en cuenta que lo que es el actual territorio de la República de Argentina, en la primera mitad del siglo XIX estaba constituido por una serie de provincias que reclamaban para sí su propia autonomía e independencia y que en ese periodo no había un centro político capaz de someter a su lógica a los gobiernos provinciales, cuando se habla de jefes políticos o prefectos se está aludiendo a autoridades intermedias entre el gobierno de los pueblos o localidades y el gobierno de la capital provincial, estos es, las capitales provinciales centralizaban el poder político de sus amplios territorios y el medio por el cual gobernaban era a través de prefectos o jefes políticos. Hasta 1880 no se puede hablar de un centralismo ejercido por la ciudad de Buenos Aires sobre el resto de las provincias.

[48] Natalio R. Botana. (1993). El federalismo liberal en Argentina: 1852-1930. En Marcello Carmagnani (coordinador). *Federalismos latinoamericanos: México/Brasil/Argentina*. México: El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, pp. 224-259.

[49] Botana. (1993), pp. 224-225.

Los prefectos en el Perú durante el siglo xix

Desde el siglo xvi el Perú ha tenido una tradición marcadamente centralista, la cual tiene su explicación en la forma en que se construyó el Estado-nación. Durante la segunda mitad de dicho siglo se instauró en el Perú una red burocrática colonial que tenía marcadas autonomías locales y la influencia civil correspondiente. Debajo del virrey estaba la Audiencia, que funcionaba como un consejo de estado, y más abajo, los corregidores, que se desempeñaban como gobernadores provinciales, todos estos funcionarios eran nombrados por el rey, quien era el poder central. Los corregidores contaban con tenientes en los pueblos, como sus auxiliares o representantes, los cuales eran designados por ellos mismos. Estos tenientes hacían alianzas con los curacas y delegaban en ellos parte de sus funciones. Los corregidores eran una pieza clave en la estructura burocrática española, quienes gobernaban a nombre del rey y monopolizaban las funciones de justicia, gobierno y recaudación fiscal. La comunidad civil solo controlaba los cabildos tanto en las ciudades españolas como en los pueblos indios. No obstante, desde las primeras décadas del siglo xvii prevaleció en el territorio del virreinato peruano un centralismo de facto. Los criollos accedían a los puestos burocráticos a través de la venta de cargos administrativos y de gobierno, lo que produjo una descentralización administrativa, con la consecuente pérdida de soberanía por parte del Estado central, cada provincia pagaba su propia burocracia.[50]

La reforma borbónica de 1784 creó siete intendencias en el Perú y 52 partidos, después en 1796 se añadió la intendencia de Puno, que había pertenecido al virreinato de Río de la Plata. Estaba claro que el centro era el creador de las regiones, y no eran las regiones las que se imponían al centro. Los intendentes centralizaron en sus manos las funciones de gobierno, defensa y hacienda, al mismo tiempo que el sistema de venta de cargos era cancelado, a partir de entonces los impuestos se recaudaron bajo el sistema de administración directa y no por los rematistas parti-

[50] Carlos Contreras. (2002). Centralismo peruano en su perspectiva histórica. *Instituto de Estudios Peruanos*, Documento de Trabajo No. 127, Serie Historia, 24, pp. 1-35.

culares. En las principales ciudades los criollos fueron afectados en sus privilegios ya que habían sido desalojados del poder, y tenían que pagar mayores impuestos. A partir de 1808 con la invasión de los ejércitos napoleónicos a la península ibérica y la detención del rey de España, la monarquía entró en una gran crisis, entonces cada virreinato, cada audiencia, y jurisdicciones menores se separaron para repetir el ejemplo de Cádiz con el fin de construir un orden constitucional y liberal en medio de poblaciones sin tradiciones cívicas y enormemente diferenciadas en sus regímenes económicos y tradiciones culturales.[51]

Entre 1829 y 1836 el Perú experimentó una gran inestabilidad, que se reflejó en catorce revoluciones durante el primer gobierno del general Agustín Gamarra (1829-1833), una revolución que derivó en dictadura, dos guerras civiles y una invasión extranjera bajo la presidencia del general Luis José de Orbegoso (1834-1836). La Constitución liberal de 1823 creó el cargo de prefecto y le encomendó el gobierno superior político de los departamentos, así se sustituyó a los gobernadores por los intendentes para el gobierno de las provincias. Los prefectos dependieron directamente del presidente de la república y sus atribuciones quedaron limitadas al orden y a la seguridad pública, se les prohibió participar en procesos judiciales, y su periodo en el cargo se limitó a cuatro años. También se les impidió violar la seguridad personal aunque se les autorizó encarcelar a cualquier persona por alterar la tranquilidad pública hasta que un juez dictaminara sobre su libertad.[52]

Durante la dictadura bolivariana se decretó que los municipios propusieran al presidente a sus prefectos, intendentes y gobernadores, pero esto fue muy complejo e imposible por lo que se suspendió el 27 de mayo de 1826. Luego en la Constitución de 1828 se confirmó que los prefectos y subprefectos se encargaran de la hacienda departamental, pero se les restringió que intervinieran en las elecciones populares y en las juntas de-

[51] Contreras. (2002), pp. 1-35.

[52] Víctor Peralta Ruiz. (2016). De Prefectos a Mandatarios de la Nación. La violencia en la política peruana (1829-1836). *Revista de Indias*, vol. LXXVI, no. 266, pp. 173-201.

partamentales. Posteriormente, en las Constitución liberal de 1834 se les prohibió a los prefectos impedir el funcionamiento de los ayuntamientos. En las constituciones de 1823 y 1828 se estableció que las juntas departamentales fueran las que presentaran la lista de candidatos a prefectos al senado y al ejecutivo, pero en la Constitución de 1834 se dispuso que tales candidaturas fueran propuestas por los colegios electorales de provincia al presidente.[53]

Con la independencia en el Perú se experimentó un periodo de descentralización dado que Lima, la capital del virreinato, perdió legitimidad como cabeza organizativa. La primera generación de la independencia fue muy sensible al centralismo y querían romper con él, ya que éste se asociaba con el régimen colonial contra el que habían luchado. Derivado de ello, en la primera Constitución de 1823, se crearon juntas departamentales y el cargo de presidentes de los departamentos. Estas juntas fueron desconocidas en 1826 por la Constitución bolivariana, y fueron integradas nuevamente en la carta magna de 1828, la gamarrista, para sumergirse otra vez en el olvido en las constituciones de 1834 y 1839. Los miembros de las juntas departamentales eran electos por la población de acuerdo a un cupo para cada provincia, sus funciones no eran de gobierno, sino de promoción de los intereses del departamento y de algo parecido a un consejo de estado para las autoridades políticas, los prefectos, quienes eran nombrados por el poder ejecutivo residente en Lima, desempeñaban labores de fiscalización de los agentes del gobierno central, pero no tenían ingresos propios, salvo algunos impuestos menores. Las juntas departamentales eran un mecanismo de capacitación de las elites locales por parte del gobierno central, los prefectos no eran originarios de las regiones que gobernaban, más bien su papel era asesorar al estado central en el interior, pero nunca reemplazarlo. El periodo de 1821-1854 se considera como un periodo descentralizado, con cierta autonomía fiscal de los departamentos del interior, aunque los prefectos y subprefectos eran nombrados por el gobierno central, lo que recaudaban

[53] Peralta. (2016), pp. 173-201.

en sus departamentos no se centralizaba, sino que se redistribuía en las mismas provincias o departamentos para el pago de la burocracia local y de las obras públicas que se hacían. No había un presupuesto nacional, sino cajas departamentales. Por otra parte, las autoridades locales no tenían la facultad para hacer iniciativas de gasto público en sus regiones, éstas debían consultar al gobierno federal si querían hacer una obra a cargo de los fondos del departamento.[54]

La situación de una relativa descentralización cambió radicalmente con la producción de guano a partir de 1840, cuando se realizaron las primeras exportaciones de este producto a Europa, pero se consolidó a partir de la década de 1850 cuando las exportaciones de guano causaron una revolución en las finanzas públicas debido al incremento de ingresos por estas exportaciones. Lo que implicó el desarrollo de una férreo centralismo fiscal, ya que era el Tesoro central el que captaba esos recursos monetarios y luego los distribuía según las lealtades y clientelas políticas que había, obteniendo con ello la subordinación de las élites locales al poder central, abriendo paso a una marcada centralización política derivada de la centralización fiscal. Cuando el negocio del guano llegó a su fin, a partir de la década de 1870, el centralismo derivado de ello se vino abajo, y esto ocurrió antes de la guerra con Chile. En 1873 Manuel Pardo inició un importante proceso de descentralización a partir de la Ley de Municipalidades. El gobierno de Pardo transfirió a los consejos departamentales y provinciales el servicio de instrucción pública, el mantenimiento y realización de obras públicas, la atención hospitalaria y de beneficencia, el registro civil y otras funciones municipales. También transfirió a esas entidades dos tercios de las contribuciones directas recaudadas en los mismos territorios, y estableció que los colegios electorales de las localidades serían quienes elegirían a los miembros de sus propios consejos.[55]

La guerra con Chile terminó con la derrota y la consecuente ocupación de Perú. La paz de Ancón (1883) estableció la pérdida perpetua de

[54] Contreras. (2002), pp. 1-35.

[55] Contreras. (2002), pp. 1-35.

los territorios salitrosos y la entrega de un millón de toneladas de guano a Chile, con lo que el Estado peruano perdió los recursos que habían garantizado sus ingresos y las bases del fuerte centralismo de las décadas anteriores en Perú, ello obligó a los peruanos a reconstruir el aparato estatal con otras bases más firmes y, al mismo tiempo, más descentralizadas. A partir de 1886 se llevó a cabo el experimento más importante de descentralización en Perú, el del gobierno del general Cáceres, comenzó la descentralización por el aspecto económico-fiscal, antes que el político, lo que sería la antesala de un federalismo. Entonces se estableció que las contribuciones recaudadas en cada departamento quedarían en la tesorería departamental, para el gasto del propio departamento, sin centralizarse en Lima, ya fuera física o contablemente. Al lado del presupuesto central se elaboraron presupuestos departamentales, de esta manera, los ingresos y gastos públicos fueron divididos según correspondiera al presupuesto central o a los de los departamentos.[56]

Sin embargo, los centralistas limeños sostenían que no había dirigentes preparados en el interior del país, por lo que se estableció que los prefectos debían presidir las juntas departamentales, estableciendo una cierta tutela del ejecutivo central sobre las administraciones locales, siguiendo la cadena prefectos-subprefectos-gobernadores, quienes debían aplicar las disposiciones de las juntas, resultando que el brazo ejecutor se convertía a la vez en un ente director, traicionando el espíritu de la reforma. Aunque finalmente en 1893, el gobierno de Morales Bermúdez separó a los prefectos de la dirección de las juntas, sin llegar a alcanzar la autonomía necesaria. La descentralización de 1886 implicaba que los departamentos debían comprar su autonomía fiscal recurriendo al establecimiento de impuestos a las personas de manera universal, pero de esta manera los departamentos no llegaron a alcanzar su autonomía fiscal ya que los departamentos no conseguían cubrir todos sus gastos obligatorios. El centralismo fiscal volvió con la reforma electoral de 1896, la que creó un poder electoral centralizado que se encargaba de preparar las

[56] Contreras. (2002), pp. 1-35.

listas de ciudadanos hábiles para el sufragio. A partir de 1906 las juntas departamentales quedaron relegadas a tareas secundarias. Los esfuerzos descentralizadores del liberalismo peruano entre 1873 y 1886 fueron un fracaso, debido a que no había élites regionales sólidas capaces de conducir un programa de gobierno local, al mismo tiempo que impulsaran el progreso económico y la modernización de sus territorios. Finalmente, en 1921 el gobierno canceló las juntas departamentales, cada vez más reducidas en su papel y en sus funciones.[57]

Los jefes políticos en Venezuela

En el territorio que había sido la Capitanía General de Venezuela, desde 1811 se planteó la necesidad de organizar un país descentralizado y federado, el federalismo tenía consenso entre los pueblos que por decisión soberana habían aceptado formar parte de la república venezolana. El Estado se organizó en función de un pacto en el cual se respetaban dos clases de soberanía: la del gobierno federal y la de los gobiernos estatales, los que se mantenían en una permanente tensión y en un precario equilibrio. En esta forma de gobierno, cada uno de los estados o provincias exigía la división de otros para consolidar su territorio. Este federalismo institucionalmente pretendía volver a las ciudades-estado la fuerza política detentada en la colonia como centro de poder provincial y tratar de consolidarla en la región sobre la cual ejercía su influencia socioeconómica. En realidad, no existía la nación venezolana como un territorio y estado unificado, sino que predominaban regiones históricas con distintos centros políticos y económicos, e integrados por un circuito agroexportador. Además, no había una unidad eclesiástica, política, judicial y territorial, mientras que el capitán general de Venezuela no era capaz de centralizar la actividad política y fiscal. Funcionaban aduanas interiores en cada provincia, las que se constituyeron en un factor decisivo para la integración económica de regiones funcionales, con relación a los ingresos fiscales, autonomía y una estructura de poder propia en función de las

[57] Contreras. (2002), pp. 1-35.

élites locales. Entre las regiones había diferencias sustanciales según sus propias particularidades, provincias con formaciones sociales distintas e incomunicadas entre sí, lo cual era reforzado por el régimen municipal trasplantado de España y con economías propias. El poder se organizaba en torno a las principales ciudades separadas por la geografía y tenían cierta autonomía económica y política. Las autoridades provinciales dependían directamente del rey y frecuentemente los ayuntamientos se enfrentaban a cualquier autoridad que pretendiera centralizar sus funciones e intereses.[58]

Los cabildos eran cuerpos que gozaban de la real autonomía amparados por el orden monárquico, representaban los intereses de los grupos locales y regionales, de esta manera, la perspectiva federal era vista como una alternativa para conciliar las pretensiones políticas de soberanía y autonomía en el espacio de la América española. Las gobernaciones que integraban la Capitanía General de Venezuela eran independientes unas de otras con sujeción únicamente a las audiencias de Santo Domingo o Santa Fe, hasta 1777, a lo que debía sumarse la autonomía de que gozaron las ciudades-cabildos por varios siglos. Ninguna de estas ciudades ejercía un papel preponderante sobre las otras. Por tal razón se sostiene que lo que sucedió en Venezuela a partir de 1830 no fue una federación sino una confederación. Los políticos venezolanos del momento defendían la confederación y la federación, esta era la condición para acordar cualquier pacto y unir esfuerzos en favor de la república. Esto se confirmó en las sesiones del congreso de Colombia, en el cual los representantes de los departamentos de Venezuela se manifestaron en contra de cualquier intento de centralización. Por lo pronto, el nuevo poder se legitimaba a través de la soberanía reasumida por el pueblo una vez desaparecida la autoridad del rey. Después de 1811 el pueblo ocupó un papel protagónico en el discurso de la época, el federalismo, entendido como la forma de

[58] Arlene Urdaneta Quintero. (2010). Federalismo y gobierno federal en la historiografía venezolana positivista. *Omnia*, vol. 4, núm. 1, pp. 3-18.

gobierno más democrática, fue el recurso indispensable para conformar la nación.[59]

La tendencia hacia la centralización, necesaria para la formación de un Estado-nación, se enfrentó con preceptos constitucionales y la diversidad de demandas y formas de oposición que desde las provincias-estados se hacía en contra de la capital; pero por otra parte la fragmentación del poder, derivado de los conflictos locales, dificultaba la posibilidad de alianzas que terminaran con la propuesta separatista que conducían al desmembramiento de la nación. Fuerzas centrífugas y centrípetas estaban en permanente fricción. El poder lo ejercían los cantones y demás funcionarios y corporaciones cantonales y parroquiales que designaba la ley, dando atribuciones con entera independencia del gobierno político de las provincias. Por tanto, el poder político quedó representado por el gobernador nombrado por el ejecutivo nacional, y el de los cantones por los consejos municipales, quienes asumían parte del poder político y administrativo. La Constitución de 1858 recogió en gran medida el ánimo de la de 1830, se asumió una forma mixta centro-federal pero incorporando el poder municipal junto al poder nacional, lo que fortaleció la fuerza política de las provincias y localidades a través de sus legislaturas y consejos municipales. [60]

La Constitución de Venezuela de 1881 estableció una reforma territorial en la cual se consideró que las veinte entidades que componían la Unión Venezolana, según la Constitución de 1864, serían agrupadas en nueve grandes estados, con los límites que les había asignado la Ley de División Territorial del 28 de abril de 1856. Estos grandes estados estaban constituidos por secciones que conservaban su autonomía, por lo que elegían a sus gobernantes y a los representantes de sus legislaturas; al prefecto o jefe civil de cada distrito y a los miembros de sus municipalidades.

[59] Urdaneta. (2010), pp. 5-6.

[60] Urdaneta. (2010), p. 8.

La reforma territorial de 1881, que propició la reducción de los estados fue un mecanismo de control económico del país. [61]

Los jefes políticos en Colombia

La geografía política de la Nueva Granada obedeció a la existencia de grupos de poder local, quienes fueron los que construyen los límites de su espacio de acción.[62] Las élites locales consolidadas desde el periodo colonial buscaron desde su parcela de dominio, un proyecto de Estado que garantizara sus autonomías. Los fracasos del Estado a lo largo del siglo XIX, por construir un nuevo ordenamiento administrativo, tanto en la Gran Colombia (1821-1830), como en las posteriores experiencias estatales (federales o centralistas), sólo se entiende por la competencia entre las élites locales, por promover un proyecto estatal que garantizara los privilegios y prebendas que gozaban desde la época colonial. Su existencia explica la reacción de las localidades contra el régimen departamental grancolombiano; contra el gobierno de Urdaneta en 1831 y su legitimación por medio de la Constitución Granadina (1832); el proceso de fragmentación de las diecinueve provincias originales de la Nueva Granada que firmaron la Constitución, y que finalmente dieron origen a trece nuevas provincias a principios del siglo XIX, desprendidas de las tradicionales.[63]

El Estado que se denominó Nueva Granada fue en su estructura profunda un abigarrado conjunto de archipiélagos, que contribuyeron junto con la administración hispánica a la formación de ínsulas políticas. La identidad y los intereses políticos no fueron departamentales o provinciales, fue local. La parroquia o la localidad, con su área agrícola y artesanal de influencia, marcó los límites de la formación de su identidad política.

[61] Yuleida Artigas Dugarte. (2008). La reforma territorial de 1881 y la reducción de los estados en Venezuela. *Geoenseñanza*, vol. 13, núm. 2, pp. 175-184.

[62] Luis Ervin Prado Arellano. (2006). El sistema político en Colombia en la primera mitad del siglo XIX: una propuesta analítica. *Reflexión Política*, vol. 8, núm. 16, pp. 92-103.

[63] Prado. (2006), p. 5.

Los notables locales buscaron ampliar su influencia a partir de las alianzas matrimoniales entre los notables de la localidad para mantener el patrimonio y continuar monopolizando los principales renglones económicos. Ello permitió que las principales familias de un área concentraran el poder formando una red de parentesco, los jefes de estas familias eran los jefes naturales de la localidad y reconocidos como tales por el resto de la sociedad. Posteriormente estos jefes naturales extendieron su influencia a otras regiones y localidades. De esta manera, la Nueva Granada heredó unos poderes locales variopintos, unos circunscritos a la localidad y otros en cambio eran más amplios rebasando el contorno parroquial o de la ciudad, a estas redes se les denominó regiones políticas. Dichas élites agrupadas en redes políticas, tuvieron una debilidad en su relación con el Estado nacional, su división llevó a que las élites locales tuviesen diversidad de intereses y perspectivas, lo que impidió la coalición de dichas élites de forma estable y permanente, y promover un proyecto de Estado. [64]

El jefe político en Centroamérica durante el siglo XIX

Entre 1821 y 1823 México y Centroamérica se separaron de la monarquía española y participaron en el experimento de la monarquía constitucional mexicana. Fue en el Reglamento Provisional del Imperio Mexicano de 1822, donde se establecieron las funciones para los jefes políticos, mientras que en la península fue hasta el 3 de febrero de 1823 que se emitió la Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias de Ultramar. Fue en esos años que los territorios del antiguo Reino de Guatemala se organizaron bajo los preceptos del liberalismo, estableciendo un gobierno superior por medio de jefaturas políticas. En las décadas de 1820 y 1830 se estableció la Federación de Repúblicas de Centroamérica erigiéndose las constituciones estatales de El Salvador (1824), Guatemala (1825) y Nicaragua (1826), las cuales establecieron la división en departamentos del territorio que antes pertenecía al Reino de Guatemala, pero la reglamentación de las jefaturas no estuvo lista sino hasta la

[64] Prado. (2006), p. 7.

década d 1830, debido a los conflictos internos entre 1826 y 1829, siendo solo Costa Rica la que estuvo al margen de la conflictividad, pudiendo establecer su primer ordenamiento en 1828.[65]

A fines del siglo XVIII, la Ordenanza para intendentes de la Nueva España de 1786, que también se implementó en el Reino de Guatemala, creó cuatro intendencias: Chiapas, San Salvador, Honduras y Nicaragua, en el rubro hacendario dependían de la gobernación de Costa Rica, y en el interior de cada intendencia se organizaron subdelegaciones. Esta nueva delimitación territorial convirtió en subdelegaciones a los corregimientos y alcaldías mayores. Entre 1786 y 1824 la provincia de Guatemala no organizó una intendencia, sino que continuó el funcionamiento de ocho alcaldías mayores (Suchitepéquez, Verapaz, Sonsonate, Escuintla, Sololá, Chimaltenango, Sacatepéquez, Totonicapán) y dos corregimientos (Chiquimula y Quezaltenango).[66] La Constitución gaditana de 1812 y el reglamento para los gobiernos locales en 1813 construyeron al jefe político, luego esta figura se reafirmó entre 1824 y 1826, pero se reglamentó hasta la década de 1830. En el proceso de formación de los departamentos hubo varios conflictos, San Salvador fue la que presentó menos problemas, pero Guatemala perdió Sonsonate, y reorganizó diez corregimientos y alcaldías mayores en siete departamentos, en 1830, perdió Quezaltenango, que tuvo el rango de sexto estado de la federación de Centroamérica. La que tuvo mayores problemas fue Nicaragua, debido a la disputa entre las ciudades de León y Granada, esto retrasó la división político-administrativa. Después de dos guerras, los cuatro departamentos se organizaron. La figura de autoridad departamental tendría varios nombres: gobernador en El Salvador, corregidor en Guatemala, jefe político o prefecto en Nicaragua. En Guatemala y El Salvador el cargo se ejercía por cuatro años, mientras que en Nicaragua fue solo por dos años.

[65] Xiomara Avendaño Rojas. (2019). La figura del jefe político departamental en Guatemala, El Salvador y Nicaragua durante la primera mitad del siglo XIX. *Rúbrica Contemporánea*, vol. VIII, núm. 15, pp. 45-66.

[66] Avendaño. (2019), pp. 45-66.

Para ser jefe político se requería ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, contar entre 23 y 30 años, tener experiencia administrativa, moralidad y buena conducta e instrucción notoria, con arraigo o vecindad en el departamento de nombramiento. Además se exigía contar con un capital o bienes por 300 pesos en Nicaragua, 2,500 pesos en El Salvador, y 2,000 pesos en Guatemala. El jefe político se nombraba a propuesta directa del Poder Ejecutivo, y en algunos casos surgidos de una terna; solo ejercían por segunda vez al demostrar un buen servicio público. Los gobernadores o jefes políticos prestaban juramento ante la municipalidad de la cabecera de su departamento, este residía en la capital del departamento. Según la falta cometida podría recibir una multa o ser suspendidos por no cumplir sus funciones. El jefe político no podía ausentarse de su departamento sin licencia expresa del gobierno, y solo por motivos comprobados obtendría permiso para separarse del cargo durante noventa días cada año, en ese caso lo suplía el alcalde de la cabecera departamental o algún otro suplente.[67]

El jefe departamental era la correa principal de comunicación entre las autoridades superiores y las autoridades locales, y debía cumplir las siguientes funciones: publicar, circular y ejecutar en su departamento las leyes y resoluciones del gobierno; consultar al gobierno sobre las disposiciones referidas; elaborar y remitir proyectos, propuestas, informes y planes de su territorio a las diversas instancias del gobierno superior; hacer cumplir las leyes de policía y bandos de buen gobierno; entre otras disposiciones. Para ser jefe político se requería ser ciudadano, mayor de 18 años, con instrucción y moral pública, además de ser adepto al sistema político. Los escribanos también recibían un salario según las condiciones de los ingresos de su departamento. El jefe político supervisaba los ramos de hacienda, seguridad, salubridad, educación, gestión local y la relación Iglesia-Estado, tenía el deber de informar todo lo que ocurría en su territorio, corregía y sancionaba el abuso de las autoridades bajo su mando y proponía reformas legales ante el órgano legislativo. Los gobernadores,

[67] Avendaño. (2019), pp. 45-66.

prefectos o jefes políticos eran el único medio de comunicación entre el ejecutivo y los gobiernos municipales, presidían la municipalidad de la cabecera departamental o de la población en la que se hallasen, velaba por el cumplimiento del calendario de las reuniones de los munícipes, mediaba en las discusiones y era quien tenía la potestad de voto en caso de empate.[68]

En El Salvador, Nicaragua y Guatemala, el gobierno superior designaba a los jefes de departamento como subdelegados de Hacienda Pública, en el proceso de distribución, recaudación y administración de impuestos. En el ámbito municipal, los jefes políticos cobraban los impuestos, y recaudaban los ramos de propios y arbitrios, los gastos y las deudas pendientes. Vigilaba el cumplimiento de los pesos y medidas, el precio de los productos y la circulación de moneda. También proponía nuevos impuestos municipales para la reparación o construcción de obras públicas, y podía solicitar en nombre del gobierno préstamos y designar cuotas entre los vecinos, y en caso de urgencias estaba autorizado para utilizar fondos extraordinarios. En algunos casos, estados como Costa Rica y Nicaragua, se negaron a entregar los impuestos al gobierno federal, y las jefaturas políticas respaldaron a sus élites.[69]

Los jefes políticos debían conservar el orden público, la seguridad de las personas y sus bienes en el departamento bajo su cargo. Solo en el reglamento español de 1813 y en el del imperio mexicano de 1822 se indica que también debían velar por la libertad. Durante las primeras décadas posteriores a la independencia las jefaturas políticas estuvieron vinculadas con el Ministerio de Gobierno o el Ministerio de Guerra y Marina. Las tareas de policía eran prioritarias, por ello los jefes políticos perseguían delincuentes y los llevaban a la cárcel. Por lo que podían pedir auxilio a los comandantes o jefes militares y demás autoridades en caso de ataques armados. Se encargaba de enlistar a los ciudadanos del departamento en el ejército y apoyaba la formación de milicias en pueblos, villas y ciuda-

[68] Avendaño. (2019), pp. 45-66.

[69] Avendaño. (2019), pp. 45-66.

des. Sin embargo, el mando político estaba separado del mando militar, y solo en circunstancias extraordinarias el gobierno podría unirlos, por un periodo determinado, en el jefe político. Este también se encargaba de controlar la movilidad de las personas, otorgaba pasaportes para el libre tránsito de los individuos. El jefe político también se encargaba del fomento de la agricultura, la industria, los oficios mecánicos, las artes y el comercio. Controlaba la mano de obra y perseguía a los ociosos, vagos y ebrios obligándolos a que participaran en labores agrícolas o se ocupasen de oficios propios. Pero también vigilaba que los trabajadores recibieran salarios y jornales con puntualidad. En el renglón de salubridad, el jefe político vigilaba a la Junta de Sanidad en la aplicación de medidas preventivas y curativas para enfrentar pestes o epidemias. Se destaca como prioridad la desecación de pantanos, la distribución de vacunas y la solicitud de recursos al ejecutivo para enfrentar las epidemias. Vigilaba que los municipios llevaran a cabo el aseo y el ornato de las poblaciones que fuera necesarios, empedrando calles, manteniendo solares limpios y cercados, y proporcionar agua potable y productos alimenticios sanos a los habitantes.[70]

Como en otros casos latinoamericanos, desde las Cortes de Cádiz, los reglamentos electorales y de administración política departamental y local establecieron determinadas funciones para la jefatura política; por ley o decreto las elecciones para diputados, senadores, jefes de estado o munícipes eran convocadas por la jefatura política, y vigilaba su organización y ejecución de la actividad electoral. En el caso de las elecciones supriores, la jefatura presidía la organización de las juntas distritales y departamentales, informaba al gobierno los resultados y los problemas que se suscitaran. Confirmaba las elecciones municipales, con el apoyo de "hombres buenos", vecinos notables de la localidad.[71]

Durante el siglo XIX en Centro América el constitucionalismo se construyó bajo la influencia de la tradición española y la francesa. La

[70] Avendaño. (2019), pp. 45-66.

[71] Avendaño. (2019), pp. 45-66.

figura del corregidor hispánico se reformuló con los principios teóricos liberales y el esquema administrativo francés. La Constitución gaditana y la Instrucción de 1813 establecieron la base para la formación de los estados de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, estableciendo en su interior una división departamental. La Constitución de 1824 y las constituciones estatales de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, establecieron la división de poderes, lo que guio las funciones del jefe político o gobernador departamental. No se observan rupturas, sino continuidades. En su relación directa con el poder ejecutivo se encuentran: un entramado de funciones político-administrativas desde el gobierno central que lo coloca como agente directo del poder ejecutivo, siendo la correa de transmisión entre ciudadanos y el poder local. Por otra parte, el jefe político supervisó las relaciones entre el clero y el gobierno, también vigilaba la salubridad, los hospitales, orfanatos y escuelas. Se encargaba de la seguridad y el orden público, pero en los primeros conflictos en 1826-1829 y 1847-1838, llevaron a que el jefe político fuera al mismo tiempo jefe militar. El jefe político proponía y modificaba reglamentos o leyes de las diversas acciones bajo su mando, ante el poder ejecutivo y el poder legislativo. Lo que evidencia una vinculación entre gobernantes y jefaturas departamentales. En las primeras décadas de construcción del Estado liberal (1812-1840), el gobernador o jefe político adquirió una facultad relevante en la construcción del sistema representativo, el control del proceso electoral indirecto. Actividad que lo colocaba como intermediario entre ciudadanos y el poder legislativo.[72]

Algunas conclusiones sobre este capítulo

El recorrido que se hizo por los territorios iberoamericanos dio cuenta de las diferencias y similitudes del papel y las funciones desempeñadas por los jefes políticos o prefectos en cada región o provincia. Los jefes políticos como se ha dicho reiteradamente, por una parte, fueron herederos de los corregidores, alcaldes mayores, intendentes y jefes superiores de pro-

[72] Avendaño. (2019), pp. 45-66.

vincia de la época colonial. Pero también de los cambios revolucionarios franceses al tratar de copiar e implementar el modelo francés de prefecturas. También recibieron la influencia del modelo federal republicano de los Estados Unidos. Sin embargo, en cada caso dependió de la interacción entre los grupos locales, provinciales, regionales o nacionales y la forma en que enfrentaron la crisis de la monarquía española durante las independencias, y la construcción de un Estado-nación a partir de la tensión entre las fuerzas centralistas y las federalistas, confederalistas o, de plano, radicalmente separatistas. Mientras la monarquía española se desintegraba en muchos territorios independientes, los estados nacionales tuvieron dificultades para estructurase como unidades políticas nacionales unificadas y centralizadas. Los gobiernos provinciales se disputaban el control del territorio nacional frente a las fuerzas centralizadoras y unitarias, mientras que al interior de cada provincia también se enfrentaban los problemas para consolidar gobiernos estables. Entre los ayuntamientos, que gobernaban ciudades y los gobiernos provinciales, se encontraban los prefectos o jefes políticos que gobernaban distritos, departamentos o cantones, bajo las órdenes de los gobernadores provinciales, designados por ellos mismo o electos por el pueblo, quienes desempeñaron las labores de gobierno, tratando de pacificar y estabilizar amplias comarcas, siendo muy cercanos a los jefes y elites regionales o provinciales.

CAPÍTULO IV.
Los jefes políticos en Jalisco en las constituciones y reglamentos

Jalisco su población y sus cantones

Cuando el 16 de junio de 1823, la Diputación Provincial de Guadalajara, en sesión extraordinaria, elaboró un documento conocido como el *Plan de Gobierno Provincial del Nuevo Estado de Xalisco*, el cual estableció en su primer artículo que: "La Provincia conocida hasta ahora con el nombre de Guadalajara se llamará en lo sucesivo Estado libre de Xalisco",[1] en el territorio que antes ocupaba la Intendencia de Guadalajara, había madurado en gran medida un proceso iniciado a mediados del siglo XVIII, mediante el cual sus pueblos y comarcas se habían integrado progresivamente en un sistema económico regional que dependía de la ciudad de Guadalajara como un mercado para los productos agrícolas-ganaderos y una fuente de crédito y capital.[2] Este proceso fue acompañado por el

[1]José María Murià, *Historia de las divisiones territoriales de Jalisco*. México, INAH, 1976, p. 70.

[2]Los mejores estudios sobre el desarrollo económico y social de la región de Guadalajara durante la segunda mitad del siglo XVIII y las dos primeras décadas del siglo XIX son los siguientes: Eric Van Young. (1989). *La ciudad y el campo en el México del siglo XVIII. La economía rural de la región de Guadalajara, 1675-1820*. México: Fondo de Cultura Económica. Ramón María Serrera. (1991), *Guadalajara ganadera. Estudio regional novohispano, 1750-1805*. Guadalajara, Ayuntamiento de Guadalajara. Richard B. Lindley. (1987). *Las haciendas y el desarrollo económico, México, en la época colonial*. México: Fondo

crecimiento demográfico en todo el territorio de la Intendencia de Guadalajara, reflejado en el aumento y concentración de la población en las principales ciudades y pueblos, lo que impulsó la comercialización de la agricultura en los alrededores de la ciudad de Guadalajara, por la demanda de productos agrícolas y ganaderos que ésta generaba. La base de esta economía agrícola-ganadera se encontraba en las grandes haciendas y en una gran cantidad de ranchos de diversos tamaños y pueblos de indios y villas que habitaban españoles y mestizos. La fuerza de trabajo utilizada en las haciendas y ranchos se caracterizaba por ser una mano de obra libre, temporal o permanentemente, a la que se le pagaba una parte en efectivo y otra en especie como "ración", pero en donde las formas extraeconómicas para sujetar a la fuerza de trabajo, como el peonaje por deudas, habían dejado de tener importancia en la región.[3]

El crecimiento demográfico se debió en gran parte a la recuperación de la población indígena y al crecimiento de mestizos, mulatos y otras castas. Pero esto trajo consigo cambios importantes en la estructura económica y social de la región, por un lado, el crecimiento de las ciudades, principalmente Guadalajara, el fomento, fortalecimiento y expansión de una economía agraria orientada al mercado urbano y regional, lo que produjo a su vez el incremento de la producción en haciendas y ranchos, con la consecuente expansión territorial de dichas unidades productivas, el incremento en el número de jornaleros, y la presión hacia el interior de los pueblos de indios que dificultaba el acceso a la tierra, lo cual generaba innumerables conflictos entre los habitantes de dichos pueblos, y de éstos con las haciendas y ranchos colindantes, debilitando con ello los lazos de cohesión social de los grupos indígenas. Debido a ello, muchos de los ha-

de Cultura Económica. Y Jaime Olveda. (1991). *La oligarquía de Guadalajara*: de las reformas borbónicas a la reforma liberal. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

[3] Sergio Valerio Ulloa. (1999b). Integración regional, autonomía y federalismo. De la Diputación Provincial a la Constitución Política del Estado de Jalisco de 1824. *Estudios Sociales. Revista del Departamento de Estudios de la Cultura Regional*, núm. 19, pp. 5-28.

bitantes de los pueblos dentro de la intendencia de Guadalajara se vieron obligados a emigrar, o a desplazarse por temporadas hacia las ciudades o haciendas en donde pudieran trabajar, o ingresar a alguno de los grupos de bandidos que azotaban la región de manera temporal o permanente. La estructura social que generó este proceso en la intendencia de Guadalajara fue muy heterogénea, siendo sus beneficiarios principales los grupos de terratenientes y comerciantes, quienes controlaban la mayor parte de las actividades económicas de la región, así como las instituciones políticas, eclesiásticas y culturales. Dichos grupos estaban relacionados por muchos vínculos a través de la familia, el matrimonio, las empresas, la amistad y el compadrazgo. Por otra parte, había un extenso grupo de rancheros más o menos prósperos, junto con los vecinos de los pueblos indígenas, jornaleros temporales, arrieros, pequeños comerciantes, entre otros, que habitaban en el campo, en los pueblos y villas de la intendencia.[4]

El 18 de noviembre de 1824 se promulgó la Constitución del Estado de Xalisco, la cual especificaba en su artículo 4° que el territorio del estado sería el mismo que antes correspondía a la intendencia de Guadalajara, con exclusión del territorio de Colima. En dicha Constitución se establecieron ocho grandes regiones que recibieron el nombre de "cantones", cada cantón estaría a cargo de un jefe de policía o jefe político, que sería nombrado por el gobernador del estado a partir de una terna propuesta por el senado, los jefes políticos durarían en funciones cuatro años, con la posibilidad de volver a ocupar el puesto por otro periodo.[5] Cada cantón estaría dividido a su vez en departamentos, siendo éstos 27 en total para todo el estado.

[4] Valerio. (1999b), pp. 5-28.

[5] Murià. (1976), pp. 74-75.

Mapa 1.
Intendencia de Guadalajara en 1818.

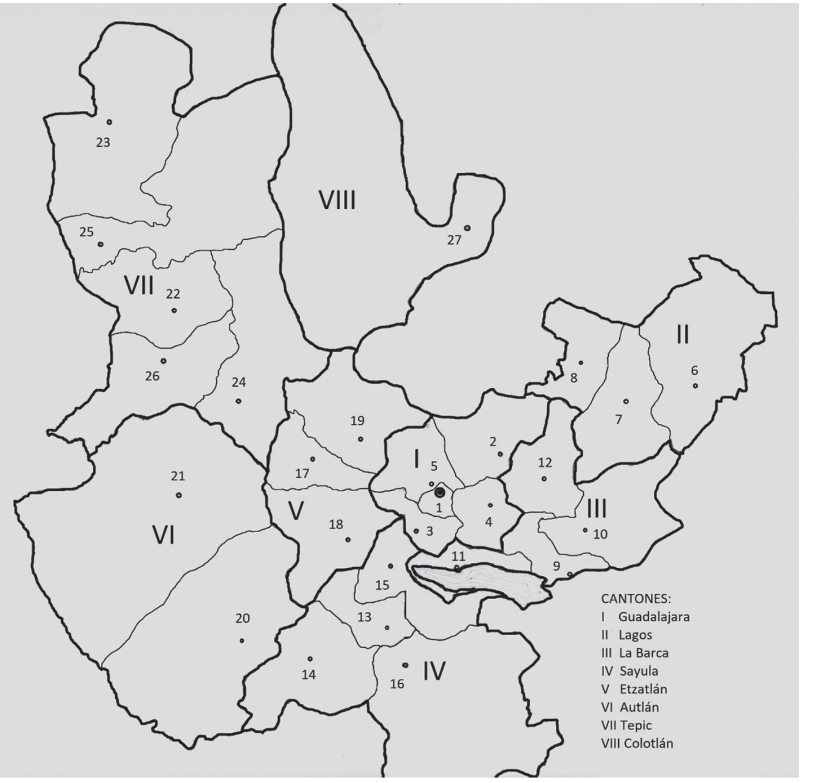


Cuadro 1.
Partidos de la Intendencia de Guadalajara en 1818

1. Guadalajara	8. Colotlán	15. Tonalá	22. Santa María del Oro
2. Lagos	9. Zapotlán	16. Zapopán	23. Tuxcacuesco
3. La Barca	10. Mascota	17. Tequila	24. Colima
4. Sayula	11. San Blas	18. Hostotipaquillo	25. Tomatlán
5. Etzatlán	12. Tala	19. Tlajomulco	26. Compostela
6. Autlán	13. Tepatitlán	20. Ahuacatlán	27. Sentispac
7. Tepic	14. Cuquío	21. San Sebastián	28. Acaponeta

Fuente: Murià. (1976), p.150.

Mapa 2.
El Estado de Jalisco en 1825



Cuadro 2.
División territorial del Estado de Jalisco en 1825.

Cantón	Departamentos	Municipios
I Guadalajara	**Guadalajara** Cuquío Tlajomulco Zapotlanejo Zapopan	Guadalajara, Cuquío, Ixtlahuacán, Yahualica, Tlajomulco, Santa Cruz, Ahuisculco, Santa Anita, Zapotlanejo, Tonalá, Zapopan, Tesistán, Atemajac, San Cristóbal, Santa Ana de los Negros
II Lagos	**Lagos** San Juan Teocaltiche	Lagos, San Antonio de Adoves, San Juan, Encarnación, Jalos, San Miguel, Teocaltiche, Mesticacán, Paso de Sotos.

Cantón	Departamentos	Municipios
III La Barca	**La Barca** Atotonilco Chapala Tepatitlán	La Barca, Zapotlán del Rey, Tototlán, Ocotlán, Atotonilco, Arandas, Ayo el Chico, Chapala, Jocotepec, Ixtlahuacán, Poncitlán, Cuiseo, Tepatitlán, San José Basarte, Acatic, Cañadas.
IV Sayula	**Sayula** Tuscacuesco Zacoalco Zapotlán el Grande	Sayula, Usmajac, Atoyac, Amacueca, Tapalpa, Chiquilistlán, Tuscacuesco, San Gabriel, Tonaya, San Juan, Quautitlán, Zapotitlán, Zacoalco, Santa Ana, Atotonilco, Atemajac, Techaluta, Teocuitatlán, Tisapán el Alto, Zapotlán el Grande, San Sebastián, Zapotiltic, Tuspan, Tonila, Pihuamo, Tamazula, Mazamitla, Quitupan, Jilotlán.
V Etzatlán	**Etzatlán** Cocula Tequila	Etzatlán, Euchitlán, Cocula, Ameca, Tecolotlán, San Martín de la Cal, Tequila, Hostotipaquillo, Magdalena, Amatitlán, Atemanica.
VI Autlán	**Autlán** Mascota	Autlán, Purificación, Ejutla, Tula, Tepospisaloya, Tenamastlán, Ayutla, Mascota, Talpa, Tomatlán, Guachinango, San Sebastián, Los Reyes.
VII Tepic	**Tepic** Acaponeta Ahuacatlán Centispac Compostela	Tepic, Jalisco, Huainamota, Loma de San Fernando, San Blas, Acaponeta, Rosa Morada, Ahuacatlán, Istlán, Jala, Amatlán de Jora, Amatlán de las Cañas, Garabatos, Centispac, Santiago, Compostela, San pedro de la Lagunilla, Santa María del Oro.
VII Colotlán	Colotlán	Colotlán, Santa María de los Ángeles, Huejúcar, Mesquitic, Huejuquilla el Alto, Teul, Bolaños, Totatiche, Chimaltitán, San Martín.

Fuente. Murià. (1976), pp. 177-183.

Los cantones de Jalisco pasaron de ocho a nueve con el triunfo de la revolución de Ayutla, pues se formó el cantón de ciudad Guzmán, y para 1878 alcanzaron el total de doce cantones. El cantón de Tepic fue un caso

especial, pues éste fue separado del estado de Jalisco el 7 de agosto de 1867 al ser convertido en distrito militar, por parte del presidente Benito Juárez, debido a la inestabilidad social, política y militar que había en la zona. Finalmente el 25 de octubre de 1884, el que anteriormente era el 7° cantón de Jalisco, se convirtió en territorio federal, siendo declarado formalmente como estado de la república en 1917.[6] Por otra parte, en 1870 el 6° cantón, con cabecera en Autlán, se dividió dando origen al 10° cantón, que antes era el departamento de Mascota. Ese mismo año se erigió como el 11° cantón el que era departamento de Teocaltiche, y en 1872 surgió el 12° cantón con cabecera en Tequila. En la zona donde están situadas las poblaciones de Etzatlán, Ahululco, Ameca, Cocula y Tequila había una intensa disputa por obtener la calidad de cabecera del cantón, lo cual se debía a las distintas poblaciones al tener casi el mismo tamaño e importancia todas querían tener la calidad de cabecera o capital del cantón, porque esto les traía beneficios y privilegios presupuestales y administrativos.[7] La división político administrativa del estado de Jalisco en cantones, departamentos, municipios, ciudades, villas, pueblos, haciendas ranchos, rancherías y congregaciones cambió frecuentemente a lo largo del siglo XIX, según los distintos registros, padrones y censos de población que las autoridades estatales hicieron durante dicho siglo.

La población total en el estado de Jalisco creció constantemente durante el siglo XIX con la excepción de las décadas de 1858-1868 y 1885-1895, donde hubo decrecimiento poblacional, no obstante en términos absolutos la población total del estado de Jalisco creció de 655, 910 habitantes en 1822 a 1'140,839 habitantes en 1910, es decir, la población total del estado se incrementó en 484,929 habitantes durante todo el siglo. Los cantones más poblados a lo largo de dicho siglo fueron principalmente el primer cantón con cabecera en Guadalajara, y el segundo cantón con cabecera en Lagos.

[6] Murià, (1976), pp. 100-103.

[7] Murià, 1976, p. 113.

Cuadro 3.
División político-administrativa del estado de Jalisco durante el siglo XIX

Años	1822	1858	1878	1888	1910
Cantones	8	9	12	12	12
Departamentos	27	20	30	34	
Municipios	133		118	96	104
Ciudades		13	10	17	18
Villas		37		30	34
Pueblos	318	255	283	188	226
Haciendas	387	395	385	387	358
Ranchos	2,534	2,686	2,646	3,919	6,773
Rancherías					46
Congregaciones		23		70	145

Fuentes: Gutiérrez y Ulloa (1822),[8] Banda (1854-1863),[9] Busto (1878), Bárcena (1888),[10] INEGI (1910).

La cifra sobre el número de habitantes varían de un registro a otro debido a los cambios que había en su territorio, pues algunos se subdividían, otros cambiaban de cabecera o de plano desaparecían. La mayor parte de la población era rural y se concentraba en la zona centro, oriente y sur del estado de Jalisco, mientras que las zonas costeras y las zonas montañosas tenían escasos habitantes. La dinámica económica regional provocó una gran movilidad de la población que transitaba de sus pueblos originarios a los centros urbanos de mayor atracción. A nivel local y municipal se observa el mismo patrón de crecimiento demográfico, lo que

[8] Antonio Gutiérrez y Ulloa. (1983). *Libro de la Razón General de Hacienda Nacional. De la Provincia de Guadalajara, hoy Estado libre de Jalisco*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco.

[9] Longinos Banda. (1983). *Estadística de Jalisco (1854-1863)*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco.

[10] Mariano Bárcena. (1983). *Ensayo Estadístico del Estado de Jalisco*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco.

dio como resultado que un buen número de los habitantes de los pueblos rurales emigraran a las ciudades en busca de trabajo y mejores condiciones de vida, atraídos por la actividad comercial e industrial en los centros urbanos, sobre todo a la ciudad de Guadalajara, que se mantuvo como el centro político, comercial, industrial y financiero más importante del occidente de México durante todo el siglo XIX.[11] Los jefes políticos, como funcionarios subordinados al gobernador del estado de Jalisco tuvieron que hacerse cargo de cuidar y gobernar a la población y territorios de sus respectivos cantones, con la ayuda de los directores de departamento y ayuntamientos municipales correspondientes.

Cuadro 4.
Población del estado de Jalisco durante el siglo XIX por cantones

CANTÓN	1828	1838	1848	1858	1868	1878	1885	1895	1900	1910
1° Guadalajara	135,805	125,030	146,335	165,574	165,706	190,481	225,431	217,589	205,664	235,889
2° Lagos	111,825	142,106	152,017	158,892	136,427	68,243	109,472	99,088	104,135	98,459
3° La Barca	79,625	98,096	92,693	109,655	97143	125,968	166141	166,639	165,948	171,226
4° Sayula	53,861	110,278	54,951	55,929	65711	141,715	91244	86,417	87,065	78,720
5° Etzatlán/ Ameca	76,386	82,287	77,494	89,767	88191		49959	60,146	58,625	66,216
6° Autlán	42,709	51,184	56,649	57,245	53103	34,693	78294	68,176	70,217	79,750
7° Tepic/Chapala	66,405	62,620	65,727	74,839		122,321			52,399	53,336
8° Colotlán	39,304	41,371	4,3054	50,293	47950	49,211	60067	63,543	68,730	7,1988
9° Zapotlán	49,990		89,726	67,522	60987	70,178	144913	134,209	134,612	142,331
10° Mascota						22,077		53,967	52,712	53,356
11° Teocaltiche						59,288	100,576	88,899	94,439	89,568
12° Tequila						24,174	66,889			
Población Total	655,910	712,972	778,646	829,716	715,218	908,349	1,092,986	1,038,673	1,094,546	1,140,839

Fuentes: Gutiérrez y Ulloa, (1822). Roa (1981), López Cotilla (1983), Banda (1983), Busto (1878), Bárcena (|983), Peñafiel (1895). INEGI. *Estadísticas Históricas de México*. 1985.

[11] Sobre el desarrollo económico del estado de Jalisco y de la ciudad de Guadalajara ver las obras de Sergio Valerio (2002, 2003, 2010, 2015, 2021).

Mapa 3.
División política del Estado de Jalisco en 1910



Cuadro 5.
División política del estado de Jalisco en 1910

Cantón	Cabecera	Municipios
I	Guadalajara	1-Guadalajara, 2-Zapaopan, 3-Tlaquepaque, 4- Tonalá, 5-Zapotlanejo, 6-Tala, 7-San Cristóbal de la Barranca, 8- Ixtlahuacán del Río, 9-Cuquío, 10-Yahualica.
II	Lagos	11-Lagos, 12-San Juan de los Lagos, 13-Unión de San Antonio, 14-Ojuelos, 15-San Diego de Alejandría.
III	La Barca	16-La Barca, 17-Ocotlán, 18-Poncitlán, 19-Tototlán, 20-Atotonilco, 21-Ayo el Chico, 22-Degollado, 23-Jesús María, 24-Arandas, 25-Tepatitlán, 26-Acatic.

Cantón	Cabecera	Municipios
IV	Sayula	27-Sayula, 28-Tapalpa, 29-Atoyac, 30-Amacueca, 31-Concepción de Buenos Aires, 32-Teocuitatlán, 33-Techaluta, 34-Atemajac de las Tablas, 35-Chiquilistlán, 36-Zacoalco, 37-Acatlán.
V	Ameca	38-Ameca, 39-San Martín, 40-Cocula, 41-Tecolotlán, 42-Juchitlán.
VI	Autlán	43-Autlán, 44-Purificación, 45-Ejutla, 46-Unión de Tula, 47-Ayutla, 48-Cuautla, 49-Tenamastlán.
VII	Jocotepec	50-Jocotepec, 51-Tlajomulco, 52-Ixtlahuacán, 53-Tuxcueca, 54-Tizapán.
VIII	Colotlán	55-Colotlán, 56-Santa María de los Ángeles, 57-Huejúcar, 58-Totatiche, 59-Huejuquilla, 60-Mesquitic, 61-Bolaños, 62-Chimaltitán, 63-San Martín.
IX	Cd. Guzmán	64-Cd. Guzmán, 65-San Sebastián, 66-Zapotiltic, 67-Tuxpan, 68-Tonila, 69-San Gabriel, 70-Tonaya, 71-Tuxcacuesco, 72- Tolimán, 73-Zapotitlán, 74-Tecaltitán, 75-Tamazula, 76-Mazamitla, 77-El Valle, 78-Quitupan, 79-Jilotlán, 80-Pihuamo.
X	Mascota	81-Mascota, 82-Talpa, 83-Atenguillo, 84-Guachinango, 85-San Sebastián, 86-Tomatlán.
XI	Teocaltiche	87-Teocaltiche, 88-Encarnación, 89-Paso de Sotos, 90-Mexticacán, 91-Jalostotitlán de los Dolores, 92-San Miguel el Alto.
XII	Ahualulco	93-Ahualulco, 94-Teuchitlán, 95-Amatitán, 96-Tequila, 97-Magdalena, 98-Etzatlán, 99-Hostotipaquillo.

Fuente: Murià. (1976), pp. 204-206.

Jefes políticos en las constituciones y reglamentos de policía en Jalisco, siglo XIX

Para Max Weber el Estado moderno se caracteriza por ser un orden jurídico y administrativo por el que se orienta la actividad del cuadro administrativo y el cual busca la validez de sus actos no solo frente a los miembros de la sociedad, sino de todas sus acciones dentro del territorio que domina. El Estado moderno pretende hacer uso de la coacción de

forma "legítima", por lo que busca tener el monopolio legítimo del poder. Para ello el Estado necesita de un cuerpo de funcionarios profesionales, capacitados, especializados y contratados por un sueldo, que participen de acuerdo a una división del trabajo, bajo una estructura jerárquica. Para Weber no importa que el Estado sea una república democrática o una monarquía, con que sea un Estado de masas es suficiente, con ello se desplazaría la antigua administración ejercida por notables feudales, patrimonialistas, patricios u otros que detentan el cargo por herencia. Según Weber, el Estado moderno es consustancial a la sociedad capitalista y es una dominación basada en la legalidad, o en la creencia de que el que gobierna lo hace apegado al marco jurídico vigente. No obstante, el mismo Weber afirma que esto es un tipo ideal o puro, que raramente ocurre en la realidad histórica, y lo que se encuentra más a menudo son Estados que tienen elementos modernos mezclados con elementos o prácticas antiguas o tradicionales en diversas medidas y proporciones, incluso llega a decir que solo en Alemania, era donde dicho Estado moderno se encontraba en su estado más puro, y lo sitúa a principios del siglo xx.[12]

Este apartado tiene el objetivo de situar puntualmente la legislación relativa a las autoridades políticas intermedias en lo que fue la intendencia de Guadalajara y el actual estado de Jalisco durante los siglos xviii y xix, con el fin de explicar el origen y la evolución formal de dichas autoridades. Sin embargo, hay que partir del hecho de que el marco legal es un referente obligado para el funcionamiento y desempeño de las autoridades establecidas, pero no constituye por sí mismo la realidad, sino un modelo ideal de cómo deberían funcionar y actuar dichas autoridades, se sabe con certeza que las leyes no se llevan a cabo ni se respetan totalmente, y esto es muy difícil encontrarlo en cualquier país del mundo, pues la realidad social e histórica nunca corresponde ni se apega totalmente al marco jurídico, pues si así sucediera no habría delitos ni criminales que perseguir y se estaría hablando de sociedades perfectas. Las leyes en cualquier parte del mundo son normas a las cuales, en teoría, los habitantes de

[12] Weber. (1964 y 1991).

un país se deben apegar y respetar, pero la verdad es que no todos las respetan y hay quienes las infringen y para lo cual existen instituciones que juzgan y castigan a los infractores. No obstante, cuando se cuestiona de manera puntual que el marco legal no corresponde a la "realidad" social e histórica, se tendrá que discutir y precisar el concepto de "realidad", pues en todo caso lo que se menciona como "realidad" no es sino un discurso sobre el mundo elaborado por algún sujeto o espectador que dice lo que él considera, desde su subjetividad, qué es la realidad. No hay pues algo tangible, concreto y objetivo que sea "la realidad", sino discursos subjetivos que tratan de representar al mundo de una manera realista y convincente para el público lector.

En los reglamentos, ordenanzas, instrucciones, constituciones y leyes en general, se hacen representaciones de autoridades ideales, las cuales difieren por lo regular del actuar de personas, sujetos o actores sociales e históricos que vivieron, actuaron y se interrelacionaron con otros sujetos contemporáneos de su época y su mundo, en condiciones históricas y sociales concretas y precisas. Los siguientes códigos y leyes muestran cuales eran las visiones y representaciones que se hacía el Estado en cada momento histórico de las autoridades intermedias.

Ordenanza de intendentes de 1786 y Constitución de Cádiz de 1812

El antecedente de los jefes políticos decimonónicos fueron los subdelegados establecidos por la *Ordenanza de Intendentes* de 1786, pues con la formación de las intendencias y el gobierno de éstas por parte de intendentes, nombrados directamente por el rey, se estableció que cada intendencia estuviera dividida en partidos, para lo cual se especificó que en cada pueblo de indios que fuera cabecera de partido, en que haya habido teniente de gobernador, corregidor o alcalde mayor, se pusiese un subdelegado, para que administrara justicia en los pueblos que correspondían al partido y mantuviera a los naturales en "el buen orden, obediencia y

civilidad". Este subdelegado era nombrado por el intendente de la provincia respectiva.[13]

Posteriormente en la *Constitución de Cádiz* de 1812 se establecieron las provincias y las diputaciones provinciales. El gobierno político de éstas residiría en el jefe superior, nombrado directamente por el rey. Además, en cada provincia habría una diputación provincial presidida por dicho jefe superior. La diputación provincial se renovaría cada dos años por mitad. Mientras que la elección de sus integrantes se haría por medio de electores de partido. Para ser miembro de la diputación provincial se requería ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años, natural o vecino de la provincia con una residencia de siete años.[14]

Reglamento Provisional del Imperio Mexicano, 1822

Después de que México obtuvo su independencia de España, el gobierno del emperador Agustín de Iturbide estableció en el *Reglamento Provisional del Imperio Mexicano* de 1822, que en cada capital de provincia, hubiera un jefe superior político nombrado por el Emperador, en el cual residía la autoridad superior de dicha provincia, en esto seguía lo establecido por la Constitución gaditana anterior. Además, se especificó que en los puertos de mar que no fueran capitales de provincia, o cabeceras de partido muy dilatados o poblados, habría un jefe político subalterno al de la provincia, y en las demás cabeceras o pueblos subalternos, el alcalde primer nombrado sería el jefe político. Los jefes políticos exigirían de los ayuntamientos el cumplimiento exacto de sus obligaciones, detalladas en las instrucciones de 23 de junio de 1813, para el gobierno económico político de las provincias, y vigilarían muy particularmente sobre la policía de la imprenta, y de las casas de prisión o corrección.[15]

Posterior a este reglamento vendría toda la legislación derivada de la primera *Constitución Federal de la República Mexicana* y las consti-

[13] *Real Ordenanza de Intendentes de 1786*, Art. 12. (1984) pp. 18-29.

[14] Tena. (1999), pp. 97-99

[15] Tena. (1999), pp. 136-137.

tuciones particulares a cada uno de los estados de dicha república, que tenían que ver con el gobierno interior de cada una de estas entidades, fue en estas constituciones estatales donde se detalló específicamente el nombramiento y las funciones de los jefes políticos o prefectos, y las autoridades subalternas a estos. Para el caso del estado de Jalisco se mencionan los siguientes reglamentos, bandos, constituciones y demás leyes particulares del estado elaboradas a lo largo del siglo XIX.

Bando de buen gobierno de la ciudad de Guadalajara, 1823

A unos meses de haber declarado a la Provincia de Guadalajara como Estado libre y soberano de Jalisco (16 de junio de 1823), el recién autonombrado gobernador del estado, Luis Quintanar, publicó el primer *Bando de policía* de la ciudad de Guadalajara, la fecha de su publicación es del 13 de noviembre de 1823. Dicho reglamento es un amplio texto de 60 artículos donde se detalla puntualmente las reglas que tenía que seguir la población de la ciudad y que las autoridades tenían que vigilar y hacer que se respetaran y se llevaran al pie de la letra. El concepto de "policía" es el concepto tradicional que se ha venido discutiendo, dicho concepto se refiere en forma muy general al gobierno de todos los aspectos sociales, políticos, económicos, administrativos, de salubridad, ornato, abastecimiento, seguridad y prevención de los delitos, así como aprehensión de los infractores, como ladrones, borrachos, pendencieros y vagos. Todo con el fin de establecer la paz y la tranquilidad de los ciudadanos y vecinos de dicha ciudad. El párrafo inicial sintetiza lo anterior:

> Siendo la policía de los pueblos un manantial perenne de toda clase de bienes, descansando plácidamente a una sombra el ciudadano pacífico y tranquilo, al paso que la teme el perverso y criminal, que abusando de la verdadera y legítima libertad, solo piensa en quitarla a los que disfrutan de ella racional y juiciosamente, erigiéndose enemigo y usurpador de los derechos del hombre:

he venido en hacer publicar el presente bando de buen gobierno a que deberá precisamente estarse.[16]

Es de destacar que el bando estaba dirigido al "ciudadano pacífico y tranquilo", lo que demuestra que el concepto de ciudadanía ya había sido aceptado por las autoridades como un actor político y social a quién se debía cuidar de las acciones del "perverso y criminal", defendiendo los "derechos del hombre" que detentaban los ciudadanos, responsabilidad que aceptaba totalmente el gobierno del estado de Jalisco. En este bando de policía se dice que la ciudad continuaría con la división en 27 cuarteles que hasta la fecha había tenido, en tanto se hacía una nueva y más exacta división de ella, ya que contaba con una gran extensión y numeroso vecindario. También establece que la policía de la ciudad estaría a cargo de los comisarios que nombrara el ayuntamiento y de sus vigilantes, los cuales serían nombrados por dichos comisarios, bajo su responsabilidad, sujetos ambos a la comisión de policía compuesta de dos a tres regidores. Los comisarios y vigilantes de policía debían ser vecinos de su respectivo cuartel, y debían dedicarse a velar, atender y evitar cualquier desorden que turbara la tranquilidad pública, además podrían multar a los infractores de este reglamento. Los comisarios estaban encargados de hacer los padrones anuales de población de sus respectivos cuarteles.[17]

Los comisarios eran la autoridad más cercana a los ciudadanos-vecinos de la ciudad, y estaban bajo las órdenes en primer lugar de los comisionados de policía, los alcaldes constitucionales, del ayuntamiento y del jefe político, en una cadena jerárquica vertical. Tenían la obligación de detener a los vagabundos y a los ebrios de todo tipo, vigilar las casas de juego, las posadas, mesones y casas de vecindad, vinaterías y tabernas y todos los lugares donde se vendiera algún licor, evitando que en dichos lugares se

[16] Bando de buen gobierno de la ciudad de Guadalajara, 1823. En *Colección de Decretos, Circulares… de Jalisco*, (1981), t. I, pp. 81-101.

[17] Bando de buen gobierno de la ciudad de Guadalajara, 1823. En *Colección de Decretos, Circulares… de Jalisco*, (1981), t. I, pp. 81-101.

reunieran las personas y escandalizaran por cualquier motivo. Las patrullas o rondas que hacían los comisarios detenían a las personas que anduvieran en la calle después de las diez de la noche, para investigar si no traían armas prohibidas, ganzúas, soga u otro instrumento que fuera "malicioso", si el detenido justificaba un motivo justo para andar a esa hora en la calle se le dejaba libre, de lo contrario se le llevaba a la cárcel y lo ponían a disposición de algún alcalde.

Los comisarios y sus vigilantes hacían sus rondas todas las noches y se hacían acompañar de los vecinos que fueran de su confianza, los vecinos tenían obligación de acompañar a los comisarios de policía cuando fueran requeridos y no podían negarse porque podrían ser castigados, a menos que tuvieran una excusa válida. Esto muestra que no se contaba con un cuerpo especializado y profesional de policía dedicado exclusivamente a la represión y detención de los criminales y vagabundos, sino que eran los mismos vecinos-ciudadanos quienes apoyaban a los comisarios en su labor de vigilancia y actividad policiaca. Los mismos vecinos tenían que pedir permiso a las autoridades municipales para hacer fiestas o cualquier diversión, lo cual siempre era otorgado no habiendo motivo justo para evitarlo.[18]

En general todo estaba reglamentado en este bando de policía: la construcción de casas, la modificación y arreglo de fachadas, la colocación de masetas sobre ventanas, balcones y azoteas, el cuidado de calles y banquetas, así como el aseo y la recolección de basura e inmundicias de las calles, las actividades de talleres artesanales y comercios, el tránsito de carros y animales por las calles, el abastecimiento de agua para el consumo humano y el tratamiento de las aguas negras. En general toda la vida cotidiana en donde interactuaban los habitantes de la ciudad estaba puntualmente reglamentada, y aunque los comisarios y sus vigilantes tenían la obligación de velar por el cumplimiento del bando de policía, todos los ciudadanos debían velar por su cumplimiento auxiliando a las

[18] Bando de buen gobierno de la ciudad de Guadalajara. (1823). En *Colección de Decretos, Circulares… de Jalisco*, (1981), t. I, pp. 81-101.

rondas y las patrullas en los cuarteles y barrios donde vivían, finalmente, ningún ciudadano o vecino podía negarse a ser comisario de policía sin causa justificada y bajo multa, a menos que fuera perteneciente al clero.[19]

Instrucción para el gobierno del gefe de policía del departamento de Guadalajara, 1824

Resulta comprensible que el gobierno del estado de Jalisco primero se hubiera preocupado por elaborar el reglamento de policía de la ciudad de Guadalajara, siendo la capital y el centro urbano, político y comercial más importante del estado, y posteriormente se abocara a elaborar el reglamento de policía del departamento de Guadalajara, que constituía un territorio más extenso al del propio municipio de la capital. Habrá que aclarar que el departamento de Guadalajara era una parte de lo que sería posteriormente el primer cantón del estado.

El 24 de abril de 1824 el gobernador Quintanar publicó la *Instrucción para el gobierno del gefe de policía del departamento de Guadalajara*, en esta instrucción se estableció que el jefe de policía presidiría el ayuntamiento de la capital en las sesiones públicas y en las que dicho jefe creyera conveniente, podía participar en ellas, hacer propuestas y discutir lo que considerara pertinente, pero se abstendría de votar y solamente lo haría en caso de empate. El jefe político era el único conducto entre el gobernador y los ayuntamientos de su departamento, por tanto, debía acompañar todas las solicitudes que el ayuntamiento hiciera al gobernador. No era miembro de la junta auxiliar de Gobierno, sin embargo, podía concurrir a ella, pero no tenía derecho a voto en las discusiones que se realizaran relacionadas con su departamento, solo podía hacer propuestas relacionadas con este tema.[20] Según esta *Instrucción*, el jefe de policía sería el responsable inmediato ante el gobernador de la tranquilidad pública, de la seguridad de

[19] Bando de buen gobierno de la ciudad de Guadalajara, 1823. En *Colección de Decretos, Circulares… de Jalisco*, (1981) t. I, pp. 81-101.

[20] Instrucción para el gobierno del jefe político del departamento de Guadalajara de 24 de abril de 1824. En *Colección de Decretos, Circulares… de Jalisco*, (1981) t. I, pp. 200-203.

las personas y de sus intereses en todo el departamento, y por lo mismo cuidaría que se ejecutaran y respetaran puntualmente las leyes de policía y los bandos de buen gobierno, vigilaría a los miembros del ayuntamiento en sus respectivas comisiones, y también a los comisarios y vigilantes de policía municipales. El jefe político podría dictar todas la providencias que fueran conducentes para facilitar su mejor desempeño valiéndose del apremio, del arresto conforme a la ley, y podría establecer multas que no pasaran de cincuenta pesos, aplicables a los fondos municipales, dichas multas se impondrían a los que incumplieran sus órdenes y a los funcionarios municipales cuando no cumplieran con sus obligaciones.[21]

De acuerdo con el artículo sexto de esta *Instrucción*, el jefe de policía era el comandante en jefe de la milicia nacional de su departamento, y en esto solo tenía como autoridad superior al gobernador del estado. En este sentido el jefe de policía tenía la obligación de que la milicia nacional progresara en su alistamiento, arreglo y disciplina, haciendo cumplir el reglamento, decretos y órdenes respectivas vigentes, y proponer al congreso, por conducto del gobernador del estado, los medios para conseguir armamento.[22] En el séptimo artículo de dicha *Instrucción* se establece que el jefe político elaboraría de forma escrupulosa el censo y las tablas estadísticas del departamento comisionando a los sujetos que fueran más instruidos y capacitados para ello, siendo auxiliados para obtener los datos necesarios por las oficinas, secretarías y toda clase de establecimientos públicos. Concluida la obra la presentaría al gobernador quien a su vez la haría del conocimiento del Congreso del estado.[23] En lo que estaba relacionado con el gobierno y atribuciones del ayuntamiento, el jefe político debía respetar los artículos 20, 22, 26, 27 y 30 del capítulo 3° de la *Instrucción*

[21]Instrucción para el gobierno del jefe político del departamento de Guadalajara de 24 de abril de 1824. tomo 1, pp. 200-203.

[22] Instrucción para el gobierno del jefe político del departamento de Guadalajara de 24 de abril de 1824. En *Colección de Decretos, Circulares… de Jalisco*, (1981) t. 1, pp. 200-203.

[23] Instrucción para el gobierno del jefe político del departamento de Guadalajara de 24 de abril de 1824. En *Colección de Decretos, Circulares… de Jalisco*, (1981) t. 1, pp. 200-203.

para el gobierno económico político de las provincias dado por las Cortes españoles el 23 de junio de 1813, excepto las que fueran incompatibles con el gobierno de la república federal. Finalmente, según el artículo 10 de la *Instrucción para el jefe político del departamento de Guadalajara*, el jefe político debía despachar con un secretario y dos escribientes en la capital del departamento, y en sus ausencias o enfermedades, sería sustituido por el alcalde de primera elección de la capital.[24]

Constitución Política del Estado Libre de Jalisco, 1824

Como se puede observar los dos anteriores reglamentos preceden a la publicación de la *Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos*, del 4 de octubre de 1824, y a la *Constitución Política del Estado Libre de Jalisco*, que se realizó el 18 de noviembre del mismo año, y son posteriores al *Reglamento Provisional del Imperio Mexicano* del 18 de diciembre de 1822 y a la *Constitución de Cádiz* de 1812. Tanto en la *Constitución de Cádiz* como en el *Reglamento del Imperio* se hace mención de los jefes políticos, pero como gobernadores de provincia y se les denomina "jefe superior", estas divisiones territoriales corresponderían a lo que anteriormente fueron las intendencias, y después, en el periodo republicano a los estados de la federación, por lo que el cargo de jefe superior correspondería a lo que serían los gobernadores de los estados de la federación. Los jefes políticos a los que aluden los dos reglamentos de Jalisco anteriores corresponden a los jefes de departamento o de cantón, como más claramente se especifica en la *Constitución Política del Estado Libre de Jalisco* de 1824.

En la *Constitución federal* de 1824 se establece que el gobierno de cada estado se dividiría para su ejercicio en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, sin que pudieran unirse dos o más de ellos en una sola cooperación o persona, ni el legislativo en un solo individuo, además que dicho gobierno no podía contradecir ni oponerse a la *Constitución federal* ni al *Acta Constitutiva*, pero no dice nada de los jefes políticos porque eso era

[24] Instrucción para el gobierno del jefe político del departamento de Guadalajara de 24 de abril de 1824. En *Colección de Decretos, Circulares… de Jalisco*, (1981) t. I, pp. 200-203.

un asunto interno del gobierno y legislación de cada estado en particular.[25] Al mes siguiente de promulgada la *Constitución federal* se publicó la *Constitución del Estado libre de Jalisco*, en ella se establecen claramente cuáles son las atribuciones y obligaciones de los "jefes de policía", de forma precisa en los artículos 155 al 162. En ellos se estipula que habría un jefe de policía por cantón del estado,[26] en quien residiría el gobierno político del mismo. Los requisitos para ser jefe de policía eran: ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años, y vecino del estado, con residencia en él por cinco años antes de su "elección", que más bien sería nombramiento, como se precisa en el artículo 157 de la misma *Constitución* que dice textualmente: "Los jefes de policía, a excepción del de la capital, serán nombrados por el gobernador a propuesta en terna del Senado".[27] En el cantón de la capital del estado (primer cantón) el vicegobernador era quien ocupaba el cargo de jefe de policía, al mismo tiempo que presidía el Senado, pero en el caso de que tuviera que desempeñar las funciones de gobernador del estado, entonces nombraría a un sustituto con aprobación del Senado. El vice-gobernador era electo de la misma manera que el gobernador.[28]

Para hacer la propuesta de la terna de la cual se nombraría al jefe de policía, el Senado solicitaba informes a la junta de policía del respectivo cantón sobre los sujetos que pretendían el puesto de jefe de policía. Estos funcionarios durarían en su cargo cuatro años, pudiendo ser reelectos sin intervalo alguno. Los jefes de policía eran independientes uno de otro, y

[25] *Constitución Federal de los estados Unidos Mexicanos* del 4 de octubre de 1824, Título VI, artículos del 157 al 162.

[26] En el artículo 6° de la misma *Constitución* se establece que el Estado de Jalisco se divide en ocho cantones.

[27] El Senado estaba compuesto por cinco vocales propietarios y dos suplentes, se renovaba cada dos años por mitad. Artículos del 127 al 134 de la *Constitución del Estado Libre de Jalisco* de 1824.

[28] *Constitución del Estado Libre de Jalisco* de 1824, artículo 123.

solo estaban sujetos a la autoridad inmediata del gobernador del estado.[29] Las juntas de policía de cada cantón estaban compuestas por cinco vocales propietarios y dos suplentes. Cada dos años, todos los ayuntamientos de cada cantón nombraban a un vecino de su territorio, ciudadano con plenos derechos y mayor de 25 años, para que concurrieran a la capital del mismo cantón a elegir los individuos que debían componer su respectiva junta de policía. De ahí se escogían a los vocales propietarios y suplentes que formarían las juntas de policía, los nombramientos de estas juntas se hacían con la participación de los comisionados de los ayuntamientos de cada cantón y presididos por el jefe de policía respectivo.[30] Las juntas de policía tenían entre sus atribuciones velar por la observancia de la *Constitución* y las leyes, dando parte al gobernador de las infracciones que notaran, cuidar la buena inversión de los fondos municipales de su cantón, exigir las cuentas anuales de dichos fondos y examinarlas para dar cuenta después al gobierno. Además, concedían licencia a los ayuntamientos para gastos extraordinarios en casos muy urgentes, dando cuenta inmediata al gobernador. También promovían el establecimiento y fomento de todos los ramos de propiedad de su cantón. Por su parte, los ayuntamientos de los pueblos del estado debían cuidar de su policía y gobierno interior, pero bajo la vigilancia de las juntas cantonales de policía.[31] Las juntas electorales municipales se organizaban en cada municipio para nombrar electores de departamento, estos a su vez elegirían a los diputados, estas juntas estaban presididas por un miembro del ayuntamiento o, a falta de este, por un vecino del territorio designado por la misma junta, y se nombraba a los demás funcionarios de la junta electoral. Las juntas electorales departamentales eran presididas por el jefe de policía o, en su defecto, por el alcalde primero de la capital del departamento, los electores de departamento elegirían a los diputados del departamento.[32]

[29] *Constitución del Estado Libre de Jalisco* de 1824, artículos 158, 160 y 161.

[30] *Constitución del Estado Libre de Jalisco* de 1824, artículos 163-166.

[31] *Constitución del Estado Libre de Jalisco* de 1824, artículo 170.

[32] *Constitución del Estado Libre de Jalisco* de 1824, artículos 44-70.

Reglamento instructivo para el gobierno del Estado libre de Jalisco, 1825

Dos meses y medio después de haber sido promulgada la *Constitución del Estado Libre de Jalisco* el Congreso del estado decretó el *Reglamento instructivo para el gobierno económico político del mismo estado* (31 de enero de 1825), el cual estableció minuciosamente las funciones de las autoridades de todos los niveles desde el gobernador del estado hasta los comisarios de policía de los ayuntamientos. Este reglamento era más específico que los anteriores pues establece que los jefes de policía tenían tres clases de atribuciones: políticas, militares y de hacienda. Por primera vez se menciona la figura del director político, el cual era nombrado por el jefe de policía a propuesta en terna de la junta de policía respectiva. Había un director político encargado del gobierno de cada departamento, el cual sería confirmado por el gobernador del estado. El jefe político del cantón recibiría las órdenes del supremo gobierno y las trasmitiría a los directores de departamento de su cantón. El jefe de policía era el encargado de cuidar y conservar el orden y tranquilidad pública de su cantón, haciendo que las autoridades políticas subalternas cumplieran con sus deberes, dictando las órdenes necesarias para que se respetaran y cumplieran las leyes, imponiendo multas hasta por cien pesos a los infractores, sin perjuicio de formación de causa en las faltas graves. Los jefes políticos, según este reglamento, tenían la facultad de catear las casas y apresar a las personas, cuando lo exigía la seguridad pública, poniendo a los presos a disposición de los tribunales respectivos en un plazo de doce horas, manifestando por escrito el motivo de la prisión.[33]

Las quejas en contra del jefe político eran dirigidas al gobernador del estado, en caso necesario, por faltas al desempeño de sus deberes y si no hubiera daños a terceros, el gobernador suspendía al jefe político hasta por dos meses sin goce de sueldo, pero si reincidía en las mismas faltas, la suspensión era por el doble de tiempo, o de plano, lo suspendía definitivamente. En casos graves, el gobernador les formaba causa de acuerdo a

[33] Reglamento instructivo para el gobierno económico político del Estado Libre de Jalisco, 1825. En *Colección de Decretos, Circulares… de Jalisco*, (1981), t. I, pp. 405-431.

la ley. De la misma manera, las quejas en contra de los funcionarios subalternos por faltas o morosidades, eran escuchadas por el jefe de policía del cantón respectivo, se les multaba por primera vez hasta en cincuenta pesos, por segunda hasta cien, y por tercera se los suspendía del empleo, de todo ello, el jefe de policía informaba al gobernador para su remoción. Solo a través del jefe de policía se podían enviar solicitudes y quejas al gobernador. Los ayuntamientos y las juntas de policía de igual forma debían usar como intermediario al jefe de policía para comunicarse con el gobernador del estado. También el jefe de policía daba licencia para contraer matrimonio a los hijos de familia, con arreglo a las leyes vigentes, cuando eran menores de edad.[34] Además, el jefe de policía informaba, cada tres meses al gobernador, sobre el estado de la tranquilidad pública en su cantón, y cada seis meses notificaba el número de nacimientos, matrimonios y muertos en los pueblos de su territorio, de la llegada de nuevos vecinos y del lugar de su procedencia, comunicaba también el estado de los establecimientos públicos, el orden, atraso o progreso y las causas que los habían motivado. Organizaba la comunicación entre los pueblos por medio de correos o estafetas a fin de que no hubiera retrasos en la circulación de las órdenes del gobierno, siendo de carga concejil la conducción de los pliegos.[35]

Por otra parte, el jefe de policía estaba obligado a proporcionar alojamiento y bagajes a la tropa, dando órdenes para ello a los directores de departamento. También concedía licencia a los integrantes de la junta de policía y del ayuntamiento para salir algunos meses del cantón. Los jefes de policía residían en la cabecera de sus cantones respectivos, y recibían 1,500 pesos anuales, a excepción del vicegobernador, quien era el jefe de policía del primer cantón con sede en Guadalajara. Los jefes políticos presidían sin voto la junta de policía y el ayuntamiento, y tenían que vi-

[34] Reglamento instructivo para el gobierno económico político del Estado Libre de Jalisco, 1825. En *Colección de Decretos, Circulares… de Jalisco*, (1981), t. I, pp. 405-431.

[35] Reglamento instructivo para el gobierno económico político del Estado Libre de Jalisco, 1825. En *Colección de Decretos, Circulares… de Jalisco*, (1981), t. I, pp. 405-431.

sitar los pueblos principales de su cantón con el objeto de cerciorarse del cumplimiento de las leyes y órdenes del gobierno, y remediar los abusos dando cuenta al gobernador del resultado de sus visitas.[36] En caso de motín o de otro accidente que comprometiera la seguridad pública, el jefe de policía podía pedir el auxilio a la guardia nacional, si la hubiera en su cantón, y guardaba la mejor armonía con el comandante de ella. Esto quiere decir que el jefe de policía no tenía un grupo armado bajo su mando del cual disponer en estos acontecimientos, al menos no se menciona en este reglamento. En cambio, cada jefe político tenía un oficial secretario, nombrado por él mismo y aprobado por el gobernador, con un sueldo de 600 pesos, un escribiente con 300 pesos, y cien pesos para gastos de oficina. Las ausencias por enfermedad o muerte del jefe político eran cubiertas por el primer alcalde del ayuntamiento.[37] Las juntas de policía tenían la obligación de examinar las cuentas de los ayuntamientos del cantón para remitirlas al gobierno del estado. Estas juntas se encargaban de hacer las propuestas de ternas para nombrar directores políticos en cada departamento, y cuidaban que se erigieran ayuntamientos en donde legalmente debía haber, y se comunicaban con el gobernador por conducto del jefe de policía.[38]

Las atribuciones de los directores de departamento o directores políticos se encuentran en los artículos 109 al 128 de este *Reglamento Instructivo*, dichos funcionarios se encargaban del gobierno del departamento respectivo, tenían como requisitos ser mayores de 25 años, ser vecinos y residentes en la capital de su departamento tres años antes de su nombramiento. El tiempo de su cargo era de cuatro años, pudiendo ser reelectos, su empleo era de carga consegil y solo se les auxiliaba con 150 pesos al

[36] Reglamento instructivo para el gobierno económico político del Estado Libre de Jalisco, 1825. En *Colección de Decretos, Circulares… de Jalisco*, (1981), t. I, pp. 405-431.

[37] Reglamento instructivo para el gobierno económico político del Estado Libre de Jalisco, 1825. En *Colección de Decretos, Circulares… de Jalisco*, (1981), t. I, pp. 405-431.

[38] Reglamento instructivo para el gobierno económico político del Estado Libre de Jalisco, 1825. En *Colección de Decretos, Circulares… de Jalisco*, (1981), t. I, pp. 405-431.

año para gastos de papel y escribiente. En los departamentos donde residía el jefe político no había director. Los directores de departamento debían trasmitir las órdenes del jefe de policía a los alcaldes de los pueblos del departamento, cuidaban que los ayuntamientos realizaran sus sesiones ordinarias, vigilaban que llevaran correctamente sus libros de actas y que sus miembros cumplieran eficazmente con sus comisiones, dando aviso al jefe político de cualquier incumplimiento o faltas de los mismos. El director del departamento presidía sin voto al ayuntamiento de la cabecera, y a los demás pueblos subalternos cuando se hallaba en ellos. Podía citar al ayuntamiento en casos de necesidad o gravedad, y podía multar hasta con veinte pesos a los miembros del ayuntamiento que no asistieran a las sesiones. Hacía las estadísticas de población de su departamento y las remitía al jefe de policía. Cada tres meses el director político visitaba los ayuntamientos subalternos para ver el estado de sus progresos, corregía los abusos por los medios que estuvieran a su alcance y daba cuenta al jefe político de lo que consideraba más importante. El director del departamento oía las quejas en contra de los funcionarios municipales y concedía licencia hasta por dos meses a los miembros del ayuntamiento para que salieran del departamento a negocios de su interés. Las ausencias del director político eran cubiertas por el alcalde más antiguo de la cabecera departamental.[39]

En el nivel más cercano a los ciudadanos-vecinos de los pueblos se encontraban los ayuntamientos, lo relativo a los ayuntamientos en este *Reglamento instructivo* se encuentra en los artículos 129 al 149, del cual solo destacaré el 135, donde se aborda la policía de buen gobierno y seguridad. Los ayuntamientos se encargaban de la policía de buen gobierno y seguridad de las personas y sus intereses, para lo que se dictaban todas las precauciones y medidas generales en "persecución de la gente viciosa, holgazana y mal entretenida". Procuraba que no hubiera "juegos prohibidos ni juntas escandalosas" en las tabernas, y buscaba por todos los

[39] Reglamento instructivo para el gobierno económico político del Estado Libre de Jalisco, 1825. En *Colección de Decretos, Circulares… de Jalisco*, (1981), t. I, pp. 405-431.

medios que los habitantes de su territorio se dedicaran al trabajo y que fuera bien educada la juventud. Los alcaldes también se encargaban de la administración de justicia y de salubridad en sus pueblos, de la educación pública, de la comodidad y el ornato, del cobro de contribuciones directas y de sus fondos municipales.[40]

Es muy importante rescatar el último eslabón en las cadenas de mando de la policía de buen gobierno y seguridad a los comisarios de policía (artículos del 150 al 161 del *Reglamento Instructivo*).[41] Los ayuntamientos tenían dividido su territorio en cuarteles o barrios, en cada cuartel había un comisario de policía y un teniente, los cuales debían ser vecinos del lugar, con residencia al menos de dos años, mayores de 25 años de edad y que supieran leer y escribir. Los comisarios y tenientes se renovaban cada año y podían ser reelectos, pero sin la obligación de continuar, sino hasta después de dos años de descanso de toda carga consegil. Las atribuciones de los comisarios eran las siguientes: formar el censo de su respectivo cuartel, llevar un libro de las familias que vivían en él, con el lugar de su procedencia, ayudar a los cobradores de contribuciones en sus respectivos barrios, cuidar de la quietud y orden público de día y de noche en todos los cuarteles, aprehendiendo infraganti a los infractores, dar cuenta al alcalde de los hombres y mujeres "viciosos y sin oficio" que hubiera en sus cuarteles, dar auxilio a cualquier individuo que se lo pidiera para defender su persona e interés, cuando se hallaran notoriamente amenazados. Los vecinos de cada cuartel estaban obligados a obedecer a los comisarios de policía, y a auxiliarlos para las rondas diurnas y nocturnas, de lo contrario serían multados. Los comisarios de policía tenían asiento en el ayuntamiento después de los síndicos procuradores en las sesiones públicas a las

[40] Reglamento instructivo para el gobierno económico político del Estado Libre de Jalisco, 1825. En *Colección de Decretos, Circulares… de Jalisco*, (1981), t. I, pp. 405-431.

[41] Reglamento instructivo para el gobierno económico político del Estado Libre de Jalisco, 1825. En *Colección de Decretos, Circulares… de Jalisco*, (1981), t. I, pp. 405-431.

que concurrieran, así como voto informativo en todas las sesiones a que fueran llamados o quisieran asistir.[42]

Leyes Constitucionales de la República Mexicana, 1836

En la Constitución centralista de 1836, se estableció que la división de la república sería por departamentos, éstos a su vez se dividirían en distritos, los que finalmente estarían integrados por partidos. El gobierno interior de los departamentos estaría a cargo de los gobernadores, con sujeción directa al gobierno general. Dichos gobernadores serían nombrados por el gobierno general a propuesta de una terna de las juntas departamentales, los gobernadores de departamento durarían en el cargo ocho años, pudiendo ser reelectos.[43]

Los requisitos para ser gobernador eran: ser mexicano por nacimiento o haber nacido en cualquier parte de América antes de 1810, ser ciudadano con plenos derechos, natural o vecino del mismo departamento, tener la edad de treinta años y un capital que le produjera una renta anual de dos mil pesos al menos. El gobernador nombraba a los prefectos y aprobaba el nombramiento de los subprefectos del departamento. Había un prefecto en cada cabecera de distrito, el cual duraba en su cargo cuatro años y podría ser reelecto. Para ser prefecto se necesitaba ser ciudadano mexicano, natural o vecino del departamento del cual sería responsable, tener más de treinta años de edad y poseer un capital que le produjera por lo menos mil pesos anuales.[44]

Los prefectos cuidaban el orden y la tranquilidad pública en sus respectivos distritos, con entera sujeción al gobernador, cumplir y hacer cumplir las órdenes del gobierno del departamento y velar que los ayuntamientos cumplieran con sus obligaciones, sobre todo en lo concerniente al ramo de policía. Los subprefectos estarían a cargo de un partido, y serían nom-

[42] Reglamento instructivo para el gobierno económico político del Estado Libre de Jalisco, 1825. En *Colección de Decretos, Circulares… de Jalisco*, (1981), t. I, pp. 405-431.

[43] Tena. (1999), pp. 239-244.

[44] Tena. (1999), pp. 239-244.

brados por el prefecto y aprobado por el gobernador, duraría dos años en el puesto y podría ser reelecto. Los requisitos para ser subprefecto eran los mismos que para el prefecto, solo que al subprefecto se le pedía ser mayor de veinticinco años, ser vecino de su partido y poseer un capital que le diera cuando menos quinientos pesos de renta anual. El subprefecto tenía las mismas funciones que el prefecto en el partido, y estaba sujeto a él, y por su intermediación al gobernador.[45]

Constitución Política del Estado de Jalisco, 1857

Con el triunfo de los liberales y la promulgación de la *Constitución de la República Federal de 1857* el tema del gobierno interno de los estados volvió a ser tratado por las autoridades estatales, por tal motivo el asunto de los jefes políticos y sus subalternos nuevamente apareció en la *Constitución Política del Estado de Jalisco* publicada el 6 de diciembre de 1857. En dicha *Constitución* se establece que en la cabecera de cada cantón habría un jefe político que se encargaría de la administración del mismo, y que en la cabecera de cada departamento habría un director político. Además, dice que los pueblos que por sí, o unidos con los inmediatos, tuvieran seis mil habitantes podían contar con ayuntamientos electos popularmente, cuyos miembros no bajarían de cinco ni excederían de nueve. En las demás poblaciones que no reunieran estos requisitos tendrían por lo menos un comisario municipal, también de nombramiento popular. Para poder desempeñar estos cargos, se necesitaban los mismos requisitos que para ser diputado, es decir: ser mayor de 25 años de edad, ser ciudadano mexicano, saber leer y escribir (excepto los comisarios municipales), no haber sido condenado por ninguno de los delitos infamantes, no tener causa criminal pendiente y no ser deudor calificado del erario. Finalmente, la *Constitución del estado de Jalisco* establecía que los jefes y directores políticos serían nombrados por el gobernador del estado, a propuesta en

[45] Tena. (1999), pp. 239-244.

terna del Consejo de Gobierno, que era un cuerpo auxiliar consultivo del gobierno del estado.[46]

Reglamento para la organización de la fuerza de policía y rural de Jalisco, 1856

El general Anastasio Parrodi en atención a la gran inseguridad en que se encontraban los caminos y poblaciones del estado de Jalisco, y considerando que uno de los primeros deberes del gobierno era cuidar las vidas y los interese de los ciudadanos, publicó *el Reglamento para la organización de la fuerza de policía y rural del Estado*, con fecha del 11 de agosto de 1856. En dicho reglamento se estableció que el estado de Jalisco contaría con un cuerpo de policía con el fin de atender de forma exclusiva la seguridad pública de los caminos y las poblaciones. El alistamiento de individuos a este cuerpo sería voluntario, quedando sus integrantes exentos del servicio en el ejército y en la guardia nacional móvil.[47]

En cada cabecera de cantón habría una compañía de infantería compuesta de cien plazas, con un capitán, un teniente y dos sub-tenientes, excepto en Guadalajara, la cual continuaría con la organización que ya tenía. En las cabeceras de departamento solo habría medias compañías compuestas de cincuenta hombres, con un teniente y un sub-teniente. En las demás municipalidades solo se formarían grupos hasta de veinticinco hombres, dirigidos por un oficial subalterno. La fuerza de seguridad pública estaría inmediatamente sujeta a la autoridad local respectiva, el jefe político propondría a los ciudadanos que deberían ejercer las funciones de oficiales, cuidando que éstos fueran los más aptos y honrados. Los sargentos y cabos serían electos por la autoridad local, pero con la aprobación del gobierno. Este último sería el que proporcionaría las armas al cuerpo de policías. En tanto que las autoridades locales deberían auxiliarse mutuamente en caso necesario, cuando se encontraran amagadas

[46] En *Colección de Decretos, Circulares… de Jalisco*, (1981), t. XIV, pp. 382-398.

[47] AHJ. G-15-856. JAL/127. Reglamento de Policía. Anastasio Parrodi, 11 de agosto de 1856.

por alguna gavilla de malhechores. Los delincuentes aprehendidos serían puestos a disposición de un juez competente, para que administrara justicia lo más pronto posible.[48]

En las haciendas de campo se establecerían grupos montados, armados y vestidos por cuenta de dichas fincas y a cargo de sargentos. Las fincas de campo serían clasificadas en tres categorías: la primera con once hombres; la segunda con nueve; y la tercera con cinco. Los jefes naturales de estos cuerpos de policía rural serían los dueños o administradores de las haciendas, pero subordinados a la autoridad local respectiva. Los grupos de policía rural tendrían las obligaciones siguientes: vigilar la seguridad del terreno de la finca y caminos que por ella cruzaran; prestarse prontos y recíprocos auxilios en caso de amago de alguna gavilla de ladrones, o en la persecución de los mismos. Las personas aprehendidas por esta policía rural deberían ponerlas a disposición a la autoridad correspondiente para ser juzgados. Solo en caso muy remoto y necesario, las fuerzas rurales podrían salir del municipio, pero en dicho caso serían socorridas por las rentas públicas, previa orden del jefe del cantón a las oficinas de rentas del mismo.

Reglamento para el mejor servicio de la Guardia de Seguridad en Jalisco, 1857

El 23 de marzo de 1857, Jesús Camarena, como gobernador provisional del estado de Jalisco publicó el Reglamento para el mejor servicio de la Guardia de Seguridad en el estado que consta de 19 artículos. En dicho reglamento se establece que los batallones y escuadrones de la guardia de seguridad del estado se compondrían de cuatro compañías, en cuanto a los batallones, y de dos compañías en los escuadrones. En la ciudad de Guadalajara habría un batallón y un escuadrón, y el jefe político del primer cantón propondría la fuerza de caballería que debía distribuirse entre

[48] AHJ. G-15-856. JAL/127. Reglamento de Policía. Anastasio Parrodi, 11 de agosto de 1856.

los pueblos de su demarcación, no pudiendo exceder dicha fuerza de un batallón y un escuadrón.[49]

Por su parte los jefes políticos de los cantones de Lagos y Tepic propondrían la fuerza que debía distribuirse, sin que excediera en su totalidad, la de infantería de un batallón y dos compañías, y la caballería de un escuadrón. Los jefes políticos de los demás cantones propondrían la distribución de modo que no excediera de un batallón y un escuadrón, según las atenciones del servicio y los recursos de sus rentas. Para la distribución del servicio diario en las poblaciones, los jefes políticos y primeras autoridades locales, establecerían puestos fijos en cada uno de los cuarteles en que aquellas estuvieran divididas, de manera que se prestaran prontos y recíprocos auxilios. Para que fuera mejor la seguridad de los caminos y despoblados, los jefes políticos establecerían puestos de seguridad con una distancia entre uno y otro no mayor a cinco leguas, principalmente en donde los malhechores acostumbraban reunirse y atacar. La conducción de presos se haría por la autoridad respectiva y se verificaría por cordillera de uno a otro punto hasta el destino final.[50]

La mesa de guerra establecida para la guardia nacional en la secretaría de gobierno sería el conducto ordinario para todos los asuntos del servicio de seguridad. Los jefes políticos designarían a los oficiales y sargentos para jefes de línea y de sección, dando cuenta al gobierno para su conocimiento. En la capital del estado y en las demás poblaciones en donde no fuera suficiente el número de hombres destinados al servicio general de la policía, lo desempeñaría la guardia de seguridad, encargándose de los ramos de aseo, salubridad, ornato y de las demás disposiciones que emanaran de los ayuntamientos y primeras autoridades locales. En consecuencia, la fuerza de policía de ambas armas que existiera en la capital del estado, quedaría refundida en la guardia de seguridad, siempre que los

[49] AHJ. G-15-857. JAL/141. Reglamento para el mejor servicio de la Guardia de Seguridad en el estado de Jalisco. Jesús Camarena. Guadalajara, 23 de marzo de 1857.

[50] AHJ. G-15-857. JAL/141. Reglamento para el mejor servicio de la Guardia de Seguridad en el estado de Jalisco. Jesús Camarena. Guadalajara, 23 de marzo de 1857.

individuos que la componían tuvieran los requisitos que requería la ley respectiva. Entre tanto se creaban los arbitrios para mantener la guardia de seguridad, ésta sería costeada por las rentas del Estado.[51]

Estatuto provisional del Imperio mexicano del 10 de abril de 1865

La invasión francesa en México y el establecimiento del imperio de Maximiliano trajo como consecuencia la promulgación de un nuevo marco legal contenido en el *Estatuto provisional del Imperio Mexicano* del 10 de abril de 1865, en este código también se menciona a las autoridades subalternas en los departamentos de la siguiente manera: Los prefectos serían los delegados del emperador para administrar los departamentos cuyo gobierno se les encomendaba. Dichos prefectos eran nombrados directamente por el emperador. Los departamentos estarían divididos en distritos y cada uno de ellos estaría a cargo de un subdelegado. El nombramiento de este subprefecto era responsabilidad del prefecto departamental, con la aprobación del emperador.[52]

Reformas a la Constitución del Estado de Jalisco de 1857

En las reformas hechas a la *Constitución del Estado de Jalisco* en mayo de 1887, se establece que se puede formar causa (judicial) contra los jefes políticos, directores, ayuntamientos y comisarios municipales, cuando hubiera lugar por delitos comunes y de oficio en el orden administrativo, y lo más importante, que los jefes políticos y directores serían nombrados directamente por el gobernador del estado, ya no era necesario que el consejo de gobierno propusiera una terna, se eliminaron las ternas, y los directores políticos también serían nombrados directamente por el go-

[51] AHJ. G-15-857. JAL/141. Reglamento para el mejor servicio de la Guardia de Seguridad en el estado de Jalisco. Jesús Camarena. Guadalajara, 23 de marzo de 1857.
[52] Tena. (1999), pp. 674-675.

bernador, ya no los nombraba el jefe político del cantón. Esta era a todas luces una reforma centralizadora con respecto al gobernador.[53]

Instrucciones al cuerpo de policía de la ciudad de Guadalajara, 1907

Estas instrucciones de policía de la ciudad de Guadalajara se publicaron el 15 de abril en la revista *Argos*. En éstas se establece que el objetivo de la policía en la ciudad de Guadalajara era cuidar el orden, la seguridad, la salubridad y aseo público de la población. La policía se dividía en tres clases: Policía Preventiva, Policía Administrativa y Policía Judicial. La policía administrativa se ocupaba de prevenir los delitos y faltas a los bandos de policía y buen gobierno, y los relativos a la salubridad. Mientras que la policía judicial investigaba los delitos, descubría a los delincuentes y recogía todos los objetos relacionados con los hechos delictuosos. Por su parte, la policía administrativa era ejercida por el jefe político, el inspector general de policía, por los inspectores y subinspectores de policía y por los agentes inferiores, como auxiliares. Esta instrucción dividió a la ciudad de Guadalajara en cuatro demarcaciones de la siguiente manera: la primera estaba integrada por los cuarteles I, II y III; la segunda por los cuarteles IV, V y X; la tercera por los cuarteles VI y VII; y finalmente, la cuarta por los cuarteles VIII y IX. En cada demarcación habría una oficina llamada de "inspección de policía". En la Inspección general de policía se hallaba el inspector general y demás empleados. Los empleados que componía la fuerza armada y montada dependían del inspector general de policía, y este a su vez, dependía del pagador de la gendarmería municipal y luego de la jefatura política del cantón. Los empleados de la inspección general de policía eran nombrados por el jefe político, con aprobación del gobernador del estado, con la excepción de la clase de tropa, que los nombraba el mismo jefe político, sin la necesidad de la aprobación del gobernador.[54]

[53] Francisco Tolentino, Memoria de gobierno, 1887. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. (comps.) *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara, Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. II, pp. 59-60.

[54] *Argos*, 15 de abril de 1907, p. 3.

El alistamiento de la tropa armada se efectuaba por medio del enganche voluntario de dos años por lo menos. Para ser gendarme se requería ser mayor de veintiún años de edad y menor de cincuenta y cinco años, saber leer y escribir, con goce de cabal salud y una fianza de persona conocida como aval, que respondiera por el enganchado, por el vestuario y por el armamento que se le entregue. En todas las inspecciones de policía el servicio se haría por turnos, estando siempre de guardia un inspector o subinspector, un practicante de medicina, un escribiente, una ordenanza enfermero y otro calabocero. El servicio de la fuerza armada también se haría por turnos, debiéndose hacer por mitad de la tropa para cada demarcación.[55] El inspector general de policía tenía que presentar un informe diario al jefe político, y trasmitir las órdenes de éste al cuerpo de policía. Tenía que visitar con frecuencia las inspecciones de policía y sanidad, dando cuenta al jefe político de las deficiencias que hubiera y proponer soluciones a ellas. También debía cuidar que los policías acudieran a las academias respectivas para que los agentes conocieran perfectamente sus deberes, leyes y reglamentos que les concernían. Llevaba los libros de la jefatura y sus archivos.[56]

Los inspectores de demarcación tenían el mando directo de la misma, hacían guardias de veinticuatro horas, turnándose con el sub-inspector, daba aviso a la jefatura política y al inspector general de todas las novedades que llamaran su atención, aunque no ameritaran detención alguna de personas. En caso de incendio, inundación, derrumbe, descarrilamiento o cualquier otro siniestro, dictaba las órdenes necesarias para contenerlo y auxiliar a las víctimas. Rendía diariamente el parte de novedades a la jefatura política, a la hora que ésta determinara, haciendo constar en él los nombres de los detenidos y los quejosos, si los hubiere, y los delitos o faltas que se les atribuían. También debía informar sobre las faltas que cometieran sus subalternos y consultar sobre su posible baja. Igual debía poner a disposición de la jefatura política a los infractores del reglamento de

[55] *Argos*, 15 de abril de 1907, p. 4.

[56] *Argos*, 15 de abril de 1907, p. 4.

policía, sin poder cobrar ni recibir ninguna multa. Por otra parte, el inspector tenía el deber de cuidar a las personas detenidas en la inspección y que debían ser consignadas dentro de veinticuatro horas a la autoridad competente, teniendo especial cuidado de que durante el tiempo que estuvieran detenidas, dichas personas fueran tratadas con consideración, sin causarles más molestias que las indispensables. El inspector debía evitar que se ventilaran asuntos de carácter civil dentro de la inspección, que se admitieran más depósitos que los ordenados por la autoridad judicial, se cobraran retribuciones en especie alguna por servicios que allí se prestaran y que se impusieran castigos corporales o pecuniarios, entre muchas otras cosas.[57]

Ley que fija las atribuciones de los empleados de la Administración Pública, 1907

Según la Ley de los empleados de la Administración Pública, publicada en la revista *Argos* en mayo de 1907, la administración de los cantones pertenecía a las juntas cantonales. A éstas correspondía los ramos de instrucción pública, la apertura y conservación de caminos cantonales, éstos eran los que comunicaban a la cabecera cantonal con la de cada uno de los municipios o con otro cantón, siempre que no fuera por medio de caminos generales. También les correspondían los canales y otras vías de comunicación dentro del cantón. Las juntas cantonales también se encargaban de los establecimientos de beneficencia y utilidad pública y de las obras de carácter público. La adquisición, enajenación, arrendamiento y cambio de las propiedades cantonales, la aceptación de legados y donaciones, el ejercicio de las acciones judiciales y la celebración de transacciones en los negocios cantonales, también eran de su incumbencia.[58]

De acuerdo a esta ley, a los jefes políticos les correspondía publicar todas las leyes, reglamentos y circulares que recibieran del gobierno, y remitirlas a los directores de departamento del cantón. Además, los jefes

[57] *Argos*, 15 de abril de 1907, p. 3.

[58] *Argos*, 13 de mayo de 1907, p. 69.

políticos debían cuidar de la conservación de la tranquilidad y del orden público en el cantón, cumpliendo y haciendo efectivas las disposiciones relativas del gobierno.[59] Entre sus atribuciones, los jefes políticos debían nombrar a sus dependientes, dando cuenta al gobierno, además concedían licencia hasta por un mes, cada año, a dichos dependientes, previa aprobación del gobernador. También debían formar el presupuesto de los gastos generales del cantón y enviarlo con oportunidad al gobierno. Entre las atribuciones más importantes de los jefes políticos estaba que podían mandar la Guardia nacional del cantón, y la gendarmería del municipio, pero con sujeción absoluta a las órdenes del gobernador del estado. También tenían que reunir los datos estadísticos del cantón y remitirlos al gobierno para que éste pudiera formar la estadística del estado. Otra atribución importante era que los jefes políticos debían cuidar que en los días de elecciones populares, el pueblo tuviera la libertad absoluta con que debía obrar en estos actos. Ejecutar en lo que les correspondiera, las sentencias de los tribunales, y que las fuerzas de la guardia nacional prestaran auxilio a estos tribunales en caso necesario.[60]

Según este reglamento, los jefes políticos debían visitar su cantón cuando menos una vez al año, para corregir los abusos que notara en todos los empleados subalternos y dar cuenta al gobierno, tanto de esos abusos, como de los que llegara a tener conocimiento de las juntas cantonales y ayuntamientos. Cada mes, el jefe político debía enviar al gobierno un informe del estado que guardaba la tranquilidad pública en su cantón, además de informar sobre el orden, el progreso o atraso de los establecimientos públicos, ya fueran generales, cantonales o municipales, y de las causas que lo motivaran, para que el gobierno actuara oportunamente.[61]

Entre tantas ocupaciones, además, los jefes políticos debían intervenir, con arreglo a las leyes cuando los padres, tutores, curadores y hermanos, de forma "irracional", se opusieran a que una pareja pudiera contraer ma-

[59] *Argos*, 3 de junio de 1907, pp. 115-117.

[60] *Argos*, 3 de junio de 1907, pp. 115-117.

[61] *Argos*, 3 de junio de 1907, pp. 115-117.

trimonio, y los que no tenían permiso de estos, pudieran casarse. Por otro lado, los jefes políticos debían cuidar que hubiera comunicación entre los pueblos por medio de correos. Además de vigilar la observancia de todas las leyes en el cantón, e imponer multas hasta de doscientos pesos a los empleados subalternos de la administración general del cantón, por las faltas en el desempeño de sus deberes, así como a los dependientes de la jefatura, y a los particulares por las faltas de respeto que cometieran, pudiendo imponer a éstos hasta un mes de reclusión.[62] Los jefes políticos debían aprehender a los criminales, y podían ordenar el cateo de casas en los casos que la ley lo autorizara. También tenían que dar alojamiento y bagajes a la tropa que pasara por el lugar de su residencia, entre muchas otras atribuciones y obligaciones. Los directores de los departamentos tenían casi las mismas atribuciones y obligaciones que los jefes políticos pero limitadas a su nivel jerárquico y a su demarcación política, lo mismo sucedía con los comisarios políticos.[63]

Reglamento para la tolerancia de prostitutas, 1907

Al igual que los servidores domésticos contaban con su propio reglamento, las mujeres dedicadas a la prostitución tenían la obligación de someterse al *Reglamento para la tolerancia de la prostitución*, por lo que también tenían que registrarse como prostitutas, tener una libreta de registro expedidas por la jefatura política y un libro de registro.[64] El jefe político debía autorizar el establecimiento de burdeles o casas de citas, llevando un registro indicando la calle y casa de dicho establecimiento. La solicitud para poner un burdel era informada a la Inspección de Sanidad, la cual debía llevar un cuidado estricto del lugar.[65] Estaba prohibida la instalación de burdeles en las calles céntricas de la ciudad de Guadalajara, en las vecindades, en las calles por donde pasaban los tranvías, y en las proximidades

[62] *Argos*, 3 de junio de 1907, pp. 115-117.

[63] *Argos*, 3 de junio de 1907, pp. 115-117.

[64] *Argos*, 5 de agosto de 1907, p. 259

[65] *Argos*, 5 de agosto de 1907, p. 260.

de templos, cuarteles, oficinas públicas y escuelas. Además se exigía que dichos burdeles tuvieran el número de la casa pintado de rojo, "como una señal exterior que indique lo que son".[66] Como si fuera la "letra escarlata" de la novela de Nathaniel Hawthorne.[67] Las encargadas de los burdeles o casas de citas tenían la obligación de pagar mensualmente a la Tesorería municipal cuotas según la clase de burdel, ya fuera de 1ª, 2ª o 3ª clase, incluso una cuota por cada mujer que estuviera a su cargo, y para mayor seguridad de que pagaran dichas cuotas, las encargadas del burdel estaban obligadas a pagar una fianza "a satisfacción" del jefe político, de lo contrario se cerraría inmediatamente el burdel. Los jefes políticos y sus subordinados controlaban y vigilaban todo lo relacionado con los burdeles, casas de citas y prostitutas.[68]

Algunas conclusiones sobre estas leyes y reglamentos

Es importante aclarar que las leyes, reglamentos y bandos de policía eran el modelo ideal que el gobierno del estado y la federación elaboraban como una representación social, en la cual se exponía cómo debían ser las relaciones entre gobierno y gobernados, o entre el Estado y los ciudadanos, en este caso era el gobierno de un estado de la república federal mexicana que se manifestó tempranamente como partidario de un federalismo radical, en el que la autonomía y libertad del estado estaba plasmada en su constitución, el gobierno interno y su organización fue obra de los propios ciudadanos jaliscienses, más precisamente se puede decir, de las élites políticas y económicas jaliscienses, en donde el poder central nacional o federal se limitó a establecer un acuerdo de unión entre todos los estados federados, y a la ciudad de México como el centro de ese vínculo federal, muy lejos de un poder centralista efectivo. Las autoridades federales situadas en la ciudad de México como centro político, acordaron respetar la autonomía y libertad de los estados en su gobierno

[66] *Argos*, 5 de agosto de 1907, p. 260.

[67] Nathaniel Hawthorne. *La letra escarlata*. Tlahuapan, Puebla, Premia Editora, 1991.

[68] *Argos*, 5 de agosto de 1907, p. 260.

interno, en este caso el del estado de Jalisco, y a su vez, las autoridades del gobierno de Jalisco aceptaron reconocer y respetar las atribuciones y la autoridad del gobierno general, federal o central.

Se argumenta que mucho que los jefes políticos fueron un instrumento del centralismo para controlar a las provincias, sus poblaciones y territorios, y en cierta manera es algo más complejo que eso, pues jefes políticos estuvieron bajo el mando de los gobernadores de los estados o departamentos, tanto en las constituciones federales como en las centralistas, realizando las mismas actividades de gobierno relacionadas con las demarcaciones que se les asignaban para gobernar, siempre fueron autoridades intermedias con las mismas atribuciones políticas, policiales o hacendarias, sin que hubiera una diferencia significativa en que el régimen a nivel nacional fuera federal o centralista, considero que esta discusión a nivel regional está demás, pues el centro de la discusión era si los estados de la república debieran tener cierta autonomía o independencia, o debía estar sujetos más estrechamente por el gobierno central a nivel del gobierno de los estados o de los departamentos. Se cuestiona también que las leyes y reglamentos no se aplicaron realmente, y que en realidad la sociedad se regía por otras normas paralelas al marco legal, sin embargo cabe decir que ningún marco legal se aplica al cien por ciento en ningún lugar o país del mundo, ya que ningún sistema de gobierno coincide totalmente con su marco legal, y que hay en todos los casos infractores a la ley o desajustes sociales que ponen entre dicho la vigencia de las leyes, pero no por eso son menos válidas unas que otras, en realidad, las leyes o el marco legal es un mundo ideal de cómo debieran ser las relaciones entre los individuos y el Estado. Desde el punto de vista de Max Weber, el Estado mexicano, y en particular, el estado de Jalisco, cumplía con el requisito de tener un marco jurídico vigente al cual se apegaban más o menos los funcionarios o autoridades públicas de todos los niveles y mandos jerárquicos. ¿Qué tanto se cumplía con la ley? Es difícil responder, desde luego que había autoridades y ciudadanos que eran corruptos e infractores y se brincaban el marco legal, o abusaban de él o tenían prácticas ilegales, pero no se puede generalizar ni tampoco soste-

ner que la ley se obedecía a cabalidad. Los detractores de las autoridades de esa época, como los de la actual, sostienen que el marco jurídico no era respetado porque había casos denunciados en los juzgados o en la prensa, sin embargo, no se puede generalizar, ni decir que la ley no se cumplía. Sin embargo, no hay una realidad distinta, pues todas las críticas o discusiones sobre la realidad social son también representaciones o puntos de vista desde quien habla, mira o trata de explicar el mundo, es decir, no hay una realidad tal cual, totalmente objetiva, desprovista de las apreciaciones, interpretaciones, explicaciones y discursos subjetivos, de los actores contemporáneos a dichas leyes y reglamentos, o de los historiadores que analizan la sociedad y el mundo decimonónico.

CAPÍTULO V.
Autoridades políticas y gobernabilidad en las memorias de los gobernadores de Jalisco durante el siglo XIX

Informes y memorias de gobierno

Los gobernadores de Jalisco durante el siglo XIX estuvieron obligados por ley a leer cada 1° de febrero en la apertura de sesiones del congreso estatal una memoria o informe sobre todos los ramos de la administración pública, aunque lo leía ante los congresistas, en realidad estaba dirigido a toda la población. La memoria o informe es un documento que explica de forma razonada y un tanto apologética, las actividades realizadas por el gobierno en turno en el año inmediatamente anterior. Desde luego que no solo hablaba de los éxitos habidos por parte del gobierno, sino que también da una explicación de las adversas circunstancias y los grandes y graves problemas que se tuvieron que enfrentar y sortear para fin de cumplir con las metas y objetivos del gobierno.

Uno de esos grandes problemas era la inestabilidad en el país y en el interior del estado, debido a las guerras, rebeliones y revoluciones que se presentaban a cada momento, la pobreza del erario para resolver la instabilidad y la seguridad pública, por otra parte estaba el problema de los recursos escasos y de personal insuficiente y bien capacitado para sacar adelante al estado y lograr el progreso y la felicidad de toda la población. Los gobernadores al hablar de la política, la administración y la seguridad internas, relativas al estado de Jalisco, implicaban la colaboración de las autoridades intermedias desde jefes políticos, directores de departamento, ayuntamiento y policías municipales, aunque en gran medida no se

mencionaban explícitamente, sin embargo formaban parte de las distintas esferas del gobierno interior del estado. Las memorias e informes de los gobernadores de Jalisco en los siglos XIX y XX están más o menos completas, pues faltan algunas, y están recopiladas en tres tomos compilados y publicados por Aída Urzúa y Gilberto Hernández.[1]

Inseguridad y bandolerismo en Jalisco durante la primera mitad del siglo XIX

Es muy conocida la imagen de la intendencia de Guadalajara en la segunda mitad del siglo XVIII como una región próspera muy integrada económica, política y culturalmente, producto de una economía mercantil muy dinámica y de una fuerte elite política, económica y financiera, lo cual trajo un crecimiento demográfico acelerado y la consolidación de la ciudad de Guadalajara como el centro urbano, comercial, político, religioso y cultural más importante del noroccidente de la Nueva España en esta época, como se explicó en el capítulo anterior. Pero las contradicciones y conflictos sociales que trajo este crecimiento y modernización económica no se han explicado suficientemente, el crecimiento urbano y económico originó transformaciones de importancia en un amplio territorio del escenario rural de la intendencia de Guadalajara.

El crecimiento demográfico generalizado en la región se convirtió en una gran presión sobre el acceso a la tierra cultivable, acompañado de la expansión de las grandes haciendas agrícolas que significó, por una parte, escasez de tierra en los pueblos rurales y, por otra, la expulsión de mano asalariada, desempleados, vagabundos, menesterosos o bandidos que infestaban amplias zonas rurales y urbanas, junto con la disminución de los salarios reales y del poder adquisitivo de los mismos. Por lo que no era raro encontrar frecuentemente trabajadores rurales empobrecidos, ya fuera como peones fijos, temporales o medieros de las haciendas, ganando salarios muy bajos, que se enfrentaban a precios altos en los princi-

[1] Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. (comp.). (1987-1988). *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara: Unidad Editorila del Gobierno de Jalisco, 3 t.

pales productos de consumo popular. Por otro lado, se encontraba un ejército de trabajadores agrícolas desempleados buscando trabajo donde pudieran conseguirlo, de tal manera que se constituyeron en trabajadores temporales que trabajaban por un salario.

Estas condiciones sociales y económicas fueron el caldo de cultivo para el surgimiento de tensiones y conflictos en el escenario rural y urbano, pues las rebeliones rurales en disputa por las tierras de los pueblos contra las haciendas fueron frecuentes, y el bandolerismo en la región fue endémica, las gavillas de bandidos infestaron los caminos y rutas comerciales, y afectó también los centros urbanos al incrementarse en éstos el vagabundaje y la criminalidad. Al acercarse la primera década del siglo XIX los efectos que el bandolerismo tenía en la región se combinaron con la inconformidad política y social que desató el movimiento independentista en la segunda década del mismo siglo. Parece que los bandoleros y los insurgentes actuaron en varias ocasiones de forma conjunta, aunque es difícil determinar el grado de participación de los bandoleros en el movimiento insurgente en la región de Guadalajara, sin embargo, es seguro que había surgido un sujeto que hacía el papel de bandido y guerrillero al mismo tiempo. En cierta manera, los bandidos no surgieron con la guerra de independencia, pero fue un periodo en que se incrementaron exponencialmente y continuaron posteriormente en el campo jalisciense y, en general mexicano, durante gran parte del siglo XIX, debido a la inestabilidad política, social, económica y militar que había en varias regiones del país, aunado a las crisis económicas, a la carencia de tierras en los pueblos, a la difícil orografía y a la falta de caminos seguros, bien construidos y cuidados por la policía.[2]

El bandolerismo fue endémico en regiones que tenían pésimos caminos, donde el tránsito era lento y tortuoso, lo que facilitaba la actividad de los bandidos. En el territorio jalisciense durante la mayor parte del siglo XIX la red de caminos existente estaba casi desolada,[3] poca gente

[2] Gálvez. (1996), pp. 243-259.

[3] Miguel Ángel Medina García. (2012). *Cambios sociales y rearticulación espacial: el ferrocarril en Jalisco (1880-1914)*. Zapopan: El Colegio de Jalisco. (Tesis de maestría).

transitaba por sus rutas y no había suficientes cuerpos de policía que cuidaran la vida y las pertenencias de viajeros, comerciantes o arrieros que transitaban por ellos ya fuera a pie, a caballo, mula, burro o en carreta, es más, pocos caminos estaban habilitados para el uso de carretas. Quien se atrevía a andar por esos caminos arriesgaba su vida, su honra y sus pertenencias, y la defensa de ellos estaba a cargo de los mismos viajeros, utilizando sus propios medios o contratando personal para su protección, aunque en muchas ocasiones los encargados de su seguridad eran los mismos que los asaltaban.[4]

La proliferación del bandolerismo era consustancial a gobiernos débiles que no tenían los recursos económicos, ni el personal, ni la organización adecuada para garantizar la tranquilidad, el orden, la seguridad y la paz en todo su territorio, como Eric Hobsbawm lo había explicado en su célebre libro sobre el bandido social, ya que ningún Estado antes del siglo XIX tenía la capacidad de controlar todo su territorio efectiva y eficientemente, pues carecía de un cuerpo de policía rural que actuara de manera permanente y controlara dicho territorio impidiendo el robo y los diversos delitos y crímenes que se cometían en los parajes despoblados.[5] Para que el gobierno mexicano pudiera desarrollar esa capacidad de dominio y control de su territorio tuvo que transcurrir gran parte del siglo XIX y esperar hasta bien entrado el porfiriato para pacificar el país y tener un ejército y policías fuertes, disciplinados y bien ordenados en todo el territorio nacional.

Durante la primera mitad del siglo XIX el bandidaje proliferó a lo largo de las rutas comerciales más importantes que cruzaban el estado de Jalisco, por ejemplo, el camino de Tierra Adentro, que pasaba por Lagos y se dirigía a la ciudad de México, por esta ruta transitaban muchos comerciantes y arrieros con mercancías que iban a la Feria de San Juan de los Lagos, también transitaban por esta vía miles de cabezas de ganado con

[4] Sebastián Porfirio Herrera Guevara. (2021). *Marginalidad, delito y punición. Robos y asaltos en Jalisco (1846-1861)*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, p. 20.

[5] Eric Hobsbawm. (2002). *Bandidos*. Barcelona: Crítica, p. 28.

rumbo al centro y norte del país. Igual que el robo a las personas, el abigeato fue una actividad recurrente en el escenario rural jalisciense durante gran parte del siglo XIX, aunque este delito ya se presentaba durante el periodo colonial.[6] La criminalidad también proliferó en las zonas aledañas a la ciudad de Guadalajara, dada la importancia comercial y poblacional de dicho centro urbano. De tal manera que los ladrones no solo conocían las zonas y caminos rurales, sino también las ciudades y poblados medianos y pequeños. Los ladrones se confundían entre los vecinos y habitantes de dichas ciudades y poblados, pues al mismo tiempo eran ladrones, arrieros o trabajadores rurales, conocían los caminos y la dinámica de las personas que transitaban por ellos, así que tenían bien detectados los lugares o parajes donde podían cometer sus delitos. Tenían conexión con gente de mesones, tabernas, ranchos y haciendas que les daban información de los asuntos que les interesaban para planear sus robos o atracos. Es decir, los ladrones jaliscienses tenían pleno conocimiento del escenario rural jalisciense y aprovecharon dichos conocimientos en su favor para cometer delitos.[7]

Sin duda la inestabilidad política y social favoreció la proliferación del bandolerismo en esta época y las autoridades estaban conscientes de ello, por lo que trataron de mejorar los caminos y los medios de transporte y comunicación, además de establecer buenos gobiernos que pudieran dar garantías, estabilidad, orden, paz a los habitantes del estado, aunque esto quedara solo en buenos deseos y muchas promesas. Pero en cierta medida, como concluye Sebastián Herrera, el aumento del bandolerismo y de la delincuencia fue una consecuencia del progreso económico de ciertas regiones del estado, ya que produjo una desigual distribución de la

[6] Miguel Ángel Isais Contreras. (2019a). La costumbre frente a la injusticia. Abigeos y ladrones en el paisaje rural jalisciense en los primeros años del siglo XIX. En Juan Antonio Fernández Velázquez y Pedro Cásares Aboytes. *Actores, prácticas y discursos en la construcción del Estado Mexicano, siglos XIX y XX*. Buenos Aires: Elaleph.com, pp. 53-75.
[7] Herrera Guevara. (2021), pp. 24-25.

riqueza incrementando, al mismo tiempo, una mayor desigualdad entre los grupos o clases sociales tanto urbanas como rurales.[8]

En general el bandolerismo y la criminalidad fueron prácticas complejas que tenían múltiples causas sociales, económicas y políticas, pero en gran medida la pobreza fue una de las causas principales que originaron estos fenómenos. La pobreza fue un causa directa para cometer robos, también la pobreza fue determinante para que los individuos vivieran en lugares donde los vicios, la violencia, la prostitución y la vagancia fueron comunes y formaron parte de su vida cotidiana. Algunos gobernadores o autoridades estatales quisieron solucionar estos problemas mediante la educación a las clases populares, pero los proyectos educativos fueron un rotundo fracaso durante el siglo XIX, y más bien se atacaron los delitos mediante una política punitiva donde el encierro y las multas eran los principales castigos que recibían los infractores de la ley.[9]

Quienes cometían robos eran principalmente hombres, trabajadores rurales, jornaleros o peones, y pocos artesanos o de otros oficios. Eran jóvenes, mayormente casados y con familia que mantener, alternaban su trabajo diario con sus actividades delictivas, ya que con ellas obtenían un ingreso adicional y lo hacían en sus días u horarios de descanso. Nada que ver con el bandido social o el bandido romántico de las novelas costumbristas, más bien eran sujetos de las comunidades de los pueblos rurales bien conocidos y temidos por sus vecinos, el robo no era una práctica que sustituyera la actividad laboral cotidiana, sino un complemento excepcional de sus ingresos, ya que el vivir fuera de la ley no daba para obtener un ingreso estable y suficiente.[10] El bandolerismo proliferó endémicamente en Jalisco durante la mayor parte del siglo XIX, y en el resto del país, debido a la inestabilidad social, política y militar que se experimentó en

[8] Herrera Guevara. (2021), p. 59.

[9] Herrera Guevara. (2021), p. 255.

[10] Herrera Guevara. (2021), pp. 257-258.

esa época, esto era debido a las continuas crisis del Estado y los vacíos de poder que esto generaba en extensas zonas del territorio mexicano.[11]

Las autoridades políticas frente al bandolerismo en las memorias e informes de sus gobernadores durante la primera mitad del siglo XIX

En general, durante el siglo XIX se experimentó una tendencia lenta y muy accidentada hacia la formación y la consolidación del Estado-nación, mediante una modernización y profesionalización de la justicia y de sus instrumentos legales, lo que se consolidó hasta el porfiriato, pero antes de ello, el proyecto liberal buscó separar formalmente al gobierno de la justicia, así como como terminar con la influencia y funciones de los alcaldes y autoridades legas dentro de la administración de justicia. Durante la mayor parte del siglo XIX no había una clara separación entre las funciones administrativas y las judiciales de la autoridad, mucho menos en la de los pueblos. Las autoridades y la gente de los pueblos conducían sus relaciones y actividades a partir de las costumbres y la fama que cada quien ocupaba en su comunidad.[12] El marco jurídico vigente por el cual se resolvían los conflictos y problemas entre los habitantes de la nueva nación mexicana durante gran parte del siglo XIX, seguía las leyes y códigos coloniales, el control social y la imposición de cierto orden se basaba en el prestigio e influencia de hacendados y propietarios locales, quienes podían imponer cierto orden y seguridad donde las autoridades formales y centrales no alcanzaba a llegar. Durante los primeros años del periodo independiente la justicia rural se basaba en el control y el poder que podían ejercer las milicias cívicas, que luego se denominaron "guardias nacionales", de las cuales se sabe todavía muy poco para el caso del estado de Jalisco.[13] No obstante desde las primeras décadas de la nación independiente se comenzaron a redactar códigos que dieran fiel cumplimien-

[11] Herrera Guevara. (2021), p. 265.

[12] Isais. (2019a), pp. 53-75.

[13] Isaís. (2021), pp. 1-27.

to a la nueva Constitución del país, pero las condiciones en las que éste se encontraba, la principal preocupación de los congresistas a nivel nacional, fue la de establecer claramente los estatutos generales de la nación entre ellos la división de poderes, los derechos individuales y el sistema de gobierno federal o centralista, república o monarquía. Los códigos civiles y penales modernos para el país se pudieron elaborar hasta las décadas de 1870 y 1880, con lo cual se abandonaron los códigos y leyes coloniales en casi todo el territorio mexicano.[14]

Para enfrentar los problemas sociales y políticos en sus primeros años como gobierno, las autoridades del estado de Jalisco, promulgaron el reglamento para establecer un batallón de la milicia cívica, en junio de 1823, en el que todos los jaliscienses entre los 18 y los 50 años de edad estaban obligados a prestar servicio militar con el fin de salvaguardar los intereses de la nación y de la provincia. Las obligaciones asignadas a esta milicia eran la de escoltar reos, perseguir malhechores y desertores, vigilar cárceles y hospitales. En este año esta milicia fue costeada con la contribución especial de tres reales mensuales pagados por los jaliscienses que no quisieron enlistarse. Más tarde, en 1829 el subsidio bajó a dos pesos anuales, por la crisis económica en que se encontraba la población. El primer enlistamiento para la milicia realizado en 1823 fue de ocho mil hombres, pero esta cifra varió constantemente, aumentó cuando el gobierno jalisciense se vio amenazado por una probable invasión de las fuerzas federales. Los cuerpos milicianos mejor equipados solían establecerse en las ciudades de Guadalajara, Tepic y Lagos, en los demás departamentos

[14] Miguel Ángel Isais Contreras. (2010). *Vagos y perniciosos en Jalisco (1867-1886). Una aproximación al estudio de la marginación y la reintegración forzada*. México: Universidad de Guadalajara. (Tesis de maestría), p. 29. Óscar Cruz Barney. (2016). La codificación civil en México: aspectos generales. En José Antonio Caballero Juárez. Historia del derecho. Memoria del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pp. 1-18.

el número de guardias cívicas se determinaba en proporción al número de sus habitantes.[15] Esta milicia cívica que se organizó para defender la autonomía del Estado de Jalisco, frente a la amenaza del ejército federal, no duró mucho en buenas condiciones, pues tres años después, en su Memoria de 1826, el gobernador del estado Prisciliano Sánchez se lamentaba de su situación en los siguientes términos:

> Milicia Cívica. Aunque este ramo interesante es una de las columnas en que debe apoyarse la libertad y soberanía del Estado, así como la de toda la Federación, me veo precisado a confesar con dolor que no existe en el mejor Estado ni en la capital ni en los demás cantones, excepto en Lagos, por falta de armas y de un buen reglamento.[16]

¿Cómo podía el gobernador Sánchez garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del estado de Jalisco, si su principal cuerpo armado para realizar estas tareas era poco menos que inservible e ineficiente? Sin embargo confiaba en que los ocho cantones en que estaba dividido el estado estuvieran bien administrados por los jefes de policía y los directores de departamento, quienes a su vez estaban en contacto con las autoridades municipales. No obstante, el gobernador se quejaba del costo de los correos para enviar a todos ellos sus órdenes y circulares, ya que esto tenía un costo para el gobierno de 9,406 pesos. Sánchez también se quejaba de que en las poblaciones que tenían las mil almas pedidas por la Constitución para establecer ayuntamiento, no hubiera quien supiera leer y escribir y, por tanto, no se podían integrar los cabildos.[17] A pesar de la situación descrita, Prisciliano Sánchez narra a detalle la forma en que

[15] José M. Murià y Angélica Peregrina (dirs). *Historia General de Jalisco*, vol. III, pp. 200-202.

[16] Prisciliano Sánchez. (1987). Memoria de gobierno, 1826. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. I, pp. 35-64.

[17] Sánchez. (1987), t. I, pp. 35-64.

actuó el jefe político del Cantón de Colotlán ante la sublevación de más de treinta indios del pueblo de San Andrés Teúl que:

> La noche del primero de noviembre acometieron tumultuosamente al alcalde, un regidor y secretario del Ayuntamiento, hiriendo a éstos y algunos otros vecinos, y echándose sobre los fondos de la municipalidad que contaban con quinientos pesos producidos de arriendo de tierras del fundo legal, que ellos han deseado poseer por una partición igual a la que en otros pueblos se hizo por orden de la extinguida Diputación Provincial y en éste se omitió; mas habiéndose dictado las órdenes convenientes por el Gobierno y marchando personalmente el jefe de Colotlán con cuarenta cívicos, logró tranquilizar el pueblo en menos de quince días, aprehendiendo algunos de los principales motores de la asonada que puso a disposición del tribunal de Huejuquilla como más inmediato, expensando su expedición de otros productos de los fondos municipales del mismo San Andrés que deberán reintegrarse por los culpados. El Gobierno ha pedido los informes convenientes para llevar a efecto la distribución de aquel terreno en el modo que lo previno la diputación a fin de que no vuelva a presentarse otra escena por iguales quejas.[18]

Según esta narración, el jefe político de Colotlán juntó a cuarenta personas como guardia cívica y fue a pacificar a los indios de San Andrés Teul, quienes se sublevaron porque solicitaron el reparto de tierras de manera individualizada, según lo ordenó la Diputación provincial, pero además hirieron a los miembros del ayuntamiento, lo cual muestra la poca autoridad que éstos tenían sobre los indios. Dice Miguel Isais que, a este nivel municipal, las autoridades como comisarios y alcaldes, difícilmente se hacían respetar, ya que eran los que estaban más cercanos a las personas

[18] Sánchez. (1987), t. I, pp. 35-64.

y no tenían suficientes recursos ni elementos para hacerse respetar y hacer cumplir la ley.[19]

Prisciliano Sánchez estaba consciente de que las leyes que regían en su momento al estado de Jalisco eran las heredadas del periodo colonial y que contradecían al sistema liberal, pero que por lo pronto la legislación española era la única que conocían y a la que estaban acostumbrados, pero confiaba que en el futuro estas leyes se iban a sustituir por leyes más liberales.[20]

Los gobernadores que ocuparon el puesto tras la muerte de Prisciliano Sánchez ocurrida el 30 de diciembre de 1826, continuaron con la falta de cohesión y recursos entre las autoridades jaliscienses, la disputa por el poder estatal y la inestabilidad política agravaron la situación. Los dos años que faltaban para completar el periodo de gobierno de Sánchez fue cubierto por gobernadores interinos: José María Echauri, Jun N. Cumplido y Justo Corro. Juan N. Cumplido se convirtió en una pieza clave en el juego político de Jalisco, pues más que gobernador ocupaba el puesto de conciliador o del poder detrás del trono, lo que llevó a tener conflicto con el siguiente gobernador, José Ignacio Cañedo, y el vicegobernador, José Ignacio Herrera.[21] No seguiré el hilo conductor de esta disputa política, sino que solo la menciono como contexto de lo que acontecía por debajo de las altas esferas de la política con las autoridades intermedias.

En la primera etapa del estado de Jalisco como parte de república federal mexicana, el estado estuvo dividido en ocho cantones, los cuales a su vez se subdividieron en 27 departamentos, y estos en 133 municipios, 318

[19] Miguel Ángel Isais Contreras. (2019b). Autoridades intermedias en Jalisco. La figura del comisario de policía en el medio rural durante el siglo XIX. *Revista Conjeturas Sociológicas*, pp. 1-21.

[20] Sánchez. (1987), t. I, pp. 35-64.

[21] José M. Murià y Angélica Peregrina (dirs). (2015). *Historia General de Jalisco*. Guadalajara: El Colegio de Jalisco, Gobierno del Estado de Jalisco, vol. III, pp. 225-228.

pueblos, 387 haciendas y 2,534 ranchos.[22] El gobierno de cada cantón estuvo a cargo de un jefe de policía, y cada departamento estuvo gobernado por un director, en tanto que cada municipio tenía su propio ayuntamiento. En todos los cantones había una junta de policía encargada de vigilar y examinar las cuentas de los ayuntamientos, y de presentar una terna para que el jefe de policía escogiera a un director del departamento, el cual sería posteriormente aprobado por el gobernador del estado.[23] Las órdenes, decretos y circulares fluían de arriba abajo, verticalmente del gobernador a los jefes de policía, y de éste a los directores, para finalmente terminar en los ayuntamientos y en los comisarios de policía. De abajo a arriba circulaban los informes, las solicitudes y quejas desde los ciudadanos-vecinos hasta el gobernador pasando por todas las instancias jerárquicas. Desde luego que este mecanismo no siempre funcionaba perfectamente y había poca comunicación o falta de información para lograr una mayor cohesión entre todas las autoridades y la población. Pero es seguro que el gobernador del estado no hubiera podido gobernar sin este ejército de autoridades intermedias entre él y los ciudadanos-vecinos o la población en general.

Juan N. Cumplido también se quejó en su Memoria de gobierno de 1827, de la falta de una tropa permanente del ejército o de la milicia cívica para combatir cualquier alteración del orden y de la seguridad, decía que los cuerpos militares se movían a donde el gobierno nacional los mandara, y que la guardia cívica no había podido organizarse por falta del reglamento respectivo y también por falta de armamento.[24] Al año siguiente seguía lamentándose de lo mismo y de la proliferación de ladrones, vagos y delincuentes desertores del ejército. Dijo al respecto:

[22] Sergio Valerio Ulloa. (2003). *Historia rural jalisciense. Economía agrícola e innovación tecnológica durante el siglo XIX*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, p. 41.

[23] Murià y Peregrina. (2015), vol. III, pp. 231-238.

[24] Juan N. Cumplido. (1987). Memoria de Gobierno 1827. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. I, pp. 71-90.

> La Seguridad Pública aunque es el objeto de los desvelos para los encargados de su conservación, no siempre se pueden sobre poner a la malicia y depravadas costumbres de muchos hombres que la perturben, de ahí es que han llamado la atención en distintos puntos la numerosa reunión de ladrones, que nocturnamente han asaltado algunos pueblos, dirigiéndose precisamente a aquellos en que por su corta población, hay igualmente falta de armas y otros recursos necesarios para resistirles: así se ha advertido en los pueblos de Acatic y Poncitlán del Cantón de La Barca, y últimamente en Santa Ana Acatlán del de Sayula. Para extinguir la abundancia de gente vaga que proviene, ya de los escasos recursos que tienen muchos artesanos y labradores [y] del retiro de algunos cuerpos militares de servicio, y más que todo de la escandalosa deserción que se observa en los de la fuerza permanente, quienes una vez prófugos, ya no son más que otros tantos bandidos que infestan los arrabales de los poblados y los caminos.[25]

Aseguró Cumplido que no eran gavillas errantes que andaban por los caminos, sino grupos que se ponían de acuerdo y se unían para asaltar, y después del golpe, se separaban inmediatamente para hacer difícil su persecución, debido a que el gobierno contaba con una escasa fuerza permanente no siempre se conseguía la aprehensión de los bandidos. No fue el caso en Santa Ana Acatlán, porque ahí sí aprehendieron a los ladrones. Cumplido había sido jefe de policía del cantón de Guadalajara, ya que había ocupado el puesto de vicegobernador, así que tenía experiencia en este tema de la seguridad pública y dijo que eran necesarias las milicias cívicas en cada poblado para exterminar a las gavillas de ladrones, pero que dichas milicias apenas se estaban organizando.[26]

El gobierno político del estado de Jalisco en su conjunto iba perfeccionándose, según el gobernador interino José Justo Corro, organizando el trabajo de los jefes políticos, directores de departamento y ayuntamientos, enviando las instrucciones y órdenes necesarias. Dada la extensión

[25] Cumplido. (1987), pp. 71-90.

[26] Cumplido. (1987), pp. 71-90.

del territorio y su accidentada geografía, era muy difícil gobernar al estado y mantener la tranquilidad pública, esto solo era posible desde la capital, Guadalajara, a través de sus autoridades intermedias. Justo Corro lamentó, en su Memoria de gobierno, que los caminos se hallaran la mayor parte en "un estado deplorable".[27]

José Ignacio Herrera, quien fue también jefe político del primer cantón Guadalajara, cuando era vicegobernador en 1831, ya como gobernador interino aseguró que los conflictos a nivel de la política nacional no habían alterado la tranquilidad del estado de Jalisco, pero sí los conflictos internos, aunque asegura que "los cantones se hallan quietos todos", solo hubo problemas en el cantón de La Barca, porque la milicia estaba desorganizada y había amenaza de que gavillas procedentes de Zamora, Michoacán, ingresaran al estado por La Barca. Herrera mencionó que el alcalde de La Barca, Antonio Yáñez, organizó la defensa con cien infantes que se armaron de momento y ochenta gendarmes que custodiaban el camino de San Juan, quienes marcharon rápidamente para auxiliar a La Barca, lo que salvó a dicho cantón y tal vez a todo el estado de Jalisco. Mencionó Herrera que el jefe político de este cantón, José María García, había realizado un extraordinario papel dando seguridad a la población del mismo. El gobernador Herrera también habló muy bien del jefe político de Lagos, quien contaba con mejores elementos y una milicia activa, porque la población de dicho cantón era más rica y financió a la milicia. En general, dijo el gobernador interino, los jefes políticos cumplían con sus deberes, estando el gobierno del estado regularmente organizado, pero agregó que dichos funcionarios no estaban capacitados para prevenir los delitos, solo estaban autorizados para imponer multas, sin poderlas hacer efectivas. Herrera se quejó de que los experimentos con la milicia cívica no hubieran dado buenos resultados, y sugirió que se contara con un grupo armado regular y permanente bajo el sistema militar, pues la

[27] José Justo Corro. (1987). Memoria de Gobierno 1829. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. I, pp. 97-105.

milicia cívica, tal como estaba organizada, no podía soportar ningún servicio diario sin un buen financiamiento.[28]

Durante la primera etapa federalista en Jalisco no dejaron de tener presencia el bandolerismo y, por tanto, la inseguridad y la intranquilidad predominaban en todo el territorio del estado, eso aseguraba el gobernador José Antonio Romero en su Memoria de gobierno 1834, "las gavillas más o menos numerosas infestan los caminos en razón directa a la miseria general que se observa en todas partes", algo que coincide con la opinión de Sebastián Herrera en el sentido de que el bandolerismo fue producto de la pobreza. Ante los ataques de las gavillas, los vecinos de los pueblos tenían que organizarse y defenderse con lo que tuvieran a la mano, como ocurrió en Teocaltiche, en el cantón de Lagos, el 18 de noviembre de 1835, ahí el alcalde del ayuntamiento junto con los vecinos del pueblo, se organizaron cuando supieron con tiempo que los ladrones iban a atacar su pueblo, no obstante, no se pudieron impedir algunos robos. Al enterarse el gobernador de este acontecimiento se comunicó con el comandante general militar de la zona para que actuara en consecuencia, pues el gobierno de Jalisco no tenía armas ni gente disponible, porque el gobierno nacional disolvió la milicia cívica del estado y recogió las armas. Aunque los asaltos se repitieron en otras poblaciones del estado, el gobernador Romero se congratuló de que la milicia cívica ya no existiera en el estado, pues solamente había servido para "apurar y extorsionar su hacienda, y para servir de apoyo a la tiranía popular".[29]

Romero fue un gobernador centralista, y en su gobierno se solicitó al Congreso de la Unión, a través de una iniciativa de ley, que se extinguieran las milicias cívicas, porque constituían una fuerza militar ajena al go-

[28] José Ignacio Herrera. (1987). Memoria de gobierno 1831. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. I, pp. 113-139.

[29] José Antonio Romero. (1987). Memoria de gobierno, 1834. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. I, pp. 191-224.

bierno del centro. Pero como dicha medida implicaba la reducción de las fuerzas armadas del país para combatir rebeldes y bandidos, el Congreso general solo aprobó que la milicia cívica de los estados se redujera a un miembro por cada 500 habitantes. Además, Romero juntó firmas entre la población para pedirle al presidente Santa Anna que cambiara el sistema federalista por el centralista, lo que fue tomado por el presidente como un arrebato subversivo. No obstante, el 12 de agosto de 1834 el Congreso de Jalisco se adhirió al Plan de Cuernavaca.[30]

El centralismo no duró mucho en el país ni en el estado de Jalisco, los gobiernos centralistas del estado entre 1835 y 1841 fueron los de José Antonio Romero, Antonio Escobedo y José Justo Corro, sin embargo dichos gobiernos fueron sumamente débiles. Con las Bases de Tacubaya del 28 de septiembre de 1841 se desconoció al gobierno del presidente Bustamante y se suprimió la Constitución centralista de las siete leyes, posteriormente se estableció un nuevo congreso constituyente que estableció las Bases de Organización de la República Mexicana, promulgadas el 12 de junio de 1843, pero que continuaron con una orientación centralista. Finalmente el 22 de agosto de 1846 se reinstaló la Constitución de 1824, esto llevó a la reinstalación de Juan N. Cumplido como gobernador de Jalisco, y al restablecimiento de la Constitución política del estado de Jalisco de 1824 con la misma división territorial de cantones y departamentos de entonces.[31]

El entusiasmo por el triunfo del federalismo en Jalisco se vio empañado por la invasión del ejército norteamericano al país. La euforia liberal y federalista recibió un balde de agua fría cuando se supo que la corbeta de guerra estadounidense había anclado en San Blas, el 2 de septiembre de 1846. Pero los recursos para organizar la defensa del territorio mexicano en el occidente de México no eran abundantes, ni los ricos propietarios quisieron cooperar para ello, de tal manera que el gobernador Joaquín Angulo al menos les pidió que financiaran a un soldado. Con escasos re-

[30] Murià y Peregrina. (2015), vol. III, pp. 333-335.

[31] Murià y Peregrina. (2015), vol. III, pp. 359-366.

cursos Angulo ordenó el registro de voluntarios para organizar la defensa ante los invasores.[32]

Con respecto a la seguridad interior del estado de Jalisco, el gobernador Angulo dijo en su Memoria de 1848 que "el Gobierno no tiene el gusto de informaros en este punto cosa alguna que satisfaga sus vehementes deseos, porque nunca la vida ni los bienes de los habitantes del Estado se habían visto tan inseguros como hoy en las poblaciones y en los caminos", agregaba que los delitos más frecuentes seguían siendo el robo, en todas sus acepciones, y el asesinato.[33] Agregó que la guardia nacional no podía prestar los servicios para lo que fue creada, porque estaba a punto de salir a combatir al enemigo, el ejército norteamericano, pero que no quiso dejar completamente en el abandono a los ciudadanos jalisciense "a merced de los bandoleros", por lo que facultó a los hacendados para que se armaran en su defensa, y que las autoridades políticas de los cantones hicieran rondas diurnas y nocturnas recorriendo sin cesar los caminos y las poblaciones. Por su parte, la ciudad de Guadalajara estaría cuidada por los cuerpos de seguridad pública, que harían rondas junto con los policías municipales, prestando a las autoridades civiles el auxilio oportuno cuando lo necesitaran. Finalmente, Angulo nombró a cuatro agentes para la persecución de los malhechores, pagados con el propio sueldo del gobernador.[34]

Para el gobernador Angulo la guerra paralizaba la actividad económica aumentando la miseria, lo que se reflejaba en un aumento del robo, esto también se vio afectado por el incremento en las deserciones del ejército, siendo la más peligrosa, por el conocimiento y habilidades militares que éstos tenían, sugirió hacer una buena ley de enganche para evitar esta deserción, y que a los desertores se les quitara el fuero militar y se les enviara a tribunales civiles donde se les castigara con trabajos forzados en un

[32] Murià y Peregrina. (2015), vol. III, pp. 370-371.

[33] Joaquín Angulo. (1987). Memoria de gobierno, 1848. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. I, pp. 231-254.

[34] Angulo. (1987), pp. 231-254.

presidio. Pero lamentó que las leyes y las autoridades no fueran eficaces en esto y hubiera mucha impunidad, fugas continuas de reos, sugirió, para remediar este mal, que hubiera policía pagada y se estableciera un sistema de penitenciaría para restablecer la seguridad interior del estado.[35]

Con respecto a las autoridades políticas, dijo Angulo que cumplían en general con sus deberes, y que los vicios que de vez en cuando aparecían en el régimen interior de los pueblos se corrigieron oportunamente, porque los jefes políticos y directores de departamento hacían las visitas obligadas y necesarias que dichas autoridades debían hacer a los pueblos. Agregó expresando el beneplácito de su administración que existía "una franca armonía entre los funcionarios del orden civil, eclesiástico y militar; y si alguna vez se han anunciado disturbios en uno u otro punto, la exacta y prudente aplicación de la justica y las leyes los ha hecho cesar".[36] Este comentario lo reitera el gobernador Angulo en su Memoria de 1852 donde dijo que los jefes políticos y directores, juntas de policía y ayuntamientos lo habían ayudado con buena voluntad, y que la perfecta concordancia de estas autoridades locales con el gobierno del estado condujo al fomento de los intereses públicos y al progreso.[37]

Una de las preocupaciones principales de los distintos gobernadores del estado de Jalisco durante la primera mitad del siglo XIX, había sido la seguridad y el orden público, cosas que fueron muy difíciles de alcanzar debido a la gran inestabilidad política, social y económica que había prevalecido durante dicho periodo. El gobernador Anastasio Parrodi no fue la excepción, en la Memoria de 1857 dijo que su gobierno había estimado como conveniente y necesario al orden público no oponerle obstáculos, y que había decretado la continuación de cuerpos de guardia nacional, los cuales ya existían en la ciudad de Guadalajara, pero que había comenzado la formación de otro nuevo, aunque faltan armas para los ciudadanos Aseguró que en los cantones de Lagos, Sayula, Ahualulco y Autlán, sí

[35] Angulo. (1987), pp. 231-254.

[36] Angulo. (1987), pp. 231-254.

[37] Angulo. (1987), pp. 231-254.

había cuerpos de la guardia nacional con suficientes miembros, y que cuando fueron solicitados por el gobierno del estado para que acudieran a la defensa de Guadalajara, cerca de 400 hombres reforzaron la guarnición de la plaza, que si los demás cantones no acudieron en su auxilio fue porque el gobierno no se los solicitó, porque estaban en una situación crítica y excepcional, pues enfrentaban la sublevación de los indígenas, y otros cantones se defendían de las depredaciones de los malhechores. Por tanto, no era que hicieran falta hombres dispuestos a conformar la guardia nacional, sino que hacían falta armas para este servicio, por lo que se habían puesto en "acción algunos arbitrios" para adquirir armamento para la capital y para los cantones.[38]

Parrodi dio cuenta de la sublevación de los pueblos indígenas en la ribera del lago de Chapala y en el cantón de La Barca, en demanda de tierras que supuestamente fueron usurpadas por los propietarios. Posteriormente las sublevaciones se extendieron a diferentes lugares de los cantones de Sayula y Ciudad Guzmán. Santa Cruz, Ocotlán, Tototlán, Zacoalco, Mazamitla y otros muchos pueblos fueron víctimas de la sublevación de dichos pueblos indios. También abordó el caso especial del cantón de Tepic. Parrodi atribuyó la sublevación indígena a la manipulación y el engaño del que fueron víctimas dichos indígenas por parte de ciertos individuos a los que calificó como "genios díscolos e interesados" que habían exaltado la imaginación de los indígenas. Para el gobernador los indios eran ignorantes de los cuales se abusaba sin piedad.[39] La inseguridad y la inestabilidad social en el estado de Jalisco eran evidentes, por ello el gobernador Parrodi se preocupó por establecer una policía más eficiente, pues según dijo:

[38] Anastasio Parrodi. (1987). Memoria de gobierno, 1857. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. 1, pp. 331-368.

[39] Parrodi. (1987), pp. 331-368.

> La policía es una de las instituciones que más necesitan los pueblos para su conservación y buen orden: la diversidad de ramos que comprende, forman el todo de su existencia y reputación; y en el modo de administración consiste la mayor o menor perfectibilidad de la vida social. Si la policía está servida por agentes inquietos, suspicaces y enredadores, la sociedad sufre un gravamen insoportable, y huye el reposo de los ciudadanos; si por el contrario, está empeñada con notable descuido, poca actividad o indolencia, huye el reposo público desapareciendo totalmente las ventajas que hacen apetecible el ser del hombre civil. Es pues forzoso que la policía, sin tocar los extremos y con bien sentado aplomo, dedique un exquisito cuidado hacia cada ramo de lo que comprende su ministerio: si la ley es buena, basta ejercerlo con entera sujeción a ella, y nadie alzará sus quejas por falta de garantías.[40]

Parrodi ya estaba aplicando un nuevo lenguaje y los conceptos modernos de policía y administración, ya no se referían en especial al concepto antiguo de "policía y buen gobierno" que buscaba procurar la felicidad de los habitantes de una ciudad o pueblo, sino de la policía como un cuerpo armado para combatir a los bandidos y a los malhechores, además de proteger las vidas y el patrimonio de los ciudadanos, tampoco hablaba de "buen gobierno", sino de la administración pública, es decir el control y ejercicio de los recursos públicos. Agregó Parrodi:

> Por desgracia, como se ha dicho con repetición, las conmociones intestinas todo lo confunden y desorganizan; los elementos que dan vida a las fuentes de la administración, se consumen, y las garantías del ciudadano desaparecen […] En Jalisco no han faltado buenas leyes y repetidas disposiciones para atender debidamente a los multiplicados artículos de la incumbencia de la policía: la comodidad, el aseo y ornato, la salubridad e higiene, el recreo, la educación y, finalmente la seguridad, todo ha sido el objeto de las atenciones del poder público.[41]

[40] Parrodi. (1987), pp. 331-368.

[41] Parrodi. (1987), pp. 331-368.

El gobernador se preguntaba ¿por qué todo ha sido tan ineficaz, por qué ha caído en el desprestigio y por qué no se ha dado una permanente organización a los agentes públicos? Respondió diciendo que la administración de la policía desde la Constitución de 1824, y las leyes posteriores, había estado bajo la inspección de los jefes políticos y de los ayuntamientos y que la falta de fondos especiales aplicables a este ramo había llevado a que el servicio se desempeñara en su mayor parte de forma gratuita. Lo cual no era compatible con la actividad y la exclusividad que requerían estas funciones, y que el turno por el cual se había exigido dicho servicio a los ciudadanos había resultado en constantes abusos que habían socavado el prestigio de la institución. Por lo que en determinadas épocas se ensayó el sistema de policía pagada, como se llevaba a cabo en el momento en que hablaba Parrodi, aunque de manera imperfecta, lo cual se podía realizar sin chocar con las costumbres que tenían los jaliscienses.[42]

Parrodi sostuvo que las funciones administrativas y de policía solo podían mejorar teniendo "fondos propios y exclusivos y una organización permanente, de la que se extrañe toda individualidad en que no se encuentre la confianza y la honradez". Agregó que la falta de este permanente y combinado sistema de la policía, era una de las causas que más influyeron en el atraso que en el interior de la capital se advertía en todos sus ramos. El gobernador Parrodi mencionó que ya en 1855 se había formado una fuerza de policía destinada a la persecución de gavillas, pero que ésta no se podía sostener sin el apoyo de los propietarios rurales, facultándolos para que se armaran con sus propios medios. Sin embargo no fue suficiente para acabar con los malhechores, pues éstos aumentaron su número, y seguían realizando sus actividades delictivas en los caminos y las poblaciones. En el año de 1856, según Parrodi, se creó una nueva fuerza de policía rural en el estado, que necesariamente debía contar con la cooperación de las autoridades y con la voluntad espontánea de los ciudadanos. Sin embargo, la lentitud con que avanzaba la formación y organización de esta nueva policía rural, aunado a los pocos recursos

[42] Parrodi. (1987), pp. 331-368.

con que contaba el gobierno del estado, el gobernador se vio obligado a rehabilitar un antiguo sistema, que aunque no había sido muy eficaz no tuvo otra opción, por tal motivo el 5 de mayo de 1857 se restituyeron los llamados "jueces de acordada". El sistema de acordadas, según el gobernador, no entraba en contradicción con los otros sistemas ya establecidos, ni con el propósito de lograr una buena policía de seguridad, siendo un brazo auxiliar para la justicia en tanto se formaba la guardia nacional, por lo pronto las acordadas no solo perseguirían a los malhechores, sino que cuidarían la conducción de reos de unos puntos a otros, vigilaría y sería un órgano preventivo de los delitos.[43]

No obstante lo anterior, el gobernador Parrodi siguió lamentando que la policía no tuviera la organización adecuada, sin decirlo claramente, el gobernador quería tener un cuerpo de policía profesional, permanente, bien organizado, entrenado, capacitado y especializado en el combate a los delincuentes, y con un presupuesto fijo por parte del estado o de los particulares, y no seguir con los sistemas antiguos de policía que en general eran voluntarios y temporales, sin un presupuesto adecuado y fijo, puso de ejemplo el caso de los serenos, que tenían a su cuidado y cargo el alumbrado en la ciudad de Guadalajara, dijo el gobernador al respecto:

> Los serenos se habían circunscrito a lo económico del alumbrado y fuera de este desempeño difícilmente podía conseguirse el que les pertenece como agentes de policía nocturna: los contrabandos, los efectos robados e innumerables desórdenes pasaban a su vista, y las más de las veces se excusaban de impartir prontos auxilios bajo diversos pretextos, siendo el más común su dependencia inmediata de cuerpo municipal y no del jefe de policía.[44]

Independientemente del sistema de gobierno que se estableciera a nivel nacional o estatal, el concepto de policía fue cambiando poco a poco con respecto a su estructura y sus fines en relación con el gobierno de la

[43] Parrodi. (1987), pp. 331-368.

[44] Parrodi. (1987), pp. 331-368.

ciudad, del cantón o del estado, y también en relación a los conceptos de buen gobierno, sanidad, orden y ornato. La evolución de una policía como fuerza del orden organizado comenzó con el triunfo y consolidación del estado liberal en México. El ideario liberal puso énfasis en los derechos del hombre por encima de la fuerza del Estado, y en general la sección de las garantías individuales. Intelectuales liberales como Mariano Otero, Francisco Zarco e Ignacio Manuel Altamirano, coincidían en señalar varias de las fallas que había entorno a la seguridad pública como resultado de la falta de preparación de los agentes y la desorganización de los cuerpos policíacos. No bastaba con tener buenas leyes y reglamentos de "buena policía" y orden en las ciudades, también era indispensable establecer parámetros mínimos de selección de quién debía ocupar un puesto dentro de los cuerpos de seguridad. El concepto de orden público se incorporó como principio regulador de la conducta de los ciudadanos.[45] El modelo liberal de policía tuvo las siguientes características:

1) Era una parte de la fuerza pública que garantizaba la libertad y los derechos del ciudadano.
2) Debía garantizar el derecho a la seguridad para todos por igual.
3) Uno de sus objetivos principales era la protección de la integridad física y bienes de los habitantes
4) Era una institución administrativa y no política.
5) Sus agentes carecían de fuero.
6) En un marco de igualdad jurídica nadie escapaba a su acción y reglamentos.
7) Estaba al servicio de autoridades y reglamentos emanados de una constitución política general.
8) Actuaba siempre bajo el principio de legalidad, y se regía por códigos, reglamentos particulares y leyes específicas.
9) Sus leyes específicas eran congruentes con las leyes generales.[46]

[45] Arizaga. (2009), pp. 33-44.

[46] Arizaga. (2009), pp. 33-44.

Con la reglamentación liberal, la policía tuvo el objetivo central de evitar abusos a los ciudadanos, y la organización como corporación civil armada fue reglamentada en leyes civiles dentro del marco constitucional, además que se establecieron distintas clases de policías especializadas en diferentes rubros y objetivos, así se organizó una policía urbana-municipal, una policía rural y una gendarmería, entre otras. Otra policía especializada fue la encargada de la persecución del crimen, que quedó a cargo de los tribunales judiciales y de los gobiernos de los estados. Por último, el gobierno federal quedó a cargo de los delitos del orden público que pusieran en riesgo la seguridad del Estado.[47]

La Gendarmería del estado de Jalisco

Con respecto a los cuerpos de policía tenemos poca información. Miguel Isais dice que las justicias rurales de comienzos del siglo XIX operaban con cierta inercia siguiendo la costumbre y el sentido común propio de cada localidad. Eran distintos niveles de justicia que no solo impartían las autoridades reconocidas por la corona o por las autoridades estatales, sino también por ciertos grupos de poder que incluso fueron forzados a aplicarla.[48] Agrega Isais que durante los primeros años del periodo independiente la justicia rural es inimaginable sin las milicias cívicas, y posteriormente llamadas *guardias nacionales*. Acabar con el bandolerismo, los asaltos y la inseguridad en los caminos era una preocupación de todos los gobiernos estatales en el país, pero no había comunicación ni coordinación entre las altas autoridades.[49]

No fue sino hasta 1857 que en Jalisco se formaron las llamadas "acordadas", que se convirtieron en el instrumento con que contó el gobierno del estado para combatir la criminalidad rural, en este combate no solo participó el gobierno, sino que se involucró la sociedad, en especial las élites locales, quienes estaban obligadas a perseguir y vigilar en sus hacien-

[47] Arizaga. (2009), pp. 33-44.

[48] Isais. (2021), pp. 1-27.

[49] Isais. (2021), pp. 1-27.

das y ranchos a los sospechosos de pertenecer a algún grupo de bandidos. Se parecían un poco a la acordada del periodo colonial. Estas nuevas acordadas fueron uno de los instrumentos con los que contó el gobierno jalisciense, los jefes políticos tuvieron una participación decisiva en este combate contra los bandidos, de tal manera que es imposible entender el funcionamiento de las acordadas sin la autoridad del jefe político. Pero no fue sino hasta 1861 que comenzó a tener actividades la gendarmería del estado. Las fuerzas que integraban esta gendarmería se organizaron a partir de las autoridades cantonales y municipales, siguiendo la misma lógica de la administración pública, de esta manera quedaron bajo las órdenes de los jefes políticos a nivel de los cantones, de los directores políticos en los departamentos, y en los municipios por los comisarios de policía. Sin embargo, durante todo el siglo XIX el control social a nivel local dependió en su mayor parte de los particulares, sin la intervención del Estado o las instituciones a través de las acordadas. Pero, durante la segunda mitad de dicho siglo, aparecieron los intentos de monopolizar la seguridad pública a través de un cuerpo que solo obedeciera a un mando supremo: el gobernador.[50]

La gendarmería del estado de Jalisco fue creada en 1868, y a partir de 1876 el gobierno estatal intentó nuevamente controlar las acordadas, las que solo estaban al servicio de intereses particulares, en ese entonces se quiso remplazar el proyecto de concretar la guardia nacional, pero bajo el total control del gobierno del estado de Jalisco, a través de la Gendarmería del Estado, se esperaba que tuviera éxito con la ayuda y colaboración de los ayuntamientos, pero no fue sino hasta 1882 que se reestructuró bajo un nuevo reglamento, contaba con cuatro escuadrones de caballería y 250 soldados, además de una sección de infantería con 120 soldados. Estas fuerzas estarían organizadas y estructuradas desde los cantones hasta los municipios, bajo la misma lógica de la división político-administrativa. De esta manera, la gendarmería quedaba bajo las órdenes del jefe político de cada cantón, en los departamentos quienes quedaron al cargo fueron

[50] Isais. (2021), pp. 1-27.

los directores políticos, y en los municipios los comisarios de policía, su sostenimiento quedó a cargo de las autoridades políticas locales.[51]

La deficiente organización de la gendarmería se hizo más visible al no contar con una reglamentación completa y clara. Sus actividades no tenían un financiamiento constante, los ayuntamientos carecían de los fondos suficientes para mantener a sus guardias, hasta que en 1869 el gobierno estatal decidió financiar a la gendarmería sin tomar recursos de los fondos municipales. A partir de ese año la gendarmería contó con dos escuadrones de caballería, con 168 gendarmes, e infantería con 166 elementos, los jefes y oficiales serían designados por el gobernador, todos sus integrantes serían voluntarios y durarían por lo menos dos años en el servicio. Las críticas al gobierno fueron entonces que la gendarmería era onerosa. No fue sino hasta 1882 que un nuevo reglamento separó a las autoridades políticas locales de los mandos, es decir jefes y directores políticos, quienes organizaran las fuerzas de la gendarmería no podían disponer de ellas, al contrario, ahora los jefes y oficiales de la gendarmería acudiría en auxilio de las autoridades locales para la aprehensión de gavillas y malhechores.[52]

Las acordadas y la gendarmería estuvieron funcionando en Jalisco durante el último tercio del siglo XIX, solo que las acordadas tenían actividades limitadas a los municipios y operarían exclusivamente en casos de emergencia de seguridad a nivel local, especialmente en la persecución de gavillas, una vez obtenido ese fin, eran disueltas, a diferencia de la gendarmería, las acordadas estarían bajo las órdenes de las autoridades locales. Las acordadas no desaparecieron con la revolución de 1910, volvieron a tener actividades en territorio jalisciense porque el problema de bandidaje e inseguridad se había incrementado sustancialmente. Al finalizar el siglo XIX la gendarmería había alcanzado su consolidación total como una institución de seguridad pública, lo cual replanteó la idea de formar una guardia nacional, como ya se había establecido en las constituciones

[51] Isais. (2021), pp. 1-27.

[52] Isais. (2021), pp. 1-27.

generales de 1824 y 1857, donde cada estado de la república debía organizar su propia guardia nacional. Hacia 1887 la gendarmería contaba con 700 hombres, la mitad de las que tenían las fuerzas rurales de la federación. Posteriormente la gendarmería incrementó a mil el número de sus elementos.[53]

Jefes políticos durante el porfiriato

Solo hasta 1885, después de varias décadas de guerras, revoluciones, rebeliones, bandolerismo que provocaron una gran inestabilidad social, económica y política, un gobernador de Jalisco, el general Francisco Tolentino, pudo decir que en cuanto al orden y la seguridad en poblaciones y caminos, tenía la satisfacción de asegurar que lo "habían logrado por completo", pues ya no había los constantes ataques a la propiedad y a la vida, y aseguró que reinaba por entero la tranquilidad, habiendo desaparecido los asaltos a diligencias, que en otros tiempos eran frecuentes.[54] Sin embargo, dos años después en otra Memoria de gobierno (1887), dijo Tolentino que se había conservado la paz en el estado durante su cuatrienio, sin interrupción, con el buen funcionamiento de todas las autoridades y con respeto a las leyes, pero que hubo ligeros trastornos locales en los cantones de Mascota y Colotlán, en contra de las autoridades políticas. Tolentino aseguró que los rebeldes fueron reprimidos por el gobierno. También informó que hubo una asonada de mayores proporciones en Zacoalco, en septiembre de 1884, promovida por algunos individuos que querían vengarse de las autoridades, pero carecían de un plan político propio. El gobernador calificó a los sublevados como "revoltosos", quienes, por ser un reducido número y andar en terrenos montañosos, pudieron escapar de la persecución que hicieron las fuerzas de la gendarmería

[53] Isais. (2021), pp. 1-27.

[54] Francisco Tolentino. (1988). Memoria de gobierno, 1885. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. Jalisco, *testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. II, pp. 27-33.

y las acordadas de haciendas y pueblos, pero finalmente los rebeldes se entregaron al gobierno y solicitaron amnistía.[55]

Al tener un mayor ambiente de tranquilidad y paz en el estado de Jalisco, las autoridades políticas ya podían encargarse de recabar la información necesaria para formar y organizar las estadísticas del estado. Señaló Tolentino que todavía faltaban fondos para ello, pero que había recurrido a las autoridades políticas para que designaran empleados especiales que se ocuparan de esta clase de trabajos. Debido a estos esfuerzos, aseguró el gobernador, que se tenían nociones más exactas respecto al estado. Por otra parte, Tolentino también mencionó que los caminos públicos se encontraban generalmente en mal estado, ya que el gobierno general suprimió las cuadrillas de trabajadores que se ocupaban en la compostura de los caminos nacionales, y que el gobierno de Jalisco no había podido emprender obras en este sentido, ya que demandaban gastos considerables, por lo que solo se habían hecho algunas reparaciones urgentes en las principales vías públicas.[56] Lo que mostraba la difícil comunicación que había entre el gobernador, los jefes políticos de los cantones, los directores de departamento y los miembros de los ayuntamientos, pero también las dificultades para el comercio y para el tránsito de las personas, carretas y animales. Esto fue lo que propició, en cierta media, la proliferación de ladrones en la primera mitad del siglo XIX.

Algo parecido aconteció con el ferrocarril, pues los obstáculos de la naturaleza, dijo Tolentino, no habían permitido el avance del Ferrocarril Central, ni se había podido conectar con el ramal que saldría de Chapala. Por otra parte, la federación cedió al estado de Jalisco varias líneas telegráficas que se convirtieron en líneas telefónicas, con el fin de comunicar a la ciudad con las cabeceras de los cantones, lo que fue muy necesario para "el buen despacho de los asuntos administrativos". Dijo Tolentino que se había comenzado a construir una línea telefónica de Guadalajara a

[55] Tolentino. (1988), pp. 37-137.

[56] Tolentino. (1988), pp. 37-137.

Autlán, que llegaba hasta el momento a Tecolotlán, siendo aproximadamente unos 125 kilómetros.[57]

En esta Memoria de gobierno de Tolentino todos los cantones, departamentos y municipios reportaron las obras públicas llevadas a cabo en años recientes, lo que dice mucho sobre la nueva situación de tranquilidad y progreso que estaba viviendo el estado de Jalisco y la mayor parte de sus poblaciones. Esto se debía en gran medida al establecimiento de la gendarmería del estado de Jalisco. De la gendarmería ya se habló en párrafos anteriores, solo mencionaré que el número de miembros de la gendarmería se incrementó en el gobierno de Tolentino con ochenta soldados, llegando a un total de setecientos hombres. Menciona Tolentino que debido a que el gobierno federal dio de baja al cuerpo de rurales que había en el estado de Jalisco cuidando la seguridad pública, decidió incorporarlos a la gendarmería del estado, ya que sus elementos tenían amplios conocimientos del terreno y experiencia en la persecución de bandidos. Es cuerpo de rurales estaba compuesto por treinta policías a las órdenes de un comandante, quienes quedaron bajo las órdenes del jefe de la gendarmería, y tenían el encargo de vigilar todo el estado, moviéndose de un punto a otro según fueran requeridos sus servicios.[58]

Tolentino afirmó que en los últimos cinco años "los asaltos a los caminos públicos habían cesado completamente" y que solo poquísimos casos habían ocurrido en todo el estado. Según el gobernador la gendarmería había colocado destacamentos en las vías generales de tránsito, construyendo alojamientos apropiados para este cuerpo de policía, con el fin de que éste pudiera actuar con mayor prontitud y oportunidad. En la ciudad de Guadalajara la gendarmería cuidaba la Penitenciaría y el Hospital de Belén, y en algunas poblaciones lejanas se habían establecido destacamentos permanentes encargados de dar garantías en los puntos de su residencia y auxiliar a las autoridades en la persecución de malhechores y en

[57] Tolentino. (1988), pp. 37-137.

[58] Tolentino. (1988), pp. 37-137.

la conservación del orden público.[59] El financiamiento de la gendarmería estaba a cargo del gobierno del estado a partir de la creación de fondos especiales para ello, con lo que se buscaba ahorrar, pagar con prontitud y exactitud a los policías, y al mismo tiempo poder vigilar el manejo de dichos fondos. Con ello, el gobernador Tolentino deseaba hacer mejoras de gran importancia en el rubro de la seguridad pública, agregando lo siguiente:

> Si con el reducido número de hombres con que cuenta ahora, se ha conseguido extirpar por completo el vandalismo de que el Estado estaba infestado; si los gendarmes han cumplido exactamente con sus obligaciones a pesar de la corta retribución que les acuerda el presupuesto y no obstante que la mayoría carece absolutamente de instrucción, cuánto mejoraría el buen servicio, si retribuyendo mejor el pesado trabajo del gendarme, se escogieran para desempeñar ese empleo personas de buena educación, de conocida probidad y de alguna instrucción, que tuviera el conocimiento pleno de los derechos de los ciudadanos y de la importancia de la misión que tienen a su cargo.[60]

Tolentino concluyó su Memoria diciendo que en Jalisco hubo una mejora muy rápida y sorprendente en el rubro de la seguridad pública, tanto que el estado había disfrutado de un largo periodo de tranquilidad y sosiego como jamás se había visto.[61] Esto mismo sostuvo el general Ramón Corona en su Memoria de gobierno de 1889, asegurando que existía plena armonía en el estado, ya que había paz en todo el país. Pero especialmente de la tranquilidad y seguridad interna en el estado, señaló que éstas se habían conservado en Guadalajara y en el resto de las poblaciones del estado de Jalisco. Agregó que se habían sofocado de manera pronta y eficaz "las intentonas de algunos malhechores para organizarse en gavillas". Además, afirmó que todos los ciudadanos estaban en la me-

[59] Tolentino. (1988), pp. 37-137.

[60] Tolentino. (1988), pp. 37-137.

[61] Tolentino. (1988), pp. 37-137.

jor disposición de prestar al gobierno su ayuda para la conservación del orden, y que en este rubro habían sido muy importantes la colaboración de la gendarmería y la policía, las cuales estaban bien organizadas y dando su servicio con oportunidad, cumpliendo con su deber e inspirando confianza a los ciudadanos.[62]

La participación de la gendarmería, las acordadas y las autoridades políticas fue fundamental en la persecución de los malhechores, por lo que los robos en los caminos habían sido mínimos, de tal manera que el gobernador Corona aseguró que las personas podían transitar por Jalisco gozando de toda clase de garantías. Concluyó diciendo que "actualmente no hay en todo el Estado una sola gavilla de malhechores, lo cual prueba que la Gendarmería ha cumplido con su deber y que en Jalisco ha desaparecido la inseguridad de la cual en tiempos pasados tanto se hablaba".[63] Fue una ironía que la gendarmería no hubiera estado pendiente de la seguridad del mismo gobernador cuando un joven asesino, Primitivo Ron, le quitara la vida. Los siguientes gobernadores jalisciense porfiristas continuaron declarando en sus memorias de gobierno que el país estaba en paz y progresando económicamente. Esto también se repetía en relación al interior del estado de Jalisco. Por ejemplo Mariano Bárcena dijo en su Memoria de gobierno de 1890 que:

> El estado de Jalisco ha disfrutado de la paz que reina en toda la República, y a cuya sombra se están desarrollando los poderosos elementos del progreso con que cuenta. En todo el Estado no se ha verificado un motín de carácter político, y las muy ligeras y raras intentonas de los malhechores para formar alguna gavilla, han sido sofocadas por la gendarmería y las acordadas que

[62] Ramón Corona. (1988). Memoria de gobierno, 1889. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. II, pp. 143-173.

[63] Corona. (1988), pp. 143-173.

el Gobierno ha tenido especial cuidado de organizar en todos los cantones, siendo eficazmente secundados sus esfuerzos por las autoridades políticas.[64]

No obstante, Bárcena reconocía que la policía de los pueblos del estado cumplía con su misión hasta donde era posible, ya que los ayuntamientos no contaban con los recursos monetarios ni con el personal suficiente para atender eficazmente su seguridad. Sin embargo, no era el caso de la ciudad de Guadalajara, pues según el gobernador, el jefe político del primer cantón, Nicolás España, hacía muchos esfuerzos para dar seguridad y garantías a los habitantes de dicha ciudad. En el caso de la capital del estado, el ayuntamiento y el jefe político se hacían cargo del costo de la policía, la cual no era suficiente para cuidar toda la extensión de la misma, pero era muy disciplinada.[65]

La administración del resto de los cantones de Jalisco seguía su marcha regular, mientras el gobierno del estado procuraba que las autoridades políticas se sujetaran a las leyes establecidas constitucionalmente. Los jefes políticos y los directores de departamento hacían sus respectivas visitas anuales a las poblaciones de sus cantones y departamentos por órdenes del gobernador, informando a éste sobre la situación de los diversos ramos de la administración en sus respectivas comarcas, al tiempo que tomaban las medidas necesarias para resolver los conflictos y abusos que pudieran presentarse, y dando cuenta de las necesidades de los pueblos para poder satisfacerlas. El ejecutivo del estado había tratado de estar en continuo contacto con las autoridades políticas subalternas, para darles instrucciones respecto a la marcha de la administración, haciendo que dichas autoridades fueran a la ciudad de Guadalajara para entrevistarse con el gobernador, o comunicándose con ellas por medio del telégrafo o del teléfono, medios que cada vez estaban más extendidos en el territorio

[64] Mariano Bárcena. (1988). Memoria de gobierno, 1890. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. II, pp. 181-206.

[65] Bárcena. (1988), pp. 181-206.

del estado. De esta manera, el gobernador Bárcena envió a todos los jefes políticos una circular para que exigieran a las comisionas repartidoras de terrenos que aceleraran las operaciones respectivas para terminar con el reparto agrario en el estado, o que informaran mensualmente el avance de sus trabajos y las causas que lo impedían.[66]

El coronel Francisco Santa Cruz en su Memoria de gobierno de 1893 repetía casi las mismas palabras que el gobernador anterior:

> En los once cantones del Estado, la Administración Pública no sufrió ningún trastorno. Las autoridades secundaron eficazmente al Ejecutivo en el propósito que tuvo de facilitar por todos los medios de acción de que disponía, el progreso de los jaliscienses, y, con tal fin, dedicaron su atención de manera muy especial, a conservar la paz y la mejor instrucción. Los directores políticos de los departamentos, desde que la ley previno que salvaran el conducto de las jefaturas de los cantones, para comunicarse con la Secretaría de Gobierno, están en una aptitud de cumplir con más rapidez que antes, los acuerdos que esa oficina les trasmite, lo cual redunda en provecho del servicio público.[67]

La novedad de esta memoria era que los directores políticos de los departamentos ya se podrían comunicar directamente con el secretario de gobierno sin depender del jefe político de su cantón, lo que antes necesariamente tenían que hacer los directores políticos y los ayuntamientos, pues solo a través del jefe político éstos se podían dirigir al gobernador. Los gobernadores en el rubro de seguridad, administración, autoridades políticas y gendarmería no hicieron otra cosa que repetir lo mismo en sus memorias de gobierno: la tranquilidad y paz alcanzada, la eficacia de la gendarmería, el bajo número de robos, sublevaciones y gavillas, la con-

[66] Bárcena. (1988), pp. 181-206.

[67] Francisco Santa Cruz. (1988). Memoria de gobierno 1893. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. II pp. 213-231.

cordia y armonía que había en los distintos niveles de gobierno desde la federación, el estado, los cantones, departamentos y ayuntamientos, todos junto con la gendarmería y las acordadas colaborando para establecer la paz y la prosperidad en la entidad, cosa que enorgullecía sobre manera a los gobernadores.[68]

Con el triunfo de la revolución maderista y el derrumbe del régimen porfirista, las estructuras de gobierno y control social en el estado de Jalisco comenzaron a cambiar, aunque se mantuvieron por cuatro años más. Por ejemplo, dijo el gobernador Alberto Robles Gil que grupos más o menos numerosos de vecinos de cada localidad sustituyeron a los jefes y directores políticos a partir de elecciones, cuando la constitución del estado no lo establecía de esta manera, sino a partir del nombramiento del ejecutivo, sin embargo, asegura Robles Gil que, en general, los puestos de jefes y directores políticos que estaban activos permanecieron en sus cargos, sin haberse hecho remociones, sino solo por renuncias o porque así lo exigía el buen servicio del puesto. En tanto que las elecciones de munícipes se hicieron a su debido tiempo de acuerdo a la constitución del estado, dado que las condiciones después del triunfo de la revolución no eran tan precarias en Jalisco. Sin embargo, para restablecer la paz, las garantías ciudadanas y orden público, el gobernador tuvo que echar mano de las fuerzas de la gendarmería, las cuales fueron aumentadas en un diez por ciento, porque dada la inestabilidad política y social prevaleciente era necesario garantizar el orden y la seguridad en el estado.[69]

[68] Luis del Carmen Curiel y Juan R. Zavala. (1988). Memorias de gobierno de, 1895-1903. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. II, pp. 235-434. Miguel Ahumada. (1988). Memorias, 1905-1911. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. II, pp. en *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*, tomo II, pp. 431-514.
[69] Alberto Robles Gil. (1988). Memoria de gobierno, 1912. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. III, pp. 17-40.

Con el mismo propósito, el 5 de diciembre de 1911 por medio de un decreto se facultó a los propietarios rústicos o de negociaciones industriales o mineras para organizar acordadas, las cuales formarían parte de la guardia nacional del estado, pero que en realidad serían una fuerza de auxilio mutuo. Sin embargo, los propietarios no se interesaron mucho en este proyecto del gobernador, y confiaron en que el Estado los iba a defender de cualquier amenaza o peligro. Contagiados por la efervescencia revolucionaria, comenzaron a aparecer pequeños grupos revolucionarios que tenían actividad en el estado, dijo el gobernador que por fortuna habían sido sofocados, y que habían sido "consecuencia de las prédicas de malos hijos de Jalisco, que han propagado ideas comunistas en nuestra sencilla clase proletaria", con el fin de apoderarse de bienes ajenos.[70]

Aunque sobrevivieron a la revolución maderista, las jefaturas políticas no resistieron el embate de los ejércitos revolucionarios provenientes del norte, que derrotaron totalmente al ejército porfirista. El gobierno constitucionalista del Estado de Jalisco desde Ahualulco decretó el 2 de julio de 1914 "la supresión de las jefaturas políticas, instituciones que tan odiosas se hicieron al pueblo, que en luengos años de la dictadura porfiriana vio en ellas la encarnación cruel y arbitraria de los caciques". El objetivo de este decreto era quitarle a los municipios los obstáculos y estorbos en el ejercicio de sus libertades. Dichas jefaturas se convirtieron en una verdadera pesadilla para el pueblo, por lo que se oponían a la creación del municipio libre, propuesta muy importante por parte de la revolución constitucionalista. Así lo expresaron los gobernadores constitucionalistas del estado de Jalisco Manuel Aguirre Berlanga, Tomás López Linares y Manuel M. Diéguez.[71]

[70] Robles. (1988), t. III, pp. 17-40.

[71] Manuel Aguirre Berlanga, Tomás López Linares y Manuel M. Diéguez (1988). Memorias de gobierno, 1916-1919. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. III, pp. 59-158.

Conclusiones breves de este apartado

Durante la mayor parte del siglo XIX, interiormente cada estado fue responsable de su propio gobierno y territorio, pero carecían de los recursos económicos y militares para asegurar el control social y territorial en sus respectivos estados. El sistema de prefecturas o jefaturas políticas fue un proyecto que se llevó a cabo, siguiendo la experiencia de las anteriores intendencias y provincias, pero que en la coyuntura de los primeros años posteriores a la independencia no dio los resultados esperados. A nivel estatal la paz y la tranquilidad públicas no se lograron debido a la gran inestabilidad social, políticas y militar que prevaleció en esos momentos, en este escenario el bandolerismo y las sublevaciones fueron cotidianas y predominaron en los distintos territorios estatales.

En esta época ni los gobiernos nacionales como estatales eran instituciones fuertes y permanentes. En el gobierno interior de los estados, las jefaturas o prefecturas políticas no tenían los recursos económicos y militares para imponer su autoridad. Al menos en Jalisco, los jefes políticos y directores departamentales no pudieron imponer su autoridad ya que no tenían los recursos y elementos necesarios para garantizar el gobierno y la tranquilidad públicos en sus respectivos cantones, departamentos y municipios. Más bien, la población, los vecinos-ciudadanos, tenían que organizarse y defenderse por su cuenta y con sus propios recursos. El gobierno del estado no podía establecer la seguridad y la tranquilidad interna, ni dar garantías a los habitantes, porque carecía de los recursos necesarios, tanto económicos como de personas, para organizar un cuerpo armado que realizara labores de policía bien entrenada y capacitada para combatir al bandolerismo en la región y garantizar la tranquilidad. De esta manera, la figura de los jefes políticos estaba muy lejos de ser la figura fuerte, autoritaria y opresora de la "leyenda negra", pero tampoco se acercaba al modelo ideal de los reglamentos de policía y buen gobierno.

No fue sino hasta después del triunfo y consolidación del proyecto liberal que se desplazó el concepto tradicional de "policía y buen gobierno" por el de "administración pública", como la forma más moderna y adecuada para gobernar un país y un territorio. Pero en lo que respecta

a la construcción de una representación moderna, eficiente, profesional y capaz de gobernar de las jefaturas políticas y los cuerpos policíacos, fue a partir del porfiriato, más específicamente de 1885 en adelante, que se contó con la gendarmería y las acordadas, que se pudo garantizar la tranquilidad y la paz en los cantones y departamentos del estado. Las autoridades políticas y los cuerpos policiacos fueron los ejes sobre los que se construyó la paz, la tranquilidad, el progreso y bienestar en el territorio jalisciense. Ni el régimen porfirista, ni las jefaturas políticas resistieron el embate revolucionario, el primero fue derrocado en 1911 y las segundas en 1914 con el triunfo de los ejércitos revolucionarios.

CAPÍTULO VI.
Bajo la mirada de la opinión pública.
Autoridades políticas en la prensa jalisciense

Prensa y opinión pública

Durante el siglo XIX en México los medios de comunicación impresos se convirtieron en el campo de batalla donde periodistas y editorialistas se lanzaban, desde distintos bandos, ataques políticos e ideológicos, aprovechando la libertad de imprenta que se estableció desde la Constitución de Cádiz en 1812. Los impresos llegaban a la población que sabía leer y escribir, la que constituía un pequeño porcentaje del total, pero que se fue incrementando a lo largo de dicho siglo, por lo que los tirajes y la distribución de periódicos fue en aumento, debido a que los distintos gobiernos nacionales y estatales promovieron la educación y la construcción de escuelas para los niños de distintas generaciones. Con la proliferación de impresos y las nuevas formas de sociabilidad surgió la opinión pública moderna y con ello el espacio público político. La producción y circulación de un gran número de impresos con fines políticos e ideológicos pudo llevarse a cabo debido a la desaparición de la censura, lo cual facilitó que las personas dedicadas a escribir en estos medios impresos pudieran exponer sus ideas, aunque con gran cuidado de no lastimar la sensibilidad de los lectores que todavía estaban apegados a las ideas y valores tradi-

cionales. Con lo anterior se desarrolló lo que se conoce como la "opinión pública".[1]

Los estudios sobre el concepto de "opinión pública" son relativamente nuevos, la mayoría de ellos se inspiraron en el modelo clásico de Habermas y otros autores importantes, quienes han llamado la atención sobre la operatividad del concepto de "esfera pública" para el mundo hispano-luso, luego de examinar que en el continente americano, durante la primera mitad del siglo XIX, existió una gran diversidad de lugares llamados "espacios públicos", como la calle, la plaza, el café, la imprenta y el congreso, entre otros. Estos nuevos estudios advierten tomar distancia de las rígidas clasificaciones dicotómicas de "tradicional" y "moderno" de tal modo que se privilegie el análisis de las contradicciones inherentes a los propios conceptos y sus componentes semánticos.[2]

Aquí no se analizará a fondo el concepto de opinión pública, solo se precisará que el sentido propiamente político de "opinión pública" surgió en España y en la América Española a partir de la crisis de la monarquía, la invasión napoleónica y la subsiguiente ausencia de poder con una pequeña diferencia temporal de dos años, pues en España fue en 1808 y en América en 1810.[3] En el siglo XVIII el término "opinión" tenía al menos tres acepciones: como una impresión individual sobre alguna cosa, como el juicio o entendimiento de una persona, o como una creencia falsa, supersticiosa y no fundamentada. Por tanto, la "opinión común" tenía una connotación negativa de superstición y ausencia de fundamentos. Por otro lado, el sintagma de "opinión pública" no era muy usado, y se refería a la buena reputación de una persona, en tanto lo "público" se refería al "común" del pueblo en general, como un cuerpo político, sujeto del bien

[1] Celia del Palacio Montiel. (2001). *La disputa por las conciencias. Los inicios de la prensa en Guadalajara, 1809-1935.* Guadalajara: Universidad de Guadalajara, p. 28.

[2] Noemí Goldman. (2009). Legitimidad y deliberación: el concepto de opinión pública en Iberoamérica, 1750-1850. En Javier Fernández Sebastián (dir.). *Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850*, pp. 981-982.

[3] Goldman. (2009), p. 985.

común, al buen gobierno y a la política cristiana. Por su parte, la expresión la "voz del pueblo" o "voz popular", era la voz del pueblo que en el antiguo régimen tenía que ver con la representación de los pueblos a través de sus cabildos frente al rey.[4]

Al finalizar el siglo XVIII el incremento de periódicos cambió semánticamente los términos "público" y "opinión". La prensa ilustrada y científica fue definiendo los temas que eran de interés "público", o los que eran "comunes a todos", los que se podían discutir abiertamente, por oposición al ámbito privado. Dichos temas se referían a la cuestión científica, política regional y europea que se percibía que tenían una "utilidad pública" o una "utilidad general". Entonces se fue definiendo al "Público", con mayúscula, como un conjunto de lectores de una publicación, o la comunidad de letrados y lectores. El concepto de "opinión pública" como la expresión popular bien informada con cierta fuerza política se comenzó a utilizar a partir de 1800, el primer texto donde se analizó el concepto de "opinión pública" apareció en abril de 1810, pocos meses antes del levantamiento de Miguel Hidalgo con el título de *El Espectador Sevillano*, en éste se define a la opinión pública bajo los preceptos del liberalismo clásico, que sería el referente constante de los mexicanos durante la primera mitad del siglo XIX. La concepción de opinión pública se basó principalmente en las ideas de Jeremy Bentham y Benjamin Constant, para ellos la opinión pública era la voz general de todo un pueblo convencido de una verdad, que ha sido examinada a partir de la discusión a través de la prensa.[5]

En estas discusiones la razón y la verdad debían salir a la luz e imponerse ya que era la voz de los ciudadanos, los sabios y los individuos educados que sabían leer y escribir, de forma independiente al Estado. Los lectores de estas discusiones se constituían como "el público", que en su calidad de "testigo silencioso" lee, analiza y confronta las opiniones,

[4] Eugenia Roldan Vera. (2009). Opinión pública. México. En Javier Fernández Sebastián (dir.). *Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850*, pp. 1065-1076.

[5] Roldan. (2009), p. 1066.

por tanto la opinión que se forma el público a partir de esa lectura será necesariamente acertada. El criterio más seguro y apropiado para definir la opinión pública es la utilidad pública, con lo cual la opinión pública no es sino la coincidencia de las opiniones particulares en una verdad de la cual todos están convencidos.[6] A partir de 1820 el concepto de "opinión pública se generaliza en la prensa, los debates del congreso y la legislación. Sin embargo, este concepto es utilizado por diversos actores locales, regionales y nacionales en un sentido de voz popular, a menudo con una connotación negativa que remite al significado tradicional del vocablo como creencia falsa o no fundamentada, entones se habla del "mal estado de la opinión" en tal o cual pueblo, se siente la necesidad de "rectificar la opinión", se reprueban "los errores de la opinión", entre otras expresiones similares. Al llegar a la mitad del siglo XIX la transformación del significado clásico de la opinión pública como expresión independiente y razonada que oriente a gobiernos y particulares es evidente, la opinión pública se ha transformado en una fuerza política movilizadora e incontrolable sin que logre una uniformidad, se desconfía de su autonomía y se renuncia como método para llegar a la verdad y se acepta que la opinión pública puede ser orientada y conducida.[7]

En teoría, la opinión pública era inherente al concepto de "espacio o esfera pública", a la que, según los autores clásicos, todas las personas podían tener acceso, y que se construían con cada conversación entre individuos que, dejando a un lado su vida privada, se interesaban por cosas comunes o públicas. Sobre estos conceptos de opinión y esfera públicas se construye otro concepto: el "espacio público político" que se refiere específicamente al desempeño del Estado, porque, según Habermas, el Estado no es parte del espacio público, sino más bien su eterno contrincante.[8] La creación de un espacio público tiene lugar cuando se reúnen individuos privados, libres, en condiciones de igualdad, para discutir

[6] Roldan. (2009), p. 1067.

[7] Roldan. (2009), pp. 1072-1073.

[8] Palacio. (2001), p. 19.

cuestiones de interés común, en un ambiente de apertura donde los temas sean accesibles para todos.[9] En la base de estos conceptos de opinión pública o espacio público está la idea de la existencia de un ciudadano civilizado, educado, interesado en los asuntos públicos a los cuales conoce, comprende y puede dar una opinión bien informada sobre los mismos, y finalmente participa y debate en los espacios públicos junto a sus iguales o en contra de ellos. En el caso del estado de Jalisco tanto la prensa como la folletería se constituyeron en armas de combate esenciales para atacar o defenderse del gobierno, pero también para atacar o debatir contras los grupos o partidos políticos opositores, la virulencia de la prensa mostraba la división social inherente a todo sistema político moderno, quienes se expresaban a través de la prensa, eran los voceros de las élites regionales que luchaban por defender sus intereses y privilegios.[10]

El honor en boca de la opinión pública

El concepto de "opinión pública" como "voz del pueblo" o "voz popular" referida a la reputación de una persona, según explica Miguel Isais, está relacionada con el concepto de la "fama pública", el cual era un concepto legal heredado desde el derecho canónico del siglo XII, que se fundó bajo un régimen racional y probabilístico de la prueba, el cual ponía en juego elementos extrajudiciales que se extendieron al medio social, que estaba basado en un sistema binario donde el honor y la vergüenza o la honra y la deshonra, la fama o la infamia eran fundamentales. La "fama pública" durante la mayor parte del siglo XIX llegó a ser un medio para probar e ir en contra de muchos individuos que cayeron en el entredicho de sus propias comunidades. A partir del concepto de "fama pública" estuvieron en juego muchos aspectos de la vida social como los prejuicios, la xenofo-

[9] Palacio. (2001), p. 21.

[10] Palacio. (2001), p. 41.

bia, las desavenencias personales, la pobreza e incluso la solidaridad entre vecinos y familiares.[11]

Pablo Piccato sostiene que había una íntima relación entre el honor y la opinión pública, lo que fue central y determinante para quienes participaban en la esfera pública como periodistas, individuos y autoridades que se atrevían a publicar un texto en algún periódico. Esta relación guio lo que escribían, su conducta y su percepción de sí mismos como individuos y como grupo. Agrega Piccato que desde sus orígenes el concepto de opinión pública no tenía solo un significado político, sino que incluía la evaluación colectiva de la reputación de una persona. Se trataba de un honor republicano, considerado como un derecho ciudadano, que ya no estaba en relación con el estatus heredado, sino de la percepción subjetiva y objetiva de la propia honorabilidad. La necesidad de responder ante los insultos e infamias rápidamente, con violencia si fuera necesario, se volvió común ante una exagerada sensibilidad por defender el honor individual y familiar.[12]

Un ejemplo ilustra lo dicho anteriormente, el 17 de marzo de 1850 el periódico *El Siglo XIX* publicó una carta de Domingo Reyes, en ese momento jefe de la guardia nacional del estado de Jalisco, dirigida a los editores del periódico diciendo que envió dicha carta porque se sentía herido en "su fibra más delicada que es la del honor". El motivo fue que se le acusaba, de manera anónima, que siendo el encargado por parte del gobierno del estado, de la fuerza destinada especialmente a la persecución de los "malhechores", no hubiera hecho nada para atrapar a un grupo de

[11] Miguel Ángel Isais Contreras. (2015). La fama pública: un concepto para entender la sociedad y la justicia penal durante el siglo XIX. En Jorge Alberto Trujillo Bretón (coord.). *Voces y memorias del olvido. Historia, marginalidad y delito en América Latina*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 2015, pp. 117-135.

[12] Pablo Piccato. (2005). Honor y opinión pública: la moral de los porfiristas durante el Porfiriato temprano. En Cristina Sacristán y Pablo Piccato (coords.) *Actores, espacios y debates en la historia de la esfera pública en México*. México: Instituto Mora, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 145-178.

ladrones que estaban a la vista de las fuerzas bajo su mando. En su defensa Reyes respondió: "Muy falto de vergüenza sería yo si con tales dichos me quedara callado, como será el que los profirió, si con lo que yo digo ahora no saca la cara para sostenerlos con dignidad". Reyes publicó dos documentos oficiales para argumentar en su defensa, el primero era de Gregorio Dávila, secretario de gobierno del estado de Jalisco, del 4 de marzo de 1850, pidiéndole a Reyes un informe al respecto, y el otro era un informe pormenorizado del mismo Reyes sobre el tema en cuestión.[13]

El gobernador del estado dijo a Reyes que por varios conductos se le había informado que las gavillas de ladrones habían llegado a avistarse con las fuerzas a su mando sin que hayan sido atacadas. Lo que de ser cierto, Reyes estaría incurriendo en gran responsabilidad, "pues entonces los bandidos se harían de mayor fuerza moral, desarrollarían más insolencia y atrevimiento, el Estado gastaría inútilmente los fondos que sacrifica en procurar seguridad, y esta jamás se alcanzaría". Agregó el gobernador que esperaba que no fuera cierta esta información, porque tal denuncia lo repugnaba "el honor y el deber", y que lo mejor era "dar plena satisfacción a un pueblo que clama porque se le hagan efectivas las garantías que le acuerdan las leyes y cuyos gobernantes tienen la obligación de prestárselas de una manera cumplida". El gobernador ordenó a Reyes que diera un informe pormenorizado sobre los hechos y apeló a su "pundonor" para que no se le exigiera la responsabilidad de su deber.[14]

Reyes contestó al secretario de gobierno que no huía de sus responsabilidades y que no temía un proceso en su contra, dijo al respecto: "mi honor y mi deber me hacen desearlo". Reyes envió un informe detallado sobre la persecución de los malhechores desde su salida de Guadalajara, del 25 de febrero al 5 de abril de 1850. El informe tiene fecha del 6 de marzo y narra día por día sus actividades, la zona que recorrió fue el centro-occidente del estado de Jalisco, en lugares como El Arenal, Santa Cruz, La Cruz Gorda y la Coronilla. Reyes informó que el 27 de febrero

[13] *El Siglo Diez y Nueve*, 17 de marzo de 1850.

[14] *El Siglo Diez y Nueve*, 17 de marzo de 1850.

recibió informes del paso de una gavilla compuesta por catorce bandidos, la que persiguió por las huellas y no encontró nada, y que poco antes de su llegada habían robado al mayordomo de Cuisillos el caballo en que andaba montado, lo mismo sucedió a un carnicero llamado Silverio, que había salido de Guadalajara. También mencionó que vio a dos hombres a caballo, que creyó eran ladrones porque "con el sol brillaban sus armas", pero que no pudo alcanzar porque les llevaban mucha distancia y sus caballos ya estaban cansados. En vista de lo anterior se dirigió a Santa Ana de los Negros, en donde dio descanso a la tropa por dos horas, luego continuó su marcha hasta San Agustín, el informe da cuenta del recorrido por varios pueblos y aclara que no hubo ladrones a quien detener.[15]

Domingo Reyes defendió su honor y buena reputación ante la opinión pública a través de la publicación de estos documentos con el fin de que llegara a sus conciudadanos en respuesta al "desafío que los provocó", y agregó una abierta propuesta para batirse en un duelo, dijo lo siguiente: "Deseo encontrarme con quien levante el guante, para que en el debate se sepa quién es uno. Por genio soy enemigo de contestaciones odiosas y mucho más de pleitos, pero hoy prescindo de mi carácter pacífico, y busco un proceso, porque así lo demanda la delicadeza del deber".[16] Con lo anterior se demuestra lo que señala acertadamente Piccato, que había una estrecha relación entre el honor y la opinión pública, una cuestión de suma importancia para los que participaban en la esfera pública.

Notas periodísticas relativas a los jefes políticos en Jalisco 1850-1912

Durante la segunda mitad del siglo XIX los periódicos en Jalisco tenían visiones distintas de lo que eran los jefes políticos, esto dependía de su posición política e ideológica, había algunos que manifestaban ser abiertamente gobiernistas u oficialistas (*Argos, El Litigante, El 2 de Abril, La Gaceta de Guadalajara, El Heraldo y Jalisco Libre*), otros que decían ser an-

[15] *El Siglo Diez y Nueve*, 17 de marzo de 1850.

[16] *El Siglo Diez y Nueve*, 17 de marzo de 1850.

tigobiernistas o radicalmente opositores (*El siglo Diez y Nueve, El Nene, Juan Panadero*), y otros más que querían mostrarse como imparciales y objetivos (*El Continental*). Habrá que decir que durante los gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada hubo gran libertad de prensa, la cual fue permitida por ambos gobierno, pero esa misma gran libertad y apertura de la prensa, a veces incómoda para los gobernantes, posteriormente justificó el autoritarismo y la "relajación constitucional" de los gobiernos de Porfirio Díaz y Manuel González, quienes ejercieron un férreo control y una amplia y extensa censura sobre la prensa, porque implicaba a la mayoría de los periódicos y revistas, no todos los periódicos estaban totalmente controlados por el gobierno, había algunos que podían hacer un periodismo libre, independiente y opositor, pero eran escasos y aislados.[17] Para hacer un análisis del discurso de la prensa decimonónica jalisciense sobre las autoridades políticas del estado de Jalisco se consultaron periódicos a través de la Hemeroteca Nacional Digital de México (HNDM).[18] Los periódicos, sus propietarios o directores fueron los siguientes: *El Tapatío*, de Pedro Valdivia y Carlos Negrete; *El Telégrafo*, de Genaro Álvarez y R. León; *Juan Panadero*, de Gilberto Jaso y Gregorio R. Flores;[19] *El Continental*, de Tomás Ramírez y Daniel Agraz;

[17] Piccato. (2005), pp. 145-178.

[18] Hemeroteca Nacional Digital de México (HNDM) https://hndm.iib.unam.mx/index.php/es/

[19] *Juan Panadero* fue fundado por el Pbro. Felipe de Jesús Pedroza el 2 de abril de 1871. Fue un periódico que se hizo famoso por el lema "por la razón o la fuerza", ocupó un lugar muy importante en la prensa independiente de Guadalajara. Su editor fue Remigio Carrillo, quien era encargado de la imprenta del Padre Nava. Sus fines principales fueron apoyar la candidatura del general Porfirio Díaz a la presidencia de la República, y oponerse a la reelección de Benito Juárez, además de combatir al gobernador del estado de Jalisco Ignacio L. Vallarta y al general Ramón Corona. De supuesto carácter independiente atacó a todos los gobernantes de la nación y del estado, escrito con oportunidad, sátira y valor, llegó a ser muy popular, pero también perseguido por el gobierno.

El Litigante, de Cenobio I. Enciso;[20] *El 2 de Abril*, de Manuel Cázares y Gómez; *La Gaceta de Guadalajara*, de Luis Manuel Rojas;[21] y *Jalisco Libre*, de Cipriano C. Covarrubias.[22]

Utilizando los buscadores avanzados de la HNDM se encontraron 107 notas relacionadas con las autoridades políticas del estado de Jalisco en un periodo que va de marzo de 1850 a mayo de 1912, esto no quiere decir que no se hayan hecho búsquedas antes de 1850, sino que a través de los buscadores de la plataforma, ésta no aportó ni una nota periodística de la primera mitad del siglo XIX con el tema de los jefes políticos de Jalisco. Aunque la mayoría de los periódicos estaban a favor del gobierno en turno, algunos enfocaban los dardos de sus críticas a los funcionarios

Juan B. Iguínez. (1995). *El Periodismo en Guadalajara 1809-1915*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 1995, pp. 135-141.

[20] *El Litigante* se comenzó a publicar el 26 de mayo de 1881, fue un semanario político, de legislación, literatura y variedades, también estuvo interesado en la instrucción pública. El licenciado Cenobio I. Enciso fue su fundador, editor y director. Enciso era originario de Tequila, nació en 1849 se recibió de abogado en 1877, fue jurisconsulto y literato. Director de la Biblioteca Pública del Estado e impartió la cátedra de Derecho romano en la Escuela de Jurisprudencia. Perteneció a diversas agrupaciones científicas, murió en Guadalajara el 30 de mayo de 1903. Iguínez. (1995), pp. 177-178.

[21] *La Gaceta de Guadalajara* fue fundada en 1903 por los licenciados Luis Manuel Rojas y Adalberto Rojas, fue opositor al general Bernardo Reyes y a la segunda reserva del ejército, fue suspendida su publicación y Luis Manuel Rojas enviado a la cárcel durante tres meses. Después de su liberación se asoció con Trinidad Alamillo, e hizo reaparecer la publicación en junio de 1905, modernizándola totalmente. En esta segunda época alcanzó un gran éxito, llegando a circular en varios estados del país. A fines de 1906 se disolvió la sociedad, quedando Alamillo como únicos propietarios, quien encomendó a otras personas la dirección del periódico. Desapareció el 7 de julio de 1914. Iguínez. (1995), pp. 281-283.

[22] *Jalisco Libre* surgió el 5 de octubre de 1900, en contra del gobierno de Luis C. Curiel y su jefe político, su lema es "Orden, Moralidad y Progreso". *Jalisco Libre*, 5 de octubre de 1905.

segundones o de más baja categoría, de tal manera que era imposible encontrar comentarios adversos o críticos al presidente de la república o a los gobernadores del estado. Más o menos están equilibradas las notas favorables (36.44%) y las adversas (37.38%) hacia las autoridades políticas, mientras que un 26.16% eran neutras o solo informativas. Más bien las críticas iban dirigidas a los jefes políticos, directores de departamento, gendarmes y comisarios municipales. Algunos periódicos que se decían independientes y antigobiernistas en Jalisco solo se atrevían a criticar a las autoridades intermedias, pero a nivel de gobernador del estado y, sobre todo, del presidente de la república, eran muy dóciles, condescendientes, apologéticos y laudatorios, a esos niveles no había críticas sino silencios y halagos.

Cuadro 6.
Notas periodísticas sobre jefes y directores políticos en Jalisco 1850-1912

Título	Número de notas	Notas favorables	Notas desfavorables	Notas neutras
El Siglo Diez y Nueve	2		2	
El Monitor Republicano	1			1
El Nene	3	1	2	
El Litigante	4	4		1
El Continental	41	10	29	2
El 2 de Abril	2	2		
La Gaceta de Guadalajara	28	10	5	13
Jalisco Libre	16	11	2	2
Argos	9			9
Revista Guadalajara	1	1		
Totales	107	39	40	28

Fuente: Hemeroteca Nacional Digital de México (HNDM).

Sin embargo, resulta difícil encasillar totalmente a un periódico como opositor, oficialista o imparcial, porque se pueden encontrar notas a favor o en contra de las autoridades políticas en función de su actuación y del

contexto en que se llevaban a cabo las acciones que realizaba dicha autoridad. Un 40% de las notas periodísticas se ocuparon de los jefes políticos del primer cantón con cabecera en la capital del estado, Guadalajara, en segundo lugar de atención estaba en el cantón de Lagos, en tercero tal vez la mira recaía en el cantón de La Barca, y el resto merecieron muy pocas notas en estos periódicos.

Los jefes políticos en teoría según la prensa jalisciense

El 14 de diciembre de 1885 *El Litigante* dedicó una extensa nota editorial sobre los jefes políticos, los cuales, según proponía el propietario y redactor,[23] debían ser electos popularmente y ser vecinos del cantón que gobernarían. La nota partía de una afirmación donde acusaba a los jefes políticos de estar envueltos en varios crímenes, de los que se había ocupado la prensa en diversas ocasiones, de ahí se derivaban varias propuestas o ideas que el redactor del periódico creía conveniente que fueran tomadas en cuenta en caso de que se quisiera modificar "la defectuosa Constitución que regía en el estado de Jalisco". El autor del artículo se preguntaba por las causas que permitían a los jefes políticos violar la ley, vejar y oprimir duramente a sus gobernados, y descender "hasta el fango de la prostitución y el crimen". Las causas principales que encontraba el editor eran dos principalmente: primera, que eran nombrados directamente por el gobernador, y no eran electos por los ciudadanos del cantón; segunda, que no se les exigía ser vecinos del mismo cantón que gobernaban. El redactor del periódico afirmaba que el hecho de que los jefes políticos fueran nombrados a propuesta en terna del Consejo de gobierno, no reducía la gravedad de los defectos del sistema de jefaturas políticas.[24]

Sostiene el editor de *El Litigante* que al ser nombrados directamente por el ejecutivo convertía a los jefes políticos en sus subordinados, sin que les importara a éstos lo que pasaba en el cantón. Aseguraba el autor del

[23] El propietario y redactor de *El Litigante* era Cipriano I. Enciso, quien además era abogado y escribano.

[24] *El Litigante*, 14 de diciembre de 1885.

texto que el gobernador del estado se vía obligado a premiar a sus amigos cercanos con jefaturas, ya que, al tomar el poder, los gobernadores se veían asediados por una gran cantidad de aspirantes a quienes tenían que contentar con un puesto administrativo, a cambio de que no se convirtieran en sus enemigos. Esto no sucedería, escribió el editor, si el gobernador no tuviera la libre facultad de hacer dichos nombramientos, de tal manera que podría ignorar a los suplicantes, ya que el puesto no dependería del ejecutivo directamente, por lo que los interesados en una jefatura estarían obligados a buscar el voto de los ciudadanos del cantón que deseaban gobernar. En estas condiciones serían los propios ciudadanos o electores del cantón los únicos responsables de elegir a un gobernante bueno o malo, en tanto que el ejecutivo estaría libre de toda murmuración si saliera electo un mal jefe político. El editor opinaba que con el sistema de jefaturas que se tenía era difícil que al gobernador del estado no se le culpara por la mala conducta y aun de los crímenes cometidos por los jefes políticos que habían sido nombrados por el ejecutivo.[25] Afirmaba *El Litigante* que con la elección popular de los jefes políticos se eliminarían las quejas de una mala administración y dejaría de ser el ejecutivo blanco y objeto de las críticas que se levantaran en la opinión y en la prensa cuando algún jefe político se hacía "perverso o culpable", el redactor del artículo agregaba lo siguiente:

> La libertad está en la misma naturaleza de las cosas: olvidarla, menospreciarla, es contrariar la naturaleza humana, engendrar absurdos e inconvenientes. Imponer a los Cantones Jefes políticos de nombramiento del Gobernador, es oprimirlos, es quitarles toda autonomía, es convertirlos en bajalatos, en vez de lo que deberían ser, esto es, porciones autóctonas del territorio de un Estado libre.[26]

[25] *El Litigante*, 14 de diciembre de 1885.

[26] *El Litigante*, 14 de diciembre de 1885.

El editor de *El Litigante* no estaba de acuerdo con el nombramiento directo por parte del ejecutivo de los jefes políticos, porque ese sistema tendía a ser "centralista", lo cual era contrario al federalismo vigente. No estaba de acuerdo con la opinión de que el nombramiento directo de los jefes políticos era una forma mejor que aseguraba una buena administración de los cantones, y argumentaba que si los gobernadores de los estados eran electos por los ciudadanos de sus respectivos estados, de tal manera que no eran simples subalternos del presidente de la república, y no por ello se turbaba la armoniosa marcha de la administración federal, de la misma manera, la elección popular de los jefes políticos no tendría por qué perturbar la tranquilidad del estado y su gobierno.[27]

Po otra parte también sostenía que debería exigirse a los jefes políticos el requisito de vecindad en el cantón que iban a gobernar, ya que un jefe político vecino del cantón tendría en él sus intereses, su familia, sus relaciones, ante las que nunca querría aparecer como criminal o malvado, por el contrario, tendría que ser bueno aun por su propio interés estaría forzado a ver por los intereses del cantón, que en cierto modo serían los suyos propios. Estaría obligado a actuar bien porque tendría que seguir viviendo entre los mismos vecinos que había gobernado, de tal manera que los aplausos o críticas lo seguirían por toda la vida. En cambio, las personas que no tenían un arraigo en el cantón eran desconocidas para los habitantes del mismo, eran personas que no tenían intereses ni relaciones allí, por lo tanto se les hacía fácil cometer arbitrariedades, vejaciones y aplicar la ley fuga porque nada les importaba, pues solo habían ido al cantón para aprovecharse de manera personal, y lo demás no les interesaba ni había nada que les mereciera respeto. El autor del artículo dijo que eran los pueblos los que tenían que actuar, los ciudadanos debían reunirse, establecer clubes, fundar periódicos y exigir sus derechos constitucionales. Aseguraba el editor que un pueblo que no luchaba por sus intereses, no merecía ser libre. Finalmente, el editor afirmaba que nadie podía ejercer

[27] *El Litigante*, 14 de diciembre de 1885.

autoridad ni jurisdicción en ninguna porción del territorio, si antes no había sido electo por los ciudadanos sobre quienes iba a gobernar.[28]

Discusión sobre libertades municipales y la relación con los jefes políticos

El 29 de abril de 1894 se publicó en *El Continental* una discusión entre éste y dos periódicos más: *Juan Panadero* y *El Heraldo*, el tema fue sobre la relación entre jefes políticos y ayuntamientos. *El Continental* descalificó previamente, desde su particular punto de vista, a los otros dos periódicos: *El Heraldo* era "gobiernista", mientras que *Juan Panadero* era "independiente" y opositor sistemático al gobierno. Mientras *El Continental* se autodefinía como "liberal bien entendido", es decir, imparcial y situado en el centro en relación a los dos extremos que representaban los otros dos periódicos.[29]

Juan Panadero en su lenguaje satírico, burlesco y populachero sostenía que el centralismo al que achacaban todos los males que padecía la sociedad no tenía nada que ver con los ayuntamientos, ni con los jefes políticos. Aseguraba *Juan Panadero* que si un jefe político se metía en lo que no le importaba y un ayuntamiento se dejaba "babosear", las cosas no iban a salir bien. La solución para *Juan Panadero* estaba en quitar al jefe político incumplido y poner un ayuntamiento que no se rajara y supiera cumplir con sus deberes. *El Continental* respondió a *Juan Panadero* que éste no comprendía que en las circunstancias prevalecientes en ese tiempo, y dadas las "innumerables corruptelas" que habían sustituido a las leyes y a "las buenas costumbres administrativas", y tomando en consideración las leyes "antidemocráticas" que regían a los ayuntamientos, no era posible que hubiera un ayuntamiento que luchara con probabilidades de vencer a un jefe político. Debido a que, según la ley, el único medio que tenían los ayuntamientos para ponerse en contacto con el gobernador, solo era a través del jefe político, sin el cual no podrían enviar solicitud alguna.

[28] *El Litigante*, 14 de diciembre de 1885.

[29] *El Continental*, 29 de abril de 1894.

El Continental aseguraba que los jefes políticos daban carpetazo a los negocios de los ayuntamientos, pero no dijo por qué el jefe político tenía que oponerse a los buenos proyectos y al progreso de los ayuntamientos, a menos que sostuviera, como lo hizo, que los jefes políticos eran malos por naturaleza. Tampoco dijo que según la ley, cuando un ayuntamiento quería denunciar o quejarse de un jefe político, lo podía hacer directamente, sin que se enterara el jefe político aludido. *El Continental* respondió tajantemente a *Juan Panadero* que no había ayuntamientos enérgicos y conocedores de sus derechos, ni tampoco jefes políticos modelo en el cumplimiento de su deber, pues si los hubiera "estuviéramos gobernados por ángeles" y así "las cosas no andarían patas arriba" como se encontraban, pero eso era "imposible".[30]

Por su parte *El Heraldo* dijo que *El Continental* creía que las libertades municipales no existían o que se habían reducido al mínimo. *El Heraldo* compartía la idea de *El Continental* en el sentido de que los ayuntamientos debían gozar de toda clase de franquicias, y tener una esfera amplia de acción, y que debían ser soberanos en sus asuntos particulares. Pero *El Heraldo* aseguraba que la gente que integraba los ayuntamientos, que eran oriundas del lugar, no podrían presidirlo en lugar del director o del jefe político, porque la mayoría de ellos eran ineptos. *El Continental* aceptaba en cierta medida la postura de *El Heraldo*, pero señalaba que al menos en el ayuntamiento de Guadalajara, había gente muy instruida y capacitada para ocupar el puesto de presidente del ayuntamiento en las ausencias que tenía el jefe político de forma continua. Sin embargo, *El Continental* concluyó diciendo que en el estado de Jalisco los municipios estaban perdiendo prerrogativas cada día, además de que su libertad era ilusoria y su existencia miserable y raquítica a más no poder.[31]

[30] *El Continental*, 29 de abril de 1894.

[31] *El Continental*, 29 de abril de 1894.

Jefes políticos del primer cantón de Jalisco en boca de la prensa

Apología de El Nene *sobre Manuel Escorza*

Era muy común que los periódicos oficialistas no escatimaran elogios a las autoridades políticas, sobre todo si por ello recibían pagos o prebendas. El 27 de enero de 1851 el periódico *El Nene*, publicó una editorial apologética sobre Manuel Escorza, jefe político interino del primer cantón en los siguientes términos:

> Plácenos sobre manera el tener que dar un elogio sincero al Sr. D. Manuel Escorza, actual jefe interino de este Cantón, por la manera con que ha organizado las rondas encargadas de vigilar por el sosiego público en Guadalajara. Ni riñas, ni robos sabemos que haya habido en estos días, y ojalá que los Sres. que después de él desempeñen el encargo de que hoy está en posesión, sigan sus mismos pasos, para que los efectos sean iguales.[32]

El editor del periódico destacó la modestia del jefe político, ya que no hacía alarde ni ruido por el cumplimiento de su deber. Pero, por otra parte, también recomendó a las autoridades que no castigaran a sus subalternos con penas que estuvieran fuera de la ley, pues aseguraba que a algunos comisarios se les olvidaba hacer que los vecinos barrieran la parte de la calle que les correspondía, y por ello se le obligaba a dicho comisario a que él barriera la calle que estaba sin barrer, además de imponerles una multa o mandarlos a la cárcel. El editor comparaba estas medidas con las aplicadas por José de la Cruz en la época colonial. A la vez que alababa a las autoridades, también señala algunos abusos cometidos por las mismas.[33]

[32] *El Nene*, 27 de enero de 1851.

[33] *El Nene*, 27 de enero de 1851.

El Continental, que se jactaba de ser un periódico imparcial y rechazaba "el espíritu sistemático de oposición", en una nota del 11 de septiembre de 1892, declaró que esta vez tenía "multitud de palabras de encomio y de alabanza para el activo y caballeroso" jefe político del primer cantón, el teniente coronel Gonzalo del Valle, debido a que había hecho mejoras en el ramo de policía que dependían inmediatamente de él, aunque reprobaba "ciertas cosas" que en el ramo de policía había dejado de hacer. Escribió el editor que cuando llegó a la jefatura del primer cantón, del Valle encontró una policía en buenas condiciones, pero que hacía falta mejorar algunas cosas. El jefe político inmediatamente comenzó sus trabajos y con empeño y dedicación mejoró las condiciones de trabajo y la calidad de los gendarmes, haciéndolos conscientes de que su labor era muy importante porque eran "los protectores de la sociedad y no sus verdugos". De tal manera que la gendarmería mejoró mucho en cuanto a su educación, el trato hacia la población para cumplir con sus deberes era precedido con cierta moderación, y no como antes sucedía que "con razón o sin ella" la mayor parte de los que caían en manos de la policía tenían que sufrir una "terrible paliza". Aseguraba el autor de la nota que con del Valle y su policía ya no ocurrían semejantes cosas, o eran excepciones, y no formaban por fortuna la regla de la conducta de la gendarmería.[34]

El autor del artículo sostenía que el jefe político del cantón de Guadalajara había obtenido esos resultados debido a que había trabajado en dos sentidos: primero, aconsejando a sus subordinados, los gendarmes, indicándoles cómo debía ser su conducta; y segundo, procurándoles los elementos de instrucción necesarios, para lo que fundó una academia para la enseñanza de sus deberes. Agregó el autor, que del Valle había enfrentado muchos obstáculos en esta empresa, los cuales había vencido ganándose "la gratitud y justicia públicas", todo esto se refería principalmente a "la gendarmería inferior", la que hacía su servicio cuidando en las calles el orden. Sin embargo, dichos gendarmes gozaban de sueldos muy mise-

[34] *El Continental*, 11 de septiembre de 1892.

rables, por lo que solo individuos que no tenían los recursos necesarios para ganarse la vida de otra manera y carecían de toda ilustración, eran los que mayormente se empleaban en estas plazas, "agobiados y urgidos por la miseria desesperante que les presenta el día de mañana careciendo de pan". En tales circunstancias, declaraba el editor, estos individuos no podían ser buenos funcionarios, debido a su torpeza, y a la misma "odiosidad" con que eran vistos por sus antiguos camaradas "que de amigos que eran, se declaran acérrimos enemigos". Concluye el autor de la nota que del Valle había sabido vencer todos los obstáculos haciendo posible una transformación entre la gente que casi siempre era refractaria a la educación y al civismo. Por ello, aseguraba el editor de *El Continental*, que dicho jefe político merecía las palabras de "alabanza y de encomio" que se habían vertido en este texto, "por el arduo trabajo que con éxito brillante ha llevado a cabo en tiempo relativamente corto".[35]

Nota en contra de Gonzalo del Valle

No había pasado ni un mes de la última nota laudatoria a favor del jefe político del primer cantón, Gonzalo del Valle, cuando *El Continental*, en su edición del dos de octubre de 1892, publicó un texto reprobatorio sobre el actuar de este personaje, así eran los bandazos que daba un periódico que presumía su "imparcialidad". Su crítica fue porque se permitían las casas de juego o eran toleradas en el cantón de Guadalajara. Dijo el editor del periódico que le parecía imposible que los garitos pasaran desapercibidos para la policía, y sobre todo, para el jefe político, a quien no se le escapaba nada. Sostener lo anterior era como acusar a del Valle de cometer una gran "torpeza" y a sus agentes de policía como "inútiles e inservibles".[36] Al editor de *El Continental* le parecía imposible que el jefe político autorizara la existencia de tugurios de juego, porque esto vendría a desprestigiarlo enormemente. Aseguraba el editor, que del Valle había cuidado su prestigio y buen nombre entre la población de Guadalajara,

[35] *El Continental*, 11 de septiembre de 1892

[36] *El Continental,* 2 de octubre de 1892.

por eso para el periódico era inaceptable que dicha jefatura tolerara y autorizara "las asquerosas jugadas de azar". El articulista sostenía que el jefe político obedecía las órdenes de una "fuerza mayor", pues de otra manera del Valle hubiera perseguido dicha actividad como había sucedido en otras ocasiones. *El Continental* defendía la "buena moral" en contra del vicio y de los juegos de azar en Guadalajara, por eso criticaba fuertemente al jefe político por permitirlos y apelaba a su rectitud y al cumplimiento de la ley y de "las buenas costumbres". Por lo que el periódico solicitó al supremo gobierno que ordenara la clausura de todos los garitos de juego, y en ello creía contar con el apoyo del jefe político. La posición moralista de *El Continental* quedó plasmada claramente en el siguiente párrafo:

> Verdaderamente, la sociedad encuéntrese alarmada al ver que sus hijos pueden ser víctimas del vicio maldecido del juego; teme que la juventud inexperta como es bisoña e ilusionista, caiga en los garitos que los encasillados en el vicio suele prepararle, y perezca en ellos, cuando con tanta facilidad puede salvarse; la sociedad teme que la inmoralidad penetre en las masas de su pueblo, y por eso, suplica hoy, se supriman las casas de juego, que de seguro ocasionarán funestos males de seguir abiertas y gozando de la libertad que tienen actualmente.[37]

El Continental terminaba diciendo que era un deber del gobierno impedir la desmoralización de los pueblos que de él dependían, por lo que nada se podría alegar en favor de las casas de juego que eran tan perjudiciales. El editor del periódico se asumía como el representante de la opinión pública, se creía el vocero de la sociedad que interpretaba su sentir y su pensamiento, pero además se asumía como defensor de los "buenos valores", "de la buena moral", de la juventud y del pueblo. En este papel de supuesto vocero de la opinión pública, el editor de *El Continental*, criticaba el actuar del jefe político del cantón de Guadalajara.

[37] *El Continental*, 2 de octubre de 1892.

Pleito entre periódicos

Otra escaramuza verbal surgió entre los editores de los periódicos *Juan Panadero* y *El Continental*, el 29 de enero de 1893, en torno a los vínculos, compromisos y el financiamiento que los periódicos recibían de las autoridades políticas para comprar su opinión o favorecer en sus artículos las actividades de los jefes políticos. Señalaba Tomás Ramírez, redactor de *El Continental*, que el editor de *Juan Panadero*, Gilberto Jaso, dedicó un artículo en días pasados para defenderse de algunas acusaciones que el mismo Ramírez había lanzado en su periódico. Por su parte el editor de *Juan Panadero* alegaba en su defensa que *El Continental* tachaba a su periódico por utilizar un lenguaje popular, "que sea leído y entendido por el pueblo bajo", ya que éste no tenía los elementos para entender la forma de escribir de los "grandes periódicos ilustrados". *Juan Panadero* cuestionaba a *El Continental* ¿qué derecho tenía para exigirle que hable de tal o cual manera, o para que su periódico fuera como lo que el editor de *El Continental* quiera que sea?[38]

Tomás Ramírez contestó al redactor de *Juan Panadero*, que llamó la atención sobre el lenguaje utilizado por ese periódico, porque se valía de frases en doble sentido, "impropias de la prensa" y que la misión de la prensa era "moralizar las costumbres", o sea que estaba en contra de la vulgarización del lenguaje en los medios escritos. Sin embargo la acusación más fuerte por parte de *El Continental* a *Juan Panadero* fue que éste último hubiera elogiado al jefe político del primer cantón, sosteniendo que dicha autoridad le pagaba "con creces esos elogios", y que la oficina de la jefatura le pagaba cierto número de suscripciones. *Juan Panadero* contestó en su defensa que tales acusaciones eran falsas porque no había recibió un solo centavo del funcionario aludido, pero retaba a *El Continental* a que demostrara el soborno mencionado. *El Continental* criticó a *Juan Panadero* por no haber denunciado al jefe político por permitir las casas de juego, de ahí la sospecha de que *Juan Panadero* estaba subvencionado por el jefe político. Por su parte, *Juan Panadero* echó en cara a

[38] *El Continental*, 29 de enero de 1893.

El Continental el haberlo defendido en un momento en que este último tenía fuertes presiones del gobierno, lo que agradeció públicamente *El Continental*, pero ello no quitaba que se censurara a periódicos que decían ser independientes sin serlo realmente, en alusión a *El Panadero*. Finalmente el conflicto terminó con un párrafo conciliatorio aceptando que entre ambos periódicos había una sincera amistad.[39]

Una nota contra el director del Hospital de Belén

El Continental criticaba a diestra y siniestra, aun al prestigiado director del Hospital de Belén y de la Escuela de Medicina de Guadalajara, el doctor Salvador Garciadiego y Sanromán,[40] a quien el editor del periódico reprobaba por "las inadecuadas y descabelladas medidas impuestas en el Hospital Académico, medidas que no sabemos con qué espíritu, solo producen el perjuicio más incalificable e injusto para los pobres".[41] El redactor de *El Continental* aseguraba que en dicho hospital el doctor Garciadiego ordenó que no se admitieran a los enfermos pobres sin sus órdenes, "alegando que él es el que mandaba", y que sin su consentimiento no se admitía a ningún enfermo, por más urgente que fuera el caso. Resulta evidente que el editor del periódico exageraba en sus comentarios

[39] *El Continental*, 29 de enero de 1893.

[40] Salvador Garciadiego y Sanromán nació en Guadalajara, Jalisco, el 9 de septiembre de 1842. Fue hijo de Plutarco Garciadiego y de Josefina Sanromán, realizó estudios de preparatoria en el Seminario Conciliar de Guadalajara, los cuales terminó en 1860. Luego cursó sus estudios de medicina en el Instituto de Ciencias del Estado de Jalisco, en 1868 se tituló de médico cirujano y al año siguiente fue nombrado catedrático de Filosofía y Anatomía en el mismo instituto donde estudió. En 1888 fue nombrado director de la Escuela de Medicina de Guadalajara y del Hospital de Belén, cargos que ejerció hasta su fallecimiento ocurrido el 17 de junio de 1901 en Guadalajara. *Los universitarios sin universidad*. Tomo tercero. El interregno universitario, 1851-1925. Garciadiego y San Román, Salvador. Recuperado de http://enciclopedia.udg.mx/articulos/garciadiego-y-sanroman-salvador

[41] *El Continental*, 19 de febrero de 1893.

y descalificativos hacia el doctor, sin más pruebas que sus dichos. Por lo que el editor propuso al lector que si no le creía, preguntara al jefe político, que tomando esto como su deber, mandaba a los enfermos en peligro de muerte al hospital, pero "consignados con el carácter de presos, porque de otra manera no eran admitidos". Dijo el redactor de *El Continental* que el jefe político del primer cantón debía hacer esto para que los pobres enfermos entraran al hospital, porque de otra manera morirían en la calle sin recibir los auxilios de la ciencia.[42]

Sin embargo, el periódico no pidió la destitución del director del hospital, sino que demandó la atención para tres enfermos de tifo, que no podían ser atendidos en el mencionado hospital como enfermos libres, por lo que fueron remitidos al mismo hospital, pero como presos, porque no era fácil y rápido conseguir la orden del doctor Garciadiego. Escribió el editor de *El Continental* que esos enfermos tifosos al estar en la sala de presos, contagiaron a más de alguno de los heridos, todo ello como "resultado de la necia medida que condenamos con toda nuestra alma, porque si el Hospital no sirve para lo que está destinado, que se clausure, para que no sufra el ridículo de disposiciones inadecuadas e irracionales". Concluye el editor que la prensa había señalado muchos defectos en el Hospital Académico, que no sabía cómo no habían sido tomados en consideración por el ejecutivo del estado, y agregó que las críticas que había hecho, "eran inspiradas por la compasión" hacia los pobres enfermos, y descalificó al doctor Garciadiego como "un prócer, caprichoso e inútil", que contaba con la impunidad que le proporcionaban las altas autoridades.[43] Los comentarios del editor fueron desproporcionados y faltos de ética, pues no estaban basados en el conocimiento profundo de la situación del Hospital de Belén, sino solo en sus prejuicios en contra del doctor Garciadiego y su retórica a favor de los pobres, sus inconsistencias lo llevaban a estar un día en favor del jefe político y otro día en denostarlo y criticarlo.

[42] *El Continental*, 19 de febrero de 1893.

[43] *El Continental*, 19 de febrero de 1893.

Salida de Gonzalo del Valle, de la jefatura política

El 21 de mayo de 1893 se hizo pública la salida de Gonzalo del Valle de la jefatura política del primer cantón, *El Continental* apuntó al respecto que era probable que del Valle no continuara desempeñando dicho cargo, y mencionó como posibles candidatos para el puesto a Florencio Riestra, al coronel Manuel Arellano y al coronel Abraham Arronis, entre otras personas. El periódico sugirió que si se iba a escoger a una persona para el puesto de jefe político, se designara a una persona que reuniera la pericia adquirida por la práctica de largos años en el desempeño de cargos tan importantes como el que estaba en cuestión, que actúe con imparcialidad, rectitud y desinterés.[44] Pero su propuesta no fue tomada en cuenta, una semana después *El Continental* informó que el coronel Nicolás España sustituiría a Mateo del Muro en el cargo que desempeñaba como intendente de la Penitenciaría de Escobedo, también informó que el general Gregorio Saavedra reemplazaría al coronel Gonzalo del Valle como jefe político del primer cantón. El redactor de *El Continental* criticó estos continuos cambios de personas en los cargos importantes de la administración pública, debido a que dichas personas no tenían los conocimientos ni la experiencia necesaria para desempeñarlos, y agregó que dichos puestos estaban monopolizados "por individuos que muchas veces de lo que menos se acuerdan es de desempeñar esos cargos como la ley y el deber ordenan".[45]

El 28 de mayo siguiente, *El Continental* reprodujo una nota publicada originalmente en el periódico *El Litigante*, donde se denunciaban las corruptelas en las que estuvo inmerso el coronel Gonzalo del Valle, como jefe político del primer cantón. Dijo *El Litigante* que desde hacía tiempo se sabía que en la jefatura del primer cantón había la práctica de condenar a ciertos reos a un mes de prisión, concluido dicho mes, sin nueva acusación, los condenaban a otro mes, y así sucesivamente. *El Litigante* condenaba esta práctica por injusta, ilegal, inequitativa, abusiva, arbitraria

[44] *El Continental*, 21 de mayo de 1893.

[45] *El Continental*, 28 de mayo de 1893.

y tiránica. Aseguraba dicho periódico, que tal práctica no solo fue seguida por el coronel del Valle, sino por todos los jefes políticos anteriores, pero afirmaba *El Litigante* que "la ley es la ley", y dichas violaciones tarde o temprano serían castigadas. Continuó diciendo este periódico que ocho años antes, un jefe político fue encausado, resultando ser el coronel Gonzalo del Valle, contra el cual se promovieron 87 amparos por parte de individuos presos ilegalmente en la Penitenciaría, sin estar consignados a un juez, y que eran víctimas de dicha práctica. Muchos de esos amparos se suspendieron, afirmó *El Litigante*, debido a que dichos reos eran puestos en libertad inmediatamente porque el juez de distrito pedía al jefe político el informe respectivo: "se sobreseía, y la Corte tenía que revisar el sobreseimiento, otros se han sustanciado hasta concluirlos concediendo el recurso".[46]

El resultado fue que la Corte dictó dos órdenes al juez de distrito para que procediera contra el coronel del Valle. El juez se dirigió al Consejo de gobierno pidiendo la consignación del reo, y por esto del Valle salió huyendo el lunes 15 de mayo de Guadalajara rumbo a León, Guanajuato, quedando la jefatura a cargo del presidente del ayuntamiento, Mateo del Muro, y como intendente de la Penitenciaría, el coronel Nicolás España. *El Litigante* festejó este acontecimiento porque, según dijo, "servirá de lección a los futuros Jefes políticos, atenuará los abusos y acaso los evitará". Agregó que las autoridades culpables sabían que por una u otra causa era posible que en algún momento tuvieran un castigo, lo que detendría las arbitrariedades que dichas autoridades cometían.[47] No obstante lo anterior, el periódico lamentó lo ocurrido al coronel del Valle, porque, según su opinión, del Valle se había hecho estimar por la "buena sociedad" tapatía. Fue promotor de varias obras de beneficencia y progreso, "era activo y diligente" en el ejercicio de sus atribuciones, "fue imparcial y severo, aun con sus amigos, cuando estos caían bajo la espada de la ley". Y en particular, los redactores de *El Litigante* confesaron que conservarían buenos

[46] *El Continental*, 28 de mayo de 1893

[47] *El Continental*, 28 de mayo de 1893.

recuerdos de él, porque recibieron siempre buenas atenciones por parte de la jefatura.[48]

Para *El Litigante*, la práctica en cuestión no afectaba a las clases altas de la sociedad, ni siquiera a la clase media, solo a los desvalidos, a los miserables y a los indefensos, por eso la calificaba como "más repugnante y vituperable". El redactor de este periódico creía en la virtud de las instituciones políticas y judiciales, que según él "amparaban no solo a los poderosos, sino también a los desheredados de la fortuna", para quienes también había justicia. Creía en la validez y conveniencia del recurso de amparo, y que los jueces de distrito y la Suprema Corte estaban dispuestos a cumplir con su deber. Algo que sabemos de antemano, estaba muy lejos de llevarse a cabo al pie de la letra. *El Litigante* estaba convencido de que el marco jurídico liberal se respetaba en esa época, creía que se respetaban las garantías individuales y que toda violación a las mismas ocasionaba un fuerte desprestigio para las autoridades políticas. Escribió al respecto:

> Los ataques a la personalidad son los que los pueblos más odian, los que nunca perdonan: la práctica en cuestión ha motivado la falta de popularidad en casi todas las administraciones de Jalisco desde hace más de 25 años: nótese un divorcio completo del pueblo con sus Gobiernos; la ley fuga, las cuerdas para el ejército y el mes y cuenta tienen la culpa de ello. El gobernante que se atreva a borrar y extirpar esas iniquidades, que con mano firme las castigue, ese será querido de los pueblos, ese será popular, ese merecerá las bendiciones de la posteridad.[49]

El Litigante concluyó su nota con buenos deseos para el gobernador Luis C. Curiel. Por su parte, *El Continental* agregó a la nota anterior que sobre el tema de la renuncia de Gonzalo del Valle como jefe político y su huida de Guadalajara no se había dicho nada en la prensa, siendo que era

[48] *El Continental*, 28 de mayo de 1893.

[49] *El Continental*, 28 de mayo de 1893.

conocido dicho acontecimiento. *El Continental* se preguntó el porqué de tanto silencio, a lo que él mismo se contestó lo siguiente:

> Ya lo hemos dicho otras veces: los miramientos y condescendencias que se tienen para con las autoridades por parte de algunas publicaciones son motivos más que poderosos para que los órganos de la opinión pública, que siempre deben tener como mira principal el bien de la generalidad, tengan notables deficiencias en el cumplimiento de aquellos deberes que para con la sociedad y con el pueblo han contraído.[50]

Aseguraba *El Continental* que en el silencio de la prensa había complicidad con las altas autoridades, y que éste solo se rompía cuando ya los males no podían remediarse ni podían temer el disgusto de aquellas autoridades con las cuales muchos de los periódicos llegaban a "tener compromisos".[51] Lo anterior dicho por un periodista, era situar muy certeramente la situación de la prensa durante el porfiriato, donde la mayor parte de los periódicos eran oficialistas, o comprados por el gobierno, y los que no, temían la censura o la prisión.

Doce años después, en su edición del 31 de julio de 1905, *Jalisco Libre* publicó una extensa biografía del teniente coronel Gonzalo del Valle, en ella se reprodujo completa su hoja militar de servicios ocupando cargos militares y político-administrativos.[52] Dicha biografía será expuesta más adelante, aquí solo rescatamos cómo el redactor de *Jalisco Libre*, Cipriano C. Covarrubias, se desvivió en halagos para Gonzalo del Valle, al relatar toda su carrera como político y militar no hizo ni una sola crítica, al contrario, aseguraba que dicha carrera había sido intachable. Después de haber sido jefe político del primer cantón de Jalisco, del Valle fue director de la Penitenciaría de Escobedo, y posteriormente prefecto político del departamento central del territorio de Tepic. Su larga carrera militar

[50] *El Continental*, 28 de mayo de 1893.

[51] *El Continental*, 28 de mayo de 1893.

[52] *Jalisco Libre*, 31 de julio de 1905.

comenzó en 1873 en Jalisco y su último ascenso como teniente coronel lo obtuvo por su participación en la injusta y desigual guerra contra los yaquis, obteniendo una condecoración por parte del gobierno de Sonora, ni siquiera por esta participación en las masacres contra los yaquis recibió una crítica o cuestionamiento del Valle por parte del redactor de *Jalisco Libre*, sino todo lo contrario, como se observa en el siguiente párrafo:

> Cuando en el tráfico devastador de la política militante, que desgasta de manera indefectible todos los caracteres vulgares y disminuye, hasta aniquilar muchas veces, nombres y reputaciones que al parecer brillan como soles, se conserva pura y limpia una individualidad, prestigiada desde los momentos en que dio sus primeros pasos sobre la cima del poder, es que la persona cuya era esa envidiable reputación, ha debelado en el tribunal severo de la opinión pública el cariño de sus subalternos, la estimación de sus gobernados y el respeto y la sincera admiración de sus coterráneos. Tal sucede en Jalisco con el Señor Teniente Coronel Don Gonzalo del Valle. Ocupó hace catorce años el difícil empleo, el que pudiera llamarse la piedra de toque de las autoridades administrativas, el de Jefe Político del 1er. Cantón del Estado, y desde aquella remota época hasta nuestros días, se mantiene sin menoscabo su legítima fama de recto, de justiciero, de caballeroso y cumplido en sus deberes, de progresista y benéfico para las distintas clases sociales, y de probo en el poder, su mejor título de hombre público.[53]

No contento con tantas loas, el redactor del periódico aseguraba que la prensa, desde aquellos años, cuando del Valle fue jefe político del primer cantón de Jalisco, no había hecho otra cosa sino elogiarlo como si fuera el "mejor jefe político que ha tenido Guadalajara". Para el redactor de *Jalisco Libre*, Gonzalo del Valle había sido "un hombre de positivo valer, sincero, leal y cumplido", tanto como "político, como soldado o como un simple ciudadano", y su carrera militar había sido "muy honrosa". Todas estas alabanzas por parte del redactor del periódico fueron porque Gonzalo del

[53] *Jalisco Libre*, 31 de julio de 1905.

Valle dejó el cargo de director de la Penitenciaría de Escobedo que tenía desde 1903.[54]

"La periquera", la entrada al inframundo de las inspecciones de policía

El Continental publicó una nota el 4 de junio de 1893, en la que explicó a detalle, lo que acontecía en la inspecciones de policía, lugar a donde llevaban a las personas que eran detenidas. Dijo el periódico que la "periquera" no era "otra cosa que una zahúrda inmunda", donde jamás se hacía limpieza y se encontraba, por tanto, "en pésimas condiciones higiénicas", además ahí se daban grandes desórdenes y no pocos robos. Cuando cualquier "indefenso ticuarillo" o borrachito, caía en manos de la policía y era llevado a "la periquera", éste era insultado, golpeado, y muchas veces, privado de los objetos que llevaba, por parte de la pandilla de ebrios de todas clases y condiciones que se encontraban en dicho lugar. Allí mismo se jugaba, continuó narrando *El Continental*, y se procuraba privar de las monedas y objetos de valor que trajeran aquellos detenidos que no podían defenderse de las pretensiones y tropelías por parte de la mayoría de los detenidos, que por lo regular eran "gentes de pésimas costumbres". De donde resultaba, agrega el editor del periódico, que para aquellos individuos que no estaban acostumbrados a tener qué ver con la policía ni visitar estos sitios, "la Periquera" se veía como "el mayor infierno en que pudieran caer, viéndose sujetos a alternar con la hez de la gente del pueblo y a sufrir el tratamiento brusco y las peores vejaciones de parte de esas gentes de malas costumbres".[55]

El lenguaje clasista y discriminatorio del editor de *El Continental*, lo delata como un medio dedicado al público de la élite porfiriana. Lo peor del caso, decía *El Continental*, era que a la "periquera" llevaban a individuos de todas las clases y condiciones, fueran culpables o no, de las faltas que les acusan, de tal manera que si por algún motivo algunas personas eran llevadas a la inspección general, éstas se veían en la situación

[54] *Jalisco Libre*, 31 de julio de 1905.

[55] *El Continental*, 4 de junio de 1893.

de ser conducidas a la "inmunda periquera", cosa que, para "las personas sensatas", que no estaban acostumbradas a verse en tales circunstancias, era "más oprobioso esto que cualquier otro mal". El periódico rechazaba al oprobio y al castigo infamante como métodos para moralizar a los individuos, también afirmaba que esta situación demostraba la mala o poca disciplina de la policía y del régimen que había al interior de las inspecciones, lugares que solo debían servir para retener a los reos que serían juzgados por tribunales competentes.[56]

La jefatura política la institución más antidemocrática

El Continental acababa inmediatamente con el prestigio de los jefes políticos, el 6 de agosto de 1893 publicó una nota sobre la jefatura política donde aseguraba que era "la institución más antidemocrática y defectuosa" que existía en la república, y agregaba que en ella la ley se sustituía por la voluntad más o menos caprichosa de un individuo que se extralimitaba y que abusaba del poder con demasiada frecuencia, a veces por incapacidad, otras por malicia, y otras porque se enfrentaba a hechos que no estaban clasificados con claridad ni como delitos ni como simples faltas de policía.[57] Para el redactor del periódico, el jefe político debía atenuar dichos males teniendo suma prudencia al hacer la calificación de los hechos sujetos a su criterio en cualquier sentido, y añadió que el jefe político debía ser, ante todo, un individuo "moralizado e instruido". Los comentarios anteriores fueron solo la introducción a la severa crítica que hizo el periódico al ingeniero Lucio I. Gutiérrez, jefe político del primer cantón. Inició criticándolo por seguir el camino de sus antecesores, esto es: calificaba, castigaba, imponía multas, hacía reclusiones o remitía a los tribunales a los presuntos reos, sin considerar otra cosa distinta, según sus particulares apreciaciones, con lo que se producía una corrupción "digna de las más acres censuras".[58]

[56] *El Continental*, 4 de junio de 1893.

[57] *El Continental*, 6 de agosto de 1893.

[58] *El Continental*, 6 de agosto de 1893.

El editor de *El Continental* criticaba la labor del jefe político porque no se limitaba a detener a los delincuentes y llevarlos ante el ministerio público o ante un juez, sino que el mismo jefe político calificaba el delito y decidía si lo llevaba al juez o lo liberaba, siendo que esa era labor del ministerio público. El editor afirmaba que solo el ministerio público era el que podía acusar a un delincuente ante el juez, y no la autoridad política. Agregaba que el jefe político no conocía de leyes, y más bien por lo regular era un militar.[59] En particular sobre el ingeniero Lucio I. Gutiérrez, el editor no dudaba de sus buenas cualidades, ya que había sido profesor de talento e instrucción, por lo que deseaba que sus actos como jefe político estuvieran apegados a la ley, "para bien de él mismo y de la sociedad en general". También deseaba que los castigos autocráticos, que por tanto tiempo había estado imponiendo la jefatura, o todas las jefaturas del estado, quedaran en el pasado. Pero que en ese momento se disfrutaba de una "paz octaviana" y todo debía hacerse a la luz del día. El editor puso como ejemplo al teniente coronel Gonzalo del Valle, de lo que no debía ser un jefe político, pues primero subió y subió en todos los sentidos, aun en el cariño y confianza de la población, pero después cayó estrepitosamente porque su prestigio estuvo basado en la injusticia y fuera de la ley. Dijo que del Valle no trabajó de acuerdo al procurador de justicia y sus agentes, sino que despreció dicha institución, y encarceló a un agente del ministerio público por un asunto baladí, mientras que "el fuero constitucional valió entonces menos que un comino". El editor concluyó diciendo que

> La ley ordena que el Ministerio público haga las calificaciones y promueva lo conveniente para el castigo de los culpables, es, pues, lógico que el jefe político que no pone en conocimiento de aquél los hechos, para que pueda promover, falta a una obligación ineludible y aparece como un orgulloso que se considera capaz de todo.[60]

[59] *El Continental*, 6 de agosto de 1893.

[60] *El Continental*, 6 de agosto de 1893.

Veinte días después el redactor de *El Continental* volvió a arremeter contra la figura de los jefes políticos. Apelando a la Constitución de 1857, el redactor aseguraba que las jefaturas políticas eran antidemocráticas, pero no dijo que la Constitución de Jalisco de 1857 y el reglamento respectivo a las jefaturas políticas, especificaban claramente que estas autoridades serían nombradas por el gobernador del estado a partir de una terna propuesta por el Consejo de gobierno. Como el editor no se atrevía a criticar al presidente de la república, ni al gobernador del estado de Jalisco, en este mismo sentido por ser antidemocráticos y violar constantemente las constituciones y leyes liberales, se iba a un nivel más bajo, y sus chivos expiatorios o blanco de sus críticas y ataques eran las autoridades intermedias, es decir, jefes políticos, directores de departamento y comisarías políticas, al respecto señalaba el redactor de *El Continental*:

> Exceptuando uno que otro punto del Estado, todo, así las cabeceras de cantón, como directorías, y aun comisarías políticas, tienen como autoridades a individualidades extrañas a su población, por no decir a advenedizos y, casi aventureros, que se les imponen como funcionarios públicos o empleados que, regla general, hacen cada barbaridad que tiembla el mundo, tratando a sociedades que no conocen.[61]

El redactor afirmaba que esto no era "nada liberal", pero que así se había hecho desde hacía muchos años a la fecha, sin importar que los habitantes de los pueblos "supliquen, lloren o rabien", exigiendo se les nombraran como autoridades a personas que fueran vecinos del lugar donde iban a gobernar, o solicitando que los cambiaran cuando dichas autoridades se habían convertido en "extraños sultancillos intolerables". Aseguraba la redacción del periódico que recibía innumerables quejas de la mayor parte de las poblaciones del estado, y que las "cuatro quintas

[61] *El Continental*, 27 de agosto de 1893.

partes de los habitantes de Jalisco" estaban inconformes con sus autoridades.[62]

Para poner un ejemplo, el redactor dijo que en Ciudad Guzmán los juegos de azar habían sido tolerados por los jefes políticos, sin importar "las súplicas de infinidad de personas acomodadas, de buenas costumbres y finísima educación, que forman la crema de aquella tan simpática sociedad".[63] Aquí el redactor de *El Continental* revelaba con claridad de quien era vocero y mostraba una vez más su clasismo, era a los grupos de las élites regionales y clases acomodadas a quien estaba defendiendo de la inacción de las autoridades políticas. El redactor de *El Continental* era muy crítico y puntilloso con respecto a las autoridades intermedias, los acusaba de todo: eran ineptos, flojos, ignorantes, abusivos, malos, autoritarios y hasta perversos, pero no decía que estaban en esos cargos porque los había nombrado el gobernador en turno, y que en última instancia el responsable de todo lo que pasaba en los cantones, departamentos y municipios era el gobernador del estado. Para este último no había ninguna crítica, ahí la autocensura y la adulación hacia la autoridad máxima del estado se notaba claramente, ya no se diga del silencio que guardaba con respecto al régimen porfirista y a la figura del presidente de la república. A esas alturas de la administración pública no se menciona la antidemocracia ni el autoritarismo, todo eran buenas opiniones. El redactor de *El Continental* dijo al respecto:

> Es un hecho que, quien puede hacer mucho bueno en el particular, es el Sr. Gobernador, cuya influencia es, sin disputa, poco menos que decisiva en todos los ramos de la administración, así se trate del Poder Judicial como del alto Cuerpo Legislativo, todos obsequian a pie juntillas las *recomendaciones* del Ejecutivo, según llegan a asegurar algunos maldicientes, no porque sea el Ejecutivo, debe hacerse constar, sino porque reconocen en la personalidad privada del Señor Gral. Curiel, la superioridad de un criterio despejado y

[62] *El Continental*, 27 de agosto de 1893.

[63] *El Continental*, 27 de agosto de 1893.

> seguro (sobre todo seguro), en todas sus resoluciones y consejos para llegar al fin que se deben proponer […] Es, pues, al Sr. Curiel, a quien debemos dirigirnos si queremos hacer uso del medio único eficaz para que la administración pública se moralice, para que se moralicen los gobernados, teniendo adhesión y fe para sus mandatarios.[64]

Era muy claro que el redactor de *El Continental* no enfocaba sus críticas al gobernador Curiel, ni mucho menos al presidente Díaz, no veía ahí el origen del despotismo, del militarismo, de la antidemocracia, el autoritarismo, del centralismo y la traición a los postulados liberales de la Constitución de 1857, sabía muy bien y por eso lo callaba, que cualquier crítica a ese nivel le costaría la clausura de su periódico, cuando menos, y si no, la cárcel o la vida. Cuando mencionaba que el gobernador Curiel podía "influir" o mandar "recomendaciones" (que literalmente eran órdenes) a los otros dos poderes el Judicial y Legislativo, no estaba violando la Constitución, porque éstos debían ser autónomos e iguales que el poder ejecutivo, sino que se reconocía en el gobernador una supuesta "superioridad de criterio", lo que no era sino el sometimiento de ambos poderes al Ejecutivo en términos reales, ésto para el redactor de *El Continental* no era antidemocrático ni autoritario, mucho menos se atrevía a decir abiertamente que el gobernador Curiel, y los que le precedieron, fueron impuestos desde el centro del país mediante acuerdos cupulares y con elecciones a modo. Así era el doble discurso moralista del redactor de *El Continental*, criticaba a las autoridades políticas intermedias y no tocaba, ni con el pétalo de una rosa, al gobernador del estado ni mucho menos al presidente de la república, lo único que le interesaba era "moralizar" a las autoridades, a la población y prohibir las casas de juego y la prostitución.

El redactor de este periódico atribuía la pobreza y el atraso de los municipios al control que ejercían sobre ellos los jefes y directores políticos, "quienes atropellan a cuantos se les ponen delante", según sostuvo el redactor. Agregaba que los municipios solo tenían autonomía para estar y

[64] *El Continental*, 27 de agosto de 1893.

vivir en la miseria, y que hizo mal el gobierno en quitarles todos sus bienes con las leyes de desamortización. Aseguraba que los ayuntamientos se habían degradado al punto que eran considerados inferiores a un simple jefe político, ya que un ayuntamiento no podía dirigirse directamente al gobernador del estado sino era a través del jefe político, para el redactor del periódico, los jefes políticos eran por lo menos "ignorantes".[65]

Notas a favor del jefe político Lucio I. Gutiérrez

El Continental publicó una nota el 8 de octubre de 1893, donde decía que un periódico local había publicado una carta abierta donde se alababa al jefe político del primer cantón, Lucio I. Gutiérrez. La carta, a decir del redactor de *El Continental*, tenía un estilo que principiaba por ser irónico y despechado, seguía siendo monótono hasta el fastidio, y terminaba con caracteres marcadísimos de una alabanza incondicional, rayana en ridícula adulación.[66] Más adelante, en la misma columna informaba que en el *Diario de Jalisco*, el día anterior, se había publicado una nota escrita por Gilberto Jaso sobre un "rumor gravísimo" que afectaría la reputación del jefe político, Lucio I. Gutiérrez. Sostenía Jaso que el jefe político había castigado con dureza a los responsables de faltas administrativas ligeras, "arrojándolos al canario entre criminales", no obstante que eran personas muy apreciadas, sin decir nada, las personas detenidas fueron dos encumbrados personajes que armaron un escándalo mayúsculo en días pasados en la Pastelería Francesa,[67] llegando a los insultos y casi al duelo. Dicho escándalo también fue reportado por el periódico *Juan Panadero*, al hablar de la fiesta con que los amigos del gobernador Curiel celebraron el ingre-

[65] *El Continental*, 8 de octubre de 1893.

[66] *El Continental*, 8 de octubre de 1893.

[67] *La Pastelería Francesa* fue una empresa fundada en 1884 por Remi Lions, ciudadano francés originario de los Bajos Alpes, estaba ubicada en el Portal Quemado, en la calle de Pedro Moreno, frente a la Plaza de Armas en el centro de Guadalajara. Sergio Valerio Ulloa. (2015). *Los barcelonnettes en Guadalajara, siglos XIX y XX*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, Instituto Mora, pp. 114-115.

so de éste al ejército. El *Diario de Jalisco* consideraba que el jefe político mencionado debía aclarar las cosas con rigor, y no "siendo soberbio con los humildes y humilde con los soberbios, castigando con crueldad a los débiles, y rompiendo su vara de justicia ante los que ocupan un puesto importante y son ricos e influyentes, pero a quienes la ley no concede fuero ni inmunidad alguna".[68]

En otra nota *El Heraldo* trataba de justificar la conducta del mismo jefe político Lucio I. Gutiérrez, quien impuso una multa a un extranjero, la multa fue de 25 pesos porque propinó un "sopla-mocos" a un muchacho que se atrevió a faltarle al respeto a la esposa del extranjero. Dijo *El Heraldo* que el jefe político será tan tirano como quieren *El Diario*, el *Juan Panadero* y demás periódicos opositores, pero que si por algo pecó al imponer una multa de 25 pesos a un señor que pateó hasta dejar moribundo a un pobre diablo que cometió la falta de dirigir un piropo a su mujer, si por algo pecó, al imponer esa multa, fue por benevolencia, afirmó *El Heraldo*. Lo que debió hacer el jefe político era consignar al iracundo marido y éste vería entonces la diferencia que hay entre una multa de 25 pesos y un proceso debidamente seguido en contra de un hombre que propina a otro, golpes que lo tunden y hieren.[69] *El Continental* respondió a *El Heraldo* diciendo que el jefe político no cometió un "pecado, sino un delito que se castiga severamente con las leyes penales", agregó que *El Heraldo* denunciaba que *El Continental* difamaba al jefe político, Lucio I. Gutiérrez, porque lo acusó de cometer un delito que debía ser perseguido de oficio, y debía ser llevado a los tribunales para que probara sus dichos, pues el delito de heridas y golpes que dejaron moribundo a quien las recibió, no debía quedar solo en una multa de 25 pesos.[70]

[68] *El Continental*, 8 de octubre de 1893.

[69] *El Continental*, 15 de octubre de 1893.

[70] *El Continental*, 15 de octubre de 1893.

Carta abierta al gobernador Luis C. Curiel

Daniel A. Agraz, redactor en jefe de *El Continental*, el domingo 22 de octubre de 1893 publicó una carta abierta al gobernador del estado, el general Luis C. Curiel, con el fin de que se desterraran de la jefatura política del primer cantón "las corruptelas inveteradas", ya que desde hacía mucho tiempo habían sido más que una amenaza para la clase media y para la clase menesterosa de Guadalajara, lo cual para el redactor era algo heredado desde la época colonial, pero que ya había derribado "la civilización moderna". El redactor sostenía que el régimen liberal se había consolidado en México y consideraba que cualquier individuo podía acudir a un tribunal para exponer sus quejas sabiendo que se le haría justicia cuando la pidiera.[71]

Desde luego que no se puede creer la ingenuidad del redactor, sabiendo muy bien que no era así. Pero, dijo el redactor, que con los jefes políticos o con un simple gendarme era diferente, agregó que a estos se les huía "como a una calamidad", se temía su encuentro de día, y por la noche se caminaba más gustoso por los barrios solitarios que por aquellos donde se veía a un gendarme, el que sin aviso lo detenía, lo registraba, lo escudriñaba, lo manoseaba. Para el redactor, esta manera de actuar de los gendarmes era sumamente "vejatoria, vergonzosa y degradante", hasta que decidía soltarlo, si es que antes no lo llevaba a la cárcel. Sostenía el editor, que las inspecciones de policía tenían calabozos que eran "verdaderas cloacas",[72] ahí a los detenidos se les despojaba de sus pertenencias sin orden alguna de la autoridad competente, violando todas las garantías al ciudadano que cayó preso. Después el detenido era trasladado a la jefatura donde sufría "el bochorno de ser juzgado por persona lega, por no decir ignorante, que mal conoce de leyes".[73] El redactor afirmaba que la ley respectiva establecía que todo empleado o funcionario que tuviera conocimiento de un delito debía denunciarlo con oportunidad al Ministe-

[71] *El Continental*, 22 de octubre de 1893.

[72] Más arriba se explicó lo qué era la "periquera".

[73] *El Continental*, 22 de octubre de 1893.

rio público, para que sus representantes promovieran lo que correspondía conforme a Derecho. Pero dijo al gobernador que eso no sucedía así en Guadalajara, ni en todo el estado de Jalisco, pues no se tenía en cuenta para nada al Ministerio público. El jefe político lo llevaba ante un juez directamente, sin dar aviso a dicho ministerio.[74]

El redactor de *El Continental* negaba que fuera "Gutierrófogo", es decir opositor al jefe político Lucio I. Gutiérrez, al contrario, consideraba que merecía todo el respeto, y tenía un elevado respeto por él, pero decía que al frente de la jefatura política, que era "antidemocrática", se pusiera a "una persona capaz de dirigir al pueblo con sabiduría, justicia y tino", persona que Lució I. Gutiérrez no era, pues se cometían irregularidades y había desconfianza, temor y horror para algunos, que hacía que muy pocos quisieran acercarse a la jefatura, y, más bien, preferían defenderse por ellos mismos, que llamar a un gendarme, porque corrían el peligro de que si el gendarme no encontraba al delincuente denunciado, dicho gendarme se llevaba al quejoso como autor de escándalos. Aseguraba que muchos ciudadanos no acudían a la policía por no verse envueltos en telas de araña que se solía formar en la jefatura a causa de los procedimientos extraviados expuestos anteriormente.[75]

El editor del periódico pidió al gobernador interviniera para evitar trastornos, tanto en la jefatura de Guadalajara, como en el resto de las jefaturas y directorías políticas del estado, donde las cosas parecía que estaban peor que en la capital. Aseguró que en los cantones y departamentos del interior del estado, las autoridades políticas eran extrañas a la sociedad que debían regir, y algunos eran mercenarios que servían a quien les pagaba, que ni conocían, ni estudiaban la sociedad en que iban a vivir, y que dichas autoridades se creían con amplísimo derecho para mandar, más de acuerdo con su capricho que procurando el progreso de sus gobernados. Finalmente, el periódico solicitó al gobernador que se hiciera una reforma de ley para que las autoridades políticas fueran electas po-

[74] *El Continental*, 22 de octubre de 1893.

[75] *El Continental*, 22 de octubre de 1893.

pularmente, como pasaba en otros estados de la república.[76] El tono con el que se dirigió el redactor de *El Continental* al gobernador fue sumiso, muy condescendiente y educado, desde luego que no había ninguna crítica al gobernado en lo individual, ni se le hacía responsable del actuar de las autoridades políticas ni de la situación de ingobernabilidad que tenían los pueblos del estado con estas autoridades corruptas.

Atentado contra el director de Juan Panadero

El Continental publicó una nota el día 17 de diciembre de 1893 donde denunció un atentado en contra de Gilberto Jaso, director del periódico *Juan Panadero*, dijo que se cometió una arbitrariedad por parte del jefe político del primer cantón, Lucio I. Gutiérrez. Los integrantes de la Prensa Asociada Independiente de Jalisco, salieron en defensa del director de *Juan Panadero*. Relata *El Continental* que al salir de su casa el director de *Juan Panadero*, llegó a una tienda cerca de su domicilio, para comprar alimentos. Después de hacer sus compras, el director se dirigió a su casa, cuando lo detuvo un gendarme, quien lo llevó a la demarcación de policía, donde fue acusado de "escandaloso". Aunque se defendió de tal acusación, el policía lo llevó a la inspección general, y ahí se reiteró la misma acusación. Sin ver ni oír al acusado, el jefe político le impuso un castigo de quince días de arresto. En respuesta, la Prensa Asociada acordó publicar en el *Diario de Jalisco* un extenso artículo firmado por los representantes de todos los periódicos independientes de Guadalajara que fueron: *El Tapatío*, *El Telégrafo,* el *Diario de Jalisco*, el *Juan Panadero* y *El Continental*, demostrando la inocencia del director de *Juan Panadero*. De igual manera, se acordó enviar un ocurso al gobernador del estado suplicando su intervención, para que se otorgara a la prensa las garantías que le correspondían, cosa que no dudaban en alcanzar, pero también acordaron enviar un telegrama y un ocurso al presidente de la república en demanda

[76] *El Continental*, 22 de octubre de 1893.

de garantías contra los atentados que en lo sucesivo pudiera cometer el jefe político del primer cantón.[77]

Una semana después *El Continental* decía sobre la aprehensión de Gilberto Jaso, director de *Juan Panadero*, que la prensa independiente tapatía no había abandonado ni abandonaría su actitud digna ante las autoridades, ya que solo estaban pidiendo justicia. Aseguró que las acusaciones contra el director de *Juan Panadero* cada vez se iban desvaneciendo, mientras que las torpezas del jefe político cada vez eran más claras. Agregó que un periódico oficialista, partidario del jefe político, publicó el informe que Lucio I. Gutiérrez había entregado al juez de distrito, en el juicio de amparo promovido por Jaso. *El Continental* por su parte sostuvo que de dicho informe se desprendía claramente que Lucio I. Gutiérrez, no solo estuvo equivocado al castigar a Gilberto Jaso, sino que invadió esferas de actividad legal que no le correspondían, esto es, "que castigó como faltas hechos que estimados por la ley como verdaderos delitos [ultrajes a la autoridad o a sus agentes]", los cuales debieron caer en la competencia de autoridades del ramo penal, lo que se tradujo como "abuso de autoridad o usurpación de funciones públicas".[78]

El Continental confió en que habría una resolución judicial favorable al director de *Juan Panadero*, porque ya se tenía una opinión del promotor fiscal federal a favor de Gilberto Jaso, y porque el mismo gendarme acusador, quien lo apresó, declaró en el juicio que Jaso no estaba ebrio ni había cometido falta alguna, pero saltó la pregunta de ¿Por qué entonces fue llevado a la inspección? Aseguró que los testigos del jefe político, quienes eran gendarmes no pudieron reconocer a Jaso en el careo practicado en el juicio. Además, dijo *El Continental* que el mismo presidente de la república contestó un telegrama que le enviaron los de la Prensa Asociada Independiente de Jalisco en favor del acusado. Es importante detenerse en el párrafo donde esta prensa supuestamente "independiente" se refiere al presidente Porfirio Díaz:

[77] *El Continental*, 17 de diciembre de 1893.

[78] *El Continental*, 24 de diciembre de 1893.

> El Sr. Presidente de la República, con deferencia y amabilidad que por sí solas constituyen una prueba palmaria de las brillantes dotes que adornan a nuestro primer Magistrado como hombre Público y como finísimo caballero, se sirvió contestarnos el telegrama que la prensa Independiente de Jalisco le remitió pidiendo protección contra las arbitrariedades del Jefe político, y ya se le remitieron varios de los comprobantes que justifican la legitimidad de nuestras quejas.[79]

La forma y el tono en que se dirigen al presidente de la república y al gobernador del estado de Jalisco, utilizando términos muy elogiosos, da cuenta del tipo de "prensa independiente" que había en Guadalajara, la que solo usaba su independencia para criticar a las autoridades políticas intermedias, pero se portaba muy condescendiente con las altas esferas del poder. *El Continental* sostuvo que por esta vez el jefe político llevaba las de perder, y que la sociedad se hallaba justamente muy indignada, las quejas en contra del jefe político habían llegado a todos los periódicos independientes, siendo algunas muy graves y bochornosas, y aseguraba que si las cosas seguían así el prestigio de Lucio I. Gutiérrez, como jefe político, estaba prácticamente acabado, y pronosticaba que Gutiérrez caería tarde o temprano para no levantarse jamás, lo que sería una lección para quienes en adelante ocuparan dicha jefatura política. Concluyó diciendo *El Continental*, que casi termina compadeciendo a Lucio I. Gutiérrez de tan mal que le estaba yendo frente a la opinión pública.[80]

Retrocesos en la seguridad y en las garantías ciudadanas

En su publicación del 17 de junio de 1894 *El Continental* aseguró que, desde hacía muchos años, en el estado de Jalisco no había habido progreso, sino retroceso en algunos sentidos, en otros estancamientos y en muy pocos se había adelantado algo. Afirmaba que en cuanto a seguridad y derechos ciudadanos, como la libertad y la propiedad habían sufrido

[79] *El Continental*, 24 de diciembre de 1893.

[80] *El Continental*, 24 de diciembre de 1893.

abandono por parte de las autoridades. Aseguraba que en los caminos públicos había muchos robos que ponían en peligro a los viajeros, quienes tenían "la necesidad de caminar armados hasta los dientes" y constantemente repeler los ataques de los salteadores. Agregó que en las poblaciones foráneas la libertad de los ciudadanos era "horriblemente vejada por autoridades ignorantes o mal intencionadas", puso de ejemplo el caso de un director político que apresó a una "señorita decente" y la inscribió en el registro de prostitutas, lo que provocó que dicha señorita "viendo ultrajada su castidad y pudor se volvió loca".[81] Con respecto a la ciudad de Guadalajara, dijo el periódico, que las vejaciones eran iguales o peores que en las poblaciones y caminos rurales, pues tampoco había seguridad, ya que se robaba a la luz del día y frente a la Instrucción general de policía, en plaza, calles y paseos. Aseguraba que todos los días había ciudadanos honrados que eran conducidos a la cárcel y condenados sin ser oídos por una autoridad. En contraste, *El Continental* comparaba esta situación con la que había en tiempos que fue gobernador de Jalisco el general Francisco Tolentino (1883-1887), a quien puso como ejemplo de buen gobernante:

> Los tiempos pasados […] en que el Sr. Gral. Tolentino, empuñando con mano firme las riendas del gobierno jalisciense, hizo desaparecer de todo nuestro territorio a todos los bandidos, y al contrario de lo que sucede, en las calles, en las plazas, en los paseos y hasta en los caminos públicos, podíamos todos permanecer o transitar tan tranquilos y tan seguros como no lo estamos ahora.[82]

El Continental que se asumía como muy liberal, era partidario de la mano dura de un general, aunque negaba hacer apología del retirado general Tolentino, curándose en salud dijo no abrigar "el sentimiento perverso de una servil e interesada adulación vergonzosa". Creía dicho

[81] *El Continental*, 17 de junio de 1894.

[82] *El Continental*, 17 de junio de 1894.

periódico ser imparcial y objetivo al reconocer y elogiar al general por haber impulsado y desarrollado casi todos los ramos de la administración durante su gobierno, pues se introdujo el telégrafo, la luz eléctrica y el agua potable proveniente del Agua Azul, entre otras obras públicas como el reloj del palacio de gobierno. Al respecto criticó lo poco que había hecho el gobernador en funciones, el general Luis C. Curiel, al contrario, sostuvo que en Guadalajara se había "retrogradado de manera alarmante" en muchos temas de la administración pública. Concluyó *El Continental* diciendo que, dado que ya se había logrado la paz, era necesario que el gobierno del estado entrara de "lleno en una era de actividad y verdadero progreso".[83]

La jefatura política un poder anómalo sin límites

El Continental en sus editoriales tendía a teorizar respecto a los jefes políticos, en su edición del 17 de febrero de 1895 volvió a comentar sobre la sociedad y el régimen político que regía en México durante el porfiriato, sostenía que el pueblo se había convertido en un "elemento pasivo", que perdía cada día "sus energías y su virilidad de otros tiempos". Dijo que el pueblo antes era el soberano, el elemento activo, el árbitro de sus propios destinos, según la Constitución, pero que el tiempo había pasado y el pueblo experimentó un cambio político por causa de las continuas luchas que lo habían cansado, decepcionado y engañado, por lo que cayó en la indiferencia, y que de ser el soberano de ayer pasó a ser un pueblo obediente y sumiso. Que sus gobernantes, desde el alto magistrado hasta el simple portero o el agente de policía, todos se habían convertido en unos déspotas y arbitrarios. *El Continental* sostenía que la jefatura política era "un poder arbitrario dentro de un poder liberal, un poder omnímodo dentro de un poder ajustado a ciertos límites que la ley no permite traspasar". Agregaba que el jefe político invadía las atribuciones de los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.[84]

[83] *El Continental*, 17 de junio de 1894.

[84] *El Continental*, 17 de febrero de 1895.

Lo dicho anteriormente era solo para criticar al jefe político del primer cantón, Lucio I. Gutiérrez, quien había cometido muchos errores y provocado una multitud de amparos en su contra. Sobre el desempeño de Gutiérrez, dijo el editor de *El Continental*, que había actuado con una tirantez y energía sin precedentes, con consecuencias fatales para la sociedad. Aseguraba que la seguridad pública era ilusoria, pues había robos diarios hasta en el centro de la ciudad, igual sucedía con los abusos policiacos, sobre todo en cuanto a la persecución de la prostitución clandestina por parte de los policías, las disposiciones policiacas eran tan absurdas, que bastaba el dicho de un gendarme para que se arrastrara públicamente a una mujer honrada como si fuera prostituta, primero a la demarcación, después a la jefatura, y luego al hospital, donde se le hacía pasar por el registro respectivo, para decirle después que quedaba en libertad y que no había motivos para proceder.[85]

Agregaba *El Continental* que el jefe político imponía multas muy altas para perseguir la embriaguez, pero por falta de prudencia y por torpes caprichos se violaba la honra de las personas que, aunque fueran pobres, tenían derecho a que se les respetara. Mencionaba que no sabía la razón del porqué el gobernador del estado se empeñaba en sostener a Lucio I. Gutiérrez como jefe político del primer cantón, persona que para *El Continental*, carecía de "aptitudes y tino" para gobernar. El redactor del periódico se manifestó enérgicamente en contra de la permanencia de Gutiérrez en la jefatura del primer cantón.[86] *El Continental* sostenía que el problema de las autoridades políticas consistía en que eran unos ignorantes, y que por lo general estos cargos estaban ocupados por militares, sin embrago, en este caso Gutiérrez era un ingeniero, no era ni militar ni ignorante, pero tampoco estuvo de acuerdo con su desempeño.

[85] *El Continental*, 17 de febrero de 1895.

[86] *El Continental*, 17 de febrero de 1895.

La policía de Guadalajara, sus abusos y la necesidad de reformarla

El redactor de *El Continental* hizo mención de la necesidad de modernizar, organizar, profesionalizar y especializar a la policía de Guadalajara, poniendo de ejemplos a los cuerpos de policía de Londres, Berlín, San Petersburgo, París y Madrid. Pero aseguraba que esto no se conseguiría con reglamentos que no se cumplieran, ni con intenciones rectas y deseos ardientes que no tenían jamás realización alguna, ni mucho menos designando a personas ignorantes, sin educación, ni moral para ocupar dichos puestos, que comenten mil abusos y tropelías, además de hechos punibles de suma gravedad. El redactor del periódico al definir lo que para él era un gendarme, dejaba ver todo su clasismo y desprecio por las clases bajas:

> Un gendarme es entre nosotros un ser repugnante por su conducta grosera; un tipo que infunde terror a causa de las infinitas arbitrariedades que comete: un empleado público que no admite observaciones; que tiene un poder absoluto y tiránico y que ante su superior goza de infalibilidad. Todavía más: de poco tiempo a esta parte los agentes de seguridad se han insolentado a tal grado que frecuentemente abusando de su empleo cometen todo género de delitos.[87]

Aseguraba el editor que *El Continental* aunque había sido "oposicionista", no lo era "por sistema, sino por convicción", pero que siempre había reconocido en el gobernador Curiel "al hombre político adornado de excepcionales dotes administrativas". Agregó que con el triunfo de la candidatura gobiernista, los editores de este periódico eran los primeros en procurar el bien del pueblo jalisciense, en deponer todo espíritu de lucha, acatar las disposiciones del legítimo mandatario del pueblo, y en indicarle con franqueza y lealtad los males que pudiera acarrar el más ligero desprestigio a su administración.[88] Cuando era necesario agacharse y rendirle pleitesía al gobernador del estado, el editor de *El Continental*

[87] *El Continental*, 30 de junio de 1895.

[88] *El Continental*, 30 de junio de 1895.

no tenía empacho ni pena en manifestarlo públicamente. Siguiendo con este tono de halagos al gobierno, veinte días después, *El Continental* festejó el cambio en la jefatura política del primer cantón, salió el criticado y desprestigiado Lucio I. Gutiérrez y tomó posesión del cargo el licenciado José de Jesús Anaya, a quien elogiaba de manera particular *El Continental*, por mejorar el cuerpo de la gendarmería municipal despidiendo a los individuos ineptos, de mala nota, y que tanto desprestigiaban al cuerpo de policía, termina la nota criticando al jefe político anterior Lucio I. Gutiérrez.[89]

Tanto le interesaba a *El Continental* la depuración de la policía, su buena conducta y organización, que dedicó varias columnas y números de sus ejemplares para hablar de la situación del cuerpo de policías, alabando al nuevo jefe político del primer cantón.[90] Pero no le duró mucho el gusto a *El Continental*, pues el 10 de mayo de 1896, publicó una nota en donde se quejaba nuevamente de la policía de Guadalajara, dijo que parecía que se había vuelto a la triste época en la que el cuerpo de policía cometía constantemente las mayores arbitrariedades sin respetar sexo, edad, posición social ni honra. Aseguraba que todos esos atropellos contra las garantías individuales por parte de los gendarmes, se debían a la falta de educación que estos tenían, pero que eran apoyados por sus jefes sin ninguna medida o límite. Mencionó entre estos atropellos la represión policiaca a la gente que asistió a la inauguración del monumento al general Ramón Corona. Fueron varios los acontecimientos y atropellos que narró *El Continental* donde los gendarmes cometieron delitos y violaciones a las garantías individuales. Esta vez no culpaba directamente al jefe político, sino a un subalterno, que impidió que se castigara a los policías que eran culpables de dichas arbitrariedades, por ello demandaba que el jefe político se hiciera cargo directamente de los casos, pues tenía buena opinión de éste. Concluyó el redactor del periódico que el pueblo y

[89] *El Continental*, 21 de julio de 1895.

[90] *El Continental*, 13 de octubre de 1895.

la sociedad de Guadalajara, pedían "justicia y moralización para el cuerpo de policía".[91]

Criticas al gobernador Luis C. Curiel

El general y licenciado Luis del Carmen Curiel fue gobernador en varias ocasiones, con el carácter de sustituto desde septiembre de 1887 hasta el mes de febrero de 1895, y fue gobernador constitucional desde marzo de 1895 hasta el mes de enero de 1903.[92] *El Continental*, en junio de 1895, tenía muy buenos comentarios respecto al gobernador Curiel, pero en octubre de 1896, dichos comentarios cambiaron radicalmente. *El Continental* siempre se autodefinió como "independiente", "liberal" y "demócrata", sin llegar al "oposicionismo sistemático". Sin embargo, sus discursos y posiciones políticas e ideológicas, lo delataban como un periódico porfirista a nivel nacional y estatal, la mayoría de las veces estaba a favor del gobernador del estado, pero radicalmente en contra de las autoridades intermedias, desde los jefes políticos hasta los comisarios de policía, pasando por directores de departamento y algunas autoridades municipales. En su edición del 25 de octubre de 1896, *El Continental* se manifestaba satisfecho por el adelanto y progreso que había por todos los estados del país, en donde los gobernantes procuraban engrandecer la felicidad de sus pueblos. Pero, sobre todo, elogiaba la figura del presidente Porfirio Díaz, quien iba por su quinto periodo de gobierno, después de tres periodos consecutivos donde fue reelecto. Sin cuestionar absolutamente nada del régimen porfirista y sus continuas reelecciones, *El Continental* publicó lo siguiente:

> El Primer Magistrado de nuestra nación, es a no dudarlo, modelo de caridad, patriotismo y actividad, pues gracias a estas tres grandes cualidades de

[91] *El Continental*, 10 de mayo de 1896.

[92] Urzúa y Hernández (1987-1988), t. II, p. 235.

nuestro actual Presidente de México se ha sabido elevar a la cúspide de las naciones más civilizadas.[93]

Pero no solo alababa a Porfirio Díaz, sino también a otros gobernadores muy cercanos a Díaz: a Ramón Corral en Sonora, a Francisco Cañedo en Sinaloa, a Bernardo Reyes en Nuevo León, a Miguel Ahumada en Chihuahua, y a Leopoldo Romano en Tepic, por seguir el ejemplo de Díaz en sus respectivos estados.[94] Por el contrario, al gobernador de Jalisco, Luis C. Curiel, no le reconocía nada, afirmaba que en Jalisco no había un plan, ni rumbo fijo, pues solo se dedicaba a dar empleos a sus amigos y recomendados, aunque no sirvieran para desempeñar el cargo que se les asignaba, por lo que sostenía que todo anda mal, y toda la administración pública estaba envuelta en un caos.[95] Para el redactor de *El Continental*, el gobierno de Jalisco era el más atrasado, el que menos hacía en favor de sus gobernados, y sería el que trajera más miseria, ruina y desolación al estado, el cual debería estar en los primeros lugares de los estados de la república, por la riqueza de recursos naturales con los que contaba. Concluía diciendo:

Solo esperamos que nuestro actual Primer Magistrado que, acaba de ser proclamado unánimemente para que rija los destinos de la Nación por 4 años más, se fije en la condición de Jalisco, y observe que un gobernante que en

[93] *El Continental*, 25 de octubre de 1896.

[94] Sobre estos gobernadores consultar a Héctor Aguilar Camín. (1984). *La frontera nómada*: *Sonora y la revolución mexicana*. México: Siglo Veintiuno Editores. Artemio Benavides Hinojosa. (1998). *El general Bernardo Reyes, vida de un liberal porfirista. Monterrey: Ediciones Castillo.* Mark Wasserman. (1987). *Capitalistas, caciques y revolución. La familia Terrazas de Chihuahua, 1854-1911*. México: Editorial Grijalbo. También a Martínez (2000) para el caso de Sinaloa y a Contreras (2006) para Tepic.

[95] *El Continental*, 25 de octubre de 1896.

tres años de llevar las riendas del gobierno no ha hecho nada bueno, no puede ser benéfico ni concediéndole la gubernatura a perpetuidad.[96]

Y así, después de haber dicho que estaba de acuerdo con las continuas reelecciones de Díaz, aunque fuera por "unanimidad", y que pidiera poner a un gobernante "a perpetuidad", *El Continental* se seguía asumiendo como "independiente", "liberal" y "demócrata", y creía tener la estatura moral para cuestionar al gobernador y a las autoridades políticas jalisciense, aunque dicho periódico perteneciera al mismo sistema que criticaba.

Contra la publicidad inmoral y el repugnante vicio del juego en Guadalajara

Una parte esencial de su línea editorial moralista de *El Continental* era denunciar las casas de juego y exigir a las autoridades que actuaran en contra de ellas, pues veía al juego como si fuera un delito y la perdición moral de los individuos. Aseguraba que el juego se permitía en las ciudades de México y Guadalajara porque las autoridades eran débiles o descuidadas en algunas ocasiones, y en muchas otras recibían a cambio de su disimulo cantidades más o menos fuertes de dinero. Afirmaba que en Guadalajara había garitos, tanto en los suburbios como en el centro de la ciudad, donde abundaban los tahúres que, según el periódico, eran "esos vampiros que chupan la sangre de la comunidad sin producir nada; que viven con el sudor de unos pocos incautos que día a día van a entregar el producto de un trabajo honrado". El redactor de *El Continental* pidió al gobernador del estado y al jefe político que declararan "guerra sin cuartel" a las casas de juego y a los tahúres que operaban impunemente en las mismas "narices" de la policía, y concluía diciendo que no se cansaría de denunciar públicamente a las casas de juego y a los tahúres hasta acabar con todos.[97] A mediados de noviembre de 1894, y siendo consecuente con su posición moralizante, *El Continental* denunció que en la antigua plaza de toros del Agua Azul, se realizaban juegos de gallos casi todos los

[96] *El Continental*, 25 de octubre de 1896.

[97] *El Continental*, 12 de agosto de 1894.

días y sucedían cuantos desórdenes podían imaginarse, por ello suplicaban al jefe político del primer cantón, Lucio I. Gutiérrez, que cumpliera con su deber, para poner remedio a tal situación.[98]

Los mensajes moralizadores de la prensa jalisciense eran muy frecuentes, en el periódico *Jalisco Libre*, el 1° de marzo de 1905, se publicó una nota donde "las personas caracterizadas" de la sociedad tapatía le solicitaban al jefe político del primer cantón, Santiago Mendoza, que recordara a los dueños de los establecimientos y casas de comercio que no exhibieran en sus aparadores cromos, grabados y esculturas deshonestas, ni que vendieran tarjetas postales con figuras inmorales.[99] Posteriormente, el 3 de junio de 1905, *Jalisco Libre* publicó una noticia donde se involucraba a algunos extranjeros en compañía de mexicanos en una casa del centro de Guadalajara que la autoridad política descubrió como casa de juegos prohibidos. Dijo el editor del periódico que hacía pocos días unos americanos solicitaron al jefe político del primer cantón el permiso para establecer un casino como el que tenían los franceses, los alemanes y aún los jaliscienses "más honorables y distinguidos". La autoridad dio el permiso porque no halló nada anormal, ni opuesto a las leyes vigentes, por lo que dio la licencia respectiva, con la limitación de que en dicho casino "no se permitirían juegos prohibidos". Pero una vez instalado dicho casino, los agentes de la jefatura política supieron que se tenía proyectado establecer ahí una ruleta y algunos otros juegos de azar. De inmediato el jefe político, Santiago Mendoza, tomó medidas y, acompañado del inspector general de policía, José Macías Gutiérrez, encontró a los norteamericanos y otras personas de reconocido prestigio en la sociedad tapatía frente a una mesa donde había valores y todo lo necesario para una partida de juego. Sorprendidos los asistentes al casino, el jefe político los amonestó severamente y les retiró el permiso que tres días antes les había otorgado para establecer el casino. Los americanos alegaron desconocer cuáles eran los juegos prohibidos en México, pero a pesar de eso, Mendoza no levantó el

[98] *El Continental*, 18 de noviembre de 1894.

[99] *Jalisco Libre*, 1 de marzo de 1905.

castigo.[100] Sobre el desempeño de Santiago Mendoza como jefe político dijo *Jalisco Libre*:

> Todo esto habla muy alto en pro del celo infatigable con que nuestra primera autoridad política obra en casos ofrecidos, y revela la estricta moralidad administrativa que actualmente reina en Jalisco, puesto que ningún vicio social es aquí permitido, ni tolerado a sabiendas, como acontece en las demás capitales de los Estados de la República, inclusive la metrópoli. Aquí un extranjero ofreció al S. Coronel Ahumada 200.000 pesos porque se le permitiera establecer una casa de juego en Guadalajara, y el probo hombre de Estado, le contestó: "Ni que me garantizara Ud. pagar los millones de la deuda del Estado, le otorgaría tal licencia". Debemos congratularnos de que no se comercie; como en otros días, con la infracción de las leyes y la disminución de los delitos.[101]

La opinión de *Jalisco Libre* contrasta totalmente con la opinión que tenía *El Continental* unos años antes, para el primero eran puras loas, mientras que para el segundo eran puras críticas.

La policía, una de las instituciones más necesarias para la sociedad

Según *Jalisco Libre*, en agosto de 1905, la policía era una de las instituciones más necesarias para la sociedad, cuando dicha corporación estaba bien organizada, y cuando los individuos que la formaban cumplían con su deber. Pero, dijo el periódico, que cuando esto no era así, la policía se volvía una amenaza y un gran peligro para la misma sociedad. Para evitar esto, el periódico propuso vigilar a la policía constantemente. Aseguraba dicho periódico, que el jefe político del primer cantón, Santiago Mendoza, estaba haciendo la debida vigilancia al cuerpo de policía de Guadalajara, cumpliendo las órdenes del gobernador de Jalisco, el coronel Miguel Ahumada, ya que visitaba continuamente las demarcaciones, y los

[100] *Jalisco Libre*, 3 de junio de 1905.

[101] *Jalisco Libre*, 3 de junio de 1905.

subalternos sabían que serían visitados a la hora menos esperada, por lo que debían estar preparados siempre, tener arreglada la oficina y cumplir con su deber, de lo contrario habría un total desorden. El redactor del periódico, Francisco Galindo Torres, afirmaba que el jefe político trataba de corregir los defectos que hubiera en el cuerpo policiaco de Guadalajara, lo que según Galindo, lo conseguiría porque tenía la cooperación del gobernador Ahumada, con quien el jefe político platicaba diariamente, por lo que el periodista esperaba que salieran buenas cosas de esto, para beneficio de la sociedad y del estado de Jalisco.[102]

Personas salidas del pueblo no deben integrar la policía

Jalisco Libre, en su edición del 7 de octubre de 1905, informaba que el jefe político del primer cantón, Santiago Mendoza, estaba haciendo el presupuesto para la gendarmería municipal de Guadalajara, pues tenía pensado incrementar su número, en armonía con la hacienda pública del mismo municipio. Dicho incremento se veía muy necesario, pero primero había que reorganizarla y depurarla de la mayor parte de los individuos, que saliendo de las clases inferiores del pueblo, de dos décadas a la fecha, eran pésimos y corruptos, por ello, sostenía el periódico, que era indispensable introducir gente nueva, apta, bien retribuida y en número suficiente. El redactor de *Jalisco Libre*, Cipriano C. Covarrubias, sostenía un clasismo acendrado, pues para él la gente de la clase baja del pueblo no debería integrar la policía, opinó al respecto:

> los individuos de nuestro bajo pueblo; analfabetas, sin educación alguna, de perversos instintos, desprovistos de sentido moral y muchas veces hasta de sindéresis, no son ni pueden ser candidatos para la reorganización de nuestra policía. Ella, si ha de ser buena, tiene que salir de más elevadas esferas.[103]

[102] *Jalisco Libre*, 10 de agosto de 1905.

[103] *Jalisco Libre*, 7 de octubre de 1905.

Proyecto para mejorar el servicio público y disminuir la criminalidad

Jalisco Libre aseguraba que el jefe político interino del primer cantón, Adolfo E. Romero, al tomar su cargo, presentó al gobernador del estado algunos proyectos para mejorar el servicio público y disminuir la criminalidad en la ciudad de Guadalajara. Hablaba de la reorganización de la policía de la ciudad. El periódico afirmó que en 1870, bajo la administración de Ignacio L. Vallarta, el personal de la gendarmería municipal era de 40 jefes y oficiales, y cerca de 200 soldados, siendo el número de habitantes de menos de 80,000 personas. En 1885, durante la administración de Francisco Tolentino, la ciudad estuvo dividida en diez demarcaciones, y el cuerpo de seguridad pública estaba formado por un inspector general, un subinspector, dos ayudantes, diez inspectores de demarcación, diez subinspectores de demarcación, veinte oficiales y 200 gendarmes, en total cuarenta y tantos jefes y oficiales y 200 policías, que cuidaban a 91,000 habitantes. Para noviembre de 1905, el personal de la gendarmería tenía 32 jefes y oficiales, ocho menos que en 1885, y cerca de 300 gendarmes, que tenían que encargarse de 105,000 a 110,000 habitantes, diseminados en un territorio mayor que veinte años antes. De tal manera que la situación de la policía de Guadalajara era deficiente en 1905 con respecto a 1885, pues cuidaba más habitantes y mayor extensión territorial en 1905 que en 1885. Pero no solo eso, sino que se le pagaba menos: el inspector general ganaba $100 mensuales, los comandantes $75, los ayudantes $60, los oficiales $50, y los gendarmes $22.50. Salarios muy bajos para las más humildes necesidades de la vida, además debían trabajar 12 horas diarias y de 8 a 10 horas de servicio extraordinario. Lo cual para el periódico era muy injusto. El redactor del periódico sostuvo que los integrantes del cuerpo de policía ganaban lo mismo que 35 años atrás, y que para ellos no había habido progreso, pero sí más cargas y más servicios.[104]

[104] *Jalisco Libre*, 15 de noviembre de 1905.

Gente desordenada que se encuentra en las heces de la sociedad

Jalisco Libre que se asumía como un periódico "imparcial", "liberal" y "demócrata", se espantó porque la noche del 15 de septiembre un grupo de individuos ebrios causaron desórdenes y armaron una pelea campal, por lo que el mencionado periódico los calificaba como personas que estaban en "las heces de la sociedad", y porque no se comportaban "respetuosos y correctos" como debía ser "un pueblo verdaderamente demócrata y liberal". Este grupo de borrachos era de más o menos treinta personas, los que fueron llevados al calabozo de la inspección general de policía, donde, lejos de calmarse, se pelearon nuevamente, se dieron con todo, incluso arrancaron ladrillos del piso, haciéndose serias heridas en la cabeza. Al momento de mayor desorden llegaron el gobernador Zavala y el jefe político Mendoza, quienes llevaron médicos para curar a los heridos y llevar al hospital a los más graves.[105] Lo destacable en la nota no era la riña ocurrida, sino el lenguaje utilizado por el redactor del periódico, lamentando que tal desorden se hubiera cometido:

> una noche tan gloriosa para todo buen mexicano; en una noche en que el pueblo, lejos de entregarse a la embriaguez con el exceso que acostumbra, debería estar […] más correcto y respetuoso, y celebrar las glorias de la patria, que tan directamente les corresponden, con todo el entusiasmo y regocijo de que son dignas, pero sin descender al salvajismo, a la embriaguez que embrutece al hombre y que hace aparecer peor que las bestias, despertando, a fuerza de alcohol, sus peores instintos, para dar a la sociedad espectáculos como el que nos ocupa.[106]

Imaginemos por un instante lo que pensaría el cura Miguel Hidalgo y Costilla que convocó a un pueblo a levantarse en armas para luchar contra un gobierno opresor, al leer estas palabras del editor de *Jalisco Libre*. Con seguridad el editor no hubiera sobrevivido aquella madrugada del 16

[105] *Jalisco Libre*, 19 de septiembre de 1905.

[106] *Jalisco Libre*, 19 de septiembre de 1905.

de septiembre de 1810 ante un pueblo enardecido, o tal vez, el editor creía erróneamente que el pueblo que siguió a Hidalgo era muy bien portado, sobrio y civilizado, como lo supone con estas palabras:

> No; el pueblo, el verdadero pueblo de Jalisco, es un pueblo trabajador, honrado y juicioso; por eso le han de mortificar esos cuadros repugnantes, esos espectáculos salvajes que dan individuos en su seno, incapaces de reprimir sus malos ímpetus y de toda acción generosa.[107]

Evaluación de Adolfo E. Romero y nombramiento de Nicolás España como jefe político

El coronel Nicolás España, quien fue diputado local, pidió la licencia respectiva para ocupar el cargo de jefe político de Guadalajara para el que fue nombrado por parte del gobernador del estado, Miguel Ahumada, a partir del 1° de enero de 1906. Dicho cargo había sido desempeñado interinamente por Adolfo E. Romero, quien en el poco tiempo que estuvo en el puesto pudo acreditarse como hombre prudente, moderado y de bastante iniciativa, según dijo *La Gaceta de Guadalajara*.[108] El 9 de enero de 1906, *Jalisco Libre* hizo un balance de la gestión del jefe político interino del primer cantón del estado, Adolfo E. Romero. Dijo el editor del periódico, que dicho puesto era muy difícil y que de él solo habían salido bien librados José Cañedo, jefe político durante el gobierno del general Galván, y el teniente coronel Gonzalo del Valle. Las loas para Adolfo E. Romero no se hicieron esperar por parte del editor, pues aseguraba que era "un caballero de intachables antecedentes y hombre público de limpia carrera". Sustituyó en la jefatura a Santiago Mendoza, quien se ganó las simpatías de la "culta sociedad" tapatía, y dejó en dos años de gobierno muy buenos comentarios, que le ganaron una alta estima entre el público y sus subordinados, por haber cumplido cabalmente con sus deberes, y porque supo hacerse respetar y honrar la investidura política con que fue

[107] *Jalisco Libre*, 19 de septiembre de 1905.

[108] *La Gaceta de Guadalajara*, 4 de enero de 1906.

favorecido por el gobernador del estado. En lo que respecta a Romero, dijo el editor del periódico, que se había desempeñado muy bien en todos los ramos de su competencia como autoridad política, pero de una manera "modesta y prudente". Romero se distinguió por haber reorganizado y seleccionado escrupulosamente al cuerpo de policías, su trabajo y desempeño habían sido muy reconocidos por la sociedad. Romero fue sustituido en la jefatura por el coronel Nicolás España.[109]

Falsificadores de moneda en Guadalajara

El 20 de junio de 1906 apareció una nota en *Jalisco Libre* en donde se relata cómo un periódico de la ciudad de México, titulado *La Gaceta de Policía*, trató de desmentir al jefe político del primer cantón de Jalisco, Nicolás España, diciendo que era falso que la policía de Guadalajara hubiera descubierto la casa donde se acuñaba moneda de "mala ley". Lo que *La Gaceta de Policía* aseguraba era que dicha casa fue descubierta desde la ciudad de México por el inspector general de policía, el coronel Félix Díaz. Aclaró *Jalisco Libre* que el coronel Nicolás España nunca había dicho que la policía de Guadalajara fue la que descubrió la fábrica de moneda falsa. Por su parte *El Imparcial* manifestó que el 27 de mayo anterior, Francisco Chávez, segundo jefe de las comisiones de seguridad de México, llegó a Guadalajara con todos los datos necesarios para descubrir el lugar donde la fábrica de monedas se encontraría, y para asegurar la aprehensión de los implicados en la falsificación. Con estos datos se procedió a la aprehensión de los falsificadores, haciendo lo mismo con la maquinaria, troqueles, laminadores y demás utensilios necesarios para la acuñación de moneda, después se dio aviso al juez de distrito y luego al jefe político del primer cantón de Jalisco. La aprehensión de los falsificadores de moneda se llevó a cabo el 26 de mayo de 1906, dando aviso al juez de distrito de Guadalajara y después al jefe político de la misma ciudad.[110]

[109] *Jalisco Libre*, 9 de enero de 1906.

[110] *Jalisco Libre*, 20 de junio de 1906.

Dijo *Jalisco Libre* que el papel que *El Imparcial* le atribuyó al jefe político de Guadalajara era bastante triste, porque Chávez podía estar invadiendo atribuciones que solo correspondían a las autoridades políticas de Guadalajara, o si las permitía, entonces la policía de Guadalajara aparecía como una corporación "inepta e inservible"; y, por otra parte, lo sabía y lo toleraba, y entonces se manifestaba falta de energía e ignorante de sus deberes, y como ambas cosas afectaban el prestigio de la jefatura de Guadalajara, el jefe político Nicolás España, se vio obligado a salir en su defensa. De esta manera, se supo que el inspector Chávez no intervino en el asunto de los fabricantes de moneda falsa. Más bien, el coronel Nicolás España, se puso de acuerdo con el inspector Chávez, de la ciudad de México, sobre los medios más adecuados para asegurar el golpe contra los delincuentes. Dijo España: "El agente Chávez no desempeñó más papel que el de espectador que yo le permití […] yo no hubiera permitido que el señor Chávez ejerciera jurisdicción alguna en el Departamento de mi mando, ni tampoco pretendió hacerla." Chávez traía el domicilio de la casa, pero desconocía la ciudad y no habría podido dar con la casa, si no hubiera recibido apoyo por parte de la policía de Guadalajara.[111]

El redactor de *Jalisco Libre* justificaba que la policía de Guadalajara no hubiera sabido de la existencia de la fábrica de acuñación de moneda falsa porque, a pesar que ya tenía como tres años de establecida en la ciudad, las monedas no llegaron a circular en Guadalajara, sino en la ciudad de México. Explicó el periódico que esto era un ardid que usaban los falsificadores para despistar las investigaciones de la policía, porque era en la ciudad de México donde circulaban las monedas falsas, y donde se podía seguir el rastro de los criminales, mientras que en Guadalajara solo se producían las monedas de manera clandestina y se llevaban a la capital del país para que allá circularan. Sin embargo, quien hizo las aprehensiones en la ciudad de Guadalajara fue la policía de esta ciudad obedeciendo

[111] *Jalisco Libre*, 20 de junio de 1906.

las instrucciones del jefe político Nicolás España, y a Chávez solo se le permitió ser espectador de dichas aprehensiones.[112]

Nuevo reglamento para cantinas en Guadalajara

La Gaceta de Guadalajara publicó una nota el 11 de noviembre de 1906 en la que el coronel Nicolás España, como jefe político de Guadalajara, estableció algunas medidas para limitar la venta de bebidas alcohólicas en esta ciudad, y como dichas medidas habían surtido buen efecto y dado buena impresión en la sociedad, el jefe político pensó reformar en sentido extensivo aquellas disposiciones, a partir del 1° de enero de 1907, por lo que implementó un nuevo reglamento que tuvo los siguientes puntos principales: la venta de licores tendría únicamente lugares designados especialmente para este objeto, y en ellos estaría prohibida la venta de otra clase de artículos de comercio, con excepción de tabacos y cerillos. Las tiendas de abarrotes, dulcerías y pastelerías estarían autorizadas para vender, sin licencia especial, vinos, licores y cervezas, siempre que fuera en botellas, y por ningún motivo debían permitir los propietarios o encargados, que se consumiera tales artículos en sus mismos establecimientos. La jefatura política podría autorizar en algunos casos, para que se hiciera el consumo de las referidas bebidas en las pastelerías situadas en los portales de la ciudad. Las cantinas en general, podrían abrirse a las 5 de la mañana y se cerrarían a las 10 de la noche. Los sábados deberían cerrar a las 4 de la tarde, y permanecerían cerradas hasta el lunes. La jefatura política se reservó el derecho de clausurar las cantinas en días en que juzgara conveniente.[113]

En pastelerías, dulcerías, cafés y restaurantes, estaría asimismo prohibida la venta de toda clase de bebidas embriagantes, ya fuera en botella o al menudeo, desde las 4 de la tarde de los sábados, hasta las 5 de la mañana de los lunes. Estos establecimientos podían obtener de la jefatura política, la licencia correspondiente para la venta de bebidas. En caso de

[112] *Jalisco Libre*, 20 de junio de 1906.

[113] *La Gaceta de Guadalajara*, 11 de noviembre de 1906.

que hubiera algún teatro de la población, funciones, veladas gratis u otra clase de espectáculos, por espacio de media hora después de terminados dichos espectáculos. La venta de bebidas alcohólicas estaría prohibida a menores de edad, gendarmes con uniforme y a personas que se encontraban bajo la influencia del alcohol. Las infracciones al nuevo reglamento serían castigadas con multas de $5 a $200 o con cinco a treinta días de prisión.[114]

Un jefe político procesado

La Gaceta de Guadalajara publicó el 5 de enero de 1908 una nota donde se informaba que en los festejos del año nuevo había ocurrido un incidente en la plaza de toros "El Progreso", situada en Guadalajara. La corrida fue obsequiada por cuenta de "La Tabacalera". Al evento asistió una gran cantidad de público, tanto que "la multitud arrolladora se golpeaba a las puertas del coso". El jefe político del primer cantón, Nicolás España, llegó a dicha plaza cuando ya había sido cerrada la puerta de entrada a causa del exceso de público. Pero el jefe político ordenó a los gendarmes le abrieran paso entre la multitud que allí se aglomeraba, llena de impaciencia y de disgusto. Al pasar Nicolás España se agitó la ola humana queriendo tener acceso a la plaza de toros. Para contener ese empuje, España ordenó a los gendarmes que dispersaran la multitud repartiendo palos y bofetadas a diestra y siniestra, mientras el jefe político golpeaba con su bastón a alguno de sus asistentes. Tal abuso indignó a los asistentes a la plaza, las personas golpeadas e insultadas directamente por España levantaron una acusación judicial contra este funcionario. Sin embargo, las arbitrariedades cometidas por Nicolás España no fueron las únicas, llegó a un palco que no le pertenecía, quiso desalojar por la fuerza al propietario del palco, que era de nacionalidad francesa, quien se negó a ser desalojado, demostrando que estaba en posesión de los boletos auténticos.[115]

[114] *La Gaceta de Guadalajara*, 11 de noviembre de 1906.

[115] *La Gaceta de Guadalajara*, 5 de enero de 1908.

El público que se dio cuenta del caso por los gritos autoritarios del coronel España, aplaudió al ocupante del palco y protestó ruidosamente contra el despojo que pretendía hacer el funcionario. Al darse cuenta de la actitud del público, el jefe político desistió de su intento, comprendiendo sin duda que por hechos de esa naturaleza había perdido la aceptación general, y pensando acaso que una reclamación diplomática por tal abuso podría causarle más problemas. Sin embargo, el incidente no quedó ahí, al siguiente día se presentaron ante el juzgado tercero de lo criminal Narciso M. Corvera, Enrique Camarena y otros personajes notables de la sociedad tapatía, para presentar una acusación por abuso de autoridad y lesiones contra el coronel España, quedando abierto el proceso judicial en su contra. Poco después una "respetable comisión" se presentó en palacio de gobierno solicitando ser recibida por el gobernador del estado, el coronel Miguel Ahumada. Dicha comisión fue recibida por el gobernador donde el licenciado José María Corvera habló en nombre de todos. Corvera expuso al gobernador la profunda indignación que sentía la sociedad de Guadalajara ante el proceder arbitrario e injusto del jefe político, y haciéndose eco de la "voluntad general" pidió la destitución del coronel España. El gobernador no quiso resolver nada de manera inmediata, por lo que pidió esperar a que resolvieran los tribunales dicho asunto, para poder tomar una decisión.[116] Lejos de castigar al jefe político del primer cantón, el ayuntamiento de Guadalajara multó con $100 a "La Tabacalera", por los abusos del representante de esta empresa, que dieron motivo a los incidentes de la corrida de toros del día primero de enero. Por su parte, *La Gaceta de Guadalajara* dijo que la falta de esta empresa era "inexcusable" y que la multa que le impuso el ayuntamiento le parecía "una pena demasiado benigna".[117]

[116] *La Gaceta de Guadalajara*, 5 de enero de 1908.

[117] *La Gaceta de Guadalajara*, 12 de enero de 1908.

Los jefes políticos por los cantones de Jalisco

Con el objetivo de incorporar la información proveniente de los cantones, *El Continental*, en junio de 1893, decidió iniciar una columna en la cual se conociera lo que pasaba no solo en la capital del estado, sino en el resto del territorio jalisciense, tanto en las cabeceras de los cantones como en las directorías políticas. Según el redactor del periódico en las poblaciones pequeñas las autoridades estaban representadas por individuos enviados desde Guadalajara, a la que se consideraba como el centro del estado, hacia cualquiera de sus extremos, poblaciones donde muchas veces dichos individuos eran vistos como "verdaderos extranjeros", que no conocían la sociedad que iban a dirigir, ni sus necesidades, ni sus elementos. Esto hacía que se cometieran "innumerables aberraciones", por las que se permitía que los petimetres, los entrometidos como decían en los pueblos: los políticos, lucraran engañando a las autoridades, que mal informadas, trataban con miles de atenciones a estos pillos, porque eran aduladores constantes de las altas autoridades, pero despreciaban y hostilizaban a los vecinos honrados y laboriosos, solo porque no rendían pleitesía a la autoridad. Claramente, dijo *El Continental*, "nos referimos en especial a lo que sucede con las autoridades políticas". Aseguraba el diario que lo primero que hacían los jefes políticos era convocar a una junta de los principales vecinos del lugar, con el fin de solicitar su cooperación y consejo, en las difíciles tareas que iba a emprender para mejorar en todo el territorio que le correspondía gobernar. Pero, afirmaba el periódico, que difícilmente los vecinos pacíficos y honrados se presentaban en tales juntas, pues sabían muy bien que no les harían caso dichas autoridades, porque en realidad era "una especie de ejército subordinado a un jefe supremo y absoluto", en vez de funcionarios democráticos.[118]

Los que asistían a la reunión con el nuevo jefe político eran los políticos aduladores de siempre, quienes no llevaban otra intensión más que servirse de la ignorancia del jefe político, "para vengar agravios propios contra sus vecinos" y beneficiarse de la relación con la nueva autoridad.

[118] *El Continental*, 11 de junio de 1893.

De esta manera, todo pasaba desapercibido para el gobernador del estado. El redactor del periódico consideraba que se vivía "un centralismo capaz de ruborizar al hombre menos liberal", pues nada se hacía sin la voluntad del ejecutivo, pero era cierto que, en los centros de población distantes de la capital del estado, se cometía diariamente una gran cantidad de arbitrariedades que ameritaban severos castigos. Aseguraba *El Continental*, que a esos abusos se quería poner fin, instando a los funcionarios "para que con mano de hierro" reprimieran dichos abusos. *El Continental* decía que cumplía con su deber como periódico imparcial, dando publicidad a las quejas de los ciudadanos, para que el gobernador del estado, la legislatura local y el supremo tribunal de justicia, hicieran desaparecer los cacicazgos y señoríos, que abundan en el estado de Jalisco.[119]

El segundo cantón, Lagos

El periódico *El Nene*, en su edición del 3 de marzo de 1851, denunció que el jefe político del 2° cantón con cabecera en Lagos, mandó clausurar al periódico denominado *La Razón*, de aquella ciudad utilizando "chicanas" del gobierno y de dicha jefatura, la información a la redacción *de El Nene* llegó a través de una carta enviada desde Lagos.[120] Dos semanas después, el 17 de marzo de ese año, según informes recibidos por la redacción del mismo periódico, el jefe político del 2° cantón, Refugio González, no era "muy bien visto en aquella ciudad". Agregó el diario que los modales y comportamientos de dicho funcionario no eran "muy finos", y que tenía conflictos con los principales vecinos de Lagos, a quienes no dejaba de molestar y mortificar "con fútiles pretextos". Afirmaba el editor que ellos quisieran que los gobernantes nunca colocaran en esos puestos a personas que eran capaces de servir a las altas autoridades pero no al público.[121]

Por otra parte, el ayuntamiento de Lagos estaba inconforme con Refugio González como jefe político, y quería que se separara del puesto,

[119] *El Continental*, 11 de junio de 1893.

[120] *El Nene*, 3 de marzo de 1851.

[121] *El Nene*, 17 de marzo de 1851.

por lo que solicitó a la junta cantonal que se formara una terna de "personas dignas" y las remita al gobernador del estado, a lo que dicha junta accedió, incluso en presencia del mismo jefe político, quien trató de impedir dicho trámite. Dijo el editor que el jefe político ni siquiera intentó retirarse del lugar donde se realizaba la reunión, creyendo que con ello intimidaría a los miembros del ayuntamiento que se portaron con dignidad y energía. La terna propuesta estuvo integrada por Cayetano Pérez Castro, Feliciano González y Juan C. Hermosillo, y fue presentada a la secretaría de gobierno, evitando el conducto del jefe político, porque éste "tuvo la ligereza de protestar que no le daría curso". Terminó diciendo el editor que deseaban más acierto en dichos nombramientos y aconsejaban al gobernador Joaquín Angulo, que de la terna propuesta por la junta cantonal de Lagos, escogiera al que más le agrade para reemplazar a Refugio González, quien "no nació para ser jefe político", de no hacerlo así, agregaba el editorialista, se enajenaría la voluntad de los lagueños y muchos hombres que no pertenecían a ningún partido, se afiliarían a los partidos de oposición, porque no verían en el gobernador del estado "a un padre de los pueblos".[122] Como se puede observar, la opinión pública, sobre las autoridades políticas podría variar de un periódico a otro.

Cuarenta y tres años después, *El Continental* publicó una nota el 22 de abril de 1894, donde informó que el teniente coronel Ignacio L. Montenegro fue nombrado como nuevo jefe político de Lagos de Moreno. Montenegro había ocupado el mismo cargo anteriormente, pero en Ciudad Guzmán, y de aquel cantón lo cambió el gobernador del estado a Lagos. Montenegro fue bien recibido por la prensa de Lagos, ya que quien dio la nota original fue el periódico *La Verdad*, de la ciudad de Lagos, y reproducida por *El Continental*. Los buenos comentarios que hizo *El Continental* de Montenegro, contrastan con su retórica contraria en la mayoría de los casos a las autoridades políticas intermedias:

[122] *El Nene*, 17 de marzo de 1851.

> Estamos, pues, de plácemes, y nosotros que al tomar la pluma no éramos guiados ni por odios personales ni por sistema de oposición ciega, no podemos menos que felicitarnos por la marcha que toman los asuntos públicos, felicitar a todo el cantón y dar un voto de gracia al Señor Gobernador que ostenta de un modo honroso su acendrado civismo, pues prescindiendo de consideraciones personales que muy cerca lo ligan con el predecesor del Señor Montenegro, atiende a la voz de la sociedad y de la prensa; obra conforme a justicia y se hace acreedor a nuestro reconocimiento […] Mandamos pues al Señor Jefe Político respetuoso saludo y le deseamos en esta una larga y tranquila administración para que tenga siempre buenas memorias de Lagos.[123]

Una década tuvo que pasar para que saliera otra nota sobre la jefatura política en Lagos, ya que varias obras fueron atribuidas al jefe político del cantón. En la nota de *La Gaceta de Guadalajara* del 24 de julio de 1904, se informó que se inauguraría un mercado en Lagos por parte del jefe político del cantón, Margarito González Rubio, el cual salió para Guadalajara para invitar al gobernador del estado a la inauguración. Pocos meses después, el mismo periódico informó que estaban por comenzar los trabajos en la falda de la Sierra de Comanjá, en el punto denominado Puerto de Cuarenta, para construir una presa, que sería la primera de la república por la enorme cantidad de agua que podría almacenar en su vaso, natural en su mayor parte. Margarito González Rubio, fue el autor de esta idea, que tuvo desde luego una general y entusiasta acogida, y elogios de la prensa de Guadalajara. Con el fin de realizar tal obra se organizó una sociedad que presidió el mismo González Rubio, y como secretario se encontraba el licenciado José Ma. Sanromán. Con esta obra se beneficiarían las fincas que se situaban al sur, norte y oriente de la misma presa, porque tendrían una irrigación abundante y completa, y otras ventajas como la introducción de agua potable para Lagos, además un aumento de telares en la fábrica de hilados "La Victoria" y la instalación eléctrica para alum-

[123] *El Continental*, 22 de abril de 1894.

brado. El corresponsal del periódico hacía votos para que se realizara esta obra tan importante para la vida económica de Lagos.[124]

Margarito González Rubio también se propuso formar una biblioteca pública en Lagos, y para esto invitó a las personas a donar obras para tal objetivo. El redactor de *Jalisco Libre* aseguró que eran "muy loables" los esfuerzos del jefe político, y aseguró que con gusto contribuiría para que cuanto antes fuera "un hecho esa grandiosa mejoría".[125] Meses más tarde, el 15 de septiembre de 1905, se inauguró el alumbrado público eléctrico en Lagos de Moreno, esta mejora se debió en gran parte también a los esfuerzos del jefe político del cantón.[126] *La Revista de Guadalajara* publicó, el 15 de septiembre de 1907, un artículo sobre la inauguración de las mejoras que se habían hecho por parte del jefe político, Margarito González Rubio, entre las que se contaba el mercado "Miguel Ahumada", con un costo de 22 mil pesos. Otras obras inauguradas fueron la calzada o paseo llamado Pedro Moreno, el jardín Juárez y la instalación de luz eléctrica en 1905. También destacó la conclusión del teatro Rosas Moreno, el cual inició su construcción en 1867 y que González Rubio concluyó el mes de julio de 1906. El Hospital "Rafael Larios" también tuvo muchas mejoras que se concluyeron bajo el gobierno del jefe político, González Rubio.[127]

No obstante sus numerosas obras públicas, la sociedad de Lagos reprobaba ciertas acciones del jefe político, una de ellas fue la siguiente: el cura Gregorio Retaloza, párroco de Lagos, fue apresado por el jefe político, Margarito González Rubio, debido a que Retaloza realizó una procesión pública, violando con ello las leyes de Reforma. Dijo el periódico *Jalisco Libre*, en su nota del 20 de febrero de 1905, que el jefe político era un "hombre progresista" que se había ganado las simpatías de todo el vecindario de Lagos, pero que al estar preso el cura Retaloza en la jefatura de policía, éste fue sacado de la cárcel por "un grupo de fanáticos" que de

[124] *La Gaceta de Guadalajara*, 6 de noviembre de 1904.

[125] *Jalisco Libre*, 21 de julio de 1905.

[126] *La Gaceta de Guadalajara*, 17 de septiembre de 1905.

[127] *La Revista de Guadalajara*, 15 de septiembre de 1907.

manera violenta entró a la jefatura rompiendo vidrios y haciendo pedazos los muebles de la oficina. Derivado de dichos acontecimientos resultó un muerto y varios heridos. *Jalisco Libre* lamentó que en una población "tan culta como Lagos" se registraran "actos del más repugnante salvajismo", que ponían en duda el orden, la armonía y la civilidad que reinaba entre gobernante y gobernados. Agregó *Jalisco Libre* que hubo una "torpe provocación, la que será preciso castigar enérgicamente y con todo rigor de la ley", para que sirva de "escarmiento". Por lo que esperaba que el gobernador del estado, "con la prudencia y el tino" que le caracterizaban, haya dictado todas las medidas conducentes para que se castigue a los culpables, y que se restablezca el orden. Concluyó el redactor diciendo lo siguiente:

> Cuando toda la República se desliza majestuosa por el carril de la civilización, bajo el influjo de la paz, sería desastroso que Jalisco fuera el único Estado de la Confederación Mexicana, donde ni el tiempo ni las corrientes benéficas del progreso, hubieran podido destruir el germen de las sangrientas represalias de otros días.[128]

Al día siguiente el mismo diario dio más detalles de lo ocurrido, la procesión fue un sábado por la mañana, el recorrido se hizo del templo de la Luz a la Parroquia, llevaban una imagen de la Virgen, y rezaron en voz alta, atravesaron la ciudad de un templo a otro, y luego regresaron al lugar de donde habían salido. El jefe político apresó al cura Retaloza como responsable de la infracción a las leyes de Reforma. El periódico llamó al pueblo que liberó al cura como "ignorante" y "fanático", que lanzó piedras e insultos al jefe político, luego se echó sobre la policía, desarmó al que estaba de guardia e hirió a algunos de los gendarmes, estos haciendo uso de sus armas, rechazaron la agresión resultando, como se dijo anteriormente, un muerto y varios heridos. El cura Retaloza fue sacado y llevado en triunfo por las calles, gritando ¡vivas! a la religión y ¡mueras! a las autoridades. Aseguraba *Jalisco Libre* que la sociedad sensata de Lagos

[128] *Jalisco Libre*, 20 de febrero de 1905.

estaba indignada y que varios hombres se pusieron a las órdenes del jefe político.[129]

Desde el tercer cantón, La Barca

El 18 de junio de 1893, se publicó una nota en *El Continental* acusando al jefe político de La Barca de permitir todas las barbaridades que cometía el comandante de policía con sus constantes distracciones en lugares "non sanctos", y al mismo jefe político trayendo y llevando de su casa a la cárcel y viceversa, a algún individuo contra quien había enemistades personales.[130] En contraste, en abril de 1894, el mismo periódico publicó una nota donde felicitaba al jefe político de La Barca por haber construido el kiosco de la plaza principal, ya que el anterior estaba muy destruido.[131]

Por otra parte, los vecinos de Ocotlán desmintieron los dichos de una publicación titulada *La Libertad*, periódico de dicha población, que denunciaba hechos cometidos por el director político del lugar. Los vecinos que desmintieron esta nota, aseguraban que lo que dijo tal periódico no era verdad, porque la autoridad política de Ocotlán era "bastante honrada y cumplida" en sus deberes e incapaz de los hechos que le imputaban. Dijeron los abajo firmantes que esta aclaración la hacían, "no por simpatía con la autoridad", sino porque se veían obligados a desmentir tal hecho que era del todo falso y por creerlo así de justicia.[132]

Algo que contribuía a que los habitantes del cantón de La Barca tuvieran buena opinión de sus autoridades políticas eran las obras públicas que hacían en su beneficio. Por ejemplo, *La Gaceta de Guadalajara* del 12 de octubre de 1904, informó que habían dado principios los trabajos para la construcción de una escuela de niñas, esta obra era en gran parte con la

[129] *Jalisco Libre*, 21 de febrero de 1905.

[130] *El Continental*, 18 de junio de 1893.

[131] *El Continental*, 8 de abril de 1894.

[132] *La Gaceta de Guadalajara*, 24 de julio de 1904.

ayuda del gobernador del estado y el filántropo Amado M. Rivas, y bajo la inspección inmediata del jefe político, Luis Navarrete.[133]

Este jefe político del cantón de La Barca, el 12 de enero de 1908, rindió un detallado informe al Consejo Superior de Salubridad acerca del desarrollo alcanzado durante el año de 1907 por la viruela en dicho cantón. Según este informe, las congregaciones de Portezuelo y San José Casas Caídas fueron los lugares donde se propagó más la infección y donde la mortalidad causada por ésta alcanzó cifras más elevadas. Durante el año fueron vacunados en el cantón 6,000 niños, de los cuales 4,209 tuvieron buen éxito, y los demás sin éxito observado.[134] Por su parte, el director político de Atotonilco el Alto, Esteban Soto Ruíz, hizo una nueva remisión de tubos de linfa vacuna humanizada, el 19 de enero de 1908, recogida en la Sección Médica de aquella directoría. Soto Ruiz se distinguió entre todas las autoridades del estado por el empeño con que atendió el servicio de vacunación en el departamento de su mando y por sus frecuentes remisiones de linfa vacuna al Consejo de Salubridad.[135] En el cuidado y ataque a las enfermedades las autoridades políticas del cantón de La Barca no escatimaron esfuerzos. El jefe político del cantón informó al Consejo de Salubridad que en últimas fechas (1° de marzo de 1908) se había desarrollado en la hacienda de San José de las Moras de aquel cantón, entre el ganado de la hacienda, la epizootia, conocida como fiebre carbonosa, ordenando aquella jefatura, para prevenir la propagación de la enfermedad a los ganados de otras haciendas contiguas, que las reses que fallecieran atacadas por esa infección, fueran enterradas inmediatamente o se incineren hasta destruir completamente los cadáveres.[136]

[133] *La Gaceta de Guadalajara*, 12 de octubre de 1904.

[134] *La Gaceta de Guadalajara*, 12 de enero de 1908.

[135] *La Gaceta de Guadalajara*, 19 de enero de 1908.

[136] *La Gaceta de Guadalajara*, 1 de marzo de 1908.

El cuarto cantón, Sayula

El cantón de Sayula no fue uno de los más favorecidos por la prensa, una queja en contra de las autoridades políticas y sus subordinados provino del corresponsal de *El Continental* en la ciudad de Sayula, publicada del 4 de diciembre de 1892. Dicho corresponsal informó que en esta población había un total desorden por causa de que las autoridades superiores no cumplían con su deber, por el contrario, el jefe político cometía toda clase de arbitrariedades, junto con el secretario del juzgado segundo de letras, el secretario de la jefatura y algunos otros empleados de la jefatura, quienes sin ningún miramiento a aquella sociedad, vivían en las cantinas y casas de juego desatendiendo sus ocupaciones, originando con ello retardo en los negocios que tenían que atender.[137] Las acusaciones y quejas de este tipo eran continuas en los periódicos opositores, no así en los oficialistas. Sin embargo, una nota publicada en *El Continental*, en diciembre de 1895, demuestra cómo dicho periódico no tenía buena opinión de los jefes políticos del estado de Jalisco. En este caso, *El Continental* difundió una nota diciendo que el jefe político del cuarto cantón con cabecera en Sayula se extralimitaba en sus deberes, "haciendo de aquel lugar una especie de convento", prohibiendo a los habitantes realizar fiestas o bailes al interior de sus casas, incluso los subordinados del jefe político, se permitían lanzar insultos a las personas que defendían sus derechos. Los vecinos del cuarto cantón esperaban que el gobernador del estado llamara la atención al jefe político de Sayula al respecto.[138]

Otra nota sobre este cantón, publicada en *Jalisco Libre* el 23 de septiembre de 1906, informó que la epidemia de viruela azotó con furia a los habitantes de la Ferrería de Tula, Juanacatlán y Tepic, y que el gobierno del estado tuvo que enviar al doctor Eudoxio González Aguirre para combatir dicha enfermedad, logrando ser controlada, pero más tarde hubo un rebrote de la viruela en Sayula, el jefe político del cuarto cantón, mando reanudar la vigilancia sanitaria. Cuando el gobernador del estado

[137] *El Continental*, 4 de diciembre de 1892.

[138] *El Continental*, 1 de diciembre de 1895.

se disponía ordenar una nueva visita de inspección, el jefe político manifestó que el estado sanitario del cantón de Sayula era satisfactorio, de tal manera que se dio por terminada la epidemia.[139] Dos años después, el 19 de enero de 1908, el presidente municipal de Amacueca informó al gobierno del estado y al Consejo Superior de Salubridad sobre el desarrollo alcanzado en los últimos tres meses de la viruela en dicha municipalidad. El munícipe pidió ayuda al gobierno y al Consejo para combatir esa enfermedad y detener su desarrollo. El Consejo de Salubridad acordó enviar la vacuna en cantidad suficiente al jefe político del cuarto cantón, para que esta autoridad cuidara que se administrara bien la vacuna en la municipalidad infectada con la diligencia y profusión que demandaba el caso, y se acordó ordenar al mismo jefe político que rindiera un informe exacto y detallado acerca del número de casos y demás particularidades tocantes a la epidemia de viruela.[140] Ese mismo día el jefe político de Sayula comunicó al Consejo de Salubridad, que en el municipio de Atoyac se había propagado la viruela, a tal grado de que ya era considerada una epidemia en aquella población, habiendo causado, solo en el mes de diciembre, treinta y dos defunciones en el municipio. Como las medidas dictadas hasta el momento por las autoridades municipales y las del cantón para contener el avance de esa epidemia habían sido ineficaces, el mencionado jefe político pidió al gobierno, por conducto del Consejo de Salubridad, que fuera enviado a Atoyac un médico, comisionado para administrar la vacuna y tomar medidas conducentes para evitar que la viruela siguiera propagándose.[141] Estas actividades sanitarias enfocadas a atender y proteger a la población de las enfermedades por parte de las autoridades políticas de los cantones, no eran motivo de comentarios por parte de los periódicos, ya que la mayoría de estos solo tomaba a dichas autoridades como blanco de sus críticas. Al contrario, lo que pasaba, era

[139] *Jalisco Libre*, 23 de septiembre de 1906.

[140] *La Gaceta de Guadalajara*, 19 de enero de 1908.

[141] *La Gaceta de Guadalajara*, 19 de enero de 1908.

que publicaran una breve nota sin comentarios y unos cuantos renglones informativos.

El quinto cantón, Ameca

El 20 de octubre de 1892, los vecinos de Ameca, a través de L. Uribe y Zepeda, manifestaron en un documento, una problemática que les afectaba. Dijeron los vecinos de esta población que tenían problemas con las autoridades políticas de su cantón, debido a que ellos creían que había una predisposición en su contra por parte del gobernador del estado, el general Pedro A. Galván, sin que ellos supieran el motivo.[142] Dichos vecinos aseguraban que esa era la causa de que el gobernador haya removido la cabecera del cantón, de estar en Ameca la trasladó a Cocula.[143] Agregaron los mismos vecinos que antes de dicho cambio tuvieron como jefe político al mayor Juan J. Navarro, quien al principio no podía avenirse con el vecindario y había muchos descontentos, pero que poco después se zanjaron las dificultades y todos quedaron conformes y de acuerdo con el mayor Navarro. Al cambiar la cabecera de lugar, renunció el mayor Navarro a la jefatura y se nombró a Ignacio G. Ruvalcaba pero ahora como director político de Ameca. En pocos días Ruvalcaba se ganó las simpatías de toda la población, ya que tenía el tacto necesario para tener todo en orden, logrando la unión de los vecinos, de manera que todos estaban contentos con el director político.[144]

Aseguraron los vecinos, que al saber el gobierno de dicha conformidad, inmediatamente se removió a Ruvalcaba, mandando en su lugar al capitán Rodrigo de la Mora, quien también fue apreciado por la pobla-

[142] *El Continental*, 30 de octubre de 1892.

[143] El cantón número v cuyas cabeceras fueron en distintos momentos Etzatlán, Ahualulco, Ameca y Cocula fue el cantón que tuvo más cambios durante el siglo xix debido a una disputa muy cerrada por obtener la cabecera, debido tal vez a que en esta región tuvieron que coexistir en un ámbito relativamente pequeño varias poblaciones grandes y de una importancia similar. Murià. (1976), p. 113.

[144] *El Continental*, 30 de octubre de 1892.

ción, por tal motivo también fue removido, nombrando en su sustitución a Teodoro Gutiérrez. Los vecinos sostenían que desde que tomó el cargo Gutiérrez todo cambió, debido a su poco tacto y a su falta de atención y respeto a la sociedad. Cuentan los vecinos que a los pocos días de que Gutiérrez llegó a Ameca, tuvo lugar un día de campo, al que asistió Gutiérrez, ahí este director político faltó al respeto a los asistentes, se peleó con el juez de letras provocando la suspensión de la reunión, y que de ahí se formó una pésima opinión del director político entre la población. Después de este acontecimiento Gutiérrez siguió disgustándose con otras personas, imponiéndoles multas exageradas, y que por su culpa había vuelto la desunión entre los vecinos de Ameca. Además, se quejaron de lo mal preparada que estaba la policía, de la falta de instrucción, de la ausencia de conmemoración de las fiestas nacionales y de la falta de garantías a la población, se hizo referencia a varios asaltos a vecinos. Concluyeron los vecinos diciendo que no eran políticos ni comerciantes, y que no firmaron por temor a una venganza.[145] Como se puede observar en la nota, algunas autoridades políticas eran bien apreciadas por la población, pero en ciertos casos éstas eran rechazadas por los abusos que cometían constantemente a los vecinos del lugar. Además se observa que las autoridades cambiaban constantemente y no tenían arraigo entre la población, en su mayoría eran ajenos a ella.

Otro acontecimiento además de escandaloso y al mismo tiempo ridículo fue el que publicó *El Continental* en sus columnas en relación a que la bandera mexicana fue acribillada el 16 de septiembre de 1896 por los tiros certeros y mal intencionados del administrador de rentas de Cocula, Manuel Camargo, en la ceremonia del Grito de Independencia. *El Continental* difundió la versión de los miembros del ayuntamiento de Cocula que acusaron al administrador de rentas y al jefe político, Alberto Toscano, de haber hecho disparos directos al lábaro patrio, mientras que *El Mercurio*, publicó la versión oficial desmintiendo tal acusación. En-

[145] *El Continental*, 30 de octubre de 1892.

tre ambos periódicos se dio un debate acusándose mutuamente de decir mentiras o tergiversar la verdad.[146]

La versión oficialista de *El Mercurio* fue la siguiente: Manuel Camargo, fue nombrado para apadrinar la "bendición" de una nueva bandera en el edificio de la escuela pública, a la cual asistió en compañía del jefe político y de "otras personas honorables, habiendo tomado antes alguna copas, sin llegar al extremo de la embriaguez". Entusiasmado Camargo y deseando celebrar la gloriosa fecha y el acto que apadrinaba, ordenó traer algunos cohetes, pero no los hubo en ninguna tienda cercana, por lo que decidió hacer disparos al aire, descargando todos los tiros de la pistola, en dirección a la misma bandera, pero sin intención de que las balas fueran a dañar la tela de la misma. Algunos munícipes que estaban molestos con Camargo por el cobro de algunos impuestos como particulares, tomaron este acto como una ofensa grave a la Nación y a las autoridades, y acordaron en sesión extraordinaria del ayuntamiento, dar a conocer los hechos al visitador de Hacienda, como superior del mencionado Camargo. Por su parte, el jefe político informó que la bandera no presentaba huellas de balazos, para que se desestimara el caso, porque eran infundadas las acusaciones que le hacían los individuos del ayuntamiento, las cuales estaban basadas en las antipatías personales y de carácter privado entre los munícipes y el administrador de rentas. Por lo demás, analizando racionalmente, *El Mercurio* argumentó que Camargo sería un loco desquiciado, si éste hubiera hecho los disparos a la bandera con todas las intenciones de mancillarla, una bandera que "acababa de apadrinar gustoso", pero además, aseguraba *El Mercurio*, que quienes conocían al administrador de Rentas, sabían que era incapaz de cometer un acto tan salvaje como el que se le atribuía. *El Continental*, por su parte, trató de desmentir la versión de *El Mercurio*, acusándolo de adulador oficialista. *El Continental* dijo que no hubo huellas de disparos en la bandera, porque la cambiaron por otra nueva. Para probar sus dichos *El Continental* publicó la carta del ayuntamiento de Cocula, donde se sostenía que el administrador de Rentas

[146] *El Continental*, 25 de octubre de 1896.

disparó "intencionalmente" sobre la bandera nacional, con la pistola que el jefe político le había prestado, disparos que hicieron algunas "roturas al mencionado pabellón". El presidente municipal respaldaba la versión de los munícipes en contra del administrador de rentas.[147] Pero no había nada claro, porque ambas versiones eran totalmente opuestas. Lo que sí refleja es el conflicto que había entre el ayuntamiento y el administrador de Rentas, y colateralmente con el jefe político.

Sexto cantón, Autlán

Poco se dijo de las autoridades políticos del cantón de Autlán a través de la prensa, una de ellas fue la del 19 de marzo de 1907, donde los vecinos de la ciudad de Autlán celebraron el nombramiento del nuevo jefe político del 6° cantón, José María Topete, por parte del gobernador del estado.[148] Otra fue la relacionada con la Junta de mejoras de Ayutla, cantón de Autlán en la que *La Gaceta de Guadalajara* en su edición del 30 de abril de 1911 reprodujo una nota de "*La Gaceta*" del 22 de abril anterior, donde se dijo que en el pueblo de Ayutla, en los salones del ayuntamiento, se congregaron los vecinos de más representación, convocados por el director político, Eusebio Sánchez Saucedo. El objetivo de la junta fue invitar al vecindario de esta localidad a formar una Junta de mejoras materiales, que se encargaría de instalar una vía telefónica que pusiera en comunicación a Ayutla con la cabecera del departamento Tenamaxtlán y con el resto de la república, ya que en Tenamaxtlán había una oficina telegráfica federal. Dicha Junta seguiría luego realizando obras públicas de importancia, como la introducción del agua potable, la pavimentación de las calles, un pequeño mercado y, en fin, todas las mejoras que se pudieran llevar a cabo para el adelanto y embellecimiento de Ayutla, que poco a poco seguía desarrollándose por la riqueza de sus minerales y la abundancia de su agricultura. Los asistentes aceptaron la iniciativa, quedando formada la Junta, el comerciante Eulogio R. Pimienta ofreció

147 *El Continental*, 25 de octubre de 1896.

148 *La Gaceta de Guadalajara*, 24 de marzo de 1907.

donar todo el alambre que se necesitara para la vía, así como los aisladores, espigas y cien postes, para llevar a cabo la importante obra. Además, los recursos saldrían de donativos particulares y fiestas que se organizaran para obtener más fondos para completar los gastos que se erogaran en estos trabajos. El gobernador del estado, Manuel Cuesta Gallardo obsequió al vecindario de Ayutla, dos aparatos telefónicos y estaba dispuesto para seguirlos ayudando en todo lo necesario. El director político Sánchez Saucedo había terminado con los conflictos de límites entre los municipios de Ayutla y Cuautla, por lo que se había ganado el aprecio de todos los vecinos de Ayutla. Concluyó diciendo el corresponsal que tanto el jefe político del cantón de Autlán, como el director político del departamento gozaban de mucho apoyo y consideración por parte de los habitantes.[149]

Noveno Cantón, Ciudad Guzmán

El Continental, en su edición del 8 de abril de 1894, después de hacer una severa crítica en general a los jefes políticos, donde dijo que no se preocupaban de hacer mejoras materiales en las poblaciones bajo su mando, esta vez tuvo la fortuna de conocer un hecho aislado, por lo que hizo un reconocimiento público al teniente coronel Ignacio Montenegro, jefe político de Ciudad Guzmán, a quien felicitó por las obras que estaba realizando en dicho cantón, entre ellas un nuevo panteón, debido a que el viejo ya estaba saturado y era un foco de infección alarmante para la población. También lo felicitaba por establecer un monte de piedad en la misma ciudad. Y, finalmente, por tener el proyecto de establecer la red telefónica de Ciudad Guzmán a Pihuamo, en la que contribuirían los particulares con los postes, dicha obra sería de mucha importancia para el comercio de la región, terminó diciendo el editor del periódico.[150] Este mismo periódico, el 14 de octubre de ese año, publicó una nota donde retomó la solicitud de varios padres de familia de Ciudad Guzmán dirigida al gobernador del estado y al jefe político del cantón de Zapotlán para que no se per-

[149] *La Gaceta de Guadalajara*, 30 de abril de 1911.

[150] *El Continental*, 8 de abril de 1894.

mitieran los juegos de azar durante las fiestas que se verificarían en dicha ciudad. A tono con la posición moralista y autoritaria del redactor del periódico, no le fue difícil secundar tal súplica y dar voz a los ciudadanos de Ciudad Guzmán, recordando que el año anterior, el jefe político de entonces, Ignacio Montenegro, "cerró con mano firme la puerta de los abusos a los tahúres que allá quisieron hacer su agosto".[151]

Por otra parte, Rosendo Híjar y Haro, jefe político del cantón de Ciudad Guzmán, fue a San Gabriel por órdenes del gobernador del estado con el objeto de arreglar algunas dificultades surgidas entre varios vecinos por cuestiones de aguas, lo cual se arregló de manera amistosa, según la nota publicada por *La Gaceta de Guadalajara* el 15 de mayo de 1904. Los vecinos de San Gabriel solicitaron al jefe político que se estableciera en este pueblo un Juzgado de Letras, lo que el jefe político ofreció gestionar, pues se supone que el juzgado de Tamazula se iba a cambiar a San Gabriel en julio de ese año.[152] En otra nota, *La Gaceta de Guadalajara* informó el 15 de mayo de 1909, que a las afueras de Ciudad Guzmán hubo un incendio en el aserradero perteneciente a Bernardino Villaseñor, empresa de gran importancia. Dicho aserradero estaba cerca de la estación del Ferrocarril Central en esa ciudad. Se ignoraron las causas del incendio, pero las llamas acabaron con todo el aserradero, las pérdidas se calcularon en unos 60,000 pesos. El periódico destacó el valiente comportamiento de las autoridades de Zapotlán, encabezadas por el jefe político, quien se distinguió por sus acertadas disposiciones. También dijo *La Gaceta de Guadalajara* que el aserradero no estaba asegurado, y según parece, una semana antes se le había propuesto al propietario asegurarlo pero rechazó la propuesta.[153]

[151] *El Continental*, 14 de octubre de 1894.

[152] *La Gaceta de Guadalajara*, 15 de mayo de 1904.

[153] *La Gaceta de Guadalajara*, 15 de mayo de 1909.

Doceavo cantón Ahualulco/Tequila/Etzatlán

El doceavo cantón unos años tenía la cabecera en Ahualulco, otros en Tequila, y otros en Etzatlán. *El Litigante* publicó una nota conmemorativa porque el 24 de enero de 1873 se festejaba el día en que el jefe político de Tequila, Sixto Gorjón, defendió a dicha ciudad del ataque de los lozadistas, contando con escasos elementos para la defensa. Ese día el jefe lozadeño Arias atacó la población con 600 hombres, mientras Gorjón solo contaba con 50 infantes y 10 jinetes. Con esta pequeña fuerza Gorjón cubrió las principales alturas, mientras que las demás estuvieron guardadas por los mismos vecinos, que en masa se presentaron a defender sus hogares y sus familias. La narración de la batalla fue muy descriptiva y detallada, por lo que no abundaré en ello, solo diré que en la nota conmemorativa se aprecia el bando con el cual simpatizaban los editores del diario, o sea las autoridades liberales y la población mestiza vecinos-ciudadanos de Tequila, mientras que a la población indígena perteneciente al cantón de Tepic e integrantes de las fuerzas lozadeñas las catalogaron como "indios" que lanzaban "salvajes alaridos" y a los que consideraban "asaltantes", "bandidos" y "enemigos", mientras que a Manuel Lozada lo calificaban como un líder, bandido con "instintos sanguinarios", quien finalmente tomó la villa de Tequila y la saqueó de manera general y escandalosa, pero tuvo el gran detalle de perdonar la vida a los valientes defensores de la plaza dándoles la libertad. Dicha batalla fue muy importante porque detuvo el avance de Lozada y su ejército por dos días en su marcha a Guadalajara, lo que dio oportunidad y tiempo para que el general Ramón Corona organizara sus fuerzas para librar la batalla de la Mojonera, donde finalmente fue derrotado Lozada.[154]

Siguiendo con las notas laudatorias se puede leer una en *El Litigante* del 31 de julio de 1885 donde se dice que se visitó la villa de Tequila los días 21 y 22 de julio anteriores, y se pudieron notar algunas mejoras materiales dignas de llamar la atención, consistentes en el blanqueo de todas las casas del centro y calles principales, la existencia de banquetas, acue-

[154] *El Litigante*, 23 de enero de 1882.

ductos limpios, fuentes rebosantes y un jardín bien cuidado. Todas estas mejoras fueron atribuibles al jefe político del cantón de Tequila, quien, además, había hecho todo lo posible por concluir una escuela para niñas, que pronto se estrenaría, sin omitir gastos ni sacrificios. Sin embargo dice la nota que el ayuntamiento de Tequila no haría nada para apoyar al jefe político, y que si éste faltara o fura separado de su cargo, la escuela nunca se terminaría, por ello hacían votos para que dicho funcionario continuara indefinidamente en su puesto. Agregaban que no había gente en las calles durante el día, solo se veían mujeres y niños que iban a la escuela o venían de ella, pero que no había flojos parados en las esquinas. En cambio, las tabernas (fábricas de tequila) eran verdaderas colmenas, donde todo el mundo trabajaba con mayor asiduidad en la elaboración del vino. Concluye diciendo que Tequila era una población enteramente industrial.[155]

El periódico *El 2 de Abril* publicó una nota el 17 de diciembre de 1899, en la que el jefe político de Ahualulco aseguró que tahúres habían pagado al ayuntamiento de Ahualulco quinientos pesos para que disimularan y los dejaran jugar, esto llegó a conocimiento del gobernador, el que para hacer cumplir las leyes que prohíben los juegos de azar envió a dicha ciudad a Vidal Gómez, en sustitución de Margarito González Rubio, como jefe político, quien inmediatamente suspendió el juego, y obligó a los regidores de Ahualulco a devolver a los tahúres los quinientos pesos. Entonces munícipes y jugadores lanzaron el grito al cielo, se valieron de todas las influencias de que disponían, y pusieron en juego todos sus recursos que estaban a su alcance para continuar con sus partidas de juego, pero el nuevo jefe político se mantuvo firme. El ayuntamiento que ya había dispuesto de una parte del dinero, se vio en grandes problemas para devolver los quinientos pesos, pero al fin los ediles cubrieron de su bolsillo el déficit y se hizo la devolución del dinero. La actitud enérgica del jefe político, Vidal Gómez, le ganó enemistades principalmente en el ayuntamiento, el cual había realizado actos de hostilidad en contra del jefe

[155] *El Litigante*, 31 de julio de 1885.

político. Concluye el periódico que Vidal Gómez debía estar tranquilo y satisfecho por haber cumplido con su deber, y porque "se había ganado el aprecio de la buena y sensata sociedad de Ahualulco".[156] El ayuntamiento de Ahualulco envió una nota aclaratoria al periódico el 31 de diciembre siguiente, en la que dijo que el jefe político anterior, había dado permiso para que se establecieran juegos de azar, durante una corta temporada, con el fin de hacer mejoras de vital importancia para la población que estaban pendientes, como el alumbrado público y la construcción de locales para escuelas, pero el gobierno en esos días removió al jefe político, y ni él ni el ayuntamiento recibieron cantidad alguna en compensación del juego que no llegó a realizarse, por lo que no hubo que reintegrar ningún déficit, ni devolver dinero alguno para nadie.[157]

Consideraciones finales del capítulo

Desde inicios del siglo XIX en México, y en particular en el estado de Jalisco, proliferaron y circularon todo tipo de textos escritos desde libelos, pasquines, periódicos y libros creando con ello los conceptos de espacio público y opinión pública, conceptos que tuvieron distintos significados que variaron desde el sentido más tradicional como voz del pueblo hasta la expresión más teórica como expresión libre y razonada de los ciudadanos debatiendo entre ellos en igualdad de condiciones y en búsqueda de la verdad. Sin embargo, lo más común era que los periódicos fueran el medio de expresión de ciertos actores o grupos políticos y sociales que era utilizado para enviar diversos mensajes o discursos de tipo político e ideológico, a veces simplemente informativo a un público general, o de manera particular a determinadas autoridades públicas. En el tema que se abordó en este capítulo se trató de determinados periódicos, en donde los propietarios, editores o redactores hacían referencia a las acciones de las autoridades políticas intermedias: jefes de cantón, directores de departamento o comisarios municipales. Como se observó, los comentarios favorables o

[156] *El 2 de Abril*, 17 de diciembre de 1899.

[157] *El 2 de Abril*, 31 de diciembre de 1899.

desfavorables tuvieron cierto equilibrio, los comentarios favorables provenía de los periódicos oficialistas que resaltaban las buenas acciones de dichas autoridades, mientras los periódicos que se asumían como "independientes", "demócratas", "oposicionistas" y "libres", solo criticaban las pésimas actuaciones de los jefes políticos, los directores de departamento y los gendarmes municipales, resaltando su ignorancia, ineptitud, autoritarismos, corrupción, y la violencia con que trataban de resolver los problemas que enfrentaban en su demarcación político administrativa. De la revisión de más de cien notas periodísticas a favor o en contra, no se puede establecer una sola representación o imagen de dichas autoridades políticas intermedias, sino una pluralidad de imágenes sesgadas por la posición política e ideológica del editor o redactor del periódico.

CAPÍTULO VII.
Los jefes políticos en su laberinto, acciones y prácticas administrativas y de gobierno

Los jefes políticos eran los responsables de conservar la paz y de atender los problemas político-administrativos a nivel local y regional, en esencia eran agentes del gobernador del estado en turno, y eran los intermediarios entre éste y los directores de departamento, los ayuntamientos, los comisarios de policía, los ciudadanos y los habitantes de las poblaciones que había en cada cantón. El gobernador, en los regímenes federales como los que tuvo México en el siglo XIX, era la máxima autoridad en el estado, no así en el régimen centralista de 1835-1846, ni en el segundo imperio, donde la máxima autoridad de los departamentos (antes estados) eran nombrados por el presidente de la república o por el emperador. Formalmente las constituciones federales establecían que los gobiernos de los estados eran autónomos e independientes en todo lo relacionado a su gobierno interior, y esto tenía que ver con los cantones, departamentos y municipios, donde las autoridades políticas respectivas ejercían sus funciones político-administrativas bajo la autoridad del gobernador del estado, sostener que había un centralismo extremo desde la presidencia de la república que mandaba o daba órdenes al gobernador, para que luego éste hiciera lo mismo con los jefes políticos, directores de departamento y ayuntamientos, es simplificar erróneamente el funcionamiento del Estado mexicano decimonónico, pues como se demostrará en este capítulo, el gobierno de las provincias se construía desde los pueblos, municipios, departamentos, cantones y el estado, a través de las autoridades políticas en

dos sentidos: desde al gobernador del estado hacia los ciudadanos a través de las autoridades políticas intermedias, y éstos a su vez gobernaban sus cantones y departamentos con cierta discrecionalidad para resolver los problemas que se presentaban en sus demarcaciones respectivas, siempre informando a las autoridades superiores, obedeciendo y acatando lo que éstas mandaran o dijeran. No era como ciertos historiadores sostienen: "una maquinaria centralista bien aceitada" por la que transitaban las órdenes en una sola dirección donde el centro, o el presidente de la república, mandaba, y todas las demás autoridades obedecían, desde el mismo gobernador del estado hasta el simple comisario de policía de los pueblos, pasando por ayuntamientos, directores de departamento y jefes políticos.

Por el contrario, los jefes políticos y sus subordinados en la práctica representaban, por lo general, los intereses de su cantón, departamento, municipio o localidad. Sin embargo, como en todo, esta relación difería de un caso a otro, de un departamento a otro, y de un cantón a otro, y esto cambiaba a través del tiempo y de las personas en concreto que gobernaban esas demarcaciones. Lo que se puede asegurar es que ese centralismo absoluto que sometía a gobernadores, jefes políticos, y gobiernos locales a la voluntad del presidente de la república en turno, fue muy difícil que se diera en el siglo XIX en México, y más bien, lo que se ha demostrado, es que entre el gobierno general de la república y los gobiernos estatales hubo muchas tenciones y conflictos, a veces sometimiento, pero la mayoría de las veces eran negociaciones, pactos y acuerdos, donde los grupos de poder de los estados, departamentos, cantones y municipios, supieron defender sus intereses y negociar con los poderes superiores, desde el presidente de la república, hasta el gobernador del estado y los jefes políticos.

En particular, todos los jefes políticos y sus subordinados, daban prioridad a sus intereses, como todos los políticos, decía el periódico *El Continental* en respuesta a su homólogo *Juan Panadero*, en abril de 1894, que "no había jefes políticos modelo en el cumplimiento de su deber", pues si los hubiera "estuviéramos gobernados por ángeles", y "las cosas no anda-

rían pastas arriba como se encontraban", pero que eso era "imposible".[1] El trabajo de los jefes políticos y sus subordinados a veces era desagradable en muchos aspectos, sostiene Paul J. Vanderwood, ya que éstos eran los responsables del orden público, lo que era difícil de mantener aún en las mejores circunstancias, también debían atender de manera directa el funcionamiento de los asuntos de las distintas comunidades de su cantón, y de los detalles más íntimos de la vida diaria de los individuos y de las familias.[2] Todo esto no podía ser atendido ni resuelto directamente por el gobernador del estado, mucho menos desde la capital del país por órdenes expresas del presidente de la república, por eso no se puede sostener, de manera simplista, que las autoridades políticas eran los pequeños engranes de una maquinaria nacional centralista muy bien aceitada.

Las decisiones de los jefes políticos estaban relacionadas con el reparto de tierras, los derechos de agua, la educación pública, las prácticas religiosas, la fuga de niños de sus casas, la ira de esposos celosos y esposas enojadas que lanzaban acusaciones de adulterio y sodomía. Las decisiones de las autoridades políticas también estaban relacionadas con las disputas que iban desde simples diferencias personales hasta el estallido de una revolución, el robo de ganado y asesinatos, así como de jóvenes enamorados separados por la negativa de sus padres. Los jefes políticos daban fe de las elecciones, organizaban las celebraciones cívicas, autorizaban la venta de licores y conducían las inspecciones de los depósitos distritales de minerales. También se encargaban del enganche de hombres para el ejército, la policía rural y la gendarmería del estado. Todo lo anterior estaba dentro de sus atribuciones oficiales, las extraoficiales, que las había, por supuesto, y variaban según los casos y las personas, dado que el trabajo de los jefes políticos estaba relacionado con las controversias difíciles entre particulares, entre pueblos y haciendas, y entre ciudadanos y autoridades públicas, y por ello no escapaban de las críticas de los periódicos oposicionistas,

[1] *El Continental*, 29 de abril de 1894.

[2] Paul J. Vanderwood. (2003). *Del púlpito a la trinchera. El levantamiento religioso de Tomochic*. México: Taurus, pp. 174-176.

como se vio en el capítulo respectivo a la opinión pública y los jefes políticos. Según los casos particulares y las personas, las autoridades políticas podían ser arbitrarios y caprichosos, especialmente cuando sentían amenazada su permanencia en la política o cuando querían impresionar a sus superiores con su comportamiento. No obstante, también podían realizar campañas para ayudar a las víctimas de desastres naturales, apoyar a las autoridades de salubridad en el combate a enfermedades, epidemias, plagas, ayudar en campañas de vacunación y mostrar una gran compasión hacia la gente común que tenía problemas personales, incluso, obtener del público, de la prensa y de sus gobernados, una buena opinión o aprobación por su gestión como autoridad política.[3]

Los documentos relativos a las autoridades políticas intermedias provenientes del Archivo Histórico de Jalisco (AHJ) constituyen una gran variedad de circulares, oficios, informes, telegramas, cartas, quejas, y otros documentos, las cuales estaban dirigidas al gobernador, al secretario de gobierno, jefes políticos, directores de departamento y ayuntamientos, y trataban también de distintos temas que tenían que ver con los ramos de gobierno, salud, estadísticas, justicia, elecciones, reparto de tierras y obras públicas, entre otros, son documentos que circularon en distintas direcciones en lo que se puede denominar, en términos generales, como el laberinto de la administración pública del estado de Jalisco. A diferencia de las memorias de gobierno y las notas periodísticas tratadas en capítulos anteriores, los documentos del AHJ no tenían como destinatario al público lector de su época, mucho menos al actual, sino que, a través de los canales oficiales, circulaban estos mensajes sin que el lector común y corriente o el ciudadano se enterara de lo que trataban estos documentos, mucho menos estaban dirigidos para que historiadores o lectores del presente se enteraran de su contenido. Sin embargo, el archivo histórico, como dice Paul Ricoeur, es una construcción social, pues la ubicación, conservación, organización, catalogación y disposición de documentos para su consulta, es una obra del Estado, de esta manera, los historiadores

[3] Wanderwood. (2003), pp. 174-176.

o el público en general pueden acceder a dichos documentos, consultarlos y hacer su propia lectura e interpretación.[4]

Como se ha dicho anteriormente, la primera mitad del siglo XIX se caracterizó por la constante inestabilidad de los gobiernos tanto nacionales como estatales, de tal manera que lo que había era un Estado nacional muy débil que no podía tener el control del territorio nacional, dejando gran parte del mismo en poder de grupos locales y regionales, o de bandidos que azotaban los caminos y pueblos en distintas partes del país. El estado de Jalisco no fue la excepción. La siguiente información proveniente del AHJ fue organizada por temas generales con el fin de analizar mejor la problemática y los conflictos que enfrentaron las autoridades políticas en Jalisco durante el siglo XIX.

Seguridad pública y policía

Dada la inseguridad que prevalecía en 1853 en el estado de Jalisco debido a los numerosos grupos de bandidos que azotaban la región, el gobernador del estado solicitó a los jefes políticos que hicieron propuestas de nombramientos de jueces de Acordada para su respectivo cantón. Ignacio Suárez, jefe político del cantón de Colotlán, el 4 de mayo de ese año, informó al secretario de gobierno que sus propuestas estaban en una lista de doce personas que podían dedicarse a la aprehensión de ladrones, vagos, desertores y reos prófugos.[5] A las personas propuestas se les informaba de su nombramiento, principalmente era para que desempeñaran el cargo de comisario de policía en alguna de las municipalidades, su función sería aprehender a los delincuentes y remitirlos a sus superiores o directamente a la capital del estado, algunas respuestas fueron de aceptación y agradecimiento por el cargo otorgado como lo hicieron Zenón Godina, Clemente Lozano y Atanasio Guzmán, pero en el caso de Javier Miramontes, éste agradeció el nombramiento, pero no lo aceptó, porque desempeñaba el

[4] Ricoeur. (2004), pp. 173-370.

[5] AHJ. G-12-853. CON/64. Ignacio Suárez, jefe político del 8° Cantón, Colotlán, 4 de mayo de 1853.

puesto de subreceptor de rentas de alcabalas, además por su avanzada edad y algunas enfermedades que tenía, por lo que renunció al cargo, finalmente se nombró a Rafael Gaeta en su lugar. Según el jefe político estas personas eran aptas para traer paz y estabilidad en el cantón de Colotlán, debido a la amenaza de gavillas, rebeldes y otros malhechores que había en dicho cantón.[6] Parece ser que las personas propuestas por los jefes políticos para estos cargos públicos eran aceptadas por órdenes directas del gobernador, debido a la confianza que les tenía a los jefes políticos.

Por su parte Jesús Agraz, jefe político del cantón de Autlán, remitió al gobernador la lista del director político del departamento de Mascota, quien propuso a varios hacendados, para ocupar el puesto de comisionado de policía, "por su autoridad y celo por el orden y bien público, y para perseguir ladrones, vagos, desertores y reos prófugos en ese Departamento". Todas estas personas fueron aceptadas y autorizadas por el gobernador del estado. En Ayutla, Jesús Agraz, jefe político de Autlán, nombró a Miguel Velasco como comisionado de policía, en mayo de 1853. Velasco envió un oficio al secretario de gobierno para manifestarle su agradecimiento, diciendo que no tenía "méritos para haberlo obtenido" y que mejor se lo hubiera otorgado a otro ciudadano con mejores capacidades para desempeñar el cargo. Sin embargo, Velasco aceptó el puesto, pero solicitó al gobernador le enviara algunas armas porque en esa municipalidad carecían de ellas, y por el contrario, dicho municipio se hallaba "plagado de individuos perniciosos". Velasco sugirió invitar al comisionado Manuel Luna, propietario de la hacienda de San Clemente, ya que él contaba con "una buena armada" y podría disponerle algunas armas. El secretario de gobierno le contestó a Velasco que su solicitud no podía "ser atendida debido a la falta de armas en el Estado" y sugirió que se comunicara directamente con Manuel Luna. Ramón Luna, hijo de Manuel, le escribió al gobernador del estado sobre esta situación, y le dijo que era dueño de la hacienda de San Clemente desde hacía 16 años, y que no había cerrado las puertas a los auxilios que habían estado a su alcance

[6] AHJ. G-12-853. CON/64. Personal.

para los pueblos circundantes a su propiedad en la persecución de vagos y ladrones, habiendo puesto a la cabeza a sus sirvientes para aprehender a cuanto malhechor había podido y entregarlos a la autoridad competente valiéndose de sus propios recursos, por lo que se había puesto en camino para auxiliar habiendo siempre gastos de consideración. Además, afirmaba haber propuesto siempre a los vecinos de Unión de Tula y Ayutla armarlos, exigiéndoles únicamente una pequeña retribución de un real por persona para comprar armas para la defensa, pero que nunca se le había hecho caso. Por lo mismo, se había limitado a prestar auxilios y a remitir a los atrapados a Autlán o a Guadalajara, según lo indicaba el gobierno, pero que estaba dispuesto a cooperar con las autoridades políticas del cantón de Autlán. El jefe político de Autlán, al ser informado sobre el asunto, le escribió al comisionado de Ayutla, diciéndole que debía capturar a todo malhechor, vago, ladrón, reo prófugo y desertor del ejército y de la Guardia Nacional, quienes se habían esparcido por todo el estado, y a quienes debería perseguir y capturar con el apoyo que le sería brindado para desempeñar tal comisión a su patria, y que recibiría apoyo de Manuel Luna para proteger su patrimonio junto con otros comisionados de policía, nombrados por esa jefatura a los pueblos subalternos de la cabecera, Autlán, por lo que debía nombrar a sus escuadras con hombres de su plena confianza y se le diera el armamento necesario. Sin embargo, Jesús Agraz, terminó aceptando que no contaba con el armamento necesario para dicha tarea.[7]

Aquí se muestra cómo el jefe político y el comisario de policía aceptaron no tener armas para perseguir y aprehender a los delincuentes, y reconocieron que los hacendados sí tenían cuerpos armados para defender sus propiedades, por eso recurrían continuamente a ellos para proteger a los poblados y perseguir a los vagos y ladrones. Lo mismo pasó en el cantón de Ahualulco, donde el jefe político, Lino Fregoso, le informó al secretario de gobierno sobre las personas propuestas para comisionados

[7] AHJ. G-15-853. AY/62. Seguridad Pública. Miguel Velasco, Jesús Agraz. Ayutla, 23 de mayo y 21 de junio de 1853.

de policía en ese lugar, los cuales, según una circular del gobierno, "debían ser hacendados por su patriotismo, celo y autoridad merecida", por lo que el mismo gobierno les encargó la aprehensión de los delincuentes que tanto abundaban en el estado.[8]

En este caso, Anastasio Pérez, vecino de la hacienda de San Nicolás, uno de los propuestos, se excusó por no poder desempeñar el cargo debido a las circunstancias en que se hallaba, ya que era dependiente de la hacienda, y sus ocupaciones no le daban lugar para distraerse en el cuidado y atención que demandaba ese negocio, además de que tenía una gran familia que mantener, por lo que pidió que se admitiera su renuncia como comisionado de policía. En cambio, Manuel Y. Gómez aceptó gustosamente el mismo cargo.[9]

No obstante estos nombramientos los habitantes del campo jalisciense se sentían inseguros. El 2 de agosto de 1853, Miguel Cuellar y otros vecinos de Ameca escribieron al secretario de gobierno denunciando que en esa municipalidad había "multitudes de malhechores" que día a día iban aumentado, a pesar de que en esa población se contaba con una pequeña fuerza pero que era insuficiente, por lo que se incrementó la frecuencia de los delitos. Fue por ello que los vecinos firmantes solicitaron al gobernador del estado que permitiera que las fuerzas de Aniceto Moncayo permanecieran en la zona para la debida aprehensión de los delincuentes. Asimismo, le suplicaron al gobernador que instruyera un consejo de guerra para ejecutar a los malhechores por ser necesario. La Comandancia general del Estado de Jalisco, respondió que las fuerzas de Aniceto Moncayo fueron comisionadas para que los vigilara y los acompañara en sus traslados para cuidar y evitar los robos que pudieran cometerse, pero que era estrictamente necesario que las fuerzas de Moncayo debían actuar junto con las fuerzas que haya reunido el alcalde encargado de la jefatura

[8] AHJ. G-12-853. AHM/63. Personal.

[9] AHJ. G-12-853. Personal. Linos Fregoso, jefe político de Ahualulco. Ameca, 6 de junio y 13 de julio de 1843.

política del 5° cantón de Etzatlán/Ameca, para que de este modo fuera más eficaz la persecución de los malhechores.[10]

Cinco años después, el 19 de enero de 1857, el gobernador del estado de Jalisco envió una circular a los jefes políticos para atender la seguridad de los caminos mediante el uso de la fuerza policiaca, y excitando a los hacendados para que contribuyeran con caballos. Las autoridades políticas que respondieron en el sentido de acatar las órdenes del gobernador fueron los jefes políticos de Ahuaulco (Martín G. Ochoa), Guadalajara (Guadalupe Montenegro), Tepic (Francisco Anaya), Autlán (Víctor Ordorica) y La Barca (José María Talancón).[11]

Ese mismo mes, Guadalupe Montenegro, jefe político de Guadalajara, informó al secretario de gobierno del estado, que se habían dado órdenes para perseguir a Antonio Godínez y socios por conspiración, y porque se asumía como capitán de algunas gavillas de indios insurrectos. Por su parte, Pedro López, director del departamento de Zapotlanejo, dio parte de que se le había informado de la presencia de Antonio Godínez por el puente de Tototlán junto con doce hombres que lo acompañaban montados y armados, quienes estuvieron tomando vino y que se reunieron con Luis N. Martínez en el arroyo denominado "Los Puercos", sobre la calzada del Puente. Aseguró López, que Godínez le quitó 300 pesos a un individuo y luego continuó hacia Guadalajara. Además informó que Godínez se reunió con sus hombres en el valle de Santa Fe, quienes venían de Tonalá para dirigirse a la hacienda La Cañada. El 4 de enero de ese año se le informó al jefe político de Guadalajara que finalmente Godínez fue apresado, y se esperaban sus órdenes para aprehender a los Martínez, vigilando las entradas de la ciudad con gente armada, también se avisó a los directores políticos de Chapala y Poncitlán. Al día siguiente Montenegro consignó a Antonio Godínez al Juez 3° de Letras, con dos cartas de unos vecinos de Tototlán en donde se les comprobaban los delitos come-

[10] AHJ. G-15-853. AME/101. Seguridad. Miguel Cuellar, et al. Ameca, 2 y 11 de agosto de 1853.

[11] AHJ. G-15-857. JAL/113. Gobernador de Jalisco, Guadalajara, 19 de enero de 1857.

tidos por los que fue acusado y apresado, se mencionaron algunos de sus cómplices y se ordenó su persecución. El 6 de enero siguiente, Guadalupe Montenegro informó haber aprehendido a Diego López por el puente de Tototlán, por sospecha de ser un correo de los indígenas sublevados. Diego López confesó que el domingo de la semana anterior, salió de Guadalajara con destino a Azcatlán, a donde llegó el lunes, hospedándose en casa de su tío Cleo López, luego regresó a la capital y en el camino se encontró con los indígenas de ese lugar, quienes estaban montados y armados con fusiles y lanzas. El jefe de ellos le quitó su caballo y le dio otro para que continuara y cumpliera con el encargo que se le hizo de informar que el día 5 de enero se reuniría con el hermano Antonio en el puente de Tototlán, cosa que no pudo cumplir porque fue aprehendido por el comisario de policía Ignacio Alatorre. López confesó que entre los involucrados conoció a Antonio Godínez, quien se supone era el jefe. El proceso continuó para atrapar a los demás involucrados.[12]

Con el objetivo de pacificar el cantón de Tepic, el gobernador del estado de Jalisco envió un oficio al jefe político de dicho cantón donde le dio instrucciones para pacificar y extinguir los conatos reaccionarios en el puerto de San Blas. El gobernador ordenó al jefe político que cuidara la moral y la seguridad de las personas con la presencia de una fuerza de policía que constantemente estuviera sobre las armas para apoyar a las autoridades locales. Para ello, el gobernador recomendó que se formara un cuerpo integrado por 25 hombres con un salario de tres pesos diarios; dos subalternos que ganaran de 5 a 4 pesos diarios; otros dos subalternos con un pago de tres pesos mensuales y un subteniente con 25 pesos mensuales, todos bajo las órdenes del capitán Antonio Castilla, quien por su patriotismo serviría de forma gratuita en la comandancia de dicha fuerza.[13]

[12] AHJ-G-15-857. GUA/252. Seguridad Pública. Guadalupe Montenegro. Guadalajara, 3-6 de enero de 1857.

[13] AHJ-g-1-856. SB/3511.Política Estatal y Nacional. Gobernador de Jalisco, Guadalajara, 7 de enero de 1856.

El pago de todo lo anterior saldría de la aduana del puerto, pudiendo disponer esta aduana de la misma fuerza para perseguir el contrabando. El enganche de la tropa sería voluntario, y para un tiempo no menor a los seis meses, sin fuero alguno, pero los individuos estarían sujetos a las leyes militares en asuntos del servicio. El capitán Castilla engancharía la tropa y propondría los subalternos para que los nombrara el gobierno. Agregó el gobernador que, en cuanto se formara esta fuerza, se establecería un pequeño predio en el puerto de San Blas para que ocupara los reos sentenciados en componer caminos, construir edificios, limpiar el fondeadero y la entrada del puerto. Prometió el gobernador enviar recursos para la construcción de una cárcel pública, que estaría a cargo del capitán Antonio Castilla, que al mismo tiempo desempeñaría el cargo de comisario municipal, para fin de que pudiera enajenar los derechos del fundo legal y ejidos de San Blas mediante pregones y subasta pública al mejor postor.[14]

Para mejorar el servicio de la guardia de seguridad en el estado de Jalisco y combatir a los bandidos en su territorio, Jesús Camarena, primer vocal del Consejo de Gobierno y gobernador provisional del estado, el 23 de marzo de 1857, expidió un reglamento donde se establecieron 19 artículos relacionados con el servicio de la guardia de seguridad y las atribuciones respectivas a los jefes políticos algunas de las mencionadas fueron las siguientes:

> Art. 2. El Jefe Político del primer Cantón propondrá al Gobierno la fuerza de infantería y caballería que debe distribuirse en los pueblos de su demarcación.
> Art. 3. Los Jefes de los Cantones de Lagos y Tepic harán lo mismo, pero sin exceder la infantería de un batallón y caballería de un escuadrón.
> Art. 4. Los Jefes de los demás Cantones harán lo mismo de modo que no exceda de un batallón y un escuadrón.

[14] AHJ-g-1-856. SB/3511.Política Estatal y Nacional. Gobernador de Jalisco, Guadalajara, 7 de enero de 1856.

Art. 6. Los Jefes Políticos y los de dicha guardia de seguridad sentarán en el brevete de sus comunicaciones el mote "Mesa de Guerra" cuando tengan que salvar el órgano.
Art. 7. Para cumplir con el artículo 137, la mesa llevará un libro de registro correspondiente a cada Cantón el cual deberá ser remitido al Gobierno por los Jefes Políticos.
Art. 8 y 9. Los Jefes Políticos y primeras autoridades locales establecerán puntos fijos en cada uno de los cuarteles en que estén divididos a fin de presentar prontos y recíprocos auxilios, estos puntos deben estar máximo a 5 leguas uno del otro y se cambiarán y relevarán diariamente a fin de evitar íntimas relaciones que perjudiquen el buen servicio. Se establecerán en los lugares donde los malhechores acostumbran reunirse y atacar.
Art. 14. Es peculiar de los Jefes Políticos respectivos la designación de las oficiales y sargentos dando cuenta al Gobierno para su conocimiento. Cualquier suspensión debe ser reportada de igual manera por los Jefes Políticos.[15]

El secretario de gobierno de Jalisco, el 5 de mayo siguiente, envió una circular a los jefes políticos de Ahualulco y Sayula para solicitarles que cumplieran con el artículo 4° del reglamento anterior, con respecto a la distribución de fuerzas de seguridad pública, pues había notado que en los últimos veinte días no se había acatado de forma precisa y podría llevar a la pérdida de tiempo por falta de la distribución correspondiente. Por su parte, Antonio L. Bobadilla, jefe político de Sayula, respondió que no había podido cumplir con el artículo en cuestión por varias razones y por la presencia de indios en la zona, pero afirmó que cumplirá con lo acordado. En tanto que el jefe político de Ahualulco ofreció aplicar los acuerdos, pero con ciertas modificaciones de las fuerzas a su consideración.[16]

[15] AHJ. G-15-857. JAL/141. Jesús Camarena, Guadalajara, 23 de marzo de 1857.

[16] AHJ. G-15-857. JAL/121. Seguridad Pública. Secretario de gobierno, Guadalajara, 5 de mayo de 1857.

El 2 de julio de 1857, el secretario de gobierno de Jalisco informó, mediante una circular enviada a los jefes políticos del estado, que no se exigiera a los hacendados que la fuerza rural creada por el decreto 11 en agosto del año anterior, se moviera hacia las cabeceras de los departamentos por ningún motivo, debido a que los "piquetes rurales no tienen otra obligación que circular el terreno de la finca en que viven, de los caminos que por ella cruzan y de auxiliar mutuamente a las haciendas colindantes". Se trataba de grupos armados por los mismos hacendados para la defensa y cuidado de sus propias haciendas. Respondieron al secretario de gobierno ocho jefes políticos de los cantones de Colotlán, Tepic, Guadalajara, Ahualulco, Sayula, Ciudad Guzmán, Lagos y La Barca.[17]

Entre junio y diciembre de 1857, los jefes políticos de varios cantones del estado de Jalisco informaron al secretario de gobierno sobre la formación de Acordadas, incluyendo los nombramientos, reorganizaciones y disposiciones sobre fuerzas y jueces. Como quedó establecido en la ley respectiva, los jefes políticos se encargaban de proponer al gobernador del estado a diversas personas para cargos como jueces de acordada y altos cargos militares, en esta ocasión se anexan listas de personas consideradas aptas para tales tareas. Los documentos aquí presentados muestran el amplio proceso por el que tenía que pasar la formación de Acordadas, desde propuestas por el cantón y los departamentos, hasta los nombramientos por parte del gobierno del estado, los cuales parece ser que muchas veces se veían trabadas por constantes renuncias de los individuos propuestos para estos cargos, lo que hace pensar que ni siquiera eran consultados al momento de proponerlos, sino que se hacía por mera intuición al buscar personas aptas para dichos cargos. Asimismo, se puede ver el constante cambio de jefes políticos en algunos cantones, pues este proceso se prolongó por todo un año, en el que unos entraron y otros salieron.[18]

[17] AHJ. G-15-857. JAL/104. Seguridad Pública. Jalisco, 2 de julio de 1857.

[18] AHJ. G-15-857. JAL/122. Seguridad Pública. Jalisco, 1857-1858.

Las Acordadas se formaron para la persecución de las gavillas de bandidos, pero estas Acordadas debían estar bien organizadas con el objetivo de aprehender a los bandidos con el apoyo de la Guardia Nacional. Miguel Contreras Medellín, jefe político de Guadalajara, informó al secretario de gobierno que constantemente se recibían noticias en esa capital y otras municipalidades del primer cantón, de que las gavillas asaltaban las poblaciones y otros puntos donde no había destacamentos, noticias que obligaban a los jueces de acordada a hacer correrías por diferentes direcciones en busca de los bandidos, por lo que durante varios días los integrantes de las acordadas tenían que abandonar a sus familias, sus casas y sus intereses, así como cargar con gastos indispensable para su subsistencia y la de sus caballos, por lo que estos individuos solían ser muy infelices al exponer sus vidas sin mayor recompensa. Sostiene que sería mejor la seguridad de la ciudad si se les pagara bien a los individuos que conformaban estas acordadas. En mayo de 1857, se enviaron otras dos circulares a los jefes políticos de los cantones donde se estipulaba que los jueces de acordada solo servirían en los lugares donde habían sido consignados por la autoridad política correspondiente, sin poder ir más allá de los límites marcados; y la otra circular se refería a que se exceptuara de todo servicio concejal a los individuos que pertenecieran a las fuerzas de Acordada.[19]

El problema con respecto a estas disposiciones de que las acordadas no salieran de su lugar de origen, ya fueran pueblos, haciendas, municipios, departamentos o cantones, era que mientras éstas estaban arraigadas en dichos lugares, los ladrones, ya fuera en grupo o de manera individual, tenían una gran movilidad por todo el territorio del estado, incluso se pasaban de un estado a otro, sin que las fuerzas policiacas los pudieran seguir y aprehender. Miguel Contreras Medellín, jefe político de Guadalajara, en noviembre de 1857, informó al secretario de gobierno sobre el caso de Ramón Salas, un famoso jefe de ladrones que cometía toda clase de delitos, prófugo del presidio de Mezcala, quien era buscado junto con sus compañeros de gavilla por la barranca de San Cristóbal, San Loren-

[19] AHJ. G-15-857. JAL/122. Seguridad Pública. Jalisco, 1857-1858.

zo, el Pedregal, el Escalón y otros varios puntos. Salas asaltó la fábrica de Tapalpa, las villas de Tecolotlán e Ixtlahuacán en dos ocasiones, peleó contra las instituciones liberales, asaltó a oficiales de policía y dio muerte a dos soldados de escolta. Salas era considerado un bandido muy astuto, pero finalmente fue aprehendido por el inspector de policía Delgadillo, posteriormente el secretario de gobierno informó que Salas quedaría a "disposición de las autoridades competentes con todas las de la ley". Sin embargo, el resto de la gavilla de Salas, compuesta por unos 150 hombres bien armados seguía libre y tomaron rumbo al cerro de la Viguería con dirección a San Cristóbal. Por su parte, el director político de Zapopan, dijo que estaba buscando el rastro de dicha gavilla, y el jefe político de Guadalajara informó que ya se habían tomado todas las acciones para evitar que estos bandidos anduvieran en otros lugares del primer cantón, contando con la ayuda de las fuerzas del capitán Ignacio Llamas rumbo a Zapotlanejo.[20]

Uno de los decretos más importantes fue el de 5 de febrero de 1858, pues se trataba de una serie de artículos que exponían la delicada situación por la que atravesaba el estado de Jalisco, en vista de la constante emergencia de gavillas y malhechores, el gobierno en turno consideraba que el primer deber del gobierno era proveer de seguridad a las vidas y propiedades de las personas que se hallaban bajo su cuidado, por lo que se hacía necesaria una represión muy enérgica. Dicho decreto estipulaba que los salteadores que fueran aprehendidos infraganti o en cuadrilla sufrirían la pena de ser pasados por las armas. Así el artículo sexto del decreto decía que el jefe político de Guadalajara nombraría veinte personas "de notoria honradez", y cada jefe político de los otros cantones, nombraría quince en la cabecera de su respectivo cantón, cada director diez en la de departamento y cada presidente de ayuntamiento cinco, para que sirvieran de jurados en los casos sobre ejecuciones a los reos. Por otra parte, los artículos 9 y 10 pedían que los jefes políticos formaran padro-

[20] AHJ. G-15-857. Seguridad Pública. Miguel Contreras Medellín, Guadalajara, marzo-junio de 1857.

nes para registrar a los vecinos de su cantón expresando el modo de vivir de cada individuo; para realizar esta acción se servirían del auxilio que les proporcionarían los directores de departamentos, ayuntamientos, comisarios municipales y hacendados en sus demarcaciones. Mientras que el artículo 12 especificaba que los jefes políticos, directores, hacendados, alcaldes, comisarios y comisionados de policía estaban en todo su derecho de perseguir ladrones y vagos de mala nota, poniéndolos a disposición del jefe político y tomando los datos necesarios para destinarlos a los talleres de Mezcala, o a donde designara el gobierno. Finalmente, el artículo 15 decretaba que se formaría en Guadalajara una junta destinada a vigilar el ramo de policía y la puntual ejecución de la ley; y en las cabeceras de cantón se nombrarían tres o cinco individuos a propuesta de los jefes políticos.[21]

A finales de 1858 los jefes políticos de los cantones de Colotlán, Ciudad Guzmán Guadalajara, Sayula, Autlán, informaron al secretario de gobierno que había tranquilidad y orden en sus respectivos cantones, agregando que las autoridades y vecinos reconocían al Supremo Gobierno Constitucional. Pero en los cantones de Tepic y Etzatlán todavía se trataba el asunto de la salida de tropas y de la persecución de revolucionarios prófugos.[22]

El cuadro 7 es una síntesis de la información que circuló entre las autoridades políticas y militares del estado de Jalisco sobre la actividad de las gavillas y su persecución durante la década de 1850, destacando el papel de los jefes políticos en ella.

[21] AHJ. G-10-858. GUA/176. Legislación. Jesús Camarena. Guadalajara, 8 de enero-8 de marzo de 1858.

[22] AHJ. G-15-858. JAL/581. Seguridad Pública. Oficios de jefes políticos. Jalisco, 16 de noviembre al 3 de diciembre de 1858.

Cuadro 7.
Actividad de gavillas en Jalisco 1853-1859

Fecha	Lugar	Situación
Enero–abril de 1853	Cocula y Tepatitlán	Esta serie de documentos se refiere a diversos manuscritos destinados a las autoridades de Jalisco, entre ellas los jefes políticos, solicitando armas para defenderse de las gavillas, principalmente en Cocula y Tepatitlán en enero y febrero de 1853. Es de destacar la insistencia de las solicitudes en vista de no obtener una pronta respuesta.
18 de enero de 1853	Guadalajara	José Sandoval solicita a Lino Fregoso, jefe político de Ahualulco, 12 hombres armados para proteger a la Venta del Astillero.
12 y 15 de febrero de 1853	Guadalajara	M. Escorza Caballero, jefe político del primer cantón, solicita al comisario popular de Toluquilla armas y parque para la persecución de ladrones.
18, 22 y 29 de marzo de 1853	Zapotlanejo	Ignacio Pérez, residente del pueblo de San José de la Cañada, jurisdicción de Zapotlanejo, comisionado de policía, se comunica con M. Escorza Caballero, jefe político del primer cantón de Guadalajara, para perseguir malhechores, solicitud que el gobierno aprueba.
22 de marzo de 1853	Tepic	Evaristo Jiménez, jefe político del cantón de Tepic, informa al secretario de gobernación sobre nombramientos y pagos a policías para perseguir malhechores en el departamento de Sentispac.
22 de abril de 1853	Guadalajara	M. Escorza Caballero envía al director de Zapopan 5 carabinas y 7 lanzas (debiendo hacer a las primeras algunas composturas) para la persecución de malhechores.

Fecha	Lugar	Situación
24 y 26 de abril de 1853	Guadalajara	M. Escorza Caballero, jefe político del primer Cantón, envía 6 fusiles, 6 fornituras y 6 paradas de cartuchos a Ixtlahuacán del Río para defenderse de los malhechores.
25 y 27 de julio de 1853	Guadalajara	La Comandancia General del Estado de Jalisco informa a los jefes políticos de Guadalajara, Tepic y Etzatlán sobre las autoridades civiles en común acuerdo para perseguir malhechores sobre el camino de la Venta del Astillero, Teuchitlán y Mochitiltic.
14 de octubre – 3 de noviembre de 1853	Poncitlán, San Pedro Tlaquepaque y la Barca	Esta serie de documentos hablan del proceso y medidas tomadas para la persecución de una gavilla por el rumbo de Poncitlán con motivo de las fiestas que ahí se celebran. Los archivos aquí encontrados fueron redactados y remitidos por diversas autoridades políticas del Estado como son el secretario de gobierno de Guadalajara, el jefe político del primer cantón Escorza Caballero, el jefe superior de Hacienda y el jefe político del cantón de La Barca.
15 de enero – 25 de marzo de 1857	Zacatecas y Jalisco	Esta serie de documentos intercambiados entre Zacatecas y Jalisco (principalmente entre Tlaltenango y Guadalajara) refieren al asunto de las gavillas y sus robos y demás accionar en los caminos entre ambos estados. Se encuentra correspondencia del jefe político del partido de Tlaltenango y el jefe político del cantón de Guadalajara.

Fecha	Lugar	Situación
21 de noviembre de 1857 – enero 11 de 1859	Jalisco	Estos manuscritos sobre la situación de gavillas como asaltos, capturas y envío de armamento y caballos son remitidos por y para diversas autoridades políticas del estado, como el secretario de gobernación, el director político de Tepatitlán, el comandante general del estado y, principalmente, el jefe político del primer cantón. Asimismo, se puede encontrar una recurrente comunicación con este último en prácticamente todos los documentos desde lugares como Tala, Tlajomulco, Tepatitlán, Zapopan, entre otros.
31 de marzo de 1857	Guadalajara	Miguel Contreras Medellín, jefe político de Guadalajara, comunica al secretario de gobierno haber mandado a cerrar las veredas que comunican a la capital con los pueblos inmediatos con el fin de evitar robos, dejando abiertas únicamente las entradas y salidas que cuentan con garitas.
3 de abril de 1857	Guadalajara	Documento en que se transcribe la solicitud del jefe político de Colotlán en donde se pide poner en vigor el decreto número 7 en vista de la constante inestabilidad debido a los malhechores en pueblos y caminos. Su solicitud no fue atendida.
1° de mayo de 1857	Guadalajara	La jefatura política del primer cantón trascribe al secretario de gobierno el oficio del inspector de policía pidiendo fuerzas de seguridad para dar captura a ladrones en Santa Anna de los Negros.

Fecha	Lugar	Situación
9 de mayo de 1857	Guadalajara	Documento expedido por Refugio Gutiérrez, jefe político de Guadalajara, transcribe al secretario de gobierno que Francisco Gutiérrez García informa que su Hacienda "La Huerta" fue asaltada por una gavilla y pide retribución de sus servicios al gobierno. Transcribe al secretario de la comandancia general para enviar armamento.
25 de octubre de 1857.	Guadalajara	Informe de los vecinos y las autoridades de Yahualica al jefe político de Guadalajara y al director político de Cuquío, para que se entere el Congreso del Estado de los sucesos acaecidos por una gavilla autoproclamada "Ejército Defensor de la Religión".
Abril y mayo de 1859	Chimaltitlán, Bolaños, y Colotlán	Merced López, comandante de seguridad pública, informa a las autoridades del estado sobre la situación de gavillas hostiles en poblaciones de Bolaños, Colotlán y Mamatla (San Martín de Bolaños). Es mencionado el jefe político de Colotlán, quien fungió en esta operación como agente comunicativo entre las autoridades del área.

Fuente: AHJ: G – 15 – 853 JAL/97, G – 15 – 853 ZAP/53, G – 15 – 853 TLE/52, G – 15 – 853 ZAO/66, G – 12 – 853 CE/61, G – 15 – 853 ZAP/55, G – 15 – 853 IXR/60, G – 15 – 853 JAL/54, G – 15 – 853 PO/56, G – 15 – 857 ZAS/251, G – 15 – 857 GUA/254, G – 15 – 857 GUA/248, G – 15 – 857 JAL/135, G – 15 – 857 GUA/241, G – 15 – 857 GUA/242, G – 15 – 857 JAL/134, G – 15 – 859 CHT/3493.

En la siguiente década de 1860, el problema de la inestabilidad política, la inseguridad y el bandolerismo no se habían acabado en el campo jalisciense, el gobierno del estado de Jalisco y sus autoridades políticas seguían combatiendo el bandolerismo y las rebeliones militares. Un ejemplo fue Sinforoso Banda, jefe político de Sayula, quien informó al

secretario de gobierno que a las cuatro de la mañana del 3 de septiembre de 1861 tuvo lugar en Sayula un motín auspiciado por dos sargentos de la guarnición y por un tal Eduardo González, cuyo objetivo fue exigir el cambio de autoridad política. Su manifiesto estipulaba que se había excitado al pueblo a tomar las armas con el fin de liberar a la población de toda clase de peligros y hacerle justicia por la fuerza, ya que sus súplicas habían sido siempre desatendidas, pero que no se malinterpretara que buscaban ofender a su persona o a la autoridad constitucional, pues su conducta como liberales era bien conocida; deseaban colocar como jefe político a Agustín Correa, pero querían que el supremo gobierno viera el peso de sus acciones y emitiera una nueva orden. El jefe político dijo por su parte que, no teniendo la fuerza para sofocar a los rebeldes, las facciones le ofrecieron la libertad con tal de que no saliera de la población en esos momentos.[23]

El secretario de gobierno envió al coronel Antonio Rojas para tranquilizar la situación en el cantón, disponiendo de las fuerzas de ese lugar con el objetivo de reestablecer el orden legal y la autoridad del jefe político. En Sayula, el jefe político informó haber recibido apoyo de Atoyac y otros tres pueblos, poniendo a sus servicios toda clase de soldados y esperaba pronto reunir una fuerza de doscientos hombres de infantería y caballería. Además, se quejaba de que Porfirio Corona, director de Zacoalco, había tenido una mala conducta al no proporcionarle ni un hombre a pesar de la situación, y mencionó que Silviano Gamberos, presidente del ayuntamiento, fue nombrado accidentalmente jefe político interino de dicho cantón. En ese estado de cosas Banda tuvo a bien buscar a los jueces de la población para finalmente conseguir el respaldo necesario cabiéndole la satisfacción de que el establecimiento de la paz

[23] AHJ. G-15-861. SA/2266. Seguridad Pública. Sinforoso Banda. Sayula, 3 de septiembre de 1861 a 21 de mayo de 1862.

del lugar fue gracias a José Vicente Louza, "de muy digna recomendación" por su pronto auxilio a la situación de Sayula.[24]

Un oficio del Ejército Federal y División de Fuerzas menciona que los individuos que motivaron el motín de Sayula fueron José Gutiérrez, Julián Villalobos y Pascual Dueñas debido a su conducta imprudente, que según ellos, Banda fue a Sayula maltratando y amagando a los que firmaron una restitución del anterior jefe político. El juzgado primero envió al secretario de gobierno un documento sobre los últimos acontecimientos que habían tenido lugar en Sayula para que se pusiera en conocimiento del gobernador del estado.[25]

Por otra parte, el jefe político de Ciudad Guzmán, Juan Jiménez, reportó que entre el 9 de enero y el 1° de agosto de 1863, no hubo novedades en ese cantón, manteniéndose inalterada la tranquilidad pública. El 31 de agosto se nombró un nuevo jefe político de nombre Calixto Aguilar, quien reportó lo mismo que su anterior, sin novedades, excepto un intento de fuga de presos, los cuales fueron contenidos efectivamente por las autoridades del cantón, la guardia nacional y algunos vecinos que ofrecieron sus servicios oportunamente para detenerlos. Este funcionario reportó más adelante que la paz se había mantenido inalterable entre el 1° de octubre y el 30 de noviembre.[26]

El 17 de junio de 1876 varios vecinos de Bolaños solicitaron al secretario de gobierno del estado el cambio de la directoría política de Totatiche al pueblo de Bolaños, ya que habían ocurrido desórdenes y trastornos que afectaron el orden constitucional. La solicitud se hizo a través del jefe político del cantón de Colotlán, Tomás del Río, debido a que el pueblo de Bolaños anteriormente tenía el rango de cabecera del departamento,

[24] AHJ. G-15-861. SA/2266. Seguridad Pública. Sinforoso Banda. Sayula, 3 de septiembre de 1861 a 21 de mayo de 1862.

[25] AHJ. G-15-861. SA/2266. Seguridad Pública. Sinforoso Banda. Sayula, 3 de septiembre de 1861 a 21 de mayo de 1862.

[26] AHJ. G-15-863. CIG/2215. Seguridad Pública. Juan Jiménez. Ciudad Guzmán, 9 de enero-30 de noviembre de 1863.

por lo que los vecinos de dicho pueblo pidieron se les restituyera esa categoría. Los vecinos alegaron que desde que se les quitó ese rango, en el pueblo de Bolaños había habido desorden y descuido en las actividades de vigilancia y administración, así como en la instrucción pública. Aseguraron que antes había prosperidad y se aplicaban las leyes de Reforma, pero que ahora se encontraban en la ruina. Los vecinos consideraban que si se le restituía el rango de directoría política a Bolaños, con esto regresaría la prosperidad al lugar.[27]

El 2 de mayo de 1878, el director político de San Juan de los Lagos, José Ignacio Torres, informó al secretario de gobierno del estado de Jalisco que el comercio de esa ciudad había aceptado las cuartillas de San Luis Potosí para comprar y vender, lo que había salvado la situación por la violenta suspensión de las cuartillas zacatecanas. La tranquilidad que se había establecido en el comercio de San Juan se alteró por un telegrama que Miguel Esqueda, comerciante de esta ciudad, puso produciéndose en la clase pobre un tumulto muy grave, que derivó en una rebelión contra los comerciantes, desorden que se pudo evitar hablando personalmente al pueblo, sin necesidad de recurrir a las armas. La grave situación prosiguió al siguiente día, y para evitar un conflicto, ya que la masa pobre pedía una medida que salvara su triste situación, el director político reunió al comercio, y consiguió comprar cien fanegas de maíz para venderlas a los pobres por las cuartillas, cuya circulación se rechazaba por no ser del estado de Jalisco. Con esta medida se restableció la tranquilidad y se acallaron los motivos de la queja. Las cuartillas solo las recibieron en los artículos de primera necesidad, sin adulterar los precios, ni especular con ellas comprándolas por la mitad de su valor, como lo habían estado haciendo. Mientras el gobierno resolvía algo más conveniente, el comercio continuaría aceptando los vales reconocidos y aceptados por los mismos

[27] AHJ. G-5-876. BO/1584. Divisiones políticas y territoriales. Vecinos de Bolaños, Bolaños, 17 de junio de 1876.

comerciantes, mientras el gobierno proveía de monedas de curso legal.[28] El gobernador de Jalisco, por su parte, se dio por enterado y respondió el 6 de mayo siguiente, que en varios puntos del estado se resistían a recibir las cuartillas y tlacos de otros estados, lo que estaba dando lugar a algunos conflictos entre los comerciantes y las clases menesterosas, por lo que pidió al director político de San Juan de los Lagos dictara las medidas que creyera convenientes.[29]

El director político tenía el deber de perseguir a los bandidos que tuvieran actividades en su departamento, y de exigir a las autoridades municipales y comisarios la ayuda necesaria para la persecución y encarcelamiento de los delincuentes. En el caso del director político de Totatiche, enero de 1885, fue él quien denunció ante el gobernador del estado, al comisario de Bolaños quien se rehusó a perseguir a unos ladrones que venían de Nayarit, ante lo cual el mismo director de Totatiche realizó una expedición a Bolaños con veinte hombres de la acordada. Este grupo de hombres tardó cinco días en llegar, primero porque tuvieron que subir la sierra y, segundo, porque los integrantes de la acordada prestaban sus servicios de manera gratuita, por lo que el director político de Totatiche pidió al gobernador de Jalisco recursos para alimentarlos.[30]

El 19 de mayo de 1892 se presentó un asunto que involucró a los estados de Zacatecas y Jalisco, pues en los límites territoriales de ambos tenían actividades algunas gavillas de ladrones, en un caso relativo a esto el gobernador de Zacatecas le transcribió al gobernador de Jalisco un documento del jefe político de Jerez, relativo a que en el pueblo de Monte Escobedo unos malhechores asaltaron, robaron y golpearon a Ricardo Sánchez, vecino de Jocotic, por lo que solicitó permiso para introducirse

[28] AHJ. F-9-878. SJL/820. Industria y comercio. José Ignacio Torres. San Juan de los Lagos, 2 de mayo de 1878.

[29] AHJ. F-9-878. SJL/820. Industria y comercio. Gobernador de Jalisco, Guadalajara, 6 de mayo de 1878

[30] AHJ. G-15-885. BO/3442. Seguridad Pública. Director Político, Totatiche, 20 de enero de 1885.

en el estado de Jalisco a donde huyeron. El gobernador de Jalisco contestó que no había ningún inconveniente, y que ya había dado órdenes para que la gendarmería del estado auxiliara a los de Zacatecas para que aprehendieran a los bandidos. El presidente municipal de Escobedo, dijo por su parte, que la noche del 4 de mayo asaltaron a Ricardo Sánchez vecino del rancho de Jocotic. Sánchez declaró que había reconocido a los que lo asaltaron, quienes pertenecían a una gavilla compuesta por once vecinos de la barranca de Alquestán, estos eran Candelario Aguilar, Cruz, Dionisio y Salomé García, Epifanio Minjares, Juan Hernández, Blas Márquez (chico), Juan N. (alias) La Lumbre, Florencio Márquez, Ángel y Pablo Huízar, y que los bandidos huyeron a la barranca.[31] Por su parte, el director político de Mezquitic preguntó al secretario de gobierno de Jalisco si ¿debía permitir la entrada al territorio de ese departamento a autoridades y jefes de Valparaiso y Monte Escobedo, del estado de Zacatecas, para la persecución de los malhechores? A lo que el secretario de gobierno de Jalisco contestó que sí, que había dado permiso al gobierno de Zacatecas para que se introdujeran al territorio del estado de Jalisco en persecución de los bandidos.[32]

Los robos no solo ocurrían en las zonas serranas, lejanas y aisladas del territorio jalisciense, sino también en los lugares cercanos a la ciudad de Guadalajara, por ejemplo, los señores Fernández del Valle Hermanos, el 11 de octubre de 1892, solicitaron al gobierno del estado que los gendarmes vigilaran las líneas telefónicas que comunicaban a las fábricas de La Experiencia, La Escoba y Atemajac, debido a los continuos robos de alambre que había. Alberto Gómez Cruz, jefe político del primer cantón transcribió el escrito de los dueños de las fábricas que decía lo siguiente:

[31] AHJ. G-15-892. ZAS/3444. Seguridad Pública. Gobierno de Zacatecas, Zacatecas, 19 de mayo de 1892.

[32] AHJ. G-15-892. MEZ/1524. Seguridad Pública. Director político. Mezquitic, 31 de mayo de 1892.

> Los continuos robos de alambre que se cometen en las vías telefónicas que tenemos establecidas para comunicarnos con las fábricas de Atemajac, Experiencia y Escoba, y la dificultad absoluta que tenemos para vigilarlas con nuestros propios empleados, nos obligan a ocurrir a Ud. Suplicándole se sirva dar órdenes a los gendarmes que cuidan los caminos en que están instaladas dichas líneas para que se hagan cargo de la vigilancia de ellas, para evitar los grandes perjuicios que se nos ocasionan con su frecuente interrupción.[33]

Pueblos indios, reparto de tierras y rebeliones indígenas

Los primeros documentos relacionados con las autoridades políticas intermedias que se encontraron en el AHJ fue un expediente de junio de1827, en el que Esteban Castillo, director político de Zacoalco, informó sobre la situación de la tenencia de la tierra en los pueblos indígenas de la región de Santa Ana Acatlán y Zacoalco, los asuntos que tratan dichos documentos son relativos a la posesión de los indígenas con respecto a los terrenos y solares, y sus títulos de propiedad.[34] Hacia marzo de 1834, el alcalde del municipio de Santa Ana Acatlán pidió a los dueños de los terrenos y solares dentro del municipio que revalidaran sus títulos en propiedad indígena.[35] En la legislación relativa al reparto de terrenos de las antiguas comunidades indígenas los jefes políticos tuvieron un papel decisivo, pues presidían las comisiones repartidoras encargadas de hacer el padrón de vecinos con derecho a recibir tierras y daban entrada a las solicitudes y peticiones de tierras por parte de los indígenas.

[33] AHJ. F-5-892. GUA/1131. Comunicaciones y tránsito. Jefe político. Guadalajara, 11 de octubre de 1892.

[34] Ver Rosa Alicia de la Torre Ruiz. (2012). *Cambios demográficos y de propiedad en la provincia de Ávalos (siglos XVIII-XIX)*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara y Sergio Valerio Ulloa. (2021). *Santa Ana Acatlán. De la desamortización a la dotación de tierras. Una historia sin despojos*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara. AHJ. AAJ – 17 – 827 ACJ/3, AAJ – 17 – 827 ACJ/4, AAJ – 17 – 834 ACJ/2.

[35] AHJ. AAJ – 17 – 834 ACJ/2.

Las tierras de las comunidades indígenas fueron individualizadas y privatizadas como resultado del proceso de desamortización en la primera mitad del siglo XIX, mucho antes de la promulgación de la Ley Lerdo de 1856. Sin embargo, después de esta ley y de la Constitución de 1857, la desamortización de tierras comunales continuó hasta inicios del siglo XX, este tema es bastante complejo y amerita un estudio más a fondo con casos locales y regionales para explicar clara y puntualmente como fue este proceso de desamortización de las tierras comunales.[36] Entre otros de los problemas relacionados con los pueblos indígenas, y también los no indígenas, estaba la situación política y legal de ser un pueblo cabecera de cantón, departamento o municipio, o ser un pueblo sujeto o dependiente de los anteriores, los casos y reclamos pueden ser varios a lo largo del siglo XIX, pero para explicar el asunto expondré solo algunos.

Entre enero y junio de 1857 el jefe político de Colotlán, Ignacio Suárez, informó al secretario de gobierno del estado que en la localidad de San Andrés del Teúl apenas habitaban entre veinte y treinta familias, por lo que la mayor parte del vecindario había fijado su residencia en la hacienda del Refugio, que estaba amurallada y era propiedad de Julián Mier, quien perseguía a los indios y protegía a sus peones. Por lo que las autoridades del lugar se sentían seguros en la mencionada hacienda, y propusieron crear una fuerza de veinticinco hombres disciplinados y montados, que estuvieran disponibles para el servicio público, en tanto que Mier había reunido una población de más de mil habitantes. El jefe político pidió autorización al gobernador del estado para que las autoridades del lugar fijaran su residencia en la hacienda mencionada, dicho jefe político creía que se publicaría una nueva Constitución mexicana y que el municipio de San Andrés Teúl sería agregado al estado de Zacatecas.[37]

Ignacio Suárez tenía una opinión muy favorable, diría casi servil y paternalista, con respecto al hacendado Julián Mier, a quien describió como

[36] Ver Valerio (2021).

[37] AHJ. G-5-857 CON719. Divisiones políticas y territoriales. Ignacio Suárez, Colotlán, 19 de enero-18 de junio de 1857.

una persona con fuertes "sentimientos de humanidad", que "a nadie niega la hospitalidad de su casa" y que era un hombre "patriota" y "útil a la sociedad". Por otra parte, el jefe político aclaró que había como quinientos habitantes indígenas que no veían "con buenos ojos" a los "hombres de raza blanca", y que tenían "pretensiones imprudentes" con los que no se podía negociar, ya que siempre se habían sublevado asesinando a otros, como pasó en 1825 cuando mataron a los miembros del ayuntamiento y a algunos vecinos, obligando al cura a escapar a Durango. El jefe político finalizó su informe anexando la solicitud al gobernador elaborada por los propios indígenas en la que hablaban de su pasado y la negativa que habían tenido las autoridades civiles y eclesiásticas para establecerse en el pueblo de San Andrés Teúl, por lo que pidieron que las fuerzas que se hallaran en la hacienda del Refugio se establecieran en dicho pueblo.[38]

En otro caso, el jefe político de Sayula, J.M. Darío Vargas, informó al secretario de gobierno que quedó enterado de la comunicación del gobernador del estado en el que decía que los ciudadanos de Tonaya expresaron que no pertenecían al departamento de Tuxcacuesco, y que querían tener independencia de la villa de Tuxcacuesco. Según el jefe político, los de Tonaya pedían una cosa fuera de la ley y lo culpaban por ello, ya que deseaban mantenerse independientes de la cabecera de su ayuntamiento. El jefe político explicó que el problema se derivaba de que en otras épocas algunos pueblos habían tenido ayuntamiento y que a la fecha carecían de él, pero que eso no era una excusa para buscar su "libertad". El secretario de gobierno le contestó al jefe político que a los vecinos de Tonaya no se les agregara a la municipalidad de Tuxcacuesco.[39]

Por otra parte, el 19 de agosto de 1857, el gobernador del estado de Jalisco, Anastasio Parrodi transcribió un oficio al jefe político del cantón de Guadalajara donde le dijo que el director de Zapopan le informó que

[38] AHJ. G-5-857 CON719. Divisiones políticas y territoriales. Ignacio Suárez, Colotlán, 19 de enero-18 de junio de 1857.

[39] AHJ. G-5-857. CIG/3557. Divisiones políticas y territoriales. J.M. Darío Vargas, Zapotlán el Grande, 13 de mayo de 1857.

el indígena Apolonio Flores, vecino de San Cristóbal, pidió informes a las autoridades de ese lugar sobre un predio denominado "La Escondida", perteneciente al fundo legal del pueblo de San Cristóbal, y que nunca había tenido el carácter de comunidad, según le dijeron varios vecinos antiguos del lugar. Por lo que Apolonio Flores y otros indígenas solicitaron el reparto del terreno. El jefe político de Guadalajara manifestó que dicha jefatura no se entendía sobre ese tema en particular, por carecer de datos para ello.

El dictamen del Congreso del estado sobre este asunto estipuló que una vez dadas las leyes sobre reparto de terrenos de las extinguidas comunidades de indígenas, y ejecutados los repartos por el gobierno, ya nada tenía que hacer dicho gobierno en estos temas, pues dicha ley estableció que "las primeras autoridades políticas de los Cantones y Departamentos, harían que los Ayuntamientos y las comisiones respectivas cumplieran estrictamente con todo lo que contenían las disposiciones de ley". Pero que si los indígenas ignoraban el modo de hacer valer sus derechos ante las autoridades correspondientes para hacer efectivo el reparto de tierras, podían recurrir con el abogado de indígenas para que éste se dirigiera ante el juez de indígenas, para no tener que recurrir frecuentemente al gobierno con "solicitudes impertinentes", por lo que el Congreso declaró lo siguiente:

> 1. Que se le diga al indígena Flores que ocurra a deducir sus derechos ante las autoridades que corresponde pudiendo valerse del Abogado de Indígenas para que sea dirigido con acierto.
>
> 2. Dirigirse al Director de Zapopan para informarle que la empresa del indígena Flores y otros semejantes debe hacerse conforme a las leyes y según queda indicado en el dictamen consultando las dudas que le queden con alguno de los jueces letrados de esta Capital.[40]

[40] AHJ. G-9-857. ZAP/3569. Asuntos indígenas. Anastasio Parrodi. Guadalajara, 19 de agosto de 1857.

El 10 de noviembre de 1857, Miguel Contreras Medellín, jefe político del cantón de Guadalajara, envió una circular a los directores de los departamentos de ese cantón, donde se les ordenaba organizar fuerzas de seguridad, principalmente para prevenir desórdenes o alzamientos indígenas, además de visitar los pueblos de sus departamentos para observar su conducta y hacerles saber que "tienen un gobierno verdaderamente parental".[41] La circular refleja claramente la concepción paternalista que tenían las autoridades políticas con respecto a los indígenas del estado.

El 30 de enero de 1858, el jefe político de Colotlán, José de Jesús V. Borrego, informó al secretario de gobierno de la situación de los indígenas sublevados de la Sierra de Nayarit, mencionando que el comisario de San Juan dijo al alcalde de Huejuquilla que había tomado la sublevación de los pueblos indígenas de dicha sierra y que estos podían llegar a Mezquitic y Huejuquilla en donde también se estaban sublevando. El jefe político tomó disposición, pero que carecía de armas y parque. Sin embargo, aseguraba que los indígenas de esa sierra permanecían aún tranquilos debido a las exhortaciones que les había hecho personalmente. Por su parte, el jefe político de Tepic, dijo que trataría de evitar los ataques de los sublevados.[42]

El jefe político del cantón de Guadalajara, el 25 de marzo de 1879, informó al secretario de gobierno sobre el reparto de terrenos a los indígenas de Tonalá. Dicho jefe político recibió la orden de proceder a expedir los títulos de los terrenos que se repartieron a los indígenas, sin cobrarles ninguna retribución.[43] El 14 de septiembre de ese año el jefe político del primer cantón dijo que se había aprobado el reparto de terrenos de la

[41] AHJ. G-15-857. GUA/118. Seguridad Pública. Miguel Contreras Medellín. Guadalajara, 10 de noviembre de 1857.

[42] AHJ. G-15-858. CON/257. Seguridad Pública. José de Jesús V. Borrego, Colotlán, 30 de enero de 1858.

[43] AHJ. G-9-881. TON/3570. Asuntos indígenas. Jefe político. Guadalajara, 29 de septiembre de 1881.

cofradía de Jesús Nazareno, y que avisaría a la comisión repartidora de terrenos de los indígenas de Tonalá.[44]

Por su parte, Francisco Castillo, jefe político de Colotlán, el 20 de mayo de 1884, informó al secretario de gobierno que el director político de Teocaltiche le dijo que el juez de acordada del pueblo de Asqueltán avisó que cinco días antes de la fecha mencionada, se reunieron en el rancho de Las Moras Filomeno Chávez, Agustín Reyes y Silverio Morales para solicitar ocho cajones de parque y formar una gavilla de unos treinta hombres, y que ahora se le pidió que los capture. Más adelante se informó que la revuelta fue disuelta con la muerte de Miguel Casillas, uno de los principales "revoltosos" de Huilacatitlán. También se ordenó a la autoridad política de Chimaltitlán que prestara auxilio para capturar a Francisco Flores y demás indígenas de Huilacatitlán que resultaran culpables del delito de rebelión y lograr cuanto antes la obediencia de los indígenas revoltosos en estos lugares, principalmente en Bolaños.[45]

Los miembros de la comisión repartidora de tierras de Huejúcar enviaron al jefe político de Colotlán una carta el 12 de marzo de 1888, para que intercediera con el gobernador del estado y se les autorizara los nombramientos que dicha comisión hizo a varios guardabosques para desempeñar su trabajo en las propiedades de la comunidad de Huejúcar. Rosendo Corona, miembro de la comisión repartidora, dijo que los pueblos de Nostic, Mezquitic y Tensompa carecían de títulos de propiedad, y que algunas haciendas estaban invadiendo sus terrenos. Corona aseguró que dichos pueblos tenían la mejor disposición de adquirir los títulos erogando los gastos para ello. Estos pueblos así como el de Huejuquilla el Alto se quejaban de que algunos hacendados del estado de Zacatecas habían invadido la propiedad de sus respectivos pueblos, valiéndose de la falta de títulos correspondientes. Dijo Corona que algunas otras haciendas tales como el Hipazote, se quejaron de iguales invasiones, lo que de no tomarse medidas enérgicas, no solo podría ocasionar la pérdida de

[44] AHJ. AG-6-900. Agricultura y ganadería.

[45] AHJ. G-9-884. CON/3784. Indios. Francisco Castillo, Colotlán, 20 de mayo de 1884.

propiedades para ellos, sino también la de una gran extensión de terreno para el estado de Jalisco.[46]

El 6 de mayo de 1888, el jefe político del cantón de Colotlán, Francisco Castillo Ramos, informó al gobernador del estado de Jalisco que los indios huicholes de los pueblos de Santa Catarina, San Sebastián y San Andrés Cohamiata celebraron un convenio respecto a los límites de las tierras de sus pueblos, porque esto había sido causa de conflictos. El contenido de dicho informe dice que Porfirio Guevara, indio del pueblo de San Sebastián, se quejó el 21 de marzo de ese año ante el gobernador del estado porque en mayo de 1887 los indios de Santa Catarina se metieron a los terrenos de los indios de San Sebastián, "ultrajando los derechos de éstos". Los de Santa Catarina echaron las medidas a su voluntad en tierras de los de San Sebastián. No hubo desgracias que lamentar porque las autoridades de San Sebastián no estaban en esos momentos. Pero los de San Sebastián luego se quejaron ante el jefe político de Colotlán, quien mandó un oficio a las autoridades de Santa Catarina exigiéndoles que no anduvieran tirando medidas ni poniendo mojoneras. Los de San Sebastián admitieron no tener títulos primordiales, porque se les fueron destruyendo con el tiempo, pero que tienen una copia de ellos. Mientras los de Santa Catarina seguían invadiendo sus tierras. Los indios de ambos pueblos eran contrarios, por lo que fue necesario que las autoridades estatales intervinieran para poner orden y solucionar el problema. Porfirio Guevara también se quejó ante el gobernador del estado de que los huicholes de San Andrés y San Sebastián invadían constantemente los terrenos pertenecientes a los de Santa Catarina.[47]

Después el jefe político del cantón de Colotlán escribió al gobernador del estado de Jalisco comunicándole que fueron citados los indios de los tres pueblos mencionados porque tenían problemas de límite de tierras,

[46] AHJ. G-9-888. HUR/3458. Asuntos indígenas. Victoriano Cerujo, et al. Colotlán, 12 de marzo de 1888.

[47] AHJ. G-9-888. CON/1803. Asuntos indígenas. Jefe político. Colotlán 28 de mayo de 1888.

con el fin de que llegaran a un arreglo. El jefe político dijo que los hizo entender que estaba mal que echaran medidas sin autorización, también les hizo comprender la desunión con la que se trataban, dando lugar para que el gobierno los castigara, también les hizo entender que le debían adhesión y obediencia al gobierno del estado, de tal manera que, según el jefe político, los habitantes de los tres pueblos huicholes, junto con sus autoridades manifestaron su conformidad de quedar unidos, sin diferencias, y con el acuerdo de que cuando se establecieran los límites de las tierras acudirían a los tribunales competentes, por lo que dichos pueblos estaban en paz.[48] El gobernador del estado de Jalisco le contestó al jefe político de Colotlán el 29 de mayo siguiente, recomendándole que hiciera lo posible para que se fijaran los límites que tuvieran las propiedades y dependencias de dichos pueblos, para evitar que siguieran surgiendo los conflictos entre ellos por este motivo.[49]

Unos meses después, el 12 de julio de 1888, el director político del departamento de Bolaños, del 8° cantón, Marcelino Zepeda, informó al gobernador del estado, el general Ramón Corona, que por los rumbos más alejados de la sierra se encontraban varios individuos que pertenecían a "las chusmas de Lozada". Sostuvo el director político que como aquellos lugares estaban muy lejos tanto de Bolaños como de Tepic, esos individuos estaban fuera del alcance de ambos gobiernos, y esa era el motivo por lo que los habitantes de aquellos pueblos estaban a expensas de los abusos de estos grupos. Marcelino Zepeda propuso como solución colonizar el cañón de Comatlán "con gente honrada". Agregó que con "la revolución, que por tanto tiempo sostuvieron por aquellos rumbos Lozada y Rentería, destruyeron del todo los pueblos de San Juan B. de Comatlán, Ostoc, Santiago de Acaspulco y otros pertenecientes al departamento de Bolaños. Apropiándose de los terrenos como sucedió en Palos Colorados,

[48] AHJ. G-9-888. CON/1803. Asuntos indígenas. Jefe político. Colotlán 28 de mayo de 1888.

[49] AHJ. G-9-888. CON/1803. Asuntos indígenas. Jefe político. Colotlán 28 de mayo de 1888.

Tlaxcala y otros muchos ranchos que eran estancias de la hacienda de Comatlán". Además, Zepeda señaló que un individuo llamado Mariano García poseía la hacienda de Comatlán, pagando una renta insignificante de 35 pesos anuales, sin que hubiera presentado documento alguno que acreditara quién se la había rentado.[50]

Al año siguiente, en ese mismo cantón de Colotlán, el director político de Mezquitic informó el 30 de marzo de 1889, al jefe político del cantón, Francisco Castillo Ramos, que el gobernador indígena de San Andrés Cohamiata, se presentó ante él, para quejarse de que Benigno Soto, dueño de la hacienda de San Juan, quería poner un rancho en terrenos que poseían los huicholes del pueblo de San Andrés, por lo que pidieron a una persona capaz para establecer los límites entre los terrenos del pueblo y de la hacienda de San Juan. El gobernador le respondió al jefe político de Colotlán que acudieran ante el juez correspondiente.[51] En otro caso, el 4 de diciembre de 1889, los indígenas del pueblo de San Juan Peyotán, enviaron una carta al juez de dicho pueblo para denunciar que los huicholes del pueblo de San Andrés Cohamiata, del cantón de Colotlán, habían estado tratando de usurparles un pedazo de terreno y amenazándolos con el lanzamiento, por lo que solicitaron al gobierno las medidas necesarias para evitar graves consecuencias. Dicha carta se transmitió al jefe político de Colotlán.[52]

Por otra parte, en el 6° cantón, el 27 de mayo de 1890, Mateo Gómez, representante indígena de la Comisión repartidora de terrenos de Tenamaxtlán, solicitó la intervención del jefe político, debido a los problemas que tenían con los propietarios de ganado que invadían constantemente los terrenos de la comunidad. Los hacendados se oponían al reparto de

[50] AHJ. G-5-888. BO/3438. Divisiones políticas y territoriales. Marcelino Zepeda. Bolaños, 12 de julio de 1888.

[51] AHJ. G-9-889. CON/1959. Asuntos indígenas. Francisco Castillo Ramos. Colotlán, 30 de marzo de 1889.

[52] AHJ. G-9-889. CON/3456. Asuntos indígenas. Jefatura política de Tepic. Tepic, 4 de diciembre de 1889.

terrenos, ya que dichos terrenos estaban cercanos a la laguna, pero que pertenecían al pueblo. Mateo Gómez denunció que las autoridades del ayuntamiento y el subreceptor de rentas del lugar estaban del lado de los hacendados y que los ganados pastaban ilegalmente. Los hacendados se opusieron al reparto de terrenos en los pueblos de Tenamaxtlán, Tecolotlán, Soyatlán y Atengo, y denunciaron que los hacendados estando "ebrios hacen escándalos a mano armada y a caballo haciendo santiaguitos, que refluyen siempre contra las personas de dichos indígenas". Gómez pidió la intervención personal del gobernador del estado o, por lo menos, la intervención del jefe político del 6° cantón, para que la comisión tuviera garantías. El gobernador le contestó que debían acudir al juez correspondiente.[53]

El director político de Bolaños, informó el 17 de marzo de 1892, que desde hacía varios años el ayuntamiento de Chimaltitán se había apoderado del rancho de Pisotita, perteneciente al ayuntamiento de Bolaños, y que este ayuntamiento tenía los títulos que lo acreditaban, este reclamo se debió a que el ayuntamiento de Bolaños carecía de fondos.[54] Un par de meses después, el 16 de mayo de 1892, el jefe político del 8° cantón informó al secretario de gobierno del estado sobre la queja de varios vecinos de Colotlán y de indígenas de Santiago Tlaltelolco, debido a que los empleados de la hacienda de Santa María de los Ángeles habían contenido el agua del río de dicha ciudad, el uso común de esas aguas estaba establecido desde 1798 entre Santa María, Santiago y Colotlán, por lo que solicitaron que se resolviera este problema.[55]

En el primer cantón del estado, el 13 de octubre de 1892, el director político de Zapopan informó que en la municipalidad de Tala los pro-

[53] AHJ. G-9-890. TEN/3585. Asuntos indígenas. Mateo Gómez. Tenamaxtlán, 27 de mayo de 1890.

[54] AHJ. G-5-892. BO/3453. Divisiones políticas y territoriales. Director político. Bolaños, 17 de marzo de 1892.

[55] AHJ. F-6-892. CON/1022. Abastecimiento de agua. Jefe político. Colotlán, 16 de mayo de 1892.

pietarios de las haciendas de El Refugio y Cuisillos se negaban a vender leña seca a los indígenas de dicho pueblo. Los indígenas y vecinos de Tala se quejaron ante el gobernador de Jalisco, el 22 de septiembre de ese año, diciendo que en los terrenos cercanos a dicha villa no había montes de donde tomar la leña necesaria para sus usos, pues solo había leña en las haciendas de El Refugio y Cuisillos, propiedad de Feliciano Orendain y Manuel Gortázar, respectivamente. Para tomar la leña, que según los indígenas, se desperdiciaba en las mencionadas haciendas, necesitaban el permiso de los propietarios o la orden de los mismos para que se les vendiera. Los indígenas de Tala alegaban que el consumo de leña era una necesidad imprescindible para ellos, no habiendo de donde tomarla en dicho pueblo, y no queriendo usar de ninguna manera la violencia en contra de la propiedad ajena, suplicaban al gobernador del estado que interviniera para poder cumplir sus necesidades, y protestaban "obrar siempre de buena fe y como buenos ciudadanos". Los hacendados involucrados en este asunto respondieron a través de sus administradores, en el caso de la hacienda de Cuisillos, su administrador dijo el 6 de octubre siguiente, que sí se les había negado a los indios sacar leña de los terrenos de la hacienda, debido a los muchos desórdenes o abusos, por lo que la hacienda sufría graves prejuicios. Por su parte, el 7 de octubre el administrador de la hacienda de El Refugio contestó que, al igual que a las autoridades, a él le preocupa la situación de esa población. Agregó que hacía algún tiempo el propietario de la hacienda les daba y les vendía la leña que necesitaban, pero que después tomó la resolución de suspender ese tráfico sin estar el administrador de la hacienda enterado de los motivos para esa suspensión.[56]

Por su parte, el director político de Tala informó el 19 de octubre, que era verdad la falta de leña en el pueblo de Tala, pero que también era verdad lo de los desórdenes y abusos a los que se referían los encargados de las haciendas, por lo cual recomendó que los propietarios de las haciendas

[56] AHJ. F-9-892. ZAP/1129. Industria y comercio. Director político. Zapopan, 13 de octubre de 1892.

vendieran la leña, comisionando a una persona para su venta, y que los guardamontes castigaran a las personas que, sin permiso, sacaran leña de los terrenos de las mismas. El secretario de gobierno del estado dijo el 19 de octubre que era imposible obligar a los propietarios a vender leña de sus haciendas, y que solo quedaba el conducto particular para arreglar este negocio, para ello sugirió que se comisionara a alguien, y que a nombre del gobernador hablara con los dueños de las haciendas sobre el tema.[57]

Los problemas del reparto de tierras a veces duraban muchos años, fue el caso del pueblo de Mixtlán, en el departamento de Mascota, cuyo expediente abarca una temporalidad de 1898 a 1910, contiene escritos de los indígenas de Mixtlán en los cuales se solicitó el reparto de terrenos que no fueron hechos por la Comisión repartidora, entre otros documentos.[58] El 5 de febrero de 1898, un grupo de vecinos del pueblo de Mixtlán se dirigieron al comisario político del lugar, manifestando que eran jornaleros originarios de dicho pueblo. Declararon que en 1850 la Comisión Repartidora de Terrenos asignó a cada uno de los vecinos del pueblo la porción de terreno que a cada uno le correspondió, y quedó reconociendo la propiedad y el dominio de los mismos descendientes de aquellos quienes recibieron terrenos en dicho reparto. El reparto de tierras quedó concluido en 1851. Pero los vecinos agregaron que con el tiempo, algunas tierras repartidas fueron quedando en manos de Gregorio Pérez, quien era miembro de la Comisión Repartidora de Terrenos. Pérez conservó en su poder todos los documentos relativos, como son los títulos del pueblo y la matrícula del reparto de tierras. Después del fallecimiento de Gregorio Pérez, los documentos pasaron a manos de sus descendientes, quienes se autonombraron como representantes del pueblo sin legalidad alguna. Dijeron los vecinos firmantes, que los descendientes de Pérez se habían aprovechado de los terrenos de los "ausentes"

[57] AHJ. F-9-892. ZAP/1129. Industria y comercio. Director político. Zapopan, 13 de octubre de 1892.

[58] AHJ. G-9-898. MIX/3598. Asuntos indígenas. Emigdio Hernández, et al. Mixtlán, 1° de enero de 1898.

y aun de los presentes, aprovechándose de la ignorancia de éstos últimos, vendiendo terrenos y abusando de la confianza de los demás vecinos del pueblo. Los firmantes del documento pidieron que interviniera la autoridad política para que les quitara los títulos a estas personas y el cargo que estaban desempeñando.[59]

Las autoridades del gobierno de Jalisco investigaron el caso el 3 de junio de 1898, y encontraron que los vecinos de Mixtlán ya se habían quejado anteriormente en términos parecidos el 7 de mayo de 1896. En esta última fecha les respondieron por medio del jefe político del 10° cantón, que dado que ya se había efectuado el reparto de terrenos de Mixtlán, no se podía ordenar un nuevo reparto de las fracciones a la que ellos se referían, pero que si se creían con derecho a alguna parte de dichos terrenos acudieran a la autoridad judicial correspondiente. En 1898 el gobierno del estado les contestó lo mismo que les había contestado dos años antes: que se dirigieran a la autoridad judicial correspondiente. El 21 de octubre de 1903, el presidente municipal de Atenguillo informó al jefe político de Mascota, que no todos los que reclamaban tierras eran indígenas, que los indígenas que se autonombraban como representantes del pueblo no tenían una base legal para ello, y que estaban haciendo ventas fraudulentas con los terrenos de los "ausentes" o de personas que habían muerto sin dejar sucesión. El munícipe de Atenguillo informó que otro indígena del pueblo había vendido terrenos a particulares de forma ilegal. En conclusión, dijo el presidente municipal de Atenguillo que los indígenas de Mixtlán frecuentemente se perjudicaban unos a otros con las usurpaciones de terrenos que llevaban a efecto, y que también, frecuentemente se quejaban de tales usurpaciones personas que no tenían ningún derecho para ello, como a la fecha sucedió.[60]

[59] AHJ. G-9-898. MIX/3598. Asuntos indígenas. Emigdio Hernández, et al. Mixtlán, 1° de enero de 1898.

[60] AHJ. G-9-898. MIX/3598. Asuntos indígenas. Emigdio Hernández, et al. Mixtlán, 1° de enero de 1898.

El 17 de julio de 1904, los vecinos de Mixtlán acusaron que fueron amenazados por el comisario político del pueblo, y por los señores Juan Martínez, Gonzalo Becerra y socios, porque se oponían a la venta de los terrenos en cuestión. El conflicto continuó con oficios y peticiones ocursos y reclamaciones, más otras aclaraciones, y hacia 1910 todavía no se había resuelto nada. El 7 de octubre de 1910, el gobernador del estado de Jalisco respondió a los indígenas de Mixtlán que no era de su competencia el problema de tierras, sino de la autoridad judicial correspondiente, ante la que deberían acudir y hacer valer sus derechos.[61] El expediente de Mixtlán es muy importante porque muestra que el problema por la tierra de los pueblos indígenas tiene orígenes muy antiguos, incluso anteriores a las Ley Lerdo de 1856, más bien, comenzó con las primeras reformas desamortizadoras de las décadas de 1830 a 1850, cuando comenzaron a repartirse, individualizarse y privatizarse los terrenos que antes eran de las comunidades indígenas o de su "fundo legal".

En otro litigio, Fernando Sustersic,[62] apoderado y representante de la Amparo Mining Company, quien el 18 de julio de 1905 se dirigió al gobernador de Jalisco diciéndole que la compañía era dueña del rancho La Embocada, antes llamado La Estanzuela, el cual estaba situado en la municipalidad de Etzatlán. La compañía minera La Armonía, compró dicho rancho el 20 de agosto de 1903. Este rancho lindaba con las tierras del pueblo de Oconahua, de las que se habían practicado varios deslindes en los años de 1753, 1894 y 1904 de forma legal. Sustersic dijo que la compañía minera había estado siempre en posesión de dichos terrenos y que algunas veces fue despojada de un terreno denominado El Nogal, que luego le fue restituido por la Suprema Corte de Justicia. Sostiene Sustersic que los indígenas de Oconahua alegaban tener derechos, pero que ellos no habían justificado legalmente esos derechos, y que pretendían hacer invasiones de terrenos que eran propiedad de la compañía

[61] AHJ. G-9-898. MIX/3598. Asuntos indígenas. Emigdio Hernández, et al. Mixtlán, 1° de enero de 1898.

[62] Fernando Sustersic era súbdito austriaco.

minera que representaba. Dijo el gerente Sustersic que los indígenas de Oconahua alegaban que eran víctimas de un despojo cometido hace casi dos siglos y que habían hecho que la autoridad local tratara de inmiscuirse en cuestiones que no le correspondían. También dijo Sustersic que el comisario político de Oconahua se dirigió a él ordenándole que retirara a los empleados de la compañía que abrían brecha dentro de los terrenos de La Embocada, o de lo contrario actuaría en su contra acusándolos de destrozos. Sustersic temía que las autoridades locales cometieran atropellos en contra de los empleados de la compañía minera. Por lo que se dirigió al gobernador del estado quejándose del comisario político de Oconahua, y le pidió que ordenara al comisario que se abstuviera de tomar partido en cuestiones que no eran de su incumbencia, dejando a salvo los derechos de los vecinos de Oconahua para que los defendieran ante las autoridades judiciales.[63]

El jefe político del cantón de Ahualulco le trasmitió al gobernador de Jalisco que el encargado de cuidar los montes pertenecientes a la comunidad indígena de Oconahua, le avisó que el 4 de julio de 1905, algunos empleados de la Amparo Mining Company, habiendo invadido los terrenos de los indígenas, pasando de la línea del Nogal Colorado, que posee la compañía, a la parte sur de Oconahua, donde se hallaban los terrenos que son propiedad de los indígenas. El guardabosques nombró una comisión entre los indígenas que más sabían sobre los linderos del pueblo y los mandó a inspeccionar los trabajos que estaban desarrollando los empleados de la compañía, resultando que en opinión de los indígenas de la comisión, los destrozos de árboles se hicieron en terrenos del pueblo, lo que causó irritación entre la gente del pueblo y le pedían aprehender a los invasores, a lo que no accedió el guardabosques, pero prometió tratarlo

[63] AHJ. G-9-905. ET/719. Asuntos indígenas. Fernando Sustersic. Guadalajara, 18 de julio de 1905.

con las autoridades. El guardabosques era el mismo comisario de Oconahua, y él mismo se dirigió al gerente de la compañía minera.[64]

La causa de la queja era que los empleados de la compañía minera estaban abriendo un camino por dichos terrenos. El comisario político dijo, el 3 de julio de 1905, que las invasiones habían causado alarma, pues los vecinos del pueblo veían lesionados sus bienes y pedían que fueran aprehendidos los autores de los destrozos. Por ello creyó conveniente dirigirse a la jefatura política de Ahualulco para solicitar órdenes a fin de evitar dichos destrozos e invasiones en terrenos de los indígenas. El gerente de la compañía minera le dijo al comisario político que los terrenos en cuestión eran de dicha compañía, de acuerdo a los juicios de deslinde que se mencionaron y que los vecinos del pueblo de Oconahua nunca apelaron esas resoluciones en su momento.[65]

El segundo jefe de la gendarmería del estado informó el 13 de agosto de 1905 al gobernador, que al pasar por el terreno denominado El Nogal Colorado, jurisdicción de Etzatlán, se encontró con cuatro individuos armados con carabinas y pistola, mozos del señor Fernando Sustersic, y que tenían la orden de cuidar y hacer carbón en los terrenos que se disputaban la compañía minera y el señor Daniel Romero. Este último se presentó ante el segundo jefe de la gendarmería diciendo que no era legal que se sacara nada de dicho lugar hasta que no terminara el juicio, y solicitaba que el gendarme los echara afuera. A lo que contestó el jefe de gendarmes que solamente un juez lo podía hacer y que no eran de sus atribuciones el hacerlo. Dos días después de esta conversación, Daniel Romero junto con otros individuos detuvieron a cinco mozos de la compañía minera que estaban cargando carbón en los terrenos que disputaban Romero y la compañía. Los mozos fueron llevados a la gendarmería, pero los gendarmes no participaron en la aprehensión. Daniel Romero era propietario

[64] AHJ. G-9-905. ET/719. Asuntos indígenas. Fernando Sustersic. Guadalajara, 18 de julio de 1905.

[65] AHJ. G-9-905. ET/719. Asuntos indígenas. Fernando Sustersic. Guadalajara, 18 de julio de 1905.

del rancho de San José de Tlachichico, fue quien aprehendió a los mozos de la compañía minera, porque llevaban madera y carbón de los terrenos del rancho en cuestión.[66]

Antonio Pérez Verdía era apoderado de la Amparo Mining Co., en tanto que Juan R. Zavala fue socio de la compañía minera denominada La Armonía, la cual fue dueña de tres acciones de terreno en La Embocada. La Armonía vendió mina y terreno a la compañía de origen norteamericano denominada Amaparo Mining Co. Nueve años antes de la venta, La Armonía promovió un juicio de deslinde para poner claros sus límites, pero dicho juicio todavía no concluía en 1905. Dijo Zavala el 5 de septiembre de ese año, que la Amparo Mining Co. había respetado hasta antes del conflicto las propiedades de sus vecinos, pero que con el cambio de gerente, es decir, con la llegada de Fernando Sustersic, se volvió insoportable. Este gerente por su propia cuenta envió empleados armados y mando allanar las casas que Daniel Romero tenía en las carboneras del punto referido como Agua Hedionda, y sacó a los sirvientes de Romero, llevándolos amarrados hasta Ahualulco, en donde los soltaron por falta de méritos. También mandó sacar leña y carbón, destruyendo árboles para abrir brechas en terrenos de los indígenas de Oconahua. Zavala acusó a Sustersic de querer provocar un conflicto internacional, pues sus hechos injustos podían producir un ataque de los que se sentían lastimados.[67]

El 9 de octubre de 1905, el escuadrón de gendarmes se encontró con 34 indígenas de Oconahua, al mando de Severo Barajas, vigilando a un ingeniero de la compañía minera, quien hacía un reconocimiento de los terrenos. Los indígenas le dijeron al ingeniero que suspendiera los trabajos, a lo que contestó el profesionista que solamente lo haría con una orden de la autoridad competente y no de otra manera. Como los indígenas vieron a los gendarmes, entonces el tono cambió, diciendo los indíge-

[66] AHJ. G-9-905. ET/719. Asuntos indígenas. Fernando Sustersic. Guadalajara, 18 de julio de 1905.

[67] AHJ. G-9-905. ET/719. Asuntos indígenas. Fernando Sustersic. Guadalajara, 18 de julio de 1905.

nas que los trabajos se estaban haciendo en terrenos del pueblo, a lo que contestó el ingeniero, que eso lo podrían hacer valer ente un juzgado. El cabecilla de los indígenas le preguntó al capitán de gendarmes que cuántos eran sus hombres, a lo que contestó el jefe de gendarmes: "andamos muchos y al mismo tiempo cumplimos con nuestro deber, para conservar el orden". Luego el grupo de indígenas se retiró para su pueblo, el grupo estaba desarmado.[68]

Elecciones

La cuestión político electoral no era ajena a los jefes políticos, sin embargo sus injerencias deben estar bien explicadas, por ejemplo, el 9 de enero de 1836, Miguel Hernández Rojas, jefe político del cantón de Guadalajara, informó al gobernador del Departamento que el director político de Tlajomulco le avisó sobre las elecciones celebradas en los pueblos de Ahuisculco y Santa Anita, pertenecientes al distrito de Tlajomulco, para elegir las secciones que se debían registrar en dichos lugares en ese año, el jefe político señaló que había fallas sustanciales.[69]

El 13 de enero de 1905 los vecinos o indígenas de Itzicán, perteneciente al municipio de Poncitlán, se quejaron ante el gobernador del estado de que el comisario político del pueblo, Domingo Méndez, les había dicho que habría elecciones para elegir al comisario de dicho pueblo tanto de propietario como de suplente, pero que el día señalado para efectuar las elecciones de comisario, el mismo Méndez les dijo que ya no habría elecciones, "que quedaban nombrados tales y cuales señores", los vecinos del pueblo opinaron que dichos señores no convenían a sus intereses. Entonces Domingo Méndez les dijo que no había más elecciones que las hechas por él y el señor subdirector de Poncitlán, y que quedaban electos Toribio Hernández y Benjamín Cruz. Los vecinos del pueblo protesta-

[68] AHJ. G-9-905. ET/719. Asuntos indígenas. Fernando Sustersic. Guadalajara, 18 de julio de 1905.

[69] AHJ. G-7-836 TLZ/40. Elecciones. Miguel Hernández Rojas. Guadalajara, 9 de enero de 1836.

ron contra dicha imposición, y acusaron que el subdirector de Poncitlán apresó a Manuel Flores y a Doroteo Maldonado sin ningún motivo, por lo que pidieron su liberación y la realización de elecciones para comisario y suplente del pueblo.[70]

El jefe político de La Barca, el 19 de enero de 1905 y a petición del gobernador del estado, dijo que San Pedro Itzicán "era un pueblo de indígenas enteramente torpes", y que "solo había uno que otro individuo que mal escribía, de los cuales se sirve la autoridad para que lo ayuden en el desempeño de su cargo, y por eso es que siempre son nombrados los comisarios a satisfacción de la misma autoridad". Agregó que en dicho pueblo no se verificaban elecciones por ser una simple comisaría de policía, y que no había ninguna ley que autorizara las elecciones a que se refieren los indígenas. Afirmó que las detenciones de Doroteo Maldonado y Manuel Flores se debieron a faltas cometidas por éstos en contra del comisario de dicho pueblo.[71]

También en el pueblo de San Miguel de Zapotitlán, en el departamento de Poncitlán, el 25 de enero de 1905, los vecinos del pueblo enviaron una carta al gobernador del estado diciendo que fueron electos o designados por el ejecutivo y a moción de la mayoría, Julián Hernández y Marcos Campos, para el puesto de comisarios de policía, ya que eran personas dignas de confianza del pueblo y mirarían por sus intereses en justicia. Pero denunciaron que estos no hubieran podido tomar su puesto y no sabían por qué, pues los antiguos comisarios Santos García y Felipe Estrada seguían desempeñando dichos cargos. Por eso acusaron a la autoridad de Poncitlán de ser la causa del problema, dado que poco o nada les preocupaba el bienestar del pueblo. Por lo que pidieron al gobernador que ordenara poner en sus puestos a las personas elegidas por ellos.[72]

El director político de Poncitlán, Jesús Torres, le dijo al gobernador del estado el 27 de enero de 1905, que el motivo de la queja de los vecinos de

[70] AHJ. G-12-905. PO/487. Personal. Juan Ramírez. Poncitlán, 13 se enero de 1905.

[71] AHJ. G-12-905. PO/487. Personal. Juan Ramírez. Poncitlán, 13 se enero de 1905.

[72] AHJ. G-12-905. PO/510. Personal. Carlos Sepúlveda. Poncitlán, 25 de enero de 1905.

San Miguel Zapotitlán, era igual al que anteriormente tenían los vecinos de San Pedro Itzicán, pues dichos pueblos eran simples comisarías de policía y sus comisarios eran nombrados por la autoridad política de Poncitlán, escogiendo siempre a los individuos más aptos para el desempeño de dicho cargo. Agregó que los señores que pedían los vecinos del pueblo para ocupar dichos cargos, Ignacio Hernández y Marcos Campos, el primero era de pésimos antecedentes y el segundo no sabía leer ni escribir, por tal motivo eran enteramente inconvenientes. Que habiendo citado el jefe político a los firmantes de la carta, éstos dijeron que "como son tan ignorantes no saben ni lo que decía el ocurso", que el licenciado David Gutiérrez Allende, vecino de esa ciudad lo hizo, y que ellos nomás lo firmaron, sin saber qué decía. El gobernador apoyó la decisión del director político de Poncitlán y así se lo comunicó a los vecinos firmantes de San Miguel Zapotitlán el 31 de enero de ese año.[73]

Las elecciones o designación de comisarios municipales suscitaban violentos enfrentamientos entre los distintos grupos de vecinos que apoyaban a uno o a otro candidato, como ocurrió en diciembre de 1905, en el pueblo de Huisculco, municipio de Yahualica, donde de la disputa entre distintos partidos resultó el asesinato de una persona del mismo pueblo. El problema sucedió porque el comisario en funciones estuvo en contra de la "candidatura oficial" y apoyó a otro partido; en las elecciones llevadas a cabo triunfó el partido apoyado por el comisario en funciones, lo que derivó en violencia. El director político de Cuquío se enteró de lo ocurrido y lo comunicó al gobernador del estado, para que le diera órdenes sobre este asunto, el gobernador ordenó a la gendarmería del estado para que prestara el auxilio necesario y evitara más escándalos en el pueblo de Huisculco.[74]

Hubo algunos problemas en la elección o designación del comisario de policía en algunos pueblos, y como resultado de esto, los gobiernos

[73] AHJ. G-12-905. PO/510. Personal. Carlos Sepúlveda. Poncitlán, 25 de enero de 1905.

[74] AHJ. G-15-905. YAG/3053. Seguridad Pública. Director Político. Cuquío, 11 de diciembre de 1905.

porfiristas optaron por suprimir las elecciones de comisario de forma definitiva. Para enero de 1907, los pobladores de Tepec, solicitaron al jefe político de Sayula que designara a un nuevo comisario, ya que las elecciones habían quedado abolidas.[75] En los pueblos de Jesús María y Tizapán el Alto se declararon nulas las elecciones que se llevaron a cabo el 1° de noviembre de 1908 y se convocó a los vecinos de dichas poblaciones a realizar nuevas elecciones el segundo domingo de enero de 1909. Los miembros del ayuntamiento se quejaron en contra del director político del lugar debido a que pretendía manipular las elecciones extraordinarias, y pidieron garantías al gobernador, y este se las otorgó.[76]

Beneficencia e instrucción pública

En respuesta a la información solicitada por el secretario del Despacho de Gobernación del gobierno federal, el gobernador del estado de Jalisco pidió a los jefes políticos que enviaran la información que tuvieran sobre la beneficencia pública, penitenciarías y cárceles que hubiera en el estado de Jalisco. Solo dos jefes políticos contestaron inmediatamente: Ignacio Torres, del cantón de Lagos, dijo que en dicho cantón había dos escuelas para ambos sexos, que no tenían otro fondo que el municipal para sostenerse, y que necesitaban reformas radicales para renovar su edificio y útiles de enseñanza. Respecto a las cárceles, dijo que solo había una, y también un hospital, pero que no contaba con fondos y estaba en una finca en mal estado. Por otra parte, señaló que la policía de salubridad no estaba totalmente desatendida, ya que se encargaban de que las calles estuvieran aseadas y de revisar la buena calidad de los alimentos. Agrega que en los pueblos de este departamento no había alamedas, y los ríos eran muy escasos de agua, también faltaba el comercio establecido, sueldos fijos, y la agricultura era un ramo de muy poca relevancia. Por su

[75] AHJ. G-9-908. JAL/1921. Solicitud de los vecinos de Tepec al Jefe Político del 4 Cantón de Jalisco. 26 de enero de 1907.

[76] AHJ. G-10-908. GUA/889. Legislación. Congreso de Jalisco. Guadalajara, 25 de diciembre de 1908.

parte, el jefe político de Colotlán, Ignacio Suárez, informó que no había ningún establecimiento de beneficencia pública en su cantón, tampoco había hospital, ni hospicio o casa de caridad, por falta de fondos con qué establecerlos y sostenerlos.[77]

En el tema de educación el jefe político de Ciudad Guzmán, Darío Vargas, informó al secretario de gobierno que el presidente del ayuntamiento de dicha ciudad propuso establecer una escuela para indígenas en esta población. En respuesta la Junta Directiva de Estudios de Jalisco acordó que los indígenas compartieran aula con los otros niños, y en caso de no ser suficientes las instalaciones existentes se abrieran otras nuevas, dicha junta contribuiría con la ayuda necesaria para ello.[78]

Con respecto a la educación el jefe político de Guadalajara, Miguel Contreras Medellín, solicitó al secretario de gobierno intervenir ante la Junta de Estudios para dotar de libros a la escuela de Atotonilco.[79] Esto muestra algunas de las iniciativas que el jefe político podía tomar para la formación de ciertos espacios educativos. Por otra parte, Víctor Ordorica, jefe político de Autlán, informó al secretario de gobierno que el director del departamento de Mascota dio parte al proyecto de Miguel Gil, alcalde de Talpa, donde solicitó permiso para la construcción de un salón para la escuela de dicha población.[80]

El 5 de junio de 1857, Refugio Gutiérrez, jefe político de Guadalajara, dijo al secretario de gobierno que el director del departamento de Zapopan pidió que se multara con cuatro reales a los padres de familia que se negaran a que sus hijos asistieran a la escuela, y que el dinero recaudado

[77] AHJ. B-1-856. JAL/26. Administración y Política, México, D.F., 2 de enero de 1856-6 de junio de 1879.

[78] AHJ. IP-4-857. CIG/6. Educación Primaria. J.M. Darío Vargas. Ciudad Guzmán, 29 de enero de 1957.

[79] AHJ. IP-4-857. ATA/13. Miguel Contreras Medellín, Guadalajara, 1857.

[80] AHJ. IP-4-857. TAA/5. Educación Primaria. Víctor Ordorica, Autlán y Talpa, 4 de marzo de 1857.

por dichas multas sería invertido en útiles para los mismos establecimientos, para lo que solicitó autorización.[81]

En Autlán, el jefe político, Antonio Hinojoza, el 17 de diciembre de 1860, se quejó ante la Junta Directiva de Estudios de que la escuela de niños de esa villa había estado sufriendo perjuicios debido a la falta de preceptor y porque desde septiembre de ese año había estado cerrada dicha escuela. Es por ello que estaba solicitando un preceptor digno y de primer orden para solucionar el problema de que la niñez careciera de enseñanza primaria.[82]

Otro caso llama mucho la atención sobre el papel que desempeñaban las autoridades políticas en este rubro de la educación. Antonio Aiza, mayor de edad, comerciante, de nacionalidad extranjera y vecino de Teocaltiche, el 30 de julio de 1904, envió una carta al gobernador del estado de Jalisco diciendo que era padre de dos jóvenes, Nicolás e Isidoro, el primero de 18 años de edad y el segundo de trece años. Agregó que se dedicaba al comercio ambulante, pero que no le había sido posible "gobernarlos, para darles una educación, que pudieran ser útiles a la sociedad". También dijo que había puesto cuanto le había sido posible a su alcance para "dominarlos", pero que no había podido, porque cuando había tratado de corregirlos se le rebelaron, al grado de faltarle al respeto, y que habían querido asesinarlo. Agregó que con su carácter y fuerzas ya no le era posible tolerarlos, porque cada vez se volvían más insubordinados, y temía cometer un atentado contra sus propios hijos, o que ellos lo hicieran contra él. Por tal motivo recurrió al gobernador, para que sus hijos se pusieran a disposición del mismo gobernador, para que fueran corregidos como conviniera. El gobernador del estado de Jalisco le contestó a Aiza el 2 de agosto de ese año, diciendo que recurriera al jefe político de Teocaltiche en demanda del auxilio que solicitaba, pues conforme a la ley, la

[81] AHJ. IP-4-857. ZAP/16. Educación Primaria. Refugio Gutiérrez. Guadalajara 5 de junio de 1857.

[82] AHJ. IP-11-860. AUN/1716. Personal. Antonio Hinojosa. Autlán, 17 de diciembre de 1860.

autoridad política local era la que debía prestar a los padres los auxilios necesarios para el mejor ejercicio de su derecho de patria potestad. Agregó que ya había puesto en conocimiento al jefe político respectivo sobre el caso tratado.[83]

Seguridad social, festividades cívicas, conmemoraciones y diversiones

En este rubro se trató el problema de la prostitución en el estado de Jalisco, por ejemplo, el 2 de septiembre de 1862 el gobierno del estado de Jalisco transcribió al jefe político del primer cantón un documento donde le solicitó "poner obstáculos a las mujeres prostitutas que abundan en las calles de Guadalajara y los parajes más públicos, corrompiendo con su mal ejemplo a la juventud y burlándose así de la policía, de las leyes y de la moral pública". Por esta razón el gobernador incitó a las autoridades a reunir a estas mujeres en un punto específico y enviarlas a los suburbios de Guadalajara, pues aunque esta medida no resolvía el problema de raíz, sí había demostrado ser efectivo en cuanto a desaparecer de la vista pública "a esos objetos repugnantes" y por eso es que la jefatura política de Guadalajara no podía estar exenta de cumplir con dicha orden.[84] El trato que las autoridades políticas dieron a la prostitución muestra el carácter discriminatorio, opresivo y moralista con que las autoridades porfirianas manejaron el problema social y sanitario de la prostitución.

En Lagos de Moreno, el jefe político del 2° cantón informó al gobernador el 28 de mayo de 1893, que los señores Francisco Rincón Gallardo y Hno., le comunicaron que debido a que se agotó el algodón, y a las dificultades para obtenerlo, habían tenido la necesidad de paralizar los trabajos en la fábrica de hilados y tejidos La Victoria, sin saber hasta cuándo podrían reanudarlos. El jefe político aseguró que tal aconteci-

[83] AHJ. G-16-1904. Inv. 33336 (Caja 8). Seguridad Social. Antonio Aiza. Teocaltiche, 30 de julio de 1904.

[84] AHJ. G-16-1862. Inv. 33154 (Caja 2). Seguridad Social. Gobernador del estado. Guadalajara, 2 de septiembre de 1862.

miento afectaría poderosamente no solo a la clase trabajadora de dicha ciudad, de la que la industria textil era uno de los principales elementos de subsistencia, sino al comercio porque disminuirán las transacciones mercantiles, y la falta de trabajo ocasionaría la emigración, lo cual era muy lamentable para la población.[85] Por su parte, el ayuntamiento de Ahualulco de Mercado consultó al secretario de gobierno el 16 de enero de 1895, si los ayuntamientos poseían la facultad de conceder licencias para "bailes por especulación",[86] y si estaban comprendidos en estos los paseos por las calles llamados "gallos". El secretario de gobierno del estado le contestó al representante del ayuntamiento que esa era atribución de los jefes políticos de los cantones, manteniendo la tranquilidad y el orden público, y manifestando que los pagos de estos eventos debían ingresar a la tesorería municipal.[87]

Conflictos entre las autoridades políticas y los ministros de culto religioso

Los gobernantes liberales enfrentaron varios problemas derivados de las actitudes que los ministros de culto religioso tuvieron frente a los ciudadanos y fieles, sobre todo a partir de la promulgación de la Constitución de 1857. Un ejemplo de ello fue cuando un sacerdote de Jalostotitlán fue multado por el alcalde primero por negar los servicios religiosos a una persona que no tenía dinero para pagar la suma respectiva por ser pobre. El informe sobre este asunto lo hizo el director político de San Juan, quien lo comunicó al jefe político de Lagos, que a su vez lo hizo del conocimiento del gobernador del estado.[88]

[85] AHJ. F-9-893. LAO/2022. Industria y comercio. Jefe político. Lagos de Moreno, 25 de mayo de 1893.

[86] Se refiere a bailes de espectáculos.

[87] AHJ. G-6-1895. Inv. 8223 (Caja 11). Festividades cívicas, conmemoraciones, diversiones. Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado. Ahualulco, 16 de enero de 1895.

[88] AHJ. G-4-857. JAN/ 3079. Iglesia. Director político de San Juan de los Lagos, S/F.

El declararse "pobre e insolvente" para no cumplir con el pago de derechos parroquiales se convirtió en un problema, pues varias personas apelaban a esta ley para evadir pagar dichos derechos. Entre junio 1857 y agosto de 1859 se suscitaron varios casos en donde la gente evadía pagar derechos parroquiales, en uno de ellos el secretario de gobierno le escribió al jefe político de Ahualulco sobre el alcalde de Hostotipaquillo, en donde aseguró que éste estaba cometiendo abusos al expedir certificados de pobreza e insolvencia a personas que no lo necesitaban porque tenían recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones en el pago de derechos parroquiales. En otros casos siendo las personas realmente pobres e insolventes se les exigía el pago de dichos derechos parroquiales, así pasó con Juan Maldonado, de Ahualulco, quien se presentó a la jefatura política para contraer matrimonio con Tomasa Sánchez, pidió se le exentara del pago de derechos parroquiales y el cura del lugar se negó a hacerlo. En respuesta el jefe político multó con diez pesos al cura, imponiéndole un destierro de quince días lejos de su jurisdicción. Los casos fueron abundantes, como se puede observar.[89]

Sin embargo, los problemas entre autoridades políticas y eclesiásticas no se quedaron entre las élites, permeaba toda la estructura social y política, desde las altas esferas de las élites y las jerarquías hasta los ciudadanos, vecinos, curas de parroquia, jefes políticos, directores de departamento, comisarios de policía y munícipes. Un ejemplo relevante de ello fue lo que ocurrió con la conducta del presbítero de Atoyac, Ignacio Conián, quien, según la investigación que hizo el jefe político de Sayula, J. M. Colsa, y que comunicó al secretario de gobierno, el cura Conián al confesar al "buen patriota" Jesús Arreola, alcalde de Atoyac, que estaba enfermo de pulmonía, le condicionó administrarle el sacramento de penitencia "si no se retractaba de los males que causó a la iglesia como ejecutor de la ley de desamortización", también lo condicionó a dejar los bienes que le quedaban para mantener a su familia a disposición del supremo obispo. El jefe político de Sayula consideró que el cura Conían estaba cometiendo un

[89] AHJ. G-4-857. AHM/3558, Iglesia, junio de 1857 -agosto de 1859.

delito, agregando que se estaba haciendo muy común "introducir el llanto y la discordia en las familias y en el alma de los moribundos, derramando un veneno letal en la sociedad debido a la educación que recibió". Por ello, Colsa creía indispensable tomar una medida colectiva y enérgica de la suprema autoridad para evitar estos crímenes que afectaban al gobierno y a la nación, por lo que propuso aprehender al "falso apóstol de Jesucristo" que de manera hipócrita se había burlado de su ministerio sacerdotal. En consecuencia, el juzgado de Sayula abrió una averiguación sobre el caso.[90]

El jefe político de Sayula informó al secretario de gobierno que había recibido varias noticias en las que el párroco de ese lugar seguía insistiéndole a Arreola que donara sus bienes, varios vecinos y el médico, entre ellos, declararon que era cierto que el cura había condicionado la confesión al enfermo, pues el párroco lo acusaba por sus actos en contra de la Iglesia cuando era alcalde de Atoyac. Finalmente, el jefe político informó del fallecimiento de Arreola. Entre el jefe político y el cura hubo serías discusiones, porque este último se negó a sepultar el cadáver de Arreola en el camposanto de la Soledad, por lo que el cuerpo se hallaba en estado de descomposición, y Colsa no permitiría que los restos de Arreola fueran ultrajados de esa manera. Por lo que el jefe político dio la orden al alcalde primero para que diez hombres abrieran la puerta del cementerio y sepultaran el cadáver de Arreola.[91]

Mientras el párroco del lugar se oponía a que los restos de Arreola fueran sepultados en el camposanto, porque según él, Arreola había cometido "crímenes" que lo llevaron a morir excomulgado. Aunque Arreola había sido católico de buena fe, según su vecino José Gutiérrez, y había pedido la confesión "para que su alma no pasara a la eternidad sin los auxilios espirituales" esto no ocurrió así, por lo que fue enterrado por la fuerza y sin permiso de la Iglesia. Otro párroco, Silvestre Beltrán, dijo que Arreola debió haberse retractado públicamente, como funcionario del gobierno que era, y según Beltrán, una ley canónica mandaba negar

[90] AHJ. G-4-857 SA/3137. Iglesia, Sayula, 24 de mayo de 1857.

[91] AHJ. G-4-857 SA/3137. Iglesia, Sayula, 24 de mayo de 1857.

la sepultura eclesiástica a los que se negaban a retractarse. A lo que el jefe político se opuso tajantemente, alegando que solo podía negársele la sepultura si así lo ordenaba directamente el papa Gregorio XIII, por lo que se preguntaba con qué autoridad los curas de Atoyac le negaban los santos sacramentos a Arreola, ya que este hombre no debía arrepentirse por haber servido a la Constitución. Finalmente, el jefe político dijo que se llevarían a cabo las amonestaciones necesarias, pero no las amonestaciones basadas en "un error o en superchería". El obispo de Guadalajara apoyó los argumentos de los curas locales para negarle los sacramentos a Arreola, por esto al enterrarlo por la fuerza se violaron "los dominios de la Iglesia". La decisión del párroco de Sayula fue la de llevar los restos de Arreola en "un lugar profano". A lo que el secretario de gobierno contestó enérgicamente al jefe político de Sayula que "por ningún motivo" permitiera la exhumación de los restos de Jesús Arreola, y que tomara las medidas necesarias para evitarlo.[92]

Las quejas contra otros curas se repitieron constantemente en otros pueblos de los cantones de Jalisco por perturbar la paz con sus predicaciones subversivas y menosprecio a la autoridad civil, así lo dijo el jefe político de Guadalajara, Miguel Contreras Medellín, al recibir la queja del director del departamento de Cuquío contra el cura Leonardo Salcedo Morelos.[93] También el jefe político de La Barca, Félix Vega, en contra del cura del lugar, por desacatar la ley sobre obvenciones parroquiales,[94] o por negar los servicios religiosos por no tener para pagar dichos servicios como el entierro de niños indígenas en los pueblos de Tonalá y Sayula.[95]

Movilidad de extranjeros, pasaportes y salvo conductos

Otro tema del que estaban pendientes las autoridades políticas del estado de Jalisco era sobre la movilidad y establecimiento de extranjeros,

[92] AHJ. G-4-857 SA/3137. Iglesia, Sayula, 24 de mayo de 1857.

[93] AHJ. G-4-857 CUO/3118. Guadalajara, 2 de septiembre de 1857.

[94] AHJ. G-4-857. LAB/3117.

[95] AHJ. G-4-857. TOA/3123. G-4-857. SA/3120.

pues éstos se tenían que registrar ante dichas autoridades y dar cuenta de cualquier movimiento que hicieran. En enero de 1857, Guadalupe Montenegro, como jefe político del cantón de Guadalajara, envió al secretario de gobierno la carta de seguridad de Enrique Banzore correspondiente al año de 1856, con el fin de hacer su renovación, lo que tuvo un costo de dos pesos que pagó el interesado, el secretario de gobierno se dio por enterado y se anexo una copia dirigida al ministro de Relaciones exteriores. Entre enero y abril de 1857 este mismo proceso lo hicieron otros cuarenta extranjeros residentes en Guadalajara.[96]

Entre el 3 de marzo y el 11 de abril de 1857, el jefe político manifestó haber recibido las cartas de seguridad renovadas para hacer entrega a los interesados. Este documento muestra la importancia del jefe político en temas de migración y movilización de personas, principalmente extranjeras, dentro del cantón de Guadalajara, todo esto era para tener un mejor control y registro de las llegadas y salidas de individuos. En esta ocasión es de destacar que, en una de las tantas solicitudes aquí comprendidas, se menciona que cuando los extranjeros necesitaban renovar su carta de seguridad debían recurrir a la jefatura política del cantón, en vista de que en ese lugar se expedían las constancias marcadas, lo que dice un poco más del papel de las autoridades de los diversos cantones. El 1° de octubre de 1878, el jefe político del cantón de Ciudad Guzmán informó que no hubo cambios en el estado civil de los extranjeros residentes en dicho cantón, durante el mes de septiembre anterior.[97] Por su parte, el jefe político del cantón de Guadalajara, el 20 de octubre de 1887, informó al secretario de gobierno del estado que se recibieron 31 manifestaciones de extranjeros de diferentes nacionalidades que deseaban conservar su nacionalidad, no

[96] AHJ. G-8-857. GUA/3595. Pasaportes y salvoconductos. Guadalupe Montenegro, Guadalajara, enero-abril de 1857.

[97] AHJ. G-8-878. CIG/3751. Pasaporte y salvoconductos. Jefe político del 9° Cantón. Ciudad Guzmán 1° de octubre de 1878.

obstante que algunos tenían bienes raíces e hijos nacidos en Guadalajara y otros que no se encontraban en ningún caso señalado por la ley.[98]

Hospitales, salud pública y epidemias

Otro de los asuntos que tuvieron que atender los jefes políticos fue el de la salud pública, en este punto debían informar rápida y objetivamente al gobernador del estado y a la junta de salubridad, y cumplir con las órdenes que el gobierno y la junta de seguridad le indicaran, como se puede observar en los siguientes párrafos.

El 11 de marzo de 1873, Martín Polanco, comisario de policía del ayuntamiento de Guadalajara, informó al jefe político de Guadalajara que había habido una epidemia como resultado de arrojar al río San Juan de Dios unos caballos muertos, por lo que el jefe político de dicho cantón tuvo que tomar cartas en el asunto para evitar que tiraran caballos muertos en el río mencionado y obligar a los que cometieran tal falta a que los tiraran fuera de la ciudad o los enterraran.[99] Este es un breve documento que muestra cómo a veces la mala gestión de residuos, desperdicios, materiales y animales muertos por parte de las autoridades podía desencadenar una serie de enfermedades en la población, asuntos que el jefe político debía conocer, exponer y controlar a la brevedad.

La preocupación sobre la salud pública no era un asunto solo del gobierno del estado de Jalisco, sino del gobierno federal como se ve a continuación: El 1° de julio de 1884, la Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación, informó al gobernador de Jalisco la aparición del cólera en algunos puntos de China y Japón, advirtiendo que no podía haber relaciones entre estos países para evitar que la epidemia invadiera el territorio nacional por los puertos del Pacífico; por lo que el presidente de la república había dispuesto tales recomendaciones. Para informarles esta situación se envió una circular a los jefes políticos de Autlán y Mascota.

[98] AHJ. G-8-887. GUA/3695. Pasaporte y salvoconductos. Jefe político del 1er. Cantón. Guadalajara, 20 de octubre de 1887.

[99] AHJ. B-4-873. GUA/217. Hospitales y salubridad. Guadalajara, 11 de marzo de 1873.

Estos jefes políticos respondieron dándose por enterados de las medidas preventivas, también respondieron en el mismo sentido otras jefaturas políticas como las de Colotlán, Teocaltiche, Sayula, Ameca y Guadalajara. En el *Periódico Oficial de Jalisco* del 30 de agosto de 1883, se informó que el cólera asiático desarrollado en Egipto, alarmó de sobremanera a los países europeos y por consiguiente se temía que llegara a México, además de que dentro del mismo país ya existía una epidemia centrada en Chiapas y Tabasco que amenazaba con extenderse por toda la nación, por lo que se intensificaría el envío de médicos y personal de seguridad a los puertos y ciertas zonas vulnerables, y de ser necesario, habría cuarentenas en poblaciones y puertos, inspecciones de tripulación, así como un control de venta de verduras y frazadas o colchas. La Junta de Salubridad propuso limpiar el río San Juan de Dios y clausurar del Panteón de Belén, por ser susceptibles a que se convirtieran en focos de infección.[100] La extensa documentación al respecto plasma algunas de las medidas preventivas de salubridad tomadas por el gobierno a finales del siglo XIX, así como la manera en la que los jefes políticos se involucraban en la situación al ser gobernantes de amplias regiones en las costas de Jalisco, en este caso Autlán y Mascota.

El jefe político de Guadalajara informó el 21 de febrero de 1888 al secretario de gobierno que el director político de Tlajomulco recibió noticias de que se había desarrollado una epidemia de viruela en un vecindario de esa población causando mortandad en algunas personas, en una localidad que no pasaba de seis mil habitantes, por lo que solicitó se diera parte a la Junta de Salubridad para que se tomaran las medidas necesarias. La respuesta de la Junta de Salubridad fue que, de la mano del jefe político ya se trabajaba en el envío de personal médico para atender la situación; se transcribió el testimonio del Dr. Silverio García quien relató haber acudido al lugar y observado a algunos niños con ella y que en total la enfermedad la tenían seis personas, especificó que no se trataba de viruela negra, pero sí era confluente, a excepción de una persona

[100] AHJ. B-4-884. JAL/230 Hospitales y salubridad. México, 1° de julio de 1884.

que pereció a causa de ella. Terminó con un oficio del jefe político donde remitió al gobernador la factura de las medicinas y demás objetos usados por el Dr. García, siendo un total de 10.37 pesos, gasto que cubriría Lázaro Pérez, director general de Rentas.[101] Como se puede ver, el jefe político actuó como mediador en tiempo de crisis que suponía un peligro para ciertas poblaciones, su deber era el de recibir, transcribir y enviar toda la información y noticias de lo que ocurría en las poblaciones del cantón para que sus superiores u otras dependencias del gobierno actuaran en favor del pueblo; asimismo, debía notificar cualquier gasto y encargarse del envío del personal requerido.

José Urea, jefe político del cantón de Lagos, informó el 6 de junio de 1889, al secretario de gobierno que el director político de Ojuelos le comunicó que se había desarrollado en ese departamento, la enfermedad de la viruela con carácter de epidemia. Se comisionó al Dr. Anastasio Romo para auxiliar con vacunas porque la que mandó el gobierno no surtió efecto.[102] La Junta de Salubridad del Estado de Jalisco envió el 27 de marzo de 1890, una circular a los jefes políticos del estado donde comunicó que se habían mandado cuatro tubos de vacunas para la cabecera del 8° cantón, además de manifestar que la Junta estaba notando que las autoridades de los cantones foráneos y los encargados de administrar la vacuna en los mismos, no solo no cumplían con las obligaciones que les imponía el Reglamento de vacuna vigente, sino que veían este ramo de la Salubridad Pública con mucha indolencia y cuando el gobierno o la Junta los excitaba al cumplimiento de sus deberes, siempre daban la misma disculpa, esto es, que la vacuna que se les remitía "no estaba buena" y que no obtenían con ella buen éxito, siendo así que siempre se había tenido

[101] AHJ. B-4-888. TLZ/218 (antes B-7). Hospitales y salubridad. Tlajomulco, 21 de febrero de 1888.

[102] AHJ. B-7-889. AJ/233. Personal. José Urea. Lagos de Moreno, 6 de junio de 1889.

un cuidado especial en remitir la más fresca y de la misma con la que en Guadalajara se vacunaba dando allí muy buen resultado.[103]

El expresado reglamento de vacuna disponía que ésta se administrara durante todo el año, para impedir en cuanto fuera posible el desarrollo de las viruelas y prevenía que las autoridades vigilaran su exacto cumplimiento, y al gobierno del estado le constaba que dichas autoridades solo se ocupaban de la vacuna cuando ya tenían desarrollada la epidemia de la viruela en sus respectivos cantones. El mismo reglamento disponía que los vacunadores remitieran cada mes, directamente a la Junta, las listas de los vacunados en el mes anterior, y solamente el vacunador de Lagos lo hacía así y algunas veces lo habían hecho también los vacunadores de Autlán y La Barca, y todos los demás no habían cumplido con esta disposición probando con ello que no vacunaban sino una sola vez al año.[104] La respuesta de los cantones sobre las vacunas fue la siguiente:

En Sayula, el jefe político, L. Patiño, informó haber excitado a las autoridades subalternas de esa jefatura que observaran esas indicaciones e hicieran que las vacunas fueran suministradas cada mes. En Ameca, el jefe político, R. Íñiguez, informó que el mes anterior se les acababa de aplicar la vacuna a 25 niños y 22 niñas de esa ciudad sin que el ayuntamiento haya manifestado, a esa jefatura, que el resultado de su aplicación no había sido satisfactorio, por lo que no era culpa de la jefatura, pues solo cumplía con su deber de distribuirla por el lugar. En Autlán, el jefe político, Luis Medina, avisó que informaría sobre los niños y niñas que hubieran sido vacunados, por lo que ya se había pedido al médico encargado en esa jefatura. Por su parte, en Ciudad Guzmán, el jefe político, Andrés Michel, comunicó que había recomendado a los ayuntamientos que se respetara el reglamento de vacunación. Mientras en Mascota, el jefe político, Juan N. Michel, pidió se le informara al gobernador que el

[103] AHJ. B-4-890. JAL/185. Hospitales y Salubridad. Junta de Salubridad. Jalisco. 27 de marzo de 1890.

[104] AHJ. B-4-890. JAL/185. Hospitales y Salubridad. Junta de Salubridad. Jalisco. 27 de marzo de 1890.

encargado de administrar vacunas en ese cantón, lo hacía con todos los requisitos necesarios y puntualidad debida. En Teocaltiche, el jefe político, Marciano Palado, comunicó que también había recomendado a los ayuntamientos que se respetara el reglamento de vacunación. Lo mismo hizo el jefe político de Tequila, Ignacio Vallejo.[105]

Esta serie de documentos muestran cómo se llevaba a cabo el proceso de vacunación en cuanto a la logística, pues se puede apreciar que los jefes políticos eran los encargados de enviar la vacuna a los distintos ayuntamientos del cantón una vez que la recibían, para que fuera aplicada mensualmente y posteriormente mandar las respectivas listas a la Junta de Salubridad. Sin embargo, parece ser que la mala administración de la misma, provocaba que no surtiera efecto, no se administrara o simplemente jamás se reportaba que fue implementada y se propagaran las enfermedades aún más entre la población; se evidencia que los casos de viruela u otras enfermedades se reportaban cuando era un problema mayor.

En otro tema de salud pública, Lucio Y. Gutiérrez, jefe político del cantón de Guadalajara, el 1° de enero de 1894, envió al secretario de gobierno un oficio del inspector general de policía, donde informó que la sangre del rastro era arrojada por los carros del mismo establecimiento en terrenos del Molino de Piedras Negras, pero estando muy inmediatas a las casas del barrio El Retiro, causaban graves daños a la salud pública. En respuesta, el Consejo Superior de Salubridad estableció que este asunto era sumamente perjudicial para la salud de las personas del área y que los desperdicios deberían ser incinerados, enterrados o neutralizados con agentes químicos.[106] Una vez más, se puede ver cómo la mala gestión de desperdicios por parte de las compañías productoras resultaba en un serio problema de contaminación del ambiente y daños a la salud pública, por lo que el jefe político debía informar de esta situación en cuanto le

[105] AHJ. B-4-890. JAL/185. Hospitales y Salubridad. Junta de Salubridad. Jalisco. 27 de marzo de 1890.

[106] AHJ. F-13-894. GUA/989. Salubridad Pública. Lucio Y. Gutiérrez. Guadalajara, 1° de enero de 1894.

fuera comunicado para que las autoridades respectivas dictaminaran una solución.

El 6 de agosto de 1897, Miguel Y. Morales, jefe político del cantón de Colotlán informó al secretario de gobierno que en ese lugar apareció una plaga de gusano de naturaleza desconocida que estaba ocasionando grandes prejuicios a las personas por su abundancia y el único medio de extirparlos era matándolos a mano, pues no habían encontrado otra los labradores y se ignoraba el origen y causa del desarrollo de dicha plaga. En respuesta se le pidió al jefe político seguir informando sobre el avance de la plaga a sus superiores.[107]

Posteriormente, el 17 de enero de 1903, Rosendo Híjar y Haro, jefe político de Ameca, envió un oficio al secretario de gobierno de Jalisco informando que el ayuntamiento de ese lugar había solicitado al gobernador le suministrara suero antipestoso, con el objeto de prevenir la peste bubónica en lugares inmediatos a esa municipalidad. Por su parte, también Pascual B. Gramillo, jefe político de Colotlán, solicitó al gobernador se le suministraran cinco pomos de suero antipestoso, puesto que había tomado medidas enérgicas para evitar que se propagara la peste bubónica por el cantón, especialmente porque se trataba de un lugar de recurrente tránsito de individuos procedentes de Tepic y otras partes del sur.[108]

José Ma. Villaseñor, jefe político de Mascota, el 7 de febrero de 1903, informó al secretario de gobierno que el comisario político de Las Peñas impidió el desembarque de unos pasajeros del "Dorado" no. 103, procedentes de San Blas porque uno de ellos, llamado Francisco Landeros, venía de Mazatlán y estaba invadido con la peste bubónica, por lo que ninguno salió de la nave ni siquiera su equipaje. Preguntó qué debía hacer, ya que al investigar a tal pasajero se dio cuenta que éste había presentado un pasaporte de sanidad que no fue visado por la autoridad sanitaria de San Blas, pero no había constancia alguna de que haya sido fumigado

[107] AHJ. F-2-897. CON/1018. Agricultura y ganadería. Colotlán, 6 de agosto de1897.

[108] AHJ. F-13-1903. JAL/959. Salubridad Pública. Jefatura Política. Ameca, 17 de enero de 1903.

en el puerto citado. Anexó un certificado de que el contagiado en cuestión había cumplido sus diez días de cuarentena y se certificó que no presentaba síntomas de la enfermedad, fechado el 19 de enero. No incluyó respuesta del secretario de gobierno.[109] Por otra parte, Íñiguez de la Torre, jefe político de La Barca, el 14 de febrero de 1903, informó al secretario de gobierno de Jalisco sobre la formación de una junta denominada "Comité Fray Antonio Alcalde" en ese lugar con el objetivo de recolectar fondos para auxiliar a las víctimas de la peste bubónica en Mazatlán.[110]

El ejecutivo del estado el 6 de enero de 1903, ordenó que se les pidiera a todas las personas que llevaran una patente de sanidad. También sugirió que se prohibiera en los puertos de Navidad, Ipala, Chamela y Las Peñas el desembarque de personas procedentes de Mazatlán, por el peligro que representaba la transmisión de la peste bubónica, para lograr esto, se recomendó acudir con las autoridades federales de seguridad; así como establecer plazas sanitarias en esos lugares en las que el equipaje y objetos personales de los individuos fueran desinfectados, y si llegara a haber algún sospechoso, fuera aislado en una casa o barraca. El tránsito de personas por tierra estaba libre de peligro, pues las autoridades militares resguardaban el camino. Asimismo, le pidió al jefe político leyera cuidadosamente el capítulo IX del Código Sanitario para estar mejor informado sobre qué acciones realizar, del cual anexa una copia. Contiene además un breve folleto sobre cuáles eran las medidas para contener enfermedades altamente contagiosas e infecciosas según el Consejo Superior de Salubridad de Guadalajara, documentos en los que se incluyen las acciones ya mencionadas, además de contemplar casos como aglomeraciones y visitas a hoteles, cárceles, talleres, entre otros.[111]

[109] AHJ. F-13-904. MAS/947. Salubridad Pública. Jefatura Política. Mascota, 7 de febrero de 1903.

[110] AHJ. F-13-903. LAB/920. Salubridad Pública. Jefatura Política. La Barca, 14 de febrero de 1903.

[111] AHJ. F-13-903. JAL/957. Salubridad Pública. Jefatura política. Mascota. 6 de enero de 1903.

Esta serie de documentos hablan de cómo era el accionar de las autoridades políticas del estado durante el tiempo de epidemias; se puede ver cómo se trataba de un proceso que involucraba varios niveles de gobierno, pues el jefe político debía ponerse en contacto con autoridades de policía y personal de salud para llevar a cabo las órdenes del gobernador, con el fin de custodiar la entrada por mar, mientras que los militares se ocupaban de tierra. A su vez, se explicaban algunas medidas comunes de la época compiladas en los reglamentos.

Las directorías políticas de Tlajomulco y Totatiche informaron al secretario de gobierno que no hubo enfermedades de carácter epidémico en sus respectivos departamentos durante el mes de junio de 1904; por otra parte, Pascual B. Gramillo, jefe político de Colotlán, envió una tabla estadística de las principales enfermedades que causaron defunciones en ese cantón durante el mes de junio, entre las que se mencionan: 68 por fiebre, 11 por viruela, 8 por pulmonía, y un total de 104 personas vacunadas.[112]

Sorpresivamente, la abundante peste bubónica de la época no representó una causa mayúscula de decesos en este cantón durante el periodo señalado, ya que resaltaban muchas otras enfermedades "comunes". Sin embargo, este documento también muestra cómo los directores políticos y ayuntamientos municipales comenzaron a interactuar más directamente con el secretario de gobierno y no mediante el jefe político en turno.

El jefe político de Guadalajara transcribió un oficio al secretario de gobierno sobre la investigación dirigida por el Dr. Joaquín Baeza Alzaga en el rancho de San Nicolás, jurisdicción de Tonalá, sobre un reporte de una enfermedad por la que morían violentamente los atacados por ella, teniendo como síntomas "bolas en la caja del cuerpo, calosfríos y dolor de garganta". En este veredicto y después de analizar a los enfermos, el Dr. Baeza comunicó que esta noticia carecía de fundamento, pues solo se encontró con dos niños atacados por difteria, mismos casos que pudo observar en Guadalajara durante la epidemia "actual". Se mandó clausurar el asilo que albergaba a uno de los niños como medida preventiva y se

[112] AHJ. F-13-904. JAL/963. Salubridad Pública. Jalisco, 1° de junio de 1904.

solicitó traer de Guadalajara seis pomos de suero contra esta enfermedad; asimismo el Registro civil reveló que solamente ocurrieron 5 muertes en los últimos días y fue por causas como diarrea, pulmonía e infección en la laringe. De igual manera, reportó que en San Nicolás no había ni un solo enfermo, pero dio instrucciones de prevención, así como proceder a vacunar a 5 niños que lo necesitaban; concluyó informando que se trasladó a Puente Grande a tratar a unos casos de paludismo.[113] Si bien el jefe político no tuvo un papel más allá de ser el que comunicaba la situación que le correspondía, esta serie de eventos muestran cómo las enfermedades fueron algo común y un asunto del gobierno durante la época mencionada.

Algunas conclusiones sobre este capítulo

Los documentos que se analizaron en este capítulo muestran que las autoridades políticas tenían comunicación con sus superiores, sus subordinados y los ciudadanos. Eran documentos donde los funcionarios públicos hablaban con su propia voz, es decir que producían su propio discurso, a diferencia de las notas periodísticas donde el editor era quien opinaba a cerca de las autoridades políticas, o de las memorias de gobierno, donde el gobernador del estado era quien informaba sobre la actividad desarrollada por estos funcionarios en su gobierno. Estos documentos que circulaban principalmente entre distintas esferas de la administración pública, no estaban destinados a que el público general se enterara de su contenido, sino que fueron producidos para atender una gran diversidad de asuntos político-administrativos, desde la seguridad pública, el bandolerismo, las rebeliones, escándalos y riñas entre ciudadanos, alcoholismo y la continua violencia que se presentaba tanto en el medio rural como en las ciudades, problemas con la tierra de los pueblos de indios, su reparto y desamortización, también atendieron conflicto por la elección de los comisarios de policía en los pueblos, problemas en la educación de las escuelas públicas, así como problemas de prostitución y de religión, principalmente con

[113] AHJ. F-13-904. TOA/931. Salubridad Pública. Jefe político. Guadalajara, 25-28 de octubre de 1904.

los ministros del culto que violaban la Constitución liberal de 1857, el registro y movilidad de extranjeros y la salud pública, sobre todo enfermedades, epidemias y algunas plagas.

A partir de esta información es difícil establecer un patrón único de comportamiento de las autoridades políticas entre buenos y malos, eficientes o incompetentes, cultos o ignorantes, conciliadores o autoritarios, pacificadores o represores, pues había de todo, lo que sí se puede afirmar es que, de acuerdo a sus obligaciones legales, actuaban con el objetivo de atender y resolver los problemas político-administrativos que se les presentaban, algunos de manera eficiente y otros no, pero desempeñaban el papel de intermediarios y negociadores en los conflictos entre los ciudadanos, no siempre estaban del lado de los poderosos, pero tampoco de los pobres, porque tenían que aplicar la ley y las órdenes que recibían desde el gobierno estatal o federal. Los ciudadanos por su parte, tenían la oportunidad de enviar sus quejas a las autoridades superiores sobre el desempeño de las autoridades políticas, como veremos en el siguiente capítulo. Lo que se puede concluir es que los jefes políticos, los directores de departamento y los comisarios de policía actuaban como intermediarios en los problemas que se presentaban a nivel local, municipal, departamental o cantonal, según los recursos con los que contaban, las órdenes que recibían y el marco legal que se tenía al momento.

CAPÍTULO VIII.
Voces y susurros. Quejas de ciudadanos contra las autoridades políticas

Palabras, lamentos y rencores que se llevó el tiempo

Cuando Juan Preciado llegó a Comala, en la novela de Juan Rulfo, *Pedro Paramo*, se encontró con muchas voces y susurros que salían del hueco de las paredes de casas o de las piedras, de personas que habían muerto hacía mucho tiempo y de los cuales solo se oían sus lamentos, rencores y reclamos.[1] Algo parecido sucede con los documentos del Archivo Histórico de Jalisco (AHJ) y de la Casa de la Cultura Jurídica de Guadalajara (CCJG) que contienen las quejas en contra de las autoridades políticas del estado de Jalisco. De ese pasado solo quedaron palabras en documentos con letras poco visibles, a veces incomprensibles, incompletas, palabras silenciadas de otros tiempos, que tal vez no escribieron ellos mismos, apenas susurros que un escribano entendió en su momento y a su manera, los que ahora leemos e interpretamos con los lentes y conceptos desde el presente historiográfico. Para hacer esta reflexión se parte de que toda referencia al mundo es una representación producto de quien dice o hace un discurso sobre ese mundo. Narrar una historia es una forma de representar el mundo del presente o del pasado. Lo que se sabe de las autoridades políticas decimonónicas y de los vecinos o ciudadanos gobernados por ellos es lo que los documentos escritos dicen, los cuales están situados,

[1] Juan Rulfo. (1984). *Pedro Páramo*. México, Seix Barral, 1984, p. 37.

almacenados, guardados con cierto orden y clasificación en archivos del estado, en específico para este tema, en el Archivo Histórico de Jalisco.[2]

Los primeros relatos provienen de las experiencias propias de los involucrados y afectados en los hechos referidos o narrados.[3] Las historias a veces se construyen desde el punto de vista de testigos indirectos, o sea, lo que dijeron algunas personas que fueron contemporáneas a las autoridades mencionadas: como periodistas, escritores o políticos. Una forma más de representar a estas autoridades políticas se puede encontrar en las leyes y reglamentos de gobierno relativas a sus funciones, derechos y obligaciones, elaboradas por los gobiernos de los distintos niveles: federación, estados y municipios a lo largo del siglo XIX. Una forma más de representar a los jefes políticos y sus subordinados es la que se ha producido en la historiografía relacionada con el siglo XIX y la revolución. En estas representaciones habrá en algunos casos historias apologéticas, en otras historias críticas en distintos grados sobre las autoridades políticas, pero será imposible encontrar un punto neutro, objetivo o totalmente desapasionado sobre estas autoridades, de estas formas de representar a los jefes políticos decimonónicos ya dimos cuenta en capítulos anteriores.

En este momento no se trata de abonar a la representación positiva o negativa de las autoridades políticas, tampoco de adornarlos como personajes de novela romántica o trágica, sino de representarlos lo más cercano posible como simples seres humanos que actuaron en una época y un escenario específico en relación al marco jurídico, cultural y social propio del mundo al que pertenecieron, ese trata de explicar siguiendo en lo posible los indicios documentales y las narrativas que tejieron los actores involucrados, las formas y contextos en las que interactuaron con otros individuos y grupos sociales de la época. Aunque sin duda existieron autoridades políticas que podían caracterizarse como los villanos de la "leyenda negra", la mayoría de las autoridades políticas dedicaron todos sus esfuerzos a gobernar su cantón o departamento, a veces siguiendo las

[2] Ricoeur. (2004), pp. 173-370.

[3] Koselleck. (2002), pp. 49-50.

prácticas y relaciones tradicionales propias de una cultura política local y regional, en donde se mezclaban relaciones de poder, luchas por la tierra y otros bienes patrimoniales, conflictos religiosos, étnicos y culturales, todo entretejido con vínculos familiares, de compadrazgo o de amistad. En términos generales, las autoridades políticas eran funcionarios intermedios, que estaban situados entre el gobernador del estado y los ciudadanos, eran fundamentalmente negociadores y conciliadores entre los actores sociales y políticos del cantón o departamento que administraban, tratando de aplicar el marco legal vigente sin chocar u oponerse a los usos y costumbres, la honra, la moral y las relaciones pacíficas de los pueblos y ciudadanos.[4]

Aunque ejercían cierto poder y autonomía en su cantón o departamento, las autoridades políticas no tenían un poder absoluto, pues realmente estaban bajo las órdenes del gobernador del estado, a quién debían rendirle informes continuamente, su función era exclusivamente político-administrativa, ya que estrictamente no tenían bajo su a mando grupos armados para el mantenimiento del orden y la tranquilidad, para perseguir y aprehender bandidos, criminales y rebeldes debían solicitar la ayuda de grupos armados como la gendarmería o la policía rural, las cuales funcionaban con su propia organización, jerarquía y cadena de mando. Sin embargo, los jefes políticos y las policías rurales se coordinaban y ayudaban mutuamente la mayoría de las veces con el objetivo de mantener el orden y realizar algunas actividades en contra de criminales y rebeldes. No obstante, algunos jefes políticos tuvieron conflictos con los mandos superiores de las policías rurales, debido a los abusos y arbitrariedades que se cometían de uno y otro lado.[5]

Por supuesto que algunas de los jefes políticos y subordinados abusaron del poder, cometieron arbitrariedades, fueron corruptos, violaron la ley y las garantías ciudadanas, y fueron integrantes de redes de contubernio con el fin de sacar provecho propio. No obstante, no hay que gene-

[4] Falcón. (2015).

[5] Vanderwood. (1982), pp. 160-174.

ralizar la representación negativa o positiva que se ha hecho de los jefes y directores políticos, pues en cada estado del país, la legislación interna, las relaciones sociales, políticas y económicas y la cultura eran diferentes. Pero algo se puede decir sobre el estado de Jalisco durante el siglo XIX, principalmente que las autoridades políticas eran los individuos de confianza del gobernador, y quien los había nombrado directamente. Al mismo tiempo que los jefes políticos y sus subordinados establecían una red de apoyo en la que estaban directores y comisarios políticos, dicha red estaba basada en fuertes vínculos de lealtad hacia su jefe inmediato y hacia el gobernador del estado de Jalisco. De esta forma, la mayoría de los problemas político-administrativos se arreglaban a través de la intervención o negociación de estas autoridades, en la mayoría de los casos se trataba que dichos conflictos no salieran del ámbito propio del municipio, del departamento o del cantón.[6]

En este capítulo se hace un análisis de los discursos generados en torno a las autoridades políticas del estado de Jalisco durante el siglo XIX, tanto por sus adversarios, como por sus defensores, y la concepción que tenían las autoridades políticas de sí mismas. Principalmente se analizaron los documentos o expedientes de quejas en contra de estas autoridades, hay que aclarar que dichos documentos prefiguran de antemano la forma en que se representan tanto a las autoridades políticas como a los ciudadanos, pues el objetivo de hacer un documento de queja y, posteriormente, un expediente para seguir el caso predetermina el campo o espacio social en el que interactúan los individuos involucrados, y donde se construirán las líneas de las representaciones de las autoridades políticas y de los mismos ciudadanos quejos.[7] El recurso de "queja" presupone que hay una violación a la ley, un abuso o una arbitrariedad por parte de la autoridad política en contra de uno o varios ciudadanos. También supone que

[6] Elisa Cárdenas Ayala. (2010). *El Derrumbe, Jalisco, microcosmos de la revolución mexicana*. México: Tusquets Editores. pp. 63-67.

[7] Bourdieu. (2002). *La distinción. Criterios y bases sociales del gusto*. México: Taurus, pp. 160-171.

los ciudadanos tienen recursos legales para denunciar dichas violaciones, abusos o excesos por parte de las autoridades involucradas.

El derecho de petición era el derecho que toda persona tenía para dirigir peticiones a cualquier instancia del gobierno, la población lo utilizó frecuentemente durante el siglo XIX. Sin embargo tuvo algunos antecedentes en la época virreinal, pues los súbditos del rey tenían derecho de enviar peticiones y súplicas al soberano a través de distintas instancias u órganos de gobierno, los que constituían parte del engranaje político de la monarquía. El antecedente más directo del derecho de petición se encuentra en la Bill of Rights de 1689 en Inglaterra, donde se estableció que los súbditos ingleses tenían derecho de presentar peticiones al rey, declarando como ilegal la prisión o procesamiento de los peticionarios. Estos señalamientos comenzaron a aparecer en los textos constitucionales de Francia y Norteamérica de finales del siglo XVIII.[8] La Constitución gaditana de 1812 no fue muy explícita en esto, pues en su artículo 373 únicamente se estableció que todo español tenía el derecho a presentarse a Cortes o al rey para reclamar la observancia de la Constitución.[9]

El derecho de petición en México tiene antecedentes no solo en la Constitución de Cádiz sino en la Constitución de Apatzingán de 1814, pues en su artículo 37 dice que "a ningún ciudadano se le debe cuartar la libertad de reclamar sus derechos ante los funcionarios de la autoridad pública".[10] Sin embargo, el derecho de petición no avanzó mucho entre 1820 y 1846, pues la Constitución federal de 1824 no lo contempló, ni las constituciones centralistas. No fue sino hasta el Acta Constitutiva de Reformas de 1847, donde el derecho de petición apareció de forma explícita:

[8] Luis René Guerrero y José Gabino Castillo Flores. (2016). Artículo 8°. Introducción histórica. En *Derechos del pueblo mexicano: México a través de sus constituciones.* Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, p. 607.

[9] Constitución de la Monarquía Española, 19 de marzo de 1812. En Tena. (1999). p. 103.

[10] Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, 22 de octubre de 1814. En Tena. (1999), p. 35.

"Es derecho de los ciudadanos votar en las elecciones populares, ejercer el de petición, reunirse para discutir los negocios públicos y pertenecer a la Guardia Nacional, todo conforme a las leyes".[11] El derecho de petición fue retomado en 1856, en el artículo 23 del Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana y posteriormente en la Constitución Federal de 1857, quedando de la siguiente manera:

> Art. 8° Es inviolable el derecho de petición ejercido por escrito, de una manera pacífica y respetuosa; pero en materias políticas solo pueden ejercerlo los ciudadanos de la República. A toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, y ésta tiene obligación de hacer conocer el resultado al peticionario.[12]

Este artículo constitucional permaneció sin cambios hasta 1917, la importancia del mismo fue tal que ni en la época del Segundo Imperio se atrevieron a derogarlo. Para explicar los documentos y expedientes encontrados en el AHJ sobre las quejas de ciudadanos en contra de las autoridades políticas se optó por organizarlos por cantón para seguir la problemática a escala local o regional.

1° Cantón, Guadalajara

San Pedro Tlaquepaque. Benito Rosas, Fernando Piedra, Reyes Rocío y Julián Chávez, vecinos de la villa de San Pedro, dijeron al juez de distrito, que el 14 de agosto de 1867, fueron aprehendidos por orden de la autoridad política de dicho lugar, y que sin haberse realizado ninguna averiguación fueron remitidos a la cárcel de Guadalajara, a disposición del jefe político, y que desde ese día a la fecha no se les había tomado declaración, ni manifestado el motivo de su detención, ni se les había presentado la

[11] Acta Constitutiva y de Reformas del 18 de mayo de 1847. En Tena. (1999), p. 472.

[12] Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de febrero de 1857. En Tena. (1999), p. 608.

persona acusadora. Los afectados alegaron en su defensa que si hubieran cometido algún crimen, ya se les hubiera consignado ante la autoridad competente, para que se les juzgara conforme al delito que se les imputaba, pero que no lo había. Los vecinos de San Pedro se quejaron de que no se había procedido a nada que indique o castigue su conducta, pero que estaban sufriendo una prisión indefinida, mientras que sus familias estaban careciendo de los recursos que se obtenían de su particular trabajo para darles subsistencia, solicitaron al juez que los pusiera en libertad.[13]

Casi cuarenta años después, varios vecinos de Tlaquepaque se dirigieron al gobernador del estado el 14 de febrero de 1905, por la detención y maltrato de la policía municipal a Manuel Díaz de Sandi, quien se encontraba en la tienda "La Temporada", tomándose unas copas, pero sin escandalizar. Acusaron a los policías porque ultrajaron y ofendieron de palabra y de hecho a Díaz de Sandi, pues lo arrastraron y le dieron empujones. Aseguraron los demandantes que el origen del problema fue la energía de Díaz de Sandi en el desempeño de su empleo como vicepresidente del ayuntamiento cesante y las debidas represiones dadas al sargento, por lo que pidieron garantías y que fuera separado de su empleo la persona responsable y el sargento de policía.[14]

El director político de San Pedro Tlaquepaque, Gómez Cruz, el 23 de febrero de 1905 dijo que el gendarme Bernardino Aguilar, detuvo a Díaz de Sandi por ebriedad escandalosa y palabras malsonantes dirigidas a la autoridad. Además de que no era la primera vez que Díaz de Sandi había escandalizado, puesto que ya había sido multado dos veces por lo mismo. Agregó que Díaz de Sandi era ebrio muy escandaloso y había ocasionado camorras con la policía y los particulares. El director político señaló que sus defensores eran personas de "la masa del pueblo, ignorantes por ende", quienes dieron al acusado sus firmas incondicionalmente, sin saber

[13] CCJG. Juzgado de Distrito. Amparo. 1867-1870. Caja 1, legajo A, Expediente 1. Benito Rosas, et al. Guadalajara, 15 de octubre de 1867.

[14] AHJ. G-15-905. TLE/650. Seguridad Pública. Jefe político. Tlaquepaque, 23 de febrero de 1905.

el asunto del cual se trataba. Finalizó diciendo el director político que los dueños de la tienda no autorizaron dicha queja.[15]

San Gaspar. Eustaquio Ríos, soltero, hortelano, mayor de edad y vecino de San Gaspar, del municipio de Tonalá, se quejó ante el gobernador del estado porque el 25 de diciembre de 1907 fue arrestado por el comisario político de San Gaspar, Lorenzo Palomar, a petición de Magdaleno e Isidro Casillas, debido a que Ríos mantenía relaciones amorosas con la hermana de éstos llamada Cristina Casillas, quien tenía 45 años de edad. Ríos acusó a los hermanos Casillas y al comisario de molestarlo y haberlo golpeado, y que por tal motivo se les llevaba un proceso en Tonalá. No obstante lo anterior, el comisario político dio la orden de aprehender a Eustaquio Ríos acusándolo de "ratero". Por su parte Ríos alegó que el único delito que cometió fue "haberse salido de la cárcel un día que la puerta estaba abierta", pero que había permanecido alejado de su residencia, no siéndole posible estar por más tiempo separado de su pueblo, de sus pequeñas propiedades y de sus quehaceres, viéndose perjudicado en sus intereses, y "lo que es peor, en su reputación". Ríos dijo estar dispuesto a probar su inocencia y honradez, por lo que presentó firmas que lo avalaban de varios vecinos de San Gaspar. El gobernador del estado ordenó, el 1° de enero de 1908, al comisario político de San Gaspar, Lorenzo Palomar, que diera las garantías de ley al ciudadano Eustaquio Ríos. Por su parte, el presidente municipal de Tonalá informó, el 26 de enero siguiente, al gobernador del estado, que ya habían arrestado a los hermanos Casillas en este pueblo, por las acusaciones que hizo Eustaquio Ríos, por haberlo golpeado, pero que no sabía si había complicidad entre éstos y el comisario político de San Gaspar.[16]

Siguiendo con San Gaspar, ese mismo enero de 1908, los indígenas de dicho pueblo, se dirigieron al gobernador del estado quejándose de las

[15] AHJ. G-15-905. TLE/650. Seguridad Pública. Jefe político. Tlaquepaque, 23 de febrero de 1905.

[16] ahj. g-12-908. TOA/2634. Personal. Eustaquio Ríos. Tonalá, 13 de enero de 1908.

fatales circunstancias que había en la población. Se quejaron en contra del comisario político del pueblo, Lorenzo Palomar, dijeron que había mucho desorden que perjudicaba al vecindario, pues todos los días había borracheras, tanto de día como de noche. Agregaron que la gente se embriagaba y cometía faltas tirando balazos, resultando varios heridos. Alegaron que no había autoridad que evitara esos males. Acusaron al comisario político de no preocuparse por cuidar el orden público, y que la cárcel se encontraba en mal estado, además de que el comisario protegía a la gente vaga y que otorgaba licencias para realizar diversiones públicas y bailes que daban como resultado que se embriagara la gente y hubiera varios heridos y muertos. Por tanto, dijeron que no estaban de acuerdo en que continuara Lorenzo Palomar como comisario de policía, por lo que pidieron al gobernador pusiera a otro comisario político para el pueblo.[17]

Por su parte, el presidente municipal de Tonalá, el 24 de enero de 1908, informó al gobernador del estado que no era cierto que en la comisaría de San Gaspar hubiera desórdenes y balazos la mayoría de las noches, y que era en la comisaría de dicho pueblo donde estaba más arraigado el vicio de las bebidas embriagantes. El presidente municipal reconoció que los edificios del ayuntamiento estaban en malas condiciones, por lo que las autoridades políticas y judiciales tenían sus actividades en sus casas particulares, además de que la cárcel estaba en malas condiciones. Reconoció también que había bailes "como en todas las comisarías", pero que era en este lugar donde había más heridos y donde se habían cometido robos y asaltos sin que la autoridad política hiciera algo al respecto. El gobernador del estado acordó el 31 de enero de ese año, que se dijera a los vecinos de San Gaspar que podían dirigirse al jefe político del primer cantón, para pedir la remoción del comisario político de San Gaspar.[18]

[17] AHJ. G-9-908. JAL/1921. Asuntos indígenas. Severo Becerra. Tonalá, 1° de enero de 1908.

[18] AHJ. G-9-908. JAL/1921. Asuntos indígenas. Severo Becerra. Tonalá, 1° de enero de 1908.

Yahualica. Algunos vecinos de Huiquilco, Yahualica, casados, mayores de edad, propietarios y agricultores, el 5 de octubre de 1909, se quejaron del comisario político del lugar porque, según dijeron, desde hacía tres años a la fecha, que Norberto Carbajal, comisario político de dicho pueblo, quien era "hombre de instintos sanguinarios y de notoria ineptitud", había utilizado su puesto para saciar venganzas ruines y olvidarse por completo del cumplimiento de su deber. Dichos vecinos lo acusan de violar mujeres casadas y de cometer todo tipo de abusos y arbitrariedades en contra de las familias del lugar. Por lo que pidieron al gobernador garantías y su destitución.[19]

> En este largo periodo de tres años hemos sido víctimas de la ira del mencionado comisario, que solo procura su alto puesto para saciar venganzas ruines y olvidarse por completo del cumplimiento de su deber. Solo se ocupa en verificar actos carnales con mujeres casadas originando con esto la disolución de estados y cuando los maridos de estas mujeres adúlteras por la fuerza física del comisario quieren proceder en su contra, por ver su honor ultrajado, no pueden hacerlo en primer lugar porque tiene el "palo y el mango" es soberano, y cuando sospecha que los ofendidos quieren acusarlo ante el superior, inmediatamente los amenaza diciéndoles que si lo acusan los consigna al servicio de las armas, o los destierra, y viendo estos padres de familia que el comisario es muy capaz de obrar con esa clase de arbitrariedades, pues muchos se han separado del pueblo, abandonando su hogar doméstico y aun sus pequeños predios rústicos de dónde sacan el sostén para su familia.
>
> C. Gobernador, le advertimos a Ud. Que hay muchas mujeres, que por ningún motivo quieren acceder a las peticiones cochinas del comisario, pero este es tan arbitrario que les dice: soy comisario, nada te pasa, pero si no accedes el día menos pensado te asesinan, diga Ud. señor Gobernador, si son abusos que pueden tolerarse. Ahora bien, ¿cómo vivirán esos esposos mirando violado su estado, tan solo por la fuerza bruta del comisario? Si sabe

[19] AHJ. G-12-909. YAG/3006. Personal. Vecinos de Huisquilco. Yahualica, 5 de octubre de 1909.

que alguno está predispuesto con él, lo consigna al comisario judicial que es el señor Marcial Carbajal, hermano del comisario político, ambos del mismo carácter y arbitrarios sin igual, que por defenderse uno al otro cometen infinidad de abusos en compañía de sus respectivos secretarios porque ellos no pueden ni firmar.[20]

Los vecinos de Huisquilco solicitaron al gobernador el respeto a sus garantías individuales y que no permitiera que el pueblo estuviera subyugado por hombres asesinos y arbitrarios, los firmantes hablaron muy bien del gobernador por su "acertada administración y su honradez", pidieron su ayuda porque "ya no es posible soportar más a estos hombres que gobiernan no conforme a la ley sino a pistolazos y con carabina en mano". Dijeron los vecinos del pueblo que habían votado por el gobernador en los procesos electorales, por lo que pedían garantías para los habitantes "pobres y honrados" del pueblo de Huisquilco y que nombrara a personas cercanas y colaboradores del mismo gobernador para los cargos de comisario político y judicial y que quitara a los que estaban ahora, los hermanos Carbajal.[21]

El gobernador de Jalisco pidió informes al jefe político del primer cantón sobre este asunto. Pero otro grupo de vecinos del mismo pueblo le manifestaron al gobernador su apoyo al comisario del pueblo, seis días después de que los anteriores vecinos se habían quejado ante el mismo gobernador. Por tal motivo, el 25 de octubre de ese año, el director político de Yahualica fue a investigar personalmente los hechos en Huisquilco y al entrevistarse con las personas que firmaron la primera queja, encontró que era cierto que el comisario de dicho pueblo había cometido algunas arbitrariedades, valido del puesto que desempeñaba, por lo que recomendó que fuera destituido, y puesto en su lugar a Antonio Corona,

[20] AHJ. G-12-909. YAG/3006. Personal. Vecinos de Huisquilco. Yahualica, 5 de octubre de 1909.

[21] AHJ. G-12-909. YAG/3006. Personal. Vecinos de Huisquilco. Yahualica, 5 de octubre de 1909.

por ser éste un vecino de los más aptos y honorables que tenía la mencionada comisaría. Como resultado, el 5 de noviembre de 1909, el gobernador del estado dispuso que fuera removido Norberto Carbajal del puesto de comisario político de Huisquilco, indicando al jefe político del primer cantón, que nombrara a la persona que estimara más conveniente.[22]

Zapotlanejo. Varios indígenas, vecinos del pueblo de Matatlán, en el departamento de Zapotlanejo, el día 21 de octubre de 1909, se quejaron ante el gobernador del estado porque Casildo Pérez, vecino del rancho El Carrizo, acompañado de Demetrio Ruiz, Silverio Franco, un cabo y dos soldados de la gendarmería del estado, los despojaron de sus sementeras y dispusieron del maíz y demás productos que las componían, llevándose presos para Amatlán a Gregorio Martínez, Bernabé Segura, Teodoro Rodríguez y a un hijo del primero, Cristóbal Martínez.[23]

Al respecto el director político de Zapotlanejo, el 23 de octubre siguiente, informó al gobernador del estado que no era cierto que había ordenado la aprehensión de los indígenas, ni el despojo de que se quejaban, que si bien era cierto que los indígenas estuvieron presos en Zapotlanejo, remitidos por el comisario político de Matatlán, a petición de Casildo Pérez, quien se presentó a la directoría política de Zapotlanejo, manifestando que varios indígenas desmontaron y sembraron de maíz unos terrenos de su propiedad. Pérez dijo que interpuso un juicio en contra de los indígenas ante las autoridades judiciales, dictándose como resultado el aseguramiento de la cosecha y como depositario a Demetrio Ruiz, lo que se comunicó en su momento a los indígenas de Matatlán. Pero que el día 14 de octubre, al ir a hacer la recolección los señores Ruiz y Pérez, acompañados de un destacamento de gendarmería de Matatlán, que les proporcionó garantías, encontraron dentro de las sementeras a los indíge-

[22] AHJ. G-12-909. YAG/3006. Personal. Vecinos de Huisquilco. Yahualica, 5 de octubre de 1909.

[23] AHJ. G-12-909. ZAO/2789. Personal. Gregorio Martínez. Guadalajara, 10 de octubre de 1909.

nas pretendiendo sacar su maíz, y por tal motivo los apresaron, pero que podía ponerlos en libertad, previa amonestación, para que entre tanto se abstuvieran de meterse a los terrenos en disputa y de disponer de éstos, lo cual hizo el director político. El 26 de noviembre de ese año, el gobernador del estado dispuso que se comunicara a los indígenas de Matatlán que el asunto se estaba tramitando en los tribunales judiciales.[24]

Guadalajara. El 27 de marzo de 1868, solicitaron amparo y protección de parte del juez de distrito de Guadalajara, 121 detenidos acusados de distintos delitos entre los que se encontraban siete procesados por sospechosos, otros siete por robo, seis por ebrios y escandalosos, tres por comisión secreta, otros tres por prófugos, dos por vagos, uno por estupro, otro por pernicioso, otros más por escandaloso, uno porque le encontraron armas en su casa, otro por sospechoso y traidor, otro porque el juez lo pasó de lo criminal, y 86 de los cuales no se expresó el delito.[25] Todos los detenidos declararon que estaban en la cárcel de Guadalajara por órdenes del jefe político del primer cantón. Alegaron en su defensa que se les estaba violando una de las garantías individuales que estaba expresada en el artículo 19 de la Constitución federal de 1857 que establecía lo siguiente:

> Art. 19. Ninguna detención podrá exceder del término de tres días, sin que se justifique con un auto motivado de prisión y los demás requisitos que establezca la ley. El solo lapso de este término, constituye responsables a la autoridad que la ordena o consiente y a los agentes, ministros, alcaides o carceleros que la ejecuten. Todo maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o con-

[24] AHJ. G-12-909. ZAO/2789. Personal. Gregorio Martínez. Guadalajara, 10 de octubre de 1909.

[25] CCJG. Juzgado de Distrito. Amparo, 1867-1870. Caja 1/Legajo B/Expediente 7. Guadalajara, 27 de marzo de 1868.

tribución en las cárceles, es un abuso que deben corregir las leyes y castigar severamente las autoridades.[26]

Acusaron al jefe político de Guadalajara de estar violando sus derechos y garantías constitucionales y argumentaron que todo habitante de la república que en sus persona e intereses sean violadas las garantías constitucionales, tiene derecho a ocurrir a la justicia federal, solicitando amparo y/o protección, artículo segundo de la ley de 30 de noviembre de 1861. Dijeron al respecto:

> Nosotros somos habitantes de la República, creemos que la garantía constitucional concedida en el artículo 19, ha sido violada en nuestra persona con la prisión que experimentamos por disposición del señor Jefe Político de esta ciudad y solicitamos amparo y protección de la justicia federal.[27]

Correspondió por ley al juez de distrito de la ciudad de Guadalajara conocer la demanda en contra del jefe político del primer cantón. Quien representó a los 121 detenidos fue el defensor de presos sustituto, este abogado presentó una solicitud para que se suspendiera la ejecución de las sentencias en contra de los presos, quienes habían sido sentenciados por el jefe político, unos a deportación, otros a "pena última", y a los otros todavía no se le había sentenciado. El jefe político de Guadalajara, Francisco O'Reilly, había procesado a estos presos, pero el hecho fue que no se les había declarado "bien presos", porque no se les había podido informar o no sabían por qué ley, ni se habían observado las formalidades de defensa, prueba y citación, sino que de golpe, y sin saber por qué delito, se les notificó que estaban condenados a muerte o a destierro, los presos se alarmaron de ver su procedimiento realizado contra todo derecho, creyendo

[26] Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de febrero de 1857. En Tena. (1999), p. 609.

[27] CCJG. Juzgado de Distrito. Amparo, 1867-1870. Caja 1/Legajo B/Expediente 7. Guadalajara, 27 de marzo de 1868.

que no cabía ningún recurso, ni se les concedía tiempo para justificar su inocencia, sintiendo que se violaba una ley fundamental. El abogado defensor alegó que el jefe político actuó por instrucciones del gobierno o por decisión propia, pero sin comprender bien sus deberes y excediendo los límites marcados por la ley. Dado que se habían violado las garantías constitucionales de los presos en cuestión y corría peligro inminente la vida y la libertad de éstos, el abogado defensor pidió al juez de distrito que se suspendiera todo procedimiento, mientras tanto el jefe político no satisfaga las facultades de su procedimiento y se patentice que sus representados estaban sentenciados con entera sujeción a las leyes. Entre los presos que estaban anotados en la lista, se encontraban siete presos sentenciados a muerte, de ahí la urgencia de suspender dicho proceso.[28]

Otros casos relacionados con los anteriores fueron los de Lino López, Ladislao Núñez y Nicomedes Gómez, vecinos del pueblo de San Andrés, quienes expusieron ante el juez de distrito de Guadalajara, que el 12 de febrero de 1868 fueron aprehendidos en el mencionado pueblo por una comisión de agentes de policía de Guadalajara y conducidos a la cárcel en donde quedaron a disposición del jefe político, según se les informó. Pero que desde el día de su aprehensión habían permanecido completamente en el olvido, pues no se les había dicho nada, ni se habían practicado las formalidades que la ley prevenía, pero que el día anterior, el alcalde les informó que, junto con otros individuos, habían quedado sentenciados a cuatro años de destierro fuera del estado de Jalisco. Semejante procedimiento les pareció ilegal, porque violaba el artículo 19 de la Constitución Federal de la República, atropellando las garantías individuales que disfrutaba el ciudadano mexicano, por lo que protestaron contra dicha sentencia y solicitaron al juez, como autoridad de la federación, el amparo que la misma Constitución General de la República dispensaba en el artículo 101 y que hiciera al mismo tiempo que se cumpliera con las circulares de 8 y 12 del mes de abril, expedidas por el ministerio de go-

[28] CCJG. Juzgado de Distrito. Amparo, 1867-1870. Caja 1/Legajo B/Expediente 7. Guadalajara, 27 de marzo de 1868.

bernación, a fin de conseguir su absoluta libertad. Terminaron diciendo: "Es justicia que solicitamos".[29]

El artículo 101 de la Constitución Federal de la República al que se refieren, dice lo siguiente:

> Art. 101. Los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite:
> I. Por leyes o actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales.
> II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados.
> III. Por leyes o actos de las autoridades de estos, que invadan la esfera de la autoridad federal.[30]

Las detenciones arbitrarias por parte de los comisarios de policía eran constantes en el cantón de Guadalajara, como se muestra en los casos anteriores, con Gregorio Hernández no fue diferente, quien se presentó ante el juez de distrito y dijo que el 7 de abril de 1868 fue detenido y puesto a disposición del jefe político, pero que hasta el día 28 de abril de ese mismo año, no se le había tomado declaración alguna, tampoco le habían dado el auto de prisión, ni se le había consignado a un juez, como lo prevenían las leyes, y durante el plazo de 3 días. Por lo que Gregorio Hernández alegó que se habían violado sus garantías individuales establecidas en la Constitución federal en los artículos 13, 19 y 20.[31]

[29] CCJG. Juzgado de Distrito. Amparo, 1867-1870. Caja 1/Legajo A/Expediente 1. Guadalajara, 28 de abril de 1868.

[30] Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de febrero de 1857. En Tena. (|1999), pp. 623-624.

[31] CCJG. Juzgado de Distrito. Amparo, 1867-1870. Caja 1/Legajo B/Expediente 8. Guadalajara, 28 de abril de 1868.

El artículo 13 de dicha Constitución se refiere a que nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por tribunales especiales, y que ya no existían los fueros, mientras que el artículo 20 establece lo siguiente:

> Art. 20. En todo juicio criminal, el acusado tendrá las siguientes garantías:
> I. Que se le haga saber el motivo del procedimiento y el nombre de su acusador, si lo hubiere.
> II. Que se le tome declaración preparatoria dentro de cuarenta y ocho horas, contadas desde que esté a disposición de su juez.
> III. Que se le caree con los testigos que depongan en su contra.
> IV. Que se le faciliten los datos que necesite y consten en el proceso, para preparar sus descargos.
> V. Que se le oiga en defensa por sí o por persona de su confianza, o por ambos, según su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda, se le presentará lista de los defensores de oficio, para que elija el que, o los que le convengan.

Gregorio Hernández estaba detenido en la penitenciaría del estado y expuso ante el juez que su prisión había sido absolutamente arbitraria, porque no existía motivo alguno para que se le tuviera preso. Añadió que fue aprehendido por un agente de policía dentro de su hogar, junto a su numerosa familia, a la cual se dejó en el mayor abatimiento por la sorpresa que causó la intempestiva aparición de la policía, cuyo agente, dijo Gregorio, solo podía suponer que le tenía "enemistad", y por eso fue puesto a disposición del jefe político del primer cantón, quien debió consignarlo al juez respectivo para que fuera juzgado. Pero que en más de 30 días que llevaba preso no se le había declarado "bien preso", o cuando menos si era criminal o no, en tal caso se le habría tomado su declaración como establecía la ley. Hernández se preguntó:

> ¿Hasta qué punto pueden llegar las facultades de la autoridad política que sin oír a los acusados, los condena a un encierro perpetuo de su propia autoridad? ¿Cuál es la fe pública que merece un agente de policía sin instrucción

y sin conciencia para que su dicho aislado y torpe, tenga tanto valor ante aquella autoridad?".[32]

Hernández o su abogado defensor sostuvieron que las circulares del 8 y 12 de abril de 1868, prevenían terminantemente que todos los presos a quienes no se les hubiera justificado debidamente su prisión, serían puestos inmediatamente en libertad, exigiendo la responsabilidad a los funcionarios que habían consentido en ella, como de hecho se había verificado en la ciudad de México. Por lo que le solicitó al juez que lo dejara en absoluta libertad y exigiera la responsabilidad a los funcionarios que habían infringido las leyes. Concluyó diciendo: "Es justicia que pido y protesto".[33]

Guadalajara, un conflicto internacional. El 16 de junio de 1910 ocurrió un accidente automovilístico en las calles céntricas de Guadalajara, entre un chofer de origen japonés, quien manejaba un carro con el que atropelló al hijo del jefe político, Nicolás España, que viajaba en una bicicleta. Según algunos testigos del accidente, transeúntes que pasaban por el lugar, el chofer no fue responsable del choque, sino el ciclista, quien quedó herido ligeramente en la cabeza. Los testigos afirmaron que el japonés llevaba su coche del lado derecho de la calle, conforme a los reglamentos respectivos de tránsito de vehículos, pero el ciclista en cuestión, iba frente al automóvil a la izquierda de la vía, lo que, según los mismos reglamentos estaba prohibido. Los testigos enviaron cartas al secretario de Relaciones Exteriores de la ciudad de México, protestando contra la ilegal detención del chofer japonés. A su vez, el secretario de Relaciones

[32] CCJG. Juzgado de Distrito. Amparo, 1867-1870. Caja 1/Legajo B/Expediente 8. Guadalajara, 28 de abril de 1868.

[33] CCJG. Juzgado de Distrito. Amparo, 1867-1870. Caja 1/Legajo B/Expediente 8. Guadalajara, 28 de abril de 1868.

Exteriores se comunicó con el gobernador del estado de Jalisco para darle a conocer el caso.[34]

Quienes mandaron las cartas al secretario de Relaciones Exteriores fueron los súbditos japoneses residente en Guadalajara, en ellas precisaron que el chofer se llamaba Sanshiro Ninoi, quien tenía licencia para manejar y era empleado de "una familia respetable de esta ciudad". Ninoi pasó 20 días prisionero, mientras que el hijo de jefe político se alivió completamente y asistió todos esos días a la escuela. Los patrones del chofer habían intentado por todos los medios defenderlo, pero el jefe político no había querido liberarlo, rechazando todas las peticiones hechas por ellos, sin darles ninguna explicación. Por eso pidieron al secretario de Relaciones Exteriores su intervención en el caso. Firmaron la carta once súbditos japoneses, y enviaron copia a Kumaichi Horigoutchi, encargado de negocios del Imperio Japonés en México.[35]

Sanshiro Ninoi envió una carta personal al encargado de Negocios del Imperio Japonés solicitando su ayuda, fechada el 6 de julio de 1910. En ella dijo que estaba preso desde hacía más de 18 días, "por un ligero accidente", del que no fue culpable. Aclaró que era chofer, empleado por el señor José Cortés, con domicilio en la calle López Cotilla, en la ciudad de Guadalajara. Relató puntualmente el accidente sucedido el 16 de julio de ese año a las 12:30 p.m. en la Colonia Francesa, por la calle Hidalgo. Aseguró que manejaba el auto por el lado derecho de la calle según el reglamento respectivo, pero que se encontró de frente con un muchacho de cerca de 13 años de edad, montado en una bicicleta, que venía a toda carrera del lado izquierdo de la misma calle, en oposición al mismo reglamento. Dijo el chofer: "Silbé yo frecuentes veces dándole el aviso de alarma, pero el referido muchacho iba con toda velocidad, con la cabeza baja, sin que notara que un choque era inminente con mi carruaje". El

[34] AHJ. G-8-1910. Inv. 9998 (caja 8). Secretario de Relaciones Exteriores. Ciudad de México 12 de julio de 1910.

[35] AHJ. G-8-1910. Inv. 9998 (caja 8). Varios súbditos japoneses. Guadalajara, 6 de julio de 1910.

resultado fue que la bicicleta chocó contra el auto y el muchacho cayó de su bicicleta, quedando ligeramente herido en la cabeza y brazo derecho. Ninoi se bajó del auto para levantar al pobre muchacho y al mismo tiempo el coronel Nicolás España, jefe político de Guadalajara, que iba en el tranvía, se bajó para auxiliarlo. Pero la gran sorpresa para Nicolás España fue que el muchacho accidentado era su propio hijo, de tal manera que envió al chofer inmediatamente, y sin ninguna averiguación, a la cárcel. Ninoi agregó que dos días después del accidente, el juez le hizo algunas preguntas sencillas y se retiró dejándolo en la prisión, donde llevaba a la fecha 18 días. Según el chofer, su patrón fue muy "bondadoso", ya que le contrató dos abogados para defenderlo, quienes pidieron varias veces al juez su libertad bajo fianza, lo que no fue aceptado, sin darles razón alguna. Por lo anterior, Ninoi pidió al encargado de negocios del Imperio Japonés ayuda y protección para obtener su libertad, ya que consideraba que era totalmente inocente.[36]

Por su parte, Nicolás España contestó al propio Ninoi y a sus defensores, que el accidente y los hechos ocurridos habían sido totalmente diferentes a como los contaba el chofer y sus defensores. España dijo que al momento del accidente no estaba al frente de la jefatura política, sino que el encargado era el presidente municipal de Guadalajara, quien desempeñaba dicho puesto porque España se encontraba delicado de salud. Por lo que no pudo intervenir en la consignación de Sanshiro Ninoi. Pero que desgraciadamente presenció los hechos, y puede decir que el accidente fue de muy distinta manera a como lo relatan los quejosos. Dijo el coronel España, que Ninoi ciertamente llevaba por la derecha de la calle su vehículo, y que su hijo iba por la izquierda de la misma, pero que Ninoi conducía a demasiada velocidad, un poco antes del encontronazo Ninoi viró a la izquierda y fue a chocar donde pasaban las vías del tranvía, al lado izquierdo de la calle mencionada. Agregó España que era falso que el chofer haya parado inmediatamente su auto y se haya bajado a auxiliar al muchacho herido, por el contrario, el chofer siguió su marcha

[36] AHJ. G-8-1910. Inv. 9998 (caja 8). Sanshiro Ninoi. Guadalajara, 6 de julio de 1910.

y fue detenido por un policía lejos del lugar de los hechos. España dijo que casualmente viajaba en el tranvía de "Hidalgo y Colonias", y vio un cuerpo en medio de la vía, sin saber siquiera que fuera su hijo, se bajó rápidamente del tren y encontró a su hijo en un charco de sangre, con la cabeza sobre la vía y desmayado por la conmoción cerebral que había sufrido. Con respecto a la importancia de las lesiones sufridas por el hijo del coronel España, que los quejosos calificaron de "insignificantes", el jefe político dio a conocer el certificado médico de las lesiones de su hijo, este documento dice que las lesiones fueron varias heridas sangrantes que no ponían en peligro su vida y que curarían en quince días sin dejar cicatriz notable, con excepción de una fractura no expuesta de clavícula izquierda que tardaría más tiempo en sanar. Por lo que el joven no podría retomar sus clases de forma inmediata. Por último, España también dijo que era inexacto que el señor Cortés y sus abogados hubieran hecho gestiones ante la jefatura política para conseguir la libertad del chofer, ya que esto no dependía de la jefatura sino del juzgado que llevaba el proceso que se le instruyó.[37]

En el expediente respectivo no se aclara ni se da seguimiento al proceso judicial en contra de Sanshiro Ninoi, por lo que no se sabe exactamente en qué terminó el caso. Lo que sí se muestra, es que los procesos judiciales y criminales seguían varios pasos e instancias, y que el jefe político no podía decidir totalmente de forma unilateral e individual en ellos, pues había otros sujetos e instituciones involucradas que participaban decididamente en la protección de sus propios intereses.

2° Cantón Lagos

San Juan de los Lagos. El ayuntamiento de San Juan de los Lagos, presidido por Jesús Martín Padilla, el 1° de septiembre de 1908, acordó que se formara una comisión compuesta por un miembro del ayuntamiento y un particular para presentarse ante el gobernador del estado, con el fin

[37] AHJ. G-8-1910. Inv. 9998 (caja 8). Nicolás España, Guadalajara, 23 de julio de 1910.

de informarle que el director político del lugar no tenía aptitudes para desempeñar sus deberes, debido a que habían llegado quejas a dicha corporación por conducto de los munícipes, en contra de abusos cometidos en la oficina del director político, y porque en la población había mucha inseguridad y robos, debido a la falta de vigilancia y buen desempeño por parte de la autoridad política. Una de las acusaciones fue que el director político multó a personas por faltas administrativas y el dinero de dichas multas no entró a la tesorería municipal. El ayuntamiento de San Juan de los Lagos envió su queja a través del licenciado Celedonio Padilla, quien intercedió ante el gobernador.[38]

Sin embargo, hubo varias cartas de comerciantes y agricultores de San Juan de los Lagos que apoyaron ampliamente al director político, señalando su honradez y su buen desempeño en el cargo, por tanto lo respaldaban varias firmas. El director político informó al gobernador que había desempeñado bien sus funciones y que lo avalaban los comerciantes y agricultores del lugar. Pero que los miembros del ayuntamiento habían tenido con él problemas de carácter político.[39]

El informe del director político de San Juan de los Lagos, Francisco Aceves, que envió al gobernador del estado el 29 de septiembre de 1908, estaba basado en una encuesta que hizo el mismo director político "entre varias personas de las clases sociales de este lugar", a quienes hizo distintas preguntas: sobre las quejas que ellos hubieran enviado a los munícipes de San Juan de los Lagos, también sobre las faltas que él hubiera cometido en cumplimiento de sus deberes, otra sobre los abusos cometidos por el mismo director político, una más sobre las multas impuestas por el director político y que no hayan entrado a la tesorería municipal, y por último, si había un desagrado general en la sociedad en contra del direc-

[38] AHJ. G-12-908. SJL/1832. Personal. Ayuntamiento. San Juan de los Lagos, 1° de septiembre de 1908.

[39] AHJ. G-12-908. SJL/1832. Personal. Ayuntamiento. San Juan de los Lagos, 1° de septiembre de 1908.

tor político por su manera de proceder en el ejercicio de sus funciones, y si por ese motivo, el pueblo estaba propenso a cometer algún desorden.[40]

Francisco Aceves dijo que interrogó a catorce personas siendo cuatro de clase alta, cinco de clase media y 5 de clase baja, obviamente todas las respuestas fueron a favor del director político. Pero sobre las quejas del presidente municipal Jesús Martín Padilla, informó al gobernador que al separarse de la directoría política su antecesor, Enrique Zepeda, éste le ofreció a Padilla hacerlo director político del departamento de San Juan de los Lagos, conviniendo entre ambos repartirse por mitad el sueldo de director político por cierta temporada, pero como no se realizó este plan, ahora procuraba Padilla poner al director político, Francisco Aceves, en ridículo frente al gobierno del estado para aprovechar las faltas temporales de la oficina de la directoría política, y, de esta manera, poder trabajar para reelegirse como presidente municipal y continuar haciendo política para lograr su objetivo de llegar a ser director político de San Juan de los Lagos.[41]

Agregó Aceves que la corporación municipal estaba resentida porque los exhortó a cumplir con sus deberes, pues ninguno cumplía con sus comisiones y que, por ejemplo, desde hacía dos meses y medio, no se encendía el alumbrado público, por más que se la había dicho a los miembros del ayuntamiento, y señaló que el presidente municipal no atendía su oficina porque se la pasaba en su rancho, que estaba fuera de esta población. Solicitó al gobernador del estado que ordenara a los munícipes Jesús Martín Padilla y Juan Ornelas, quienes eran los más revoltosos y decididos para hacer política, que pidieran licencia para separarse de la corporación por el tiempo que les faltaba para terminar el año, con lo que

[40] AHJ. G-12-908. SJL/1832. Personal. Ayuntamiento. San Juan de los Lagos, 1° de septiembre de 1908.

[41] AHJ. G-12-908. SJL/1832. Personal. Ayuntamiento. San Juan de los Lagos, 1° de septiembre de 1908.

se evitarían algunas dificultades para participar en las nuevas elecciones para los cargos municipales.[42]

3° Cantón, La Barca

Ocotlán. María Flores, casada, mayor de edad y vecina de El Salitre, municipio de Ocotlán, el 30 de julio de 1906, se quejó ante el gobernador de que su esposo, Pilar Salcedo, fue aprehendido en Poncitlán por el director político. Dijo María Flores que su marido tenía 20 días a la fecha, preso e incomunicado, sin saber el motivo de su aprehensión. Agregó la señora Flores que la autoridad política no tenía derecho para juzgar a su esposo, y que tampoco le podía imponer una pena mayor de quince días de arresto, en caso de que hubiera cometido alguna falta, ni tampoco incomunicarlo por más de tres días, de lo contrario el director político estaría infringiendo la ley y varios artículos del Código de Procedimientos Penales. Y que en caso de que su esposo hubiera cometido un delito, debió ser consignado a la autoridad judicial, antes de las 24 horas después de verificada su aprehensión. La señora Flores apoyó su reclamo en los procedimientos penales asesorada por el licenciado Gabriel Vizcarra. El gobernador del estado transcribió la queja al director político de Ocotlán y le pidió informes al respecto el 1° de agosto de ese año.[43]

El director político de Ocotlán le contestó al gobernador cuatro días después, informándole que el 1° de julio de 1906, fue aprehendido Pilar Salcedo, por haberlo encontrado con otros dos individuos jugando albures. Agregó el director político que una persona acusó a Salcedo de robo, pero que el acusador no se presentó a confirmar su declaración y que por ello no se le consignó a la autoridad respectiva. Dijo el director político que por haberlo encontrado jugando albures lo castigó con quince días de arresto, apoyado en el reglamento de policía, pero que al estar terminando

[42] AHJ. G-12-908. SJL/1832. Personal. Ayuntamiento. San Juan de los Lagos, 1° de septiembre de 1908.

[43] AHJ. G-12-906. OC/2479. Personal. María Flores. Ocotlán, 30 de diciembre de 1906.

la condena, el preso cometió algunas faltas de respeto a la autoridad, por lo que se le impusieron otros tres días como arresto, los que cumplió el 30 de julio, día en que fue puesto en libertad. Señaló el director político que Salcedo nunca estuvo incomunicado, puesto que no había lugar para incomunicar a los presos, "está en el calabozo donde se encuentran todos los presos", aseveró el director político. El 10 de agosto siguiente, el gobernador del estado le comunicó a la señora Flores la resolución y el informe del director político de Ocotlán, para que dijera si estaba conforme con los hechos que se expresaron ahí.[44]

Zapotlán del Rey. María Rosales, viuda, mayor de edad y vecina de Zapotlán del Rey, el 13 de enero de 1908 se quejó ante el gobernador del estado que el día 8 de diciembre del año anterior, su hijo de 18 años de edad fue maltratado y golpeado sin causa justificada por el comisario del lugar, Ildefonso Loza, junto con su hermano Francisco. La señora Rosales, al intentar defender a su hijo, fue igualmente maltratada por dichas autoridades, "sin ninguna consideración a su sexo". La señora Rosales acusó que los golpes le causaron a su hijo tres heridas en la cabeza con las pistolas que portaban dichas autoridades. Agregó que a los tres días remitieron a su hijo a Tototlán, herido, amarrado y acusado de bandido y de malos antecedentes, con el fin de consignarlo al servicio de las armas. Después, el director político de Tototlán, puso inmediatamente en libertad al hijo de la señora Rosales. Esta señora dijo que los señores Loza se presentaron el 6 de enero en su casa, cerca de las diez de la noche, armados con pistolas y con gran escándalo y atropellos le hicieron abrir la puerta por la fuerza, disparando varios tiros, con el fin de intimidarla e introducirse en su casa. Dentro de ella los señores Loza cometieron todo género de abusos, como registrar camas donde dormían sus hijas, doncellas menores de edad, alumbrando y levantándoles la ropa, con pistola en mano, bajo el pretexto de ver si estaba allí su hijo Juan, contra quien proferían insultos y amenazas de muerte. Dijo la señora Rosales que no sabía el paradero

[44] AHJ. G-12-906. OC/2479. Personal. María Flores. Ocotlán, 30 de diciembre de 1906.

de su hijo Juan, porque huyó debido a la persecución injusta de que fue objeto. Por lo que pidió se le respetaran las garantías para su familia y castigo para los culpables, los hermanos Loza.[45]

El 14 de enero de 1908, el subdirector político de Tototlán informó al gobernador del estado que era cierto que Juan Mayoral fue remitido a su oficina, pero viendo que los golpes que tenía no ameritaban consignación, y al mismo tiempo presionado por los amigos de Mayoral, lo tuvo que dejar en libertad. Agregó que la conducta de Mayoral era enteramente perniciosa, dado al vino, a la baraja y a la vez asesino, y que tenía poco respeto por las autoridades, ya que Juan Mayoral le había dado un balazo al comisario Ildefonso Loza en una casa habitación. Por su parte, el 25 de enero de ese año, el encargado del Ministerio Público de Jalisco, informó al gobernador del estado que ya se había dado la orden a los agentes del Ministerio de La Barca para promover la investigación que correspondía en contra de Ildefonso y Francisco Loza, Julián Flores y Quirino Madrigal por los hechos delictuosos de que los acusó la señora María Rosales.[46]

Mezcala. Los indígenas del pueblo de Mezcala, del municipio de Poncitlán, el 20 de agosto de 1908 se quejaron ante el gobernador del estado de Jalisco, del comisario político de Mezcala, Gabino Santiago, quien había rentado, empeñado y tratado de vender parte de los terrenos del pueblo, sin dar cuenta del producto de la venta, para mejorar al pueblo. Los indígenas se quejaron de que en dicha población había continuos escándalos sin que el comisario se preocupara por reprimirlos, antes bien los toleraba. Los vecinos alegaron que no había garantías y que cuando estaba al cargo el señor Santiago era "como si no existiera autoridad". Al día siguiente el director político de Ocotlán fue a entrevistarse con los vecinos de Mezcala, quienes le reiteraron su queja personalmente, por lo que el director político informó del tema al gobernador del estado. La contestación del gobernador tuvo que esperar hasta el 30 de septiembre

[45] AHJ. G-12-908. ZAR/2632. Personal. María Rosales. Guadalajara, 13 de enero de 1908.

[46] AHJ. G-12-908. ZAR/2632. Personal. María Rosales. Guadalajara, 13 de enero de 1908.

de ese año, indicándole al director político de Ocotlán que amonestara al comisario político, y que, en caso que estimara conveniente, lo separara del cargo, para que pusiera a otra persona que lo sustituyera.[47]

Zula. Los vecinos de la población de Zula, en el cantón de La Barca, se quejaron en contra del comisario político de dicho lugar porque los obligaba a hacer las rondas, que no permitía que abrieran los comercios después de las ocho de la noche y que imponía a los detenidos por embriaguez a desempeñar quehaceres propios del comisario, con la amenaza de mandarlos a Ocotlán con cargos falsos, por lo que pidieron su destitución.[48]

4° Cantón de Sayula

El 2 de enero de 1907 los vecinos de Tepec solicitaron al jefe político del 4° cantón, Sayula, que nombrara nuevos comisarios políticos, por estar inhabilitados los que habían sido nombrados, Tomás Medrano y Andrés Beltrán, porque tenían hechos pendientes con la ley que los ponían fuera del servicio de los cargos públicos, y porque quedaron abolidas las elecciones para comisario político. Solicitaron los habitantes del pueblo que nombraran a "otras personas que no tengan tacha". Tomás Medrano era el comisario político de Tepec, pero los vecinos del pueblo lo acusaron de usar en su beneficio los fondos del ramo de degüello, de cometer abusos y crímenes en estado de ebriedad, de no meter a la cárcel a los vagos y bandidos, y de castigar injustamente a los pacíficos. Añadieron que Tomás Medrano, Pedro y Andrés Beltrán hirieron gravemente a Lucio Santana, que Andrés Beltrán tenía delitos pendientes con la autoridad, y que tam-

[47] AHJ. G-12-908. PO/2393. Personal. Tomás Moreno. Ocotlán, 20 de agosto de 1908.

[48] AHJ. G-12-908. OC/2857. Personal. Jefatura Política. La Barca, 29 de octubre de 1908.

bién causó graves heridas a Atilano Rodríguez. Además se quejaron de Patricio Lucas, judicial propietario, quien cometió abusos y torpezas.[49]

Por su parte, el jefe político de Sayula dijo, el 8 de enero de 1908, que no había motivo para la queja de los indígenas de Tepec, puesto que éstos no dijeron cuáles eran los abusos cometidos por las autoridades políticas que solicitaron que fueran removidas, agregó que los funcionarios señalados habían desempeñado bien sus responsabilidades al frente de la policía. Añadió que lo único que pudo notarse en la demanda de los indígenas era la "enemistad" que algunos vecinos siempre habían tenido en contra de las autoridades, y concluyó que con la remoción de los funcionarios no se acabaría el problema.[50]

En otro acontecimiento, Aldo García se quejó el 13 de octubre de 1908 porque el presidente municipal de Amacueca, por odios personales, le impuso una multa de 25 pesos con el pretexto de haber resistido a la policía, pero por no ser ciertos los hechos acudió el jefe político de Sayula. Aldo García dijo que la causa real de la multa fue porque el presidente municipal pretendía a su esposa y en su propia casa. Mientras que el presidente municipal dijo que la multa se debió a las agresiones cometidas por García en contra de la policía.[51]

6° Cantón, Autlán

Unión de Tula. El 16 de enero de 1905 Victoriano Contreras se quejó en contra del director político del departamento de Unión de Tula, Ismael González, porque le exigió que presentara su título de médico. Contreras alegó que él había ejercido su profesión de médico sin que haya habido problema alguno, ya que su título se lo presentó al ayuntamiento de

[49] AHJ. G-9-908. JAL/1921. Asuntos indígenas. Severo Becerra. Tonalá. 1° de enero de 1908.

[50] AHJ. G-9-908. JAL/1921. Asuntos indígenas. Severo Becerra. Tonalá. 1° de enero de 1908.

[51] AHJ. G-12-908. SA/1627. Personal. Jefatura Política. Sayula, 13 de octubre de 1908.

Unión de Tula y las curaciones que había hecho hablaban de su capacidad como médico. Alegó que el director político no tenía ningún derecho de exigirle el título y mucho menos cuando era a petición de un particular, el doctor Ignacio Moreno. Victoriano Contreras terminó diciendo que el director político era una autoridad muy "débil e inocente", y opinó que podía cometer más torpezas accediendo al pedido de cualquier particular.[52]

Ismael González había enviado, el 10 de enero anterior, un oficio al doctor Victoriano Contreras exigiéndole la presentación del título, porque se presentó a su oficina el doctor Ignacio Moreno mostrando su título de doctor en medicina, cirugía y obstetricia, exigiendo que se presentaran a la directoría política los títulos de las personas que ejercían la medicina en dicho departamento. Informado el gobernador de Jalisco del problema, dispuso el 23 de enero siguiente, que se le contestara a Victoriano Contreras que el director político de Unión de Tula obró dentro de sus facultades, dada la obligación que tenía de velar por la fiel observancia de las leyes, así como pudo también, dirigirse con el mismo objeto al ayuntamiento del lugar.[53]

Denuncia contra el director político. Vecinos de Unión de Tula se quejaron ante el gobernador del estado el 22 de mayo de 1908 por abusos cometidos por el director político Andrés Lozano. Acusaron a la familia Moreno de influir en las autoridades locales y dijeron que su dominio se extendía hasta impedir el castigo de faltas o delitos. También denunciaron que el director político protegía los intereses de la familia Moreno, y de no castigar los delitos y faltas cometidos por los recomendados de dicha familia. Acusaron a Andrés Lozano de servilismo, y dijeron que los empleados y sirvientes de la familia Moreno habían cometido faltas

[52] AHJ. G-12-905. UNT/493. Personal. Victoriano Contreras. Unión de Tula, 16 de enero de 1905.

[53] AHJ. G-12-905. UNT/493. Personal. Victoriano Contreras. Unión de Tula, 16 de enero de 1905.

y delitos sin haber sido castigados, pues estaban acusados de robo, riña y violación. Sostuvieron que el director político se paseaba en los caballos de la familia Moreno, desatendiendo sus obligaciones como el cobro de impuestos, licencias y permisos. Los vecinos se quejaron de que los calabozos estaban en pésimas condiciones insalubres y que los policías a cargo de Lozano tenían antecedentes criminales.[54]

La queja anterior fue publicada en el periódico local *El Kaskabel* y llegó a conocimiento de la opinión pública y de las autoridades del estado, por lo que el gobernador pidió informes al director político de Unión de Tula, pero al mismo tiempo, hubo telegramas de apoyo hacia el director político en cuestión, desmintiendo las acusaciones en su contra, por parte de la familia Moreno y otras personas notables de Unión de Tula. Los telegramas dirigidos al gobernador en el mes de julio de 1908, por parte de los simpatizantes del director político, aseguraron que eran injustas dichas acusaciones en contra de dicho funcionario, y que la mayoría del vecindario estaba satisfecha con su administración, salvo los enemigos inevitables que hay en esos puestos. Roberto Moreno afirmó que Clemente Díaz, un vaquero empleado por la familia Moreno, era acusado con calumnias y que Clemente Díaz era honrado y reconocido como tal. Otros vecinos integrantes de la "sociedad" de Unión de Tula afirmaron que eran calumnias las acusaciones en contra del director político, quien para ellos era un funcionario "honorable". Entre los firmantes de esos telegramas estaban Roberto y Enrique Moreno, Anacleto y Cipriano Covarrubias, J. Preciado, F. Ramírez, Joaquín Gómez y Narciso de Dios Contreras.[55]

Por otra parte, ese mismo mes de julio, los detractores del director político se quejaron ante el gobernador del estado: por ejemplo, Juan A. Godina dijo temer que Andrés Lozano pudiera cometer una arbitrariedad en su contra por ser el autor del artículo publicado en el periódico *El*

[54] AHJ. G-12-908. UNT/551. Personal. Jefatura Política. Unión de Tula. 13 de junio de 1908.

[55] AHJ. G-12-908. UNT/551. Personal. Jefatura Política. Unión de Tula. 13 de junio de 1908.

Kaskabel, y aseguró que los hechos denunciados eran totalmente ciertos. Juan G. Zamora, por su lado, denunció haber recibido ultrajes e injurias graves por parte del director político en la plaza principal ante testigos. Andrés Lozano, el director político de Unión de Tula, el 21 de julio de 1908, envió un informe o más bien su defensa, al gobernador del estado explicando su situación. Al igual que lo hicieron otros funcionarios políticos, el lenguaje que usó Lozano fue discriminatorio y autoritario, justificó todos sus excesos haciéndolos aparecer como medidas de buena administración y buena policía. Se defendió negando las acusaciones en su contra y las calificó de meras calumnias construidas por sus enemigos, quienes, según él, tenían turbios intereses y malos sentimientos hacia la autoridad. Además se jactó de tener el apoyo de las familias notables de Unión de Tula, pues el director político consideraba que era la "opinión que valía".[56]

El gobernador del estado resolvió dar las garantías necesarias a las personas que acusaron al director político de Unión de Tula, afirmando que no iban a ser aprehendidas por la autoridad local.[57] Aunque parecía que este caso podía haber sido lo más común, donde las familias notables y las autoridades políticas locales estaban en contubernio, la administración de la justicia y de la política no estaba totalmente del lado de los poderosos, ni las autoridades hacían todo lo que mandaban y ordenaban los acaudalados propietarios, hubo varios casos en los que no fue así.

8° Cantón, Colotlán

Quejas contra autoridades políticas. El 22 de septiembre de 1887 varios indígenas, con diversos profesiones y oficios, representantes de los tres barrios de Colotlán: Sollatitán, Tlaxcala y Tochopa, enviaron una

[56] AHJ. G-12-908. UNT/551. Personal. Jefatura Política. Unión de Tula. 13 de junio de 1908.

[57] AHJ. G-12-908. UNT/551. Personal. Jefatura Política. Unión de Tula. 13 de junio de 1908.

carta al gobernador del estado de Jalisco para pedirle "con todo respeto y adhesión" apelando a sus derechos que garantiza el artículo 8° de la Constitución general de la República.[58] Es importante resaltar que al invocar este artículo de la Constitución de 1857 los indígenas se asumieron como ciudadanos pues el derecho de petición solo lo podían ejercer los ciudadanos de la república. En su solicitud los indígenas dijeron que en 1880, el jefe político del cantón de Colotlán era Trinidad L. del Real, vecino del lugar, quien fue nombrado por el gobernador del estado en turno, y que durante el periodo en que gobernó del Real "ninguna de las clases sociales de las diversas municipalidades que forman el Cantón, apareció ni tuvo el más ligero motivo de queja". Agregaron los firmantes que el gobierno del estado tampoco tuvo que hacerle algún extrañamiento por falta de cumplimiento de su deber. Después de esa época, sostienen los vecinos, todos los jefes políticos que siguieron, "poco o nada" se ocuparon de atender sus deberes y obligaciones. Dijeron los habitantes de Colotlán que en los primeros días de su administración respetaban las garantías de los vecinos-indígenas ciudadanos, pero que una vez transcurrido un término más o menos breve, estas autoridades se ponían de acuerdo con "dos, tres o cuatro de los principales capitalistas en esta sociedad" en perjuicio de los vecinos del pueblo, de sus intereses y del bienestar social. El grupo de firmantes se asumían como personas con una "grandísima miseria", de "manifiesta ignorancia", como "indígenas" que formaban "la última clase condenada a sufrir siempre y por siempre el rigor exagerado de la ley", mientras que por otro lado, dichas autoridades trataban a las personas de la alta sociedad con muchas consideraciones, servicios y favores.[59]

Los indígenas de Colotlán dijeron que no pretendían quejarse de una autoridad política en especial, sino que hablaban en general de todas aquellas que habían gobernado el cantón sin ser de este pueblo, porque

[58] AHJ. G-9-887. CON/3800. Asuntos indígenas. Vecinos de Colotlán. Colotlán 22 de septiembre de 1887.

[59] AHJ. G-9-887. CON/3800. Asuntos indígenas. Vecinos de Colotlán. Colotlán 22 de septiembre de 1887.

así el gobierno del estado de Jalisco se los había mandado, "no para que abusen, pero ellos oficiosamente lo hacen". También dijeron temer las consecuencias de un conflicto con dichas autoridades, pero que solo usaron estos conceptos porque eran "ciertos y evidentes" y "para patentizar una vez más la deplorable situación que guarda la clase indígena en este lugar", debido a la gran distancia que lo separa de la capital del estado. [60]

Los firmantes se dirigieron al gobernador con mucho respeto y sumisión para que atendiera su solicitud, que no era otra cosa que "proteger a la clase indígena del pueblo de Colotlán" poniendo al frente de esta jefatura política a una persona del mismo pueblo, "que nos conozca y nos castigue cuando justamente lo merezcamos", que hable con ellos de acuerdo a las leyes y las instrucciones acertadas y prudentes de esa superioridad, pues de esa manera se logrará la conciliación de los intereses de los gobernantes y los gobernados, y así "pondremos punto a nuestras molestas y tal vez intempestivas peticiones por no existir en ese caso motivo absolutamente para hacerlas.[61]

Finalmente, los indígenas de Colotlán solicitaron al gobernador del estado que nombrara como jefe político del cantón a Trinidad L. del Real, pues dijeron los indígenas que era "vecino de este lugar, hombre de conocida honradez, de notoria probidad, aptitud manifiesta, de general aprecio y empatías en todo el Cantón". Por el contrario, tenían en muy mal concepto a Francisco Castillo Ramos, quien también fue jefe político de Colotlán. El gobernador del estado contestó que iba a turnar la petición de que se nombrara como jefe político del cantón de Colotlán a Trinidad del Real. La carta es un ejemplo claro de la relación de los pueblos indígenas con las autoridades políticas.[62]

[60] AHJ. G-9-887. CON/3800. Asuntos indígenas. Vecinos de Colotlán. Colotlán 22 de septiembre de 1887.

[61] AHJ. G-9-887. CON/3800. Asuntos indígenas. Vecinos de Colotlán. Colotlán 22 de septiembre de 1887.

[62] AHJ. G-9-887. CON/3800. Asuntos indígenas. Vecinos de Colotlán. Colotlán 22 de septiembre de 1887.

Francisco Castillo Ramos fue director político del departamento de Colotlán de diciembre de 1883 a mayo de 1884, luego fue ascendido a jefe político del cantón de Colotlán. El 28 de febrero de 1888, los vecinos de Colotlán enviaron un escrito al gobernador del estado, el general Ramón Corona, quejándose de la arbitraria y despótica conducta del jefe político de Colotlán, Francisco Castillo Ramos, y de Marcelino Zepeda, director político de Bolaños. El manuscrito dice que los firmantes eran casados, mayores de edad, y que en el ejercicio de sus derechos pidieron al gobernador del estado que quitara al jefe político de este lugar, Francisco Castillo, porque ya no lo aguantaban por su "negra conducta". Aseguraron que a mediados de febrero de 1888, el pueblo de Tlalcosahua perteneciente a este cantón, se reveló contra Albino Martínez, quien fue asesinado por los indígenas de dicho pueblo, porque Castillo lo mandó a cobrar "rezagos, con "la facultad de estropear familias, de apoderarse de bueyes, vacas, burros, puercos, gallinas, y toda clase de prendas, por la fuerza, sin más trámite ni fórmula de ley". Pero tan descabellada orden dio como resultado que los hombres honrados, que por ignorancia debían contribuciones, viendo tan graves abusos, dieron muerte a dicho comisionado, por lo que se procedió criminalmente en contra de los hombres que defendieron su hogar, sus familias y sus intereses.[63]

Dijeron los firmantes, que este hecho había alarmado a todo el cantón, y que en la cabecera de Colotlán, había ánimos y preparativos para revelarse en contra de Castillo Ramos y asesinarlo, tal como se había hecho con otras autoridades, en vista del disimulo de este gobierno, pues se advierte que un pueblo indignado perecerá, pero no respetará a un gobierno que se hace sordo a los clamores de un pueblo desgraciado como el de Colotlán, que le mandaban gobernantes ineptos y sinvergüenzas, arbitrarios y comodinos como Castillo Ramos y Marcelino Zapeda, director político de Bolaños, cuyo departamento estaba desde hacía una semana en vías de conspirar contra él, por el asesinato de un joven de buena familia

[63] AHJ. G-12-888. CON/3450. Personal. Juan Corona et al. Colotlán. 28 de febrero de 1888.

llamado Severiano González. Aseguraron los firmantes de la carta, que Severiano tenía relaciones amorosas con una mujer libre de matrimonio, y que "el bribón y malvado Zepeda" tuvo relaciones sexuales forzadas con dicha mujer, cometiendo el delito de estupro. Zepeda dio la orden para que un gendarme asesinara al joven Severiano, mientras Zepeda iba a Colotlán a entrevistarse con Castillo Ramos, "para quedarse a sus anchas con la novia del occiso". Termina la carta con varios cuestionamientos sarcásticos e irónicos al gobernador del estado, el general Ramón Corona:

> ¿Qué tal Director político de Bolaños, señor Gobernador? Y castillo Ramos, apoyando esos atentados y dando origen a otros asesinatos ¿Qué tal Jefe político de Colotlán, señor General Corona? Rogamos a usted señor gobernador que nos conteste qué hará nuestro gobierno, si nos quita tales autoridades, aunque mande otras peores; pues estas si no se van quién sabe su paradero cual será, pues aquí ya no las aguantamos.[64]

Los firmantes fueron Juan Corona, Felipe de Santiago, Inocencio García, José Pérez, Eufracio Delgado y Teófilo Méndez, entre otros. El gobernador de Jalisco mandó hacer una investigación y un juicio para saber la culpabilidad de las autoridades, pero en dicho juicio no se presentaron los acusadores y se declaró que tales personas no eran conocidas en Colotlán. Por lo mismo se declaró que las acusaciones eran falsas[65].

El 7 de abril de 1888, el jefe político de Colotlán, Francisco Castillo, tuvo que rendir un informe ante notario, en repuesta a las demandas de los ciudadanos y vecinos de Colotlán, por causa de sus abusos y arbitrariedades, por su participación en la muerte de un subordinado suyo, y la sublevación de los vecinos indígenas del pueblo de Tlalcosahua. El informe mencionado fue elaborado en respuesta a la orden de un juez y con el

[64] AHJ. G-12-888. CON/3450. Personal. Juan Corona et al. Colotlán. 28 de febrero de 1888.

[65] AHJ. G-12-888. CON/3450. Personal. Juan Corona et al. Colotlán. 28 de febrero de 1888.

fin de justificar su comportamiento ante el gobierno del estado de Jalisco. Castillo dijo en ese informe que fue acusado ante el gobierno por seis individuos que no conocía, y que se decían ser vecinos de Colotlán, que lo culpaban del levantamiento de los indígenas de Tlalcosahua del 15 de febrero de 1888, y en consecuencia ser la causa del asesinato de Abelino Martínez perpetrado por los indígenas de dicho pueblo.[66]

Las autoridades políticas recurrieron a varias estrategias para responder a las quejas que los habitantes de los pueblos hacían en su contra, una de ellas fue el desconocimiento de sus acusadores, negando su credibilidad, su honorabilidad, sus derechos y hasta su existencia. Para Castillo la acusación en su contra no era otra cosa que una "calumnia", esta fue otra manera de defensa y descalificación hacia sus acusadores. Por este motivo, Castillo pidió al juez que preguntara a las personas que según el juez, fueran las más honestas y creíbles. El ministerio público citó a los siguientes vecinos de Colotlán para entrevistarlos: Diego Cortés, Bonifacio Juárez, Refugio Juárez del Real, Ramón del Muro y a Urbano Sánchez. Todos los entrevistados tenían edades mayores a los 48 años, tres eran labradores y dos comerciantes, había solo un viudo y los demás eran casados.[67]

Los entrevistados negaron la culpabilidad del jefe político de Colotlán, Francisco Castillo, ya que no estuvo en el lugar del crimen cuando éste ocurrió, sino que estaba en Bolaños realizando una visita de inspección. También dijeron que Castillo había tenido un comportamiento "intachable".[68] Parece muy posible que los testigos hayan sido elegidos entre las personas cercanas al jefe político, y que respondieran lo que se les había aconsejado previamente, ya fuera por parte del juez o del mismo Castillo,

[66] AHJ. G-12-888. CON/3450. Personal. Diego Moreno, "Acta notarial", Colotlán, 7 de abril de 1888.

[67] AHJ. G-12-888. CON/3450. Personal. Diego Moreno, "Acta notarial", Colotlán, 7 de abril de 1888.

[68] AHJ. G-12-888. CON/3450. CON/3450. Personal. Francisco Castillo Ramos, Colotlán, 24 de abril de 1888.

pero dicho documento fue considerado como prueba de inocencia a favor del jefe político.

Castillo logró que el notario de Colotlán, Daniel Moreno, le diera un acta fechada el 24 de abril de ese año, en donde se afirmaba que las personas que lo acusaron "no existían" en Colotlán.[69] Ese mismo día, el jefe político de Colotlán explicó lo que había acontecido con Albino Martínez, que se desempeñaba como síndico del municipio de Colotlán: el 11 de febrero de 1888, Castillo ordenó a Albino Martínez que se dirigiera a los municipios pertenecientes al cantón con el fin de cobrar los impuestos que los ayuntamientos debían al de Colotlán por la alimentación de reos. Debido a ello, Martínez fue a Huejúcar, ahí el presidente municipal lo designó como agente fiscal, con el fin de recaudar los impuestos rezagados que varias personas debían al mencionado ayuntamiento. Martínez arribó a Tlalcosahua el 15 de febrero para cobrar los impuestos respectivos, pero los indios no quisieron pagar lo que adeudaban y se amotinaron asesinando a Martínez. Francisco Castillo dijo que el día del asesinato de Martínez, él estaba en Bolaños visitando al segundo departamento del cantón de Colotlán. Por esta razón, el jefe político sostuvo que la acusación hecha en su contra era "falsa y calumniosa", ya que no participó de ninguna manera en la rebelión de los indios de Tlalcosahua, mucho menos en el asesinato de Martínez.[70]

Castillo Ramos afirmó que, como jefe político, formaba parte de sus atribuciones el cobrar impuestos a los indios, quienes se estaban rebelando debido a la pobreza en que vivían, al despojo de tierras por parte de los propietarios, grandes y medianos, y por el excesivo cobro de impuestos por parte del gobierno. El jefe político de Colotlán no dijo nada sobre la violencia, el abuso de poder y el maltrato que estaban haciendo él y sus subordinados al cobrar impuestos y al imponer la "paz y el orden" en los pueblos de la sierra huichola. Los pobladores del cantón de Colotlán eran mayoritariamente indios huicholes que habitaban en pueblos de la sierra

[69] AHJ. G-12-888. CON/3450. Personal. Diego Moreno, 24 de abril de 1888.

[70] AHJ. G-12-888. CON/3450. Personal, Diego Moreno, 24 de abril de 1888.

o en la ciudad de Colotlán, gran parte de las quejas contra las autoridades políticas del cantón eran hechas por estos grupos indígenas. Los pueblos huicholes estaban en rebeldía contra de dichas autoridades. En mayo de 1884, los habitantes del pueblo de Asqueltán se rebelaron en el rancho de Las Moras, y se fueron a la sierra para refugiarse. Ese mismo año, pero en el mes de junio, los indígenas de Huicaltitán también se rebelaron contra el gobierno enfrentando a la guardia y al juez, dando por resultado un muerto a causa del motín.[71]

Al final se impusieron las reglas de un régimen autoritario, con criterios y decisiones que afectaron los intereses de los pueblos indios y de los ciudadanos del cantón de Colotlán. El Consejo de Gobierno del estado de Jalisco presidido por Luis Pérez Verdía, el 24 de noviembre, aprobó la resolución donde se exoneró a Francisco Castillo y a Marcelino Zepeda, en ella se dijo que las personas acusadoras no pudieron ser identificas, y que otras habían firmado sin saber de qué se trataba. Por lo que el Consejo de Gobierno concluyó que no había lugar a formación de causa contra Francisco Castillo Ramos y Marcelino Zepeda con motivo de los acontecimientos y hechos que se les atribuyeron en el oficio que Juan Corona y socios enviaron al gobernador del estado el 28 de febrero de 1888. Francisco Castillo recibió esta noticia con gran "satisfacción" y la compartió con sus subordinados y amigos.[72] Parecía que el proceso tenía realmente preocupados al jefe político y al director, y que no había sido un asunto sin importancia, sino que verdaderamente temieron que podían ser separados del cargo en algún momento y hasta ser apresados.[73]

[71] AHJ. G-9-884. CON/3784. Personal. Francisco Castillo Ramos. Colotlán, 20 de mayo de 1888.

[72] AHJ. G-12-888. CON/3450. Personal. Francisco Castillo Ramos. Colotlán, 25 de octubre de 1889.

[73] AHJ. G-12-888. CON/3450. Personal. Luis Pérez Verdía. Guadalajara, 24 de septiembre de 1889.

Totatiche. Algunos vecinos del pueblo de Totatiche, el 23 de julio de 1906, se quejaron ante el gobernador de Jalisco, de José María Arce, director político del departamento de Totatiche, en el cantón de Colotlán; debido a su conducta arbitraria, despótica, insolente, que trataba a sus gobernados con palabras incorrectas y que infringía constantemente la ley. Lo acusaron de que rara vez se encontraba en sus oficinas, siendo necesario ir a buscarlo al lugar donde generalmente asistía y jugaba ajedrez, y todavía lo tenían que esperar a que terminara el juego. También se quejaron de que el funcionario dormía largas siestas por la tarde, habiendo casos en que llegaban a casarse personas de clase pobre y los hacía esperar, después de un tiempo largo, el director político malhumorado se levantaba y se negaba a cumplir con sus deberes. Además, los vecinos también se quejaron de que Arce quería designar a su hijo adolescente de catorce años, como escribiente de la directoría. Las quejas y faltas eran numerosas, de tal manera que llegaron al conocimiento del gobernador de Jalisco, en respuesta, el director político negó las acusaciones y se justificó con un largo informe de sus actividades, tratando de desmentir a sus acusadores.[74]

La opinión de los vecinos y ciudadanos no era unánime, era normal que hubiera distintas posiciones y comentarios sobre las autoridades políticas. En este caso el director político José María Arce contó con la opinión favorable de un grupo de vecinos de la población, quienes escribieron al gobernador del estado el 21 de julio de 1906 desmintiendo las acusaciones en contra del director político calificándolas como "necias" y "calumniosas aseveraciones de los gratuitos enemigos del señor Arce". Este grupo de vecinos de Totatiche aseguró que Arce tenía una "actitud correcta en todos los sentidos", que lejos de merecer censuras merecía el aplauso y la justa aprobación de las personas de recto criterio", agregaron que el director político no había "hecho sino conducirse con estricta legalidad en el cumplimiento de sus deberes". Terminaron diciendo que Arce sostenía el principio de autoridad y la dignidad del gobierno que

[74] AHJ. G-12-906. TOE/2488. Personal- Director político. Totatiche. Julio-agosto de 1906.

representaba, señalaron que el desempeño del director político había sido ejemplar, y que no habían tenido un director igual, por lo que estaban "absolutamente a gusto, tranquilos y con las debidas garantías". Concluyeron los firmantes suplicando al gobernador del estado que no diera "crédito a las maliciosas acusaciones que en contra del referido funcionario se eleven hacia usted", porque, aseguraban José María Arce era "un hombre digno y honrado".[75]

Por su parte, José María Arce informó al gobernador del estado de Jalisco, el 15 de agosto de 1906, que el intrigante y autor principal de la carta donde se le acusaba, era el director de la escuela oficial, Félix C. Robles, al que describió como "un individuo de pésimos antecedentes que había sido procesado en Colotlán por faltas graves de irrespetuosidad y desobediencia, sus características son la disolución, la perversión de espíritu y una aparatosa hipocresía". Aseguró el director político, que Robles era el autor del escrito en su contra, porque ninguno de los demás firmantes era capaz de inventar las calumnias que se estamparon en el documento en cuestión.[76] Arce agregó, que no era cierto que rara vez estuviera en su oficina, pues la llevaba al corriente y se encontraba instalada en un departamento de su casa habitación. Agregó que sí era cierto que jugaba ajedrez en una casa de comercio, pero que lo hacía en horas que no eran de trabajo. Alegó también, que si dormía una siesta y se levantaba malhumorado, estos eran "actos de su vida privada, que aun siendo ciertos, no les importan a sus acusadores", pero que no era cierto que eso retardara los trámites del registro civil y que atendía a todo aquel que lo solicitara. Continuó diciendo en su defensa, que el nombramiento de su hijo no se había aprobado, y así siguió negando las acusaciones en su contra.

Del informe de Arce al gobernador se pueden sacar varias conclusiones: en primer lugar, cuando dijo que era mentira que no asistiera a su oficina, pues la directoría estaba en un departamento de su propia casa habitación, muestra que los asuntos públicos se trataban en el domicilio

[75] AHJ. G-12-906. TOE/2488. Personal- Director político. Totatiche. Julio-agosto de 1906.

[76] AHJ. G-12-906. TOE/2488. Personal- Director político. Totatiche. Julio-agosto de 1906.

privado del funcionario, con lo que se puede suponer que no había todavía una clara división entre el espacio público y el privado. En segundo lugar, aceptó que jugaba ajedrez, pero en horas que no eran de oficina, y que atendía debidamente a las personas que solicitaban sus servicios. Esto denota que tampoco había una clara división entre el tiempo estricto y exclusivo para las actividades públicas del funcionario y su vida privada, pero también que tenía aficiones y pasatiempos cultos, que no cualquier funcionario promedio tenía. En respuesta a la acusación de que dormía la siesta, también muestra que no había claras limitaciones entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, entre lo público y lo privado. Aunque la sensibilidad y defensa de los espacios privados y de la vida íntima, estaban presentes en la mentalidad del funcionario.

Al director político de Totatiche también se le acusó de haber aprehendido a Luis Sánchez, y de liberarlo inmediatamente por "influencias", a lo que Arce contestó que no se le apresó porque era un robo realizado al padre y al abuelo del mismo Luis, lo que para el director político no era un delito. Arce dijo que tenía mucha experiencia y bastantes escrúpulos en los delicados temas de la justicia. Por lo que mandó al sargento de la gendarmería a perseguir y atrapar a un bandolero que rondaba por El Salitre, pero que cuando regresó a Colotlán, sin haberlo apresado, el gendarme capturó a dos hombres, uno era un indio huichol del que había sospechas de que había robado un caballo que quería vender, y otro era Luis Sánchez que robó un poco de maíz.

Arce dijo que al indio huichol lo consignó inmediatamente a las autoridades judiciales, y a Luis Sánchez, que efectivamente había robado un poco de maíz, los afectados por este robo fueron el abuelo y el padre del mismo Luis, quienes se presentaron en la directoría y le pidieron a Arce que amonestara a su hijo para que no volviera a robar, y como no había propiamente delito qué perseguir, dejó libre a Sánchez. Lo que muestran estas acciones del director político era un trato diferenciado y racista en la aplicación de la ley y de los castigos, al indio huichol se le aprehendió y consignó de manera inmediata, mientras que al mestizo se le dio un trato paternalista y un castigo familiar.

En relación a las denuncias de peculado en su contra, Arce dijo que esto era lo más grave, por lo que defendía su reputación de "hombre honrado", y expresó que por primera vez en su vida era acusado de tomar dinero para su provecho fruto de una licencia, entonces puso por delante su historia como liberal de fuertes convicciones anticlericales, que siempre había estado en contra de las fiestas religiosas de los pueblos.[77] El director político de Totatiche mostró en sus comentarios y expresiones un extremo racismo, anticlericalismo, intolerancia y autoritarismo hacia los indígenas, calificó a las fiestas religiosas populares como "grotescas y ridículas", "salvajes", "retrógradas e idolátricas". Para Arce toda expresión religiosa era fanatismo, y a pesar de ello, se autodefinía como "tolerante" por dar permiso para que se llevaran a cabo dichas fiestas. Sin embargo, el permiso no lo dio a los indios directamente, sino a las personas notables del pueblo, quienes a nombre de los indios lo solicitaron. El director político se autodefinía como fiel defensor de las Leyes de Reforma y de la Constitución de 1857, pero nada decía sobre los derechos y garantías de los ciudadanos, entre ellos la igualdad ante la ley, la libertad de cultos, y la libertad de expresión que eran protegidos por la misma constitución y las leyes que decía defender. El gobernador del estado le contestó al director político de Totatiche, el 31 de agosto de 1906, y le dijo que en lo sucesivo procurara que su conducta no diera lugar a imputaciones de los vecinos de ese pueblo.[78] Arce no salió bien librado, pues recibió una fuerte llamada de atención, mientras que los vecinos de Totatiche fueron escuchados y atendidos por el gobernador del estado.

Garantías contra el jefe político. Pascual B. Granillo, jefe político de Colotlán recibió varias quejas en su contra, una de ellas fue la de Lorenza Ortiz, realizada el 14 de enero de 1907. Lorenza Ortiz era viuda y vecina de Colotlán cuando mandó una queja al gobernador del estado de Jalisco.

[77] AHJ. Gobernación. G-12-906. TOE/2488. Informe de José Ma. Arce del director político de Totatiche al gobernador de Jalisco, Totatiche, 15 de agosto de 1906.

[78] AHJ. G-12-906. TOE/2488. Personal- Director político. Totatiche. Julio-agosto de 1906.

La señora Ortiz en su escrito pidió al gobernador del estado garantías contra las perversiones de Pascual B. Granillo en su contra. Lorenza Ortiz dijo al gobernador del estado que el primero de enero de 1907, se realizó una fiesta en el domicilio de Refugio Montero, quien se desempeñaba como agente del Ministerio Público. A dicha fiesta asistió Granillo, entre las personas que asistieron se encontraba su hijo, José Ortiz. La señora Ortiz acusó al jefe político de que, sin motivo alguno, excepto por lo borracho que estaba, le dio unas bofetadas a su hijo, cometiendo un delito y abuso de autoridad.[79] Tal vez la señora Ortiz haya sido asesorada por un abogado al levantar su queja en contra del jefe político, pues sabía muy bien a quién se enfrentaba. Lorenza Ortiz prosiguió en su documento acusando al jefe político de que, dos días después de los acontecimientos mencionados, salieron a la luz pública una notas impresas anónimas en que se exigía a las autoridades, entre ellas a empleados del Ministerio Público, para que hicieran averiguaciones sobre dichos hechos, ya que había varias denuncias de habitantes de Colotlán en contra del mismo jefe político, porque en otras reuniones, en estado alcohólico, ofendía a los concurrentes, como ocurrió con el abogado Francisco Ruiz, el médico Adolfo Saucedo y Luis Saucedo, en el domicilio de Miguel del Real.[80] Pascual B. Granillo, como se puede observar, no sólo era prepotente y arbitrario con las clases bajas de la sociedad colotlense, sino también con los grupos de las clases media y alta del lugar.

La señora Ortiz comunicó al gobernador que Granillo tal vez había creído que las publicaciones impresas habían sido mandadas a hacer por ella, ya que luego que se dieron a conocer se dio cuenta que frecuentemente su casa era vigilada por la policía. Sin embargo, eso no quedó ahí, Lorenza Ortiz sumó una demanda más delicada en contra del jefe político, lo acusó de que la noche del día ocho de enero de 1907, iba por la calle acompañada de su hijo, cuando fueron sorprendidos por cinco policías al mando del comandante Jesús María Flores, aprehendiéndolos

[79] AHJ. G-12-907. CON/1326. Personal. Lorenza Ortiz. Colotlán, 14 de enero de 1907.

[80] AHJ. G-12-907. CON/1326. Personal. Lorenza Ortiz. Colotlán, 14 de enero de 1907.

y conduciéndolos a la cárcel. Al día siguiente se multó con cincuenta pesos a ella y veinticinco pesos a su hijo, haciéndolos aparecer en el parte de "ebrios escandalosos y faltas de policía".[81] La señora Ortiz rechazó las multas, protestando que no estaba de acuerdo con ellas y pidió al gobernador del estado que se revisaran dichas multas, para que fueran quitadas porque no se cometió infracción alguna. También pidió al gobernador de Jalisco que se investigara "el delito de bofetadas" que el jefe político había cometido contra su hijo. Al mismo tiempo, la señora Ortiz, exigió ejercer sus derechos en contra del comandante y demás policías, porque la detuvieron arbitrariamente. Lorenza Ortiz denunció que el jefe político había cometido excesos y arbitrariedades en otras ocasiones en contra de otros vecinos, pero que, por temor, se negaban a denunciarlo.[82]

Lorenza Ortiz afirmó que los golpes que le dio Granillo a su hijo fueron vistos por varios individuos entre ellos: José López, Francisco Mora, Ismael Muro y Merced Santoyo, quienes dijeron que, cuando estaba caído José Ortiz, el agente del Ministerio Público lo apunto con la pistola, encontrándose éste en estado de ebriedad. Lorenza Ortiz estuvo en desacuerdo con los testimonios de los agentes del Ministerio Público y de otras personas cercanas al jefe político, por participar en orgías estando borrachos, escandalosos y sin que tuvieran alguna reprensión. La señora Ortiz declaró que las orgías y escándalos en los que participaban también otros funcionarios de Colotlán, no fueron los informados por el jefe político al gobernador del estado, ensuciando con ello la administración del gobierno". A Lorenza Ortiz le parecieron muy elevadas las multas que le impuso el jefe político, porque era viuda y de escasos recursos económicos, por lo que se vio forzada a vender un terreno de su propiedad, que era el único patrimonio con que contaba para apoyarse económicamente.[83] El gobernador del estado de Jalisco, en respuesta del 22 de enero de 1907, le pidió a Pascual B. Granillo el informe sobre el caso y, una semana

[81] AHJ. G-12-907. CON/1326. Personal. Lorenza Ortiz. Colotlán, 14 de enero de 1907.

[82] AHJ. G-12-907. CON/1326. Personal. Lorenza Ortiz. Colotlán, 14 de enero de 1907.

[83] AHJ. G-12-907. CON/1326. Personal. Lorenza Ortiz. Colotlán, 14 de enero de 1907.

después, el jefe político contestó al gobernador con un largo informe al respecto. La versión de Granillo fue absolutamente distinta a la que dio Lorenza Ortiz.

El jefe político de Colotlán dijo que era cierto que se había llevado a cabo una reunión en la casa de Agapito Montero, con el objetivo de festejar el año nuevo, y a ella concurrieron personas notables de la "culta sociedad". Pero que a dicha fiesta llegó sin invitación José Ortiz, quien tenía "mala reputación", por ser "hijo de una mesalina", por lo que no podía tener alguna aceptación.[84] El jefe político inició su informe descalificando la reputación y la honorabilidad de sus acusadores, pues para Granillo, Lorenza Ortiz era una prostituta y su hijo un borracho que no tenían cabida entre la gente de la "buena sociedad", lo que era claramente un discurso clasista, autoritario, machista y misógino.

El jefe político dijo que cuando la fiesta estaba en su apogeo, José Ortiz, estando borracho, cometió varias faltas al juez Eduardo Azpeitia Palomar, por lo que el jefe político lo reprendió y amonestó, éste respondió enfrentándolo y gritándole algunos insultos, los que el jefe político corrigió enérgicamente, y mandó que José Ortiz fuera expulsado de la casa donde se llevaba a cabo la reunión. El jefe político dijo que no había arrestado a Ortiz en ese instante por lástima, pero que se merecía fuera arrestado. El jefe político concluyó diciendo "que no hubo tal abuso de autoridad", sino que solo procedió "con verdadera misericordia". Granillo se autodefinió como un funcionario justo, magnánimo y misericordioso, que actuaba con energía y al mismo tiempo apegado a la ley al momento de ejercer su autoridad. No obstante, sus dichos lo mostraron como un misógino y autoritario, pues a la señora Ortiz no la trató como lo haría a una "dama de sociedad", se dirigió a ella como si fuera una meretriz, la llamaba "la Ortiz", y sostuvo que había sido "instigada por su querido, el Notario Atanasio Martínez", quien, a decir del jefe político, ya tenía "antecedentes" con el gobierno. El jefe político dijo que la multa de la

[84] AHJ. G-12-907. CON/1326. Personal. Pascual B. Granillo. Colotlán, 31 de enero de 1907.

señora Ortiz, estaba justificada, debido a que, según el reglamento respectivo, los jefes políticos tenían atribuciones para imponer multas, según la magnitud de la falta o infracción, hasta por cien pesos. En particular sobre las multas a la señora Ortiz y a su hijo, el jefe político aseveró que: "La Ortiz", en compañía de su hijo y a deshoras de la noche, iba para su casa totalmente borracha "cometiendo escándalos". Granillo afirmó que los policías le pidieron respetuosamente que dejara de hacer escándalos y se fuera a su casa, a lo que la señora contestó con improperios e insultos en contra de los gendarmes. Granillo dijo que era mentira que los policías vigilaran la casa de la señora Ortiz, y que la arrestaron por el estado de embriaguez en el que se encontraban, los escándalos que hacían y la resistencia que opusieron.[85]

El jefe político de Colotlán no se contuvo en descalificaciones a la señora Ortiz, dijo que no quiso llevar a los tribunales el caso porque la señora Ortiz se lo suplicó, pero que no era merecedora de consideración alguna, pues tenía todo un mes en estado alcohólico. El jefe político aseguró que quiso ser bueno con ella, y en consideración a su situación económica le impuso una multa de 50 pesos a la señora Ortiz, y otra a su hijo por veinticinco pesos, quedando con la conciencia tranquila de que no se excedía en sus facultades y actuaba con equidad, justicia y rectitud. Granillo le expresó al secretario de gobierno que se congratulaba de que entre él y las autoridades del estado predominara "la mayor armonía", lo que, según él, demostraba que había "unidad de acción"; desde luego, negó la realización de orgías, por respeto a los puestos públicos que ocupaban, como a la sociedad en la que vivían. El jefe político terminó su informe disculpándose con el secretario de gobierno, por las molestias que causaba el caso tratado, reiteró su respeto y consideración a las altas autoridades del estado. [86]

[85] AHJ. G-12-907. CON/1326. Personal. Pascual B. Granillo. Colotlán, 31 de enero de 1907.

[86] AHJ. G-12-907. CON/1326. Personal. Pascual B. Granillo. Colotlán, 31 de enero de 1907.

El secretario de gobierno le comunicó al gobernador del estado de Jalisco que, desde su punto de vista, legalmente no era posible proceder en contra del jefe político de Colotlán, Pascual B. Granillo, por el delito de golpes, porque el ofendido directamente no había presentado la queja, o sea, José Ortiz, y que no se tenía constancia de que José Ortiz fuera menor de edad, por lo que su madre, Lorenza Ortiz, no podía representarlo. El secretario de gobierno concluyó que no había forma de proceder legalmente, mientras el ofendido, José Ortiz, no presentara la querella directamente. Lo que fue acordado por el gobernador el 14 de febrero de 1907, y así se lo comunicaron a los implicados.[87]

Con fecha del 22 de febrero de ese año, José Ortiz mandó un escrito al gobernador de Jalisco, en el que aseguró ser mayor de edad, empleado particular, nacido en la ciudad de Chihuahua y residente de Colotlán. En el documento declaró que estaba de acuerdo en todo lo expresado por su madre, Lorenza Ortiz, en la queja dirigida al gobernador del estado el 14 de enero anterior, en contra del jefe político de Colotlán. José Ortiz agregó que fue invitado al baile por Elfego Romero, y que cerca de las tres de la madrugada, sin pensar que podría estorbar con sus pies el paso de los que allí estaban, debido a estar casi dormido por lo avanzado de la noche, el jefe político tropezó con sus pies. Granillo se enojó y le dio una bofetada en la cara, José Ortiz se paró y el jefe político lo siguió golpeando hasta que cayó al suelo, y en eso Juan Ávila Godina lo apuntó con la pistola. Después, Ortiz se levantó y salió del lugar advirtiendo que el jefe político, Juan Ávila y otros más que los acompañaban, estaban en estado de ebriedad. José Ortiz dijo que varias personas habían presenciado los hechos, y solicitó al gobernador de Jalisco que otorgara el permiso para que se procediera en contra del jefe político de Colotlán, pero sin comisionar al Juzgado primero letrado de esa población, porque los jueces de allí, eran amigos de Granillo. Ortiz también pidió que se revisara la multa ilegal que se le impuso por 25 pesos, ya que no estaba de acuerdo con ella,

[87] AHJ. G-12-907. CON/1326. Personal. Secretario de Gobierno. Guadalajara, 13 de febrero de 1907. Gobernador del Estado de Jalisco, Guadalajara, 14 de febrero de 1914.

en razón de que ni la señora Ortiz ni él, dieron motivos para que se les apresara, como lo podrían atestiguar varios vecinos.[88]

Las quejas y denuncias en contra de Pascual B. Granillo, siguieron llegando al gobernador del estado por parte de ciudadanos y vecinos del cantón de Colotlán, entre los que había comerciantes, profesionistas y ciudadanos en general. Lo que evidenció que el malestar en contra de las autoridades políticas del cantón de Colotlán fue en aumento. Las denuncias contra Granillo llegaron hasta el general Porfirio Díaz, pues un grupo de personas principales de Colotlán enviaron un escrito al presidente de la república, el 12 de marzo de 1907. En este documento los habitantes de Colotlán dijeron que se habían atrevido a enviar el documento, distrayendo la atención del presidente debido a la "grave situación" por la que pasaban y por considerar que era de "carácter federal", pues corría el peligro de que desembocara en una rebelión, de la que los culparían, cosa que rechazaban de antemano y por tanto lo ponían en su conocimiento. Los firmantes consideraron que era urgente la intervención del presidente Díaz, al mismo tiempo que pedían garantías, tanto para los firmantes como para todos los vecinos de Colotlán. Aseguraron que dichas garantías fueron violadas por el jefe político y sus subordinados; por lo que temían unos atentados contra su vida que estaba amenazada de forma constante.[89]

Los vecinos dijeron al presidente Porfirio Díaz, que el gobernador del estado de Jalisco sabía de los delitos cometidos por el jefe político de Colotlán, también le expresaron que confiaban en que el gobierno del estado remediaría los delitos y crímenes cometidos por el jefe político del cantón de Colotlán. [90] Los vecinos señalaron que Pascual B. Granillo, estaba "enfermo de delirio de persecución", que lo llevó a realizar atentados y delitos

[88] AHJ. G-12-907. CON/1326. Personal. José Ortiz. Colotlán, 26 de febrero de 1907.

[89] AHJ. G-12-907. CON/1326. Personal. Vecinos de Colotlán. Colotlán, 12 de marzo de 1907.

[90] AHJ. G-12-907. CON/1326. Personal. Vecinos de Colotlán. Colotlán, 12 de marzo de 1907.

en contra de diversas personas honestas del lugar como el abogado Francisco H. Ruiz, quien estuvo a punto de morir, quedando lesionado. Otro delito fue el cometido a la familia del doctor Saucedo, donde amenazaron con armas listas y puestas en el pecho de la esposa e hija del médico, cuando se metieron ilegalmente a su casa. Otro delito fueron los golpes propinados a José Ortiz, en una reunión, por el mismo Granillo, el joven Ortiz fue amenazado de muerte por el agente del Ministerio Público. Estos abusos y arbitrariedades, entre otros muchos más, fueron los que tenían a la sociedad de Colotlán totalmente alarmada e indignada por la realización de hechos tan reprobables. Por lo que los firmantes pidieron al presidente Porfirio Díaz, las garantías indispensables que los protegieran contra las acciones de las autoridades políticas del cantón. [91]

Las quejas de los vecinos no se quedaron en el nivel local, éstas llegaban a las esferas estatal y federal cuando era necesario. En esta ocasión los vecinos fueron atendidos por el gobierno federal en el más alto rango, con la atención del gobernador del estado de Jalisco, por lo que el jefe político de Colotlán, Pascual B. Granillo, fue separado de su cargo, y de esta manera lo comunicó otro grupo de ciudadanos de Colotlán, en un oficio enviado al gobernador de Jalisco, el 25 de abril de 1907. En este documento los ciudadanos le dijeron al gobernador del estado que los principales vecinos de Colotlán enviaron un ocurso al presidente el Gral. Porfirio Díaz, dándole a conocer los temores que tenían de estar envueltos en situaciones muy graves por culpa del jefe político de Colotlán y sus subordinados y amigos. Quienes cometían todo tipo arbitrariedades, atropellos y violencia, de tal manera que temían una rebelión social, y en la que el gobierno federal estaría obligado a reprimir con todas sus consecuencias. Los ciudadanos principales temían una sublevación en respuesta a los trastornos y excesos del jefe político, Pascual B. Granillo, quien había cometido crímenes como el de la Ladrillera; el relacionado con el joven José Ortiz, quien anda por las calles con delirio de persecu-

[91] AHJ. G-12-907. CON/1326. Personal. Vecinos de Colotlán. Colotlán, 12 de marzo de 1907.

ción, debido a los golpes recibidos por parte del jefe político, y amenazas de muerte y prisión al mismo Ortiz y a su madre, multados arbitrariamente. Estos vecinos dijeron que informaron al presidente de la república de los delitos y arbitrariedades realizados por Granillo, porque estaban preocupados por la tranquilidad pública que estaba amenazada, y por su seguridad individual, así que solicitaron su intervención en este asunto. Los firmantes comunicaron al gobernador del estado de Jalisco que el presidente Porfirio Díaz ya tenía conocimiento de que el gobierno del estado de Jalisco ya había tomado las medidas necesarias para resolver este caso, y por tanto, esperaban que se les hiciera justicia. Finalmente, los vecinos dijeron que Pascual B. Granillo había sido separado de la jefatura política del cantón de Colotlán, con la aprobación de la "gente honrada", y el desacuerdo de algunos individuos de mala reputación, quienes se aprovechaban de la amistad que tenían con el jefe político en cuestión y hacían lo posible para que Granillo fuera puesto nuevamente en el cargo, para esto recabaron firmas falsas o de individuos ignorantes engañados con halagos y promesas. Los vecinos concluyeron el documento dando las gracias al gobernador del estado de Jalisco, a nombre de todos los habitantes del pueblo de Colotlán, debido a que volvió la paz, la confianza y la tranquilidad públicas que se habían perdido.[92]

9° Cantón de Ciudad Guzmán

San Gabriel. Adolfo Price, ciudadano norteamericano, el 11 de noviembre de 1905 se quejó ante el gobernador del estado, por haber sido "vejado" por el director político de San Gabriel, debido a que Price acusó al cabo de policía de allanamiento de morada. El director político de San Gabriel, Florencio Camarena, contestó que el americano no había sufrido "vejación" alguna, sino que fue multado porque el dueño del Hotel Central se quejó de Price por haber escandalizado en su establecimiento.

[92] AHJ. G-12-907. CON/1326. Personal. Vecinos de Colotlán. Colotlán, 25 de abril de 1907.

El 13 de noviembre siguiente, el gobernador del estado le ordenó al director político que no siguiera molestando al señor Price, y que informara detalladamente sobre el motivo por el cual fue multado. Al día siguiente el director político de San Gabriel le envió al gobernador un informe pormenorizado de los hechos ocurridos. Dijo el director político que desde el 28 de octubre de 1905, Adolfo Price había llegado a San Gabriel, hospedándose en el Hotel Central, y que desde ese día estaba ebrio causando escándalos. Agregó que la noche del 10 de noviembre siguiente, sus escándalos ya no podían tolerarse, y el dueño del hotel recurrió a la directoría política para quejarse de las molestias que Price causaba a los pasajeros, a sus familias y a él mismo. También comentó el director político que las noches anteriores, Price había rondado por las calles tocando puertas e interrumpiendo el orden público, llegando el caso de querer acabar un baile a balazos. El director político mandó citar a Price, diciéndole las faltas que había cometido, y conforme al reglamento de policía se le multó con diez pesos. El gobernador del estado contestó el 15 de noviembre de 1905, le dijo al director político de San Gabriel que podía proceder conforme a la ley y reglamentos aplicables en contra del señor Price.[93]

Tuxpan. El siguiente caso se trata del juicio entablado por María Natividad López por los abusos cometidos en su contra por parte del presidente municipal de Tuxpan, en el cantón de Ciudad Guzmán. María Natividad era mayor de edad, célibe, sin profesión y vecina de Tuxpan, pero se encontraba accidentalmente en Ciudad Guzmán. María Natividad declaró al jefe político que el 9 de enero de 1908 llegaron a su rancho de los Laureles, Feliciano Márquez, Feliciano Montaño, José María Mendoza, Rosalío Munguía, Narciso Montaño y José González, todos armados con pistola y la sacaron del mencionado rancho amarrada de los brazos por la espalda, y con una soga al cuello, y en esas condiciones fue llevada al

[93] AHJ. G-12-905. VEN/2602. Personal. Adolfo Price. San Gabriel, 11 de noviembre de 1905.

pueblo de Tuxpan, en donde la metieron a la cárcel, sin saber ella de quién fue la petición de que la apresaran, ni de qué autoridad procedió tal orden. Del rancho los Laureles a Tuxpan hay doce leguas, y todo ese trayecto María Natividad los recorrió en las condiciones descritas, tirándole del cuello y a empellones, tratándola con bastante crueldad, como si hubiera sido un peligroso bandido, sin tomar en cuenta su honestidad, ni su edad, ni su sexo. María Natividad dijo ignorar la causa de su aprehensión, pero supuso que el motivo fue que en el mes de mayo anterior fue llevada ante el alcalde de Tuxpan para contestar una demanda en su contra que entabló Isidro Mendoza, por entrega de un terreno de propiedad de María llamado la Espinaca, según el demandante, María se lo había vendido con pacto de retroventa, con vencimiento de fecha establecido. María Natividad contestó que nada debía, que las escrituras presentadas por Mendoza de la presunta venta, eran falsas, y que si Mendoza tenía los títulos primordiales de dicha propiedad, era porque la misma María se los había dado a guardar porque le tenía confianza, ya que fue su "amo" durante más de veinte años. Agregó María que así quedó el expediente civil, y como al mes siguiente que entraron las aguas, Mendoza sembró maíz en el terreno de María Natividad, y ésta no pudo conseguir que el alcalde lo detuviera, ni ella tenía hombres en su casa que los hubiera hecho respetarla.[94]

María Natividad tuvo que viajar a Ciudad Guzmán y a Guadalajara para quejarse de las arbitrariedades, sin conseguir que Mendoza respetara su propiedad. Por tal motivo, María Natividad acusó a Mendoza por el delito de retención indebida de documentos, daño en propiedad ajena y falsedad de la escritura con que la demanda. Dicha acusación la hizo María Natividad ante el juez de letras de Ciudad Guzmán, sin acordarse de la demanda que Isidro Mendoza le había hecho. Aseguró María Natividad que por esta causa fue que la llevaron presa como si fuera un bandido, dijo que se vio claramente que no se había tratado más que de ultrajarla

[94] AHJ. G-9-908. JAL/1921. Asuntos indígenas. Severo Becerra. Tonalá. 1° de enero de 1908.

de manera infame, afectando su carácter de mujer humilde, desacostumbrada a tales vejaciones, para amedrentarla y que no volviera a hablar, ni vivir en su rancho, del que trataban de despojarla, agregó que su acusador era un "anciano rico" que estaba relacionado con las principales familias de Tuxpan, las que eran enemigas de "la pobre raza" a que pertenecía.[95]

Dado lo anterior, María Natividad dijo al jefe político que el presidente municipal Albino Cárdenas cometió abuso de autoridad en su persona, también le solicitó que tomara las medidas conducentes para aprehender a las personas que la privaron ilegalmente de la libertad, y que los consignara ante un juez de letras por el delito de ultrajes y vergüenza pública en su contra. Además pidió al jefe político que informara al gobernador del estado de su caso, para que, de acuerdo a la ley fuera desaforado el presidente municipal, y lo mandara al juez respectivo, por los delitos de abuso autoridad, usurpación de funciones y privación de libertad de su persona. María Natividad no sabía firmar, por lo que quien firmó fue su representante Francisco Badillo. El documento fue enviado el 4 de enero de 1908. En respuesta el Congreso local y el gobernador desaforaron al presidente municipal de Tuxpan para que respondiera a la demanda judicial en su contra.[96]

Tamazula. Carlos Bracamontes, casado, mayor de edad, agricultor y vecino de Ciudad Guzmán, se quejó ante el gobernador del estado el 28 de diciembre de 1907, diciendo que antes era vecino de Tamazula, pero que el 17 de diciembre de ese año, el director político de Tamazula, José María Jaso, lo apresó acusado de tener información del robo de unas bestias de Juan Galván y Juan Sánchez, pero el acusado negó los cargos. Bracamontes dijo que lo tuvieron preso por nueve días injustificadamente, y que el director político lo desterró de Tamazula, o de otra manera lo iba

[95] AHJ. G-9-908. JAL/1921. Asuntos indígenas. Severo Becerra. Tonalá. 1° de enero de 1908.

[96] AHJ. G-9-908. JAL/1921. Asuntos indígenas. Severo Becerra. Tonalá. 1° de enero de 1908.

"regalar" como soldado, ya que no había encontrado culpa en Bracamontes. Aseguró el acusado que el director político, junto con dos policías, lo condujo fuera de la población con todo y su esposa, para desterrarlo. Alegó que no había motivos para apresarlo ni para desterrarlo, pues el destierro no estaba dentro de las atribuciones del director político, por lo que dicho funcionario había violado la ley. Pidió al gobernador que dicho funcionario fuera castigado.[97] Carlos Bracamontes no sabía firmar, por lo que se deduce que el escrito lo hizo un abogado.

El gobernador del estado pidió a José María Jaso, director político de Tamazula, un informe sobre el caso de Bracamontes, a lo que el funcionario contestó el 22 de febrero de 1908, que Bracamontes había sido arrestado por faltas a los agentes de policía, poniéndolo en libertad el 25 de diciembre de 1907, y que la pena que se le impuso estaba dentro de las facultades del director político, pero que era inexacto lo demás expuesto por Bracamontes en su queja. Al margen del documento, el gobernador del estado escribió el 28 de febrero de 1908 lo siguiente: "dígase al Supremo Tribunal de Justicia, que habiendo negado el director político de Tamazula los cargos que le hace Carlos Bracamontes y no existiendo ninguna prueba de ellos; no se concede el permiso para proceder en contra de la expresada autoridad. Advirtiéndose al director político de referencia que ninguna autoridad tiene facultades para imponer el destierro".[98]

10° Cantón, Mascota

Elfego Peña, Ramón Ávalos y Deciderio Pérez casados, mayores de edad y vecinos de la Congregación de Santiaguito, en la jurisdicción del mineral de San Sebastián, en el cantón de Mascota, el 15 de septiembre de 1907 enviaron una queja al gobernador del estado en donde dijeron

[97] AHJ. J-1-908. TAG/19. Administración y política. Carlos Bracamontes. Tamazula, 11 de enero de 1908.

[98] AHJ. G-12-908. UNT/551. Personal. Jefatura Política. Unión de Tula. 13 de junio de 1908.

que Elfego Peña era el comisario de policía del lugar, a la vez que era labrador igual que Ramón Ávalos, mientras que Deciderio Pérez era comerciante. En el documento dijeron los firmantes que no obstante que dicha congregación dependía de San Sebastián, todos sus habitantes eran víctimas de las vejaciones, maltratos y calumnias del comisario político, Jesús Langarica, del mineral de Los Reyes, pues los acusaba de ser "revoltosos" y que tenían propensión a levantarse en armas contra el gobierno, dijeron los firmantes que dicha aseveración era totalmente falsa, ya que siempre habían "estado atentos y sumisos a sus Superiores y respetables órdenes". Agregaron que el comisario político de Los Reyes, sin tener ninguna atribución respecto a la congregación de Santiaguito, porque no pertenecía a su jurisdicción, con frecuencia manda a la gendarmería del estado, para insultarlos, haciendo disparos con sus armas, retándolos para que respondieran y se defendieran, y así darles el pretexto para empeorar su situación, pero que no lo había podido conseguir. Aseguraron que ningún vecino de la congregación de Santiaguito podía ir al mineral de Los Reyes, sin que se les cometieran delitos, como el que sucedió la noche del 15 de septiembre de 1906, con Alberto Contreras a quien mataron a balazos, por la sencilla razón de que no traía pantalón y por resistirse a ir a la cárcel. Al siguiente día, Manuel Contreras, al ir a recoger el cadáver de su hermano, le causaron lesiones graves por cuatro balazos que le dispararon. Con ello, dijeron los firmantes patentizaban la "odiosidad gratuita" que les tenía la autoridad del mineral referido, por lo que le pidieron atentamente al gobernador del estado ordenara les dieran las garantías necesarias que los pusiera "a salvo de las malévolas intenciones" de sus adversarios.[99]

El gobernador del estado pidió informes sobre el asunto al jefe político de Mascota, el 21 de septiembre de 1908. Dicha autoridad envió un informe al gobernador fechado el 12 de octubre siguiente sobre los temas relacionados con la queja anterior. El jefe político de Mascota dijo que Jesús Langarica era el comisario político de Los Reyes, que nunca

[99] AHJ-G-12-908. MAS/2623. Personal. Elfego Peña. Mascota, 15 de septiembre de 1907.

había mencionado que los vecinos de Santiaguito quisieran pronunciarse contra el gobierno, lo que había dicho era que ahí vivían varios asesinos y malhechores, entre los que se encontraba Juan Contreras, quien cometió dos homicidios, y que dicho individuo junto con otros amagó a la autoridad de Los Reyes, aseguró que los criminales que tenían asuntos pendientes con la autoridad y que vivían en Santiaguito eran los siguientes: Estanislao Mejía, Fortunato Contreras, Fernando Bernal, Mejía (a) El Ruano y Juan Contreras, todos acusados de asesinato con todas las agravantes, además de varias personas que tenían pendientes con la ley y que se ocultaban de la acción de la justicia, por esta razón se alarmaba el vecindario de Santiaguito cuando pasaba la gendarmería en persecución de criminales, no habiéndose hecho ninguna captura a la fecha, debido al auxilio que el vecindarios prestaba a estos criminales ya fuera por amistad o por parentesco. Dijo el jefe político de Mascota que no era cierto que el comisario político de Los reyes hubiera mandado al destacamento de gendarmes a Santiaguito a escandalizar, insultar o a cometer vejaciones a los vecinos, excepto una vez, el 15 de septiembre de 1908, que el comisario político recibió la orden de ir a dicho pueblo a aprehender a un individuo. Respecto a los hechos del 15 y 16 de septiembre de 1906 a que se hace referencia en la queja de Elfego Peña y demás firmantes, dijo el jefe político que el juez de letras de Mascota condenó a Manuel Contreras y a algunos socios, a sufrir la pena que por resistencia y ataques a mano armada a la autoridad y sus agentes, les correspondía, siendo público y notorio, que la noche del 15 de septiembre de 1906, Alberto Contreras y socios fue agredido y lesionado por el señor Langarica, quien se desempeñaba como comisario político, lo mismo que los policías Ignacio Núñez y Clemente Bermúdez, y que el 16 de septiembre siguiente, Manuel Contreras se enfrentó con armas a Efrén Aguirre y demás auxiliares del comisario político cesante, por estar Langarica en cama, mas como estos se defendieron, resultó herido Manuel, y muerto por éste, el policía

Francisco Falcón, dichos hechos fueron conocidos oportunamente por las autoridades correspondientes.[100]

Conclusiones

Los expedientes de quejas de los ciudadanos en contra de los jefes políticos prefigura de antemano que la actuación del funcionario no era apegada al marco legal, así lo sostuvieron los demandantes, no obstante lo que evidencian los documentos es que los ciudadanos tenían recursos para defenderse como era el derecho de petición y el auxilio de abogados, pues recurrían al marco legal para defenderse y acusar a las autoridades políticas de abusos y arbitrariedades cometidas por ellos, tales demandas llegaban al secretario de gobierno o al gobernador del estado, incluso rebasaban el ámbito estatal y llegaban hasta el presidente de la república. Las quejas principalmente estuvieron enfocadas en contra de los comisarios de policía, pues eran quienes estaban más estrechamente en contacto con los ciudadanos y sus problemáticas, en segundo lugar estaban los directores políticos a nivel departamental, y solo en pocos casos llegaron a tocar a los jefes políticos, como fue el de Pascual B. Granillo, de Colotlán. Las autoridades políticas al defenderse utilizaban estrategias similares, la primera era negar la existencia real de los demandantes, la segunda era desprestigiarlos política, social y moralmente, y la tercera era negar su culpabilidad, tratando de convencer al gobernador de su inocencia. Sin embargo, se observa en los expedientes que el gobernador del estado no protegía totalmente a sus subordinados, en todo momento les ordenaba que resolvieran los problemas a favor de los demandantes, cuando estos tenían razón, y solo en última instancia los destituía del cargo, ya fueran jefes políticos, directores o comisarios. Debido a la gran variedad de casos y situaciones, así como las diversas formas de participación e intereses de los ciudadanos y de las autoridades de los distintos niveles, no es posible tener un solo patrón o modelo de comportamiento de las autoridades políticas intermedias en el estado de Jalisco, ni mucho menos simplificar

[100] AHJ-G-12-908. MAS/2623. Personal. Jefatura Política. Mascota, 12 de octubre de 1908.

extremadamente el análisis para caer en el maniqueísmo entre funcionarios buenos o malos. Lo que se puede decir es que había un marco legal de referencia y una estructura política y de gobierno al cual acudían los ciudadanos afectados de forma directa o por medio de sus representantes, principalmente abogados, y que las instancias superiores resolvían las quejas y demandas ya fuera a favor o en contra de los demandantes.

CAPÍTULO IX.
El león no es como lo pintan: biografías, imágenes y estadísticas

Imágenes de una galería recuperada

Tal vez una de las imágenes más conocidas sobre los jefes político sea un grabado de José Guadalupe Posada titulado "La casa de enganches", en él se representa a las autoridades políticas llevando por la fuerza y a empujones a los peones o jornaleros hacia la casa donde supuestamente se les contrataba de forma "voluntaria", para que fueran a trabajar a las haciendas rurales. Esta caricatura es una feroz crítica a dicho sistema de contratación, que en realidad era forzado e ilegal, pero llevado a cabo realmente por los jefes políticos en común acuerdo con los hacendados. La imagen reproduce la idea de que los trabajadores rurales del campo mexicano eran casi esclavos o peones retenidos por la fuerza en las haciendas mexicanas a partir del sistema de peonaje por endeudamiento. En dicho sistema el jefe político y sus subordinados eran piezas claves ya que eran los que llevaban a los habitantes de los pueblos a las casas de enganche, ya fuera por la fuerza, por embriaguez o por haber sido acusados de algún delito. En todo caso el jefe político se beneficiaba con una comisión por cada trabajador llevado a dicha casa. Esta imagen concuerda totalmente con lo que dice la "leyenda negra" sobre los jefes políticos que se ha abordado en capítulos anteriores.

Sin embrago, es obvio que dicha imagen no es la realidad histórica, sino una representación crítica de ella, sobre todo de las autoridades políticas, hecha de forma extraordinaria por José Guadalupe Posada. El

fin del autor no fue hacer una copia tal cual de la realidad, sino una caricatura crítica que denunciaba la injusticia de un régimen político y de un sistema de contratación de la fuerza de trabajo rural, desde el punto de vista de Posada. Las imágenes creadas por Posada, lo mismo que los hermosos paisajes de José María Velasco, o las fotografías de Octaviano de la Mora, no eran la realidad tal cual, sino representaciones de la misma. No eran simples copias, sino creaciones artísticas, producidas por el talento y la creatividad artística de sus autores. Eran por tanto visiones subjetivas correspondientes a individuos de su época. No obstante, son un referente obligado y un medio para evocar un mundo que en el presente ya no existe.

Imagen 1.
José Guadalupe Posada. "La casa de enganches. Contratas voluntarias".
(Grabado, 1885-1910)[1]



[1] Rafael Hernández Ángeles (selec.). *A 100 años. Ricardo Flores Magón. Iconografía del magonismo*. México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INERHM), 2022, p. 87.

A partir de varias fuentes se pudieron recuperar algunas imágenes de las personas que ocuparon en algún momento el cargo de jefe político en el estado de Jalisco durante el siglo XIX, estas imágenes son dibujos, pinturas y fotografías de la época en que vivieron dichos personajes, por tanto también pueden ser considerados como documentos históricos. Los personajes aparecen como quisieron ser vistos y representados, unos con uniforme militar y sus respectivas medallas, otros con traje, moño o corbata, con sus grandes barbas y bigotes, y otros más con su familia, mostrando la clase social a la cual pertenecían, como fue el caso de Malaquías Cuervo y Pedro Michel. Desde luego, que entre la representación de José Guadalupe Posada y la de las pinturas y fotografías de los jefes políticos hay una gran diferencia en su concepción política e ideológica sobre estos personajes y la función que desempeñaron en la política decimonónica en Jalisco durante el siglo XIX. (Ver la galería)

Historias fragmentadas, breves biografías de jefes políticos

La mayoría de las biografías son apologéticas, de otra manera sería difícil que fueran del interés del investigador, aunque se puede dar el caso contrario en que un personaje repudiado tenga su biógrafo, como ha sido en varios casos de criminales famosos. Sin embargo aquí no se trata de hacer apología de ningún jefe político, ni tampoco hacer leña del árbol caído, lo que se busca es dibujar como si fuera un esbozo, la poca información que se tiene sobre la trayectoria y vida de estos actores políticos que vivieron en la medianía del poder y de la riqueza, por lo mismo no tenemos cuadros terminados de ellos, sino apenas algunos trazos que permiten imaginar quiénes fueron aproximadamente. A continuación, se presentan 17 pequeñas biografías de personas, en orden alfabético, que en algún momento desempeñaron el cargo de jefe político en alguno o varios cantones del estado de Jalisco durante el siglo XIX.

Patricio Ávalos

Nació en Chihuahua el 13 de octubre de 1840, fue hijo de Guadalupe Ávalos y Valentina Villalva, propietarios de una finca rústica en Chi-

huahua. La familia fue a radicar a la ciudad de México debido a la guerra con los indios. En la ciudad de México, Patricio Ávalos hizo sus estudios de primaria, secundaria y comercio. En 1858, con la Guerra de Reforma, Patricio ingresó a las filas de los liberales con el grado de sargento 1°, luego obtuvo el grado de capitán 1°, que era el grado que tenía cuando la toma de la capital de México. Consolidada la paz en la república, Ávalos se retiró a la vida privada, al principio se dedicó a negocios particulares, fue trabajador en el Ferrocarril Mexicano. Luego se unió al Plan de Tuxtepec, obteniendo el grado de teniente coronel, el día 2 de diciembre de 1876. El siguiente año ascendió al grado de mayor general de la división que mandaba el general Francisco Tolentino, habiendo continuado la campaña de occidente hasta ocupar las plazas de Tepic y Mazatlán, bajo las órdenes de Tolentino. El 20 de febrero de 1876 fue nombrado jefe político del Territorio de la Baja California, ocupado por los inglesistas que permanecían rebeldes a la república. Luego como mayor general de la 1ª División, residente en la ciudad de Tepic, desempeñó algunos servicios militares hasta el 4 de febrero de 1879, en que fue nombrado jefe superior de Hacienda en el Estado de Sonora. En julio de 1880, fue nombrado comandante del resguardo marítimo en el puerto de Guaymas, y en mayo del siguiente año pasó con el mismo carácter al puerto de San Blas, donde permaneció hasta el 26 de junio de 1883, fecha en que fue llamado por el general Tolentino, gobernador de Jalisco, para que se hiciera cargo de la jefatura política de Ciudad Guzmán (9° Cantón).[2]

Las partidas de bandidos tenían asolada a la población y eran muy frecuentes los asaltos. Debido a la actividad del nuevo jefe político, desapareció el bandidaje de aquellos contornos, no obstante que desde 1885 a 1887 revoltosos y bandidos alteraban el orden y perturbaban la paz en la región. Avalos se dedicó especialmente a proteger la instrucción pública y realizó mejoras importantes en la localidad. Hizo que se embanquetaran todas las calles de la ciudad, levantó un jardín e hizo construir un kiosco en la plaza Cinco de Mayo. Posteriormente el general Ramón Corona lo

[2] Pavia. (1891), vol. II pp. 251-256.

designó jefe político de La Barca (3° Cantón). Y luego se fue a Yuriria, donde el general de división Manuel González lo nombró como jefe político de dicho distrito.[3]

Miguel Contreras Medellín

Originario de Matehuala, San Luis Potosí, Miguel Contreras Medellín nació en el año de 1821. Sus padres fueron Gregorio Contreras y Carmen Medellín. El 29 de julio de 1847, Miguel se casó con Jesús Robles Martínez, en Guadalajara, ella era nueve años menor que él.[4] Los padres de Miguel lo trajeron a Guadalajara antes de cumplir un año de vida y en esta ciudad realizó sus primeros estudios escolares. Después ingresó al Seminario Conciliar donde hizo el curso de Artes que terminó en 1839 y tuvo como director al doctor Jesús Ortiz. Ingresó a la Universidad de Guadalajara para realizar estudios de Jurisprudencia, titulándose como abogado el 31 de octubre de 1846. En este último año ingresó al Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco, posteriormente fue jefe de la Guardia Nacional del mismo estado en 1847, la cual se organizó para combatir al ejército norteamericano teniendo actividades en los estados de Querétaro y México. Fue miembro importante del partido liberal en Jalisco, desempeñó el cargo de secretario de gobierno en el periodo en que fue gobernador Ignacio Herrera y Cairo. También ocupó el cargo de jefe político del primer cantón del estado de Jalisco durante los meses de mayo, junio y julio de 1856. Un año después ocupó la presidencia de la Junta Directora de Estudios del estado de Jalisco.[5]

[3] Pavia. (1891), vol. II pp. 251-256.

[4] México, Jalisco, registros parroquiales, 1590-1979, database with images, *FamilySearch* (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:684J-ZGNB: 4 August 2022), D. Miguel Contreras, 29 Jul. 1847; citing Marriage, El Sagrario Metropolitano, Guadalajara, Jalisco, México, parroquias Católicas (Catholic Church parishes), Jalisco; FHL microfilm 4,718,941.

[5] *Enciclopedia histórica y biográfica de la Universidad de Guadalajara*. http://enciclopedia.udg.mx/biografias/contreras-medellin-miguel

Durante la Guerra de Reforma, Contreras Medellín formó parte del Batallón Hidalgo, tuvo una actividad muy importante y destacada como militar, obteniendo el grado de coronel. Luego se integró a las fuerzas del general José Santos Degollado, oponiéndose a la rendición de la ciudad de Guadalajara por parte del general Anastasio Parrodi ante el general López Uranga. En estos acontecimientos, Contreras Medellín resultó herido. Poco después fue ascendido a general en jefe de la Segunda Brigada del Ejército Federal y en 1859 ocupó la jefatura de la Guardia Nacional del Estado de Jalisco, desempeñando un papel muy importante en la batalla de Atenquique. Contreras Medellín fue gobernador y jefe militar del estado de Colima a partir del 7 de agosto de 1859, reforzó al ejército liberal en la batalla de San Joaquín, en el norte de dicho estado, donde volvió a ser herido, retirándose por este motivo a Michoacán. Restablecida su salud volvió a tomar el mando del gobierno de Colima. Sus principales logros en este cargo fueron: la instalación de la Junta de Sanidad, la elaboración del Código Civil, y el establecimiento de un hospital, entre otras obras públicas. El 13 de diciembre de 1859 renunció al gobierno de Colima, para continuar combatiendo a los conservadores en el occidente de México. En el mes de mayo de 1860 Contreras Medellín volvió a hacerse cargo de la gubernatura de Colima, pero el día 24 de ese mes, resultó herido en la ciudad de Guadalajara, y luego fue trasladado a Sayula, donde murió el 28 de mayo.[6]

José Malaquías de Jesús Cuervo Flores

Malaquías Cuervo nació en Tequila, Jalisco, el 2 de noviembre de 1837, en una hacienda llamada "El Pasito", y fue bautizado dos días después. Sus padres fueron José María Cuervo e Ignacia Flores.[7] Perteneció a una

[6] *Enciclopedia histórica y biográfica de la Universidad de Guadalajara* http://enciclopedia.udg.mx/biografias/contreras-medellin-miguel

[7] "México, Jalisco, registros parroquiales, 1590-1979", database with images, *FamilySearch* (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:68HW-V5CT: 10 August 2021), Cuervo Flores, 1837.

importante familia de hacendados de la región tequilera y productores de dicha bebida. Se casó con Francisca Labastida el 22 de mayo de 1862, en ese momento Malaquías tenía 25 años de edad y Francisca 20 años.[8] El matrimonio Cuervo-Labastida tuvo una familia numerosa que sumó doce hijos. Malaquías fue dueño de la hacienda de San Martín, situada en Tequila, y estuvo relacionado con otras familias productoras de tequila de la región, también estuvo emparentado con el gobernador del estado de Jalisco, Antonio Gómez Cuervo. En 1880, el gobernador del estado de Jalisco, Fermín González Riestra, lo nombró jefe político del cantón de Tequila.

Malaquías compró el rancho Las Velas, en julio de 1877, a Cayetano Orendain y a Cenobio Sauza. Posteriormente, en 1883 adquirió la hacienda paterna El Pasito, una parte por medio de la herencia que le correspondía, y otra por compra que les hizo a su madre y a sus hermanas. Además, Malaquías, en octubre de 1886, se asoció con su yerno Vicente Orendain para formar una compañía agrícola industrial, con el objetivo de administrar y explotar las fincas que Cuervo había comprado. Malaquías Cuervo murió en Tequila, Jalisco, el 29 de abril de 1887 a la edad de 49 años. Según los inventarios que se elaboraron con el motivo de su testamento, Malaquías Cuervo dejó más deudas que activos a la familia, dichas deudas no podían ser cubiertas si los bienes de la testamentaría se dividían entre todos los herederos, por lo que se recomendó a la viuda que se quedara con todos los bienes y que pagara a sus hijos la cantidad correspondiente a su herencia paterna.[9] Malaquías Cuervo fue uno de los pocos jefes políticos que fue empresario y hacendado tequilero.

[8] "México, Jalisco, Registro Civil, 1857-2000", database with images, *FamilySearch* (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QGQR-L96R: 22 February 2021), Malaquías Cuervo Flores and Francisca Lavastida, 1862.

[9] Valerio. (2003), pp. 296-298.

Juan Nepomuceno Cumplido y Rodríguez

Originario de Guadalajara, nació el 16 de octubre de 1793, sus padres fueron Mateo Cumplido y María Rafaela Rodríguez. Juan N. Cumplido hizo sus estudios en la Universidad de Guadalajara obteniendo los grados mayores de Filosofía y Cánones, y en diciembre de 1824 también los de licenciado y doctor. Fue integrante del cuerpo de abogados de la ciudad de Guadalajara, después de haber sido aprobado en el examen que presentó ante la Real Audiencia, el 23 de agosto de 1819. En 1821 fue miembro de la Sociedad Patriótica de Guadalajara. Consumada la independencia de México se dedicó a la política y se afilió al partido federalista y a la logia masónica yorkina. Entre 1823 y 1824 fue diputado al congreso constituyente de la federación mexicana, en la comisión de agricultura. También fue diputado al congreso constituyente del estado de Jalisco en las comisiones de constitución y justicia.[10] Desempeñó el cargo de vice-gobernador del estado de Jalisco, nombrado por el Congreso estatal del 10 de octubre de 1824 al 23 de enero de 1825. De acuerdo a la Constitución política del Estado de Jalisco de 1824, al ser vice-gobernador, automáticamente se ocupaba de la jefatura política del primer cantón del estado. En varias ocasiones ocupó el cargo de vice-gobernador, entre enero de 1827 y agosto de 1834; y de mayo a noviembre de 1846. En 1826 fue diputado secretario al Congreso del estado, poco después fue diputado al Congreso de la Unión. Con la muerte del gobernador Prisciliano Sánchez, fue gobernador interino del 19 de enero de 1827 al 23 de septiembre de 1828. Al año siguiente, una vez que dejó el gobierno interino, formó parte de la oposición al gobernador constitucional Ignacio Cañedo. Entre 1831 y 1832 fue diputado al Congreso del estado de Jalisco, y en 1833, nuevamente ocupó una curul en el Congreso de la Unión. En 1834 fue nombrado nuevamente vice-gobernador del estado de Jalisco, del 23 de junio al 11 de agosto, pero disuelto el gobierno fede-

[10] Ramiro Villaseñor y Villaseñor. (1981). *Los primeros federalistas de Jalisco. 1821-1834*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, pp. 47-48. Urzúa y Hernández. (1987), t. I, pp. 65-68.

ral abandonó el poder y no figuró en la política durante cinco años. Hasta que en 1842 ocupó otra vez un escaño en el Congreso federal. Fue miembro de la Asamblea Departamental de Jalisco y diputado al Congreso de la Unión hasta 1844. Murió el 30 de agosto de 1851.[11]

Gregorio Dávila

Gregorio Dávila nació en Ameca el 15 de marzo de 1810, en lo que fuera la Intendencia de Guadalajara. Estudió en el Seminario Real y tridentino del Señor San José la carrera de literatura, y después ingresó a la Escuela de Derecho en Guadalajara para estudiar la carrera de abogado. Obtuvo su título el 31 de diciembre de 1829 y en 1834 fue secretario del ayuntamiento de dicha ciudad. Se retiró del cargo cuando Antonio López de Santa Anna disolvió la federación en 1836. El gobierno lo persiguió por estar en las filas liberales, teniendo que salir del estado de Jalisco en 1839 hacia Colima. Fueron sus compañeros de lucha los liberales Gordiano Guzmán y José Guadalupe Montenegro. En 1845 fue desterrado y en agosto de 1846 regresó por haberse restablecido la Constitución federal de 1824. Fue diputado local en 1846, luego en 1850 se desempeñó como magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la nación. Fue electo gobernador del estado de Jalisco el 26 de julio de 1852 con el apoyo del partido liberal, y posteriormente dejó el cargo en manos de José María Blancarte. En ausencia del gobernador Degollado, volvió a ocupar la gubernatura como sustituto, lo que se repitió con la ausencia del gobernador Parrodi. Además fue consejero del estado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, diputado al Congreso de la Unión y magistrado del Tribunal de Circuito. Murió el 15 de enero de 1868 en Guadalajara.[12]

[11] Ramiro Villaseñor y Villaseñor. (1981). *Los primeros federalistas de Jalisco. 1821-1834*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, pp. 47-48. Urzúa y Hernández. (1987), t. I, pp. 65-68.

[12] César Gabriel Alfaro Anguiano. (2003). *Los beneméritos de Jalisco*. Guadalajara: Imprejal, pp. 51-56.

Rafael Dávila

Nació en Guadalajara en 1791, se casó con Felipa López de la Peña, murió en Guadalajara el 23 de agosto de 1831.[13] Rafael Dávila fue diputado suplente al Congreso de la Unión en 1823, y el 22 de marzo del año siguiente fue nombrado jefe político de Guadalajara. El 1° de julio de 1824 se le designó como vice-gobernador del estado de Jalisco, y posteriormente ocupó el cargo de gobernador interino entre el 4 de julio y el 23 de octubre de 1824. Rafael Dávila fue abogado, y dueño de la hacienda de San José en el cantón de La Barca, se postuló por el partido centralista a la gubernatura del estado de Jalisco, pero no contó con el apoyo de la federación.[14] Con el único respaldo del poder central, la impopularidad de Dávila creció rápidamente y las críticas hacia su gobierno no cesaron, la prensa local criticó a los políticos centralistas, por lo que terminó enemistado con el congreso local y sus gobernados, por tales motivos Dávila no dudó en renunciar a la gubernatura el 10 de octubre de 1825. El Congreso por su parte aceptó la renuncia y nombró a Juan N. Cumplido como su sustituto.[15]

Nicolás España Solís

El caso de Nicolás España es muy importante porque fue el último jefe político del cantón de Guadalajara del régimen porfirista. En primer lugar, no hay mucha claridad sobre este personaje, pues su nombre aparece a lo largo de todo el siglo XIX, por lo que es necesario precisar bien

[13] México, Jalisco, registros parroquiales, 1590-1979, database with images, *FamilySearch* (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:684F-6KZK: 10 August 2021), Dn. Rafael Davila, 23 Aug 1831; citing Burial, El Sagrario Metropolitano, Guadalajara, Jalisco, México, parroquias Católicas (Catholic Church parishes), Jalisco; FHL microfilm 4,719,005.

[14] Villaseñor. (1981), pp. 49-50.

[15] Fabián Acosta Rico. (2018). El Espejo: Gobernadores. Rafael Dávila, 1825. Bajo los intereses del imperio. *Crónica Jalisco*. https://www.cronicajalisco.com/notas/2018/88718.html

de quién se trata cuando se habla de Nicolás España en cada momento de dicho siglo. Para empezar hay que decir que el jefe político llamado Nicolás España Solís, nació el 11 de abril de 1841, sus padres fueron Fortino España y Josefa Solís del Muro. Sus abuelos paternos fueron Nicolás España y Dionicia Cárdenas, mientras que sus abuelos maternos fueron Felipe Solís del Muro y Petra Morelos. Sus padrinos fueron José Esteban España y Refugio España.[16] Así que, si no se tiene cuidado el nombre de Nicolás España, se puede confundir entre el nieto y el abuelo, sin pensar que hay una generación de por medio y casi medio siglo de diferencia. Otra confusión puede surgir porque Fortino España y Josefa Solís tuvieron otro hijo el 8 de diciembre de 1860, a quien le pusieron el nombre de Nicolás Salvador España, hermano del anterior.[17] Sin embargo, quien tenga familiaridad con el archivo de notarios sabrá que este nombre corresponde al notario decimonónico, el licenciado Salvador España y no al jefe político Nicolás España.

Posteriormente, Nicolás España Solís, se casó con Enedina Silva el 28 de octubre de 1888, cuando Nicolás tenía 47 años de edad y Enedina 28. Sus testigos de matrimonio fueron Ventura Anaya y Aranda, Enrique Pérez Rubio y José López Portillo y Rojas.[18] Entre los hijos que tuvieron Nicolás y Enedina, a uno de ellos le pusieron el nombre de Nicolás España Silva.[19] De lo anterior se desprende la confusión con los nombres,

[16] "México, Jalisco, registros parroquiales, 1590-1979", database with images, *FamilySearch* (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:684F-Z87T: 10 August 2021), Espana Solis, 1841.

[17] "México bautismos, 1560-1950", database, *FamilySearch* (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:N2SX-GZZ: 15 March 2022), Nicolas Salvador Espana Solis, 1860.

[18] "México, Jalisco, Registro Civil, 1857-2000", database with images, *FamilySearch* (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QGQR-ZLRG: 22 February 2021), Nicolás España Solis and Enedima Silva, 1888.

[19] "México, Jalisco, Registro Civil, 1857-2000", database with images, *FamilySearch* (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QGQB-Y3FT: 22 February 2021), Nicolás España, 1890.

como decía Gabriel García Márquez en su novela *Cien años de soledad*, los nombres se confundían en los laberintos de la sangre.[20]

El primer Nicolás España, abuelo y homónimo del jefe político porfiriano de principios del siglo xx, nació en 1786 y murió el 22 de abril de 1838 en la ciudad de Guadalajara, a la edad de 52 años. Aparece en los archivos de la Secretaría de la Defensa (Sedena) en un documento fechado el 21 de mayo de 1829, acusando al gobernador de Jalisco, Ignacio Cañedo, por haber dictado un decreto anticonstitucional para disponer de los bienes y rentas eclesiásticas. Un año después, en otro documento del 30 de enero de 1830, el mismo Nicolás España se desiste de la acusación contra el gobernador de Jalisco y se le devuelven sus documentos.[21]

Por su parte Fortino España nació en 1815,[22] también tuvo participación política, pues ocupó el puesto de secretario de gobierno y lo cedió a Gregorio Dávila el 30 de enero de 1830, además fue director de la imprenta del gobierno de 1834 a 1836, y se desempeñó como jefe político del primer cantón en 1848.[23] De tal manera que la familia de Nicolás España Solís tuvo muchos vínculos con la élite política de Guadalajara a lo largo del siglo xix, y esto explica por qué los testigos de su boda fueron figuras muy importantes en la política de la ciudad y del estado de Jalisco.

Nicolás España Solís tuvo la necesidad de presentar constancias de sus cargos y actividades políticas, administrativas y militares al gobernador Ramón Corona para conseguir un puesto en el gobierno. Por lo que en

[20] Gabriel García Márquez, Cien años de soledad.

[21] Los documentos provienen del archivo de la Cámara de Senadores, pero están recuperados por la SEDENA en este sitio: https://memoricamexico.gob.mx/swb/memorica/Cedula?oId=K17rq28B5czG3iVX2eit

[22] México, Jalisco, registros parroquiales, 1590-1979, database with images, *FamilySearch* (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:684K-8HX2: 4 August 2022), D. Fortino Espana, 13 Nov 1836; citing Marriage, El Sagrarío Metropolitano, Guadalajara, Jalisco, México, parroquias Católicas (Catholic Church parishes), Jalisco; FHL microfilm 4,718,941.

[23] Villaseñor. (1981), pp. 13 y 52.

su expediente se demuestra que el 9 de abril de 1858, el general y gobernador del estado de Jalisco, Pedro Ogazón lo nombró subteniente. Al año siguiente obtuvo el grado de teniente y el 1° de noviembre de 1860 fue ascendido a capitán. El 9 de julio de 1861 fue nombrado capitán del Batallón de Carabineros y el 5 de octubre de 1888 finalmente fue nombrado, por primera vez, jefe político del cantón de Guadalajara, en sustitución del general Doroteo López.[24]

Antes de ser nombrado como jefe político del primer cantón del estado, Nicolás España Solís había ocupado el puesto de oficial mayor de la secretaría del gobierno del estado de Jalisco, y en julio de 1888 fue electo como diputado suplente ante el congreso del estado.[25] El coronel Nicolás España Solís causó baja en el depósito de jefes y oficiales el 23 de diciembre de 1891, y fue dado de alta como secretario en la Comisión Militar, esto se debió a que al general Luis C. Curiel lo nombraron subsecretario de Guerra.[26] En 1893 desempeñaba el cargo de inspector y visitador de la Penitenciaría de Escobedo, como lo menciona varias veces Jorge Alberto Trujillo Bretón en su libro sobre esta penitenciaría.[27]

En 1906 volvió a ser nombrado jefe político del cantón de Guadalajara, por el gobernador de Jalisco de ese entonces, el coronel Miguel Ahumada, puesto en donde la prensa oficial lo trató bien, pero no así la prensa opositora. Con el estallido de la revolución maderista y los cambios de gobierno en el estado de Jalisco, Nicolás España Solís renunció a la jefatura del cantón de Guadalajara y fue a radicar a la ciudad de México. Nicolás España Solís murió el 28 de mayo de 1915 en la ciudad de

[24] *El Cronista*, 16 de junio de 1888, *El Siglo Diez y Nueve*, 5 de octubre de 1888, y *La Patria*, 5 de octubre de 1888.

[25] *Periódico Oficial del Estado de Campeche*, 23 de abril de 1889. *La Bandera de Jalisco*, 11 de julio de 1888.

[26] *La Patria*, 20 de diciembre de 1891.

[27] Jorge Alberto Trujillo Bretón. (2001). *Entre la celda y el muro. Rehabilitación social y prácticas carcelarias en la Penitenciaría jalisciense "Antonio Escobedo", 1844-1912*. Zamora: El Colegio de Michoacán.

Guadalajara a los 74 años de edad, de gastroenteritis, para esa fecha ya era viudo y fue sepultado en el panteón de Mezquitán.[28]

José García Bravo

José García Bravo, nació en La Barca, Jalisco, fue hijo de Luis García Bravo y de Juana Rubio. Estudio en el colegio de San Ildefonso (Escuela Nacional Preparatoria). En 1861 ya se encontraba como estudiante del Colegio Militar. El 12 de diciembre fue nombrado Subteniente de infantería en el 1er. Batallón Ligero de Guanajuato. El 14 de junio de 1862 participó en el ataque a la plaza de Orizaba, al mando del general Zaragoza y en la defensa de Puebla contra el ejército francés. El 17 de mayo de 1863, cuando cayó la ciudad de Puebla en manos del ejército francés, Bravo fue hecho prisionero y deportado a Francia, junto con otros soldados republicanos, hasta que el 24 de agosto de 1864, se vio nuevamente en las filas republicanas. Su hoja militar de servicios es muy extensa hasta diciembre de 1890 como se aprecia a continuación:

1. En enero de 1867 prestó servicios en el 4° Batallón de Oriente cuando se dio el ataque a Texcoco contra los imperialistas.
2. El 5 de febrero de 1867, siendo teniente del general Antonio Carbajal, fue hecho prisionero por el ejército imperialista en las lomas de Saldarriaga y conducido a Querétaro, donde estuvo preso hasta el 15 de mayo de ese año, cuando el ejército republicano tomo dicha ciudad.
3. Luego, en 1868 participó en la pacificación del estado de Guerrero y en la persecución y derrota del general Negrete en San Martín Atexcatl y San Juan Ixcaquistla.
4. El 2 de mayo de 1872 marchó a los distritos de Chalco, en el estado de México, Atlixco y Matamoros en Puebla, y Chiautla, en Morelos. Combatió en Tetla del Volcán el 5 de mayo de 1872, y en la Barranca

[28] "México, Jalisco, Registro Civil, 1857-2000", database with images, *FamilySearch* (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG77-CJ3L: 22 February 2021), Nicolás España Solis, 1915.

de Michinaque el 15 de ese mismo mes. Terminando su expedición el 4 de junio de 1872.[29]

Además de las actividades mencionadas, Bravo prestó servicios en el 7° Batallón de línea del 19 de mayo de 1867 al 14 de junio de 1869. También en el Batallón Guardia de los Supremos Poderes, de junio de 1869 a enero de 1871. El 12 de enero de 1871 se separó del servicio militar, volviendo al propio Batallón el 24 de septiembre de ese año, ahí permaneció hasta el 24 de junio de 1874. Luego perteneció al 8° Cuerpo de Caballería y duró ahí hasta el 6 de mayo de 1867, cuando ingresó al depósito de jefes y oficiales del ejército. Aunque continuó con su actividad militar en distintos regimientos, no fue sino hasta el 1° de diciembre de 1890 que dejó el ejército y fue a desempeñar las funciones y actividades de jefe político en el tercer cantón del estado de Jalisco, con cabecera en La Barca. El 30 de junio de 1891, el gobernador de Jalisco le ordenó que entregara la jefatura política al presidente municipal, y, a cambio, le encargó la Pagaduría General de Gendarmes, situada en Guadalajara. Dos meses después, el gobernador del estado lo nombró jefe político del cantón de Teocaltiche.[30]

Vidal Gómez Márquez

Vidal Gómez fue oriundo de Guadalajara, nació el 28 de abril de 1833. Su padre fue José de Jesús Gómez y su madre María Márquez. Debido a que casi no había escuelas, Vidal recibió la instrucción elemental de profesores como Ambrosio Aguayo y Juan María Larrina. Vidal no quiso ser clérigo, que era la única opción para continuar sus estudios, y prefirió dedicarse al oficio de mecánico, y también al de carpintero. Vidal estableció un taller de carpintería, que por su importancia llegó a ser muy pronto uno de los primeros de Guadalajara. Así pasó algunos años viviendo de su honrado trabajo, sin problema alguno. Pero a partir de la guerra con Esta-

[29] Pavia. (1891), vol. I, pp. 347-351.

[30] Pavia. (1891), vol. I, pp. 347-351.

dos Unidos en 1846, comenzó a colaborar con el partido liberal, cuando el general José María Yáñez se pronunció en Guadalajara el 20 de mayo de ese año contra el gobierno del general Paredes.[31]

En 1858 Vidal salió de Guadalajara rumbo al sur de Jalisco con el grado de sargento 2° en el Escuadrón de Lanceros de Jalisco, bajo las órdenes del coronel Antonio Hinojosa. Luchó contra los conservadores en el ejército liberal, en diferentes cuerpos y bajo el mando de varios jefes militares, hasta que el año de 1860, Vidal se retiró a la vida privada, estableciendo su residencia en la hacienda de Chichiquila, en la municipalidad de Amacueca, del 4° cantón de Jalisco, en cuyo lugar desempeñó algunas comisiones que le encargó el gobierno liberal, tales como las de elector, y algunas veces para observar los movimientos de las fuerzas conservadoras. En Amacueca desempeñó algunos cargos públicos, como el de miembro del ayuntamiento y alcalde constitucional. El 9 de febrero de 1861 se casó con María Gutiérrez Anguiano, quien murió el 17 de marzo de 1873 en la hacienda mencionada. Cuando en 1876 el general Porfirio Díaz proclamó el plan de Tuxtepec, Vidal Gómez apoyó dicho movimiento, y con la autorización del general Pedro Galván, organizó una fuerza que se denominó "Lanceros de Jalisco", con cincuenta caballos y veinticinco infantes, invirtiendo gran parte de sus recursos en aquella empresa y llevando el grado de teniente coronel. En 1877 se unió al general Rosendo Márquez, junto a los coroneles Epitacio Gómez y Félix Vélez, con el fin de llegar a Guadalajara en la entrada del general Porfirio Díaz.[32]

La fuerza que Vidal organizó para apoyar los principios del Plan de Tuxtepec, pasó revista de cese a poco de haber triunfado los hombres de Tecoac, y el gobernador del estado de Jalisco, Jesús Leandro Camarena, lo nombró receptor de rentas del departamento de Zacoalco, permaneciendo en dicho cargo hasta el año de 1882, en que fue removido por el gobernador Fermín González Riestra. Entonces Vidal Gómez se retiró nuevamente a la vida privada, trabajando en las labores de la hacienda de

[31] Pavia. (1891), vol. I, pp. 353-358.

[32] Pavia. (1891), vol. I, pp. 353-358.

Totolimispa, en la municipalidad de San Gabriel, del cantón de Zapotlán el Grande. En 1878, Vidal se volvió a casar, esta vez con Gregoria García. Pero la difícil situación económica en que se encontraba en 1887 lo empujó a ir con el gobernador, el general Ramón Corona, para pedirle trabajo. Corona lo nombró director político del departamento de Zacoalco de Torres, en el 4° cantón. Posteriormente, el 9 de junio de 1890, el gobernador interino Mariano Bárcena lo designó como jefe político del 10° cantón, de cuyo mando tomó posesión el día 22 de ese mes y año. El 3 de marzo del año siguiente, el gobernador de Jalisco, el general Pedro A. Galván, nombró a Gómez como jefe político del 4° cantón del estado, con su cabecera en Sayula.[33] Vidal Gómez murió en Zacoalco de Torres, Jalisco, el 9 de marzo de 1913 a la edad de 80 años.[34]

José Ignacio Herrera y Cairo

Nació en Guadalajara el dos de junio de 1826, y murió el 21 de mayo de 1858 en Ahualulco, Jalisco.[35] Los padres de José Ignacio fueron el doctor Anacleto Herrera y Atilana Cairo. Se casó con Gregoria Cuervo Flores, quien nació en 1832 y murió en 1897.[36] Estudió latín y el curso de Artes en el Seminario Conciliar de Guadalajara, estudios que concluyó en 1839, bajo la dirección del licenciado Jesús Ortiz. Continuó sus estudios

[33] Pavia. (1891), vol. I, pp. 353-358.

[34] "México, Jalisco, Registro Civil, 1857-2000", database with images, *FamilySearch* (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QGWC-X2DV: 22 February 2021), Vidal Gómez Márquez, 1913.

[35] "Find A Grave Index," database, *FamilySearch* (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:DM5T-86T2: 16 December 2021), Jesús Ignacio Herrera y Cairo; Burial, Guadalajara, Guadalajara Municipality, Jalisco, Mexico, Panteón de Belén; citing record ID 215063462, *Find a Grave*, http://www.findagrave.com.

[36] "México, Jalisco, Registro Civil, 1857-2000", database with images, *FamilySearch* (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QGQB-Y3LD: 22 February 2021), Ignacio Herrera y Cairo in entry for Gregoria Cuervo Flores, 1897.

en 1840, cuando ingresó a la Universidad Nacional de Guadalajara, inscribiéndose en los cursos de Medicina.[37]

Herrera y Cairo comenzó su carrera política como comisario de policía del quinto cuartel de la ciudad de Guadalajara en agosto de 1821. Entre 1826 y 1828 fue diputado en el Congreso del estado de Jalisco, después presidente del mismo congreso. Al año siguiente, 1829, ocupó el puesto de vice-gobernador, lo que le dio acceso al cargo de jefe político del primer cantón. El cargo de vice-gobernador lo ocupó hasta marzo de 1830, año en que nuevamente volvió a ocupar una curul en el congreso estatal, como presidente del mismo, y luego regresó para encargarse del gobierno en el mismo puesto que ocupaba antes. Posteriormente, José Ignacio Cañedo regresó a la gubernatura del estado, entonces Herrera y Cairo volvió a ser vice-gobernador. En síntesis, Herrera y Cairo desempeñó el puesto de vice-gobernador en tres ocasiones alternativamente entre 1830 y 1833. Luego pasó un lapso de 23 años sin ocupar un puesto administrativo, hasta que el 30 de mayo de 1856 ocupó un lugar como vocal del Consejo de gobierno del estado. Este año fue su último periodo de gobierno, durante el cual estuvo en conflicto con la comandancia militar a cargo del general José Guadalupe Montenegro. Herrera y Cairo expidió varios decretos entre los que estaba uno que prohibía la enajenación de los bienes eclesiásticos, en apoyo a la Ley Lerdo sobre la desamortización de manos muertas. Su gobierno fue breve, pero muy difícil por las diferencias con el general Montenegro, y por la oposición del clero a la aplicación de las reformas liberales. El 11 de julio de 1856 mandó llevar a la fuerza al Palacio de Gobierno al canónigo Juan Nepomuceno Camacho y a los prelados de varias órdenes religiosas, a quienes regañó públicamente por apoyar a los enemigos del gobierno con sus prédicas y sus recursos económicos, pero ellos negaron los cargos y los tuvo que poner en libertad. Por otra parte, nombró a un abogado especial con el

[37] Los universitarios entre el Instituto y la Universidad. Universidad de Guadalajara. *Enciclopedia histórica y biográfica de la Universidad de Guadalajara*. http://enciclopedia.udg.mx/articulos/herrera-y-cairo-jose-ignacio

fin de defender a los indios en sus litigios sobre la tenencia de la tierra.[38] Debido a las injerencias del gobierno federal, y a su mal estado de salud, tuvo que entregar el poder al general Anastasio Parrodi, y se retiró de la vida política refugiándose en a su hacienda denominada La Providencia, donde el 20 de mayo de 1858, fue apresado por el teniente coronel Manuel Pliélago y fusilado inmediatamente.[39]

Jesús López Portillo Serrano

Originario de Guadalajara, Jesús López Portillo nació el 14 de agosto de 1818, fue hijo de Pío López Portillo y María Serrano. Se casó con María Rojas el 22 de noviembre de 1845. Con ella tuvo cinco hijos, pero solo sobrevivieron dos de ellos, José y Margarita. Por su parte, María Rojas fue hija de Vicente Rojas y María de Jesús Flores Alatorre, cuando realizaron su matrimonio Jesús tenía 27 años y María 18 años de edad. Jesús López Portillo no era realmente rico cuando se casó, pues solo introdujo a su matrimonio un capital de cinco mil pesos, más bien pertenecía a la clase media, pues todos sus bienes fueron adquiridos a partir de su trabajo profesional como abogado. Jesús ingresó al Seminario Conciliar en 1829, después hizo estudios de jurisprudencia en la universidad, obteniendo su título de abogado del Supremo Tribunal de Justicia. Como abogado participó en varios negocios públicos, fue nombrado Síndico del Ayuntamiento de Guadalajara y luego regidor y alcalde. También fue socio corresponsal del Ateneo Mexicano.[40]

El 1° de septiembre de 1846 fue nombrado jefe político del primer cantón de Jalisco, y electo al congreso estatal ese mismo año, durante el gobierno del general José María Yáñez, siendo el secretario de dicha cámara. Al siguiente año fue designado como secretario de gobierno bajo

[38] Los universitarios entre el Instituto y la Universidad. Universidad de Guadalajara. *Enciclopedia histórica y biográfica de la Universidad de Guadalajara*. http://enciclopedia.udg.mx/articulos/herrera-y-cairo-jose-ignacio

[39] Urzúa y Hernández. (1987), t. 1, pp. 65-68. Villaseñor. (1981), pp. 109-110.

[40] Valerio. (1999), pp. 777-781. Urzúa y Hernández (1987), t. 1, pp. 305-307.

las órdenes del gobernador Joaquín Angulo. Por encargo del gobernador Angulo, López Portillo junto con Manuel López Cotilla y Luis Verdía presentaron un proyecto al Congreso del estado con el título de Plan General de Enseñanza Pública, que fue aprobado el 8 de octubre de 1847. Al año siguiente, López Portillo fue reelecto diputado al congreso del estado de Jalisco, y en 1849 fue senador propietario por el mismo estado. Después, en 1850, fue electo diputado al Congreso de la Unión, y en mayo de ese mismo año lo nombraron miembro honorario de la Falange de Estudios. López Portillo resultó electo gobernador constitucional del estado de Jalisco el 26 de septiembre de 1851, siendo la primera vez que se trasmitió de forma pacífica el poder el 1° de marzo de 1852. Jesús López Portillo estableció un servicio de policía y seguridad, además creó el Liceo del Estado y abrió la biblioteca pública.[41]

El general López Uganda se levantó en contra del gobierno de López Portillo, y al regreso de Santa Anna a la presidencia, fue desterrado, permaneciendo en el extranjero por casi tres años. Con el triunfo del Plan de Ayutla López Portillo regresó al país, y el 6 de marzo de 1856 fue nombrado por el gobernador de Jalisco, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco, y más tarde diputado local, al mes siguiente catedrático de la Academia Teórico Práctica de Jurisprudencia en el Instituto de Ciencias del Estado. En mayo de ese mismo año el presidente Comonfort lo nombró Magistrado de Circuito. Luego fue electo diputado al Congreso constituyente del estado de Jalisco. En 1857, el gobernador Anastasio Parrodi lo nombró como segundo consejero del gobierno. Pero posteriormente se retiró a la vida privada debido a la reacción de Tacubaya. Restablecido el orden constitucional, el gobernador Ogazón comisionó a López Portillo, el 27 de noviembre de 1860, para formar el proyecto de la Ley General de la Enseñanza, el cual fue promulgado el 24 de julio de 1861. Durante la intervención francesa, López Portillo formó parte del Consejo de Estado, en el imperio de Maximiliano, pero al triunfo de la república se les castigó a los servidores del imperio y fue

[41] Valerio. (1999), pp. 777-781. Urzúa y Hernández (1987), t. I, pp. 305-307.

desterrado nuevamente por seis años, sin embargo le fue conmutada la pena, y allí acabó su carrera política, por lo que se dedicó a la enseñanza, fue catedrático de procedimientos, derecho internacional y economía política. Murió en Guadalajara el 18 de septiembre de 1901, a la edad de 83 años.[42]

Luis Eduardo Medina Ibarra

Nación en Ameca el 11 de marzo de 1858, sus padres fueron Eduardo Medina y Juana Ibarra. Eduardo Medina fue profesor de instrucción primaria y murió en Guadalajara el 13 de abril de 1880. Luis E. Medina pasó su infancia en el pueblo de Hostotipaquillo, Jalisco, donde estudió la primaria. Posteriormente, a los 13 años de edad, ingresó a la Escuela de Artes de Guadalajara. Luego, en 1874, se fue a Ahualulco y a Ixtlán, donde realizó algunos trabajos, y después se dedicó al comercio. Luis Medina contrajo matrimonio en 1880 con Elena Macías, y posteriormente a la muerte de ésta, a los 39 años de edad, Luis se casó en segundas nupcias con María Villaseñor, de 33 años de edad, el 7 de junio de 1898 en Autlán.[43] Por otra parte, después de liquidar su negociación comercial en Ixtlán, fue a radicar al puerto de Mazatlán, donde trabajó como director de la escuela municipal núm. 1 del puerto, con contrato del ayuntamiento. Entre 1883 y 1887 desempeñó algunos puestos en el juzgado de 1ª. Instancia, en Ahuacatlán y en el Tribunal Superior de Tepic. Posteriormente el gobernador del estado de Jalisco, Ramón Corona, lo nombró oficial 2° de la jefatura política de Guadalajara. En 1888, Luis E. Medina fue nombrado director político interino de la villa de San Pedro Tlaquepaque, y posteriormente pasó con el mismo cargo al pueblo de Tlajomulco.

En agosto de 1889 fue nombrado jefe político del 6° cantón del estado de Jalisco, con residencia en la ciudad de Autlán. Según Lázaro Pavia,

[42] Valerio. (1999), pp. 777-781. Urzúa y Hernández (1987), t. I, pp. 305-307.

[43] "México, Jalisco, Registro Civil, 1857-2000", database with images, *FamilySearch* (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QGQ5-Z7QF: 22 February 2021), Luis E Medina Ibarra and María Villaseñor, 1898.

Medina se desempeñó con mucha responsabilidad como autoridad política, dedicándose especialmente a las mejoras materiales, tanto de utilidad como de ornato, pues en Tlajomulco mandó construir una cárcel con donativos que personalmente recogió de los vecinos, y otra parte provino de sus propios recursos económicos. De la misma manera construyó la plaza principal de Autlán, el jardín Juárez y la alameda Ramón Corona, por lo que asegura Pavia, los ciudadanos autlenses estaban muy contentos y lo apreciaban bastante, porque supo equilibrar los intereses particulares con los del bien general del cantón.[44]

José Guadalupe Montenegro

Nació el 7 de abril de 1800 en Sayula, sus padres fueron Diego Montenegro y Alarcón y su segunda esposa María Inés Guadalupe Vizcaíno y García.[45] Se casó con María Antonia Vásquez el 20 de septiembre de 1845.[46] A los 18 años, José Guadalupe Montenegro dejó la actividad comercial y se enlistó en el ejército realista, donde debía combatir a las fuerzas insurgentes de Gordiano Guzmán, quién tenía actividades en el sur de Jalisco en contra de los realistas. Montenegro se adhirió al Plan de Iguala con el que se logró la independencia de México. En 1828 Montenegro tomó parte en las acciones militares en Sayula a favor de Vicente Guerrero durante la revolución de la Acordada, de esta manera participó, en agosto de ese año, en la batalla de la hacienda de San Isidro Mazatepec contra el coronel Ángel Benítez.[47]

[44] Pavia. (1891), vol. I pp. 45-47.

[45] "Find A Grave Index," database, *FamilySearch* (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6Z51-89JK : 10 September 2021), José Guadalupe Montenegro, ; Burial, Guadalajara, Guadalajara Municipality, Jalisco, Mexico, Panteón de Belén; citing record ID 223982697, *Find a Grave*, http://www.findagrave.com.

[46] "México matrimonios, 1570-1950", database, *FamilySearch* (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JC8P-VQM: 17 February 2020), Jose Guadalupe Montenegro, 1845.

[47] Alfaro. (2003), pp. 25-27.

Al año siguiente se pronunció a favor de Vicente Guerrero en sus aspiraciones a la presidencia de México. Con la caída de Guerrero, Montenegro se adhirió a la rebelión que emprendió dicho general, tomó Sayula, asaltó Tecolotlán y se pasó al estado de Michoacán para unir sus fuerzas a las del general Gordiano Guzmán y participó en la batalla de Sayula, el 2 de octubre de 1831. Poco después, el país se vio dividido en dos grupos o facciones denominadas centralistas y federalistas, los grupos dirigentes de Jalisco se adhirieron al bando federalista, Montenegro mantuvo su actividad como guerrillero contra el centralismo lanzando una nueva proclama el 2 de agosto de 1835. Posteriormente se levantó en armas el 18 de mayo de 1838 en contra del gobernador de Jalisco Antonio Escobedo.[48]

Montenegro en 1841 fue electo diputado federal y apoyó el Plan de Tacubaya que impulsó el general Mariano Paredes en Guadalajara y Veracruz, ese año José Guadalupe se hallaba en Veracruz prestando sus servicios militares. Al iniciar el nuevo gobierno, Montenegro fue nombrado por el presidente San Anna como coronel, el 2 de marzo de 1842, en la Caballería de Sonora, este fue el único grado militar que tuvo en toda su vida. En 1845 participó en el levantamiento de Manuel de la Gándara. El 20 de mayo de 1846, Montenegro junto con José María Yáñez y J. Guadalupe Perdigón Garay, encabezaron un levantamiento en Guadalajara en contra del gobernador Antonio Escobedo a quien apresaron, proclamando la república y repudiando a la monarquía y al ejército norteamericano. Esto contribuyó al derrocamiento del general Paredes. En ese año obtuvo una diputación en el Congreso estatal, pero la guerra contra la invasión norteamericana le impidió tomar posesión de su curul, al año siguiente, volvió a competir por un escaño, resultando nuevamente electo como diputado y al mismo tiempo fue nombrado vice-gobernador del estado de Jalisco, para el periodo de 1848 a 1849, decidiéndose por la vice-gubernatura y ocupando en varias ocasiones la gubernatura del estado de Jalisco, y la jefatura del primer cantón. Durante la Guerra de

[48] Alfaro. (2003), pp. 25-27.

Reforma Montenegro presidió la Junta de Seguridad de Guadalajara y el 16 de septiembre de 1859 fue nombrado comandante militar de Tapalpa, Atemajac y otros pueblos de la zona, también formó parte de la escolta que protegió al presidente Benito Juárez durante su viaje de Guadalajara a Manzanillo.[49]Montenegro estuvo exilado en Nueva Orleans, en donde convivió con otros prominentes mexicanos exilados como Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga y José María Mata, quienes integraron la Junta Revolucionaria que al regresar al país, en 1854, se adhirieron al Plan de Ayutla, proclamado por Juan Álvarez, y en 1866 fue gobernador provisional del estado de Jalisco. Montenegro fue nombrado por el presidente Juárez, en 1869, como socio de la Compañía Lancasteriana de México que financiaba el sistema de educación más avanzado en el país, y en 1871, Montenegro fue designado como presidente de dicha compañía en el estado de Jalisco. Entre 1874 y 1879 Montenegro fue diputado en varias ocasiones, además fue senador suplente por el estado de Jalisco en 1880. Falleció el 21 de marzo de 1885 en Guadalajara.[50]

Juan J. Navarro

Originario de Álamos, Sonora, Juan J. Navarro nació el 19 de mayo de 1843. Fue hijo de Pedro Navarro y Bibiana Rochis, quienes no contaban con muchos recursos económicos, pero pudieron darle una buena educación a su hijo. Juan J. Navarro tuvo el grado de Mayor del ejército. Su hoja de servicios en el ejército fue la siguiente:

1. El 23 de octubre de 1859 se dio de alta como soldado en la Guardia Nacional con apenas 19 años.
2. El 1° de noviembre de 1861, fue ascendido a cabo.
3. El 1° de agosto de 1862, ascendió a sargento 2°.
4. El 22 de diciembre de 1864, ascendió a sargento 1°.
5. El 16 de marzo de 1865 le dieron el grado de subteniente, ingresando al Batallón de Auxiliares del Ejército.

[49] Alfaro. (2003), pp. 25-27.

[50] Alfaro. (2003), pp. 25-27.

6. El 7 de enero de 1866 obtuvo el grado de Teniente.
7. El 16 de febrero de 1867, obtuvo el grado de Capitán.
8. En 1876 le dieron el grado de Mayor. (La fecha de la hoja de servicio es del 4 de abril de 1891).[51]

Los Cuerpos en que sirvió fueron los siguientes: Escuadrón "Allende", Batallón "Morelos", Mixto de Sinaloa, 2° Ligero del 10° de Infantería, Batallones números 3, 9 y 30. El 23 de junio de 1885 el mayor Navarro pasó al Depósito de Jefes y Oficiales, donde permaneció casi seis años. En suma perteneció al ejército por 37 años. Participó en 18 campañas militares bajo las órdenes de distintos jefes militares, entre los que destacan los generales Guillermo Carbó, Rosendo Márquez, José María Rangel y Leopoldo Romano. Por lo que se ganó varias condecoraciones. El 21 de noviembre de 1885, "fue nombrado por el gobierno de Jalisco, con permiso del presidente de la república, jefe político del 4° cantón del mismo Estado (Sayula), durando en dicho puesto hasta el 7 de mayo de 1887, que por orden superior entregó tal empleo, volviendo a encargarse de él, desde el 24 de abril de 1890 hasta el 3 de mayo de 1891, en que el mismo gobierno lo nombró jefe político del 5° cantón (Ameca).[52]

Leopoldo Romano Elguezábal

Aunque, de manera estricta, Leopoldo Romano fue jefe político cuando el VII Cantón de Jalisco pasó a ser el Territorio de Tepic, aquí lo consideramos dentro de los jefes políticos de Jalisco, porque dicho territorio estaba todavía muy relacionado con lo que acontecía en el estado de Jalisco. Leopoldo Romano nació en Saltillo, Coahuila, el 11 de enero de 1844, siendo muy joven ingresó al ejército republicano y obtuvo el grado de subteniente de infantería cuando tenía tan solo diecisiete años. Poco a poco ascendió en la jerarquía militar distinguiéndose en la guerra contra el Segundo Imperio y la invasión del ejército francés, sus principales ac-

[51] Pavia. (1891), vol. I pp. 103-109.

[52] Pavia. (1891), vol. I pp. 103-109.

tividades militares fueron en el oriente, norte y occidente del país. En el estado de Jalisco colaboró estrechamente con el general Ramón Corona en el combate contra el ejército de Manuel Lozada y sus seguidores.[53]

En la difícil coyuntura en que el séptimo cantón de Tepic dejó de pertenecer al estado de Jalisco y se convirtió en Territorio Militar de Tepic, el 25 de enero de 1880 se nombró como jefe político y comandante militar a Leopoldo Romano. Pocos días después, el 12 de febrero, recibió su ascenso de coronel de caballería a general de brigada. Las pocas convulsiones políticas y sociales durante las dos últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX en el territorio de Tepic, le permitieron a Romano una estable gestión. Romano se mantuvo en el gobierno por poco más de 17 años, con un sueldo nominal anual promedio de 4,000 pesos, hasta el día de su muerte ocurrida el 14 de mayo de 1897, a la edad de 53 años.

Con 36 años de edad Romano comenzó su gobierno en el territorio Tepic lo que le permitió hacer una gran cantidad de negocios al amparo del gobierno y en asociación con los principales empresarios y hacendados de la región. Después de su nombramiento como jefe político de Tepic, se fue a radicar junto con su esposa Leonor Mercado García a la capital de dicho territorio. Leopoldo y Leonor se habían casado en 1877. La estabilidad política y social en el territorio de Tepic fue propicia para que se desarrollaran los negocios tanto en la agricultura, la minería, la ganadería y la incipiente industria. Durante su gobierno en Tepic se construyó la segunda planta de la penitenciaría, que posteriormente, en 1885, fue el Palacio y la Casa de Gobierno, se creó la Diócesis de Tepic en 1891, se hizo el primer censo de población en 1895, se introdujo la red de agua potable en la ciudad de Tepic en 1897. El historiador Mario Contreras Valdés detalla y explica puntualmente todos los negocios, empresas

[53] Pavia. (1891), vol. I pp. 63-66. Contreras Valdez (2006), pp. 23-65. Francisco Flores Soria. (2023). El general Leopoldo Romano, primer Jefe Político del Territorio federal de Tepic, hoy estado de Nayarit. Recuperado de: https://www.ntv.com.mx/2023/05/14/el-general-leopoldo-romano-primer-jefe-politico-del-territorio-federal-de-tepic-hoy-estado-de-nayarit/

y obras que estuvieron relacionadas con el gobierno de Romano durante los 17 años que gobernó el Territorio de Tepic. Contreras sostiene que Leopoldo Romano fue uno de los pocos jefes políticos que supo combinar la actividad político-administrativa con la actividad empresarial de manera exitosa.[54]

Gonzalo del Valle

Gonzalo del Valle fue originario de Tepatitlán, Jalisco, el 21 de febrero de 1871 se casó con Juana de la Mora.[55] El periódico *Jalisco Libre*, publicó una nota laudatoria y apologética de Gonzalo del Valle, muy cargada de halagos y exagerados comentarios sobre su persona, sus actividades militares y sus actividades administrativas. Aquí solo se extraen de ese artículo los datos esenciales de su carrera militar y político-administrativa. Del Valle fue teniente coronel y ocupó el cargo de jefe político del primer cantón del estado de Jalisco en 1892, el tono apologético exagerado del periódico dijo que había sido "el mejor jefe político" del cantón de Guadalajara, cosa que fue desmentida por otros periódicos de oposición en su momento. Del Valle estuvo algunos periodos de tiempo fuera del estado de Jalisco, unos en el Territorio de Tepic y otros en el estado de Sinaloa. Fue director de la Penitenciaría de Escobedo en 1903, y en julio de 1905 fue nombrado prefecto político del departamento central en el Territorio de Tepic.[56]

Su carrera militar comenzó en Jalisco en 1873, como subteniente del 3er. Batallón de la Guardia Nacional, bajo las órdenes del gobernador Ignacio L. Vallarta y del general Pedro A. Galván. En ese mismo año ascendió al grado de teniente de la segunda compañía del 1er. Escuadrón de Gendarmes. Posteriormente, en 1876 se le nombró como capitán de infantería en las milicias auxiliares del ejército, con destino a las fuer-

[54] Contreras Valdez. (2006), pp. 23-65.

[55] "México matrimonios, 1570-1950", database, *FamilySearch* (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JCF9-1PT: 2 March 2021), Gonzalo del Valle, 1871.

[56] *Jalisco Libre*, 31 de julio de 1905.

zas federales que mandaba en Aguascalientes el teniente coronel Crispín Medina. El 13 de julio de 1877 fue premiado por el presidente Porfirio Díaz con el grado de comandante de batallón, y el 26 de diciembre de 1883, el presidente Manuel González lo ascendió a teniente coronel de infantería.[57]

Sus actividades militares en el ejército están detalladas en su hoja de servicios: el 27 de agosto de 1879 fue dado de alta en la comandancia militar del distrito, en su clase de mayor, ocupando una vacante que existía. Luego, el 4 de marzo de 1880 pasó al 12° Batallón en su clase de mayor, tuvo actividades en la campaña contra los yaquis, obteniendo un ascenso inmediato; el 20 de abril de 1887 pasó con el grado de teniente coronel al 25° Batallón. El 10 de febrero de 1890 fue dado de baja en ese Cuerpo y, a su vez, dado de alta en el 10° de "la misma arma", posteriormente, el 30 de abril de 1891 fue dado de baja en el Estado Mayor de la primera zona militar, ingresando al depósito de jefes oficiales, con residencia en Guadalajara. En esos años los mandos altos del ejército federal le permitieron a Del Valle que pudiera prestar servicios al gobierno del estado de Jalisco.[58]

Del Valle participó en el asalto de Tabasco, en el estado de Zacatecas, el 4 de marzo de 1876, luego en la acción de "La Unión", el 2 de enero de 1877, bajo las órdenes del general Ignacio Martínez. El 3 de noviembre de 1876, Del Valle participó en la acción librada en la hacienda de la Herradura, contra las fuerzas del general García de la Cadena, bajo las órdenes del general Ángel Martínez, y, después, en la resistencia de la plaza de Zacatecas contra las mismas fuerzas. En 1886 fue enviado a la campaña contra las tribus yaquis y mayos, por su participación en esta campaña, el gobierno del estado de Sonora le dio una condecoración consistente en una medalla y un diploma como premio a sus servicios, de manos del

[57] *Jalisco Libre*, 31 de julio de 1905.

[58] *Jalisco Libre*, 31 de julio de 1905.

entonces vice-gobernador de Sonora y posterior vice-presidente de la república Ramón Corral.[59]

Ignacio Vallejo González

Ignacio Vallejo fue originario de Tepatitlán, Jalisco, nació el 31 de julio de 1846, sus padres fueron José María Vallejo y Agustina González. Hizo sus primeros estudios en Tepatitlán bajo la dirección del profesor Modesto Cervantes, encargado de la escuela municipal del lugar. A los doce años de edad Ignacio terminó sus estudios primarios y se dedicó al comercio, trabajando como empleado en el almacén de ropa de Agapito Navarro. Vallejo permaneció en Tepatitlán hasta el año de 1861, trabajando en el comercio, pero a los 16 años de edad, su padre lo envió a Guadalajara para que se perfeccionara y desarrollara su carrera comercial ingresando a la mercería de Antonio González Guerra. Sin embargo, Vallejo poco tiempo duró en esa casa comercial, pues a fines de 1862, con el objetivo de progresar en su trabajo, se fue con Luis Cruz, uno de los más importantes y distinguidos comerciantes de Guadalajara en esa época.[60]

Cerca de ocho años trabajó Vallejo en la negociación de Luis Cruz, desarrollando sus conocimientos y capacidades de comerciante. Pero el 11 de noviembre de 1868, a los 22 años de edad, se casó con Matilde González, de 20 años de edad y originaria de la capilla de Guadalupe,[61] con quien procreó un hijo de nombre Ignacio. Este acontecimiento motivó a Vallejo a dejar su carrera de comerciante en 1869 y dedicarse a otra tipo de trabajo, así que se dedicó a la agricultura. Arrendó la hacienda de Santa Rita, ubicada en la municipalidad de Ayo el Chico, propiedad de Jesús Peredo, con quien hizo el contrato de arrendamiento.[62]

[59] *Jalisco Libre*, 31 de julio de 1905.

[60] Pavia. (1891), vol. I, pp. 331-334.

[61] "México, Jalisco, Registro Civil, 1857-2000", database with images, *FamilySearch* (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QGQY-45YT: 22 February 2021), Ignacio Vallejo Gonsales and Matilde Gonsales, 1868.

[62] Pavia. (1891), vol. I, pp. 331-334.

En 1870, y por convenir a sus intereses, Ignacio Vallejo dio por terminado el contrato de arrendamiento con el objeto de dedicarse en su ciudad natal, Tepatitlán, al comercio donde puso un establecimiento de este tipo. La negociación comercial duró hasta 1875, año en que estalló la revolución de Tuxtepec, dirigida por el general Porfirio Díaz. Las oleadas de los sucesos arrebataron a Ignacio de la vida pacífica que tenía en su giro comercial y lo lanzaron a la escena política. Debido a que Vallejo participó en la política apoyando el bando de Sebastián Lerdo de Tejada, resultó electo como diputado al Congreso de la Unión por el 10° distrito de Jalisco. Vallejo ocupó su escaño hasta el 20 de noviembre de 1876, cuando el triunfo de la revolución de Tuxtepec obligó a Lerdo de Tejada a salir del país. Por su parte, Vallejo se unió a Lerdo en su salida de la ciudad de México, y lo acompañó hasta Maravatío, en donde Vallejo, ya como exdiputado, se despidió del presidente caído, y regresó a Tepatitlán, su ciudad natal, retirándose a la vida privada.[63]

Entonces Vallejo volvió a sus antiguas actividades de comerciante a las que se dedicó hasta 1882, cuando regresó al mundo de la política. El 6 de febrero de ese año, el gobernador interino de Jalisco, Antonio I. Morelos, lo nombró director político del departamento de Tepatitlán. Durante varios periodos provisionales en que Morelos ocupó el puesto de gobernador, Vallejo ocupó la directoría política de Tepatitlán. Ignacio siguió ocupando este puesto aun cuando en el ejecutivo se cambiaba de persona, así fue con Pedro Landázuri, y después del 1° de mayo de 1883, cuando el general Francisco Tolentino asumió el gobierno del estado de Jalisco. Vallejo inspiró mucha confianza al general Tolentino, por lo que pudo continuar en la directoría política de Tepatitlán por otros cuatro años.[64]

Con la elección del general Ramón Corona como gobernador de Jalisco, las cosas no cambiaron para Vallejo, ya que siguió como director político de su departamento, pero el 4 de diciembre de 1887 recibió la orden de trasladarse a Tequila para hacerse cargo de la jefatura política del

[63] Pavia. (1891), vol. I, pp. 331-334.

[64] Pavia. (1891), vol. I, pp. 331-334.

12° cantón. Vallejo permaneció en Tequila hasta el 26 de mayo de 1890, cuando el gobernador del estado de Jalisco dispuso que Vallejo fuera a servir a la jefatura política de Mascota. Sin embargo, Vallejo no aceptó el cambio, pues su salud se había deteriorado tanto que no le permitió cumplir con los deseos del gobernador interino Mariano Bárcena. Por esta razón, Ignacio Vallejo tuvo que renunciar a la jefatura de Tequila y se retiró a su hacienda llamada El Pasito, en el departamento del mismo nombre. Vallejo hizo entrega formal de su cargo el 18 de noviembre de 1890, pero luego fue nombrado como jefe político del 8° cantón de Jalisco por el gobernador Luis C. Curiel. Para Lázaro Pavia, Ignacio Vallejo fue "un funcionario íntegro, capaz y lleno de cívicas virtudes", sin embargo el autor del libro decía lo mismo de todos los jefes políticos biografiados.[65] Ignacio Vallejo murió en Guadalajara el 7 de mayo de 1929 a la edad de 84 años.[66]

Una estadística grupal de los jefes políticos jaliscienses

Actualmente no se cuenta con un listado o padrón completo de todos los jefes políticos y sus subordinados en el estado de Jalisco durante el siglo XIX, de tal manera que traté de construir un listado de autoridades políticas conforme fueron apareciendo en la investigación documental, esto es, en las cartas, oficios, informes y notas periodísticas, registrando el nombre y la fecha de las personas en que estuvieron en funciones como autoridades políticas, el cantón o departamento donde gobernaron, el oficio, la profesión o el grado militar que tenían cuando desempeñaron sus funciones administrativa como autoridades políticas, y qué otros cargos públicos desempeñaron, sobre todo si fueron diputados federales, estatales o directores políticos antes o después de ocupar la jefatura política respectiva. Las fuentes fueron diversas desde el Archivo Histórico

[65] Pavia. (1891), vol. I, pp. 331-334.

[66] "México, Jalisco, Registro Civil, 1857-2000", database with images, *FamilySearch* (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG77-6D4H: 22 February 2021), Ignacio Vallejo Gonzalez, 1929.

de Jalisco (AHJ), la Hemeroteca Nacional Digital (HND), el archivo de la Casa de la Cultura Jurídica de Guadalajara (CCJG) y distintas páginas de Internet. Otros datos como el nombre los padres y esposas, la fecha y lugar de nacimiento, así como el año de su muerte, se obtuvieron de una búsqueda en las páginas de Family Search y Geneanet.

En total se logró registrar a 298 individuos que ocuparon el cargo de jefe político en alguno de los cantones del estado de Jalisco entre 1824 y 1914, que fue el periodo en que estuvieron vigentes las jefaturas políticas. En relación a los directores políticos se logró encontrar a 113 individuos que ocuparon dicho cargo durante el mismo lapso de tiempo. Con base en esta información se puede decir que la mayoría de los jefes políticos ocuparon el cargo por solo un periodo, es decir, que de un total de 298 jefes políticos, 262 (el 87.9%) de estos funcionarios desempeñaron el cargo sola una ocasión, a veces por cortos lapsos de tiempo, sin completar el periodo de cuatro años que estipulaba la legislación, la mayoría de estos funcionarios no continuaron en el cargo. Mientras que 37 de estos jefes políticos (el 12.41%), pudieron continuar en su puesto por un periodo más en el mismo cantón o ser removidos a otro, según lo decidiera el gobernador del estado en su momento.

Realmente era muy raro que un jefe político gobernara el mismo cantón dos periodos consecutivos, más bien, sucedía que ni los gobernadores del estado podían reelegirse, de tal manera que el nuevo gobernador nombraba a sus hombres de confianza quitando a los que estaban, o los reubicaba en otros cantones, como se observa en el cuadro general relativo (Cuadro 8). Algunos jefes políticos eran utilizados como comodines para cambiar jefes políticos en aquellos cantones donde la población no estaba conforme con las autoridades designadas, o aquellos jefes políticos que no eran del agrado del gobernador.

Por estas razones es muy difícil sostener que los jefes políticos eran dictadores o caciques que se eternizaban en los cargos como lo hizo Porfirio Díaz u otros gobernadores. Los años señalados en la primera columna del cuadro no significan permanencia de un individuo en el cargo, sino solo el año del documento en que se registró como jefe político, lo

que denota más bien es una alternancia y movilidad en los puestos si se relaciona con la columna de los cantones gobernados. Por otra parte, solo se pudo saber el lugar de nacimiento de 173 jefes políticos, de éstos 89 no eran originarios del cantón que gobernaban, mientras que 84 habían nacido en el mismo cantón donde desempeñaban su cargo, o sea que prácticamente la mitad de los jefes políticos eran oriundos del cantón que gobernaban, la otra mitad eran de otros cantones distintos, y muy pocos nacieron en otras partes del país, aquí todavía habría que saber si tenían o no la residencia que exigía la ley para ocupar el cargo referido. Esto último, dio alguna razón a los vecinos que se quejaban de que los jefes políticos no eran nacidos en el cantón donde gobernaban, y por eso los trataban mal, por este motivo, preferían que el jefe político fuera originario del mismo cantón que ellos, porque así los conocía y los sabría tratar y gobernar mejor. También explica por qué los jefes políticos no podían construir una base propia de poder, ya que muchos no eran nacidos en el lugar que gobernaban y no contaban con las redes familiares, de amistad, compadrazgo y/o clientelismo que se necesitaban para tener un poder o capital social propio y suficiente para hacer valer su autoridad frente al gobernador o a otros actores políticos, en ese sentido, sin una base política real no podían tener un poder propio, y eran simples funcionarios del gobernador en turno que los nombraba e intercambiaba a su antojo o según sus necesidades, lo que era mejor desde la lógica del gobernador del estado, pues éste tendría bajo sus órdenes a funcionarios leales y no a caciques regionales o locales que se podrían oponer al mismo gobernador del estado y disputarle el poder de su cantón.

Sobre las actividades que desempeñaban estos jefes políticos distintas a su cargo administrativo, se encontró que del total de los 289 jefes políticos que se registraron, solo se pudieron encontrar a 83 personas que manifestaron tener otra actividad distinta a la de autoridad política, de estos, dos eran comerciantes, otros dos eran hacendados, y otro par eran médicos, había cuatro ingenieros y trece dijeron ser licenciados, o sea que 23 de los jefes políticos eran comerciantes, hacendados o profesionistas, mientras que 60 se dedicaban al ejercicio de las armas, lo que representaba

el 72% de los jefes políticos que manifestaron tener una actividad militar, esto es muy entendible dada la inestabilidad política, social y militar que prevaleció durante la mayor parte del siglo XIX, las autoridades políticas en su mayoría provenían del ejército o de grupos armados que participaron de alguna manera en las guerras, rebeliones y revoluciones que se dieron a lo largo del siglo. Esto es también un indicio de que la mayoría de los jefes políticos no provenían de las clases altas de la sociedad, ya fueran hacendados, empresarios capitalistas o burócratas, más bien provenía de clases medias y bajas, pequeños comerciantes, artesanos y trabajadores del campo y la ciudad, quienes a través de su paso por el ejército lograron obtener grados y mandos medios en el mismo y luego cambiarse a la administración pública con un puesto de director o jefe político.

Por otra parte, 32 de estos jefes políticos desempeñaron el cargo de diputados federales en diversas ocasiones, y 17 de ellos lo hicieron como diputados al congreso local, unas veces eran diputados federales y, otras veces, fungían como diputados estatales. Muy pocos directores de departamento llegaron a ser jefes políticos de sus respectivos cantones, en la documentación respectiva, solo se encontraron a 13 jefes políticos que antes se habían desempeñado como directores políticos de algún departamento.

Imagen 2.
Malaquías Cuervo y su familia.
(Izquierda-derecha, sentado en el cuarto lugar)[67]



[67] Luis Cuervo Hernández. (2019). *La familia Ciervo. Tequila, Jalisco. México. 1701-2019. 318 años de historia familiar*. Zapopan: El Colegio de Jalisco, p. 8.

Imagen 3.
Patricio Ávalos[68]



Imagen 4.
Miguel Contreras Medellín[69]



Imagen 5.
Juan Nepomuceno Cumplido[70]



Imagen 6.
Gregorio Dávila[71]



[68] Pavia. (1981), t. I, p. 250.

[69]https://www.facebook.com/ColimadeAyer/posts/1205660382847187:0?paipv=0&eav=AfatxddtocLv7V8h6lPxJGqAB3r9FuiiklKtMgWrWcK-PN60r3T-2GOkkagtHr6x5gPY&_rdr

[70] Relatos e Historias de México: https://relatosehistorias.mx/juan-n-cumplido

[71]https://congresoweb.congresojal.gob.mx/bibliotecavirtual/legislacion/Benemeritos/Gregorio%20D%C3%A1vila.pdf

Imagen 7.
José García Bravo[72]



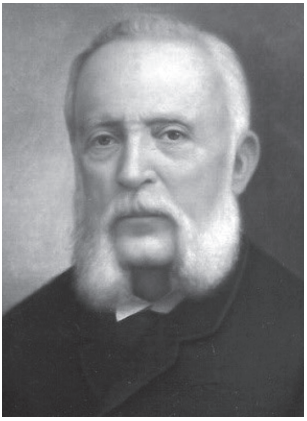
Imagen 8.
Vidal Gómez[73]



Imagen 9.
José Ignacio Herrera y Cairo[74]



Imagen 10.
José López Portillo Serrano[75]



[72] Pavia. (1891), vol. I, p. 347.

[73] Pavia. (1891), vol. I, p. 352.

[74] https://ancestors.familysearch.org/en/9NKQ-PNQ/jos%C3%A9-ignacio-marcelno-herrera-y-cairo-1823-1858

[75] https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Michel_Corona

Imagen 11.
Luis E. Medina[76]

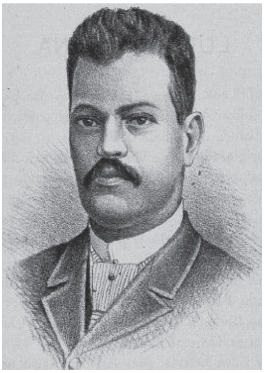


Imagen 12.
José Guadalupe Montenegro[77]

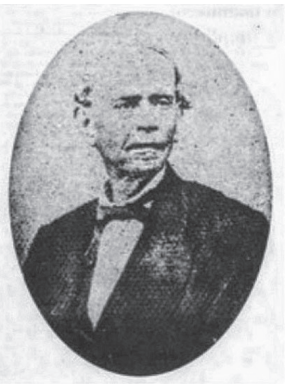


Imagen 13.
Juan J. Navarro[78]



Imagen 14.
Leopoldo Romano[79]



[76] Pavia. (1891), vol. I p. 44.

[77] https://congresoweb.congresojal.gob.mx/bibliotecavirtual/legislacion/Benemeritos/Guadalupe%20Montenegro.pdf

[78] Pavia. (1891), vol. I, p. 102.

[79] https://www.google.com/search?q=Leopoldo+Romano&sca_esv=597665655&tbm=isch&sxsrf=ACQVn0-uuC8J9FvQzBSixju3ShBYt3RJvA:1705018396937&source=lnms&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiR54m_yNaDAxXSm2oFHYuyD6EQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=919&dpr=1#vhid=S9ul-TmJxjUQnM&vssid=3981:9u8bHMTAuSyRHM

Cuadro 8.

Gobernadores y jefes políticos en Jalisco en el siglo XIX

Año en funciones	Gobernadores del estado de Jalisco	Jefes políticos	Cantones gobernados
1824	Luis Quintanar	José María Castañeda	Guadalajara
		Juan N. Cumplido	Guadalajara
	José Ma. Castañeda	Rafael Dávila	Guadalajara
	Rafael Dávila	Francisco Duque	Tepic
	Juan N. Cumplido	Jesús Romo de Vivar	Autlán
1825	Prisciliano Sánchez	Marcos Marcelo Escobedo	Colotlán
		Francisco Maldonado	Tepic
1826		Venancio F. de Asturias	Tepic
1827	José María Echauri	Pedro Michel	Guadalajara
	Juan N. Cumplido	Lino Rocha	Tepic
1828	Justo Corro	Ramón Navarro	Guadalajara
1829	José Ignacio Cañedo	José Rivas	Tepic
1830	José Ignacio Herrera y Cairo	José María García	La Barca/Tepic
	Juan N. Cumplido	José Ignacio Herrera y Cairo	Guadalajara
	José Ignacio Cañedo	Manuel Quevedo	Tepic
1831	Juan N. Cumplido	N. Anaya	Tepic
		Cenobio González	Guadalajara
1832	José Ignacio Herrera y Cairo	Felipe Fernández	Tepic
	Pedro Tamés Jurado	J. Blancas	Tepic
		Francisco Cortés Valdivia	Guadalajara
		Francisco Leal	Guadalajara
1834	Juan N. Cumplido	José M. Mantilla	Tepic
	José Antonio Romero	Adrián Woll	Tepic
1835		Romualdo Tolsa	Tepic
1836	Antonio Escobedo	Antonio Escobedo	Guadalajara
	José Antonio Romero	Miguel Hernández Rojas	Guadalajara
	Antonio Escobedo	Vicente P. León	Tepic

Año en funciones	Gobernadores del estado de Jalisco	Jefes políticos	Cantones gobernados
1838	Antonio Escobedo	Manuel García Vargas	Tepic
1839		M. de la C. Castillo Negrete	Tepic
1841	Mariano Paredes y Arrillaga	Gregorio Dávila	Guadalajara
	Joaquín Castañeda	Agustín García	Tepic
1843	José María Jarero	Juan Crescencio Hermosillo	Lagos
1844	Antonio Escobedo	Pedro Parga	Tepic
1846	Juan N. Cumplido	José María Dávila	Etzatlán
	José María Yáñez	Camilo Gómez	Tepic
		Jesús López Portillo	Guadalajara
		Antonio Martínez	Tepic
1847	Joaquín Angulo	Manuel García Vargas	Tepic
	Sabás Sánchez Hidalgo	Ignacio Salcedo	Guadalajara
1848	José Guadalupe Montenegro	Fortino España	Guadalajara
	Joaquín Angulo	Félix G. Maldonado	Colotlán
	José Guadalupe Montenegro	José Guadalupe Montenegro	Guadalajara
1849	Joaquín Angulo	Bernardo Flores	Lagos
	José Guadalupe Montenegro	Espiridión Rivas	Tepic
1851	Joaquín Angulo	Manuel Escorza Caballero	Guadalajara
	José Guadalupe Montenegro	Refugio González	Lagos
1852	Jesús López Portillo/ Gregorio Dávila	Evaristo Jiménez	Tepic
1853	José María Yáñez	Jesús Agraz	Autlán
		Manuel Escorza Caballero	Guadalajara
	José Palomar	Lino Fregoso	Ahualulco
	José María Ortega	Ignacio Suárez	Colotlán
		Bernardino Valero	Colotlán
		León Yáñez	Tepic

Año en funciones	Gobernadores del estado de Jalisco	Jefes políticos	Cantones gobernados
1854		José María Zamborino	Tepic
1855	José María Ortega	Francisco Castillero	Tepic
	Manuel Gamboa	Miguel Contreras Medellín	Guadalajara
	Ignacio Comonfort	Javier Castillo Negrete	Tepic
1856	José Santos Degollado	Antonio L. Bobadilla	Sayula
	Gregorio Dávila*	Camilo Gama	Tepic
	José Herrera y Cairo	Rafael Hernán	Ahualulco
	Anastasio Parrodi	Jesús Jiménez	Zapotlán
		Ignacio Juárez	La Barca
		Rafael Larios	
		Rafael Linadas	La Barca
	Gregorio Dávila	Bonifacio Peña	Tepic
		Domingo Reyes	Lagos
		Ignacio Suárez	Colotlán
		Ignacio Torres	Lagos
		Gregorio Villanueva	La Barca
		José de Jesús Villaseñor	Autlán
1857	Anastasio Parrodi	Juan Alatorre	Lagos
		Camilo Anaya	Lagos
		Francisco Anaya	Tepic
		Antonio L. Bobadilla	Sayula
		José María Calleja	Colotlán
		Ruperto Calvo	Ahualulco
		Luis Cázares	Tepic
		J.M. Colsa	Sayula
		Miguel Contreras Medellín	Guadalajara
		Juan Crisóstomo Corona	Sayula
		Ignacio Echegaray	Tepic
		José María Espino	Tepic
		Germán Figueroa	Ahualulco

Año en funciones	Gobernadores del estado de Jalisco	Jefes políticos	Cantones gobernados
		Pascual Galindo	Zapotlán
		Ruperto Gallo	Ahualulco
		Xenón Gomina	Colotlán
		Anastasio Gutiérrez	Autlán-Mascota
		Refugio Gutiérrez	Guadalajara
		Bruno Guzmán	Tepic
		Isidro de Haro	Ahualulco
		J. Magaña	Zapotlán
		Manuel Maldonado	Autlán
		Guadalupe Montenegro	Guadalajara
		Ramón Morales	Guadalajara
		Jesús Moreno	Teocaltiche
		Martín G. Ochoa	Ahualulco
		Ignacio Ordaz	La Barca
		Víctor Ordorica	Autlán
		Miguel Paz	Autlán
		Rafael Ramírez	Zapotlán
		Tomás Ramírez Lazo	Ahualulco
		Emilio Rey	Lagos
		Antonio Rosales	Tepic
		Juan Saldívar	Tepic
		Ignacio Suárez	Colotlán
		Bernardo Suluhaga	La Barca
		José María Talancón	La Barca
		Prudencio Topete	Lagos
		N. Valdespino	Tepic
		Bernardino Valero	Colotlán
		J.M. Darío Vargas	Sayula/Zapotlán
		Félix Vega	La Barca
		León Villaseñor	Tepic

Año en funciones	Gobernadores del estado de Jalisco	Jefes políticos	Cantones gobernados
1858	Jesús Leandro Camarena	Antonio Borbón	Autlán
	José Silverio Núñez	José de Jesús Y. Borrego	Colotlán
	Urbano Tovar	J.M. Colsa	Sayula
	Pedro Ogazón	Rafael Estrada	La Barca
	Urbano Tovar	Juan García Rebolledo	Lagos
	Francisco García Casanova	José de Landeros y Cos	Tepic
	José María Blancarte	Luis Tapia	Tepic
	Pedro Ogazón	Félix Vega	La Barca
	José Quintanilla	Pablo Villalobos	Lagos
1859	Leonardo Márquez	Santiago Aguilar	Tepic
	Luis Tapia	Francisco García de la Cadena	Tepic
	Leonardo Márquez	José Corona	Tepic
	Luis Tapia	Mariano de la Cuesta	Tepic
	Adrián Woll	Benigno Guerrero	Colotlán
		Carlos Rivas	Tepic
1860	Pedro Espejo	Urbano Gómez	Guadalajara
	Pedro Valadez	Antonio Hinojosa	Autlán
	Severo Castillo	José Quintanilla	Tepic
	Pedro Ogazón	Trinidad Bonilla	Guadalajara
		Antonio Hinojoza	Mascota
		Mariano Ornelas	Guadalajara
		Domingo Reyes	Zapotlán
		J.B. Sepúlveda	Tepic
		Prudencio Topete	Lagos
		Rafael del Valle	Tepic
1861	Ignacio Luis Vallarta	Silviano Gamberos	La Barca
	Pedro Ogazón	Ignacio Guerrero	Autlán
1862	Ignacio Luis Vallarta	Apolonio Macías	Ahualulco
	Pedro Ogazón	Juan Maldonado	Autlán

Año en funciones	Gobernadores del estado de Jalisco	Jefes políticos	Cantones gobernados
	Manuel Doblado	Néstor Hernández	Ahualulco
1863	Pedro Ogazón	Manuel Rivas	Tepic
	José María Arteaga	Juan Zermeño	Lagos
1864	Rómulo Díaz de la Vega	Santiago Aguilar	Lagos
	Mariano Morett	Senón Z. Godina	Colotlán
	Domingo Llamas	Domingo Llamas	Guadalajara
	Anacleto Herrera y Cairo	Mariano Morett	Guadalajara
	José María Hermosillo	Rómulo Díaz de la Vega	Guadalajara
1865	Jesús López Portillo/ Mariano Morett	Ángel de Oyarzábal	Autlán
1866	Eulogio Parra	Juan Carlos Jonatan	Guadalajara
	Teodoro Marmolejo	Teodoro Marmolejo	Guadalajara
	Mariano Morett	Regino de la Mora	Guadalajara
	Jesús López Portillo	Bernardo Olivero	Lagos
1867	Donato Guerra	Ponciano Guzmán	Mascota
	Antonio Gómez Cuervo	Francisco O' Reilly	Guadalajara
	Eulogio Parra	Juan Sanromán	Tepic
1868	Antonio Gómez Cuervo	Albino Aranda	Lagos
1869	Emeterio Robles Gil	José M. Cañedo	Guadalajara
1870	Antonio Gómez Cuervo	Eufracio Carreón	Sayula
1870	Florentino Carrillo	Rosalío Guerrero	Mascota
	Antonio Gómez Cuervo	Manuel Olasagarre	Guadalajara
1871	Aurelio Hermosillo	Gómez Alatorre	Teocaltiche
	Jesús Leandro Camarena	Martín	Mascota
	Félix Barrón	Eufracio Cobián	Sayula
	Ignacio Luis Vallarta	Ignacio Garibay	Guadalajara
		Manuel Larios	Sayula
		Coronel Magaña	Colotlán
		Manuel Maldonado	Autlán
		Alfonso Seno	La Barca

Año en funciones	Gobernadores del estado de Jalisco	Jefes políticos	Cantones gobernados
1872		Luis Castillón	Mascota
		Sixto Gorjón	Etzatlán/ Tequila
		José Martínez	Tequila /Colotlán
		Juan Alatorre	Lagos
1873		Alfonso Arce	Guadalajara
		Jesús Cervantes	Etzatlán
		Ignacio Garibay	Guadalajara
		Francisco González Martínez	Guadalajara
		Fernando de los Ríos	Tepic
		Juan Sanromán	Tepic
1874		Camilo Anaya	Lagos
		Francisco Tolentino	Tepic
1875		Jesús Jiménez	Zapotlán
		Tomás del Río	Colotlán
		José María Sanromán	Lagos
	Jesús Leandro Camarena	Leocadio Solís	Zapotlán
1876	José Ceballos	Daniel E. Acosta	Mascota
		Francisco María Alfaro	Tepic
		M. R. Álvarez	Tepic
		Antonio Barajas	Lagos
		Antonio Córdova	Autlán
		Franco Dávila	Colotlán
	Leopoldo Romano	Manuel Maldonado	Autlán
		N. Pérez	Tepic
1877	Jesús Leandro Camarena	José María Alfaro	Tepic/Ameca
		Bonifacio Cuevas	Tepic
		Jesús Bueno	Tepic

Año en funciones	Gobernadores del estado de Jalisco	Jefes políticos	Cantones gobernados
1878		José Guillermo Carbó	Tepic
		Simón Delgadillo	Guadalajara
		Nicolás Pérez	Tepic
1879	Fermín González Riestra	Ignacio María Escudero	Tepic
		Rosendo Márquez	Tepic
1880		Cayler	Guadalajara
		Malaquías Cuervo	Tequila
		Leopoldo Romano Elguezábal	Tepic
		Miguel Morales	Tepic
		Pedro Vega	Lagos
1881		Manuel Escorza Caballero	Guadalajara
		Refugio González	Lagos
		José Ignacio Torres	Lagos
1882	Antonio I. Morelos	Jesús Ibarra León	Guadalajara
	Pedro Landázuri	F. S. del Real	Colotlán
1883	Francisco Tolentino	Ventura G. Alatorre	Guadalajara
	Maximiano Valdovinos	Patricio Ávalos	Zapotlán
	Francisco Tolentino	Julián H.	Tequila
		Luis E. Medina	Autlán
		Andrés Michel	Lagos
		Joaquín Morelos	Ameca
		Brígido Ocampo	Teocaltiche/ La Barca
		Macario Pérez	Colotlán
		Gregorio Saavedra	Guadalajara
		José Sargas	Mascota
		Jesús Torres	Teocaltiche
		Miguel Vizcaíno	Sayula
1884		Francisco Castillo Ramos	Colotlán

Año en funciones	Gobernadores del estado de Jalisco	Jefes políticos	Cantones gobernados
		Juan S. Escobedo	Guadalajara
		J. Jiménez	Zapotlán
		Joaquín Morelos	Autlán
1885		Andrés Michel	Lagos
		Ignacio Monroy	Autlán
		Juan J. Navarro	Sayula
		Castillo Ramos	Colotlán
		Félix Valdés	Sayula
1886		Ignacio Ruvalcaba	Sayula
1887	Ramón Corona	Vidal Gómez	Sayula
	Luis C. Curiel	Trinidad L. del Real	Colotlán
	Ramón Corona	Doroteo López	Guadalajara
	Juan G. Robles	Francisco de Paula Méndez	Lagos
		Jesús L. Patiño	Lagos/Sayula
		José Eustaquio Mendoza Ruiz	Zapotlán
		Ignacio Vallejo	Tequila/Colotlán
1888	Pedro A. Galván	Francisco Castillo Ramos	Colotlán
	Ramón Corona	Nicolás España	Guadalajara
		José de Urrea	Lagos
		Ignacio Vallejo	Tequila/ Colotlán
		Ignacio Corona	Zapotlán
1889	Mariano Bárcena	Patricio Ávalos	La Barca
	Ventura Anaya	Luis E. Medina	Autlán
	Mariano Bárcena	Andrés Michel	Zapotlán
	Ventura Anaya	José Urea	Lagos
1890	Mariano Bárcena	Abraham Arroniz	Lagos
	Luis C. Curiel	Prisciliano Benítez	Guadalajara

Año en funciones	Gobernadores del estado de Jalisco	Jefes políticos	Cantones gobernados
	Mariano Bárcena	José García Bravo	La Barca/ Teocaltiche
		Vidal Gómez	Mascota
		R. Íñiguez	Ameca
		Luis E. Medina	Autlán
		Andrés Michel	Zapotlán
		Juan N. Michel	Mascota
		Marciano Palado	Teocaltiche
		L. Patiño	Sayula
		Prisciliano Sánchez	Guadalajara
1891	Luis C. Curiel	M. Morelos	Lagos
	Pedro A. Galván	Juan J. Navarro	Ameca
	Miguel Gómez	Fausto Uribe	Guadalajara
		Ignacio Vallejo	Colotlán
1892	Pedro A. Galván	Gonzalo del Valle	Guadalajara
1893	Francisco Santa Cruz	Ignacio L. Montenegro	Zapotlán/Lagos
	Pedro A. Galván	Mateo del Muro	Guadalajara
	Luis C. Curiel	Adolfo B. Riestra	Etzatlán
	Francisco Santa Cruz	José M. Rodríguez Casas	Colotlán
1894	Luis C. Curiel	Lucio Y. Gutiérrez	Guadalajara
	Gregorio Saavedra	Vicente Palacios	Teocaltiche
		José de Jesús Anaya	Guadalajara
1895	Luis C. Curiel	José Ma. Morelos	Ameca
1896	Gregorio Saavedra	Margarito González Rubio	Lagos/Zapotlán
	Luis C. Curiel	Santiago Mendoza	Ameca
		Francisco Ramos Castillo	Colotlán
		Alberto Toscano	Cocula
1897		José María Arce	Lagos
	Juan R. Zavala	E. M. Gallardo	Chapala
	Luis C. Curiel	Miguel Y. Morales	Colotlán

Año en funciones	Gobernadores del estado de Jalisco	Jefes políticos	Cantones gobernados
1899	Juan R. Zavala	Vidal Gómez	Ahualulco
	Luis C. Curiel	Margarito González Rubio	Ahualulco
1900		Manuel Cordero	Guadalajara
	José Luis García	Pascual B. Granillo	Autlán/Colotlán
	Luis C. Curiel	José María Gutiérrez	Lagos
	Juan R. Zavala	José María Topete	Autlán
1901	Luis C. Curiel	José Trinidad Alamillo	Guadalajara
	Juan R. Zavala	Rosendo Hijar Haro	Lagos/Zapotlán
	Luis C. Curiel	José Luna	Autlán
1902	Juan R. Zavala	Clemente González	Autlán
	Luis C. Curiel	J. de J. Anaya	Guadalajara
1903		Rosendo Hijar Haro	Zapotlán/ Ameca
		Santiago Mendoza	Guadalajara
		J. L. Patiño	Jocotepec
		Homobono Ramos	Ameca
		Adolfo E. Romero	Sayula
		G. Rubio	Lagos
		Íñiguez de la Torre	La Barca
		José María Villaseñor	Mascota
1904	Miguel Ahumada	Rosendo Hijar Haro	Zapotlán
		Luis Navarrete	La Barca
		Carlos Valencia	Autlán
		José María Villaseñor	Mascota
1905		Luciano Gallardo	Chapala
		Mauro H. González	Autlán
		Margarito González Rubio	Lagos
		Ismael Padilla	Sayula/Zapotlán
		José Ma. De la Peña	Ameca

Año en funciones	Gobernadores del estado de Jalisco	Jefes políticos	Cantones gobernados
		Adolfo E. Romero	Guadalajara/ Ameca
		Juan Solares	Autlán
		Carlos Valencia	Autlán
1906		Nicolás España Solís	Guadalajara
		Luciano Gallardo	Chapala
		Andrés Lozano	Colotlán
		Santiago Mendoza	Guadalajara
		Pedro Michel	Autlán
		N. Oñate	Teocaltiche
		Luis Pascual	La Barca
		José de la Peña	Ameca
		Margarito González Rubio	Lagos
		José María Topete	Autlán
1907		Alfonso Cortina	Ameca
		Pascual B. Granillo	Colotlán
		Luis Puente	La Barca
		José María Topete	Autlán
1908		José Becerra	Lagos
		Lorenzo Calderón	Autlán/Ameca
		Luciano Gallardo	La Barca
		Pascual B. Granillo	Ameca
		Luis Navarrete	La Barca
		Juan Solares	Ahualulco
1909		Jesús Gómez Portugal	Lagos
		Ismael Padilla	Zapotlán
		José Romero Zúñiga	Ameca
1910		Gilberto García Márquez	Colotlán
		Ciprino López	Colotlán
		Joaquín Peña	Ameca

Año en funciones	Gobernadores del estado de Jalisco	Jefes políticos	Cantones gobernados
		Merced Santoyo	Colotlán
		Marcos Topete	Autlán
1911	Manuel Cuesta Gallardo	José de Jesús Anaya	Guadalajara
		Francisco Arias	Zapotlán
		Salvador Corona	Autlán
		José María Martínez Sotomayor	Guadalajara
		Ismael Padilla	Zapotlán
		Domingo Pérez	Autlán
	David Gutiérrez Allende	Gerónimo C. Rivera	Autlán
		Adolfo E. Romero	Ameca
		Gabriel Vargas	Autlán
1912	Alberto Robles Gil	Carlos Cortez Ortigoza	Guadalajara
		Francisco Ruelas	Autlán
		Epifanio Silva	Guadalajara
	José López Portillo y Rojas	Alejandro Yáñez	Autlán
1913		Alberto Macedo	Lagos
		Domingo Pérez	Autlán
1914	José M. Mier	Aurelio Carrillo	Colotlán
	Manuel M. Diéguez	Julio Espinoza	Guadalajara
	Manuel Aguirre Berlanga	Ismael Hurtado	Lagos
	Julián Medina	Tomás López	Colotlán
		Pedro Ramírez	Mascota
		Adán Uribe Luna	Autlán

Conclusiones generales

Desde el punto de vista del refrán popular donde "el león no es como lo pintan", porque la pintura de un león es solo su representación pictórica y no el felino real, de la misma manera que la pintura de René Magritte donde una pipa no es una pipa, sino su representación, los jefes políticos decimonónicos junto con sus subordinados, los directores políticos y comisarios de policía, quienes fueron llamados como los "señores de la Tierra Media", en palabras de J.R.R. Tolkien, fueron representados de distintas maneras según quienes escribieron sobre ellos durante los siglos XIX y XX, novelistas literarios, historiadores, periodistas, legisladores y políticos construyeron imágenes de ellos a través de sus discursos, las cuales se constituyeron en representaciones narrativas con diversos sesgos, según la posición política, ideológica y social de quien escribía.

Algunos los pintaron como los peores funcionarios de los distintos gobiernos decimonónicos, recayendo en ellos las peores acusaciones como gobernantes crueles, asesinos sanguinarios, violadores de honras, autoritarios, ineptos, ignorantes y dictadores de sus pequeños distritos y comarcas. Sin embargo, otros autores los describen como buenos gobernantes, excelentes administradores y policías, eficientes y capaces de interceder entre los ciudadanos y grupos sociales para resolver conflictos y negociar acuerdos, por lo que sostienen que dichos funcionarios fueron muy importantes y necesarios en la pacificación, el control, el gobierno y la administración de las pequeñas localidades, los distritos y amplias zonas

y territorios, como representantes de los gobiernos estatales y el gobierno nacional. Esto los colocó como una piezas claves en la conformación del Estado nación decimonónico, lo cual no fue un proceso exclusivo de México, sino que este proceso de la configuración nacional se dio de forma paralela en toda Iberoamérica, sin embargo, cada región o Estado tuvo su proceso de conformación muy particular, aunque en términos generales compartieron varias cosas entre ellos las formas de gobierno repúblicas federales o centralistas, monarquías, conceptos políticos claves como el de ciudadanía, Estado, jefaturas políticas o prefecturas, códigos y leyes parecidas, etcétera. De tal manera, que no es ajena una experiencia de otra, porque tuvieron los mismos modelos a seguir como el francés, el norteamericano o el gaditano, las ideologías liberales, conservadoras, federalistas, centralistas, monárquicas incluso las anarquistas y revolucionarias a lo largo de dos siglos.

Toda referencia sobre el pasado histórico es un discurso emitido por alguien desde algún presente, y como discurso no deja de ser una representación de un mundo que ya no existe, lo cual no es la realidad tal cual, sino el punto de vista de quien emite dicho discurso, aunque con pretensiones "realistas" u "objetivas" de decir o dar a conocer "lo realmente acontecido". Aunque el historiador se arme de las herramientas teóricas y metodológicas necesarias para llegar a conocer o saber lo que "realmente aconteció", haciendo una investigación profunda en los archivos y consultando todo tipo de documentos, su trabajo de comprensión, interpretación y explicación, no deja de tener y marcar su propio sesgo subjetivo, se trata de explicar la verdad sobre el pasado, pero desde el propio punto de vista. No hay, en conclusión, "la realidad tal cual", sino representaciones cargadas de comprensiones, interpretaciones y explicaciones propias, y este trabajo que llega a su conclusión no es la excepción a la regla, más bien es la continuación de una tradición historiográfica.

Las críticas entre historiadores suelen ser la discusión entre las distintas interpretaciones historiográficas, para ver quien tiene la mejor y más certera representación del tema de estudio, en este caso la de los jefes políticos, se aceptan unas y se rechazan otras. Por ejemplo, a quien

rechaza la "leyenda negra" de los jefes políticos basado en el marco jurídico, diciendo que dichos funcionarios no eran unos asesinos, violadores, opresores, tiranos y dictadores de las circunscripciones que gobernaban, porque sus actividades estaban en el marco legalmente establecido, se le contesta que está equivocado porque "el marco legal no era la vida real de la política informal". Por una parte, se rechaza el marco legal de la época porque se suponen que las leyes no se respetaban, pues eran un simple adorno que nadie tomaban en cuenta, lo cual no comprueban pero asumen como algo cierto. Luego dicen que la "vida real" estaba en "la política informal", lo que tampoco demuestran, pues en primer lugar, habrá que discutir qué es para estos historiadores "la vida real del pasado" y qué era "la política informal". Para empezar, habrá que aceptar que "la vida real del pasado" es algo inasequible, no se puede tener el mundo del pasado tal cual frente a nuestros ojos, por eso se hace una operación historiográfica, como dicen Michel de Certeau y Paul Ricoeur, en la que se tiene que investigar en archivos y documentos de la época, que tampoco son la realidad del pasado, sino meros indicios, que se tienen que interpretar y comprender para luego explicarlos mediante un discurso narrativo que nos dice lo que "verdaderamente pasó" desde el punto de vista del historiador que escribió sobre el tema.

Cuando se habla de los jefes políticos en las novelas decimonónicas, no se habla de los jefes políticos reales, sino de la representación de éstos a partir de tres novelas *Astucia*, *El Zarco* y *Los bandidos de Río Frío*, las cuales son producto de sus autores, escritores y políticos del siglo XIX como Luis G. Inclán, Ignacio Manuel Altamirano y Manuel Payno. De la misma manera, cuando se abordó el tema de los jefes políticos desde la historiografía, no eran los jefes políticos tal cual, sino sus representaciones a partir de varias obras historiográficas desde mediados del siglo XIX hasta el siglo XXI, todas ellas con sus respectivos autores, unos a favor y otros en contra de dichos personajes, quienes consultaron diversas fuentes y documentación para elaborar sus textos. La legislación decimonónica establece el marco jurídico en el cual se debían desarrollar las actividades, funciones y prerrogativas que tendrían los jefes políticos, se habla de

cómo deben ser y actuar los jefes políticos de acuerdo a la ley, desde luego que no es "la vida real", sino solo su representación en los diversos documentos constitucionales, leyes, decretos y reglamentos de policía.

Por otra parte, están las representaciones que hacían los periodistas desde las páginas de sus periódicos, también unas a favor y otras en contra de las autoridades políticas, dichos periodistas también tenían su propio punto de vista y sus intereses políticos e ideológicos, no escribían sobre el tema de manera neutral o desinteresada, aunque se asumían como objetivos y sin compromisos políticos con el gobierno, desde luego que en el contexto del porfiriato los periodistas eran más o menos cooptados por el régimen y decían lo que la censura y la represión porfirista les permitía, algunos más oficialistas que otros, unos más o menos independientes, pero ninguno total y francamente opositor al régimen, pues de lo contrario les habría costado la censura, la destrucción de su imprenta, la cárcel, el exilio o hasta la vida, como sucedió con los verdaderos periódicos opositores.

Por otra parte, se analizaron los documentos producidos por las mismas autoridades políticas a partir de la documentación generada por ellos mismos, en los cuales hicieron memorias de gobierno, informes, oficios, cartas o circulares donde explicaban y justificaban sus acciones ante sus superiores o subordinados, eran principalmente auto-representaciones que evidenciaron el lugar que ocupaban en la jerarquía político-administrativa, y las cadenas de mando que seguían las órdenes y los documentos, pero además explican la forma en que dichos funcionarios intervenían en los conflictos entre los ciudadanos y entre el gobierno, y la manera de resolver o negociar los conflictos sociales, políticos o económicos, sin que mediara nadie más, como un escritor, un periodista o un legislador, eran documentos que no estaban destinados a que los viera el público, sino su jefe o subordinado inmediato. Las memorias de gobierno fueron los documentos que el gobernador del estado presentó ante el congreso local informando sobre sus actividades anuales y donde explicaba o justificaba el motivo de las mismas y sus resultados, en las cuales incluía el actuar de sus subordinados.

Por otro lado, se presentaron las quejas que los ciudadanos o vecinos de los pueblos enviaron al gobernador en contra de los actos de las autoridades políticas, en ellas los ciudadanos evidenciaron la forma en que dichas autoridades abusaban de su poder, o se excedían en sus funciones violando el marco legal de manera específica. Dichas quejas llegaron al gobernador y cuando fueron probadas esas acusaciones, el gobernador reprendió al funcionario público, lo cambio de lugar o de plano lo destituyó, de tal manera que se demuestra que las autoridades políticas tenían límites claros, uno era la autoridad del mismo gobernador del estado, a quien debían el cargo, y el otro era la resistencia y tolerancia de los mismos ciudadanos, que cuando ya no aguantaban los abusos y arbitrariedades de un determinado funcionario, enviaban una queja al gobernador para que le llamara la atención o lo destituyera, lo que ocurrió en varias ocasiones. Sin embargo, estos documentos también tuvieron el sesgo de quien elaboraba dichos documentos, pues la queja ya era una visión contraria a la autoridad política, pues de otra manera no habría quien se quejara del funcionario.

Lo que se hizo a lo largo de estas páginas fue ir desmontando y explicando la construcción de esas imágenes producidas por la literatura, la historiografía, las leyes y la prensa para concluir que todas ellas eran representaciones elaboradas por alguien, desde un lugar social, político e histórico. Finalmente, a partir de este trabajo y con una estadística y unas cuantas biografías se presentó la representación propia de los jefes políticos. Para el autor de este trabajo los jefes políticos no caían de forma esquemática, forzosa o natural en el estereotipo de la "leyenda negra", mucho menos en la imagen del "funcionario público perfecto", a través de la información, las relaciones, el contexto, y los indicios encontrados se puede explicar de manera más o menos convincente cómo fueron los jefes políticos y sus subordinados. Primero se tiene que tomar en cuenta el marco legal, pues era el campo político y jurídico en el cual un funcionario debía actuar, fuera de ese marco legal, sus actividades eran criticadas, inaceptables, o francamente opuestas al interés público y, por tanto, merecedoras de una reprimenda o la destitución por parte del goberna-

dor. Por otra parte, estaba la postura de los ciudadanos bajo su gobierno, quienes podrían estar de acuerdo con su desempeño o en contra, y entonces oponer resistencia, quejarse o de plano rebelarse en contra del funcionario por sus excesos y arbitrariedades cometidas.

De acuerdo con Max Weber, el Estado moderno centralizado debía conformar una burocracia especializada y profesional, "un funcionariado", para cumplir con su funciones político administrativas, la dominación ejercida por dicho Estado era una dominación legítima porque estaba basada en la coacción permitida a partir de un marco legal y el monopolio del poder. Este estado debía de estar acorde al desarrollo de la sociedad industrial capitalista, lo cual para Weber era una modelo puro o ideal, que no se encontraba en la realidad histórica de Europa o Estados Unidos a principios del siglo XX, mucho menos en la realidad latinoamericana, por tanto no habría que "pedirle peras al olmo". Para empezar porque el concepto de "modernidad" fue un concepto utilizado por la sociedad europea del siglo XIX para autodenominarse como una sociedad perfecta, la más avanzada y civilizada posible dentro de una idea, también eurocéntrica, de progreso para medirse o distanciarse de las otras poblaciones o grupos humanos del mundo. También el concepto de Estado, como una unidad geográfica-territorial política y culturalmente controlada por un gobierno centralizado era algo que estaba en proceso durante el siglo XIX en regiones como Europa, Estados Unidos y América Latina a diversos ritmos y con procesos particulares. Pero quien decía o establecía los parámetros para clasificar quién era moderno o no, eran los mismos europeos y norteamericanos. De ahí que será difícil conciliar estos conceptos con la realidad latinoamericana, siempre a la saga de los estereotipos y modas europeas y norteamericanas.

Dicho lo anterior, se puede sostener que en el caso de los jefes políticos en el estado de Jalisco durante el siglo XIX, según los datos estadísticos que se pudieron encontrar, que dichos funcionarios no ejercieron el poder más allá de los límites establecidos por el marco legal, pues la mayoría de ellos ocuparon su cargo solo un periodo, según lo estipularon las leyes al respecto, o sea, que no fueron dictadores eternos, sino funcionarios que

se ponían y quitaban de acuerdo a las decisiones tomadas por el gobernador del estado en turno. El nombramiento de las autoridades políticas dependió en todo momento del gobernador del estado de Jalisco, y no del presidente de la república, de ahí que no se puede sostener que hubo un "centralismo" más allá de lo que signifique que el gobernador del estado era quien, según la ley, designaba a la persona que iba a ocupar el cargo de jefe político en cada cantón, y de aprobar a los directores de departamento.

Por lo menos, la mitad de los jefes políticos en Jalisco durante el siglo XIX eran originarios del cantón que gobernaron, y otro tanto eran ajenos al cantón, pero nacidos en el mismo estado o fuera de él, por lo que se pude decir que había poca inconformidad en contra de estos funcionarios por la razón de que no fueran originarios del lugar o circunscripción que gobernaban. También se puede afirmar, que en el caso de los funcionarios que no eran oriundos del cantón o departamento que gobernaban, no podían construir una red social basada en vínculos familiares, de amistad, compadrazgo o clientelismo que los apoyara en sus pretensiones o ambiciones políticas. Más bien, los jefes políticos eran funcionarios movibles que podían gobernar en distintos cantones o departamentos, según lo ordenara el gobernador.

Los jefes políticos registrados presentaron una preparación o formación específica que habla claramente del grado de profesionalización que tuvieron, poco más del 70% habían pertenecido al ejército federal en diversos momentos, de tal manera que sabían manejar armas y mandar sobre la población, además se formaron en las continuas guerras que hubo en el país en diversos momentos y lugares. La mayoría de estos funcionarios no provenía de las clases altas ni de propietarios, sino más bien de clases medias y bajas, eran pequeños, comerciantes, artesanos, y trabajadores del campo y la ciudad, quienes a través del ejército lograron su ascenso hasta llegar a los mandos medios, los que posteriormente fueron llamados a desempeñar el papel de autoridades políticas por parte de alguno de los gobernadores del estado.

Otros jefes políticos habían tenido estudios y llegaron a ser abogados e ingenieros, diputados en el congreso federal o en el congreso del estado, o previamente ya habían desempeñado un cargo político menor como el de director político en algún departamento, o de presidente de algún ayuntamiento. Con lo anterior, lejos de caer en el maniqueísmo de buenos o malos, se muestra la complejidad del contexto en el que se desenvolvieron estos funcionarios públicos y el papel que cada uno de ellos desempeñó en su momento y lugar en el que actuó, según los indicios a los que se pudo tener acceso.

Bibliografía

Acosta Rico, Fabián. (2018). El Espejo: Gobernadores. Rafael Dávila, 1825. Bajo los intereses del imperio. *Crónica Jalisco*. Recuperado de https://www.cronicajalisco.com/notas/2018/88718.html.

Aguilar Camín, Héctor. (1984). *La frontera nómada: Sonora y la revolución mexicana*. México: Siglo Veintiuno Editores.

Aguirre Berlanga, Manuel. (1988). Memoria de gobierno, 1916. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. (comps.) *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara, Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, 1988, t. III, pp. 59-100.

Ahumada, Miguel. (1988). Memorias de gobierno, 1905, 1907, 1909 y 1911. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. (comps.) *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara, Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. II, pp. 431-514.

Alfaro Anguiano, César Gabriel. (2003). *Los beneméritos de Jalisco*. Guadalajara: Imprejal. Recuperado de https://congresoweb.congresojal.gob.mx/bibliotecavirtual/legislacion/Benemeritos/Gregorio%20D%C3%A1vila.pdf

Altamirano, Ignacio Manuel. (2007). *El Zarco*. México: Ediciones Leyenda.

Angulo, Joaquín. (1987). Memoria de gobierno, 1848-1852, En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. (comps.) *Jalisco, testimonio de sus*

gobernantes. Guadalajara, Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. I, pp. 231-254.
Arias, Juan de Dios y Olavarría, Enrique de. (1884-1889). *México a través de los siglos*, t. IV. México independiente. Barcelona: Espasa y Compañía Editores.
Artigas Dugarte, Yuleida. (2008). La reforma territorial de 1881 y la reducción de los estados en Venezuela. *Geoenseñanza*, vol. 13, núm. 2, pp. 175-184. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/360/36021230005.pdf
Arizaga Rodarte, José Julio. (2009). *Función, estructura y organización de la policía municipal de Guadalajara en el Porfiriato, 1874-1897*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara. (Tesis de licenciatura).
Artola, Miguel. (1983). *La burguesía revolucionaria (1808-1874)*. Madrid: Alianza Universidad.
Avendaño Rojas, Xiomara. (2019). La figura del jefe político departamental en Guatemala, El Salvador y Nicaragua durante la primera mitad del siglo XIX. *Rúbrica Contemporánea*, vol. VIII, núm. 15, pp. 45-66. Recuperado de https://ddd.uab.cat/pub/rubrica/rubrica_a2019v8n15/rubrica_a2019v8n15p45.pdf
Ávila Palafox, Ricardo. (1983). Los jefes políticos: aberración del sistema político liberal. El caso del Estado de México. *Boletín del Archivo General*, no. 1, pp. 3-45.
——. (1992). Clientelismo y manipulación de los jefes políticos. En Ricardo Ávila Palafox, Carlos Martínez Assad y Jean Meyer (coords.). *Las formas y las políticas del dominio agrario. Homenaje a François Chevalier*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 1992, pp. 215-231.
Banda, Longinos. (1983). *Estadística de Jalisco (1854-1863)*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco.
Bárcena, Mariano. (1983). *Ensayo Estadístico del Estado de Jalisco*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco.
——. (1988). Memoria de gobierno, 1890. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. (comps.) *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*.

Guadalajara, Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. II, pp. 181-206.
Benavides Hinojosa, Artemio. (1998). *El general Bernardo Reyes, vida de un liberal porfirista*. Monterrey: Ediciones Castillo.
Benson, Nattie Lee. (1955). *La Diputación Provincial y el Federalismo Mexicano*. México: El Colegio de México.
Bobbio, Norberto. (1989). *Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política*. México: Fondo de Cultura Económica.
Botana, Natalio R. (1993). El federalismo liberal en Argentina: 1852-1930. En Marcello Carmagnani (coord). *Federalismos latinoamericanos: México/Brasil/Argentina*. México: El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, pp. 224-259.
Bourdieu, Pierre. (2002). *La distinción. Criterios y bases sociales del gusto*. México: Taurus.
Bulnes, Francisco. (1992). *El verdadero Díaz y la Revolución*. México: Grijalbo.
Cárdenas Ayala, Elisa. (2020). *El Derrumbe, Jalisco, microcosmos de la revolución mexicana*. México: Tusquets Editores.
Camarena, María Inés. (1991). El jefe político y el orden institucional en la formación del Estado. El caso de Los Altos de Jalisco. *Estudios Jaliscienses*, núm. 3, pp. 25-40.
Canetti, Elías. (1983). *Masa y poder*. Madrid: Alianza Editorial, 1983.
Carmagnani, Marcelo. (1993). El federalismo mexicano. En Marcello Carmagnani (coord). *Federalismos latinoamericanos: México/Brasil/Argentina*. México: El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, pp. 135-179.
Castañeda, Carmen. (2002). Los intendentes de Guadalajara, 1790-1809. *Anuario de Estudios Americanos*, t. LIX, núm. 1, 2002 pp. 67-80. Recuperado de https://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/view/198
Castro Leal, Antonio. (1983). Prólogo. En Manuel Payno, *Los bandidos de Río Frío*. México: Editorial Porrúa, pp. IX-XII.

Certeau, Michel de. (1993). *La escritura de la historia*. México: Universidad Iberoamericana.

Chartier, Roger. (1999). *El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación*. Barcelona: Gedisa Editorial.

Chiaramonte, José Carlos. (1993). El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX. En Marcello Carmagnani (coord.). *Federalismos latinoamericanos: México/Brasil/Argentina*. México: El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, pp. 81-132.

Colección de los Decretos, Circulares y Órdenes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco (1823-1857). (1981). Guadalajara: Congreso del Estado de Jalisco.

Colección de los Decretos, Circulares y Órdenes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco (1857-1904). (1982). Guadalajara: Congreso del Estado de Jalisco.

Contreras, Carlos. (2002). Centralismo peruano en su perspectiva histórica. *Instituto de Estudios Peruanos*, Documento de Trabajo No. 127, Serie Historia, 24, http://www. Iep.org.pe, Lima, pp. 1-35. Recuperado de https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/810

Contreras Valdez, José Mario. (2006). Jefes políticos en la actividad empresarial durante el porfiriato en el territorio de Tepic. En María Eugenia Romero Ibarra, José Mario Contreras Valdez y Jesús Méndez Reyes (coords.). *Poder público y poder privado. Gobiernos, empresarios y empresas, 1880-1980*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, pp. 23-65.

Corona, Ramón. (1988). Memoria de gobierno, 1889. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. (comps.) *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara, Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. II pp. 143-173.

Corro, José Justo. (1987). Memoria de Gobierno 1829. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. (comps.) *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara, Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. I, pp. 97-105.

Cosío Villegas, Daniel (dir.). (1970). *Historia moderna de México. El Porfiriato, vida política interior*. México: Hermes.

Cruz Barney, Óscar. (2016). La codificación civil en México: aspectos generales. En José Antonio Caballero Juárez. *Historia del derecho. Memoria del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pp. 1-18. Recuperado de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3082/3.pdf

Cuervo Hernández, Luis. (2019). *La familia Cuervo. Tequila, Jalisco. México. 1701-2019. 318 años de historia familiar*. Zapopan: El Colegio de Jalisco.

Cumplido, Juan Nepomuceno. (1987). Memoria de Gobierno 1827-1828. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. (comps.) *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara, Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. I, pp. 71-90.

Curiel, Luis del Carmen. (1988). Memorias de gobierno de 1895-1897. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. (comps.) *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara, Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. II. 235-313.

Delgadillo Guerrero, Marco Antonio. (2010). La división de Guadalajara en cuarteles y la reglamentación de policía. El proyecto borbónico por construir una sociedad moderna, 1790-1809, *Letras Históricas*, núm. 3, pp. 91-109.

Delgado Aguilar, Francisco Javier. (2000a). *La desaparición de los Jefes Políticos en Aguascalientes. 1867-1920*. México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2000. (Tesis de Maestría). Recuperado de https://mora.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1018/241/1/MOR000067594%20La%20desaparici%C3%B3n%20de%20Jefes%20Pol%C3%ADticos%20en%20Aguascalientes_1867_1920.pdf

——. (2000b). *Jefaturas políticas. Dinámica política y control social en Aguascalientes, 1867-1911*. Aguascalientes: Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Diccionario de la Real Academia Española (RAE). Recuperado de https://dle.rae.es/diccionario

Diéguez, Manuel M. (1988). Memoria de Gobierno, 1919. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. (comps.) *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara, Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. III, pp. 17-158.

Enciclopedia de la Literatura en México. Recuperado de *http://www.elem.mx/autor/datos/833*

Enciclopedia histórica y biográfica de la Universidad de Guadalajara. Recuperado de http://enciclopedia.udg.mx/articulos/garciadiego-y-sanroman-salvador

Engels, Federico. (2006). *El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado*. Madrid: Fundación Federico Engels. Recuperado de https://www.fundacionfedericoengels.net/images/PDF/engels_origen_familia_interior_alta.pdf

Estadísticas Históricas de México. (1985). México: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Falcón, Romana. (1988). La desaparición de jefes políticos en Coahuila. Una paradoja porfirista. *Historia Mexicana*, XXXVII: 3, pp. 423-467. Recuperado de https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/1988/3115

——. (1992). El estado incapaz. Lucha entre naciones. Poder, territorio, "salvajes" y jefes de departamento. En Ricardo Ávila Palafox, Carlos Martínez Assad y Jean Meyer (coords). *Las formas y las políticas del dominio agrario. Homenaje a François Chevalier*. Guadalajara, Universidad de Guadalajara, pp. 189-214.

——. (2015). *El jefe político. Un dominio negociado en el mundo rural del Estado de México, 1856-1911*. México: El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, CIESAS.

Fernández de Lizardi, Manuel. (2022). *El Periquillo Sarniento*. España: Edu Robsy, Recuperado dettps://www.textos.info/jose-joaquin-fernandez-de-lizardi/el-periquillo-sarniento/descargar-pdf

Flores Soria, Francisco. (2023). El general Leopoldo Romano, primer Jefe Político del Territorio federal de Tepic. Recuperado de: https://www.ntv.com.mx/2023/05/14/el-general-leopoldo-romano-primer-jefe-politico-del-territorio-federal-de-tepic-hoy-estado-de-nayarit/

Foucault, Michel. (1976). *Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión*. México: Siglo xxi Editores.

——. (1997). *Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte*. Barcelona: Editorial Anagrama. Recuperado de https://monoskop.org/images/a/ae/Foucault_Michel_Esto_no_es_una_pipa_4a_ed.pdf

Gálvez Ruíz, María Ángeles. (1996). *La conciencia regional en Guadalajara y el gobierno de los intendentes (1786-1800)*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco.

García Márquez, Gabriel. (1981). *Cien años de soledad*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

García Morales, Soledad. (1990). Sistema político y control de cantones en Veracruz, 1877-1911. *La Palabra y el Hombre*, no. 75, pp. 55-67. Recuperado de https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/1826/199075P55.pdf?sequence=1&isAllowed=y

García Morales, Soledad y Velasco Toro, José. (1991). *Memorias e informes de jefes políticos y autoridades del Régimen Porfirista, 1877-1911*. México: Gobierno del Estado de Veracruz, Universidad Veracruzana-Instituto Veracruzano de la Cultura.

Garrido Falla, Fernando. (1953). Las transformaciones del concepto jurídico de policía administrativa. *Revista de administración pública*, núm. 11. pp. 11-32. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2112008

González García, José M. (2007). Jaulas, máquinas y laberintos (Imágenes de la burocracia en Kafka, Musil y Weber). *Revista Observaciones Filosóficas*, pp. 1-18. Recuperado de https://www.observacionesfilosoficas.net/kafkaylaneurosis.htm

Goldman, Noemí. (2009). Legitimidad y deliberación: el concepto de opinión pública en Iberoamérica, 1750-1850. En Javier Fernández Sebastián (dir.). *Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850*. Madrid: Fundación Carolina, Sociedad estatal de Conmemoraciones Culturales, Centro de Estudios Políticos Constitucionales, pp. 981-982.

Gortari Rabiela, Hira de. (2003). La organización política territorial. De la Nueva España a la primera República federal. En Josefina Zoraida Vázquez (coord.). *El establecimiento del federalismo en México (1821-1827)*. México: El Colegio de México, pp. 39-76.

Guerra, François-Xavier. *México: del antiguo régimen a la revolución*. México: Fondo de Cultura Económica, 1988.

Guerrero, Luis René y Castillo Flores, José Gabino. (2016). Artículo 8°. Introducción histórica. *En Derechos del pueblo mexicano: México a través de sus constituciones*. México: Miguel Ángel Porrúa. *Derecho de petición en México*, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, p. 607-9 Recuperado de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5629/11.pdf

Gutiérrez y Ulloa, Antonio. (1983). *Libro de la Razón General de la Hacienda Nacional. De la Provincia de Guadalajara, hoy Estado Libre de Jalisco*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco.

Hawthorne, Nathaniel. (1991). *La letra escarlata*. Puebla: Premia Editora.

Hernández Ángeles, Rafael (selec.). (2022). *A 100 años. Ricardo Flores Magón. Iconografía del magonismo*. México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México (INERHM). Recuperado de https://www.inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Iconografia_Ricardo_Flores_Magon.pdf

Hernández Franyuti, Regina. (2005). Historia y significados de la palabra policía en el quehacer político de la ciudad de México. Siglos XVI-XIX. *Ulúa. Revista de historia, sociedad y cultura*, núm. 5, pp. 9-34. Recuperado de https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/8990/ulua5pag9-34.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Hernández Ramírez, María Concepción. (1995). Orígenes del jefe político del Porfiriato y sus ámbitos de poder. *Tzinzun. Revista de Estudios Históricos*, núm. 22, pp. 110-124.

Herrera Guevara, Sebastián Porfirio. (2021). *Marginalidad, delito y punición. Robos y asaltos en Jalisco (1846-1861)*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

Herrera, José Ignacio. (1987). Memoria de gobierno 1831. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. (comps.) *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara, Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. I, pp. 113-139.

Hobsbawm, Eric. (2002). *Bandidos*. Barcelona: Crítica.

Iguínez, Juan B. (1995). *El Periodismo en Guadalajara 1809-1915*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

Inclán, Luis G. (1987). *Astucia, El jefe de los Hermanos de la Hoja o los charros contrabandistas de la Rama*. México: Porrúa.

Isais Contreras, Miguel Ángel. (2010). *Vagos y perniciosos en Jalisco (1867-1886). Una aproximación al estudio de la marginación y la reintegración forzada*. México: Universidad Nacional Autónoma de México. (Tesis de maestría).

——. (2015). La fama pública: un concepto para entender la sociedad y la justicia penal durante el siglo XIX. En Jorge Alberto Trujillo Bretón (coord.). *Voces y memorias del olvido. Historia, marginalidad y delito en América Latina*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, pp. 117-135.

——. (2017). *Usos y prácticas en el campo jalisciense. Ahualulco de Mercado y Lagos de Moreno frente al último embate de las reformas liberales (1873-1905)*. Zamora: El Colegio de Michoacán. (Tesis de doctorado).

——. (2019a). La costumbre frente a la injusticia. Abigeos y ladrones en el paisaje rural jalisciense en los primeros años del siglo XIX. En Juan Antonio Fernández Velázquez y Pedro Cásares Aboytes. *Actores, prácticas y discursos en la construcción del Estado Mexicano, siglos XIX y XX*. Buenos Aires: Elaleph.com, pp. 53-75.

——. (2019). Autoridades intermedias en Jalisco. La figura del comisario de policía en el medio rural durante el siglo XIX. *Revista Conjeturas Sociológicas*, pp. 1-21. Recuperado de https://ri.ues.edu.sv/id/eprint/23655/1/Autoridades%20intermedias%20en%20jalisco..pdf
——. (2021). Entre acordadas y gendarmes. La organización de policía rural en Jalisco durante el siglo XIX. *Secuencia*, núm. 111, pp. 1-27. https://doi.org/10.18234/secuencia.v0i111.1814
Katz, Friedirich. (1994). *Ensayos mexicanos*. México: Alianza Editorial.
Koselleck, Reinhart. (1993). *Futuro pasado*. *Para una semántica de los tiempos históricos*. Barcelona: Paidós.
——. (2002). *Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia*. Barcelona: Ediciones.
Knigth, Alan. (1986). La Revolución mexicana: ¿burguesa, nacionalista o simplemente una gran rebelión? *Cuadernos Políticos*, núm. 48, pp. 5-44.
——. (1996). *La Revolución mexicana. Del Porfiriato al nuevo régimen constitucional*. México: Grijalbo.
Lenin. (1977). El Estado y la revolución. En Lenin, *Obras escogidas*. Moscú: Editorial Progreso, t. VII, pp. 1-116.
Lindley, Richard B. (1987). *Las haciendas y el desarrollo económico, México, en la época colonial*. México: Fondo de Cultura Económica.
Lopes, María-Aparecida. (2008). Orden, progreso y centralismo, Chihuahua (México) bajo el mando porfiriano (1876-1910). *Historia Unisons*, vol. 12, núm. 2, pp. 157-167. Recuperado de https://revistas.unisinos.br/index.php/historia/article/view/5426/2662
López Cotilla, Manuel. (1983). *Noticias Geográficas y Estadísticas del Departamento de Jalisco*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco.
López Linares, Tomás. (1988). Memoria de gobierno, 1917. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. (comps.) *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. III, pp. 111-158.
Madero, Francisco I. (2012). *La sucesión presidencial en 1910*. Guadalajara: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

Maquiavelo, Nicolás. (1979). *El Príncipe*. México: Editorial Época.
Martínez Barreda, Alonso. (2000). *Relaciones económicas y políticas en Sinaloa, 1910-1920. Vieja élite económica- Nueva élite política*. Culiacán: Universidad Autónoma de Sinaloa/Universidad de Sonora. (Tesis de doctorado).
Marx, Karl. (1973). El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte. En C. Marx y F. Engels, *Obras escogidas*. Moscú: Editorial Progreso, t. I, pp. 408-498.
——. (1973). La Guerra Civil en Francia. En C. Marx y F. Engels, *Obras escogidas*. Moscú, Editorial Progreso, t. II, pp. 214-259.
——. (1981). *El Capital*. México: Siglo Veintiuno Editores.
Matute Aguirre, Álvaro. (1999). *Pensamiento historiográfico mexicano del siglo XX. La desintegración del positivismo (1911-1935)*. México: Fondo de Cultura Económica.
Mecham, J. Lloyd. (1933). The jefe político in México. *The Southwestern Social Science Quarterly*. University of Texas Press, vol. XIII, no. 4.
——. (1986). El jefe político en México. *Secuencia*, núm. 4, pp. 143-156. Recuperado de https://secuencia.mora.edu.mx/index.php/Secuencia/article/view/131/120
Medina García, Miguel Ángel. (2012). *Cambios sociales y rearticulación espacial: el ferrocarril en Jalisco (1880-1914).* Zapopan: El Colegio de Jalisco. (Tesis de maestría).
Mijangos Díaz, Eduardo Nomelí. (2006). *La dictadura enana. Las prefecturas del porfiriato en Michoacán*. México: Universidad Nacional Autónoma de México. (Tesis de doctorado). Recuperado de https://ru.dgb.unam.mx/bitstream/20.500.14330/TES01000603347/3/0603347.pdf
——. (2012). Prefectos y ayuntamientos en Michoacán. Dilemas de una relación política institucional. En Sergio Miranda Pacheco (coord.). *Nación y municipio en México, siglos XIX y XX*. México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas, pp. 174-196. Recuperado de https://historicas.unam.mx/

publicaciones/publicadigital/libros/573/573_04_08_PrefectosAyuntamientos.pdf
Molina Enríquez, Andrés. (1985). *Los grandes problemas nacionales (1909)*. México: Ediciones ERA.
Mumford, Luis. *Técnica y civilización*. (1998). Barcelona: Ediciones Atalaya.
Murià, José María. (1976). *Historia de las divisiones territoriales de Jalisco*. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Murià, José M. y Peregrina, Angélica (dirs). (2015). *Historia General de Jalisco*. Guadalajara: El Colegio de Jalisco, Gobierno del Estado de Jalisco, Miguel Ángel Porrúa.
Nieto, Alejandro. (1976). Algunas precisiones sobre el concepto de policía. *Revista de administración pública*, núm. 81, pp. 35-75. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1098617
Novo, Salvador. (1987). Prólogo. En Luis G. Inclán. *Astucia, El jefe de los Hermanos de la Hoja o los charros contrabandistas de la Rama*. México: Porrúa, pp. 6-16.
Ochoa Campos, Moisés. (1970). *La revolución mexicana. Sus causas políticas*, vol. IV. México: INEHRM.
Olveda, Jaime. (1991). *La oligarquía de Guadalajara: de las reformas borbónicas a la reforma liberal*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Ortiz Monasterio, José. (2004). *México Eternamente. Vicente Riva Palacio ante la escritura de la historia*. México: Fondo de Cultura Económica.
Palacio Montiel, Celia del. (2001). *La disputa por las conciencias. Los inicios de la prensa en Guadalajara, 1809-1935.* Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
Parrodi, Anastasio. (1987). Memoria de gobierno, 1857. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. (comps.) *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. I, pp. 331-368.
Pavia, Lázaro. (1891). *Ligeros apuntes biográficos de los Jefes políticos de los estados de la República mexicana*. México: Tip., y Lit. de

Joaquín Guerra y Valle. Universidad Autónoma de Nuevo León. Recuperado de Biblioteca Digital http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080013076_C/1080013076_T1/1080013076_T1.html

Payno, Manuel. (1983). *Los bandidos de Río Frío*. México: Editorial Porrúa.

Peralta Ruiz, Víctor. (2016). De Prefectos a Mandatarios de la Nación. La violencia en la política peruana (1829-1836). *Revista de Indias*, vol. LXXVI, no. 266, pp. 173-201. DOI: 10.3989/revindias.2016.006

Pérez Porto, J., Gardey, A. (2013) *Prefecto - Qué es, definición y concepto*. Definicion.de. Última actualización el 22 de mayo de 2015. Recuperado el 16 de julio de 2023 de https://definicion.de/prefecto/

Piccato, Pablo. (2005). Honor y opinión pública: la moral de los porfiristas durante el Porfiriato temprano. En Cristina Sacristán y Pablo Piccato (coords.). *Actores, espacios y debates en la historia de la esfera pública en México*. México: Instituto Mora, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 145-178.

Prado Arellano, Luis Ervin. (2006). El sistema político en Colombia en la primera mitad del siglo XIX: una propuesta analítica. *Reflexión Política*, vol. 8, núm. 16, pp. 92-103. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/110/11001608.pdf

Pro, Juan. (2017). El modelo francés en la construcción del Estado español: El momento moderado. *Revista de Estudios Políticos*, núm. 175, pp. 299-329. Recuperado de doi:http://dx.doi.org/10.18042/cepc/rep.175.10

Rabasa, Emilio. (2002). *La Constitución y la Dictadura*. México: Editorial Porrúa.

Ramírez Rancaño, Mario. (2014). Ejército federal, jefes políticos, amparos, deserciones: 1872-1914. *Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México*, núm. 47, pp. 41-78. Recuperado de https://moderna.historicas.unam.mx/index.php/ehm/article/view/65501/57463

Real ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de ejército y provincia en el reino de la Nueva España, 1786. (1984). México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Retamoza Salazar, Helga Carolina. (2018). *Los prefectos en Sinaloa. Una dinámica social y política del ejercicio del poder en el Sinaloa cañedista, 1877-1909*. Culiacán: Universidad Autónoma de Sinaloa. (Tesis de maestría). Recuperado de https://historia.uas.edu.mx/historia/wp-content/uploads/2020/02/Tesis-Los-prefectos-en-Sinaloa.-Una-din%C3%A1mica-social.pdf

Ricoeur, Paul. (1995). *Tiempo y narración*. México: Siglo Veintiuno Editores.

——. (2004). *La memoria, la historia, el olvido*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Riva Palacio, Vicente (dir). *México a través de los siglos: historia general y completa*. México: Ballescá y Cía. editores, Barcelona: Espasa y Cía. Editores, [1884-1889], 5 vols.

Roa, Victoriano. (1981). *Estadística del Estado de Jalisco Libre de Jalisco*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco.

Robles Gil, Alberto. (1988). Memoria de gobierno, 1912. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. (comps.) *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. III, pp. 17-40.

Roldan Vera, Eugenia. (2009). Opinión pública. México. En Javier Fernández Sebastián (dir.). *Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850*. Madrid: Fundación Carolina, Sociedad estatal de Conmemoraciones Culturales, Centro de Estudios Políticos Constitucionales, pp. 1065-1076.

Romero, José Antonio. (1987). Memoria de gobierno, 1834. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. (comps.) *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. I, pp. 191- 224.

Rulfo, Juan. (1984). *Pedro Páramo*. México: Seix Barral.

Sánchez, Prisciliano. (1987). Memoria de gobierno, 1826. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. (comps.) *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. I, pp. 35-64.

Santa Cruz, Francisco. (1988). Memoria de gobierno, 1893. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. (comps.) *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. II, pp. 213-231.

Sarmiento Larrauri, José Ignacio. (1993). *Antecedentes inmediatos de la figura del gobernador civil*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. (Tesis de doctorado). Recuperado de https://docta.ucm.es/bitstreams/f829aaf1-08b9-4f68-9fa4-03db7f789a8b/download

Schopenhauer, Arturo. (1983). *El mundo como voluntad y representación*. México: Porrúa.

Serrera, Ramón María. (1991). *Guadalajara ganadera. Estudio regional novohispano, 1750-1805*. Guadalajara, Ayuntamiento de Guadalajara, 1991.

Sol, Manuel. (2004). Luis Inclán ante la crítica. En Isaís Lemer, Roberto Nival y Alejandro Alonso (coords.). *Actas del XIV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas.* España: Juan de la Cuesta, vol. IV, pp. 629-634. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=6831

Silva Herzog, Jesús. (1972). *Breve historia de la Revolución Mexicana*. México: Fondo de Cultura Económica.

Tena Ramírez, Felipe. (1999). *Leyes fundamentales de México, 1808-1999*. México: Editorial Porrúa.

Tolentino, Francisco. (1988). Memoria de gobierno, 1885-1887. En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. (comps.) *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. II, pp. 37-137.

Tolkien. J.R.R. (1991). *El Señor de los anillos*. Barcelona: Ediciones Minotauro.

Torre Ruiz, Rosa Alicia de la. (2012). *Cambios demográficos y de propiedad en la provincia de Ávalos (siglos XVIII-XIX).* Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

Trujillo Bretón, Jorge Alberto. (2011). *Entre la celda y el muro. Rehabilitación social y prácticas carcelarias en la Penitenciaría jalisciense "Antonio Escobedo", 1844-1912*. Zamora: El Colegio de Michoacán.

Turner, John Kennet. (1978). *México bárbaro*. México: Editorial Época, 1978.

Urdaneta Quintero, Arlene. (2010). Federalismo y gobierno federal en la historiografía venezolana positivista. *Omnia*, vol. 4, núm. 1, pp. 3-18. Recuperado de https://produccioncientificaluz.org/index.php/omnia/article/view/6996/6985

Urzúa Orozco, Aída y Hernández Z., Gilberto (comps.). (1987-1988). *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno del Estado de Jalisco. 3 t.

Valerio Ulloa, Sergio. (1999). *Capitalismo y oligarquía en Jalisco, 1876-1910*. México: El Colegio de México. (Tesis de doctorado).

——. (1999b). Integración regional, autonomía y federalismo. De la Diputación Provincial a la Constitución Política del Estado de Jalisco de 1824. *Estudios Sociales. Revista del Departamento de Estudios de la Cultura Regional*, núm. 19, pp. 5-28.

——. (2000). Jefes y directores políticos en Jalisco durante el porfiriato. *Estudios Sociales. Revista del Departamento de Estudios de la Cultura Regional*, núm. 20, pp. 124-146.

——. (2002). *Empresarios extranjeros en Guadalajara durante el porfiriato*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

——. (2003). *Historia rural jalisciense. Economía agrícola e innovación tecnológica durante el siglo XIX*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

——. (2010). *Las Fábricas de Francia. Historia de un almacén comercial en Guadalajara*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

——. (2012). *Entre lo dulce y lo salado. Bellavista: genealogía de un latifundio (siglos XVI al XX).* Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

——. (2015). *Los barcelonettes en Guadalajara, siglos XIX y XX*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

——. (2021). *Santa Ana Acatlán. De la desamortización a la dotación de tierras. Una Historia sin despojos*. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

Valle Flórez, Mónica María. (2011) Metáforas con las que se han nombrado, explicado y descrito las organizaciones. *Poliantea*, vol. 7, núm. 13, pp. 173-186, https://doi.org/10.15765/plnt.v7i13.145

Vanderwood, Paul J. (1982). *Los rurales mexicanos*. México: Fondo de Cultura Económica.

——. (2003). *Del púlpito a la trinchera. El levantamiento religioso de Tomochic*. México: Taurus.

Van Young, Eric. (1989). *La ciudad y el campo en el México del siglo XVIII. La economía rural de la región de Guadalajara, 1675-1820*. México: Fondo de Cultura Económica, 1989.

Vázquez, Josefina Zoraida. (2003). El establecimiento del federalismo en México, 1812-1827. En Josefina Zoraida Vázquez (coord.). *El establecimiento del federalismo en México (1821-1827)*. México: El Colegio de México, pp. 19-38.

Vigil, José María. (1884-1889). *México a través de los siglos*, *t. V, La Reforma*. Barcelona: Espasa y Compañía editores.

Vilchis Salazar, Estefany. (2012). El jefe político: transformaciones en la administración pública del Estado de México e injerencia en el "contingente de sangre", 1867-1876. *Contribuciones desde Coatepec*, núm. 22, pp. 69-95. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/281/28123934005.pdf

Villaseñor y Villaseñor, Ramiro. (1981). *Los primeros federalistas de Jalisco. 1821-1834*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno del Estado de Jalisco.

Wasserman, Mark. (1987). *Capitalistas, caciques y revolución. La familia Terrazas de Chihuahua, 1854-1911*. México: Editorial Grijalbo.

Weber, Max. (1964). *Economía y Sociedad*. México: Fondo de Cultura Económica.

——. (1991). Parlamento y gobierno en una Alemania reorganizada. Una crítica política de la burocracia y de los partidos (1918). En Max Weber, *Escritos políticos*. Madrid: Alianza Editorial, pp. 103-300.
White, Hayden. (1991). *Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX*. México: Fondo de Cultura Económica.
Zavala, Juan R. (1988). Memoria de gobierno, 1899-1903.En Aída Urzúa Orozco y Gilberto Hernández Z. (comps.) *Jalisco, testimonio de sus gobernantes*. Guadalajara: Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, t. II, pp. 321-428.

Archivos y Páginas Electrónicas

Archivo Histórico de Jalisco (AHJ)
Cámara de Senadores de la República Mexicana
Casa de la Cultura Jurídica de Guadalajara (CCJG)
Congreso de Jalisco https://www.congresojal.gob.mx/
FamilySearch https://www.familysearch.org/es/
Facebook https://www.facebook.com/
Flickr: https://www.flickr.com/
Geneanet https://es.geneanet.org/
Hemeroteca Nacional Digital de México UNAM (HNDM)
https://hndm.iib.unam.mx/index.php/es/
Mediateca INAH
https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/fotografia:40499
Relatos e Historias de México: https://relatosehistorias.mx/juan-n-cumplido
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) https://www.gob.mx/sedena
Senado de la República https://www.senado.gob.mx/65/
Wikipedia: https://es.wikipedia.org/

Periódicos consultados en la HNDM

El Continental.
El Cronista.

El 2 de Abril.
El Diario de Jalisco.
El Heraldo.
El Litigante.
El Nene.
El Siglo Diez y Nueve.
El Tapatío.
El Telégrafo.
Jalisco Libre.
Juan Panadero.
La Bandera de Jalisco.
La Gaceta de Guadalajara.
La Patria.
La Revista de Guadalajara.
Periódico Oficial del Estado de Campeche.

Los señores de la tierra media y sus representaciones.
Jefes políticos en Jalisco durante el siglo XIX
Se terminó de editar en mayo del 2025
en la Unidad de Apoyo Editorial del CUCSH.
José Parres Arias 150, San José del Bajío, Zapopan, Jalisco

Tiraje: 1 ejemplar.

Diagramación: Elba L. Padilla/Unidad de Apoyo Editorial
Diseño de portada: Elba L. Padilla

"El león no es como lo pintan", dice un refrán popular, lo mismo se podría decir de los jefes políticos en México durante el siglo XIX. Sobre éstas autoridades políticas se han construido distintas imágenes y discursos que los pintan de diversas maneras: unas como gobernantes crueles, autoritarios, corruptos, asesinos, despojadores de tierras de los pueblos indígenas, defraudadores electorales y violadores de honras, dichas imágenes se constituyeron como la "leyenda negra"; y otras imágenes y discursos los muestran como funcionarios administrativos que desempeñaron un papel clave en la construcción del estado nacional, gobernando y pacificando el país, sobre todo en las zonas o regiones más alejadas, imponiendo el orden y la estabilidad en un país convulso, como fue el México del siglo XIX, lo cual vino a construir la "leyenda rosa" de estos personajes.

Desde luego que ambas representaciones de los jefes políticos no son más que imágenes estereotipadas, cargadas de sesgos políticos e ideológicos, hechas por detractores o partidarios del gobierno en turno, para lo cual se utilizaron varios medios como la prensa, los discursos e informes oficiales y las quejas de ciudadanos contra dichas autoridades. La verdad es que todas las referencias a los jefes políticos son elaboradas por alguien cuya posición y fines políticos e ideológicos determinan la concepción positiva o negativa que tengan de estos personajes decimonónicos. Lo mismo ocurre con la historiografía sobre el tema desde el siglo XIX hasta la actualidad. En este libro se abordan, desde distintas fuentes y perspectivas, la construcción de las representaciones sobre los jefes políticos en México, en términos generales, y en el estado de Jalisco, de manera particular. Sin olvidar que México no es una isla y que forma parte de una historia y una cultura más antigua y más amplia, que tiene que ver con su pasado colonial y con los centros políticos, económicos y sociales a nivel mundial.

CUCSH
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Academia

ISBN: 978-607-581-551-0